CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis

PROCESO LEGISLATIVO

DECRETO por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2018

PROCESO LEGISLATIVO	
01	**1)** 11-09-2018 Cámara de Senadores. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Presentada por el Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández (PRD). Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos. Diario de los Debates 11 de septiembre de 2018.
	2) 25-09-2018 Cámara de Senadores. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Presentada por la Sen. Olga María del Carmen Sánchez Cordero (MORENA). Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos. Diario de los Debates 25 de septiembre de 2018.
02	15-11-2018 Cámara de Senadores. **DICTAMEN** de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. **Aprobado** en lo general y en lo particular, de los artículo no reservados, por 70 votos en pro, 47 en contra y 0 abstenciones. Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Diario de los Debates 13 de noviembre de 2018. Discusión y votación 15 de noviembre de 2018.
03	20-11-2018 Cámara de Diputados. **MINUTA** con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Se turnó a la Comisión de Justicia. Gaceta Parlamentaria, 20 de noviembre de 2018.
04	11-12-2018 Cámara de Diputados. **DICTAMEN** de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. **Aprobado** en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 341 votos en pro, 119 en contra y 1 abstención. Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Gaceta Parlamentaria 11 de diciembre de 2018. Discusión y votación 11 de diciembre de 2018.
05	14-12-2018 Ejecutivo Federal. **DECRETO** por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2018.

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

(Presentada por el Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Gracias, señora Presidenta.

Saludo a los integrantes de la Mesa Directiva, a las Senadoras y Senadores, al público en general y a los medios de comunicación.

A nombre del grupo parlamentario del PRD, presentamos hoy la iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

El día de hoy, todos sabemos que estamos en una discusión por demás saludable para la vida pública del país.

En febrero de 2014 empezó una serie de reformas constitucionales en materia de justicia y de democracia, pero particularmente, en junio de 2016 se instauró el nuevo Sistema Penal Acusatorio, como parte del fortalecimiento de las instituciones democráticas.

El objetivo de esto es, sin duda alguna, que podamos nosotros tener una Fiscalía General de la República con carácter de organismo público autónomo, pero justo aquí es donde empezamos a ver los problemas, y sirve esto para adelantar que el grupo parlamentario del PRD estará presentando a la brevedad una reforma constitucional al artículo 102, en su apartado A, porque miren qué es lo que establece este artículo, justamente un espíritu contrario al objetivo de esta Fiscalía General de la República.

El artículo 102 constitucional, en su apartado A, todavía le otorga la facultad y la potestad al titular del Ejecutivo para proponer una terna a este órgano colegiado, al Senado, y que aquí se elija a ese Fiscal General de la República.

Pero también ese artículo 102 constitucional, en su apartado A, le da la facultad exclusiva al Presidente de la República de remover al mismo Fiscal.

Entonces, resulta que cualquier intento que nosotros hagamos hoy por dotar de autonomía e independencia al Fiscal General de la República, se va a ver truncada con este artículo 102, y sabemos que cuando, en el pasado, algún Procurador General de la República ha estado a cargo o le debe el empleo al Presidente de la República, ya hemos visto, y la historia no lo consigna, los casos aberrantes del uso de las instituciones para acabar políticamente con un enemigo.

Ejemplos, ejemplos tenemos muchos, desde el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, hasta la persecución con fines políticos sobre Ricardo Anaya, o también un caso sonado cuando destituyeron al Fiscal contra los Delitos Electorales, a Santiago Nieto Castillo.

Mientras eso ocurra, no vamos nosotros a tener una procuración de justicia que esté libre de tintes políticos.

Por eso, nosotros estamos proponiendo en esta iniciativa de ley, que funcione de manera distinta.

Primero. Que quien tenga facultad para proponerle a este Senado esa terna, sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a través de un procedimiento de selección, de perfiles que sean expertos en tema de procuración de justicia, ellos nos envíen la terna y que el Senado sea el que lo elija.

Que el Fiscal General de la República sea el que organice este nuevo esquema de procuración de justicia con base en un Consejo de Gobierno que estará a cargo del Fiscal General y que el Consejo de Gobierno se integre por los titulares de las siguientes Fiscalías Especializadas, entre ellas: la de Investigación Delictiva, la de Delitos Electorales, la de Combate a la Corrupción, la de Control de Procesos, la de Asuntos Internacionales, la de Control de Procesos No Penales, la de Amparo y Procesos Constitucionales, la de Combate contra la Delincuencia Organizada, la del Defensor de Derechos Humanos, un representante del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, y un Visitador General.

Ellos, dichos titulares, deberán de pertenecer al Servicio Civil de Carrera de la Fiscalía General de la República.

Nuestra intención, entonces es, que tenga facultades de autogobierno, pero supervisado, por supuesto, por este Senado.

Creemos también que es necesario fortalecer el Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República, de donde vayan saliendo los nuevos Agentes del Ministerio Público, los Agentes de la Policía Ministerial y los Peritos, tanto profesionales como técnicos.

Nosotros creemos que, sin duda, hoy tenemos frente a nosotros un desafío mayor. Cada vez escuchamos más voces de ciudadanos, de colectivos, de asociaciones civiles con el clamor del Fiscal que sirva, y para que eso ocurra debe de haber mucha voluntad política de quienes hoy tienen la mayoría.

Es necesario que transitemos a una reforma constitucional del artículo 102, en su apartado A. Si no somos capaces de transitar, seguramente tendremos muy buenos perfiles con capacidades probadas, con una reputación y trayectoria intachable, pero de fondo le van a deber el trabajo al titular del Ejecutivo, pero también ellos van a estar siempre con la “Espada de Damocles” en su cabeza, porque en cualquier momento los pueden quitar.

Nosotros estamos proponiendo que ante delitos cometidos por ese Fiscal General de la República, la Suprema Corte de Justicia pueda nombrar un Fiscal Independiente provisional, para que lleve a cabo estas investigaciones y que las lleve hasta el final, si hay causa penal hasta la pena o el sobreseimiento del caso.

Si es que este Fiscal se tiene que remover por estos delitos imputados, que entonces la Suprema Corte de Justicia vuelva a mandar una terna al Senado y que aquí en el Senado se defina quién sustituye a este Fiscal General de la República.

Insisto, estamos viviendo un momento por demás histórico, está en nuestras manos el que podamos transitar de una Procuraduría General de la República que sea utilizada con fines políticos a una auténtica Fiscalía General de la República autónoma e independiente.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad conferida en la Fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los Artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRPATICA POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGANICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país en junio de 2016 entró en vigor el nuevo sistema procesal acusatorio, sin que la estructura y el diseño institucional de procuración de justicia se haya reflejado en la transformación de la actual Procuraduría General en una Fiscalía General.

La independencia del sistema de procuración de justicia debe ser la base sobre la cual se constituya nuestro sistema democrático. La actuación independiente de la Fiscalía General de Justicia debe ser una garantía de la vigencia del ordenamiento jurídico, y especialmente de los derechos humanos fundamentales, ya deben existir límites al ejercicio del poder y hacen efectivo el cumplimiento de la ley mediante mecanismos procesales.

Es por ello que en materia de protección de derechos humanos se debe establecer un sistema que cumpla con los estándares internacionales acerca de las condiciones necesarias para garantizar la independencia de la Fiscalía General.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha reconocido lo anterior como un derecho humano, en el artículo XXVI de la Declaración Americana de Derechos

y Deberes del Hombre, y en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, "por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial".

La Comisión Interamericana de Derechos, a partir del año 2006 en su Informe sobre la Situación de Defensores de Derechos Humanos en las Américas, ha considerado a los operadores de los sistemas de justicia como defensores de derechos humanos en situación de indefensión, extendiendo esta categoría, no solo a los jueces y magistrados, sino también a los fiscales y defensores públicos.
También en su Segundo Informe del año 2011, se menciona particularmente en un apartado la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia, estableciendo en el párrafo 357: "en virtud de la garantía de independencia, desde el punto de vista institucional, los juzgadores que hacen parte de la función jurisdiccional del Estado deben ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, las partes del proceso, los actores sociales, y otros órganos vinculados a la administración de justicia."

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 102 apartado A, establece que deben garantizarse las funciones de Procuración de Justicia para que las mismas se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

De igual forma, la Constitución federal prevé que la figura del Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

Y efectivamente, la institución del Ministerio Público debe actuar con autonomía, para ser capaz de investigar y perseguir las conductas ilícitas con objetividad, sin

importar si éstas comprometen incluso a altos funcionarios de los tres poderes y de los ámbitos federal, local o municipal.

Del mismo modo, en esta Ley se fortalece la institución del Ministerio Público autónomo, para que dotado de instrumentos legales pueda resistir presiones indebidas y hacer frente a los intentos de influenciar sus decisiones acerca del curso de una investigación o el ejercicio de la acción penal, y no ceder a la pretensión de utilizar indebida o políticamente el poder punitivo del Estado mexicano para reprimir la protesta social o para vulnerar reclamos de minorías o grupos vulnerables.

Lo anterior en concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el proceso y la sanción de las conductas ilícitas, con el fin de esclarecer los hechos que le dieron origen, proteger a quien resultase inocente, combatir la impunidad y garantizar la efectiva reparación del daño, garantizar y asegurar el debido acceso a la procuración de justicia tenga como consecuencia la solución efectiva del conflicto que surja con motivo de la comisión de una conducta ilícita, todo esto dentro de un marco donde los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte prevalezcan por encima de cualquier otro interés.

En este sentido este proyecto toma en cuenta lo establecido en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, la cual resulta de orden público e interés social y por supuesto de observancia general, ya que tiene como objetivo establecer los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que conduzcan a las Soluciones Alternas.

Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal planteados en esta Ley tienen como finalidad atenuar a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan con motivo de la denuncia o querella de un

hecho delictivo, siempre a través de procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad.

También con concordancia con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se regular la coordinación para una mejor integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, asimismo se establece la distribución de competencias teniendo por objeto, garantizar los derechos humanos de las personas adolescentes a quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de hechos considerados como ilícitos, estableciendo bases, requisitos y condiciones para el mejor funcionamiento de mecanismos alternativos de solución de controversias del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República tiene como objeto establecer sus atribuciones, organización y funciones, así como de los órganos que la integran, para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público y a la Policía de Investigación le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y las demás disposiciones aplicables.

De esta manera, se establece que la Fiscalía General de la República prevea la institución del Ministerio Público integrada en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios con autonomía presupuestal, técnica y de gestión así como con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás leyes aplicables, la cual estará a cargo de un Fiscal General.

En ese sentido, es un reclamo social prioritario contar con instancias de procuración de justicia profesionales, eficientes, honestas, que velen en todo momento por la exigencia social de procurar un efectivo acceso a la justicia por parte de los

mexicanos, siempre sobre la base de un desempeño científico, objetivo y más allá de toda coacción o influencia política.

Derivado de lo anterior, se propone establecer que la Fiscalía General de la República sea un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía presupuestal, técnica y de gestión, así como con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y se conducirá bajo los principios de eficacia, honradez, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, respeto a los derechos humanos y desde luego perspectiva de género.

La Fiscalía General requiere también de autonomía política, es decir, que exista un proceso de selección y nombramiento de su titular –el Fiscal General- que dentro de sus funciones pueda implementar la constante evaluación de los candidatos y garantice su neutralidad con respecto a las distintas fuerzas o expresiones del poder político.

De esta manera se garantiza que se persiga cualquier conducta considerada ilícita, y se desmantele cualquier red delincuencial sea común u organizada sin importar si las personas que la integran pertenecen a algún grupo político, económico o social, por ello la necesidad de incorporar garantías de transparencia y publicidad al mecanismo de nombramiento del Fiscal y la incorporación de garantías a la remoción.

De igual forma, la Fiscalía General de la República tendrá entre sus atribuciones aplicar los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal con el fin de propiciar a través del dialogo la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de las denuncias o querellas.

Esta Ley toca regula expresamente las garantías que deben revestir los procesos de selección y nombramiento de los servidores públicos del sistema de procuración

de justicia, pero también toma en consideración su protección a la remoción discrecional por parte de los poderes políticos, estableciendo contrapesos con medidas de transparencia, publicidad, y participación ciudadana, regulando el ingreso y permanencia con requisitos específicos del Servicio Civil de Carrera, esto permitirá llevar a cabo la selección de personal bajo los más altos estándares y en cumplimiento a lo establecido en las leyes aplicables para los procesos de selección al ingreso y permanencia de las y los servidores públicos que laboren en la Fiscalía General.

Así, se desarrolla un diseño institucional, que propone mecanismos de rendición de cuentas, las relaciones con la policía, los criterios de asignación de casos, entre otros, ya que a diferencia de los órganos jurisdiccionales que deben adoptar la posición procesal de un tercero imparcial; a los servidores públicos del sistema de procuración de justicia les corresponde la defensa del interés público y la representación de la sociedad dentro de los procedimientos y procesos penal, por lo que no pueden considerarse terceros imparciales, sino deben estar obligados a ejercer su labor con objetividad y lealtad salvaguardando los derechos del imputado y privilegiando la situación de las víctimas.

En ese sentido, el Servicio de Carrera promueve la profesionalización continua, actitud de servicio, apego a valores, desarrollo y permanencia, asegurando la igualdad de oportunidades de ingreso, ascensos, estímulos y beneficios con base en el mérito y la experiencia, a fin de mejorar la calidad del servicio y fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones.

Por otra parte, el patrimonio de la Fiscalía se integrará con el objeto de apoyar su labor y reconocer a los elementos que se distingan en su actuar.

En otro orden de ideas, el Fiscal General de la República deberá presentar por comparecencia ante el Congreso de la Unión, un informe anual de labores, debiéndolo publicar por los medios que para tal efecto se establecen. Asimismo, se

le faculta para elaborar su proyecto de presupuesto anual de egresos que deberá ser enviado al Congreso de la Unión.

Se establece la forma en que se integrará el patrimonio de la Fiscalía, que incluye los bienes que actualmente tiene asignados la Procuraduría General de la República, más los que obtenga por diversas vías precisadas en esta Ley.

Por otra parte, el Fiscal General deberá presentar su Plan de Gestión Institucional, que contendrá entre otros, los objetivos estratégicos, las metas, las principales líneas de acción, los indicadores de desempeño o elementos de similar naturaleza que posibiliten la medición del cumplimiento en sus distintas líneas de acción, junto con la evaluación y la mejora continua, mismo que deberá ser publicado en su página electrónica.

Asimismo, se regulan las funciones del Ministerio Público en la investigación de las conductas que se presumen ilícitas en el ejercicio de la acción penal, para la conducción y coordinación de la investigación, la aplicación de formas de solución alterna del procedimiento y de terminación anticipada del proceso, en la protección, asistencia y representación, así como en materia concurrente, incompetencia y colaboración.

Aunado a lo anterior, para llevar a cabo una investigación efectiva de los delitos, se requiere de la participación, no solo de las unidades administrativas de la Fiscalía, sino de otras autoridades, en este sentido en la presente Ley se dispone que las Instituciones Policiales del Estado mexicano, Entidades Federativas, Ciudad de México, municipios y demarcaciones territoriales proporcionarán los auxilios y apoyos que les requieran los agentes del Ministerio Público de la Federación y la Policía de Investigación cuando tomen conocimiento de hechos posiblemente constitutivos de conducta ilícita, en su calidad de primer respondiente.

Asimismo, se ratifica la disposición de las instituciones federales, locales y municipales (en su respectivo ámbito de competencia), para estar sujetas y obligadas a brindar la colaboración, apoyo y auxilio que solicite la Fiscalía para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos legales, con lo que se entiende que la autonomía no implica aislamiento sino por el contrario, coordinación para facilitar las decisiones con autonomía técnica.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de ese H. Cuerpo Legislativo, la presente Iniciativa de Decreto, para que, de estimarse correcta, se apruebe en sus términos. En estricta observancia al artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esa Soberanía, el siguiente:

INICIATIVA

Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República

CAPÍTULO I

Disposiciones Preliminares

Artículo 1.

1. Esta ley tiene por objeto organizar la Fiscalía General de la República para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y al Fiscal General de la Nación les confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás disposiciones aplicables.

2. Se Constituye la Fiscalía General de la República como un Órgano Público Autónomo en los términos que señala el apartado A del artículo102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2.

1. Al frente de la Fiscalía General de la República estará el Fiscal General de la República, quien presidirá al Ministerio Público de la Federación

2. Fiscalía General de la Republica contará con un Consejo de Gobierno a cargo del Fiscal General, e integrado por los Fiscales Especializados a que se refiere esta Ley.

3. Ninguna autoridad podrá ordenar a la Fiscalía General de la República el no ejercicio de la acción penal o intervendrá en la realización de los cometidos que le impone la Constitución General de la República.

4. El cometido constitucional de la Fiscalía General de la República se realizará bajo los principios de profesionalidad, legalidad, objetividad, certeza, cientificidad, respeto a los derechos humanos e independencia.

5. Contará con Servicio Profesional de Carrera de carácter obligatorio y académico.

Artículo 3.

1. El Fiscalía General de la República intervendrá por sí o por conducto de agentes del Ministerio Público de la Federación en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 4.

1. Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

a) Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:

b) La elaboración técnica, científica y normativa de la Carpeta de Investigación

c) Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito, así como ordenar a la policía que investigue la veracidad de los datos aportados mediante informaciones anónimas, en términos de las disposiciones aplicables;

d) Bajo su conducción y con la colaboración de sus auxiliares y las instituciones de los tres órdenes de gobierno, de conformidad con las disposiciones aplicables, los protocolos de actuación que establezca, y los convenios de colaboración e instrumentos que al efecto celebre, realizará todas las diligencias para la acreditación de las conductas delictivas sujetas a investigación y la probable responsabilidad de las personas indiciadas en términos de lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales,

e) Ejercer la conducción y mando de las policías de los tres órdenes de gobierno en la función de la investigación de los delitos, e instruirles respecto de las acciones que deban llevarse a cabo respecto de la comisión de delitos y de sus autores y partícipes, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

f) Ejercer sus facultades de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades de los estados de la Federación y a la Ciudad de México, siempre que prevenga en el conocimiento del asunto, le solicite al Ministerio Público local la remisión

de la investigación o se actualicen las hipótesis que para tal efecto se contemplen en ley;

g) Llevar a cabo las acciones necesarias para solicitar la reparación del daño correspondiente;

h) Obtener elementos probatorios para la acreditación de los datos de prueba y la probable responsabilidad del indiciado, así como solicitar a particulares su aportación voluntaria y, cuando se requiera de control judicial, solicitar al órgano jurisdiccional la autorización u orden correspondientes para su obtención;

i) Tomar conocimiento de las detenciones que en flagrancia o caso urgente se lleven a cabo y que le deban ser notificadas, así como llevar un registro de las mismas y realizar las actualizaciones respectivas;

j) Llevar un registro con la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia y de las autorizadas para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito;

k) Cerciorarse de que se han seguido los procedimientos para preservar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito; asentar cualquier violación a las disposiciones para la recolección, el levantamiento, preservación y el traslado de los mismos, y dar vista a la autoridad competente para efectos de las responsabilidades a que hubiere lugar;

l) Realizar el aseguramiento de bienes de conformidad con las disposiciones aplicables;

m) Ordenar a la policía que brinde protección a personas respecto de las cuales exista un riesgo objetivo para su vida o integridad corporal por su intervención en procedimientos penales del orden federal, de conformidad con los acuerdos que para tal efecto emita el Fiscal General de la República;

n) Restituir provisionalmente a la víctima u ofendido en el goce de sus derechos, en los términos de las disposiciones aplicables;

o) Solicitar al órgano jurisdiccional la prisión preventiva de los indiciados en términos de las disposiciones legales aplicables;

p) Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, la imposición del arraigo, la prohibición de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia, la protección de personas o bienes jurídicos y el debido cumplimiento de la sentencia que se dicte;

q) Practicar las diligencias de cateo en términos de las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con el mandamiento judicial correspondiente, para lo que podrá auxiliarse de la policía;

r) Prestar apoyo a los particulares en la captación de las comunicaciones en las que éstos participen, cuando los mismos lo soliciten para su aportación al proceso penal;

s) En aquellos casos en que la ley lo permita, propiciar la conciliación de los intereses en conflicto, proponiendo vías de solución que logren la avenencia;

t) Determinar la incompetencia y remitir el asunto a la autoridad que deba conocerlo, así como la acumulación de los datos de prueba_cuando sea procedente;

u) Determinar el ejercicio de la acción penal conforme a las disposiciones aplicables;

v) Determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando:

1. Los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito;
2. Una vez agotadas todas las diligencias y los medios de prueba correspondientes, no se acredite el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado;
3. La acción penal se hubiese extinguido en los términos de las normas aplicables;
4. De las diligencias practicadas se desprenda plenamente la existencia de una causa de exclusión del delito, en los términos que establecen las normas aplicables;

5. Resulte imposible la prueba de la existencia de los hechos constitutivos de delito por obstáculo material insuperable, y
6. En los demás casos que determinen las normas aplicables;

t) Acordar el no ejercicio de la acción penal y notificarlo personalmente al denunciante o querellante y a la víctima u ofendido

u) Poner a disposición de la autoridad competente a los menores de edad que hubieren incurrido en acciones u omisiones correspondientes a ilícitos tipificados por las leyes penales federales;

v) Poner a los inimputables mayores de edad a disposición del órgano jurisdiccional, cuando se deban aplicar medidas de seguridad, ejerciendo las acciones correspondientes en los términos establecidos en las normas aplicables, y

w) Las demás que determinen las normas aplicables.

2. Cuando el Ministerio Público de la Federación tenga conocimiento por sí o por conducto de sus auxiliares de la probable comisión de un delito cuya persecución dependa de querella o de cualquier otro acto equivalente, que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a la autoridad competente, a fin de que resuelva con el debido conocimiento de los hechos lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público de la Federación la determinación que adopten.

3. En los casos de detenciones en delito flagrante, en los que se inicien con los datos de prueba con detenido, el agente del Ministerio Público de la Federación solicitará por escrito y de inmediato a la autoridad competente que presente la querella o cumpla el requisito equivalente, dentro del plazo de retención que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Ante los órganos jurisdiccionales:

1. Ejercer la acción penal cuando exista denuncia o querella, esté acreditado el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad de quien o

quienes en él hubieren intervenido, solicitando las órdenes de aprehensión o de comparecencia.

a) Cuando se estime necesario atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, la acción penal se ejercitará ante un Juez de Distrito distinto al del lugar de la comisión del delito;
b) Solicitar las medidas cautelares que procedan, en términos de la legislación aplicable, así como la constitución de garantías para los efectos de la reparación del daño;
c) Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas detenidas dentro de los plazos establecidos por la ley;
d) Aportar las pruebas y promover las diligencias conducentes para la debida comprobación de la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, de la responsabilidad penal, de la existencia de los daños y perjuicios, así como para la fijación del monto de su reparación;
e) Solicitar la autorización u orden correspondientes para la obtención de cualquier elemento probatorio cuando para ello sea necesaria la intervención de la autoridad judicial, para acreditar el delito y la responsabilidad del inculpado, de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables;
f) Impugnar, en los términos previstos por la ley, las resoluciones judiciales;
g) Solicitar la restricción de las comunicaciones de los internos inculpados y sentenciados por delincuencia organizada, salvo el acceso a su defensor, y la imposición de medidas de vigilancia especial a los mismos, y

h) En general, promover lo conducente al desarrollo de los procesos y realizar las demás atribuciones que le señalen las normas aplicables.

5. En materia de atención y seguridad a la víctima o el ofendido por algún delito:

a) Proporcionar asesoría jurídica a la víctima u ofendido e informarle de los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, cuando lo solicite, sobre el desarrollo del procedimiento penal;
b) Recibir todas aquellas pruebas que presente la víctima u ofendido, que considere que ayuden a acreditar el cuerpo del delito de que se trate, la probable responsabilidad del indiciado y la procedencia y cuantificación por concepto de reparación del daño, fundando y motivando la recepción o negativa de las mismas;
c) Ordenar la práctica de las diligencias conducentes en la investigación que soliciten la víctima o el ofendido o, en su caso, fundar y motivar su negativa;
d) Otorgar las facilidades para identificar al probable responsable y dictar todas las medidas necesarias para evitar que se ponga en peligro la integridad física y psicológica de la víctima u ofendido;
e) Informar a la víctima u ofendido que desee otorgar el perdón en los casos procedentes, el significado y trascendencia jurídica de dicho acto;
f) Dictar las medidas necesarias y que estén a su alcance para que la víctima u ofendido reciba atención médica y psicológica de urgencia. Cuando el Ministerio Público de la Federación lo estime necesario, tomará las medidas conducentes para que la atención médica y psicológica se haga extensiva a otras personas;
g) Solicitar a la autoridad judicial, en los casos en que sea procedente, la reparación del daño;

h) Solicitar a la autoridad judicial que el inculpado sea separado del domicilio de la víctima cuando se trate de delitos que pongan en peligro su integridad física o mental, así como otras medidas cautelares que sean procedentes;
i) Solicitar a la autoridad judicial dicte providencias para la protección a las víctimas u ofendidos y sus familiares, así como a los bienes, posesiones y derechos de dichas víctimas u ofendidos, cuando existan datos que establezcan la posibilidad de que se cometan actos de intimidación o represalias por parte de los probables responsables o por terceros relacionados con los mismos;
j) Ejercer las acciones que las disposiciones normativas en materia de extinción de dominio de bienes prevean a favor o en beneficio de las víctimas y ofendidos;
k) Promover la reserva de identidad y otros datos personales de la víctima u ofendido, cuando sean menores de edad; se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada, y en los demás casos que se considere necesario para su protección, y
l) Informar a la víctima o al ofendido menor de edad, que no está obligado a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, las declaraciones respectivas se efectuarán conforme lo establezcan las disposiciones aplicables;

6.En materia de Justicia Federal para Adolescentes:

a) Realizar en cada asunto de su conocimiento, con motivo de la investigación y persecución de conductas tipificadas como delitos atribuidas a adolescentes, el análisis, el diagnóstico del caso, el plan de trabajo y la bitácora de las acciones de investigación;
b) Velar en todo momento, en los asuntos de su conocimiento, por el respeto, integridad, dignidad y estricto cumplimiento de los derechos y garantías de los adolescentes o adultos jóvenes sujetos a la Ley Federal

de Justicia para Adolescentes, así como de las víctimas u ofendidos de los hechos probablemente realizados por los adolescentes o adultos jóvenes;

c) Informar de inmediato al adolescente, a sus familiares y a su defensor su situación jurídica, así como los derechos que les asisten;

d) Realizar lo conducente para que sea asignado al adolescente un defensor público federal para adolescentes desde el momento en el que sea puesto a su disposición;

e) Resolver dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, la situación jurídica de los adolescentes que sean puestos a su disposición;

f) Formular la remisión y poner inmediatamente a los adolescentes a disposición del Juez de Distrito Especializado para Adolescentes, en los casos en que resulte procedente;

g) Procurar, en los casos de querella necesaria, la conciliación entre el adolescente o adulto joven y la víctima u ofendido;

h) Garantizar que durante la fase de detención, no se mantenga al adolescente incomunicado ni se le coaccione, intimide, someta a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y que se satisfagan sus derechos a la alimentación y a la salud, así como los demás que apliquen a su situación;

i) Dirigir personalmente las investigaciones que sean conducentes para formular el escrito de atribución de hechos;

j) Valorar los resultados de su investigación con el fin de determinar la posición del órgano respecto del caso;

k) Formular el escrito de atribución de hechos;

l) Realizar durante el procedimiento todas las actuaciones necesarias para la procuración de la justicia, incluyendo ofrecimiento de pruebas, formulación de agravios, alegatos e interposición de recursos;

m) Asesorar a la víctima o al ofendido durante la fase de investigación y juicio;

n) Solicitar la reparación del daño a la víctima u ofendido cuando proceda, y realizar todas las acciones tendientes a obtenerla; y
o) Las demás que determine la ley.

7. Vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las atribuciones que legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas. En ejercicio de esta atribución el Ministerio Público de la Federación deberá:

a) Intervenir como parte en el juicio de amparo, en los términos previstos por el artículo 107 constitucional y en los demás casos en que la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponga o autorice esta intervención;
b) Intervenir como representante de la Federación en todos los negocios en que ésta sea parte o tenga interés jurídico. Esta atribución comprende las actuaciones necesarias para el ejercicio de la facultad que confiere al Fiscal General de la República la fracción III del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
c) Tratándose de asuntos que revistan interés y trascendencia para la Federación, el Fiscal General de la República deberá mantener informado al Presidente de la República de los casos relevantes, y requerirá de su acuerdo por escrito para el desistimiento;
d) Intervenir como coadyuvante en los negocios en que las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sean parte o tengan interés jurídico, a solicitud de la coordinadora de sector correspondiente. El Fiscal General de la República acordará lo pertinente tomando en cuenta la importancia que el asunto revista para el interés público.

e) Las coordinadoras de sector y, por acuerdo de éstas, las entidades paraestatales, conforme a lo que establezca la ley respectiva, por conducto de los órganos que determine su régimen de gobierno, deberán hacer del conocimiento de la Fiscalía General de la República los casos en que dichas entidades figuren como partes o como coadyuvantes, o de cualquier otra forma que comprometan sus funciones o patrimonio ante órganos extranjeros dotados de atribuciones jurisdiccionales.

f) En estos casos la Fiscalía General de la República se mantendrá al tanto de los procedimientos respectivos y requerirá la información correspondiente. Si a juicio del Fiscal General de la República el asunto reviste importancia para el interés público, formulará las observaciones o sugerencias que estime convenientes, y

g) Intervenir en las controversias en que sean parte los diplomáticos y los cónsules generales, precisamente en virtud de esta calidad. Cuando se trate de un procedimiento penal y no aparezcan inmunidades que respetar, el Ministerio Público de la Federación procederá en cumplimiento estricto de sus obligaciones legales, observando las disposiciones contenidas en los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte;

8. Intervenir en la extradición, entrega o traslado de indiciados, procesados o sentenciados, en los términos de las disposiciones aplicables, así como en el cumplimiento de los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte;
9. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y personas que puedan suministrar elementos para el debido ejercicio de sus atribuciones.

10. Será obligatorio proporcionar los informes que solicite el Ministerio Público de la Federación en ejercicio de sus funciones. El incumplimiento a los requerimientos que formule el Ministerio Público de la Federación será causa de responsabilidad en términos de la legislación aplicable;

11. Promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia.

12. Ejercitar la acción de extinción de dominio y las atribuciones que le corresponden en el procedimiento respectivo, de conformidad con la ley de la materia, y demás disposiciones aplicables;

13. Atender las solicitudes de información sobre el registro de detenidos;

14. Conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública e intervenir en las acciones de coordinación que le correspondan para cumplir los objetivos de la seguridad pública, en términos de las disposiciones aplicables, y

15. Las demás que las leyes determinen.

Artículo 5.

1. Corresponde a la Fiscalía General de la República:

a) Participar, con autonomía, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública de conformidad con la ley de la materia y demás disposiciones aplicables. En el ejercicio de esta atribución el Fiscal General de la República deberá:

i. Participar en las instancias de coordinación que correspondan en el ámbito de competencia de la Fiscalía General de la República, y dar cumplimiento a los acuerdos y resoluciones que se adopten en las mismas;
ii. Ejercer las facultades que le confiere la ley por cuanto hace a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y
iii. Participar en los demás órganos del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

iv. Recabar, capturar, procesar, administrar y resguardar la información de los asuntos que conozca, utilizando instrumentos científicos, normativos y dispositivos tecnológicos adecuados para alimentar las bases de datos correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en las normas jurídicas aplicables y los acuerdos de su Consejo de Gobierno, así como consultar, analizar y explotar la información sobre seguridad pública contenida en dichas bases de datos;

v. Instrumentar y aplicar mecanismos de coordinación con las instituciones de Seguridad Pública federales, de las entidades federativas y de los municipios para la investigación de los delitos. En el ejercicio de esta función, las policías actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación;

vi. Establecer indicadores y procedimientos de evaluación y transparencia con la participación ciudadana, en los términos del reglamento de esta ley y de conformidad con las normas aplicables en materia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin perjuicio de otros sistemas de evaluación que le sean aplicables;

b) Velar por el respeto de las garantías individuales y los derechos humanos en la esfera de su competencia. En el ejercicio de esta atribución la Fiscalía General de la República deberá:

c) Fomentar entre los servidores públicos de la Fiscalía General de la República la cultura de no violación o transgresión a las garantías individuales y los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano y los tratados internacionales de la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución General de la República;

d) Atender las visitas, quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organismos internacionales de protección de derechos humanos cuya competencia haya

sido reconocida por el Estado mexicano, conforme a las normas aplicables, y

e) Proporcionar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando la solicite en ejercicio de sus funciones, siempre que no ponga en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de personas;

f) Participar en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, en los términos que prevea la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables;

g) Promover la celebración de tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales en asuntos relacionados con sus atribuciones, así como vigilar su cumplimiento, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y las demás dependencias de la Administración Pública Federal involucradas;

h) Opinar y participar en los proyectos de iniciativas de ley o de reformas legislativas para la exacta observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que estén vinculadas con las materias de su competencia;

i) Establecer mecanismos de información que de forma sistemática y directa den cuenta a sociedad de sus actividades. En todo caso se reservará la información cuya divulgación pueda poner en riesgo las investigaciones que realice el Ministerio Público de la Federación y mantendrá la confidencialidad de los datos personales, de conformidad con lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás normas aplicables;

j) Orientar a los particulares respecto de asuntos que presenten ante el Ministerio Público de la Federación que no constituyan delitos del orden federal o que no sean de su competencia, sobre el trámite que legalmente corresponda al asunto de que se trate;

k) Ofrecer y entregar recompensas en numerario, en un solo pago o en exhibiciones periódicas, a personas que aporten información útil relacionada con las investigaciones y averiguaciones que realice, así como a aquéllas que colaboren en la localización y detención de probables responsables de la comisión de delitos, en los términos y condiciones que mediante acuerdo determine;

l) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas para garantizar a los inculpados, ofendidos, víctimas, denunciantes y testigos pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, la disponibilidad de intérpretes y traductores;

m) Emitir disposiciones para la recolección, el levantamiento, la preservación y el traslado de indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, y de los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los procedimientos y protocolos para asegurar su integridad;

n) Convocar y realizar reuniones periódicas con las autoridades fiscales federales, quienes estarán obligadas a participar, cuando así se los solicite la Fiscalía en las reuniones que al efecto se programen, para formularle sugerencias respecto de sus actividades, así como, de advertir o prevenir la comisión de cualquier acto ilegal en perjuicio de una persona o grupo de personas, o de proponerles se eviten perjuicios o se reparen los daños causados a éstos con su ilegal emisión, o por cualquier causa que la justifique. A tales reuniones podrán asistir, e intervenir, en compañía del personal de la Fiscalía, los síndicos, y representantes de colegios profesionales, grupos organizados de consumidores, sindicatos, cámaras empresariales y sus confederaciones y, en general, de grupos de contribuyentes legalmente constituidos, quienes habrán de acreditarse oportunamente ante la Fiscalía;

o) Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales y en general al personal que atiende a víctimas de delitos, a través de programas y cursos permanentes en:

   i. Derechos humanos y género;
   ii. La aplicación de la perspectiva de género en la debida diligencia, la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia de género y feminicidios;
   iii. Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales;
   iv. Eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres;
   v. Los que se consideren pertinentes para la debida investigación y persecución de los delitos que son cometidos contra niñas y mujeres;

p) Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de niñas y mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos en caso de homicidio o feminicidio, características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia;

q) Elaborar y aplicar protocolos de investigación de delitos con perspectiva de género, primordialmente para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de feminicidio, contra la libertad y normal desarrollo psicosexual, la trata de personas y la discriminación.

r) Crear una base nacional de información genética que contenga la información personal disponible de niñas y mujeres desaparecidas a nivel

nacional; la información genética y muestras celulares de los familiares de las personas desaparecidas que lo consientan; la información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada. La información integrada en esta base deberá ser resguardada y únicamente podrá ser utilizada para la confrontación de información genética entre cuerpos no identificados y personas desaparecidas;

s) Realizar las funciones que deriven de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables respecto de la constitución y administración de fondos que le competan, y

t) Las demás que prevean otras disposiciones legales.

Artículo 6.

1. Son atribuciones indelegables del Fiscal General de la República:

a) Comparecer ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión en los casos y bajo las condiciones que establecen los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas comparecencias deberá reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, aquélla que conforme a la ley se encuentre sujeta a reserva y los datos confidenciales en términos de las normas aplicables;

b) Intervenir en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos previstos en dicho precepto y en las leyes aplicables;

c) Formular petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que conozca de los amparos directos o en revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten, de conformidad con el artículo 107, fracciones V y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

d) Denunciar las contradicciones de tesis ante el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia, así como ante los Plenos de Circuito; conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

e) Proponer al Ejecutivo Federal los proyectos de iniciativas de ley o de reformas legislativas para la exacta observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que estén vinculadas con las materias que sean competencia de la Fiscalía General de la República, de conformidad con las disposiciones aplicables;

f) Presentar al Ejecutivo Federal propuestas de tratados internacionales en el ámbito de su competencia, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y las demás dependencias de la Administración Pública Federal involucradas;

g) Concurrir en la integración y participar en las instancias de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con las facultades que determina la ley de la materia;

h) Presentar ante el Consejo de Gobierno de la Fiscalía General de la República, el proyecto de reglamento de esta Ley, así como de las reformas al mismo, a fin de que sea analizado, discutido y aprobado.

i) Celebrar convenios de colaboración con los gobiernos de la Ciudad de México y de los estados integrantes de la Federación, de conformidad con el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como acuerdos interinstitucionales con órganos gubernamentales extranjeros u organismos internacionales, en términos de la Ley sobre la Celebración de Tratados;

j) Celebrar acuerdos, bases de colaboración, convenios y demás instrumentos jurídicos con autoridades federales y con los gobiernos de la Ciudad de México, de los Estados integrantes de la Federación y municipios, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, así como con organizaciones de los sectores social y privado;

k) Crear consejos asesores y de apoyo que coadyuven en la solución de la problemática propia de las distintas actividades de la Fiscalía General de la República.

Artículo 7.

1. Los servidores públicos que determine el reglamento de esta ley podrán emitir o suscribir instrumentos jurídicos, de acuerdo con sus atribuciones, que faciliten el funcionamiento y operación de la Fiscalía General de la República, siempre que no sean de los previstos en el artículo anterior.

Artículo 8.

1. El Fiscal General de la República, así como los servidores públicos en quienes delegue la facultad y los que autorice el reglamento de esta ley, resolverán en definitiva:

a. El no ejercicio de la acción penal;
b. La solicitud de cancelación o reclasificación de órdenes de aprehensión, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales;
c. La formulación de conclusiones no acusatorias;
d. El acuerdo para el desistimiento total o parcial del ejercicio de la acción penal, por parte del Ministerio Público;

e. Las consultas que agentes del Ministerio Público de la Federación formulen o las prevenciones que la autoridad judicial acuerde en los términos que la ley prevenga, respecto de la omisión de formular conclusiones en el término legal, de conclusiones presentadas en un proceso penal o de actos cuya consecuencia sea el sobreseimiento del proceso o la libertad absoluta del inculpado antes de que se pronuncie sentencia;

f. La infiltración de agentes para investigaciones en materia de delincuencia organizada, de conformidad con las disposiciones aplicables, y

g. Sobre la admisión de los elementos de prueba aportados o las diligencias solicitadas por la víctima u ofendido.

CAPÍTULO II
Organización

Artículo 9.

1. El Fiscal General de la República ejercerá autoridad jerárquica sobre todos los servidores públicos de la Fiscalía General de la República.

2. El Consejo de Gobierno de la Fiscalía General de la República, sin perjuicio de las facultades concedidas en esta ley al Fiscal Especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción para expedir normas administrativas necesarias que rijan la actuación de dicha Fiscalía, emitirá los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de las unidades administrativas y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Fiscalía General de la República, así como de agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial, oficiales ministeriales, visitadores y peritos.

Artículo 10.

1. Para el despacho de sus asuntos y los que competen al Ministerio Público de la Federación, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente ordenamiento y demás disposiciones aplicables, el Fiscal General de la República tendrá un Consejo de Gobierno bajo la conducción y mando del Fiscal General e integrado por:

a. Fiscal especializado en Investigación Delictiva
b. Fiscal especializado en Delitos Electorales
c. Fiscal especializado en Combate a la Corrupción
d. Fiscal especializado en Control de Procesos
e. Fiscal especializado en Asuntos Internacionales
f. Fiscal especializado en Control de Procesos no Penales
g. Fiscal especializado en Amparo y Procesos Constitucionales
h. Fiscal especializado en Combate contra la Delincuencia Organizada
i. Defensor de Derechos Humanos y
j. Un representante del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República.
k. Visitador General

Artículo 11.

1. La Fiscalía Especializada en combate a la corrupción es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción.
2. Contará con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar capacitados para el debido cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades administrativas necesarias para el seguimiento de las investigaciones.

3. Se auxiliará de la unidad administrativa en materia de Servicios Periciales, la cual en su caso, deberá dar trámite y desahogo al peritaje solicitado en el término que al efecto establezca el Ministerio Público y que resulte acorde con la complejidad del peritaje a realizar.
4. Contará con Agentes del Ministerio Público Especializados en combate a los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción.
5. Su titular presentará anualmente al Fiscal General de la República y al Consejo de Gobierno un informe sobre actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás disposiciones aplicables en la materia.
6. El informe será remitido a su vez, al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y al Senado de la República.
7. El titular de la Fiscalía, al igual que su personal de confianza, agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos miembros del Servicio Profesional de Carrera o de designación especial estarán sujetos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como al régimen especial de la materia previsto en esta ley. Su actuación será fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación, la Visitaduría General y el Órgano Interno de Control, conforme a sus respectivas competencias.
8. El titular de la Fiscalía elaborará el anteproyecto de presupuesto de está para enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Fiscalía General de la República, para que se integre en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente que envíe para su aprobación a la Cámara de Diputados.

1. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se identificará el monto aprobado a esta Fiscalía para el respectivo ejercicio fiscal.

Artículo 12.

1. Además de las atribuciones que la Constitución General de la República, las leyes, los Reglamentos y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación en lo relativo a los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción, con excepción de los cometidos por servidores públicos de Fiscalía General de la República, supuesto en el cual se estará a lo dispuesto en el artículo 21 de esta ley, la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción contará con las siguientes facultades:

a) Participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, atendiendo las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley general correspondiente;
b) Nombrar, previo acuerdo con el Fiscal General de la República, a los titulares de las unidades administrativas y direcciones generales de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, salvo aquellas que no realicen funciones sustantivas, en cuyo caso, el nombramiento y su remoción serán exclusivos del Fiscal Especializado;

c) Contar con los agentes del Ministerio Público de la Federación y policías de investigación, miembros del servicio profesional de carrera, que le estarán adscritos y resulten necesarios para la atención de los casos que correspondan a la Fiscalía, sobre los que ejercerá mando directo en términos de lo dispuesto por esta ley y su reglamento. Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción presentará solicitud debidamente sustentada y justificada ante el Consejo de Profesionalización, que resolverá lo conducente procurando que se guarde un equilibrio y proporcionalidad en la asignación del personal ministerial considerando los requerimientos operacionales de las diversas unidades administrativas y órganos desconcentrados de la institución y la disponibilidad presupuestaria;

d) Proponer al Fiscal General de la República el nombramiento de los agentes del Ministerio Público por designación especial que reúnan amplia experiencia profesional en la materia de corrupción, en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 38 de esta ley;

e) Proponer a la unidad administrativa competente el contenido teórico práctico de los programas de capacitación, actualización y especialización a que se refiere el artículo 33 de esta ley, respecto de los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada;

f) Coordinar y supervisar la actuación de la policía de investigación en los términos de lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional;

g) Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción;

h) Implementar planes y programas destinados a detectar la comisión de los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción en el ámbito de su competencia. Dichos planes y programas deberán ser aprobados por el Fiscal General de la República.

i) Instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades para la elaboración de estrategias y programas tendientes a combatir los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción;

j) Emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de la Fiscalía en el ámbito de su competencia. Los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas emitidas por parte del Fiscal Especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, que sean necesarios para regular la actuación de la Fiscalía Especializada a su cargo en ningún caso podrán contradecir las normas administrativas emitidas por el Fiscal General de la República. En caso de contradicción, se estará a lo

dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de esta ley, resolviendo la actualización, derogación o abrogación de la norma emitida por el fiscal especializado. En su caso, se propondrá al Fiscal General de la República la actualización, derogación o abrogación de las normas expedidas por éste;

k) Fortalecer e implementar, en el ámbito de su competencia, mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno para la investigación de los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción;

l) Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia de los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción;

m) Implementar mecanismos de colaboración con autoridades que ejerzan facultades de fiscalización a fin de fortalecer el desarrollo de las investigaciones;

n) Requerir a las instancias de gobierno la información que resulte útil o necesaria para sus investigaciones, la que por ningún motivo le podrá ser negada, incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquiera otro de similar naturaleza;

o) Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la información fiscal, financiera y contable para que pueda ser utilizada por ésta y otras unidades competentes de la Fiscalía, en especial la relacionada con la investigación de los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción;

p) Coadyuvar con otras áreas competentes de la Fiscalía, en el desarrollo de herramientas de inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas variables criminales, socioeconómicas y

financieras, para conocer la evolución de las actividades relacionadas con los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción;

q) Generar sus propias herramientas metodológicas para el efecto de identificar los patrones de conducta que pudieran estar relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita;

r) Emitir guías y manuales técnicos, en conjunto con la Coordinación General de Servicios Periciales y la Unidad Especializada en Análisis Financiero para la formulación de dictámenes en materia de análisis fiscal, financiero y contable que requieran los agentes del Ministerio Público de la Federación en el cumplimiento de sus funciones de investigación y persecución de los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción;

s) Conducir la investigación para la obtención de datos o medios de prueba vinculados a hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción;

t) Suscribir programas de trabajo y proponer al Fiscal General de la República la celebración de convenios con las entidades federativas para tener acceso directo a la información disponible en los Registros Públicos de la Propiedad así como de las unidades de inteligencia patrimonial de las entidades federativas, para la investigación y persecución de los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción;

u) Ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

v) Dirigir, coordinar y realizar la investigación de los hechos que presuntamente constituyan delitos del fuero federal en materia de su competencia y del orden común, en los que ejerza la facultad de atracción, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

w) Ordenar el aseguramiento de bienes propiedad del imputado, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, o dueños beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor equivalga al producto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo cuando éstos hayan desaparecido o no se localicen por causa atribuible al imputado;

x) Promover la extinción de dominio de los bienes de los imputados o sentenciados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, o dueños beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor equivalga a los bienes desaparecidos o no localizados por causa atribuible al imputado o sentenciado, cuando estos bienes estén vinculados con hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción que sean susceptibles de la acción de extinción de dominio, en los términos de la legislación aplicable;

y) Decidir responsablemente sobre el destino de los recursos que le sean asignados, a fin de cubrir todas las necesidades que surjan en el desempeño de sus facultades;

z) Someter a consideración del Fiscal General de la República el ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 107 Constitucional a efecto de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ejercicio de su facultad de atracción, en los casos que ésta proceda y que sean de su competencia,

aa) Las demás que en su caso le confieran otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 13.

1. Las fiscalías especializadas se equiparan jerárquica y administrativamente y sus titulares deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.

2. En la designación de los titulares de las fiscalías especializadas, se dará preferencia a quienes formen parte del Servicio Civil de Carrera de la Fiscalía General de la República.

Artículo 14.

1. Para el desarrollo de las funciones de la Fiscalía General de la República y del Ministerio Público de la Federación, se contará con un sistema de especialización y de coordinación regional y desconcentración, sujeto a las bases generales siguientes:

a. Contará con unidades administrativas especializadas en la investigación y persecución de géneros de delitos, atendiendo a las formas de manifestación de la delincuencia organizada, así como a la naturaleza, complejidad e incidencia de los delitos federales;

b. Las unidades administrativas especializadas actuarán en la circunscripción territorial que mediante acuerdo determine el Consejo de Gobierno, en coordinación con las demás unidades administrativas competentes, y
c. Las unidades administrativas especializadas contarán con la estructura administrativa que establezcan las disposiciones aplicables.

2. En todos los casos en que el Ministerio Público de la Federación hubiere ejercido la facultad establecida en el párrafo quinto del artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales se deberán agotar las diversas líneas de investigación

relativas a la afectación, limitación o menoscabo del derecho a la información o de las libertades de expresión o imprenta.

a) La unidad administrativa que conozca de los delitos cometidos en contra del derecho a la información, la libertad de expresión o de imprenta, tendrá pleno acceso a los datos, registros y actuaciones de la investigación de delitos relacionados con su ámbito de competencia, que se encuentren bajo el conocimiento de cualquier unidad administrativa de la Fiscalía General de la República.
b) Actuará con base en un sistema de coordinación regional y desconcentración, por conducto de unidades administrativas que ejercerán sus funciones en las circunscripciones territoriales que establezcan las disposiciones aplicables;
c) Las circunscripciones territoriales serán delimitadas atendiendo a la incidencia delictiva, las circunstancias geográficas, las características de los asentamientos humanos, el nivel poblacional, los fenómenos criminógenos y demás criterios que establezca el reglamento de esta ley;
d) Cada circunscripción territorial contará con las unidades administrativas que resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones, de conformidad con las normas aplicables. Las unidades administrativas a que se refiere el párrafo anterior se integrarán con agencias del Ministerio Público de la Federación, oficiales ministeriales y el personal necesario para el desempeño de sus funciones;
e) Las delegaciones serán órganos desconcentrados en las entidades federativas.
f) Al frente de cada delegación habrá un delegado, quien ejercerá el mando y autoridad jerárquica sobre el personal que le esté adscrito.
g) Las delegaciones preverán medidas para la atención de los asuntos a cargo del Ministerio Público de la Federación en las localidades donde no exista agencia permanente;
h) Las unidades administrativas, delegaciones y demás órganos desconcentrados en cada circunscripción territorial atenderán los asuntos

en materia de las carpetas de investigación, ejercicio de la acción penal, reserva, incompetencia, acumulación, no ejercicio de la acción penal, control de procesos, amparo, prevención del delito, servicios a la comunidad, servicios administrativos y otros, de conformidad con las facultades que les otorgue el reglamento de esta ley y el acuerdo respectivo del Fiscal General de la República.

i) La ubicación y los ámbitos territorial y material de competencia de las unidades administrativas y órganos desconcentrados en las circunscripciones territoriales, así como de las delegaciones, se determinarán por acuerdo del Fiscalía General de la República, atendiendo a los criterios señalados en el inciso b), y

j) El Consejo de Gobierno expedirá las normas necesarias para la coordinación y articulación de las unidades administrativas en cada circunscripción territorial con las áreas centrales, los órganos desconcentrados y las unidades especializadas, a efecto de garantizar la unidad de actuación y dependencia jerárquica del Ministerio Público de la Federación.

Artículo 15.

1. La Fiscalía General de la República dispondrá de un sistema de información legislativa, jurisprudencial y doctrinal para el conocimiento de las legislación internacional (derecho comparado y tratados internacionales), estatal, de la Ciudad de México, a efecto de cumplir con los cometidos de la fracción II, inciso c), del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación que le corresponda en las controversias a que se refiere la fracción I del mismo artículo.

2. El sistema de las tesis contradictorias que se emitan por el Poder Judicial de la Federación, a fin de que el Fiscal General de la República esté en condiciones de ejercitar la facultad de denuncia de tesis contradictorias a que alude la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 16.

1. Los Servidores Públicos de la Fiscalía General de la República se organizarán como sigue:
    a. Los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los peritos, quedarán sujetos al Servicio Profesional de Carrera, salvo en los casos previstos en los artículos 37 y 38, en los términos de los artículos 21 y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables;
    b. Los Fiscales Especializados, fundada y motivadamente, podrán solicitar al Consejo de Profesionalización la destitución de los agentes del Ministerio Público y de la policía que le estén adscritos cuando no cumplan con los requisitos para permanecer en su cargo.
    c. Los servidores públicos de base deberán aprobar las evaluaciones de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales que establece esta ley y estará sujeto al sistema de profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables. En caso de que resulten no aptos, se darán por terminados los efectos del nombramiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, y
    d. Las funciones del personal distinto del ministerial, policial y pericial, así como del señalado en la fracción anterior, son de confianza para todos los efectos legales. Dicho personal estará sujeto a la evaluación de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales y al sistema de profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables; en ningún caso será considerado miembro de los servicios de carrera, y los efectos de su nombramiento podrán darse por terminados en cualquier momento.

2. El reglamento de esta ley señalará los servidores públicos que, sin tener el nombramiento de agente del Ministerio Público de la Federación, por la

naturaleza de sus funciones deban ejercer las atribuciones que correspondan a éste. Dichos servidores públicos quedarán comprendidos en la fracción III de este artículo.

3. La Fiscalía General de la República contará con un sistema de profesionalización en el que deberá participar todo el personal de la misma, cuyas características estarán contenidas en el reglamento de esta ley y demás normas aplicables.

4. Además del cumplimiento de los requisitos que determine esta ley y demás normas aplicables, previo al ingreso a la Fiscalía General de la República, deberán consultarse los registros correspondientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 17.

1. El reglamento de esta ley establecerá las unidades y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Fiscalía General de la República, así como sus atribuciones.
2. El Consejo de Gobierno de conformidad con las disposiciones presupuestales, podrá crear unidades administrativas especializadas distintas a las previstas en el reglamento de esta ley, para la investigación y persecución de géneros de delitos y para el ejercicio de la función ministerial, policial y pericial, atendiendo a las necesidades del servicio, así como fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.

Artículo 18.

1. El Fiscal General de la República, para la mejor organización y funcionamiento de la Fiscalía, podrá delegar facultades, excepto aquellas que por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y demás ordenamientos aplicables, deban ser ejercidas por el propio Fiscal General de la República.

2. Asimismo, podrá adscribir orgánicamente las unidades y órganos técnicos, desconcentrados y administrativos que establezca el reglamento de esta ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 19.

1. Los acuerdos por los cuales se disponga la creación de unidades administrativas especializadas, fiscalías especiales y órganos desconcentrados, en los que se deleguen facultades o se adscriban los órganos y unidades, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 20.

1. Para ser Visitador General, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento;

b) Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación;

c) Contar con título profesional de licenciado en derecho, con ejercicio profesional de cinco años;

d) Gozar de buena reputación, y

e) No haber sido condenado por delito doloso.

Artículo 21.

1. Los coordinadores, titulares de unidad y de órganos desconcentrados, directores generales, delegados y agregados deberán reunir los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley y demás disposiciones aplicables, y serán designados y removidos libremente por el Fiscal General de la República.

Artículo 22.

1. Los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los peritos, serán nombrados y removidos de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de esta ley.

2. Los demás servidores públicos serán nombrados y removidos en los términos del presente ordenamiento, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

3. Los oficiales ministeriales deberán cumplir los requisitos que establece el artículo 23 y serán considerados servidores públicos de confianza en términos del artículo 13, fracción III, de esta ley.

Artículo 21.

1.La Visitaduría General es el órgano de evaluación técnico-jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y control de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de los agentes de la Policía Federal Ministerial, de los oficiales ministeriales, de los peritos, y de los demás servidores públicos de la Fiscalía General de la República en lo que se refiere a las funciones que realicen como auxiliares del Ministerio Público de la Federación, así como de investigación de los delitos en que incurran, sin perjuicio de las facultades que correspondan al órgano interno de control en la Fiscalía General de la República, conforme a esta ley y demás disposiciones aplicables.

1. La Visitaduría General tendrá libre acceso a los expedientes, documentos e información que se encuentren bajo la autoridad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial, oficiales ministeriales, peritos o demás auxiliares del Ministerio Público de la Federación a quienes se realiza una visita, así como a las instalaciones correspondientes y la documentación, el equipo y los elementos que ahí se encuentren, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, su reglamento y los acuerdos relativos.
2. Los servidores públicos de la Visitaduría General serán nombrados en los términos que determine el reglamento de esta ley, y desempeñarán las

atribuciones que en el mismo se les confieran, así como en los acuerdos que emita el Fiscal General de la República.

3. Los delitos en que incurran los servidores públicos de la Visitaduría General incluyendo a su titular serán investigados y perseguidos por el Fiscal General de la República o por el servidor público en quien se delegue la facultad.
4. Las faltas administrativas que cometan los servidores públicos de la Visitaduría General incluyendo a su titular, en términos de lo previsto en el régimen especial de la materia previsto en los Capítulos VIII y IX de esta ley, con excepción de las que se prevén en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que corresponden al Órgano Interno de Control, serán investigadas y sustanciadas por el Fiscal General de la República o por el servidor público en quien se delegue la facultad, quien podrá imponer las sanciones que correspondan.
5. Cuando la Visitaduría tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de una falta administrativa, sin perjuicio de sus facultades establecidas en esta ley, deberá presentar la denuncia correspondiente como parte ante el Órgano Interno de Control para que éste proceda en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

CAPÍTULO III

De los Auxiliares del Ministerio Público de la Federación

Artículo 22.

1. Son auxiliares del Ministerio Público de la Federación:

a) Directos: los oficiales ministeriales, la Policía Federal Ministerial, la policía federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, y los servicios periciales.
b) Suplementarios: los agentes del Ministerio Público del fuero común, las policías de la Ciudad de México, de los estados integrantes de la Federación y de los Municipios, así como los peritos de las instituciones de procuración

de justicia de las entidades federativas, en términos de las disposiciones legales aplicables y los acuerdos respectivos;

2. Los Servidores Públicos de la Fiscalía General de la República a que se refieren las fracciones II y III del artículo 13 de esta ley;

3. El personal del Servicio Exterior Mexicano acreditado en el extranjero;

4. Los capitanes, patrones o encargados de naves o aeronaves nacionales, y

5. Los funcionarios de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, en términos de las disposiciones aplicables.

6. El Ministerio Público de la Federación ordenará la actividad de los auxiliares suplementarios en lo que corresponda exclusivamente a las actuaciones que practiquen en su auxilio.

Artículo 23.

1. Los oficiales ministeriales auxiliarán al Ministerio Público de la Federación en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que establezcan el reglamento de esta ley y los acuerdos que emita el Fiscal General de la República.

2. Para ser oficial ministerial se requiere:

a) Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;
b) Acreditar la carrera profesional de oficial ministerial
c) Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional;
d) Aprobar el proceso de evaluación de control de confianza, así como los cursos que se determinen conforme al sistema de profesionalización, en términos de las normas aplicables;
e) No estar sujeto a proceso penal;
f) No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;

g) Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso o culposo calificado como grave;
h) No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, e
i) Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables.

Artículo 24.

1. En la investigación de los delitos, las policías actuarán bajo la conducción y el mando del Ministerio Público de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones aplicables y los protocolos de actuación que se establezcan al respecto.

Artículo 25.

1. Los peritos actuarán bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público de la Federación, sin perjuicio de la autonomía técnica e independencia de criterio que les corresponde en el estudio de los asuntos que se sometan a su dictamen.

Artículo 26.

1. El Fiscal General de la República o los servidores públicos en quienes delegue esta función, podrán autorizar al personal de la Fiscalía General de la República para colaborar con la policía federal en el ejercicio de sus funciones de investigación para la prevención de los delitos conforme con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normas aplicables, así como auxiliar a otras autoridades que lo requieran en el desempeño de una o varias funciones, que sean compatibles con las que corresponden a la procuración de justicia federal.

2. La colaboración y auxilio respectivos se autorizarán mediante la expedición del acuerdo correspondiente, tomando en cuenta los recursos y las necesidades

El personal autorizado en los términos de este artículo no quedará, por ese hecho, subordinado a las autoridades con quienes colabore o a las que auxilie.

Artículo 27.

1. De conformidad con los artículos 21 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas aplicables en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Fiscal General de la República acordará con las autoridades locales competentes de los tres órdenes de gobierno la forma en que deban desarrollarse las funciones de auxilio local al Ministerio Público de la Federación.

2. Sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, cuando los agentes del Ministerio Público del fuero común auxilien al Ministerio Público de la Federación, recibirán denuncias y querellas por delitos federales, practicarán las diligencias correspondientes a las carpetas de investigación que sean urgentes, resolverán sobre la detención o libertad del inculpado, bajo caución o con las reservas de ley, y enviarán sin dilación alguna el expediente y el detenido al Ministerio Público de la Federación.

Artículo 28.

1. Los auxiliares del Ministerio Público de la Federación deberán, bajo su responsabilidad, dar aviso de inmediato a éste, en todos los casos sobre los asuntos en que intervengan con ese carácter, haciendo de su conocimiento los elementos que conozcan con motivo de su intervención.

CAPÍTULO IV

De la Suplencia y Representación del Fiscal General de la República

Artículo 29.

1. El Fiscal General de la República será suplido en sus excusas, ausencias o faltas temporales por los fiscales especializados, en los términos que disponga el reglamento de esta ley.

2. En materia de procesos penales, el Fiscal General de la República será suplido por el titular de la unidad administrativa correspondiente para la atención de las vistas que al efecto realice la autoridad jurisdiccional, el desistimiento de la acción penal, la presentación de conclusiones inacusatorias y otras actuaciones.

3. Cuando el Fiscal General de la República sea señalado como autoridad responsable en juicios de amparo, será suplido, indistintamente, por los servidores públicos señalados en el párrafo primero, los que establezca el reglamento de esta ley o quien designe mediante el acuerdo correspondiente.

4. El Fiscal especializado que supla al Fiscal General de la República ejercerá las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y demás normas aplicables otorgan a aquél, con excepción de lo dispuesto por la fracción I del artículo 6 de esta ley.

Artículo 30.

1. Los Fiscales Especiales, el Oficial Mayor, el Visitador General, los coordinadores, titulares de unidad, directores generales, delegados, titulares de órganos desconcentrados, agregados y los demás servidores públicos, serán suplidos en los términos que establezca el reglamento de esta ley.

Artículo 31.

1. El Fiscal General de la República será representado ante las autoridades judiciales, administrativas y del trabajo por los servidores públicos que determine el reglamento de esta ley o por los agentes del Ministerio Público de la Federación que se designen para el caso concreto.

CAPÍTULO V

Del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial

Artículo 32.

1. El Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial comprende lo relativo al agente del Ministerio Público de la Federación, agente de la Policía Federal Ministerial y perito profesional y técnico, y se sujetará a las bases siguientes:

a. Se compondrá de las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio, así como reincorporación al mismo, en los términos de las disposiciones aplicables;
b. Tendrá carácter obligatorio y permanente y abarcará los programas, cursos, exámenes y concursos correspondientes a las diversas etapas de las ramas ministerial, policial y pericial, los cuales se realizarán por el Instituto Nacional de Estudios Profesionales en Procuración de Justicia, que estará regido por el reglamento que al efecto expida el Consejo de Gobierno.
c. Se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina e imparcialidad y de respeto a los derechos humanos y tendrá como objetivos la preparación, competencia, capacidad y superación constante del personal en el desempeño de sus funciones, así como fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia.
d. El contenido teórico y práctico de los programas de profesionalización, capacitación, actualización y especialización fomentará que los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los peritos logren la profesionalización y ejerzan sus atribuciones con base en los referidos principios y objetivos, y promoverán el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarios para el desempeño del servicio;
e. Contendrá las normas para la emisión, revalidación, registro y el reconocimiento de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que el personal ministerial, policial y pericial deberá tener para desempeñar su función y acceder a los niveles superiores;

f. Contará con un sistema de rotación de agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial y de peritos profesionales y técnicos, dentro de la Fiscalía General de la República, y

g. Determinará los perfiles, categorías y funciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial y de peritos profesionales y técnicos.

Artículo 33.

1. Para ingresar y permanecer como agente del Ministerio Público de la Federación de carrera, se requiere:

1. Ingreso:

a) Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;

b) Contar con título de licenciado en derecho expedido y registrado legalmente, y con la correspondiente cédula profesional;

c) Acreditar una experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de la profesión de Licenciado en Derecho;

d) Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional;

e) Aprobar el proceso de evaluación de control de confianza y de competencias profesionales;

f) Sustentar y acreditar el concurso de oposición, en los términos que señalen las disposiciones aplicables;

g) No estar sujeto a proceso penal;

h) No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;

i) Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso o culposo calificado como grave; No hacer uso ilícito de sustancias

psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, y

j) Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables.

2. Permanencia:

a) Seguir los programas de actualización, profesionalización y de evaluación de competencias para el ejercicio de la función que establezcan las disposiciones aplicables;

b) Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño, y de competencias profesionales que establezcan el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables;

c) No ausentarse del servicio sin causa justificada por tres días consecutivos, o cinco discontinuos, dentro de un período de treinta días naturales;

d) Participar en los procesos de ascenso que se convoquen conforme a las disposiciones aplicables;

e) Cumplir los requisitos a que se refiere la fracción I de este artículo durante el servicio;

f) Mantener vigente la certificación a que se refiere el artículo 59;

g) Cumplir las órdenes de comisión, rotación y cambio de adscripción;

h) Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes respectivas;

i) No incurrir en actos u omisiones que causen la pérdida de confianza o afecten la prestación del servicio, y

j) Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables.

Artículo 34.

1. Para ingresar y permanecer como agente de la Policía Federal Ministerial de carrera, se requiere:

1. Ingreso:

a. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles
b. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
c. Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional
d. Acreditar la carrera profesional de Policía Ministerial;
e. Sustentar y acreditar el concurso de ingreso;
f. Seguir y aprobar los cursos de formación;
g. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
h. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de competencias profesionales;
i. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
j. No padecer alcoholismo;
k. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
l. No estar suspendido o inhabilitado ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;
m. Cumplir con los deberes establecidos en la presente ley y demás disposiciones aplicables, y
n. Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables.

2. Permanencia:
   a. Cumplir los requisitos a que se refiere la fracción I de este artículo durante el servicio;
   b. Mantener actualizado su certificado único policial;

c. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;
d. Seguir y aprobar los programas de formación, capacitación, actualización, profesionalización y de evaluación de competencias para el ejercicio de la función que establezcan las disposiciones aplicables;
e. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de evaluación del desempeño que establezcan el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables;
f. No ausentarse del servicio sin causa justificada por tres días consecutivos, o cinco discontinuos, dentro de un período de treinta días naturales;
g. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen conforme a las disposiciones aplicables;
h. Cumplir las órdenes de comisión, rotación y cambio de adscripción;
i. No incurrir en actos u omisiones que causen la pérdida de confianza o afecten la prestación del servicio, y
j. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables.

Artículo 35.

1. Para ingresar y permanecer como perito de carrera, se requiere:

1. Para ingresar:

a) Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;

b) Tener título legalmente expedido y registrado por la autoridad competente que lo faculte para ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar, cuando de acuerdo con las normas aplicables no necesite título o cédula profesional para su ejercicio;

c) Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional;

d) Aprobar el proceso de evaluación de control de confianza y de competencias profesionales;

e) Sustentar y acreditar el concurso de oposición en los términos que señalen las disposiciones aplicables;

f) No estar sujeto a proceso penal;

g) No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;

h) Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso o culposo calificado como grave;

i) No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, y

j) Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables.

2. Permanencia:

a) Seguir los programas de actualización, profesionalización y de evaluación de competencias para el ejercicio de la función que establezcan las disposiciones aplicables;
b) Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, de evaluación del desempeño y de competencias profesionales que establezcan el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables;
c) No ausentarse del servicio sin causa justificada por tres días consecutivos, o cinco discontinuos, de un período de treinta días naturales

d) Participar en los procesos de ascenso que se convoquen conforme a las disposiciones aplicables;
e) Cumplir los requisitos a que se refiere la fracción I de este artículo durante el servicio;
f) Mantener vigente la certificación a que se refiere el artículo 59;
g) Cumplir las órdenes de comisión, rotación y cambio de adscripción;
h) Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes respectivas,
i) Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables.

Artículo 36.

1. Excepcionalmente y con la debida justificación, tratándose de personas con amplia experiencia profesional, el Fiscal General de la República, de conformidad con el reglamento de esta ley y lo que establezcan las disposiciones relativas al Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial podrá, en casos excepcionales, llevar a cabo la designación especial de agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial o peritos, dispensando la presentación de los concursos correspondientes.

2. Dichas personas deberán estar en pleno ejercicio de sus derechos y satisfacer los requisitos siguientes:

a) Para agente del Ministerio Público de la Federación, los señalados en el artículo 34, fracción I, de esta ley, con excepción del inciso e);
b) Para agente de la Policía Federal Ministerial, los señalados en el artículo 35, fracción I, de esta ley, con excepción del inciso e), y

c) Para perito, los señalados en el artículo 36, fracción I, de esta ley, con excepción de los incisos a) y f).

3. Los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los peritos por designación especial, no serán miembros del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial.

4. En cualquier momento se podrán dar por terminados los efectos del nombramiento de las personas designadas conforme a este artículo, sin que para ello sea necesario agotar el procedimiento a que se refiere el artículo 47 de esta ley.

5. El número de agentes del Ministerio Público, agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos de designación especial será el estrictamente necesario para atender los requerimientos del servicio.

6. Las designaciones especiales no podrán exceder de un plazo de tres años.

Artículo 37.

1. Previo al ingreso como agente del Ministerio Público de la Federación, agente de la Policía Federal Ministerial o perito, incluyendo los casos a que se refiere el artículo anterior, será obligatorio que la Fiscalía General de la República consulte los antecedentes del candidato de que se trate en los registros correspondientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los ponga a consideración del Consejo de Gobierno.

Artículo 38.

1. Para el ingreso como agente del Ministerio Público de la Federación, agente de la Policía Federal Ministerial y de perito profesional y técnico, se realizará concurso de ingreso por oposición.

Artículo 39.

1. Los agentes del Ministerio Público de la Federación serán adscritos por el Fiscal General de la República o por otros servidores públicos de la Fiscalía General de la República en quienes delegue esta función, a las diversas unidades y órganos de la misma, de conformidad con las disposiciones aplicables.

2. Los agentes de la Policía Federal Ministerial y los peritos serán adscritos a las unidades u órganos a cargo de la función policial ministerial y de los servicios periciales, respectivamente.

Artículo 40.

1. Los ascensos a las categorías superiores del Ministerio Público de la Federación, agente de la Policía Federal Ministerial y perito, se realizarán por concurso de oposición, de conformidad con las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial y los acuerdos del Consejo de Profesionalización.

Artículo 41.

1. La política de Profesionalización de la Fiscalía General de la República, estará a cargo del Consejo de Gobierno, quien contará con un Comité asesor integrado por:

a. El titular del Órgano Interno de Control;
b. El titular de la Policía Federal Ministerial;
c. El titular del área de Servicios Periciales;
d. El Director del Instituto Nacional de Estudios Profesionales en Procuración de Justicia;
e. El Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales;

f. Un representante del ámbito académico, con nivel de profesor definitivo por oposición tiempo completo o investigador definitivo por oposición tiempo completo en Ciencias Penales.

Artículo 42.

1. El Consejo de Gobierno está facultado para:

a. Normar, desarrollar, supervisar y evaluar el Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, y establecer políticas y criterios generales para tal efecto, de conformidad con las disposiciones aplicables;
b. Aprobar las convocatorias para ingreso o ascenso del personal de carrera;
c. Aprobar los resultados de los concursos de ingreso y de ascensos del personal de carrera;
d. Recomendar al Fiscal General de la República la adscripción inicial y los cambios de adscripción del personal de carrera;
e. Resolver en única instancia el procedimiento de separación del servicio a que se refiere el artículo 47 de esta ley, así como respecto de las solicitudes de reingreso que le sean presentadas de acuerdo con las normas aplicables;

f. Establecer criterios y políticas generales de capacitación, formación, actualización, especialización, rotación, cambio de adscripción y licencias del personal de carrera;

g. Dictar las normas necesarias para la regulación de su organización y funcionamiento;

h. Establecer los órganos y comisiones que deban auxiliarlo en el desempeño de sus funciones, y

i. Las demás que le otorguen las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial.

Artículo 43.

1. La organización y el funcionamiento del Consejo de Profesionalización serán determinados por las normas reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, las cuales deberán establecer los órganos que habrán de auxiliarlo en el cumplimiento de sus funciones.

2. Corresponde al Consejo de Gobierno normar, desarrollar, supervisar, operar y evaluar lo relacionado con el Desarrollo Policial de la Policía Federal Ministerial, en términos de las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás que resulten aplicables.

Artículo 44.

1. La terminación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial será:

I. Ordinaria: renuncia, incapacidad permanente para el desempeño de las funciones, jubilación o retiro, y muerte.

II. Extraordinaria: separación del servicio por el incumplimiento de los requisitos de permanencia o, en el caso de agentes de la Policía Federal Ministerial, cuando en los procesos de promoción concurran las circunstancias siguientes:

a. alcanzar la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables;

b. dejar de participar en tres procesos consecutivos de promoción a los que haya sido convocado o no obtenga el grado inmediato superior por causas que le sean imputables, después de participar en tres procesos de promoción para tal efecto; y

c. en su expediente no cuente con méritos suficientes para la permanencia.

III. Remoción por incurrir en responsabilidad en el desempeño de las funciones o incumplimiento de sus deberes.

Artículo 45.

1. La separación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, por las causas a que se refiere el inciso a), de la fracción II, del artículo 46 de esta ley, se realizará como sigue:

a. El superior jerárquico deberá presentar queja fundada y motivada ante el Consejo de Profesionalización, en la cual deberá señalar el requisito de ingreso o permanencia que presuntamente haya sido incumplido por el servidor público de que se trate, adjuntando los documentos y demás pruebas que considere pertinentes;
b. El Consejo de Profesionalización notificará la queja al servidor público de que se trate y lo citará a una audiencia para que manifieste lo que a su derecho convenga, adjuntando los documentos y demás elementos probatorios que estime procedentes;
c. El superior jerárquico podrá suspender al servidor público hasta en tanto el Consejo de Profesionalización resuelva lo conducente;
d. Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, el Consejo de Profesionalización resolverá sobre la queja respectiva, y
e. Contra la resolución del Consejo de Profesionalización no procederá recurso administrativo alguno. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá por superior jerárquico a los servidores públicos a que se refiere el artículo 72 de esta Ley.

Artículo 46.

1. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior será substanciado por los órganos auxiliares del Consejo de Gobierno, cuya integración, operación y funcionamiento se definirán en las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial.

CAPÍTULO VI

De los Procesos de Evaluación y Certificación de los Servidores Públicos

Artículo 47.

1. Los servidores públicos de la Fiscalía General de la República deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y demás normas aplicables.

2. El proceso de evaluación de control de confianza, constará de los exámenes siguientes:

a) Patrimonial y de entorno social;
b) Médico;
c) Psicométrico y psicológico;
d) Poligráfico;
e) Toxicológico, y
f) Los demás que establezcan las normas aplicables.

Artículo 48.

1. El proceso de evaluación del desempeño comprenderá el comportamiento, el cumplimiento en el ejercicio de las funciones y los demás aspectos que establezcan las normas aplicables.

Artículo 49.

1. Los procesos de evaluación a que se refieren los dos artículos anteriores tendrán por objeto comprobar que los servidores públicos de la Fiscalía General de la República dan debido cumplimiento a los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos.

Artículo 50.

1. El proceso de evaluación de competencias profesionales tiene por objeto determinar que los servidores públicos cuentan con los conocimientos, las habilidades, destrezas y aptitudes necesarios para desempeñar su función de forma eficiente, de conformidad con los estándares establecidos para ello.

Artículo 51.

1. El Fiscal General de la República, los subprocuradores, el Oficial Mayor y el Visitador General podrán requerir que cualquier servidor público se presente a las evaluaciones de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales cuando lo estimen pertinente, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Artículo 52.

1. Los exámenes del proceso de evaluación de control de confianza se valorarán en conjunto, salvo el examen toxicológico que se presentará y calificará por separado.

Artículo 53.

1. Los servidores públicos serán citados a la práctica de las evaluaciones correspondientes. En caso de no presentarse sin mediar causa justificada, se les tendrá por no aprobados.

Artículo 54.

1. Se considera información reservada la contenida en los expedientes y reportes de resultados derivados de los procesos de evaluación, salvo que deban ser presentados en procedimientos administrativos o judiciales.

Artículo 55.

1. Los miembros del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial que no cumplan con los requisitos de permanencia en los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño o de competencias profesionales, dejarán

de prestar sus servicios en la Fiscalía General de la República, previo desahogo del procedimiento que establece el artículo 47 de esta ley.

2. Los demás servidores públicos de la Fiscalía General de la República que no aprueben los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño o de competencias profesionales, dejarán de prestar sus servicios en la misma, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

3. Los resultados del proceso de evaluación de control de confianza, tratándose del personal de base a que se refiere la fracción II del artículo 13 de esta ley, podrán ser presentados ante la autoridad competente en los procedimientos de terminación del nombramiento que por tal motivo se inicien.

Artículo 56.

1. La Fiscalía General de la República contará con un centro de evaluación y control de confianza que tendrá a su cargo la aplicación, calificación y valoración de los procesos de evaluación de control de confianza y de competencias profesionales y ejercerá las facultades que determinen las normas aplicables.

2. En el ejercicio de sus funciones, el centro de evaluación y control de confianza de la Fiscalía General de la República podrá auxiliarse de las distintas unidades administrativas de la Fiscalía General de la República, así como de órganos desconcentrados y organismos descentralizados, y se sujetará a los criterios, normas, procedimientos técnicos y protocolos que se establezcan para tales efectos en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 57.

1. A quienes aprueben las evaluaciones de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales se les expedirá la certificación a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. La certificación a que se refiere el párrafo anterior deberá expedirse en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la conclusión del proceso

de certificación, a efecto de su registro. La certificación y el registro respectivo tendrán una vigencia de tres años.

3. Para efectos de revalidación de la certificación y el registro, seis meses antes de la expiración de su vigencia los servidores públicos de la Fiscalía General de la República deberán someterse a los procesos de evaluación respectivos. Será responsabilidad del titular del área de adscripción solicitar con oportunidad al centro de evaluación y control de confianza de la Fiscalía General de la República la programación de las evaluaciones correspondientes. En todo caso, el propio servidor público tendrá derecho a solicitar la programación de sus evaluaciones.

4. Ninguna persona podrá prestar sus servicios en la Fiscalía General de la República si no cuenta con la certificación vigente.

Artículo 58.

1. La Fiscalía General de la República, en términos de los acuerdos y convenios que se adopten en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otras disposiciones aplicables, podrá aplicar los procesos de evaluación a que se refiere este capítulo, a servidores públicos de otras instituciones.

CAPÍTULO VII

De los DERECHOS de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, los Agentes de la Policía Federal Ministerial y los Peritos

Artículo 59.

1. Los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los peritos tendrán los derechos siguientes:

a. Participar en los cursos de capacitación, actualización y especialización correspondientes, así como en aquellos que se acuerden con otras instituciones académicas, nacionales y del extranjero, que tengan relación con sus funciones, sin perder sus derechos y antigüedad, sujeto a las disposiciones presupuestales y a las necesidades del servicio;

b. Sugerir al Consejo de Profesionalización las medidas que estimen pertinentes para el mejoramiento del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, por conducto de sus representantes;
c. Percibir prestaciones acordes con las características de sus funciones y niveles de responsabilidad y riesgo en el desempeño de las mismas, de conformidad con el presupuesto de la Fiscalía General de la República y las normas aplicables;
d. Gozar de las prestaciones que establezcan la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás disposiciones aplicables, así como acceder a los servicios complementarios de seguridad social correspondientes que se establezcan mediante disposiciones reglamentarias;
e. Acceder al sistema de estímulos económicos y sociales, cuando su conducta y desempeño así lo ameriten y de acuerdo con las normas aplicables y las disponibilidades presupuestales;
f. Participar en los concursos de ascenso a que se convoque;
g. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos;
h. Recibir el equipo de trabajo sin costo alguno;
i. Recibir oportuna atención médica sin costo alguno, cuando sean lesionados en cumplimiento de su deber;
j. Gozar de los beneficios que establezcan las disposiciones aplicables una vez terminado de manera ordinaria el Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial;
k. Gozar de permisos y licencias sin goce de sueldo en términos de las disposiciones aplicables, y
l. Los demás que establezcan las disposiciones aplicables.

2. Los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los peritos de designación especial, así como, en lo conducente, los oficiales ministeriales, participarán en los programas de capacitación, actualización y especialización, y gozarán de los derechos a que se refiere este artículo, salvo los contenidos en las fracciones II, VI y X.

CAPÍTULO VIII

De las CAUSAS de Responsabilidad de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, los Agentes de la Policía Federal Ministerial y los Peritos

Artículo 60.

1. Son causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y, en lo conducente, de los oficiales ministeriales y peritos:

a. No cumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público de la Federación

b. Realizar o encubrir conductas que atenten contra la autonomía del Ministerio Público de la Federación, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos, comisiones o cualquier otra acción que genere o implique subordinación indebida respecto de alguna persona o autoridad;

c. Distraer de su objeto, para uso propio o ajeno, el equipo, elementos materiales o bienes asegurados bajo su custodia o de la Fiscalía General de la República;

d. No solicitar los dictámenes periciales correspondientes o abstenerse de realizarlos;

e. No trabar el aseguramiento de bienes, objetos, instrumentos o productos de delito y no solicitar el decomiso cuando así proceda en los términos que establezcan las leyes penales;

f. Omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto;

g. Abstenerse de ejercitar la acción de extinción de dominio en los casos y en los términos que establezca la ley de la materia;

h. Abstenerse de promover en la vía incidental ante la autoridad judicial el reconocimiento de la calidad de víctima u ofendido en términos de las disposiciones aplicables

i. Negar indebidamente a la víctima u ofendido el acceso a los fondos contemplados en ley cuando tenga derecho a ello;

j. No registrar la detención conforme a las disposiciones aplicables o abstenerse de actualizar el registro correspondiente;
k. Incumplir cualquiera de las obligaciones a que se refieren los artículos 63 y 64, y
l. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables.

Artículo 61.

1. Son obligaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y, en lo conducente de los oficiales ministeriales y peritos, para salvaguardar la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones, las siguientes:

a. Conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos;
b. Prestar auxilio a las personas que hayan sido víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos, cuando resulte procedente. Su actuación deberá ser congruente, oportuna y proporcional al hecho;
c. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo;
d. Impedir, por los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito de sus atribuciones, que se infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física o psicológica u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes. Los servidores públicos que tengan conocimiento de ello deberán denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente;
e. Abstenerse de ejercer empleo, cargo, comisión o cualquiera de las actividades a que se refiere el artículo 65 de esta ley;
f. Observar un trato respetuoso con todas las personas debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones

o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;

g. Desempeñar su función sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción;

h. Abstenerse de ordenar o realizar la detención o retención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los ordenamientos legales aplicables;

i. Velar por la vida e integridad física y psicológica de las personas detenidas o puestas a su disposición;

j. Participar en operativos de coordinación con otras instituciones de seguridad pública, así como brindarles el apoyo que conforme a derecho proceda;

k. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos, siempre y cuando sean conforme a derecho, y cumplir con todas sus obligaciones legales;

l. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan;

m. Abstenerse en el desempeño de sus funciones de auxiliarse por personas no autorizadas por las disposiciones aplicables;

n. Usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el cumplimiento de sus funciones, así como conservarlo;

o. Abstenerse de abandonar las funciones, comisión o servicio que tengan encomendado, sin causa justificada;

p. Someterse a los procesos de evaluación en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables, y

q. Las demás que se establezcan en las disposiciones aplicables.

Artículo 62.

1. Además de lo señalado en el artículo anterior, los agentes de la Policía Federal Ministerial tendrán las obligaciones siguientes:

a. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que realice;
b. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada en el cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro;
c. Entregar la información que le sea solicitada por otras instituciones de Seguridad Pública, en términos de las leyes correspondientes;
d. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y demás disposiciones aplicables;
e. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales que le sean asignados, así como aquéllos de los que tengan conocimiento con motivo de sus funciones y en el marco de sus facultades;
f. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial;
g. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos, o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho;
h. Responder sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, respetando la línea de mando;
i. Hacer uso de la fuerza de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los derechos humanos, manteniéndose dentro de los límites que se marcan en los procedimientos establecidos en los manuales respectivos, con el fin de preservar la vida y la integridad de las personas, así como mantener y restablecer el orden y la paz públicos, evitando en la medida de lo posible el uso de la fuerza letal;
j. Permanecer en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en que se le indique, en cumplimiento del arresto que les sea impuesto de conformidad con las normas aplicables;
k. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, o prostíbulos u otros centros de este tipo, si no media orden

expresa para el desempeño de sus funciones o en casos de flagrancia en la comisión de delitos;

l. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio, y

m. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Artículo 63.

1. Los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial, los oficiales ministeriales y peritos, no podrán:

a. Desempeñar empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, en los gobiernos de la Ciudad de México o de los estados integrantes de la Federación y municipios, así como trabajos o servicios en instituciones privadas, salvo los de carácter docente y aquellos que autorice la Fiscalía General de la República, siempre y cuando no sean incompatibles con sus funciones en la misma;

b. Ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina o concubinario, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o de su adoptante o adoptado;

c. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el carácter de heredero o legatario, o se trate de sus ascendientes, descendientes, hermanos, adoptante o adoptado, y

d. Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, síndico, administrador, interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista, árbitro o arbitrador.

Artículo 64.

1. Las quejas que se presenten por presuntas irregularidades o por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere este capítulo, serán tramitadas

por la Visitaduría General, que practicará la visita o iniciará la investigación correspondientes y, en su caso, dará la vista a que haya lugar.

CAPÍTULO IX

De las SANCIONES de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, los Agentes de la Policía Federal Ministerial y los Peritos

Artículo 65.

1. Las sanciones por incurrir en las causas de responsabilidad a que se refiere el artículo 62 de esta ley, serán:

a. Amonestación pública o privada;
b. Suspensión;
c. Arresto, para agentes de la Policía Federal Ministerial, o
d. Remoción.

Artículo 66.

1. La amonestación es el acto mediante el cual se le llama la atención al servidor público por la falta o faltas no graves cometidas en el desempeño de sus funciones y lo conmina a rectificar su conducta. La amonestación podrá ser pública o privada dependiendo de las circunstancias específicas de la falta y, en ambos casos, se comunicará por escrito al infractor, en cuyo expediente personal se archivará una copia de la misma. Las amonestaciones serán consideradas en los procesos de ascenso del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial.

2. La acumulación de tres amonestaciones dará lugar a la suspensión.

Artículo 67.

1. La suspensión es la interrupción temporal de los efectos del nombramiento, la cual podrá ser hasta por treinta días a juicio del superior jerárquico, cuando la falta cometida no amerite remoción.

Artículo 68.

Procederá la remoción en los casos de infracciones graves a juicio de la Visitaduría General. En todo caso, se impondrá la remoción en los casos a que se refieren las fracciones IV, V, VII, VIII, XII, XIII, XV y XVI del artículo 63, y las fracciones V, VII, IX y XI del artículo 64 de esta ley.

Artículo 69.

1. El arresto es la prohibición de abandonar el lugar de trabajo durante un tiempo determinado y podrá ser hasta por quince días.

2. La imposición de esta sanción corresponde al titular de la unidad administrativa de la Policía Federal Ministerial en que esté adscrito el infractor.

Artículo 70.

1. Las sanciones a que se refiere el artículo 67, fracciones I y II, del presente ordenamiento, podrán ser impuestas por:

a. El Consejo de Gobierno
b. El Fiscal General de la República;
c. Los Fiscales Especializados;
d. El Oficial Mayor;
e. El Visitador General;

2. Corresponde a la Visitaduría General imponer la remoción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 74.

Artículo 71.

1. Las sanciones se impondrán tomando en cuenta los elementos siguientes:

a. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra;
b. La necesidad de suprimir prácticas que vulneren el funcionamiento de la Fiscalía General de la República;
c. La reincidencia del responsable;
d. El nivel jerárquico, el grado académico y la antigüedad en el servicio;

e. Las circunstancias y medios de ejecución;
f. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público, y
g. El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de obligaciones.

Artículo 72.

1. La determinación de la remoción se hará conforme al procedimiento siguiente:

a. Se iniciará de oficio, por queja presentada por los servidores públicos a que se refiere el artículo 72 de esta ley, ante la Visitaduría General, o por vista que realicen los servidores públicos adscritos a dicha unidad administrativa, en el ejercicio de sus atribuciones.
b. Las autoridades de cualquier orden de gobierno que participen en la averiguación previa, podrán presentar queja ante la Visitaduría General, contra servidores públicos que comentan infracciones graves. En estos casos se seguirá el procedimiento establecido en este capítulo;
c. Las quejas o vistas que se formulen deberán estar apoyadas en elementos probatorios suficientes;
d. Se enviará una copia de la queja o de la vista y sus anexos al servidor público, para que en un término de quince días hábiles formule un informe sobre los hechos y rinda las pruebas correspondientes. El informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la queja o en la vista, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán confesados los hechos de la queja o en la vista sobre los cuales el denunciado no suscitare explícitamente controversia, salvo prueba en contrario.
e. Se citará al servidor público a una audiencia en la que se desahogarán las pruebas respectivas, si las hubiere, y se recibirán sus alegatos, por sí o por medio de su defensor;
f. Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, la Visitaduría General resolverá sobre la inexistencia de la responsabilidad o impondrá

al responsable la sanción de remoción. La resolución se notificará al interesado;

g. Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para resolver o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad a cargo del presunto responsable o de otras personas, se podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar la celebración de otra u otras audiencias, y

h. En cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la audiencia, los servidores públicos a que se refiere el artículo 72 de esta ley podrán determinar la suspensión temporal del presunto responsable, siempre que a su juicio así convenga para la conducción o continuación de las investigaciones, la cual cesará si así lo resuelve la Visitaduría General, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere este artículo. La suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar expresamente en la determinación de la misma.

i. Si el servidor público suspendido conforme a esta fracción no resultare responsable será restituido en el goce de sus derechos.

j. La unidad administrativa de la Visitaduría General que instruya el procedimiento a que se refiere este artículo deberá ser distinta de aquélla que presente la queja o practique la visita.

Artículo 73.

1. Cuando los servidores públicos a que se refiere la fracción III del artículo 13 de esta ley incurran en las infracciones a que se refiere el artículo 62, la Visitaduría General, previo desahogo del procedimiento que se establece en el artículo 74, podrá imponer como sanción la cancelación del certificado del servidor público de que se trate, independientemente de la terminación de los efectos de su nombramiento, de conformidad con las normas aplicables.

2. La cancelación del certificado deberá registrarse en los términos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 74.

1. En contra de las resoluciones por las que se imponga alguna de las sanciones previstas en el artículo 67 del presente ordenamiento, se podrá interponer recurso de rectificación ante el Consejo de Profesionalización, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución.

2. En el escrito correspondiente se expresarán los agravios y se aportarán las pruebas que se estimen pertinentes.

3. El recurso se resolverá en la siguiente sesión del Consejo de Profesionalización, y la resolución se agregará al expediente u hoja de servicio correspondiente.

Artículo 75.

1. Para todo lo no dispuesto en el presente capítulo o en el reglamento de esta ley, serán aplicables supletoriamente las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

CAPÍTULO X

Disposiciones Finales

Artículo 76.

1. Los efectos de la certificación a que se refiere el artículo 59, respecto del personal de la Fiscalía General de la República que esté sujeto a proceso penal como probable responsable de delito doloso, o culposo calificado como grave por la ley, serán suspendidos desde que se dicte el auto de plazo constitucional respectivo y hasta que se emita sentencia ejecutoriada.

2. En caso de que ésta fuese condenatoria, el certificado será cancelado y se harán las anotaciones correspondientes en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.

Artículo 77.

1. Los servidores públicos de la Fiscalía General de la República y en general toda persona que desempeñe un cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza en

la misma, están sujetos al régimen de responsabilidades a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de conformidad con lo dispuesto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 78.

1. El Órgano Interno de Control en la Fiscalía General de la República, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, ejercerá sus atribuciones conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas que rigen la actuación de esa Secretaría de Estado.

2. Las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos de la Fiscalía General de la República que no encuadren en el régimen especial previsto en los Capítulos VIII y IX de esta ley, serán del conocimiento del Órgano Interno de Control en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 79.

1. En el ejercicio de sus funciones, los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial, los visitadores, los oficiales ministeriales y los peritos observarán las obligaciones inherentes a su calidad de servidores públicos y actuarán con la diligencia necesaria para la pronta, completa y debida procuración de justicia.

Artículo 80.

1. Se podrán imponer a los servidores públicos de la Fiscalía General de la República por las faltas en que incurran en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las sanciones disciplinarias previstas en los ordenamientos legales en materia de responsabilidades de los servidores públicos, mediante el procedimiento que en los mismos se establezcan.

2. En los casos en que el órgano interno de control determine las sanciones de destitución o inhabilitación, se entenderá que conllevan la cancelación de la certificación a que se refiere el artículo 59 de esta ley. La cancelación de la

certificación deberá registrarse en los términos la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 81.

1. Los agentes del Ministerio Público de la Federación no son recusables, pero bajo su más estricta responsabilidad deben excusarse del conocimiento de los negocios en que intervengan, cuando exista alguna de las causas de impedimento que la ley señala en el caso de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de circuito y jueces de distrito y las demás disposiciones aplicables, haciéndolo del conocimiento por escrito de su superior inmediato.

2. Si el agente del Ministerio Público de la Federación interviene en un asunto aun cuando no deba hacerlo, será sancionado conforme con las disposiciones de esta ley y demás que resulten aplicables.

Artículo 82.

1. La desobediencia o resistencia a las órdenes legalmente fundadas del Ministerio Público de la Federación dará lugar al empleo de medidas de apremio o a la imposición de correcciones disciplinarias, según sea el caso, en los términos que previenen las normas aplicables.

2. Cuando la desobediencia o resistencia constituyan delito, se iniciará la carpeta de investigación respectiva.

Artículo 83.

1. Cuando se impute la comisión de un delito al Fiscal General de la República, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la ley en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se procederá de la siguiente manera:

a. Se dará aviso al Senado de la República quien solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación le proponga una terna para ocupar el cargo de Fiscal Independiente.

b. La Corte deberá presentar la terna en un plazo no mayor de tres días naturales contados a partir de la entrada de la solicitud.

c. El Senado deberá designar por mayoría en un plazo no mayor a dos días naturales contados a partir de que reciba la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Fiscal Independiente, y procederá a tomarle la protesta de Ley.

d. El Fiscal Independiente durarán en su encargo hasta que se considere Cosa juzgada o se determine el sobreseimiento de la causa.

e. El Fiscal Independiente conocerá de la denuncia y se hará cargo de la carpeta de investigación, y

f. Resolverá sobre el inicio del procedimiento para la declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados.

2. Determinada la remoción del fuero constitucional y la destitución del Fiscal General, el Fiscal Independiente continuará todas las diligencias correspondientes al Proceso Penal hasta alcanzar la sentencia definitiva ante los órganos jurisdiccionales competentes.

Artículo 84.

1. Los agentes del Ministerio Público, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los peritos, del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia que establezcan las leyes vigentes o si incurren en alguna causa de responsabilidad en el desempeño de sus funciones.

2. Si la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, la Fiscalía General de la República estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones, sin que proceda en caso alguno la reincorporación al servicio.

3. La indemnización consistirá en:

a. Veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados, y

b. Tres meses de salario base.

3. En los casos en que el servidor público separado se desista de la acción de que se trate, en cualquier etapa del procedimiento y hasta antes de que se dicte resolución definitiva, Fiscalía General de la República podrá cubrir la indemnización que proceda de conformidad con las normas aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General.

SEGUNDO. Para los efectos de esta Ley se entenderá en cualquier otra disposición legal de carácter Federal o Local, que diga Procuraduría General de la República y Procurador General de la República como Fiscalía General de la República y Fiscal General de la República respectivamente.

TERCERO. La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

79

PRESIDENCIA DEL SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Zepeda Hernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

2) 25-09-2018
Cámara de Senadores.
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
Presentada por la Sen. Olga María del Carmen Sánchez Cordero (MORENA).
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.
Diario de los Debates 25 de septiembre de 2018.

El siguiente punto del Orden del Día es la presentación de iniciativas.

En una primera ronda, tiene el uso de la palabra la Senadora Olga Sánchez Cordero, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto, con el aval del grupo parlamentario del Partido Morena, por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

(Presentada por la Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, a nombre propio y de los Senadores Ricardo Monreal Ávila y Julio Menchaca Salazar, con aval del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Con su venia, señor Presidente. Honorable Cámara de Senadores, muy buenos días a todos.

El día de hoy presentamos a esta Soberanía el producto final de muchos días, horas de trabajo que han empeñado tanto legisladores federales como miembro del equipo de transición del Presidente Electo, así también como colectivos de la sociedad civil organizada y representantes de la Academia.

Quiero mencionar, entre otros, al señor Senador y coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, al Senador Julio Menchaca, a la Senadora Malu Micher, a la Diputada Tatiana Clouthier, al Diputado Zoé Robledo, al Diputado Mario Delgado, a la Diputada Rocío Barrera, así como a un equipo de académicos del CIDE, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de varios colectivos de la sociedad civil, así como también de el doctor Santiago Nieto.

Es fundamental para el desarrollo democrático de nuestro país, contar con una Fiscalía autónoma, que destierre, de una vez por todas, los vicios que han sido distintivos de la actual Procuraduría.

Los principios rectores de los que adolecía la Procuraduría General de la República y que han sido una exigencia de las víctimas y la sociedad civil son: autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, accesibilidad, debida diligencia, imparcialidad. Y estos serán los ejes rectores de la nueva Fiscalía.

A diferencia del esquema actual de trabajo de la Procuraduría General de la República en la cual no se tienen claros los objetivos institucionales y su actuación ha sido opaca; será obligación del Fiscal General de la República presentar, al inicio de su gestión, a esta Soberanía, a este Senado de la República y a la sociedad en general, un plan de persecución penal cuyas directrices serán:

Orientar a las atribuciones institucionales, considerando las prioridades nacionales establecidas en la política criminal.

Analizar la situación de la incidencia delictiva relacionada con los fenómenos criminales, metas de corto, de mediano y de largo plazo, priorizando las políticas de atención a víctimas.

Los retos que enfrenta nuestro país en materia de procuración de justicia, serán resueltos en la medida en la que todos los poderes del Estado y la sociedad civil colaboremos juntos, es por esta razón que a través del Consejo Técnico, que estará integrado por cinco ciudadanos expertos en procuración de justicia, en derecho penal, en fenómenos delictivos, entre otras disciplinas.

Y en ciencias penales, la sociedad civil organizada podrá dar seguimiento y emitir recomendaciones públicas sobre el contenido e implementación del Plan de Persecución Penal que presente el Fiscal General, así como los programas anuales de trabajo, a efecto de evaluar su implementación.

La Nación ya no tolera más indiferencia ni negligencia en esta institución sumamente sensible para la República, que es la Procuraduría de Justicia.

Una novedad que se encuentra en la iniciativa que hoy presentamos, es la flexibilidad en la investigación y en la persecución penal.

Es decir, se eliminan, de una vez por todas, la rigidez con la que se desarrollan actualmente las investigaciones, dotando a los equipos de investigación de recursos humanos multidisciplinarios, atendiendo al fenómeno delictivo investigado.

Es así que la nueva visión que tenemos es sobre la necesidad que tiene la Fiscalía de adaptarse a los fenómenos delictivos con rapidez y con la celeridad que se requieren. Por eso se propone la creación de equipos ordinarios de investigación y litigación, además de equipos mixtos.

Además, cada uno de los equipos contará con una unidad de análisis estratégico y de contexto que se encargará de la identificación de patrones de actuación reiterada, sistemática o generalizada sobre ciertas estructuras o fenómenos criminales.

Es preocupante que, como lo ha afirmado el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en el caso lamentable de los jóvenes de Ayotzinapa, que las investigaciones de la Procuraduría General de la República, y cito textual la sentencia del Tribunal: “No fueron independientes ni imparciales, y carecen de soporte probatorio”.

Más allá de los alcances constitucionales de la resolución dictada por el Tribunal Colegiado, lo cierto es que no se informó sobre hechos que ya conocíamos todos los ciudadanos y que por años distintos organismos internacionales nos lo habían dicho.

Lo novedoso de esta sentencia es que, por primera vez, un órgano jurisdiccional del Estado mexicano lo ha admitido.

A través de esta ley que presentamos el día de hoy, de la Fiscalía General, el Estado mexicano reitera a la comunidad internacional lo que nuestro Presidente Electo ha subrayado: "Nos encontramos dispuestos a colaborar con la comunidad internacional y sus organismos sin violentar la soberanía nacional, pero atendiendo a los derechos de las víctimas y de los ofendidos".

Por último, insisto, que esta nueva ley orgánica busca garantizar los derechos fundamentales de las víctimas golpeados por esta violencia brutal que afecta a nuestro país. Las aseguraremos, el acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la garantía de no repetición.

Señoras y señores Senadores, estas fiscalías también contemplan, por primera vez en la historia, fiscalías especializadas en niños, niñas y adolescentes y, por supuesto, la perspectiva de género está transversalmente orientada en toda la Ley de Fiscalía General.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A CARGO DE SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Senador Ricardo Monreal Ávila, Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero, Senador Julio Menchaca Salazar, a nombre de las senadoras y los senadores integrantes del **Grupo Parlamentario de MORENA**, en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, párrafos 1, 2 y 3, 169, 171, fracción I, y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente **INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO POR LA QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, tomando en cuenta la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es claro que uno de los problemas más severos –social y económicamente hablando– en los últimos años para México ha sido el aumento desproporcionado en los índices en materia de inseguridad, hecho que le ha impedido a la población acceder a las suficientes condiciones de seguridad para disfrutar plenamente su libertad, posesiones, propiedades o incluso derechos básicos.

La paz que relativamente se ha conseguido que se goce en algunas entidades federativas es atacada constantemente por la enorme cantidad de delitos que se cometen en regiones vecinas, encerrando y separando el contacto entre miles de familias mexicanas.

La delincuencia organizada, la corrupción o incluso delitos menores han permeado todas las esferas de nuestra sociedad, y en algunos momentos han significado una pérdida significativa de control por parte del Estado, provocando con ello la inestabilidad que vivimos actualmente.

Ante una fuerte violencia como la que vivimos se fomenta una cultura individualista que debilita la solidaridad y la comunicación entre la ciudadanía y su Gobierno. Se propicia además, la segregación residencial, se favorece la emergencia de la marginalidad en los estratos bajos urbanos, se limita el acceso a la educación y la salud y se contribuye al riesgo de enfermedades tan graves para los servicios de salud, como hipertensión, estrés u obesidad.

Respecto a lo anterior, baste una anotación sobre casos documentados por personas expertas, quienes señalan que la inseguridad es quizá el factor más importante para la baja producción empresarial y, por lo tanto, de la competitividad, así como la razón de que muchas empresas extranjeras no inviertan en el país.

En el tema de salud, las consultas por casos de estrés aumentan hasta en un 40 %, ante una experiencia de inseguridad, y de allí se desprenden efectos psicosomáticos, que van desde contracturas musculares hasta taquicardia severa.

Lo anterior no es menor, ante situaciones como aquellas que se desprendieron de la mal llamada *Guerra contra el narcotráfico*, y que ya se han clasificado entre los sucesos delictivos más violentos, sólo por debajo de países internacionalmente reconocidos por vivir conflictos bélicos cada año, como Siria, Afganistán o Iraq.

Por si fuera poco, de acuerdo con datos públicos de investigadores pertenecientes a prestigiosas universidades del país, este tipo de inseguridad ha crecido desde el año 2000 a más del 100 % anual, dando como resultado una cifra alarmante de más de 200 mil asesinatos.

Incluso cifras del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que ocurren 114 robos diarios en todo el país, lo que equivale a un incremento superior al 70 % en tan solo dos años, y en algunos estados esta tendencia reporta un incremento del 167 % anual. Además, cabe mencionar que seis de cada diez robos, en el último año, fueron violentos.

Específicamente respecto a los feminicidios, México vive uno de sus periodos más oscuros. Datos de la Secretaría de Gobernación revelan la comisión de más de siete asesinatos por día, y más de 400 víctimas, sólo durante los primeros meses del año, y en tan solo una década, han sido 23 mil las mujeres asesinadas. Lo peor es que sólo en el 10 % de los casos se ha dictado una sentencia condenatoria.

Del total de los feminicidios, un alarmante 40 % ha sido en contra de mujeres menores de 30 años; pero otro 40 %, el del total de las mujeres de entre 15 y 17 años, reporta haber sufrido algún tipo de violencia sexual en su vida.

Por estas razones, el Comité de la Organización de las Naciones Unidas ha instado en diversas ocasiones al Gobierno de México a priorizar y legislar adecuadamente en todo el territorio los asesinatos contra mujeres, además de que se aconseja la implementación de políticas para mitigar la trata y la explotación sexual.

En el tema del secuestro, fueron reportados más de 10,000 casos en seis años. Organizaciones señalan que se presentan 170 eventos cada mes, lo que significa que ocurren 40 de ellos a la semana. Junto a este tema hay que considerar también el hecho de que existen más de 34,000 personas desaparecidas, de las cuales 16,000 son menores de 29 años.

La enorme mayoría de estos casos sigue vigente, lo que ha provocado que cientos de familias no encuentren una respuesta o conclusión para que se conozca la verdad sobre lo sucedido a sus parientes. Son grupos que no han sido escuchados y a cuyas demandas básicas de interacción con la Procuraduría o con el propio caso no se ha dado respuesta.

Respecto de la tortura, cabe señalar que aún no existen cifras específicas que indiquen a detalle el nivel de problemática real en el que nos encontramos; no obstante, sabemos, por ejemplo, que el 57 % de la población penitenciaria informó haber sufrido algún tipo de violencia física por parte de algún elemento policiaco; conocemos también que existen cuatro mil investigaciones reconocidas en curso, y que el 80 % de los presuntos responsables detenidos en relación con el caso de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa presentan lesiones físicas.

Así, cuando observamos todos los hechos de los que hemos dado cuenta con anterioridad o incluso cuando analizamos las cifras que tanto el Gobierno como organismos de la sociedad civil han presentado, no son de extrañar, entonces, los bajos niveles de percepción de seguridad en los que la comunidad internacional nos ha catalogado a lo largo de diez años consecutivos.

Igarapé Institute, en su estudio *Seguridad ciudadana en América latina: Hechos y cifras*, reveló que México se encuentra en el segundo lugar de países en los que se cometieron más homicidios en 2017; la organización Semáforo Delictivo calificó a nuestro país como el peor en materia de seguridad pública, y la Universidad de Uppsala, en Suecia, ubica a nuestra nación dentro de los primeros 10 lugares con mayores conflictos bélicos a escala mundial, por mencionar sólo algunos ejemplos.

Sin embargo, la delincuencia es tan solo uno de los problemas que se viven en materia de seguridad pública, otro más y uno de los más importantes, se refiere al propio organismo encargado de la procuración de justicia en el Estado mexicano, un sistema que se encuentra en los niveles más bajos de confianza respecto al total de nuestras instituciones.

Actualmente, el 75 % de la población percibe que su ciudad es insegura, en mayor parte a causa del nivel de confianza en las autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia; el 77 % de la población considera que la Policía, como organismo, es altamente corrupto. No es de extrañar, pues, que la extorsión siga siendo el segundo delito más frecuente junto con el robo.

Por esa misma razón, uno de cada diez delitos que se denuncian, solamente el 4 % terminan en una sentencia condenatoria. Sabemos que existen diversas razones por las que las y los mexicanos no ejercen su derecho a la justicia, pero los más preocupantes son que para la población existen procedimientos complicados, desconfianza en los elementos de seguridad pública y miedo a represalias ante una institución sobrepasada por los delincuentes.

A partir de la estadística que provee el Poder Judicial de la Federación en su informe *Operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Poder Judicial de la Federación*, se desprende que desde noviembre de 2014 hasta febrero de 2017 se iniciaron 10,571 causas penales, de las cuales el 52 % llegaron con detenido, y las que fueron sin detenidos no fueron judicializadas de inmediato e incluso, en algunos casos, cuando procedía procesarlas, se puso en libertad al imputado.

Es importante señalar que en los últimos nueve años se incrementó hasta en un 60 % el presupuesto destinado a la seguridad pública en México y, como hemos señalado, la impunidad y desconfianza de la sociedad prevalecen.

Más de 5,000 millones de pesos se destinaron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 2,000 millones, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y para la procuración de justicia en México se asignaron 888 millones de pesos, en 2017, año que ahora se conoce como el más violento en nuestro país en los últimos 20 años.

Hay que recordar también el hecho de que, por cada 500 auditorías respecto al manejo de los recursos correspondientes a los subsidios en seguridad, derivan más de 4,000 recomendaciones.

De acuerdo con el diagnóstico que hemos realizado en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, una causa importante de esta situación no se debe sólo al incremento desmedido del presupuesto y su mal ejercicio, sino, además, a una institución desgastada que labora a través de una norma atrasada, sobrerregulada y que ha probado llegar finalmente a su vigencia.

Baste mencionar que la figura del Ministerio Público, presidido por un procurador general, cuyos funcionarios serían nombrados y removidos libremente por el Ejecutivo, al que además se le atribuyó el monopolio de la acción penal, proviene sin modificación desde la Constitución de 1917.

De hecho, los principios jurídicos con los que hemos venido operando son atrasados y no han sido efectivos para enfrentar esta terrible situación que viven todos los mexicanos y las mexicanas. Urge la construcción de una nueva organización de la institución encargada de la seguridad pública, que incluya un nuevo marco que garantice una justicia efectiva.

No podemos dejar de trabajar a favor de la población y sus derechos. Es nuestra obligación como Gobierno velar por que se cumplan cabalmente los derechos consagrados por nuestra Carta Magna, y que ningún delito quede impune, sobre todo por falta de profesionalismo o herramientas actualizadas para los servidores públicos.

La seguridad pública es uno de los derechos más importantes que sustentan el funcionamiento de la sociedad, reconocida como tal, históricamente, por académicos y profesionales de la política. Por lo mismo, se asentó su acceso en los artículos 16, 21, 29, 89, fracción VI, 129 y 133, de la Constitución, así como 2, 3, 5, 9, 10, 13 y 15, de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que finalmente se tradujo que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la libertad, orden y paz pública, como condiciones imprescindibles para gozar de las garantías que la Constitución reconoce a las y los gobernados.

Consecuentemente, es imprescindible garantizar como bien de la comunidad la seguridad pública, y detener cualquier criterio que propicie la proliferación y fortalecimiento de fenómenos que atenten gravemente contra la estabilidad de nuestro Gobierno.

Esa omisión o actuación vulnera gravemente los derechos fundamentales consagrados en el Código Supremo y, por tanto, se nos exige establecer la defensa plena de todas las personas que viven y transitan en este país y reformar de manera integral el texto normativo para que se traduzca en mayor seguridad para las y los gobernados.

Ninguna acción es más importante ahora que la de garantizar que un nuevo instituto se enraíce en marcos legales con obligaciones y procedimientos claros para las autoridades en la materia. Baste mencionar que fueron precisamente estas razones por las que el Gobierno, en su momento, se vio en la necesidad de garantizar un nuevo sistema de justicia penal que derivó en la creación una Fiscalía nueva y autónoma que, sobre todo, corrigiera los rezagos de miles de casos y la falta de investigaciones profesionales.

El Congreso de la Unión discutió y aprobó este asunto, finalmente, en el proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, el 13 de diciembre de 2013, y fue publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 10 de febrero de 2014.

La mencionada reforma señaló:

> **Artículo 102.**
> **A.** El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

Hay que recordar que la autonomía es un atributo que protege la función del Fiscal en la investigación y persecución de los delitos, frente a influencias indebidas, tanto externas como internas. Constituye, además, una garantía específica protegida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, especialmente cuando las conductas antijurídicas calificadas como delitos constituyen, a su vez, graves violaciones a los derechos humanos.

No sólo es importante que la Fiscalía pueda actuar de manera independiente, sino también que su teoría del caso y líneas de acción no estén determinadas por presiones o injerencias ilegítimas externas, más allá de la prueba y lo que marca la ley.

Una Fiscalía autónoma podrá hacer frente a los intentos de influenciar sus decisiones acerca del curso de una investigación o el ejercicio de la acción penal, y no cederá a la pretensión de utilizar el poder punitivo del Estado para reprimir la protesta social legítima, o para desalentar los reclamos de minorías o grupos en situación de vulnerabilidad.

Además, la reforma incluyó otras propuestas que regulan al Ministerio Público y aluden a su titular en las vertientes de fondo que a continuación se sintetizan:

a) Autonomía constitucional: se estableció que el Ministerio Público se organizara en una Fiscalía General de la República, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios.

b) Facultades: se circunscriben las atribuciones del Ministerio Público a la materia penal, lo cual implica que dicha institución abandona otras funciones, como la de ser representante jurídico de la Federación y todo lo relacionado con la vigilancia de la constitucionalidad y la legalidad, lo cual pasará al ámbito de atribuciones de la dependencia del Ejecutivo federal que realiza la función de Consejero Jurídico del Gobierno.

c) Fiscal General: sustituye a la figura del Procurador General como cabeza de la institución, con las siguientes notas características:

I.- Procedimiento de designación: a partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República cuenta con veinte días para elaborar una lista de al menos diez candidatos, aprobada por dos terceras partes de las y los senadores presentes , la cual deberá turnar al Presidente de la República para que en el plazo de diez días elija una terna de entre la cual el Senado habrá de elegir al Fiscal General dentro de los 10 días siguientes, previa comparecencia de los candidatos y por mayoría calificada. Los casos de inactividad de alguno de los poderes se resuelven así:

- Si el Senado no envía la lista de diez candidatos al Presidente, éste enviará libremente al Senado una terna y designará provisionalmente a un Fiscal General que seguirá en funciones hasta que se realice la designación definitiva. El Fiscal Provisional designado por el Presidente podrá ser parte de la terna que el mismo envíe al Senado.

- Si el Senado no designa oportunamente al Fiscal General de entre la terna que el Presidente le remitió (sea la terna propuesta libremente por el Presidente o de entre los diez candidatos propuestos por el Senado), será el Ejecutivo federal el que hará la designación definitiva del Fiscal de entre los diez candidatos listados por el Senado o la terna de candidatos.

- Si el Ejecutivo no envía la terna de entre los diez candidatos listados por el Senado, éste designará al Fiscal General de entre esa lista de candidatos, en un plazo de diez días.

II.- Duración en el cargo: nueve años.

III.- Remoción: podrá ser removido por el Ejecutivo federal por causas graves, pero el Senado, por mayoría calificada, podrá objetar dicha remoción dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia sobre la remoción, se entenderá que no existe objeción. En periodos de receso, la Comisión Permanente convocará al Senado a sesión extraordinaria para designar al Fiscal u objetar su remoción.

Si bien el decreto del 10 de febrero de 2014 no obligó a establecer un plazo para legislar lo necesario, a fin de que se activara el inicio de la vigencia del nuevo marco constitucional aplicable al Ministerio Público de la Federación, el solo hecho de que después de tres años y medio el Poder Legislativo no haya podido procesar las normas secundarias de aquella reforma a la Ley Fundamental evidencia un retraso significativo para las reformas estructurales que requiere una sociedad hundida en la inseguridad.

Así entonces, se nos demanda de inmediato una revisión del esquema del marco normativo vigente, para transfórmalo de manera profunda, con base en la Constitución y las demandas de la población. Es necesario reformar el sistema de seguridad para instaurar un Estado de derecho y el urgente bienestar social.

No cerremos nuestros ojos ante un tema tan necesario que han exigido durante tanto tiempo diversos grupos sociales, partidos políticos y administración gubernamental. Nos corresponde a todos, ahora, participar en un proceso que establecerá la futura acción y defensa contra la delincuencia y el ejercicio de una institución.

En este tipo de asuntos se requiere de todos los actores del país y de una unidad que fortalezca la actuación del Estado frente a la delincuencia; no podemos permitir que colores determinen la demora del órgano jurisdiccional nuevo, pues mayor es la posibilidad de que las víctimas puedan resultar más afectada en sus garantías.

En estos momentos nada es más importante que luchar por todos y cada uno de los derechos de la población, en la que también están incluidos miles de menores de edad. Estos sujetos en indefensión deben tener las herramientas judiciales necesarias para poder gozar de la seguridad y de una vida plena a futuro.

Sobre todo, es una voluntad parlamentaria, por ser las y los legisladores en quienes recae la elaboración y aprobación de nuestras leyes y quienes se deben de encontrar profundamente conectados con las demandas ciudadanas, especialmente en un momento tan crítico como el que vive nuestro país.

Queda en nosotros, junto a la sociedad civil, vigilar que se proponga un nuevo órgano capaz de generar las condiciones jurídicas que se necesitan para poder

proporcionar resultados concretos, para promover el bienestar y la cohesión social y para que, finalmente, se logre recuperar la paz y la seguridad que tanto le hacen falta al país.

Queremos superar la profunda crisis institucional y articular una transición en la que concurran todas las fuerzas políticas, fortaleciendo un nuevo papel del Estado en la procuración de la seguridad pública, al mismo tiempo que se empodera el papel de la ciudadanía en los asuntos públicos y de decisión fundamental.

Por lo mismo y por todas las razones que hemos señalado con anterioridad, proponemos crear una ley que finalmente vele por las víctimas y cuide que no sean objeto de nuevas agresiones y nuevos delitos. Una ley que haga efectivo el derecho a denunciar los actos de violencia cometidos en su contra.

Con este tipo de propuestas abrimos una nueva agenda de avanzada, con base en los principios de libertad, igualdad sustantiva, justicia y el respeto irrestricto al Estado de derecho, que se constituye de la mano con la sociedad civil, formando alianzas y consensos.

Anteriormente, el modelo de investigación en México se caracterizaba por un agente del Ministerio Público muy activo en la conducción de las pesquisas: los agentes del MP eran responsables de identificar líneas de investigación e instruir a las policías para que recabaran evidencia que diera sustento a las líneas planteadas.

Así, la responsabilidad sobre el éxito de las investigaciones recaía directamente en el agente del Ministerio Público. Una vez integradas las investigaciones, se planteaba una acusación. A partir de este momento, el agente del Ministerio Público investigador era sustituido por otro agente del MP, encargado de litigar el caso.

Éste es el modelo tradicional tan criticado en el ámbito de la transición hacia el sistema acusatorio, pues los agentes del Ministerio Público deberían ser abogados mucho más concentrados en la construcción jurídica de las acusaciones y su defensa, que en el planteamiento y seguimiento de líneas de investigación.

Muchas organizaciones también sostienen que la separación de funciones entre investigación y litigio tiene efectos negativos sobre la calidad de las acusaciones y su defensa, y que se dificulta mucho identificar responsables.

Una transición completa al modelo acusatorio requiere modificar estos procedimientos; se requiere, sobre todo, transitar a un modelo de separación de funciones. La reforma nacional que proponemos sigue el ordenamiento constitucional y otorga autonomía a la nueva Fiscalía General de la República, con la tarea de investigar los hechos delictivos materia de su competencia. Además, y sobre todo, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, justicia y reparación integral.

Es importante que en esta nueva ley se señale que aún existen elementos que no pudieron ser aprovechados en su totalidad, debido a una restricción constitucional actual, una muy importante: la problemática de la falta de autonomía e independencia real, que se manifiesta en un mecanismo de designación y elección del Fiscal.

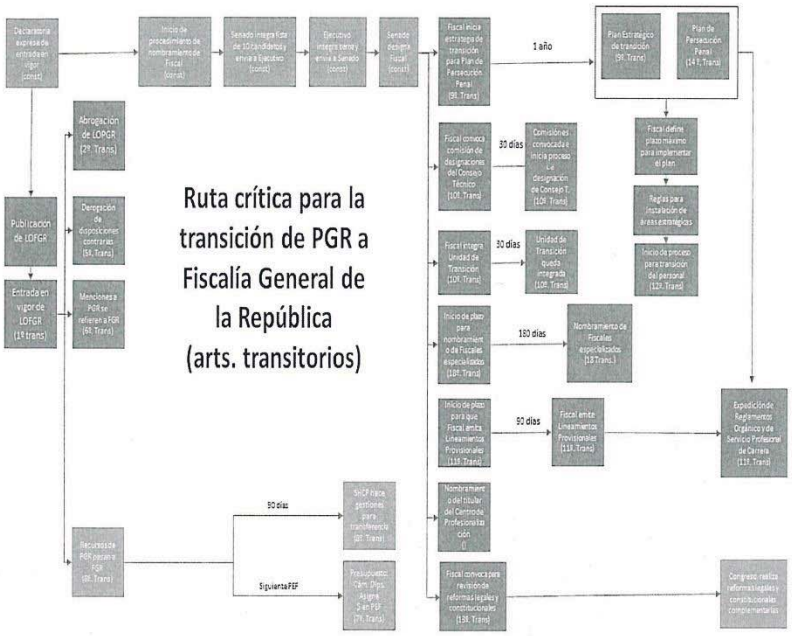
La reforma constitucional del 2014 requiere un desarrollo que incorpore principios mínimos que garanticen que el Fiscal General de México será autónomo, independiente, capaz de ejercer en forma responsable su poder, resistir la presión de actores políticos, generar confianza en la ciudadanía y guiarse por criterios de verdad y legalidad. Igualmente, se requiere garantizar que el perfil del titular de la Fiscalía satisfaga estándares internacionales en cuanto a transparencia y participación de la sociedad civil.

Se deben incorporar estándares de idoneidad para designar al Fiscal General, que sean distintos de los requisitos de elegibilidad que han prevalecido históricamente bajo el esquema de dependencia del Poder Ejecutivo: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en Derecho; y no haber sido condenado por delito doloso. Como se ve, el estándar para acceder al puesto es tan bajo, que no orienta por sí mismo para seleccionar a la mejor persona para una responsabilidad de tal envergadura, ni desde el punto de vista de sus atributos técnicos, ni desde la lógica de su autonomía e independencia política; de manera que se requiere desarrollar el contenido de requisitos sustantivos como el de la "buena reputación".

Esquema de transición

El siguiente diagrama explica gráficamente la temporalidad del esquema transitorio, legal y constitucional, de la entrada en vigor y transición de la Fiscalía General de la República que se propone. Se toma como inicio el día que entre en vigor la Ley Orgánica de la Fiscalía.

Incluye el proceso de nombramiento del Fiscal General, Comisión de Designaciones y los fiscales especializados; la emisión y vigencia de los lineamientos provisionales y su vigencia, en tanto se emiten los reglamentos orgánico y de servicio profesional de carrera; la integración de la Unidad de Transición y el plazo para la emisión del Plan Estratégico de Transición, así como del Plan de Persecución Penal; y también los plazos para las gestiones de suficiencia presupuestal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el plazo que tiene el Fiscal General para iniciar la convocatoria pública de revisión del marco constitucional y legal de la FGR.



Contenido de la reforma

El proyecto cumple con el objetivo de una ley orgánica para estructurar una institución que recibe un mandato constitucional orientado a prestar un servicio público, que en este caso es la persecución penal. Es así como el proyecto de ley se divide en tres grandes títulos que reglamentan todos los elementos que deben componer una Fiscalía General que atienda la criminalidad compleja del país.

Es importante mencionar, como punto fundamental, que todas las unidades orgánicas previstas en esta ley están diseñadas para que sus funciones potencien el desempeño de las facultades de investigación y ejercicio de la acción penal a cargo de los fiscales, con el objeto de cumplir con los fines institucionales.

Derivado de ese enfoque, se establecen con claridad los órganos a cargo de la función fiscal, siendo éstos:

- La Fiscalía General;
- La Fiscalía de Derechos Humanos, la Fiscalía de Delitos Electorales, la Fiscalía de Combate a la Corrupción; la Fiscalía de Asuntos Internos;
- Las fiscalías especializadas;
- La Coordinación de Investigación y Persecución Penal;

- Las y los fiscales asignados a la Coordinación General en el ámbito de su competencia, sustantiva; y,
- Las y los demás fiscales nombrados de acuerdo con el Servicio Profesional de Carrera establecido en la Ley y su Reglamento.

Esta modalidad clarifica los niveles de responsabilidad de quienes tienen a su cargo el ejercicio de la función fiscal, distinguiéndola de las unidades orgánicas de carácter administrativo o de apoyo.

Orgánicamente, se establecen las unidades de primer nivel que dependen directamente del Fiscal General, reservando a regulación reglamentaria el despliegue de la estructura de segundo y tercer nivel.

En el primer nivel de la estructura, se contemplan las unidades orgánicas necesarias para el cumplimiento de la misión de la Fiscalía General de la República, dejando previsto que el Fiscal General pueda crear otras que sean pertinentes conforme al Plan de Persecución Penal, sometiéndolo a opinión del Consejo Técnico, con la finalidad de no exceder unidades que dependan del titular de la institución.

Se faculta a la nueva Fiscalía a atraer casos del fuero común, garantizando principalmente que la investigación no se fragmente; así también, que ejerza la acción penal, adopte medidas de protección a favor de las víctimas, testigos u otros sujetos procesales; intervenga en el proceso de ejecución penal, en las acciones de extradición activa y pasiva y en las acciones constitucionales.

Además, se prevé que sea la propia víctima quien de ahora en adelante tenga el derecho de solicitar directamente a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción en determinados casos.

Para estas labores de la Fiscalía General de la República hemos establecido una estructura que incluye fiscalías especializadas marcadas por la ley, y se propone la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, además de coordinaciones, oficinas, órganos y consejos necesarios para garantizar el principio de eficacia y cumplimiento expedito de sus labores.

A la persona titular de la Fiscalía General le corresponderá dirigir y coordinar la política general de la Fiscalía General de la República, participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, autorizar los lineamientos y bases del servicio público de carrera de la Institución y determinar el Plan de Procuración de Justicia, entre otras responsabilidades.

Se propone también que se considere para su designación la opinión de la ciudadanía y tener buena reputación, la cual está compuesta por dos elementos: uno, objetivo, que se refiere a la calidad profesional relevante, trayectoria en el servicio público o en ejercicio de la actividad jurídica, y otro, subjetivo, que se refiere

a la honorabilidad, alta calidad técnica, compromiso con valores democráticos, independencia y reconocimiento social.

Aquí también se ha establecido una norma para que cualquier ciudadano participe en el proceso de designación, aportando información relevante sobre las y los aspirantes; expresando su apoyo u objeción contra candidaturas específicas.

Además, la estructura orgánica diseñada para el ejercicio de la función fiscal responde a criterios de flexibilidad y pertinencia para abordar los distintos fenómenos delictivos que afecten en mayor medida a la sociedad mexicana.

Al establecer el abordaje de fenómenos delictivos se rompe con el paradigma de la investigación caso a caso, que ha impedido que se aborde la lesión a los bienes jurídicos en toda su complejidad, lo cual ha generado la instalación de estructuras criminales y la impunidad.

Así, se propone también que cada fiscalía cuente con policías de investigación, analistas, auxiliares y peritos, así como con el personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones, y que finalmente no se interrumpa el debido proceso y se permita actuar con celeridad a la autoridad.

Se propone una Coordinación General en la cual recaerá la elaboración de las normas y políticas a las que se deberán sujetar las unidades y los órganos de la Fiscalía; atender personalmente las quejas, recomendaciones y solicitudes de los organismos públicos de derechos humanos, nacionales e internacionales; conocer y resolver sobre las solicitudes de atracción, coordinar, dirigir y canalizar el ejercicio de las atribuciones de las y los fiscales en materia internacional, y representar jurídicamente a la Fiscalía General ante las autoridades administrativas, judiciales y laborales.

La procuración de justicia ha tenido históricamente un grave déficit en la atención de la violencia de género. No es secreto que el Estado mexicano ha sido condenado sistemáticamente por organismos internacionales, por la falta de debida diligencia en las investigaciones relacionadas con delitos en contra de mujeres. Por ello, esta ley contempla la perspectiva de género como eje transversal de operación de toda la FGR. Proponemos un área de carácter administrativo que implementará las políticas públicas en la materia dentro de este órgano autónomo, y el compromiso de atender con un enfoque especializado los casos que involucren violencia contra las mujeres a través de equipos multidisciplinarios y unidades fiscales creadas para ese efecto.

Asimismo, se incluye dentro del organigrama la Coordinación de Investigaciones y Persecución Penal en la cual recaerá conducir legalmente la investigación y ejercer la acción penal en materia de delitos de delincuencia organizada y de secuestro, conforme a la Leyes en la materia. La Coordinación de Métodos de Investigación, por su parte, deberá analizar de forma estratégica los datos agregados del fenómeno criminal, la realización de estudios criminógenos y geodelictivos, así

como la información de contexto que se considere relevante para coadyuvar en la investigación.

La Oficina de Planeación y Administración será el área responsable de la administración y gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a través de las áreas correspondientes.

Se incluye igualmente un Órgano Interno de Control en quien recaerá iniciar y llevar a cabo los procedimientos de responsabilidades administrativas, la fiscalización de todos los ingresos y egresos de la institución y presentar las denuncias ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito.

El diseño institucional de la Fiscalía debe incorporar mecanismos eficientes para la sana rendición de cuentas de la institución, como tal, así como de sus servidores públicos en lo individual, a través de los cuales se promuevan la eficiencia y la integridad, y se combata la corrupción interna.

Consideramos necesario señalar el despliegue territorial de la operación sustantiva definida en las normas y políticas centrales que se llevará a cabo a través de unidades o equipos de investigación y litigación, los cuales se desintegrarán al cumplirse el objetivo establecido y respetarán como mando al jefe directo.

Respecto a las fiscalías especializadas, debemos mencionar que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos establecidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y en cualquier otro ordenamiento legal en la materia.

En los procesos de consulta popular y en el desarrollo de mecanismos de democracia directa, realizará despliegues ministeriales en el ámbito local y federal, con la finalidad de que los fiscales puedan atender directamente las denuncias de la ciudadanía.

La creación de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos responde a una deuda histórica para abordar de manera eficiente y eficaz las graves violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, la creación de esta Fiscalía no solamente es un compromiso político, sino que implica el reencauzamiento de las políticas de Estado que tornen operativos los compromisos que derivan del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esta Fiscalía se deben materializar las obligaciones con la sociedad mexicana producto de los instrumentos internacionales y las leyes generales en materia de tortura, desaparición forzada, trata de personas.

Además, la Fiscalía de Derechos Humanos estará a cargo de la conducción legal de la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal en violaciones a los

derechos humanos en el ámbito de sus competencias, independientemente de la clasificación jurídica de los hechos, que afecten la vida, la integridad y la libertad de las personas; cuando afecten gravemente a la sociedad o por motivo de la condición de vulnerabilidad de las víctimas o cuando existan falta de garantías para el ejercicio independiente de la investigación en las entidades federativas o cuando la participación de funcionarios o servidores públicos obstaculice la investigación. También conocerá este tipo de hechos cometidos por particulares, cuando así lo determine una ley especial.

Esta Fiscalía tendrá a su cargo las fiscalías de protección de los derechos humanos de las mujeres, de niñas, niños y adolescentes, de trata de personas, de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, de migrantes, de investigación de tortura y todas aquellas fiscalías órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General.

Y finalmente a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos le corresponderán las investigaciones y el ejercicio de la acción penal en delitos cometidos por personal adscrito a los órganos sustantivos y administrativos de la Fiscalía General en ejercicio de sus funciones.

Es importante mencionar, igualmente, que la Fiscalía General, a través de la Coordinación de Planeación y Administración, elaborará el plan que orientará las atribuciones institucionales, considerando las prioridades nacionales establecidas en la política criminal. Este plan contendrá una estrategia de atención y trámite a través del análisis de la situación de la incidencia delictiva relacionada con los fenómenos criminales; la orientación de los recursos humanos, materiales y financieros; la estrategia de despliegue territorial y la emisión de lineamientos operativos para la función fiscal.

Cabe mencionar, además, que esta ley introduce dos mecanismos ciudadanos novedosos, con el objetivo de fortalecer la legitimidad democrática de la Fiscalía General. En primer lugar, propone una Comisión de Designaciones, conformada por tres personas ciudadanas de reconocida honorabilidad y trayectoria, quienes estarán a cargo del nombramiento de las personas integrantes del Consejo Técnico de la Fiscalía.

Luego de acuerdos con grupos de defensa de víctimas, en esta Ley se proponen también elementos únicos que le permiten a la sociedad colaborar con la Fiscalía en asuntos que así lo requieran, uno de ellos son las comisiones especiales, un derecho del o la Fiscal General para solicitar, si así lo requiere, la colaboración de personas expertas para brindarle asistencia en asuntos graves, incluyendo aquellos que impliquen violaciones a derechos humanos.

No sólo eso, la Fiscalía General podrá incluir sus opiniones y resultados en la investigación y el ejercicio de la acción penal de los asuntos correspondientes.

Asimismo, se incluye el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación que garantice a las víctimas el ejercicio de sus derechos en forma presencial y a través de los medios electrónicos o digitales que les resulten más adecuados.

En todo el mundo, principalmente en México, grupos de personas que buscan una mejor vida se han convertido en migrantes, quienes han probado una enorme resistencia y compromiso con su familia y tienen el irrenunciable derecho a ser reconocidos por estándares internacionales y tienen derechos, aún y siempre, como ciudadanas y ciudadanos mexicanos.

Por lo mismo, el Estado mexicano debe asegurar los derechos de personas migrantes incluso fuera de nuestras fronteras nacionales. Durante años hemos tenido preocupación por las violaciones a los derechos humanos fuera del país, pero no tenemos procesos claros y al alcance para cientos de familias que se encuentran lejos y que desean acceder a servicios esenciales como el debido proceso legal.

Siendo así, consideramos fundamental esta reforma que da la cara y ayuda a garantizar la tranquilad de migrantes, al mismo tiempo que humaniza la Fiscalía y atiende la necesidad de integrar un instituto más activo y con procesos más ordenados.

La nueva ley introduce también un Consejo Técnico de la Fiscalía General de la República como un órgano ciudadano con cargo honorífico, especializado y de consulta que será integrado por cinco personas expertas en temas de procuración de justicia, investigación criminal y derechos humanos. Quienes integren el consejo durarán en su encargo cinco años, de forma escalonada.

Esta ley concibe al Consejo Técnico como un órgano complementario que permitirá cumplir con obligaciones de rendición de cuentas hacia la ciudadanía en temas prioritarios dentro de la Fiscalía, sin interferir en la operación cotidiana de ésta. Por ello, el Consejo tendrá como facultades primordiales opinar sobre el Plan de Persecución Penal y otros programas anuales de trabajo, llevando a cabo la importante función de dar seguimiento y emitir recomendaciones; opinar de forma previa sobre la creación de nuevas estructuras en la Fiscalía; conocer y emitir recomendaciones sobre el presupuesto de la misma; revisar y emitir recomendaciones sobre el servicio profesional de carrera y, entre otras funciones, aquellas que le permitirán opinar respecto al desempeño de la Fiscalía General.

De igual manera, se prevé que cualquier ciudadano o ciudadana participe en el proceso de designación, aportando información relevante sobre quienes aspiren a ser fiscales especializados; expresando su apoyo u objeción contra candidaturas específicas y asistiendo, proponiendo y formulando preguntas durante las comparecencias.

Un tema que hay que observar con especial cuidado es el hecho de incluir en esta nueva ley causas de remociones de las y los servidores públicos de la Fiscalía General. Quienes firmamos el presente Decreto creemos que, conforme a lo

dispuesto en la Carta Magna, se tiene la facultad de constituir una causa grave que da lugar a la revocación del mandato de tales personas servidoras públicas, ya que para un adecuado cumplimiento de los fines o el ejercicio de las funciones encomendadas a éstas se requiere que también sean responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.

Entendemos así que, para tal disposición señalada en esta ley, debe servir de fundamento al respectivo decreto revocatorio por causa grave, que deriva de lo ordenado en la Constitución; máxime que ello obedece a un interés público en beneficio de la institución y la sociedad.

Otro tema importante y único dentro de este nuevo marco legal es el hecho de que se crean nuevas unidades de investigación y litigio como órganos compuestos por equipos de investigación, las cuales se encargarán del desarrollo de las investigaciones y el ejercicio de la acción penal.

Tales unidades serán integradas por equipos de investigación, por peritos, Policía de Investigación, analistas y técnicos dirigidos con mando único de los fiscales y hasta por el tiempo que se les requiera.

Tomando en consideración que en gran medida la excelencia de la Fiscalía dependerá de las capacidades y aptitudes de las y los funcionarios que la integran, es que se estableció un título que establece las bases de un Servicio Profesional de Carrera como mecanismo de gobernanza institucional, que se encargue de la atracción de talento, desarrollo de capacidades y posibilidad de crecimiento horizontal y vertical en la institución, con base en criterios de mérito y permanencia.

De hecho, se señalan explícitamente como derechos del personal el desempeñar una carrera que se base en el mérito, en la superación constante y en tener estabilidad y contar con una remuneración adecuada, digna, irrenunciable y que corresponda a los servicios prestados en la Fiscalía.

Sobre todo, hay que señalar que se busca garantizar la estabilidad financiera de esta nueva institución al estipular en la ley que, en ningún caso, el presupuesto que se apruebe para la Fiscalía General será menor, en términos reales, que el asignado para el año fiscal inmediato anterior.

Por todo lo anterior, en ejercicio de las facultades que nos otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo Único. Se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

Capítulo I
Marco general de operación

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente Ley tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables.

Artículo 2. Fines institucionales

La Fiscalía General de la República tendrá como fines investigar los hechos delictivos en materia de su competencia; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad; disminuir la inseguridad; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad; reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.

Artículo 3. Principios rectores

La Fiscalía General regirá su actuación por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de niñez y adolescencia, accesibilidad, debida diligencia, imparcialidad y otros establecidos en la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y demás disposiciones aplicables.

En todos los casos deberán observarse los principios de equidad, igualdad sustantiva y no discriminación en razón de la condición étnica, migratoria, de género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencia, orientación o identidad sexual, estado civil o cualquier otra condición o motivo que atente contra la dignidad humana; o bien, tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4. Competencia

La Fiscalía General de la República tendrá las competencias señaladas en la Constitución, la presente Ley y las demás disposiciones aplicables.

La Fiscalía General de la República tendrá la facultad de atraer casos del fuero común conforme a las reglas de atracción establecidas en la Constitución, tratados internacionales y las leyes aplicables, garantizando que la investigación no se fragmente. En los casos de delitos que trasciendan el ámbito de una o más entidades federativas y cuando exista sentencia, resolución o pronunciamiento de un órgano u organismo previsto en tratado internacional.

La víctima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción mediante un escrito libre dirigido a la persona titular de la Fiscalía. La negativa de atracción podrá ser impugnada en los casos que disponga esta Ley o su Reglamento.

Artículo 5. Funciones de la Fiscalía General de la República

Corresponde a la Fiscalía General de la República:

I. Investigar y perseguir los delitos;
II. Ejercer la acción penal;
III. Procurar la reparación del daño de las víctimas;
IV. Adoptar y, en su caso, promover la adopción de medidas de protección a favor de las víctimas, testigos u otros sujetos procesales;
V. Intervenir en el proceso de ejecución penal;
VI. Intervenir en las acciones de extradición activa y pasiva;
VII. Intervenir en las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, y
VIII. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables.

Capítulo II
Del Plan de Persecución Penal

Artículo 6. Plan de Persecución Penal

La persona titular de la Fiscalía General aprobará el plan que orientará las atribuciones institucionales, considerando las prioridades nacionales establecidas en la política criminal. Este plan contendrá una estrategia de atención y trámite a través del análisis de la incidencia delictiva, de los diagnósticos situacionales, de las estadísticas de percepción de la violencia en la ciudadanía, de los análisis de información elaborados por instancias especializadas, de los diagnósticos elaborados por organizaciones civiles, de los informes sobre la situación de las víctimas del delito, de los informes sobre violaciones a los derechos humanos, así como por cualesquiera otro instrumento que sea fuente certera de información relacionada con los fenómenos criminales, permitiendo con ello la orientación de los recursos humanos, materiales y financieros; la estrategia de despliegue territorial y la emisión de lineamientos operativos para la función fiscal.

Para los efectos anteriores, la persona titular de la Fiscalía General, al inicio de su gestión, deberá presentar ante el Senado de la República un Plan de Persecución Penal, previa consulta al Consejo Técnico ciudadano, en los términos del Reglamento de esta Ley, y procurar condiciones de apertura, transparencia y participación ciudadana, en su elaboración.

Anualmente, la persona titular de la Fiscalía General presentará públicamente ante el Senado de la República los resultados del Plan de Persecución Penal y, en su caso, justificará las modificaciones realizadas al mismo. En el Plan de Persecución Penal se integrarán los planes de las fiscalías especializadas.

El Plan de Persecución Penal contendrá, entre otras cuestiones relativas a la política criminal que deba seguirse en el ámbito competencial de la Fiscalía, la priorización para la persecución de los delitos, los mecanismos alternativos y los programas o políticas de atención a víctimas, entre otros, desglosados como metas a corto, mediano y largo plazos.

Artículo 7. Publicidad y transparencia

La Fiscalía General de la República garantizará el acceso a la información pública generada en el marco de sus atribuciones y conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable.

Respecto a las investigaciones relacionadas con las violaciones a los derechos humanos, se estará a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 8. Del mandato o solicitud de colaboración

Los órganos a cargo de la función fiscal y de investigación podrán solicitar la colaboración de cualquier autoridad para la práctica de un acto de investigación o procedimental.

Los actos de colaboración entre la Fiscalía General con autoridades federales, estatales y municipales, se realizará de conformidad con lo previsto en los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el Capítulo IV del Título III del Código Nacional de Procedimientos Penales; en la presente Ley, así como en las disposiciones contenidas en otras normas y convenios de colaboración que se hayan emitido o suscrito.

TÍTULO SEGUNDO
Función fiscal

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 9. Facultades de los órganos fiscales

Los órganos que ejercen la función fiscal tendrán las siguientes facultades:

I. Ejecutar los lineamientos de la política y Plan de Persecución Penal dictados por la persona titular de la Fiscalía General;
II. Conducir legalmente la investigación de los delitos, ejercer la acción penal y abstenerse o desistirse de ésta, de acuerdo con las leyes aplicables;
III. Dirigir funcionalmente a las policías en lo concerniente a la investigación de los delitos;
IV. Solicitar y efectuar actos de investigación, dentro o fuera del territorio nacional, conforme al principio de libertad probatoria;
V. Garantizar la protección de las víctimas, testigos y otros sujetos procesales, en el marco de la legislación vigente, por sí o en coordinación con otras entidades públicas o privadas;
VI. Intervenir para garantizar el pleno cumplimiento de las resoluciones judiciales en los términos establecidos por la legislación nacional de ejecución penal;
VII. Requerir y coordinar la cooperación y coadyuvancia necesaria de instituciones públicas y privadas, en la conducción legal de la investigación y ejercicio de la acción penal;
VIII. Garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas vinculadas con las investigaciones, con independencia de su situación jurídica, así como de las víctimas del delito;
IX. Aplicar los estándares, nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de niñez y adolescencia, así como el enfoque diferencial y especializado, en las investigaciones y procesos penales;
X. Aplicar los protocolos de investigación que les competan;
XI. Informar a las personas migrantes víctimas o testigos de delitos cometidos en territorio nacional sobre los derechos que les asisten en materia de apoyo consular en los casos que se requiera, de retornar a su país de origen o permanecer en territorio nacional y, en su caso, de solicitar la condición de visitante por razones humanitarias, la condición de persona refugiada o protección complementaria, así como requerir a la autoridad competente un informe de las acciones que haya realizado respecto de su canalización a las instituciones públicas o privadas especializadas para brindarles la atención correspondiente, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
XII. Ejercer todas aquellas funciones que establezcan las leyes procesales o especiales, así como las que disponga el Fiscal General a través de la normatividad interna, en el ámbito de su competencia;
XIII. Acceder de manera inmediata e irrestricta a la información, documentos, registros físicos y electrónicos en poder de las instituciones públicas y privadas;
XIV. Citar a los servidores públicos para la realización de entrevistas, obtención de información, acceso a lugares, archivos, documentos y, en general, para las diligencias necesarias por motivo de sus funciones en los lugares que

establezca el personal a cargo de la función fiscal, sin sujeción a autorización o aceptación previa de sus superiores jerárquicos.

Artículo 10. Obligaciones de las y los fiscales ante las víctimas

En toda investigación y proceso penal las y los fiscales deberán garantizar los derechos de las víctimas establecidos en la Constitución, para lo cual tendrán las siguientes obligaciones:

I. Coordinar con las víctimas, sus representantes y organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, que las acompañan y asesoran, la generación de planes de investigación y la práctica de diligencias específicas que las involucren;
II. Proporcionar, de forma clara y permanente, a las víctimas, sus representantes y asesores, información sobre sus derechos y sobre el estado de los casos y actos de investigación previstos y programados, garantizando su participación en las diligencias que correspondan;
III. Dar acceso a los registros y proporcionar copia gratuita de éstos, en forma física o digital, solicitada por las víctimas y sus representantes, en relación con los casos, para facilitar su conocimiento y participación en los mismos;
IV. Garantizar el derecho de las víctimas y sus representantes, a presentar peritajes independientes, facilitando para ello su acceso a los casos;
V. Garantizar a las víctimas la protección y asistencia a la que tienen derecho, por parte de las entidades públicas o privadas que correspondan, de conformidad con la presente Ley y demás aplicables,
VI. Garantizar la perspectiva de género, de interculturalidad, de niñez y adolescencia, así como el enfoque diferencial y especializado en la investigación y ejercicio de la acción penal, de acuerdo con las condiciones específicas de las víctimas, y
VII. Garantizar a las víctimas que lo requieran, intérprete y traductor, por sí o en coordinación con otras entidades públicas, privadas o personas en lo individual.

Artículo 11. Órganos a cargo de la función fiscal

La representación de la Fiscalía General de la República corresponde a los siguientes órganos:

I. La persona titular de la Fiscalía General;
II. Las personas titulares de la fiscalía de Derechos Humanos, la Fiscalía de Delitos Electorales, la Fiscalía de Combate a la Corrupción y la Fiscalía de Asuntos Internos;
III. Las personas titulares de las fiscalías especiales;
IV. La persona titular de la Coordinación de Investigación y Persecución Penal;
V. Las personas titulares de las fiscalías asignadas a la Coordinación General en el ámbito de su competencia, y
VI. Las y los fiscales nombrados de acuerdo con el Servicio Profesional de Carrera establecido en la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 12. Independencia Técnica de las y los fiscales

Las y los Fiscales ejercerán sus funciones con independencia y autonomía, libres de cualquier tipo de coacción o interferencia en su actuar. En el ejercicio de sus funciones, se conducirán conforme al criterio de objetividad, con base en el cual dirigirán la investigación de los hechos y circunstancias que prueben, eximan o atenúen la responsabilidad de las personas imputadas.

Artículo 13. Asignación

Los órganos a cargo de la función fiscal contarán con el personal policial, técnico, pericial, y en general, el relativo a la operación sustantiva de la Fiscalía, asignados de forma directa para el cumplimiento de los fines de la función fiscal y del Plan de Persecución Penal, de conformidad con el Servicio Profesional de Carrera.

La persona titular de la Fiscalía General sustentará la asignación del personal que integrará las unidades fiscales, conforme al Plan de Persecución Penal, quienes no podrán cambiarse de asignación, salvo previo acuerdo de las y los titulares.

El personal mencionado en el párrafo que antecede también podrá ser asignado, de manera temporal y para el cumplimiento de objetivos específicos, a las fiscalías o unidades de investigación y litigio. El titular de cada una de estas unidades, para todos los efectos, asumirá el mando del personal asignado.

Capítulo II
De la estructura

Artículo 14. De la estructura de la Fiscalía General de la República

La Fiscalía General de la República tendrá la siguiente estructura:

I. Fiscal General;
II. Coordinación General;
III. Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos;
IV. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales;
V. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;
VI. Fiscalía Especializada de Asuntos Internos;
VII. Coordinación de Investigación y Persecución Penal;
VIII. Coordinación de Métodos de Investigación;
IX. Coordinación de Planeación y Administración;
X. Órgano Interno de Control;
XI. Consejo Técnico;
XII. Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera;
XIII. Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; y
XIV. Las fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General, a través de acuerdos generales, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento, y acorde con el Plan de Persecución Penal.

La Fiscalía de Derechos Humanos tendrá a su cargo las fiscalías de protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes; de trata de

personas; de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; de migrantes; de investigación de tortura, y todas aquellas fiscalías órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General.

Las personas titulares de la Fiscalía General o de la Coordinación General establecerán los criterios para evitar la fragmentación y, en su caso, la creación de unidades mixtas de investigación.

La Fiscalía General contará con fiscales, policía de investigación, analistas, auxiliares y peritos, así como con el personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. En los casos relacionados con violencia de género y contra la mujer, el personal deberá ser especializado.

Asimismo, podrá allegarse de personal técnico especializado de otras entidades para colaborar en las investigaciones.

Capítulo III
De la persona titular de la Fiscalía General y los órganos de la Fiscalía

Artículo 15. Nombramiento del o la Fiscal

El nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General se sujetará al procedimiento y requisitos previstos en el artículo 102, apartado A, fracción IV de la Constitución General de la República, en el que se promoverán los principios de transparencia, publicidad, mérito, participación ciudadana, e igualdad y no discriminación.

Artículo 16. De la designación de la persona titular de la Fiscalía General de la República

Quienes aspiren a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos de elegibilidad:

I. Tener la ciudadanía mexicana;
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
III. Contar, con una antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado(a) en Derecho, y
IV. No haber sido condenado(a) por delito doloso.

Artículo 17. Buena reputación

La buena reputación, a la que se refiere el artículo 102 constitucional, está compuesta por dos elementos:

I. El objetivo, que se refiere a la calidad profesional relevante, trayectoria en el servicio público o en el ejercicio de la actividad jurídica, y

II. El subjetivo, que se refiere a la honorabilidad, alta calidad técnica, compromiso con valores democráticos, independencia y reconocimiento social.

Artículo 18. Causas graves de remoción de la persona titular de la Fiscalía General

La persona titular de la Fiscalía General sólo podrá ser removida por el Presidente de la República por incurrir en alguna de las siguientes causas graves:

I. Cuando de manera sistemática no se cumplan con los objetivos establecidos en el Plan de Persecución Penal;
II. Participe en el ataque a las instituciones democráticas y a la forma de gobierno republicano y federal;
III. Participe, tolere, consienta o apoye violaciones graves a los derechos humanos, o
IV. Cometa cualquier violación a la Constitución, que motive algún trastorno ilícito de forma en el funcionamiento normal de las instituciones.

El Ejecutivo federal deberá expresar las razones, justificar y acreditar la causa grave que motivó la remoción de la persona titular de la Fiscalía General e informarla al Senado de la República mediante un escrito. La Cámara Alta ponderará si objeta o no la remoción, en términos de las fracciones IV y V del artículo 102 constitucional, en su apartado A.

Lo dispuesto en las fracciones anteriores se aplicará sin perjuicio de lo previsto en los artículos 110 y 111 de la Constitución.

Artículo 19. Facultades del o la Fiscal General de la República

La persona titular de la Fiscalía General intervendrá, por sí o por conducto de los fiscales y demás órganos de la Fiscalía, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y las demás disposiciones aplicables y tendrá las siguientes facultades.

I. Dirigir y coordinar la política general de la Fiscalía General de la República, así como vigilar y evaluar la operación de las unidades administrativas que la integran;
II. Representar a la Fiscalía General en las relaciones institucionales con otras entidades u órganos de gobiernos locales, nacionales, federales e internacionales;
III. Participar en el sistema de atención a las víctimas y ofendidos por la comisión de delitos;
IV. Celebrar los convenios de colaboración con el exterior para el adecuado funcionamiento del Mecanismo de Apoyo Exterior y las demás funciones que se requieran;
V. Solicitar la colaboración de otras autoridades, así como auxiliar a las que lo soliciten, directamente o por conducto de la Coordinación General, en la persecución de los probables autores o partícipes del hecho delictivo, en los

términos que dispongan las leyes, acuerdos, convenios, bases y demás instrumentos de colaboración celebrados para tal efecto;

VI. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública;

VII. Autorizar los lineamientos y bases del Servicio Público de Carrera de la institución, y de conformidad con la normatividad aplicable;

VIII. Nombrar y remover a las personas titulares de las fiscalías especializadas, en los términos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las y los demás fiscales que considere pertinente, así como otras personas servidoras públicas adscritas a la Fiscalía;

IX. Ejercer atracción sobre los asuntos competencia de la institución, para conocer personalmente o designar la Fiscalía Especializada, Unidad de Investigación o Coordinación que deberá conocer de los mismos;

X. Instruir la integración de unidades o equipos especiales para la investigación de casos;

XI. Crear coordinaciones, fiscalías, direcciones, unidades y departamentos, de acuerdo con las necesidades institucionales y con el Plan de Persecución Penal;

XII. Presidir la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;

XIII. Ofrecer y entregar recompensas, en los casos, términos y condiciones que determine el Reglamento de esta Ley;

XIV. Determinar el Plan de Persecución Penal en los términos establecidos en la presente Ley, los criterios generales y prioridades en la investigación de los delitos, así como en el ejercicio de la acción penal;

XV. Coordinar acciones y suscribir convenios con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, para el desarrollo de acciones conjuntas, de fortalecimiento institucional y de cumplimiento de los fines institucionales;

XVI. Representar a la Fiscalía General en las relaciones institucionales con otras entidades u órganos nacionales e internacionales;

XVII. Promover la celebración de tratados, convenios, declaraciones o acuerdos internacionales relacionados con los fines institucionales;

XVIII. Establecer medios de información sistemática y directa a la ciudadanía, para dar cuenta de sus actividades, de conformidad con la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública, y

XIX. Las demás que señalen esta Ley, el Reglamento, así como otras disposiciones legales aplicables en la materia.

Artículo 20. De la Coordinación de Investigaciones y Persecución Penal

La Coordinación de Investigaciones y Persecución Penal tendrá las siguientes facultades:

I. Coordinar la gestión, movilidad e integración de las unidades de investigación y litigio, las cuales realizarán las investigaciones y el ejercicio de la acción penal, así como de los equipos de investigación que los conforman;

II. Decidir sobre la atracción de los casos;

III. Coordinar los esquemas de colaboración con otras autoridades federales o locales en la materia de sus competencias;

IV. En los casos que así se requiera, conducir legalmente la investigación y ejercer la acción penal;
V. Cuando así se requiera, designar a las y los fiscales encargados de los casos, salvo que el nombramiento sea realizado por la persona titular de la Fiscalía General;
VI. Garantizar la independencia y condiciones de trabajo de las unidades de investigación y litigación por el tiempo que sean creadas;
VII. En los casos de su competencia, conducir legalmente la investigación y ejercer la acción penal en materia de delitos de delincuencia organizada y de secuestro, conforme a las leyes en la materia, y
VIII. Las demás que señale la ley.

Artículo 21. De la Coordinación de Métodos de Investigación

La Coordinación de Métodos de Investigación tendrá las siguientes facultades:

I. Coordinar y asignar los servicios periciales, la policía de investigación, técnicos y analistas que formen parte de la Fiscalía General.
II. Analizar de forma estratégica los datos agregados del fenómeno criminal, la realización de estudios criminógenos y geodelictivos, así como la información de contexto que se considere relevante para coadyuvar en la investigación;
III. Efectuar reportes estratégicos sobre criminalidad regional y nacional, identificación de patrones, estructuras y organizaciones, así como cualquier otro que se considere necesario para la investigación de los casos;
IV. Servir de apoyo para el análisis técnico científico de los actos de investigación y datos de prueba, a solicitud de las y los fiscales, para el desarrollo de sus investigaciones;
V. Apoyar la verificación y control de las pruebas periciales y exámenes forenses practicados a solicitud de las autoridades competentes;
VI. Suministrar información a la Coordinación de Planeación y Administración, relativa a los patrones, estructuras y organizaciones criminales para el diseño de las políticas institucionales y toma de decisiones;
VII. Comunicar la información de utilidad relativa a la seguridad pública que obtenga en el ejercicio de sus funciones la persona titular de la Fiscalía General, para que, en su caso, la remita a la autoridad competente;
VIII. Realizar los actos de investigación, en apoyo a la Coordinación de Investigaciones y Persecución Penal, conforme lo determine el Reglamento;
IX. Evaluar riesgos y proteger a personas ofendidas, víctimas, testigos y demás sujetos procesales, en los casos que existan amenazas o riesgos a su integridad o vida, y
X. Coordinar y colaborar con entidades gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, para la implementación de los esquemas de seguridad de víctimas, testigos y demás sujetos procesales.

El personal de la Coordinación de Métodos de Investigación podrá ser comisionado conforme a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 22. La Coordinación General de la Fiscalía General de la República

La Coordinación General tendrá las siguientes facultades:

I. Suplir a la persona titular de la Fiscalía General en sus ausencias;
II. Representar a la Fiscalía General en las relaciones institucionales con otras entidades u órganos de gobierno locales, nacionales, federales e internacionales;
III. Elaborar las normas y políticas a las que deberán sujetarse las unidades y los órganos de la Fiscalía, en la materia de su competencia;
IV. Desarrollar la política del sistema de gestión documental y administración de archivos de la institución, de conformidad con la normatividad aplicable;
V. Desarrollar y ejecutar las políticas de transparencia y rendición de cuentas, y atender las solicitudes de información pública;
VI. Atender las quejas, recomendaciones y solicitudes de los organismos públicos de derechos humanos, nacionales e internacionales, así como las quejas presentadas por las personas;
VII. Ejecutar las funciones de extradición pasiva y activa, así como lo relacionado con la cooperación internacional;
VIII. Formalizar los convenios de colaboración con el exterior, para el adecuado funcionamiento del Mecanismo de Apoyo Exterior y las demás funciones que se requieran;
IX. Representar legamente a la Fiscalía General en los asuntos jurídicos de acciones promovidas en su contra o por la propia Fiscalía;
X. Canalizar la información generada por la persona titular de la Fiscalía General, a las áreas correspondientes de la Fiscalía General;
XI. Establecer las directrices y controlar los procesos de generación, sistematización y análisis de la información, para su óptimo resguardo y aprovechamiento;
XII. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de sistematización y análisis de la información, a fin de apoyar el desarrollo de las funciones sustantivas de la Fiscalía;
XIII. Coordinar a las unidades y órganos de la Fiscalía General en el suministro de información y asegurar su consolidación, consistencia, oportunidad y confiabilidad;
XIV. Organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del Sistema de Gestión de Información;
XV. Resolver los conflictos que se susciten en el ámbito administrativo con motivo de la interpretación o aplicación de la presente Ley, su Reglamento, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, y demás normatividad institucional, así como presentar opinión a la persona titular de la Fiscalía General, en los casos no previstos, para que resuelva lo conducente en el marco de sus facultades;
XVI. Conocer y resolver sobre las solicitudes de atracción;
XVII. Coordinar, dirigir y canalizar el ejercicio de las atribuciones de las y los fiscales en materia internacional;

XVIII. Desahogar las consultas jurídicas internacionales que formulen las diversas áreas de la Fiscalía General, así como de los órganos del Estado Mexicano en materia de procuración de justicia;
XIX. Auxiliar a la persona titular de la Fiscalía General en la elaboración de los lineamientos y bases del Servicio Profesional de Carrera de la institución, de nombramiento y remoción de servidores públicos, de conformidad con la normatividad;
XX. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de las políticas institucionales del Servicio Profesional de Carrera;
XXI. Coordinar y dirigir a las representaciones de la Fiscalía General en el extranjero;
XXII. Representar jurídicamente a la Fiscalía General ante las autoridades administrativas, judiciales y laborales;
XXIII. Conocer y resolver los conflictos de competencia entre órganos fiscales;
XXIV. Coordinar y dirigir la implementación de la política de género y violencia contra la mujer, así como para la atención con enfoque diferencial para personas colocadas en situación especial de vulnerabilidad, en razón de la condición étnica, migratoria, de género, sexo, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, orientación o identidad sexual y de género, estado civil o cualquier otra condición o motivo que atente contra la dignidad humana; o bien, tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y
XXV. Las demás que dispongan la Ley y el Reglamento.

La Coordinación General contará con una Unidad Especial de Género y Violencia Contra la Mujer, que tendrá como objetivo la institucionalización de la perspectiva y transversalidad de género en todas las áreas de la Fiscalía, a través de la incorporación del enfoque de igualdad y no discriminación a la cultura institucional, a través del diseño, planeación, presupuesto, ejecución y evaluación de las políticas de la Fiscalía, y será responsable de coordinar y gestionar acciones con todas las áreas de la Fiscalía para incorporar, en su actuación, los principios rectores de la igualdad sustantiva y de oportunidades entre mujeres y hombres.

Artículo 23. De la Coordinación de Planeación y Administración

La Coordinación de Planeación y Administración será el área encargada de formular ante la persona titular de la Fiscalía General el Plan de Persecución Penal, y será la responsable de la información institucional, así como de la administración y gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a través de las áreas correspondientes. Además, ejercerá las siguientes facultades:

I. Proponer y dar seguimiento a las políticas de vinculación y coordinación interinstitucional en el ámbito de su competencia;
II. Apoyar las labores necesarias para el seguimiento y evaluación de la política y Plan de Persecución Penal definidos por la Fiscalía;
III. Coordinar la integración del Plan de Persecución Penal de las fiscalías especializadas;

IV. Definir indicadores y metas institucionales, de acuerdo con el Plan de Persecución Penal, así como dar seguimiento puntual a los mismos;
V. Proponer a la persona titular de la Fiscalía General las adecuaciones necesarias al Plan de Persecución Penal, de acuerdo con los estudios y análisis de su competencia;
VI. Definir las políticas institucionales para el desarrollo y modernización institucional basada en resultados y evaluación del desempeño;
VII. Consolidar la información administrativa y financiera para elaborar estudios e informes;
VIII. Establecer directrices para la generación, sistematización e integración de los informes de las distintas unidades y órganos de la Fiscalía;
IX. Realizar estudios sobre el desarrollo organizacional de la Fiscalía;
X. Recopilar los reportes estratégicos de la Coordinación de Métodos de Investigación, así como cualquier otro que se considere necesario sobre el análisis de la criminalidad y de contexto para orientar las políticas de operación de la Fiscalía;
XI. Coordinar a las unidades y órganos de la Fiscalía General en el suministro de información y asegurar su consolidación, consistencia, oportunidad y confiabilidad para los fines de formulación de la Política de Persecución Penal;
XII. Contar con un área de análisis criminal que analice sistemática y oportunamente la información relativa a los asuntos de la Fiscalía General para su procesamiento en materia de estrategia e inteligencia operativa;
XIII. Coordinar la integración y elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de la Fiscalía, con base en las necesidades detectadas en el Plan de Persecución Penal y para el apoyo administrativo del mismo;
XIV. Establecer y controlar las políticas y procedimientos de adquisición, aprovechamiento y administración de bienes y servicios;
XV. Elaborar y orientar el plan de inversiones en infraestructura física;
XVI. Tener a su cargo la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, financieros, patrimoniales, presupuestales y cualquier otro asignado a la Fiscalía General de conformidad con las políticas aprobadas por la persona titular de la Fiscalía General en esta materia;
XVII. Representar legalmente a la Fiscalía General en materia de administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, financieros, patrimoniales, presupuestales y cualquier otro, de conformidad con las políticas aprobadas por la persona titular de la Fiscalía General de la República;
XVIII. Ejercer los actos de administración, de mandatario judicial y de dominio que requiera la Fiscalía General, en el ámbito de su competencia, para su debido funcionamiento, de conformidad con las políticas aprobadas por la persona titular de la Fiscalía General, y de conformidad con lo que prevea el Reglamento;
XIX. Proponer a la persona titular de la Fiscalía General, para su aprobación, los criterios generales en materia administrativa, en términos de la legislación aplicable;

XX. Aprobar el uso de los recursos financieros de la Fiscalía, en materia de contrataciones, ejercicio del gasto, adquisiciones, arrendamientos y contratación de bienes, servicios y obras públicas, así como de asociaciones público-privadas, de conformidad con la normativa aplicable;
XXI. Administrar y ejercer los fondos federales destinados a la Procuración de Justicia, de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables, transparentando su aplicación;
XXII. Conformar el Comité de Adquisiciones, de conformidad con el Reglamento que emita la persona titular de la Fiscalía General de la República;
XXIII. Proporcionar los servicios administrativos generales que requieran las áreas de la Fiscalía General;
XXIV. Suscribir convenios o cualquier otro acto o instrumento jurídico en el ámbito administrativo de su competencia;
XXV. Colaborar con la Coordinación General para asegurar la suficiencia presupuestal para el cumplimiento y desarrollo de los rubros que contempla el Servicio Profesional de Carrera, y
XXVI. Las demás que señalen la presente Ley y su Reglamento, así como la normativa emitida por la persona titular de la Fiscalía General.

Capítulo IV
Transparencia, rendición de cuentas y acción ciudadana

Artículo 24. El Órgano Interno de Control

El Órgano Interno de Control será la entidad a cargo de iniciar y llevar a cabo los procedimientos de responsabilidades administrativas, la fiscalización de todos los ingresos y egresos de la institución y presentar las denuncias ante la Fiscalía de Asuntos Internos por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito.

Serán facultades del Órgano Interno de Control las siguientes:

I. Fiscalizar el ejercicio del gasto público de la Fiscalía General y su congruencia con los presupuestos de egresos e ingresos;
II. Vigilar, en colaboración con las autoridades competentes el cumplimiento de las normas de control interno, fiscalización, integridad, transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y combate a la corrupción en la Fiscalía General;
III. En coordinación con la Coordinación de Planeación y Administración, integrar los informes, específicos o individuales, requeridos por la Auditoría Superior de la Federación en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;
IV. Proponer a la persona titular de la Fiscalía General las normas que regulen los instrumentos y procedimientos sobre cómo realizar las auditorías que se requieran;
V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos y patrimonio;

VI. Emitir las normas para que los recursos patrimoniales y financieros sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa, así como realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias; todo lo anterior, en coordinación con la persona titular de la Fiscalía General;
VII. Realizar auditorías, revisiones y evaluaciones a las áreas de la Fiscalía General, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia, eficacia y legalidad en su gestión y encargo, así como emitir recomendaciones;
VIII. Proponer a la persona titular de la Fiscalía General a los auditores externos, así como normar y controlar su desempeño;
IX. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emita;
X. Colaborar en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y en materia de Fiscalización, en el establecimiento de las bases y principios de coordinación necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes;
XI. Implementar las acciones que acuerde el Sistema Nacional Anticorrupción, en términos de las disposiciones aplicables;
XII. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Fiscalía General, supervisar el cumplimiento de la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, conforme a las disposiciones aplicables, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes, de acuerdo con las disposiciones aplicables;
XIII. Llevar el registro de la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas a los servidores públicos de la Fiscalía General;
XIV. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que se celebren con la Fiscalía General, conforme a la normatividad aplicable;
XV. Conocer e investigar las conductas de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes, conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para lo cual podrá aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal;
XVI. Establecer mecanismos, en coordinación con la Coordinación General, que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;
XVII. Ejercer, en el ámbito de responsabilidad de la Fiscalía General de la República, en lo que resulte conducente, las facultades que la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y la Ley de Asociaciones

Público-Privadas, prevén para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública;

XVIII. Emitir el Código de Ética de los servidores públicos de la Fiscalía General y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la procuración de justicia;

XIX. Publicar un informe anual de la gestión de sus funciones, debiendo comparecer ante el Consejo Técnico para resolver las observaciones requeridas por éste. Asimismo, presentar los informes específicos que le sean requeridos por el Fiscal, y

XX. Las demás que señalen las leyes y reglamentos.

Su titular se designará conforme a lo previsto en la Constitución y la presente Ley, dependerá orgánicamente de la persona titular de la Fiscalía General de la República y desempeñará sus funciones de manera autónoma. Deberá ser profesional en Derecho, con reconocida experiencia en las materias administrativa, penal y de fiscalización de recursos públicos.

Podrá ser removido(a) a solicitud de la persona titular de la Fiscalía General por las causas establecidas en la presente Ley; por la Cámara de Diputados, conforme a lo establecido en el título cuarto de Constitución y las demás Leyes aplicables.

Artículo 25. Integración del Consejo Técnico de la Fiscalía

El Consejo Técnico de la Fiscalía General de la República será un órgano especializado de consulta, de carácter honorífico, que ejercerá las funciones establecidas en la presente Ley. Estará integrado por cinco ciudadanos expertos en temas de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, en especial de las mujeres, de los pueblos y las comunidades indígenas, de los niños, niñas, adolescentes y personas migrantes. Sesionará al menos una vez al mes y estará presidido por uno de los integrantes, de acuerdo con la normatividad.

Las personas integrantes del Consejo Técnico durarán en su encargo cinco años improrrogables y serán renovados de manera escalonada. Las personas titulares de la Fiscalía General y las Fiscalías Especializadas podrán asistir a las reuniones con voz, pero sin voto.

Artículo 26. Designación de las personas integrantes del Consejo

El Senado nombrará una Comisión de selección, integrada por cinco personas de reconocida honorabilidad y trayectoria, debiendo justificar las razones de la selección. La citada Comisión abrirá una convocatoria pública por un plazo de quince días para recibir propuestas para ocupar el cargo de Consejero Técnico. Posteriormente, el Senado elegirá entre los candidatos a cinco personas, respetando los principios a que se refieren los artículos 40, 41 y 42 de esta Ley.

Esta lista será dada a conocer por diez días para que la sociedad se pronuncie y, en su caso, presente sus objeciones, que serán tomadas en cuenta para motivar la

elección. Una vez concluido este proceso, el Senado hará público el nombre de las personas seleccionadas.

Artículo 27. Facultades del Consejo Técnico de la Fiscalía General

El Consejo Técnico tendrá las siguientes facultades:

I. Opinar, dar seguimiento y emitir recomendaciones públicas sobre el contenido e implementación del Plan de Persecución Penal que presente la persona titular de la Fiscalía General, así como los programas anuales de trabajo y su implementación;
II. Opinar de manera previa sobre la creación de nuevas estructuras propuestas por la persona titular de la Fiscalía General;
III. Hacer del conocimiento del Órgano de Control Interno cuando advierta una probable responsabilidad administrativa;
IV. Efectuar recomendaciones para fortalecer el presupuesto de la institución;
V. Efectuar recomendaciones sobre la normatividad interna de la Fiscalía General de la República;
VI. Revisar y efectuar recomendaciones a las propuestas y planes del Servicio Profesional de Carrera;
VII. Establecer las reglas operativas del Consejo;
VIII. En general, emitir opiniones y recomendaciones sobre el desempeño de la Fiscalía y sus áreas;
IX. Para un mejor desarrollo de sus funciones el Consejo Técnico podrá invitar a personas expertas, nacionales e internacionales, y
X. Las demás que establezcan la Ley y su Reglamento.

Cualquier intromisión en aspectos sustantivos de la función fiscal tendrá como sanción la remoción del Consejero respectivo, por parte de la persona titular de la Fiscalía General.

Las opiniones y recomendaciones emitidas por el Consejo serán de carácter público.

Artículo 28. De la Secretaría Técnica del Consejo Técnico de la Fiscalía General

Para el ejercicio de sus funciones, el Consejo Técnico se auxiliará con una Secretaría Técnica, así como con el personal que se requiera para el desempeño de sus funciones. Las y los integrantes de la Secretaría Técnica se seleccionarán por el Consejo Técnico, a partir de la propuesta que elabore el Servicio Profesional de Carrera, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley.

Capítulo V
Responsabilidades y sanciones

Artículo 29. Régimen de responsabilidades

Los servidores públicos de la Fiscalía General de la República en el ejercicio de sus funciones, están sujetos al régimen de responsabilidades a que se refiere la Ley

General de Responsabilidades Administrativas, de conformidad con lo dispuesto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Ley.

El personal de la Fiscalía, en el desempeño de sus funciones deberá actuar con estricto apego al Código de Ética que emita el Órgano Interno de Control, por lo que cualquier incumplimiento constituirá una falta administrativa no grave, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 30. Faltas graves

Serán consideradas faltas graves de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General, las siguientes:

I. Actuar con negligencia grave en las áreas o funciones asignadas;
II. Realizar actos que interfieran con la independencia, autonomía y objetividad de las y los fiscales en la conducción legal de la investigación o en el ejercicio de la acción penal;
III. Retrasar o perjudicar la debida procuración de justicia y actuación de la Fiscalía General;
IV. Realizar o encubrir conductas, con la intención de atentar contra la autonomía de la Fiscalía, aceptar o ejercer consignas y presiones que generen subordinación indebida a alguna persona u autoridad;
V. Abandonar las funciones, comisiones o servicios encomendados, sin causa justificada;
VI. Dejar de asistir o negar sin causa justificada protección a las víctimas, testigos y otros sujetos procesales, que lo requieran;
VII. Negar u obstaculizar el ejercicio de los derechos de las víctimas, imputados y demás sujetos procesales, sea en forma directa o a través de sus representantes, en el marco de los procedimientos;
VIII. Negar, obstaculizar o retrasar el reconocimiento de la calidad de víctima y su debida notificación a las instancias correspondientes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas;
IX. Ordenar o realizar la detención o retención de una persona, sin cumplir con los requisitos constitucionales y leyes aplicables;
X. Omitir realizar o negar sin causa justificada, la práctica de diligencias y actos procesales solicitados por las víctimas, los imputados y demás sujetos procesales;
XI. Realizar o permitir la alteración, sustracción o pérdida de actuaciones, documentos e información bajo su responsabilidad;
XII. Abstenerse de manera reiterada de ejercer la acción penal o realizar determinaciones contrario a la Ley;
XIII. Incumplir de manera injustificada y reiterada con los plazos procesales e incumplir con ordenamientos judiciales;
XIV. Ejercer maltrato físico, psicológico o verbal tanto a los demás servidores públicos como a los usuarios;
XV. Realizar, promover o encubrir cualquier acto de corrupción, y
XVI. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables.

Capítulo VI
De la investigación y acción penal

Artículo 31. Unidades de investigación y litigación

Las unidades de investigación y litigación serán órganos compuestos por equipos de investigación y litigación, que tendrán como función organizar y gestionar la estrategia de la Fiscalía General de la República de forma flexible y eficiente establecida en el Plan de Persecución Penal. Estarán dirigidas por fiscales y se integrarán por los equipos de investigación necesarios para su adecuado funcionamiento.

Artículo 32. Equipos de investigación y litigación

Los equipos de investigación serán las unidades orgánicas encargadas del desarrollo de las investigaciones y el ejercicio de la acción penal. Los equipos de investigación serán dirigidos por fiscales y además serán integrados, entre otros, por peritos, policía de investigación, analistas y técnicos que correspondan en cada caso.

Artículo 33. Equipos mixtos de investigación y litigación

La persona titular de la Fiscalía General podrá conformar equipos mixtos de investigación con integrantes de distintas unidades fiscales y coordinaciones, así como con personal de otras fiscalías o procuradurías de las entidades federativas, a través de acuerdos de colaboración institucional, para el desarrollo de investigaciones y el ejercicio de la acción penal en el ámbito de sus competencias, cuando exista concurrencia de delitos, de fenómenos delictivos o para fines orientados al cumplimiento del Plan de Persecución Penal. En todos los casos, se cuidará la integridad y la no fragmentación de las investigaciones.

Los acuerdos de colaboración con las entidades federativas deberán ser publicados en el *Diario Oficial de la Federación* y el órgano de difusión de la entidad federativa correspondiente.

Artículo 34. Unidades de Análisis Estratégico y de Contexto

Tanto las Fiscalías Especializadas como las Coordinación de Investigación y Persecución Penal contarán con las Unidades de Análisis Estratégico y de Contexto para el cumplimiento de sus funciones y del Plan de Persecución Penal, las cuales tendrán, entre otros, los siguientes objetivos:

I. La identificación de patrones de actuación reiterada, sistemática o generalizada sobre ciertas estructuras o fenómenos criminales;
II. La identificación de niveles y tipos de responsabilidad o de los partícipes de los hechos delictivos, incluyendo servidores públicos;
III. La identificación de niveles de responsabilidad de estructuras delincuenciales o paralelas al Estado; y
IV. La identificación de aspectos multifactoriales y multidelictivos de los fenómenos criminales.

Estas unidades actuarán coordinadamente con la Coordinación de Métodos de Investigación y serán integradas por analistas, técnicos y expertos en las materias de su competencia.

Artículo 35. Comisiones especiales

La persona titular de la Fiscalía General podrá crear comisiones especiales, de carácter temporal, para colaborar en las investigaciones de fenómenos y delitos que, debido a su contexto, a juicio del o la Fiscal, ameritan su creación, incluyendo aquellos sobre feminicidios, violencia sexual, trata de personas, o que impliquen violaciones a derechos humanos, en especial de los pueblos y las comunidades indígenas, de los niños, niñas, adolescentes, y personas migrantes. Los trabajos, recomendaciones y conclusiones de las comisiones podrán ser tomados en consideración por los órganos de la función fiscal, para la investigación y el ejercicio de la acción penal de los asuntos correspondientes.

Las comisiones especiales tendrán como enfoque el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición. Serán integradas, de manera multidisciplinaria, por personas expertas de reconocida experiencia, nacionales o internacionales, en las materias que se requieran, organismos internacionales, organismos de la sociedad civil, universidades públicas y privadas y colectivos de víctimas.

Artículo 36. De la operación territorial estratégica

El despliegue territorial de la operación sustantiva definida en las normas y políticas centrales se llevará a cabo a través de unidades o equipos de investigación y litigación, cuya distribución, tamaño, recursos y temporalidad se apegarán al Plan de Persecución Penal y a los fines de la Fiscalía.

Las unidades o equipos deberán estar integrados por el personal necesario para ejercer la función fiscal dentro del ámbito territorial y por el tiempo que hubieren sido establecidos por las fiscalías o coordinaciones conforme al Plan de Persecución Penal.

Las unidades o equipos desplegados se desintegrarán al cumplirse el objetivo establecido, debiendo reubicar al personal en otras unidades o equipos de investigación y litigación.

Artículo 37. Criterios para el despliegue territorial

La distribución territorial de las unidades o equipos de investigación y litigación se definirán conforme a cualquiera de los siguientes criterios:

I. La atención específica de fenómenos criminales;
II. La regionalización y coordinación en materia de procuración de justicia;
III. La distritación judicial, y
IV. El Acceso a la justicia.

Artículo 38. Sistema de recepción y canalización

La Coordinación General establecerá un sistema central de recepción y canalización de los asuntos que sean competencia de la Fiscalía General y al respecto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Recibir y canalizar los casos a los órganos competentes de la Fiscalía para su conocimiento, investigación o tramitación con base en el Plan de Persecución Penal;
II. Canalizar los casos y asuntos que no son competencia de la Fiscalía General a las autoridades competentes;
III. Cooperar con otras instancias federales y locales para la atracción y remisión de asuntos;
IV. Orientar y canalizar a las personas víctimas con los órganos y autoridades competentes para su protección y asistencia, y
V. Las demás que disponga el Reglamento.

Podrá recomendar la creación de unidades o equipos de investigación y litigación para la atención de casos relevantes.

Determinará la competencia de las fiscalías o unidades de investigación y litigio para la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal.

Capítulo VII
De las fiscalías especializadas

39. De la designación y remoción de las personas titulares de las fiscalías especializadas

La persona titular de la Fiscalía General designará a las personas titulares de las fiscalías especializadas con base a sus méritos y capacidades para ejercer el cargo y en un perfil previamente establecido. La idoneidad de dichos nombramientos será sustentada por la persona titular de la Fiscalía General ante el Senado de la República en el caso de las personas titulares de las fiscalías especializadas por mandamiento constitucional; y en sesión pública ante el Consejo Técnico de la Fiscalía, en los casos restantes.

En su caso, serán removidos en términos de las disposiciones constitucionales, respetando el derecho de audiencia y debido proceso y conforme a la presente ley y su Reglamento.

Artículo 40. Principio del mérito

Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para la designación de fiscales especializados, los órganos competentes valorarán los antecedentes y trayectoria profesional de las personas candidatas, con el propósito de evaluar los elementos objetivos y subjetivos que se señalan en esta Ley. Dichos requisitos de elegibilidad deberán cumplir como mínimo con los requisitos señalados en el artículo 16 y 17 de esta Ley.

Artículo 41. Transparencia y publicidad

Todo proceso de designación estará sujetos a los principios de máxima transparencia y publicidad, desde su convocatoria hasta la designación. Las autoridades que intervengan en dichos procesos deberán hacer pública, de manera proactiva, oportuna, completa y accesible, toda la información y documentación que se reciba solicite, obtenga o produzca con ocasión del procedimiento, con excepción de aquella que pueda afectar la vida privada e intimidad, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública.

El incumplimiento de lo antes dispuesto será motivo de responsabilidad, en términos de la normatividad administrativa aplicable.

Artículo 42. Participación ciudadana

Cualquier ciudadana y ciudadano podrá participar en el proceso de designación, aportando información relevante sobre los aspirantes; expresando su apoyo u objeción contra candidaturas específicas, y asistiendo y proponiendo formulando preguntas durante las comparecencias.

Artículo 43. Funciones comunes para las fiscalías especializadas

Las fiscalías especializadas adscritas a la Fiscalía General, gozarán de autonomía técnica y de gestión, en el ámbito de su competencia y tendrán las siguientes atribuciones:

I. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con las instancias públicas o privadas que se requieran para el ejercicio de sus funciones;
II. En ejercicio de su independencia participar en estrategias de coordinación internacional con las instancias homólogas o que resulten pertinentes para el ejercicio de sus funciones, dando aviso a la Coordinación General;
III. Elaborar solicitudes de información a instancias, empresas o particulares internacionales, dando aviso a la Coordinación General;
IV. Emitir dentro del ámbito de sus competencias la normatividad, necesaria para el desempeño de sus funciones;
V. Presentar públicamente un informe anual sobre los avances y resultados de su gestión, dichos informes deberán ser añadidos al informe que la persona titular de la Fiscalía General presentará ante el Congreso;
VI. En lo particular, los titulares de las fiscalías especializadas al inicio de su gestión presentarán públicamente un plan de persecución penal;
VII. En los casos que involucre delincuencia organizada, se tomarán medidas que privilegien la integridad y no fragmentación de la investigación y el ejercicio de la acción penal;
VIII. Las personas titulares de las fiscalías especializadas implementarán medidas y estrategias de coordinación con las unidades, mecanismos y otras instancias especializadas creadas por las leyes especiales, tratados internacionales y demás leyes especiales vinculadas con su competencia, a efecto de facilitar el ejercicio del mandato de dichos mecanismos y de la

propia Fiscalía, en lo que les corresponde. Las medidas de articulación y colaboración comprenderán acciones tales como:

a) El intercambio de información, documentación, bases de datos, a través de sistemas de interoperabilidad;
b) La designación de enlaces;
c) La realización de mesas de trabajo y encuentros en los que participen, inclusive, organizaciones de víctimas, de la sociedad civil especializadas y organismos internacionales,
d) Facilitar el contacto entre los mecanismos especializados y las personas vinculadas a las investigaciones a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos;
e) Las demás que se acuerden y consideren necesarias;
f) La colaboración entre las fiscalías especializadas y los mecanismos creados por leyes especiales serán revestidas de flexibilidad y de formalidad mínima, a efecto de no obstaculizar, complicar ni dilatar las mismas.

IX. Para llevar a cabo la función fiscal, las y los fiscales especializados colaborarán con las instancias de seguridad pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas, y demás instituciones del Ejecutivo Federal, y
X. Las demás que establezcan la Constitución y las leyes para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 44. Funciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales

La Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos establecidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y en cualquier otro ordenamiento legal en la materia.

En los procesos electorales, en los procesos de consulta popular y en el desarrollo de mecanismos de democracia directa, realizará despliegues ministeriales en el ámbito local y federal con la finalidad de que las y los fiscales puedan atender directamente las denuncias de la ciudadanía.

Deberá informar mensualmente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las investigaciones, así como las determinaciones o procesos según sea el caso.

Igualmente, de forma anual, presentará ante la persona titular de la Fiscalía General, al Senado y al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, este último solo en los casos en que exista correlación entre los delitos electorales y posibles actos de corrupción cometidos desde la función pública, un informe sobre actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo

previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 45. Funciones de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos contenidos en el Título Décimo del Libro Segundo del Código Penal Federal.

La persona titular de la Fiscalía participará como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, atendiendo las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley general correspondiente.

Igualmente, presentará de manera anual, ante el Senado de la República, un informe público y de fácil acceso respecto de sus actividades y resultados, mismo que será entregado a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Artículo 46. Funciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos estará a cargo de la conducción legal de la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal en casos de violaciones a los derechos humanos, en el ámbito de sus competencias, independientemente de la clasificación jurídica de los hechos, que afecten la vida, la integridad, el patrimonio y la libertad de las personas; cuando afecten gravemente a la sociedad o por motivo de la condición de vulnerabilidad de las víctimas, o cuando existan falta de garantías para el ejercicio independiente de la investigación en las entidades federativas o cuando la participación de funcionarios o servidores públicos obstaculice la investigación. También conocerá este tipo de hechos cometidos por particulares cuando así lo determine una ley especial.

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos conocerá por atracción casos del fuero común o por derivación de otras unidades fiscales al interior de la Fiscalía General.

Artículo 47. Funciones de la Fiscalía en Asuntos Internos

La Fiscalía Especializada en Asuntos Internos estará a cargo de las investigaciones y el ejercicio de la acción penal en delitos cometidos por personal adscrito a los órganos sustantivos y administrativos de la Fiscalía General en ejercicio de sus funciones.

La persona titular de la Fiscalía General podrá crear unidades de investigación para casos especiales, incluyendo la probable comisión de delitos por parte de integrantes de la Fiscalía de Asuntos Internos.

Establecer lineamientos técnico-jurídicos para el monitoreo, la supervisión, investigación, revisión y control de la actuación de los fiscales, los policías de investigación, peritos, analistas, técnicos y en general de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, en términos del Plan de Persecución Penal.

Artículo 48. Cobertura de suplencias de la persona titular de la Fiscalía General

La persona titular de la Fiscalía General será suplida en sus excusas, ausencias o faltas temporales por la persona titular de la Coordinación General y a falta de esta, por quienes disponga el Reglamento de esta ley, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos para ser titular de la Fiscalía General.

En caso de ausencia definitiva, la titularidad de la Fiscalía General será ocupada temporalmente por la persona titular de la Coordinación General, quien deberá notificar al Senado de la República a efectos que proceda conforme al artículo 102 constitucional.

Capítulo VIII
Mecanismo de Apoyo Exterior

Artículo 49. Función del Mecanismo de Apoyo Exterior

El Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación es el conjunto de acciones y medidas tendientes a facilitar el acceso a la justicia a personas migrantes o sus familias que se encuentren en otro país y que requieran acceder directamente a las instituciones competentes para coadyuvar en la búsqueda y localización de personas desaparecidas con la Comisión Nacional de búsqueda, y en la investigación y persecución de los delitos a cargo de la Fiscalía.

El Mecanismo de Apoyo Exterior funcionará a través del personal que labora en los consulados, embajadas y agregadurías legales de México en otros países.

Artículo 50. De la atención a las víctimas en territorio extranjero, a través del Mecanismo de Apoyo Exterior

Los órganos a cargo de la función fiscal garantizarán el derecho a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas ubicadas en territorio extranjero, en igualdad de condiciones que a aquellas en territorio nacional.

Se garantizará el ejercicio de los derechos de las víctimas en el extranjero, en forma presencial y a través de los medios electrónicos o digitales que les resulten más adecuados. Las comunicaciones entre fiscales y víctimas en el extranjero o sus representantes legales deberán realizarse con fluidez, agilidad y debida diligencia. De la misma manera se llevarán a cabo las comunicaciones entre la o el fiscal encargado del caso y las autoridades mexicanas que se encuentren en las sedes diplomáticas y consulares a cargo del Mecanismo de Apoyo Exterior; la Fiscalía podrá establecer los agregados que ser requiera conforme al Plan de Persecución Penal.

A través del Mecanismo de Apoyo Exterior, los órganos de la función fiscal garantizarán a las víctimas y sus representantes, el derecho a presentar denuncias, declaraciones y cualquier tipo pruebas, documentación o información relacionadas con los hechos denunciados; a presentar peticiones, a participar activamente en el desarrollo de las investigaciones y procesos penales, así como a recibir información completa y oportuna cuando la víctima lo requiera.

Capítulo IX
Del Servicio Profesional de Carrera

Artículo 51. Naturaleza y finalidad del Servicio Profesional de Carrera
El Servicio Profesional de Carrera será el sistema integral de regulación del empleo público de todo el personal que preste servicios en la Fiscalía General de la República, que garantizará la igualdad de oportunidades, idoneidad y mérito para el ingreso y reclutamiento, ascensos, estímulos y recompensas.

El sistema integral del Servicio Profesional de Carrera estará a cargo del Centro de Formación Profesional y Servicio Profesional de Carrera, el cual contará con autonomía técnica y de gestión. Su estructura, procedimientos y gestión estarán regulados en el Reglamento correspondiente.

El Servicio Profesional de Carrera será organizado con la finalidad de estimular el profesionalismo, la rectitud, la independencia técnica; fomentar la iniciativa, innovación y la eficiencia institucional; y prevenir las violaciones a derechos humanos, así como los actos de corrupción.

Artículo 52. Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera
El Servicio Profesional de Carrera se integra por los siguientes subsistemas:

I. **Ingreso:** el reclutamiento y selección comprende el proceso de detección de necesidades de dotación de personal, elaboración de perfiles de puesto, convocatorias, evaluación y selección de aspirantes.

   La formación inicial comprende las estrategias de nivelación de competencias técnicas y diseño de planes de desarrollo para los operadores de nuevo ingreso.

   El proceso de inducción: Comprende el proceso de incorporación a la institución y el periodo a prueba de cada funcionario.

II. **Desarrollo:** entrenamiento y fortalecimiento continuo de capacidades: Comprende el desarrollo continuo y progresivo de las capacidades de los servidores públicos, la construcción, evaluación y monitoreo de planes carrera individuales; la detección de necesidades de formación y la evaluación, que se llevaran a cabo tomando como base el impacto en el desempeño individual. Los estímulos y recompensas se establecerán en el Plan de Gestión del Desempeño y Desarrollo Humano, de acuerdo con el

presupuesto y mediante disposiciones generales, a través de un sistema de estímulos. Dicho sistema podrá incluir estímulos económicos y no económicos, programados semestralmente con base al cumplimiento de metas individuales y grupales. Los estímulos y recompensas se otorgarán con base a los criterios establecidos en el plan de desempeño, el cual contendrá objetivos y resultados esperados, de acuerdo con cada puesto.

La salud y clima laboral. El Servicio Profesional de Carrera fomentará la salud física y mental del personal y condiciones laborales adecuadas, como factores de bienestar personal y profesional, individual y colectivo, así como de compromiso, productividad y eficiencia. Para ello, pondrá a disposición del personal actividades y servicios de apoyo a la salud y elaborará un manual sobre las condiciones mínimas de desempeño laboral, tomando en consideración la naturaleza de cada función al interior de la institución.

III. **Evaluación:** el sistema de gestión del desempeño comprenderá el diseño de lineamientos e instrumentos de evaluación del desempeño orientados a valorar las cualidades individuales y colectivas de los operadores, estableciendo la periodicidad y los mecanismos de recolección y análisis de la información. Dichos instrumentos tendrán como objetivo la profesionalización y eficiencia en el desempeño de funciones y darán lugar a la creación de planes de mejora del desempeño.

Comprenderá lineamientos técnico-jurídicos para el monitoreo, la supervisión, investigación, revisión y control de la actuación de fiscales, policías de investigación, peritos, analistas, técnicos y en general de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, en términos del Plan de Persecución Penal.

IV. **Promoción:** el sistema de ascensos se regirá por la evaluación formal, objetiva y periódica del desempeño de cada servidor público.

Los ascensos y promociones comprenden la dirección y rectoría de todos los concursos que tengan por objeto ocupar un cargo vacante o de reciente creación sujetos al Sistema de Servicio Profesional de Carrera. Estos procesos se regirán por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad e independencia, equidad de capacidades y velarán en todo momento por la erradicación de la violencia contra las mujeres al interior de la institución.

V. **Separación:** el personal de la Fiscalía General será inamovible salvo casos de responsabilidad en los términos establecidos en la Ley y el Reglamento, así como por razones técnicas que afecten al funcionamiento de la institución y que objetivamente sean acreditadas.

VI. **Reincorporación:** la reincorporación comprenderá las acciones y mecanismos que tome la Fiscalía para reinstalar al personal que previamente

se haya separado de manera voluntaria, o bien, por razones institucionales excluyentes de responsabilidad y que cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto.

Todos estos subsistemas se desarrollarán de manera pública y de acuerdo con el Reglamento correspondiente.

Artículo 53. Derechos del personal de la Fiscalía General

Además de las responsabilidades y obligaciones que contiene esta Ley, los sujetos a que se refiere la misma tendrán los siguientes derechos:

I. A participar en igualdad de oportunidades en el Servicio Profesional de Carrera conforme a las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y demás normatividad aplicable;
II. A que la aplicación de las reglas del Servicio Profesional de Carrera sea objetiva, justa, transparente e imparcial;
III. A desempeñar una carrera conforme a este servicio que se base en el mérito, en la superación constante y a tener estabilidad, conforme a las disposiciones aplicables, en el desempeño de su función;
IV. A desempeñarse en su asignación, contando con condiciones adecuadas y dignas de trabajo y a formarse de manera integral;
V. A contar con una remuneración adecuada, digna, irrenunciable y que corresponda a los servicios prestados en la fiscalía;
VI. A profesionalizarse y actualizarse de manera permanente para un mejor desempeño de sus funciones;
VII. A recibir estímulos, promociones y ascensos horizontales y verticales con motivo del desempeño de su función, y
VIII. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables.

Artículo 54. Plan de Gestión de Desempeño y Desarrollo Humano

El titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera elaborará un Plan de Gestión de Desempeño y Desarrollo Humano en coordinación con la Coordinación de Planeación y Administración y lo someterá a la persona titular de la Fiscalía General para su aprobación.

El Plan deberá elaborarse para un periodo de tres años, deberá establecer todos los elementos que componen el servicio profesional de carrera, será revisado anualmente por el Consejo Técnico quien emitirá las recomendaciones que correspondan.

Artículo 55. Facultades del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera

El Centro Formación y Servicio de Carrera tendrá las siguientes facultades:

I. Diseñar las políticas y criterios institucionales del Sistema de Servicio de Carrera;

II. Planear, diseñar y llevar a cabo los procesos de reclutamiento y selección con base en principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres, o por cualquier otro motivo o condición;
III. Dirigir la operación del Centro de Evaluación y Confianza, así como todos sus procedimientos, en todo lo que atañe al personal del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General;
IV. Proponer los procesos, procedimientos, lineamientos, convocatorias, para la gestión y desarrollo de capacidades;
V. Diseñar los planes y programas interdisciplinarios y llevar a cabo las acciones de fortalecimiento de capacidades técnicas del personal;
VI. Determinar los criterios y métodos necesarios para la operación del sistema de monitoreo y evaluación del desempeño;
VII. Llevar a cabo los concursos y procedimientos para ascensos y promociones en los términos que indique el Reglamento;
VIII. Diseñar el plan anual de estímulos a la excelencia en el desempeño individual;
IX. Administrar los expedientes del personal del Servicio Profesional de Carrera;
X. Promover la celebración de convenios de coordinación e intercambio científico y tecnológico con instituciones y organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, que realicen actividades afines, con el objeto de complementar y fortalecer las propias, y
XI. Las demás que dispongan esta ley y su Reglamento.

Artículo 56. De las Relaciones Administrativas y Laborales con la Fiscalía General de la República

Las relaciones laborales entre la Fiscalía General y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el artículo 123 Constitucional, Apartado B, y por lo establecido en esta Ley.

Artículo 57. Régimen de Responsabilidades

Los servidores públicos de la Fiscalía General estarán sujetos a las faltas determinadas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como las leyes especiales.

Artículo 58. Incompatibilidades con el servicio público

En el desempeño de sus funciones, los servidores públicos de la Fiscalía General de la República no podrán:

I. Desempeñar empleo, cargo o comisión remunerada de cualquier naturaleza de derecho público o privado, nacional o internacional, salvo los de carácter docente, cultural, de beneficencia y aquellos que autorice la Fiscalía General de la República, siempre y cuando no sean incompatibles con sus funciones en la misma;
II. Conocer de asuntos cuando pudieran incurrir en conflictos de interés;
III. Ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona;

IV. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el carácter de heredero o legatario o se trate de sus ascendientes, descendientes, hermanos, adoptante o adoptado, y
V. Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, síndico, administrador, interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista, árbitro o arbitrador.

TÍTULO TERCERO
Recursos

Capítulo Único
Del patrimonio y presupuesto

Artículo 59. Del patrimonio y presupuesto de la Fiscalía General de la República

Para la realización de sus funciones el patrimonio de la Fiscalía General estará constituido por los bienes y recursos que a continuación se enumeran:

I. Los bienes muebles o inmuebles que la Fiscalía General adquiera;
II. Los bienes muebles o inmuebles que la Federación transfiera para el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General
III. Los bienes muebles o inmuebles que la Federación determine que son de uso exclusivo de la Fiscalía General;
IV. Los recursos que anualmente determine la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el presupuesto de Egresos de la Federación;
V. Los derechos de los fideicomisos o fondos destinados al cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General;
VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rentas y aprovechamientos de sus bienes muebles e inmuebles;
VII. Los recursos que reciba por concepto de los bienes o productos que enajene;
VIII. Las sanciones económicas impuestas por las autoridades competentes a los servidores públicos de conformidad con esta Ley, mismas que tendrán la naturaleza de créditos fiscales y serán enviadas para su cobro al Servicio de Administración Tributaria, el que, una vez efectuado el mismo entregará las cantidades respectivas a la Fiscalía General;
IX. Los bienes que le correspondan de conformidad con la legislación aplicable, vinculados con la comisión de delitos, así como los decomisados, y
X. Los demás que establezcan las leyes.

Artículo 60. Contrataciones

Para el caso de las contrataciones públicas que lleve a cabo la Fiscalía General se sujetarán, en lo que resulte conducente y conforme a su autonomía constitucional, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, sin perjuicio de la facultad de la persona titular de la Fiscalía General de emitir normas particulares en acuerdo con la persona titular del Órgano de Control Interno.

Artículo 61. Del presupuesto

La Fiscalía General elaborará su proyecto de presupuesto anual de egresos, el cual será remitido al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se remita a la Cámara de Diputados.

En ningún caso el presupuesto que se apruebe para la Fiscalía General podrá ser menor en términos reales que el asignado para el año fiscal inmediato anterior.

Artículo 62. Recursos para emergencias

La Fiscalía General contará con recursos para emergencias que garanticen el desarrollo de las investigaciones, en los casos que así se requiera. La Coordinación de Planeación y Administración emitirá reglas generales que se publicaran en el *Diario Oficial de la Federación* para el ejercicio, comprobación, justificación, rendición de cuentas, transparencia y fiscalización de estos recursos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

SEGUNDO. Se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

TERCERO. Los casos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto serán resueltos en las unidades a las que están adscritos, conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se adscriban a nuevas unidades en tanto se avanza en la transición orgánica de la Fiscalía General de la República.

CUARTO. Todos los convenios y actos jurídicos celebrados por la Procuraduría General de la República se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Fiscalía General, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos posteriormente.

QUINTO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se contrapongan a la presente ley y al decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral del 10 de febrero de 2017, mediante la cual se creó la Fiscalía General de la República.

SEXTO. Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su titular respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. Las referencias normativas a los agentes del Ministerio Público se entenderán referidas a las y los fiscales en los términos de esta ley.

SÉPTIMO. La Cámara de Diputados, tomando en cuenta el principio de austeridad, contemplará en el Presupuesto de Egresos de la Federación siguiente a la aprobación de esta Ley, la asignación y garantía de la suficiencia presupuestal para la instalación de la Fiscalía General de la República y la ejecución de la planeación estratégica de transición.

OCTAVO. A la entrada en vigor del presente Decreto, los bienes muebles, inmuebles y demás recursos materiales, financieros y presupuestales, propiedad de la Procuraduría General de la República, pasarán a formar parte del patrimonio de la Fiscalía General de la República. En lo relativo a bienes en posesión o servicios contratados para los fines de la Procuraduría General de la República, obtenidos por arrendamiento, comodato o cualquier otro contrato mediante el cual se haya transmitido la posesión o propalado dichos servicios, continuarán siendo utilizados por la Fiscalía General de la República.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un plazo no mayor de noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá efectuar las gestiones y trámites correspondientes, para dar cumplimiento cabal al presente artículo.

NOVENO. A partir de su nombramiento, la persona titular de la Fiscalía General contará con un plazo un año para definir la estrategia de transición, a partir de la realización de un inventario integral y un diagnóstico de los recursos financieros, humanos y materiales, casos pendientes, procesos de colaboración e inteligencia y cualquier otro insumo que considere necesario para la integración de un Plan Estratégico de Transición. Priorizará en orden de importancia el establecimiento del Servicio Profesional de Carrera y su Estatuto, la consolidación del sistema de información y análisis estratégico para la función fiscal, así como la restructura y definición de los órganos administrativos y los sustantivos para la función fiscal.

El Plan comprenderá como mínimo los aspectos siguientes:

I. Diagnóstico, mapeo y análisis de los fenómenos criminales que perseguirá; así como la definición del plan de persecución penal y la operación y despliegue territorial del modelo de investigación criminal;

II. Definición de objetivos, estrategias, acciones, metas e indicadores de resultados del proceso de transición, con base en criterios de gradualidad que consideren los tipos y fenómenos delictivos, unidades operativas centrales y estatales, regiones geográficas u otros;

III. Estrategia específica respecto al personal en activo y al reclutamiento de nuevos talentos, que contemple a su vez esquemas de retiro, liquidación, certificación, capacitación, desarrollo y gestión del cambio;

IV. Estrategia para el diseño y activación de la nueva estructura organizativa; así como del proceso de cierre de las estructuras y procesos previos;

V. Estrategia de liquidación de casos, que contemple el inventario de casos en trámite; así como su situación jurídica, tanto del sistema inquisitivo mixto como del acusatorio, para garantizar su adecuada atención; así como la identificación de casos de alto impacto social o de violaciones graves a los derechos humanos. Los casos pendientes de resolución relacionados con violaciones graves de derechos humanos o corrupción no podrán ser liquidados. La Unidad de Transición determinará la forma de atención y trámite a estos casos hasta su conclusión;

VI. Estrategia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas del proceso de transición que asegure la publicidad y mecanismos necesarios para el seguimiento, colaboración y vigilancia, y

VII. Estrategia de colaboración y articulación con otras instituciones con las que requiera coordinarse para llevar a cabo la función fiscal, tales como las instituciones de seguridad pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas, y demás instituciones.

La persona titular de la Fiscalía General definirá el plazo para la implementación del plan de transición.

DÉCIMO. La persona titular de la Fiscalía General contará con treinta días hábiles a partir de su nombramiento para convocar una Comisión de Designaciones para dar inicio al proceso de designación de las primeras cinco personas integrantes del Consejo Técnico, siguiendo la norma marcada por esta Ley. Los primeros cinco consejeros terminarán su encargo atendiendo a la siguiente fórmula de escalonamiento: el primer consejero durará 3 años en su encargo; el segundo consejero durará 3 años 6 meses; el tercer consejero durará 4 años; el cuarto consejero durará 4 años 6 meses y el quinto consejero durará 5 años en su encargo.

Dentro del mismo plazo, la persona titular de la Fiscalía General nombrará al titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera. Asimismo, integrará una Unidad de Transición, que dependerá orgánicamente de él y que tendrá como objetivo la coordinación, implementación y evaluación del Plan Estratégico de Transición. Estará integrada por un grupo interdisciplinario de expertos con reconocido prestigio, experiencia y conocimiento en gestión de instituciones públicas o privadas, diseño institucional, evaluación e implementación de políticas públicas y proceso penal acusatorio.

La Unidad se organizará a su vez en una subunidad de Clausura de la Procuraduría General de la República y una subunidad de Diseño e Instalación de la Fiscalía General de la República, las cuales, desde sus respectivas competencias, deberán generar esquemas de coordinación para el traslado y liquidación de recursos humanos, materiales y financieros, así como para la liquidación y transferencia de los casos pendientes de resolución.

La Unidad hará del conocimiento del Fiscal General las necesidades presupuestales y de cualquier índole para cumplir con sus objetivos. El Consejo Técnico tendrá la facultad de supervisar el proceso de transición establecido en dicho Plan.

La persona titular de la Fiscalía General destinará los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para el cumplimiento del Plan Estratégico de Transición.

DÉCIMO PRIMERO. La persona titular de la Fiscalía General deberá expedir los lineamientos provisionales para la organización interna de la Fiscalía dentro de un plazo máximo de noventa días contados a partir de su nombramiento. Estos lineamientos estarán vigentes hasta la expedición de los Reglamentos Orgánico y de Servicio Profesional de Carrera, que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación dentro de un plazo máximo de noventa días contados a partir de la aprobación del Plan Estratégico de Transición.

Los lineamientos que expida deberán contener reglas para priorizar la implantación de las áreas estratégicas de la Fiscalía, así como las de análisis e información. Asimismo, deberá priorizarse la unificación de los sistemas informáticos.

DÉCIMO SEGUNDO. El proceso de transición del personal de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General se llevará a cabo de acuerdo con el Plan Estratégico de Transición y será coordinado por la Unidad a cargo. Este proceso deberá llevarse a cabo conforme a los siguientes lineamientos:

I. El personal adscrito a la Procuraduría General de la República conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su relación laboral, con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades;

II. El personal adscrito a la Procuraduría General de la República que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento, continuará en la función que desempeña y tendrá derecho a participar en el proceso de selección para acceder al Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República en términos de los principios establecidos en la presente ley. Para ello, se garantizará su acceso a los programas de formación, entrenamiento, fortalecimiento de capacidades y evaluación durante el periodo de transición, en los términos establecidos en los lineamientos provisionales;

III. En tanto se instale el Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República, la profesionalización, el régimen disciplinario, la certificación y el régimen de seguridad social de las policías, peritos y analistas deberá cumplir con el régimen previsto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

IV. El Plan Estratégico de Transición garantizará condiciones dignas y apegadas a la ley para la liquidación del personal adscrito a la Procuraduría General de la República que decida concluir su relación laboral o no acceder al Servicio Profesional de Carrera reglamentado en la presente ley. El personal que no apruebe

los procesos de selección del Servicio Profesional de Carrera dejará de formar parte de la Fiscalía General de la República;

V. La persona titular de la Fiscalía General a través de quien dirija la Unidad de transición presentará un informe al Congreso de la Unión que incluya un diagnóstico integral de la institución, un Programa de Transición, el modelo financiero y el presupuesto estimado de los recursos necesarios para implementar los cambios organizacionales y de personal requerido por parte de la Fiscalía General. En el Programa de Transición, el titular de dicha Unidad incluirá un plan detallado de las etapas que comprenderán las acciones de transformación institucional y la estrategia de administración del cambio institucional que se llevarán a cabo para la operación de la Fiscalía General.

DÉCIMO TERCERO. Transcurrido un año a partir del nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General, y a la luz del Plan Estratégico de Transición y la experiencia acumulada en el proceso de transición, la o el Fiscal General realizará una convocatoria pública para la revisión del marco constitucional y jurídico de la Fiscalía General de la República. Dicha convocatoria tendrá como objetivo la identificación, discusión y formulación de las reformas constitucionales, de la legislación secundaria y/o de las reformas regulatorias necesarias para la operación óptima del modelo de Fiscalía General, propuesto en la presente Ley. Los resultados obtenidos serán públicos y se comunicarán al Congreso de la Unión con el fin de que éste realice las adecuaciones al marco jurídico que sean necesarias y pertinentes.

La convocatoria comprenderá temas relacionados con la función fiscal y de persecución penal, el modelo de investigación criminal, la competencia, el servicio profesional de carrera, los órganos consultivos, los derechos humanos y la atención a víctimas; el régimen de responsabilidades de los servidores públicos de la fiscalía, revisión de la estructura institucional, así como el régimen de transición, entre otros. Esta consulta deberá garantizar condiciones de apertura, transparencia y participación ciudadana de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, académicas y representantes del sector privado. Con base en las consultas realizadas, el Congreso de la Unión establecerá las iniciativas de reforma constitucional y de legislación secundaria pertinentes con el fin de hacer las adecuaciones jurídicas necesarias para el óptimo funcionamiento de la Fiscalía General.

DÉCIMO CUARTO. La persona titular de la Fiscalía General deberá emitir el Plan de Persecución Penal hasta un año después de su nombramiento.

DÉCIMO QUINTO. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera, la persona titular de la Fiscalía General deberá emitir normas generales relativas al desarrollo y operación de dicho servicio en coordinación con el titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera.

El Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera deberá establecer planes y programas tendientes a capacitar al nuevo personal a efecto de dar cumplimiento a las funciones asignadas a cada uno en esta Ley.

DÉCIMO SEXTO. Fiscales, policías de investigación, analistas, auxiliares y peritos, así como el personal profesional, técnico y administrativo que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren laborando en la Procuraduría General de la República se someterán a las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera que se expidan para tal efecto.

DÉCIMO SÉPTIMO. Dentro del Plan de Transición se establecerá un mecanismo expeditivo para establecer el sistema central de recepción y canalización de los asuntos nuevos que tenga que conocer la Fiscalía General.

DÉCIMO OCTAVO. La persona titular de la Fiscalía General contará con 180 días para nombrar a las personas titulares de las Fiscalías Especializadas en los términos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, verificando el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para su designación marcados en esta Ley.

DÉCIMO NOVENO. Una vez instaladas las nuevas fiscalías de inmediato solicitará la asignación del personal que integrará las nuevas unidades fiscales, conforme marca esta Ley. En el proceso de asignación, se observarán, entre otros, los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres.

VIGÉSIMO. Los casos relativos a delitos relacionados con hechos de corrupción, así como cualquier otro delito cometido por un servidor público federal en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, que hayan sido iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto por la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, deberán continuar su curso correspondiente en la misma hasta su conclusión.

Una vez concluidos los casos pendientes en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, quedará sin vigencia el Acuerdo A/011/14 por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción podrá atraer cualquiera de los casos de corrupción cuyo trámite hubiese iniciado con anterioridad a la asignación de su gestión, cuando así lo considere pertinente su titular.

Las denuncias de los casos relacionados con hechos de corrupción que hayan ingresado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, serán remitidas en su totalidad a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Senado de la República, a 25 de septiembre de 2018.

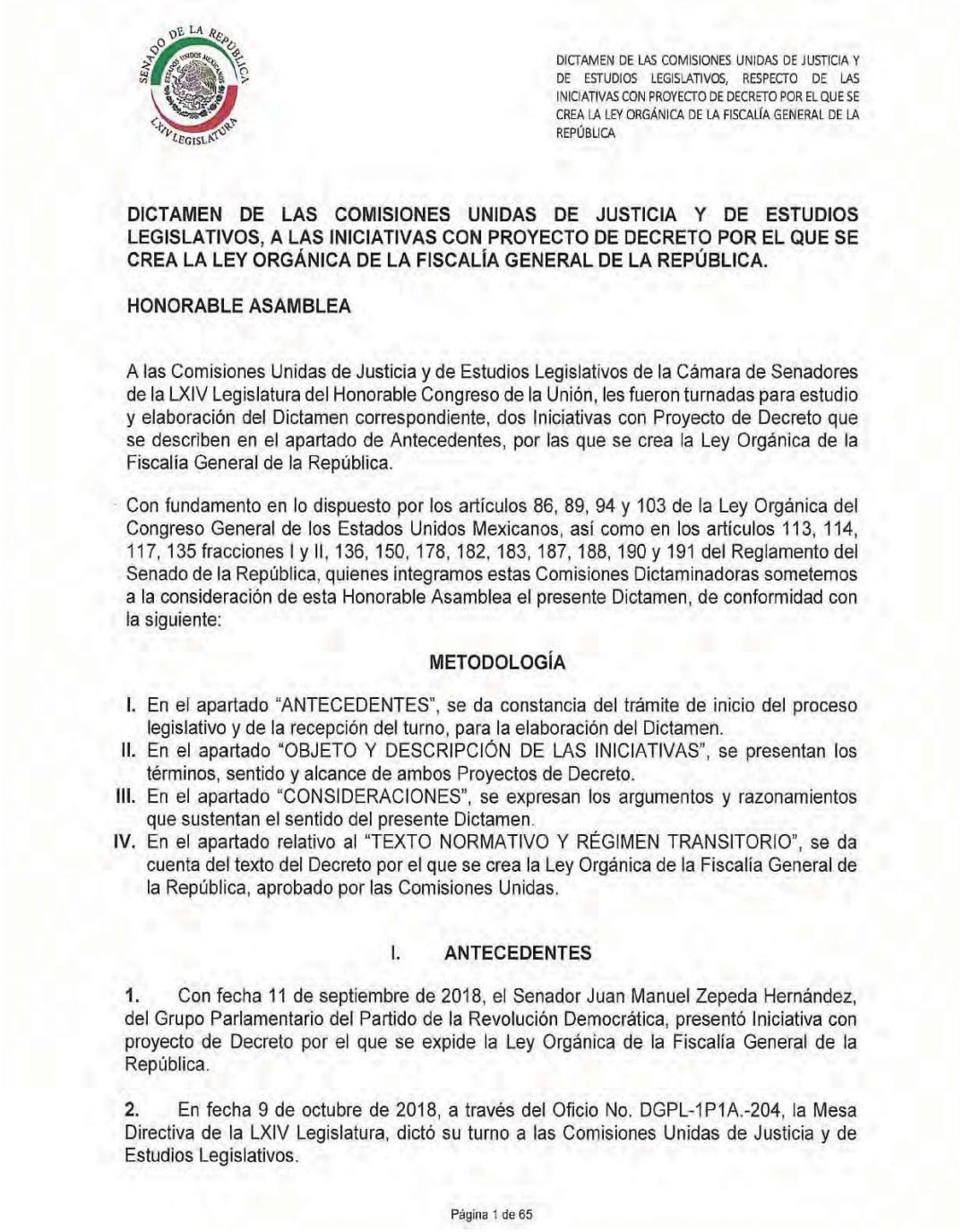
SUSCRIBEN

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Sánchez Cordero. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Adicionalmente les informo que la Mesa Directiva acordó inscribir para su primera lectura el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. El proyecto se abordó en la reunión de esta mañana y se acordó su inscripción en el Orden del Día. Este dictamen también está publicado en la Gaceta Parlamentaria, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

(Dictamen de primera lectura)



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

HONORABLE ASAMBLEA

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fueron turnadas para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, dos Iniciativas con Proyecto de Decreto que se describen en el apartado de Antecedentes, por las que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, 114, 117, 135 fracciones I y II, 136, 150, 178, 182, 183, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, quienes integramos estas Comisiones Dictaminadoras sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción del turno, para la elaboración del Dictamen.
II. En el apartado "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS", se presentan los términos, sentido y alcance de ambos Proyectos de Decreto.
III. En el apartado "CONSIDERACIONES", se expresan los argumentos y razonamientos que sustentan el sentido del presente Dictamen.
IV. En el apartado relativo al "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO", se da cuenta del texto del Decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, aprobado por las Comisiones Unidas.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 11 de septiembre de 2018, el Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

2. En fecha 9 de octubre de 2018, a través del Oficio No. DGPL-1P1A.-204, la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura, dictó su turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

Página 1 de 65

3. En sesión celebrada el 25 de septiembre de 2018, la Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, presentó Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con Aval del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

4. En fecha 9 de octubre de 2018, a través del Oficio No. DGPL-1P1A.-660, la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura, dictó turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, con rectificación de turno en fecha 29 de octubre de 2018 a la Comisión de Estudios Legislativos.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS

1. **Iniciativa presentada por el Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, por la que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la cual consta de 10 Capítulos, 84 artículos y tres artículos transitorios:**

1.1 La Iniciativa identificada con el numeral 1. propone la creación de la Fiscalía General de la República, conforme a lo establecido en el nuevo sistema procesal acusatorio en vigor desde junio de 2016, previendo la estructura y el diseño de la institución y de las facultades de las personas funcionarias de la misma, que deberán garantizar la procuración de justicia bajo los principios constitucionales previstos en el artículo 102 Constitucional.

1.2 Del mismo modo, el Iniciante propone fortalecer la institución del Ministerio Público, dotándolo de instrumentos legales y con estos resistir presiones indebidas y hacer frente a los intentos de influenciar sus decisiones acerca del curso de una investigación o el ejercicio de la acción penal y con estas fortalezas no ceder a la pretensión de utilizar indebida o políticamente el poder punitivo del Estado mexicano para reprimir la protesta social o para vulnerar reclamos de minorías o grupos vulnerables, todo esto en concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Penales cuyo objeto es *"...establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte".*

1.3 De igual manera, toma en cuenta lo establecido en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, con la finalidad de concentrar la diversidad procesal del nuevo sistema procesal. Asimismo, con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de establecer la distribución de competencias para garantizar los derechos humanos de las personas

adolescentes a quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de un ilícito, aplicando la solución conforme el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

1.4 Menciona además, que propone mecanismos de rendición de cuentas, las relaciones con la policía, los criterios de asignación de casos, entre otros, ya que a diferencia de los órganos jurisdiccionales que deben adoptar la posición procesal de un tercero imparcial, las personas servidoras públicas deberán ejercer sus funciones en defensa del interés público y la representación de la sociedad dentro de los procedimientos y procesos penales, siempre ejerciéndolas con objetividad y lealtad, salvaguardando los derechos del imputado y privilegiando la situación de las víctimas.

1.5 Por otra parte, indica el proponente que el patrimonio de la Fiscalía se integrará por los bienes que actualmente tiene asignados la Procuraduría General de la República, más los que obtenga por diversas vías precisadas en la ley para apoyar su labor y reconocer a las y los elementos que se distingan en su actuar; deberá presentar un informe anual de labores, publicándolo por los medios que para tal efecto se establecen y se le faculta para elaborar su proyecto de presupuesto anual de egresos que deberá ser enviado al Congreso de la Unión.

1.6 El proponente destaca la importancia de contar con información genética disponible de niñas y mujeres desaparecidas a nivel nacional. Asimismo, plantea la preservación de muestras celulares de familiares de personas desaparecidas que lo consientan, toda vez que el fenómeno de violencia en contra de las mujeres lo convierte en un asunto prioritario.

1.7 Asimismo, plantea la creación de un sistema de información legislativa, jurisprudencial y doctrinal, para el conocimiento de la legislación nacional e internacional, a efecto de cumplir con las atribuciones de la Fiscalía en materia de control constitucional.

1.8 Finalmente, regula la propuesta las funciones del Ministerio Público en la investigación de las conductas que se presumen ilícitas. Por otra parte dispone que, las Instituciones Policiales del estado mexicano, entidades federativas, Ciudad de México, municipios y demarcaciones territoriales proporcionarán los auxilios y apoyos que requieran los agentes del Ministerio Público de la Federación y la policía de investigación, cuando tomen conocimiento de los hechos como primer respondiente, además de las previstas en otros ordenamientos legales en la materia.

2. **Iniciativa presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila, Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero y Senador Julio Menchaca Salazar, con Aval del Grupo Parlamentario de MORENA, por la que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que consta de tres Títulos, 62 artículos y 20 artículos transitorios:**

2.1 La Iniciativa expone que, conforme el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "el Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público, autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio" de ahí la importancia de expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que sustituirá la de la Procuraduría General de la República.

2.2 Indica que la autonomía es un atributo que protege la función de la Fiscalía en la investigación y persecución de los delitos frente a las posibles influencias indebidas, tanto externas como internas, garantizando con ello el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, cuando las conductas antijurídicas calificadas como delitos constituyen violaciones a los derechos humanos.

2.3 Señala la propuesta que sus facultades circunscriben las atribuciones del Ministerio Público a la materia penal, lo cual indica que abandona otras funciones, como la de ser representante jurídico de la Federación y todo lo relacionado con la vigilancia de la constitucionalidad y la legalidad, que serán atribuciones del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. Incorporan la duración del titular de la Fiscalía que será de nueve años, así como las causas graves por las que podrá ser removido de su cargo por el Ejecutivo Federal.

2.4 Advierte que esta propuesta finalmente vela por las víctimas y cuida que no sean objeto de nuevas agresiones y nuevos delitos. Además, mencionan que siguen la línea marcada por el ordenamiento constitucional y otorga a la nueva Fiscalía General de la República autonomía, con la tarea de investigar los hechos delictivos materia de su competencia y además, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, justicia y reparación integral.

2.5 Refieren los Iniciantes que la propuesta proviene no sólo de legisladores, sino que es una propuesta basada en consensos, con expertos en materia de procuración de justicia, así como grupos en defensa de víctimas y miembros de la academia.

2.6 Específicamente en su propuesta destacan que se garantiza la investigación no fragmentada, asimismo, se señala a la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación.

2.7 La propuesta establece los fines institucionales para investigar los delitos y el esclarecimiento de los hechos en materia de su competencia; los Principios Rectores con los que la Fiscalía General regirá su actuación.

2.8 También se señala su competencia para atraer casos del fuero común conforme a las reglas de atracción establecidas en leyes aplicables. Para estas labores de la Fiscalía General de la República en la propuesta en comento, propone una nueva estructura que

incluye fiscalías especializadas marcadas por la ley y se propone la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, además de coordinaciones, oficinas, órganos y consejos necesarios para garantizar el principio de eficacia y cumplimiento expedito de sus labores. Asimismo, incluye actos de colaboración de cualquier autoridad para la práctica de un acto de investigación o procedimental, siempre que dicha solicitud sea realizada de manera fundada y motivada.

2.9 Finalmente, la Iniciativa propone que el Fiscal General aprobará el plan que orientará las atribuciones institucionales, el cual contendrá una estrategia de atención y trámite a través del análisis de la situación de la incidencia delictiva. También se propone garantizar la publicidad y transparencia generada en el marco de sus atribuciones.

Derivado de lo anterior y por los argumentos debidamente fundados y motivados con anterioridad por quienes promueven sendas Iniciativas, objeto del presente Dictamen, se presentan las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Las y los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, destacamos que con fecha 10 de febrero del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, que para el caso que nos ocupa, dispone la reconfiguración del Ministerio Público a través de la Fiscalía General de la República; asimismo cabe destacar que en 2016, se precisó el término "de la Federación", por virtud de reforma constitucional respecto de la competencia del Ministerio Público de la Federación, la reforma relevante en este rubro, alude al pase automático del Procurador General al Fiscal General, resultado de un amplio debate nacional que motivó la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 27 de agosto de 2018, que inhibió dicho pase automático para dar paso a una Fiscalía General cuya configuración se desprende de auténticos procesos democráticos y que resuelva verdaderamente los problemas estructurales como lo es la eficiencia operativa para atender la grave situación de inseguridad que priva en el país, de conformidad con las siguientes notas características:

- Que es urgente que la población en México finalmente cuente con un órgano capaz de hacer frente a la problemática actual de inseguridad y corrupción, que garantice, entre otros aspectos, el debido proceso legal consagrado en el artículo 14 constitucional, la persecución de los delitos por mandato constitucional y la vigilancia del proceso desde la denuncia hasta la posible sentencia condenatoria que en su caso pronuncie la autoridad responsable.
- Que en el nuevo sistema penal, la Fiscalía General de la República observará plenamente los derechos del imputado y de las víctimas en el marco de un proceso penal garantista que también incorpore y visibilice la justicia de no repetición y reparación del daño. Lo anterior contribuirá sin duda a la legitimidad buscada desde hace años para el personal a cargo de la procuración de justicia, reconociendo la voz de las víctimas más allá

del foro público en la reconfiguración del marco legal, al lado de los representantes populares.

- Que el uso de las tecnologías en materia de genética, debe estar al servicio de la procuración de justicia, a través de la integración de una Base Nacional de Información Genética, que al efecto proporcionen las víctimas o sus familiares, con fines exclusivamente de identificación de cuerpos o restos humanos.

SEGUNDA. Las que dictaminan, coinciden en que a más de 4 años de la publicación de la reforma constitucional en comento, no se cuenta con la aprobación de una ley marco que el Poder Legislativo haya logrado consensuar ni mucho menos con la designación de un Fiscal General, por lo que resulta impostergable en ejercicio de sus atribuciones, lograr los acuerdos necesarios para la expedición de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

TERCERA. Los integrantes de estas Dictaminadoras coincidimos plenamente en que la tarea no es sencilla, en México la figura de la fiscalía como ente persecutor de delitos prácticamente no ha cambiado desde 1857 en el que se estableció la existencia de un fiscal competente en materia penal y de un Procurador General con funciones de vigilancia para asegurar la legalidad en los procesos. Hasta 1917 se recogió en la Constitución la figura del Ministerio Público, presidido por un Procurador General, al que prácticamente se le atribuyó el monopolio de la acción penal, con la policía judicial bajo su mando, consolidándose también como representante de los intereses sociales y de la Federación, así como Consejero Jurídico del Gobierno. Se entiende entonces porqué esta arquitectura institucional no ha favorecido a la población, ni ha podido cumplir su función como procuradora de justicia y la persecución penal, sino que ha fungido como un aparato coactivo, inadecuado y con grandes márgenes de discreción y manipulación.

CUARTA. Las Dictaminadoras consideramos prudente señalar que la reforma constitucional del 2014 que crea la Fiscalía General de la República requiere finalmente de un nuevo desarrollo normativo a través de una Ley Orgánica que atienda los principales desafíos en la materia, deje atrás la ineficiencia y la falta de profesionalización de quienes investigan y persiguen delitos en México.

El diseño institucional de la nueva Fiscalía General de la República, demandada por la Carta Magna, debe incorporar mecanismos diferentes y eficientes para la sana rendición de cuentas de la institución como tal, así como de sus servidores públicos en lo individual, a través de los cuales se promuevan eficiencia, la integridad y se combata la corrupción interna.

Por todo lo expuesto, se sostiene que la verdadera transformación de la institución en que se organiza al Ministerio Público de la Federación debe pasar por una nueva propuesta de diseño institucional que se plasme en la legislación orgánica y que sea capaz de atender los principales desafíos que se han identificado.

Una de ellas es que la estructura actual de la Procuraduría General de la República sigue respondiendo a un proceso penal sumamente formal de carácter escrito, en el que la organización del trabajo de las distintas unidades sustantivas consistió en un simple cambio de nomenclatura: de "integrar averiguaciones previas" a "integrar carpetas de investigación".

Por otra parte, en el sistema acusatorio el papel que preponderantemente deberían ejercer los Ministerios Públicos o Fiscales es el litigio penal y lo que se observa de la estructura actual es que la mayoría de las unidades sustantivas de la Procuraduría General de la República siguen volcadas en actividades consistentes en documentar investigaciones. Poco se ha trabajado en modernizar los procesos y estructura institucional para que los fiscales enfrenten audiencias públicas y operen bajo la lógica de la desformalización de las actividades de investigación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversos expertos de organizaciones civiles también han denunciado que una grave problemática a resolver es el asunto de la excesiva e impráctica fragmentación interna de los expedientes y de la propia investigación de los hechos denunciados. Ello claramente ha resultado en distintos asuntos relevantes, en la imposibilidad de acceder a informaciones, de tener una sola versión oficial, reconocer pruebas, entre otros, que ayudaría a solucionar eventos que laceran a la sociedad.

Respecto a la generación y operación de estrategias de investigación hay que recordar que el esquema tradicional solamente permite a las policías y los agentes del ministerio público a realizar actos de investigación, además su adscripción sigue siendo mediante un superior jerárquico de la misma institución, burocratizando y tornando ineficiente la conducción de la investigación a cargo de los fiscales que regula el artículo 21 constitucional.

De manera general, tampoco se cuenta con un sistema óptimo que proporcione análisis estratégicos de los distintos fenómenos criminales que diariamente azotan al país y sirva, sobre todo, para desarrollar nuevas políticas y mejore el cumplimiento de las funciones de investigación y ejercicio de la acción penal.

QUINTA. No escapa a estas Dictaminadoras que con fecha 23 de septiembre de 2014 el titular del Poder Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Diputados, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expediría la Ley de la Fiscalía General de la República y se reformarían, adicionarían y derogarían diversos ordenamientos, lo anterior, previo a las reformas constitucionales de fecha 29 de enero de 2016 y 27 de agosto de 2018. Resultado de los amplios debates durante el último semestre de la LXIII Legislatura, el tema de la Fiscalía General de la República volvió a ser objeto de reforma constitucional dado el largo tiempo pasado (cuatro años) se hacía necesario corregir el llamado "pase automático" del titular de la vieja procuraduría a la nueva fiscalía. Este último hecho indica a estas Dictaminadoras que el debate legislativo que dio origen a la Minuta ha sido superado por la realidad y la discusión social y constitucional de los últimos cuatro años. Ahora bien, con base en lo dispuesto por el artículo 183 numeral 4 del Reglamento del Senado de la

República, no es posible acumular Minutas remitidas por la Cámara de Diputados, con Iniciativas originadas en el Senado. Sin embargo la necesidad de expedir una Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República sigue siendo urgente. Por lo tanto es imprescindible continuar y concluir el proceso legislativo previsto por el Artículo 72 de la Carta Magna, discutiendo las dos Iniciativas presentadas durante este Primer Período de Sesiones de la LXIV Legislatura.

SEXTA. Estas Dictaminadoras destacamos especialmente la importancia de incorporar al ámbito de atribuciones de la Fiscalía General de la República, concretamente a través de la Coordinación de Métodos de Investigación, la instauración de la Base Nacional de Información Genética, que integre la información proporcionada por víctimas o familiares de víctimas respecto de personas desaparecidas en el territorio nacional. Dicha información contendrá los resultados de laboratorio a este respecto. Cabe destacar que esta información deberá estar protegida conforme a lo dispuesto por el marco regulatorio en materia de protección de datos personales y únicamente podrá ser empleada para la identificación de cuerpos o restos humanos.

SÉPTIMA. Los integrantes de estas Dictaminadoras coincidimos en la importancia de incluir en el ámbito de las atribuciones de la Coordinación General de la Fiscalía General de la República, la obligación de compilar la información relativa a la información legislativa, jurisprudencial y doctrinal, que contribuya al cumplimiento de las atribuciones previstas para la fiscalía en materia de medios de control de constitucionalidad.

OCTAVA. Por estas razones, las Comisiones Dictaminadoras consideran necesario aprobar la creación de una nueva Ley Orgánica que dé forma a un sistema de procuración de justicia capaz de enfrentar esta problemática, de manera profesional y moderna. Tomando en consideración ambas propuestas se ha llegado a la conclusión de que la norma fortalezca la institución constitucional para mejorar la toma de decisiones en la investigación, al mismo tiempo que responda a reclamos de grupos vulnerables y vulnerados.

Por lo mismo, el proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que abordamos en el presente dictamen, respetará el señalamiento constitucional y creará un órgano autónomo, encargado de dirigir jurídicamente las investigaciones, enfocándose en la estrategia de gestión de los casos para el ejercicio de la acción penal en el marco de un sistema de justicia penal acusatorio.

Como principios rectores de la actuación de la fiscalía se aprueba establecer los de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, accesibilidad, debida diligencia, imparcialidad y otros establecidos en la Constitución, tratados internacionales, leyes y demás disposiciones aplicables.

La estructura orgánica diseñada para el ejercicio de la función fiscal responde a criterios de flexibilidad y pertinencia para el abordaje de los distintos fenómenos delictivos que afectan a la sociedad mexicana, con ello se rompe con el paradigma de la investigación

caso a caso, que ha impedido que se aborde la lesión a los bienes jurídicos en toda su complejidad, lo cual, ha generado la instalación de estructuras criminales y la impunidad.

NOVENA. A partir del análisis de ambos proyectos, las que dictaminamos concluimos que la estructura de la Fiscalía General de la República habrá de contar con un Fiscal General, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, la Coordinación de Investigación y Persecución Penal, la Coordinación de Métodos de Investigación, la Coordinación General, la Coordinación de Planeación y Administración, el Órgano Interno de Control, así como un Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera y un Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de la República. Dicho Instituto, será un órgano administrativo desconcentrado, asistirá en la prestación de los servicios periciales y ciencias forenses y estará dotado de autonomía técnica para el ejercicio de sus funciones.

Tras un amplio debate, coincidimos en el replanteamiento de lo siguiente:

a) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto reformado con fecha 10 de febrero de 2014 y la diversa publicada en el mismo Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de agosto de 2018, el nombramiento del Fiscal General de la República, se retoma en dichos términos, tomando en consideración el criterio de buena reputación precisado en la ley.

b) La Coordinación General podrá suplir al Fiscal General de la República en sus ausencias y representarlo en las relaciones institucionales con otras entidades u órganos de gobiernos locales, nacionales, federales e internacionales, entre otras; se le faculta para intervenir por sí o por conducto de los fiscales y demás órganos de la fiscalía, auxiliado de la Coordinación de Investigaciones y Persecución Penal en lo que hace a coordinar la gestión, movilidad e integración de las unidades de investigación y litigio.

c) Para ello, el Instituto, que será un órgano administrativo desconcentrado, asistirá en la prestación de los servicios periciales y ciencias forenses, dotado de autonomía técnica para el ejercicio de sus funciones.

d) Las unidades de investigación y litigación serán órganos compuestos por equipos de investigación y litigación, que tienen como función organizar y gestionar la estrategia de la Fiscalía General de la República de forma flexible y eficiente establecida en el Plan de Persecución Penal.

e) Cualquier ciudadano podrá participar en el proceso de designación, aportando información relevante sobre los aspirantes, expresando su apoyo u objeción contra candidaturas especificas, asistiendo, proponiendo y formulando preguntas durante las comparecencias.

f) Se señalan funciones comunes para las Fiscalías Especializadas y para cada una de las fiscalías, incluyendo la Fiscalía de Derechos Humanos, que estará a cargo de la conducción legal de la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal en violaciones graves a los derechos humanos que involucren la participación, anuencia o tolerancia de funcionarios o servidores públicos.

g) La Coordinación de Métodos de Investigación, analizará de forma estratégica los datos agregados del fenómeno criminal, la realización de estudios criminógenos y geodelictivos, así como la información de contexto que se considere relevante para coadyuvar en la investigación, entre otras.

h) Además, se crea el Órgano Interno de Control a cargo de los procedimientos de responsabilidades administrativas, la fiscalización de todos los ingresos y egresos de la institución y presentar las denuncias ante la Fiscalía de Asuntos Internos por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito.

i) Asimismo, se señala que los servidores públicos de la Fiscalía General de la República con motivo de sus funciones, están sujetos al régimen de responsabilidades a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de conformidad con lo dispuesto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente ley, agregándose un apartado de faltas graves para el caso de remoción de la persona titular de la Fiscalía.

j) En lo que se refiere al Servicio Profesional de Carrera, se instrumenta el sistema integral de regulación del empleo público de todo el personal que preste servicios en la Fiscalía General de la República, que garantizará la igualdad de oportunidades, idoneidad y mérito para el ingreso y reclutamiento, ascensos, estímulos y recompensas.

k) Además, es importante mencionar que se introduce un mecanismo ciudadano novedoso con el objetivo de fortalecer la legitimidad democrática de la Fiscalía General de la República, ya que se crea un órgano ciudadano independiente e interdisciplinario que será integrado por cinco ciudadanos expertos en temas de procuración de justicia, investigación criminal y derechos humanos. Dicho Consejo tendrá como facultades primordiales opinar sin carácter vinculante sobre el Plan de Persecución Penal y otros programas anuales de trabajo, llevando a cabo la importante función de evaluar su implementación y opinar sobre la creación de nuevas estructuras en la fiscalía, entre otras facultades.

DÉCIMA. Estas Dictaminadoras coincidimos en que el artículo 21, párrafo décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe hacerse realidad en cuanto a que *"El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir con los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública..."*. Cabe señalar entonces que dentro de las funciones de seguridad pública se encuentra también la prevención de los delitos, su investigación y el esclarecimiento de los hechos.

Debemos precisar que las facultades previstas para el Ministerio Público de la Federación en el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán facultades de los órganos fiscales, destacadamente, la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal, la solicitud de medidas cautelares contra los imputados, buscar y presentar los medios de prueba que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito, procurar que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita, pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los asuntos que la ley determine.

Los legisladores concluimos en una redistribución de facultades directas a cargo de la persona titular de la Fiscalía General de la República, tal es el caso de la protección de los sujetos procesales en su ámbito de responsabilidad y no de la Coordinación de Métodos de Investigación.

Por cuanto hace al Órgano Interno de Control, cuyos extremos se encuentran previstos desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reformula la redacción de sus facultades a fin de guardar consistencia con las homólogas en otros órganos constitucionales autónomos.

En este dictamen, se incluye de manera armónica con las demás disposiciones de esta ley el contenido del artículo 14 relativo a la estructura de la Fiscalía

Las Dictaminadoras consideramos pertinente referir al Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias como ente desconcentrado, adscrito a la Coordinación de Investigación y Persecución Penal con la finalidad de regular su ejercicio vía reglamentaria.

Asimismo, coincidimos en la reconfiguración de las causas graves de remoción de la persona titular de la Fiscalía General de la República y se precisan las causas en el contexto de la propia ley. Es prudente hacer el señalamiento que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 102, apartado A, fracción IV, refiere las faltas graves del Fiscal, por lo que esta Ley Orgánica no puede establecer un esquema de faltas graves distinto al de la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Se establece además que las reglas de atracción se encuentran en las leyes especiales, toda vez que son éstas las que están habilitadas para establecer los tipos de atracción en nuestro orden jurídico vigente. El tema de un fundamento constitucional o de tratados internacionales que habiliten la atracción es un vestigio de las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil para presentar un modelo de ley conjuntamente con una reforma constitucional.

Es de destacarse la figura del Mecanismo de Apoyo Exterior la cual se encuentra contemplada en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, sin embargo es importante incluir una disposición normativa en la ley orgánica que nos ocupa que atienda a las víctimas en territorio extranjero a través de este mecanismo.

Ahora bien, es indispensable decir que el Plan de Persecución Penal se elaborará, previa consulta al Consejo Ciudadano, en los términos del Reglamento de esta Ley, garantizando condiciones de apertura y transparencia con énfasis en la participación ciudadana.

En lo que respecta a las obligaciones de asistencia consular previstas en las facultades de los órganos fiscales, los órganos que ejercen la función fiscal no pueden limitarse a las

personas migrantes. Si bien es una población objetivo por la condición de víctima en la que se puede encontrar, este derecho asiste a toda persona extranjera.

En este mismo apartado, como autoridad de un estado democrático, por más inmediatas que sea deseable que se realicen las actuaciones de la Fiscalía, éstas deben circunscribirse a la legislación aplicable para acceder a la información, documentos, registros físicos y electrónicos en poder de las instituciones públicas y privadas.

Se prevé la creación de la unidad de sistemas de información como un área que ayude a la persona titular de la Fiscalía General de la República a procesar la información y distribuirla entre las coordinaciones, fiscalías especializadas y demás unidades de la Fiscalía.

DÉCIMA PRIMERA. Por cuanto hace a las disposiciones transitorias, concluimos que la eventual publicación del Decreto planteado en el presente Dictamen, surta los efectos necesarios para que el Congreso de la Unión emita la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República contenida en el primer párrafo del artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 10 de febrero de 2014.

Por lo que hace a la abrogación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se especifica en qué casos esta ley continúa vigente, de conformidad con las disposiciones transitorias del propio Decreto y los acuerdos que emita el Fiscal General, en ejercicio de su autonomía.

Se prevé también que una vez instaladas las Fiscalías Especializadas, sus respectivos titulares de inmediato soliciten a la persona titular de la Fiscalía General, la asignación del personal que integrará las nuevas unidades fiscales, conforme marca esta ley. En el proceso de asignación, se observarán, entre otros, los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres.

Como clave fundamental para instituir la Fiscalía General de la República, se plantea un proceso de transición que establezca las estrategias y la asignación de recursos para alcanzar los objetivos inmediatos y dar seguimiento en la toma de decisiones; para lo anterior, se requiere de un esquema de gradualidad que caracterizará la transición, misma que parte de la premisa de que ningún cambio profundo de largo aliento puede lograrse en un corto plazo sin costo alguno. La experiencia internacional y nacional indican que establecer transformaciones de esta envergadura sin garantizar un proceso planificado y gradual de cambio, genera incentivos perversos para llevar a cabo procesos estrictamente nominales.

Por tanto, se enfatiza la importancia de un Plan de Transición que ayude a establecer un esquema de gradualidad basado en criterios claros y objetivos, tales como ubicación geográfica, regionalización, complejidad, procesos, tamaño de las estructuras y/o costos asociados de la transformación.

El proceso de transición ordenado asume que se cuenta con la información necesaria para la toma de decisiones y que ésta permite a su vez, distinguir claramente los procesos. Por ello, se ha definido de manera prioritaria la conformación de una unidad que dote de certidumbre el proceso de transición, encargada de la coordinación, implementación y evaluación del Plan Estratégico de Transición.

Para lograr un proceso exitoso de transición, la ley observará en primer lugar, garantizar y optimizar suficiencia presupuestal al proceso, tanto para el proceso de retiro o liquidación del personal, como para el desarrollo de plataformas tecnológicas y la restauración de los recursos materiales o de infraestructura que sean necesarios para la operación.

IV.- TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO

Con base en el análisis de la propuesta normativa de ambas iniciativas, habida cuenta de las precisiones en torno a remisiones a ordenamientos diversos, así como de técnica legislativa que han permitido su complementariedad, los integrantes de estas Comisiones Unidas coincidimos en el diseño del texto del Decreto que se plantea en el presente Dictamen, de conformidad con el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, como sigue:

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Capítulo I
Marco General de Operación

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente Ley tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables.

Artículo 2. Fines institucionales

La Fiscalía General de la República tendrá como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad; reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.

Artículo 3. Principios Rectores

La Fiscalía General de la República regirá su actuación por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de niñez y adolescencia, accesibilidad, debida diligencia e imparcialidad.

En todos los casos deberán observarse los principios de equidad, igualdad sustantiva y no discriminación en razón de la condición étnica, migratoria, de género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencia, orientación o identidad sexual, estado civil o cualquier otra condición o motivo que atente contra la dignidad humana; o bien, tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables.

Artículo 4. Competencia

La Fiscalía General de la República tendrá las competencias señaladas en la Constitución, la presente Ley y las demás disposiciones aplicables.

La Fiscalía General de la República tendrá la facultad de atraer casos del fuero común conforme a las reglas de atracción establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las leyes aplicables, garantizando que la investigación no se fragmente. En los casos de delitos que trasciendan el ámbito de una o más entidades federativas y cuando exista sentencia, resolución o pronunciamiento de un órgano u organismo previsto en tratado internacional.

La víctima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción mediante un escrito libre dirigido a la persona titular de la Fiscalía. La negativa de atracción podrá ser impugnada en los casos que disponga esta Ley o su Reglamento.

Artículo 5. Funciones de la Fiscalía General de la República

Corresponde a la Fiscalía General de la República:

I. Investigar y perseguir los delitos;
II. Ejercer la acción penal;
III. Procurar la reparación del daño de las víctimas;
IV. Adoptar y, en su caso, promover la adopción de medidas de protección a favor de las víctimas, testigos u otros sujetos procesales;
V. Intervenir en el proceso de ejecución penal;
VI. Intervenir en las acciones de extradición activa y pasiva;
VII. Intervenir en las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, y
VIII. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables.

Capítulo II
Del Plan de Persecución Penal

Artículo 6. Plan de Persecución Penal

La persona titular de la Fiscalía General de la República aprobará el Plan de Persecución Penal, considerando las prioridades nacionales establecidas en la política criminal para orientar las atribuciones institucionales, las prioridades en la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal y las funciones que deben desempeñar las personas que prestan servicios en la institución; así como los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.

El Plan de Persecución Penal, contendrá una estrategia de atención y trámite en la que se deberá considerar:

I. Los distintos análisis de la incidencia delictiva;
II. Los diagnósticos situacionales;
III. Las estadísticas de percepción de la violencia en la ciudadanía;
IV. Los análisis de información elaborados por instancias especializadas;
V. Los diagnósticos elaborados por organizaciones civiles;
VI. Los informes sobre la situación de las víctimas del delito;
VII. Los informes sobre violaciones a los derechos humanos;
VIII. Los demás instrumentos que sean fuente certera de información relacionada con los fenómenos criminales.

El diseño del Plan de Persecución Penal, previo a su aprobación, deberá garantizar la participación ciudadana, así como, de otras entidades de seguridad, procuración e impartición de justicia, conforme a la metodología que apruebe el Fiscal General de la República.

Para efectos de control, la persona titular de la Fiscalía General de la República, al inicio de su gestión deberá presentar ante el Senado de la República el Plan de Persecución Penal, previa consulta al Consejo Ciudadano. Asimismo, deberá presentar anualmente ante dicha Cámara los resultados y modificaciones del mismo en su caso.

Artículo 7. Publicidad y transparencia

La Fiscalía General de la República garantizará el acceso a la información pública generada en el marco de sus atribuciones y conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable.

Respecto a las investigaciones relacionadas con las violaciones a los derechos humanos, se estará a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 8. Del mandato o solicitud de colaboración

Los órganos a cargo de la función fiscal y de investigación podrán solicitar la colaboración de cualquier autoridad para la práctica de un acto de investigación o procedimental.

Los actos de colaboración entre la Fiscalía General con autoridades federales, estatales y municipales, se realizará de conformidad con lo previsto en los artículos 21 y 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Capítulo IV del Título IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la presente Ley, así como en las disposiciones contenidas en otras normas y convenios de colaboración que se hayan emitido o suscrito.

TÍTULO SEGUNDO
Funciones y Facultades

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 9. Facultades de los órganos fiscales

Los órganos que ejercen la función fiscal tendrán las siguientes facultades:

I. La persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal;
II. Solicitar las medidas cautelares contra los imputados;
III. Buscar y presentar los medios de prueba que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito;
IV. Procurar que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita;
V. Pedir la aplicación de las penas;
VI. Intervenir en todos los asuntos que la ley determine;
VII. Ejecutar los lineamientos de la política y Plan de Persecución Penal dictados por la persona titular de la Fiscalía General de la República;

VIII. Conducir legalmente la investigación de los delitos, ejercer la acción penal y abstenerse o desistirse de ésta, de acuerdo con las leyes aplicables;

IX. Dirigir funcionalmente a las policías en lo concerniente a la investigación de los delitos;

X. Solicitar y efectuar actos de investigación, dentro o fuera del territorio nacional, conforme al principio de libertad probatoria;

XI. Garantizar la protección de las víctimas, testigos y otros sujetos procesales, en el marco de la legislación vigente, por sí o en coordinación con otras entidades públicas o privadas;

XII. Intervenir para garantizar el pleno cumplimiento de las resoluciones judiciales en los términos establecidos por la legislación nacional de ejecución penal;

XIII. Requerir y coordinar la cooperación y coadyuvancia necesaria de instituciones públicas y privadas, en la conducción legal de la investigación y ejercicio de la acción penal;

XIV. Garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas vinculadas con las investigaciones, con independencia de su situación jurídica, así como de las víctimas del delito;

XV. Aplicar los estándares, nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de niñez y adolescencia, así como el enfoque diferencial y especializado, en las investigaciones y procesos penales;

XVI. Aplicar los protocolos de investigación que les competan;

XVII. Informar a las personas extranjeras, especialmente a quienes sean migrantes, víctimas o testigos de delitos cometidos en territorio nacional sobre los derechos que les asisten en materia de apoyo consular en los casos que se requiera, de retornar a su país de origen o permanecer en territorio nacional y, en su caso, de solicitar la condición de visitante por razones humanitarias, la condición de persona refugiada o protección complementaria, así como requerir a la autoridad competente un informe de las acciones que haya realizado respecto de su canalización a las instituciones públicas o privadas especializadas para brindarles la atención correspondiente, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

XVIII. Ejercer todas aquellas funciones que establezcan las leyes procesales o especiales, así como las que disponga el Fiscal General a través de la normatividad interna, en el ámbito de su competencia;

XIX. Acceder de conformidad con la legislación aplicable a la información, documentos, registros físicos y electrónicos en poder de las instituciones públicas y privadas;

XX. Citar a los servidores públicos para la realización de entrevistas, obtención de información, acceso a lugares, archivos, documentos y, en general, para las diligencias necesarias por motivo de sus funciones en los lugares que establezca el personal a cargo de la función fiscal, sin sujeción a autorización o aceptación previa de sus superiores jerárquicos; y

XXI. Las demás que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás leyes en la materia.

Artículo 10. Obligaciones de las y los fiscales ante las víctimas.

En toda investigación y proceso penal las y los fiscales deberán garantizar los derechos de las víctimas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual tendrá las siguientes obligaciones:

I.Coordinar con las víctimas, sus representantes y organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales que las acompañan y asesoran, la generación de planes de investigación y la práctica de diligencias específicas que las involucren, de conformidad con lo que establezca el Reglamento;

II. Proporcionar de forma clara y permanente a las víctimas, sus representantes y asesores, información sobre sus derechos, sobre el estado de los casos y actos de investigación previstos y programados, garantizando su participación en las diligencias que correspondan;

III. Dar acceso a los registros y proporcionar copia gratuita de estos en forma física o magnética solicitadas por las víctimas y sus representantes, con relación a los casos, para facilitar su conocimiento y participación en los mismos;

IV. Garantizar el derecho de las víctimas y sus representantes, a presentar peritajes independientes, facilitando para ello, su acceso a los casos;

V. Garantizar a las víctimas la protección y asistencia a la que tienen derecho, por parte de las entidades públicas o privadas que correspondan, de conformidad con la presente ley y demás aplicables;

VI. Garantizar a las víctimas o sus familiares, el uso exclusivo de la información genética resguardada en la Base Nacional de Información Genética, para la identificación de cuerpos o restos humanos, en el caso de personas desaparecidas, de conformidad con lo que establezcan los Lineamientos Generales en esta materia;

VII. Garantizar la perspectiva de género, de interculturalidad, de niñez y adolescencia, así como el enfoque diferencial y especializado en la investigación y ejercicio de la acción penal, de acuerdo a las condiciones específicas de las víctimas, y

VIII. Garantizar a las víctimas que lo requieran intérprete y traductor, por sí o en coordinación con otras entidades públicas, privadas o personas en lo individual.

Artículo 11. Órganos a cargo de la función fiscal

La representación de la Fiscalía General de la República corresponde a los siguientes órganos:

I. Titular de la Fiscalía General de la República;
II. Titulares de la Fiscalía de Derechos Humanos, la Fiscalía de Delitos Electorales, la Fiscalía de Combate a la Corrupción y la Fiscalía de Asuntos Internos;
III. Titulares de la Fiscalías Especializadas;
IV. Titular de la Coordinación de Investigación y Persecución Penal;
V. Titular de la Coordinación General, cuando se desempeñe en sustitución del Fiscal General de la República, de conformidad con lo previsto en la presente Ley; y
VI. Fiscales con nombramiento del Servicio Profesional de Carrera, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento.

Artículo 12. Independencia Técnica de las y los Fiscales

Las y los Fiscales ejercerán sus funciones con independencia y autonomía, libres de cualquier tipo de coacción o interferencia en su actuar. En el ejercicio de sus funciones, se conducirán conforme al criterio de objetividad, con base en el cual dirigirán la investigación de los hechos y circunstancias que prueben, eximan o atenúen la responsabilidad de las personas imputadas, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable y el Plan de Persecución Penal.

Artículo 13. Asignación

Los órganos a cargo de la función fiscal contarán con el personal policial, técnico, pericial, y en general, el relativo a la operación sustantiva de la fiscalía, asignados de forma directa para el cumplimiento de los fines de la función fiscal y del Plan de Persecución Penal, de conformidad con el Servicio Profesional de Carrera.

La persona titular de la Fiscalía General de la República, sustentará la asignación del personal que integrará las unidades fiscales, conforme al Plan de Persecución Penal, quienes no podrán cambiarse de asignación, salvo previo acuerdo de los titulares.

El personal mencionado en el párrafo que antecede también podrá ser asignado, de manera temporal y para el cumplimiento de objetivos específicos, a las fiscalías o unidades de investigación y litigación. El titular de cada una de estas unidades, para todos los efectos, asumirá el mando del personal asignado.

Capítulo II
De la Estructura

Artículo 14. De la Estructura de la Fiscalía General de la República
La Fiscalía General de la República tendrá la siguiente estructura:

I. Fiscal General;
II. Coordinación General;
III. Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos;
IV. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales;
V. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;
VI. Fiscalía Especializada de Asuntos Internos;
VII. Coordinación de Investigación y Persecución Penal;
VIII. Coordinación de Métodos de Investigación;
IX. Coordinación de Planeación y Administración;
X. Órgano Interno de Control;
XI. Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera;
XII. Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; y
XIII. Las fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General, a través de acuerdos generales, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento, y acorde con el Plan de Persecución Penal.

La Fiscalía General de la República, se apoyará de un Consejo Ciudadano el cual cuenta con las facultades señaladas por esta Ley.

La Fiscalía de Derechos Humanos tendrá a su cargo las fiscalías de protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes; de trata de personas; de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; de migrantes; de investigación de tortura, y todas aquellas fiscalías órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General de la República.

La Coordinación de Investigación y Persecución Penal contará con un órgano administrativo desconcentrado denominado Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias responsable de la aplicación de los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, con independencia técnica y de gestión.

El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de la República contará con un Consejo Técnico, que estará integrado por la persona titular de la Fiscalía, quien lo presidirá y por los Fiscales a que se refiere esta Ley y estará facultado para aprobar, evaluar y conocer de la ejecución de los programas y proyectos a cargo del Instituto y conocer y aprobar en su caso los informes que presente su titular, el cual será designado por la persona titular de la Fiscalía General de la República.

El Consejo Técnico del Instituto que deberá sesionar por lo menos tres veces al año y en el cual participará el titular del Instituto, con voz, pero sin voto, se organizará y operará conforme a las reglas que expida al efecto.

Las personas titulares de la Fiscalía General de la República, o de la Coordinación General establecerán los criterios para evitar la fragmentación de las investigaciones y en su caso, la creación de unidades mixtas de investigación.

La Fiscalía General de la República, contará con fiscales, policía de investigación, analistas, auxiliares y peritos, así como con el personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. En los casos relacionados con violencia de género y contra la mujer, el personal deberá ser especializado.

Asimismo, podrá allegarse de personal técnico especializado de otras entidades para colaborar en las investigaciones.

Capítulo III
De la Persona Titular de la Fiscalía General de la República, y los Órganos de la Fiscalía

Artículo 15. Nombramiento del Fiscal

El nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General de la República, se sujetará al procedimiento y requisitos previstos en el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se promoverá los principios de transparencia, publicidad, mérito, participación ciudadana, e igualdad y no discriminación.

Artículo 16. De la designación de la persona titular de la Fiscalía General de la República

Quienes aspiren a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos de elegibilidad:

I. Tener la ciudadanía mexicana;
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
III. Contar, con una antigüedad minima de diez años, con titulo profesional de licenciado en derecho;
IV. Gozar de buena reputación; y
V. No haber sido condenado por delito doloso.

Artículo 17. Buena reputación

La buena reputación, a la que se refiere el artículo 102 constitucional, está compuesta por dos elementos:

I. El Objetivo que se refiere a la calidad profesional relevante, trayectoria en el servicio público o en ejercicio de la actividad jurídica, y
II. El Subjetivo que se refiere a la honorabilidad, alta calidad técnica, compromiso con valores democráticos, independencia y reconocimiento social.

Artículo 18. Causas graves de remoción de la persona titular de la Fiscalía General de la República.

La persona titular de la Fiscalía General de la República, sólo podrá ser removida por el Presidente de la República por incurrir en alguna de las siguientes causas graves:

I. Cuando incumpla de manera reiterada con los fines institucionales previstos en el artículo 2. de esta Ley; y
II. Participar, tolerar, consentir o apoyar violaciones graves a los derechos humanos, o cometer violaciones graves a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Ejecutivo Federal deberá acreditar la causa grave que motivó la remoción de la persona titular de la Fiscalía General de la República, e informar al Senado de la República, quien decidirá si objeta o no la remoción, en términos del artículo 102 apartado A, fracciones IV y V.

Lo dispuesto en las fracciones anteriores se aplicará sin perjuicio de lo previsto en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 19. Facultades de la persona titular de la Fiscalía General de la República

La persona titular de la Fiscalía General de la República intervendrá por sí o por conducto de los fiscales y demás órganos de la fiscalía en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y las demás disposiciones aplicables y tendrá las siguientes facultades.

I. Dirigir y coordinar la política general de la Fiscalía General de la República, así como vigilar y evaluar la operación de las unidades administrativas que la integran;
II. Representar a la Fiscalía General de la República, en las relaciones institucionales con otras entidades u órganos de gobiernos locales, federales, nacionales, e internacionales;
III. Participar en el sistema de atención a las víctimas y ofendidos por la comisión de delitos;
IV. Celebrar los convenios de colaboración con el exterior para el adecuado funcionamiento del Mecanismo de Apoyo Exterior y las demás funciones que se requieran;
V. Solicitar la colaboración de otras autoridades, así como auxiliar a las que lo soliciten, directamente o por conducto de la Coordinación General, en la persecución de los probables autores o partícipes del hecho delictivo, en los términos que dispongan las leyes, acuerdos, convenios, bases y demás instrumentos de colaboración celebrados para tal efecto;
VI. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública;
VII. Autorizar los lineamientos y bases del servicio público de carrera de la Institución y de conformidad con la normatividad aplicable;
VIII. Nombrar y remover a las personas titulares de las Fiscalías Especializadas en los términos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los demás fiscales que considere pertinente, así como otros servidores públicos adscritos a la Fiscalía;
IX. Ejercer atracción sobre los asuntos competencia de la Institución, para conocer personalmente o designar la Fiscalía Especializada, unidad de Investigación o Coordinación que deberá conocer de los mismos;
X. Instruir la integración de unidades o equipos especiales para la investigación de casos;
XI. Crear coordinaciones, fiscalías, direcciones, unidades y departamentos, de acuerdo con las necesidades institucionales y con el Plan de Persecución Penal;
XII. Presidir la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;
XIII. Ofrecer y entregar recompensas, en los casos, términos y condiciones que determine el Reglamento de esta Ley;

XIV. Determinar el Plan de Persecución Penal en los términos establecidos en la presente Ley, los criterios generales y prioridades en la investigación de los delitos, así como en el ejercicio de la acción penal;

XV. Coordinar acciones y suscribir convenios con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, para el desarrollo de acciones conjuntas, de fortalecimiento institucional y de cumplimiento de los fines institucionales;

XVI. Representar a la Fiscalía General de la República, en las relaciones institucionales con otros entidades u órganos nacionales e internacionales;

XVII. Promover la celebración de tratados, convenios, declaraciones o acuerdos internacionales relacionados con los fines institucionales;

XVIII. Decidir sobre la atracción de los casos;

XIX. Coordinar a las unidades y órganos de la Fiscalía General de la República, en el suministro de información y asegurar su consolidación, consistencia, oportunidad, y confiabilidad para los fines de formulación de la Política de Persecución Penal;

XX. Establecer las directrices y controlar los procesos de generación, sistematización y análisis de la información para su óptimo resguardo y aprovechamiento;

XXI. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de sistematización y análisis de la información a fin de apoyar el desarrollo de las funciones sustantivas de la Fiscalía;

XXII. Establecer medios de información sistemática y directa a la ciudadanía, para dar cuenta de sus actividades, de conformidad con la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública, y

XXIII. Las demás que señale esta Ley, el Reglamento, así como otras disposiciones legales aplicables en la materia.

Capítulo IV
De la Coordinación General de la Fiscalía General de la República

Artículo 20. La Coordinación General de la Fiscalía General de la República.
La Coordinación General tendrá las siguientes facultades:

I. Suplir a la persona titular de la Fiscalía General de la República en sus ausencias;

II. Representar a la Fiscalía General de la República, en las relaciones institucionales con otras entidades u órganos de gobierno locales, nacionales, federales e internacionales;

III. Elaborar las normas y políticas a las que deberán sujetarse las unidades y los órganos de la Fiscalía, en la materia de su competencia;

IV. Desarrollar la política del sistema de gestión documental y administración de archivos de la Institución, de conformidad con la normatividad aplicable;

V. Integrar el sistema de información legislativa, jurisprudencial y doctrinal, nacional e internacional a efecto de dar cumplimiento a las atribuciones de la Fiscalía General de la República, en materia de medios de control constitucional de asuntos de su competencia;

VI. Desarrollar y ejecutar las políticas de transparencia y rendición de cuentas, y atender las solicitudes de información pública;

VII. Atender las quejas, recomendaciones y solicitudes de los organismos públicos de derechos humanos, nacionales e internacionales, así como las quejas presentadas por las personas;

VIII. Ejecutar las extradiciones, así como las acciones relacionadas con la cooperación internacional;

IX. Formalizar los convenios de colaboración con el exterior para el adecuado funcionamiento del Mecanismo de Apoyo Exterior y las demás funciones que se requieran;

X. Representar legamente a la Fiscalía General de la República, en los asuntos jurídicos de acciones promovidas en su contra o por la propia Fiscalía;

XI. Canalizar la información generada por la persona titular de la Fiscalía General de la República, a las áreas correspondientes de la Fiscalía General de la República;

XII. Evaluar riesgos y proteger a personas ofendidas, víctimas, testigos y demás sujetos en los casos en que existan amenazas o riesgos a su integridad o vida;

XIII. Coordinar y colaborar con entidades gubernamentales nacionales e internacionales para la implementación de los esquemas de seguridad de víctimas, testigos y demás sujetos procesales;

XIV. Resolver los conflictos que se susciten en el ámbito administrativo con motivo de la interpretación o aplicación de la presente Ley y su Reglamento, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, y demás normatividad institucional, así como presentar opinión a la persona titular de la Fiscalía General de la República, en los casos no previstos, para que resuelva lo conducente en el marco de sus facultades;

XV. Conocer y resolver sobre las solicitudes de atracción, que el Fiscal General le encomiende;

XVI. Coordinar, dirigir y canalizar el ejercicio de las atribuciones de las y los fiscales en materia internacional;

XVII. Desahogar las consultas jurídicas internacionales que formulen las diversas áreas de la Fiscalía General de la República, así como de los órganos del Estado Mexicano en materia de procuración de justicia;

XVIII. Auxiliar a la persona titular de la Fiscalía General de la República, en la elaboración de los lineamientos y bases del servicio profesional de carrera de la institución, de nombramiento y remoción de servidores públicos, de conformidad con la normatividad;

XIX. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de las políticas institucionales del servicio profesional de carrera;

XX. Coordinar y dirigir a las representaciones de la Fiscalía General de la República, en el extranjero;

XXI. Representar jurídicamente a la Fiscalía General de la República, ante las autoridades administrativas, judiciales y laborales;

XXII. Coordinar y dirigir la implementación de la política de género y violencia contra la mujer así como para la atención con enfoque diferencial para personas colocadas en situación especial de vulnerabilidad en razón de la condición étnica, migratoria, de género, sexo, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, orientación o identidad sexual y de género, estado civil o cualquier otra condición o motivo que atente contra la dignidad humana; o bien, tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas,

XXIII. Conocer y resolver los conflictos de competencia entre órganos fiscales, y

XXIV. Las demás que disponga la Ley y el Reglamento.

La Coordinación General contará con una Unidad Especial de Género y Violencia Contra la Mujer, que tendrá como objetivo la institucionalización de la perspectiva y transversalidad de género en todas las áreas de la Fiscalía, a través de la incorporación del enfoque de igualdad y no discriminación a la cultura institucional a través del diseño, planeación, presupuesto, ejecución y evaluación de las políticas de la Fiscalía, y será responsable de coordinar y gestionar acciones con todas las áreas de la Fiscalía General de la República, para incorporar en su actuación, los principios rectores de la igualdad sustantiva y de oportunidades entre mujeres y hombres.

Artículo 21. Cobertura de suplencias de la persona titular de la Fiscalía General de la República.

La persona titular de la Fiscalía General de la República, será suplida en sus excusas, ausencias o faltas temporales por la persona titular de la Coordinación General y a falta de

esta, por quienes disponga el Reglamento de esta ley, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos para ser titular de la Fiscalía General de la República.

En caso de ausencia definitiva, la titularidad de la Fiscalía General de la República, será ocupada temporalmente por la persona titular de la Coordinación General, quien deberá notificar al Senado de la República a efectos que proceda conforme al artículo 102 constitucional.

Capítulo V
De las Fiscalías Especializadas

Artículo 22. De la designación y remoción de las personas titulares de las Fiscalías Especializadas

La persona titular de la Fiscalía General de la República designará a las personas titulares de las Fiscalías Especializadas con base a sus méritos y capacidades para ejercer el cargo y con un perfil previamente establecido.

El Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes podrá objetar dicha designación o remoción, en un plazo máximo de veinte días hábiles, para dichos efectos, el Fiscal General de la República, enviará al Senado de la República una comunicación donde expondrá las razones que sustentan la designación o la remoción de las personas titulares de las fiscalías especializadas.

En su caso, serán removidos en términos de las disposiciones constitucionales, respetando el derecho de audiencia y debido proceso y conforme a la presente ley y su Reglamento.

Artículo 23. Principio del mérito

Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para la designación de fiscales especializados, los órganos competentes valorarán los antecedentes y trayectoria profesional de las personas candidatas, con el propósito de evaluar los elementos objetivos y subjetivos que se señalan en esta Ley. Dichos requisitos de elegibilidad deberán cumplir como mínimo con los requisitos señalados en el artículo 16 y 17 de esta Ley.

Artículo 24. Transparencia y publicidad

Todo proceso de designación estará sujetos a los principios de máxima transparencia y publicidad, desde su convocatoria hasta la designación. Las autoridades que intervengan

en dichos procesos deberán hacer pública, de manera proactiva, oportuna, completa y accesible, toda la información y documentación que se reciba solicite, obtenga o produzca con ocasión del procedimiento, con excepción de aquella que pueda afectar la vida privada e intimidad, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública.

El incumplimiento de lo antes dispuesto será motivo de responsabilidad, en términos de la normatividad administrativa aplicable.

Artículo 25. Participación ciudadana

Cualquier ciudadana y ciudadano podrá participar en el proceso de designación, aportando información relevante sobre los aspirantes; expresando su apoyo u objeción contra candidaturas específicas, y asistiendo, proponiendo y formulando preguntas durante las comparecencias, dichas participaciones no conllevan carácter vinculante.

Artículo 26. Funciones comunes para las Fiscalías Especializadas

Las Fiscalías Especializadas adscritas a la Fiscalía General de la República, gozarán de autonomía técnica y de gestión, en el ámbito de su competencia y tendrán las siguientes atribuciones:

I. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con las instancias públicas o privadas que se requieran para el ejercicio de sus funciones;
II. En ejercicio de su autonomía técnica participar en estrategias de coordinación internacional con las instancias homólogas o que resulten pertinentes para el ejercicio de sus funciones, dando aviso a la Coordinación General;
III. Elaborar solicitudes de información a instancias, empresas o particulares nacionales;
IV. Elaborar solicitudes de información a instancias, empresas o particulares internacionales, dando aviso a la Coordinación General;
V. Emitir dentro del ámbito de sus competencias la normatividad, necesaria para el desempeño de sus funciones;
VI. Presentar un informe público anual sobre los avances y resultados de su gestión, dichos informes deben ser añadidos al informe que la persona titular de la Fiscalía General de la República, presentará ante el Congreso;
VII. En los casos que involucre delincuencia organizada, se tomarán medidas que privilegien la integridad y no fragmentación de la investigación y el ejercicio de la acción penal;
VIII. Las personas titulares de las Fiscalías Especializadas implementarán medidas y estrategias de coordinación con las unidades, mecanismos y otras instancias

especializadas creadas por las leyes especiales, tratados internacionales y demás leyes especiales vinculadas con su competencia, a efecto de facilitar el ejercicio del mandato de dichos mecanismos y de la propia Fiscalía, en lo que les corresponde. Las medidas de articulación y colaboración comprenderán acciones tales como:

a. El intercambio de información, documentación, bases de datos, a través de sistemas de interoperabilidad;
b. La designación de enlaces;
c. La realización de mesas de trabajo y encuentros en los que participen, inclusive, organizaciones de víctimas, de la sociedad civil especializadas y organismos internacionales;
d. Facilitar el contacto entre los mecanismos especializados y las personas vinculadas a las investigaciones a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos;
e. Las demás que se acuerden y consideren necesarias;
f. La colaboración entre las Fiscalías Especializadas y los mecanismos creados por leyes especiales serán revestidas de flexibilidad y de formalidad mínima, a efecto de no obstaculizar, complicar ni dilatar las mismas.

IX. Para llevar a cabo la función fiscal, las y los fiscales especializados colaborarán con las instancias de seguridad pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas, y demás instituciones del Ejecutivo Federal, y

X. Las demás que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 27. Funciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos estará a cargo de la conducción legal de la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal en casos de violaciones a los derechos humanos, en el ámbito de sus competencias, independientemente de la clasificación jurídica de los hechos, que afecten la vida, la integridad, el patrimonio y la libertad de las personas; cuando afecten gravemente a la sociedad o por motivo de la condición de vulnerabilidad de las víctimas, o cuando existan falta de garantías para el ejercicio independiente de la investigación en las entidades federativas o cuando la participación de funcionarios o servidores públicos obstaculice la investigación. También conocerá este tipo de hechos cometidos por particulares cuando así lo determine una ley especial.

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos conocerá por atracción casos del fuero común o por derivación de otras unidades fiscales al interior de la Fiscalía General de la República, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las Leyes Generales.

Artículo 28. Funciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales

La Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos establecidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y en cualquier otro ordenamiento legal en la materia.

En los procesos electorales, en los procesos de consulta popular y en el desarrollo de mecanismos de democracia directa, realizará despliegues ministeriales en el ámbito local y federal con la finalidad de que las y los fiscales puedan atender directamente las denuncias de la ciudadanía.

Deberá informar mensualmente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las investigaciones, así como las determinaciones o procesos según sea el caso.

Igualmente, de forma anual, presentará ante la persona titular de la Fiscalía General de la República, al Senado y al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, este último solo en los casos en que exista correlación entre los delitos electorales y posibles actos de corrupción cometidos desde la función pública, un informe sobre actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 29. Funciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos contenidos en el Título Décimo del Libro Segundo del Código Penal Federal.

La persona titular de la Fiscalía participará como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, atendiendo las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley correspondiente.

Igualmente, presentará de forma anual ante el Senado de la República un Informe público y de fácil acceso respecto de sus actividades y resultados, mismo que será entregado a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Artículo 30. Funciones de la Fiscalía de Asuntos Internos.

La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos estará a cargo de las investigaciones y el ejercicio de la acción penal en delitos cometidos por personal adscrito a los órganos sustantivos y administrativos de la Fiscalía General de la República, en ejercicio de sus funciones.

La persona titular de la Fiscalía General de la República podrá crear unidades de investigación para casos especiales, incluyendo la probable comisión de delitos por parte de integrantes de la Fiscalía de Asuntos Internos.

Establecer lineamientos técnico-jurídicos para el monitoreo, la supervisión, investigación, revisión y control de la actuación de los fiscales, los policías de investigación, peritos, analistas, técnicos y en general de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, en términos del Plan de Persecución Penal.

En caso de excusas, ausencias o faltas temporales de las o los fiscales o coordinadores, éstos serán suplidos por el funcionario con rango inmediato inferior.

Capítulo VI
De las Coordinaciones de la Fiscalía General de la República

Artículo 31. De la Coordinación de Investigación y Persecución Penal

La Coordinación de Investigación y Persecución Penal tendrá las siguientes facultades:

I. Coordinar la gestión, movilidad e integración de las unidades de investigación y litigación, las cuales realizarán las investigaciones y el ejercicio de la acción penal, así como de los equipos de investigación que los conforman;
II. Realizar los actos de investigación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes aplicables;
III. Coordinar los esquemas de colaboración con otras autoridades federales o locales en la materia de sus competencias;

IV. En los casos que así se requiera conducir legalmente la investigación y ejercer la acción penal;
V. Cuando así se requiera, designar a las y los fiscales encargados de los casos, salvo que el nombramiento sea realizado por la persona titular de la Fiscalía General de la República;
VI. Garantizar la independencia y condiciones de trabajo de las unidades de investigación y litigación por el tiempo que sean creadas;
VII. Establecer las unidades de investigación especializada para ejercer la acción penal en materia de delitos de delincuencia organizada y de secuestro, conforme a las leyes en la materia, y
VIII. Las demás que señale la ley.

Artículo 32. De la Coordinación de Métodos de Investigación.
La Coordinación de Métodos de Investigación tendrá las siguientes facultades:

I. Coordinar y asignar los servicios periciales, la policía de investigación, técnicos y los analistas que formen parte de la Fiscalía General de la República;
II. Crear la Base Nacional de Información Genética, que contenga los resultados de la información genética proporcionada por víctimas o familiares de víctimas de personas desaparecidas, en los términos que establezcan los Lineamientos Generales en esta materia;
III. Analizar de forma estratégica los datos agregados del fenómeno criminal, la realización de estudios criminógenos y geo delictivos, así como la información de contexto que se considere relevante para coadyuvar en la investigación;
IV. Efectuar reportes estratégicos sobre criminalidad regional y nacional, identificación de patrones, estructuras y organizaciones, así como cualquier otro que se considere necesario para la investigación de los casos;
V. Servir de apoyo para el análisis técnico científico de los actos de investigación y datos de prueba, a solicitud de las y los fiscales para el desarrollo de sus investigaciones;
VI. Apoyar la verificación y control de las pruebas periciales y exámenes forenses practicados a solicitud de las autoridades competentes;
VII. Suministrar información a la Coordinación de Planeación y Administración, relativa a los patrones, estructuras y organizaciones criminales para el diseño de las políticas institucionales y toma de decisiones;
VIII. Comunicar la información de utilidad relativa a la seguridad pública que obtenga en el ejercicio de sus funciones la persona titular de la Fiscalía General de la República, para que la remita a la autoridad competente;

IX. Efectuar reportes estratégicos, así como cualquier otro que se considere necesario sobre el análisis de la criminalidad y de contexto que oriente las políticas de operación de la Fiscalía y contar con un área de análisis criminal que analice sistemática y oportunamente la información relativa a los asuntos de la Fiscalía General de la República, para su procesamiento en materia de estrategia e inteligencia operativa;

X. Realizar los actos de investigación, en apoyo a la Coordinación de Investigaciones y Persecución Penal, conforme lo determine el Reglamento;

XI. Evaluar riesgos y proteger a las personas ofendidas, víctimas, testigos y demás sujetos procesales, en los casos que existan amenazas o riesgos a su integridad o vida, y

XII. Coordinar y colaborar con entidades gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, para la implementación de los esquemas de seguridad de víctimas, testigos y demás sujetos procesales.

El personal de la Coordinación de Métodos de Investigación podrá ser comisionado conforme a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 33. De la Coordinación de Planeación y Administración.

La Coordinación de Planeación y Administración será el área encargada de formular ante la persona titular de la Fiscalía General de la República el Plan de Persecución Penal, y será la responsable de la información institucional, así como de la administración y gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a través de las áreas correspondientes.

Apartado A.

Ejercerá las siguientes facultades, en materia de Planeación Estratégica:

I. Proponer y dar seguimiento a las políticas de vinculación y coordinación interinstitucional en el ámbito de su competencia;

II. Apoyar las labores necesarias para el seguimiento y evaluación de la política y Plan de Persecución Penal definidos por la Fiscalía;

III. Coordinar la integración del Plan de Persecución Penal de las fiscalías especializadas;

IV. Definir indicadores y metas institucionales, de acuerdo con el Plan de Persecución Penal, así como dar seguimiento puntual a los mismos;

V. Proponer a la persona titular de la Fiscalía General las adecuaciones necesarias al Plan de Persecución Penal, de acuerdo con los estudios y análisis de su competencia;

VI. Definir las políticas institucionales para el desarrollo y modernización institucional basada en resultados y evaluación del desempeño;

VII. Consolidar la información administrativa y financiera para elaborar estudios e informes;

VIII. Establecer directrices para la generación, sistematización e integración de los informes de las distintas unidades y órganos de la Fiscalía;

IX. Realizar estudios sobre el desarrollo organizacional de la Fiscalía;

X. Recopilar los reportes estratégicos de la Coordinación de Métodos de Investigación, así como cualquier otro que se considere necesario sobre el análisis de la criminalidad y de contexto para orientar las políticas de operación de la Fiscalía; y

XI. Coordinar a las unidades y órganos de la Fiscalía General en el suministro de información y asegurar su consolidación, consistencia, oportunidad y confiabilidad para los fines de formulación de la Política de Persecución Penal.

Apartado B.

Ejercerá las siguientes facultades, en materia de Administración:

I. Representar legalmente a la Fiscalía General de la República, en materia de administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, financieros, patrimoniales, presupuestales y cualquier otro de conformidad con las políticas aprobadas por la persona titular de la Fiscalía General de la República;

II. Ejercer los actos de administración, de mandatario judicial y de dominio que requiera la Fiscalía General de la República, en el ámbito de su competencia para su debido funcionamiento de conformidad con las políticas aprobadas por la persona titular de la Fiscalía General de la República y de conformidad con lo que prevea el Reglamento;

III. Proponer a la persona titular de la Fiscalía General de la República, para su aprobación los criterios generales en materia administrativa en términos de la legislación aplicable;

IV. Aprobar el uso de los recursos financieros de la Fiscalía en materia de contrataciones, ejercicio del gasto, adquisiciones, arrendamientos y contratación de bienes, servicios y obras públicas, así como de asociaciones público-privadas de conformidad con la normativa aplicable;

V. Administrar y ejercer los fondos federales destinados a la Procuración de Justicia de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables, transparentando su aplicación;

VI. Conformar el comité de adquisiciones de conformidad con el Reglamento que emita la persona titular de la Fiscalía General de la República;

VII. Proporcionar los servicios administrativos generales que requieran las áreas de la Fiscalía General de la República;

VIII. Suscribir convenios o cualquier otro acto o instrumento jurídico en el ámbito administrativo de su competencia;

IX. Colaborar con la Coordinación General para asegurar la suficiencia presupuestal para el cumplimiento y desarrollo de los rubros que contempla el Servicio Profesional de Carrera;

X. Emitir las normas para que los recursos patrimoniales y financieros sean aprovechados y aplicados respectivamente, con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa; así como, realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias, todo lo anterior en coordinación con la persona titular de la Fiscalía General de la República;

XI. Integrar los informes específicos o individuales, requeridos por la Auditoría Superior de la Federación en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;

XII. Proponer a la persona titular de la Fiscalía General de la República, a los auditores externos, así como normar y controlar su desempeño;

XIII. Consolidar la información administrativa y financiera para elaborar estudios e informes;

XIV. Realizar estudios sobre el desarrollo organizacional de la Fiscalía;

XV. Coordinar la integración y elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de la Fiscalía con base a las necesidades detectadas en el Plan de Persecución Penal y para el apoyo administrativo del mismo;

XVI. Establecer y controlar las políticas y procedimientos de adquisición, aprovechamiento y administración de bienes y servicios;

XVII. Elaborar y orientar el plan de inversiones en infraestructura física;

XVIII. Tener a su cargo la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, financieros, patrimoniales, presupuestales y cualquier otro asignado a la Fiscalía General de la República, de conformidad con las políticas aprobadas por la persona titular de la Fiscalía General de la República, en esta materia; y

XIX. Las demás que señale la presente Ley y su Reglamento, así como la normativa emitida por la persona titular de la Fiscalía General de la República.

Capítulo VII
De la Transparencia, Rendición de Cuentas y Acción Ciudadana

Artículo 34. El Órgano Interno de Control

El Órgano Interno de Control es un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Fiscalía y de particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía de Asuntos Internos.

El Órgano Interno de Control, su titular y el personal adscrito al mismo, estarán impedidos de intervenir o interferir en forma alguna en el desempeño de las facultades y ejercicio de la Fiscalía General de la República.

Serán facultades del Órgano Interno de Control las siguientes:

I. Las que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;
II. Verificar que el ejercicio de gasto de la Fiscalía se realice conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados;
III. Realizar auditorías, revisiones y evaluaciones y presentar al Fiscal General de la República, los informes correspondientes con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia, eficacia y legalidad en su gestión y encargo, así como emitir recomendaciones;
IV. Revisar que las operaciones presupuestales que realice la Fiscalía, se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables y, en su caso, determinar las desviaciones de las mismas y las causas que les dieron origen;
V. Promover ante las instancias correspondientes, las acciones administrativas y legales que se deriven de los resultados de las auditorías;
VI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de la Fiscalía;
VII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos de la Fiscalía, empleando la metodología que determine;
VIII. Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables;
IX. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas y órganos de la Fiscalía para el cumplimento de sus funciones;

X. Ejercer en el ámbito de la Fiscalía General de la República, en lo que resulte conducente, las facultades que la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y la Ley de Asociaciones Público-Privadas, prevén para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública;

XI. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de la Fiscalía en los términos de la normativa aplicable;

XII. Participar, conforme a las disposiciones vigentes, en los comités y subcomités de los que el Órgano Interno de Control forme parte, e intervenir en los actos que se deriven de los mismos;

XIII. Formular el anteproyecto de presupuesto del Órgano Interno de Control;

XIV. Presentar al Fiscal General de la República, los informes previo y anual de resultados de su gestión;

XV. Presentar al Fiscal General de la República, los informes respecto de los expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su caso, sobre la imposición de sanciones en materia de responsabilidades administrativas;

XVI. Emitir el Código de Ética de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la procuración de justicia;

XVII. Establecer mecanismos, en coordinación con la Coordinación General, que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;

XVIII. Vigilar, en colaboración con las autoridades competentes el cumplimiento de las normas de control interno, fiscalización, integridad, transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y combate a la corrupción en la Fiscalía General de la República;

XIX. Vigilar, en colaboración con las autoridades competentes el cumplimiento de las normas de control interno, fiscalización, integridad, transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y combate a la corrupción en la Fiscalía General de la República, y

XX. Las demás que señalen las leyes y reglamentos.

Artículo 35. Designación del titular del Órgano Interno de Control

El titular del Órgano Interno de Control será designado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 36. Requisitos para ser el titular del Órgano Interno de Control

El titular del Órgano Interno de Control deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener treinta y cinco años;

II. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año;

III. Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público;

IV. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

V. Contar con reconocida solvencia moral;

VI. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación, a despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios a la Fiscalía, o haber fungido como consultor o auditor externo de la Fiscalía en lo individual durante ese periodo;

VII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y

VIII. No haber sido Secretario de Estado, Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación.

Artículo 37. Duración del encargo de titular del Órgano Interno de Control

El titular del Órgano Interno de Control durará en su encargo cuatro años y podrá ser designado por un periodo inmediato posterior al que se haya desempeñado, previa postulación y cumpliendo los requisitos previstos en esta Ley y el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tendrá un nivel jerárquico igual al de un Coordinador o su equivalente en la estructura orgánica de la Fiscalía, y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación a que se refiere el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El titular del Órgano Interno de Control deberá rendir informe semestral y anual de actividades al Fiscal General de la República, del cual marcará copia a la Cámara de Diputados.

Artículo 38. Responsabilidades de los servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control

El titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República será sujeto de responsabilidad en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y podrá ser sancionado de conformidad con el procedimiento previsto en la normatividad aplicable.

Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, serán sancionados por el titular del Órgano Interno de Control o el servidor público en quien delegue la facultad, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 39. Obligaciones ante el Sistema Nacional Anticorrupción

El titular del Órgano Interno de Control deberá inscribir y mantener actualizada la información correspondiente del Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal; de todos los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 40. Integración del Consejo Ciudadano de la Fiscalía

El Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República será un órgano especializado de consulta, de carácter honorífico, que ejercerá las funciones establecidas en la presente Ley. Estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución en materia de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, en especial de las mujeres, de los pueblos y las comunidades indígenas, de los niños, niñas, adolescentes y personas migrantes. Sesionará al menos una vez al mes y estará presidido por uno de los integrantes, de acuerdo con la normatividad.

Las personas integrantes del Consejo Ciudadano durarán en su encargo cinco años improrrogables y serán renovados de manera escalonada. Sólo podrán ser removidas por inasistencias reiteradas a las sesiones del Consejo, por divulgar información reservada o confidencial o por alguna de las causas establecidas en la normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Las personas integrantes del Consejo Ciudadano tendrán obligación de guardar confidencialidad cuando por razón de su función tuvieren acceso a información confidencial o reservada.

Las personas titulares de la Fiscalía General de la República y las Fiscalías Especializadas podrán asistir a las reuniones con voz, pero sin voto.

Artículo 41. Designación de las personas integrantes del Consejo

El Senado nombrará una Comisión de selección, integrada por cinco personas de reconocida honorabilidad y trayectoria, debiendo justificar las razones de la selección. La citada Comisión abrirá una convocatoria pública por un plazo de quince días para recibir propuestas para ocupar el cargo de Consejero Ciudadano. Posteriormente, el Senado elegirá entre los candidatos a cinco personas, respetando los principios a que se refieren los artículos 22, 23 y 24 de esta Ley.

Esta lista será dada a conocer por diez días para que la sociedad se pronuncie y en su caso presente sus objeciones que serán tomadas en cuenta para motivar la elección. Una vez concluido este proceso, el Senado hará público el nombre de las personas seleccionadas.

Artículo 42. Facultades del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República.

El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes facultades:

I. Opinar, dar seguimiento y emitir recomendaciones públicas sobre el contenido e implementación del Plan de Persecución Penal que presente la persona titular de la Fiscalía General de la República, así como los programas anuales de trabajo y su implementación;
II. Opinar sobre la creación de nuevas estructuras propuestas por la persona titular de la Fiscalía General de la República;
III. Hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control cuando advierta una probable responsabilidad administrativa;
IV. Dar opiniones para fortalecer el presupuesto de la institución;
V. Opinar sobre la normatividad interna de la Fiscalía General de la República;
VI. Opinar sobre las propuestas y planes del Servicio Profesional de Carrera;
VII. Establecer las reglas operativas del Consejo;

VIII. En general, emitir opiniones y recomendaciones sobre el desempeño de la Fiscalía y sus áreas;
IX. Para un mejor desarrollo de sus funciones el Consejo Ciudadano podrá invitar a personas expertas, nacionales e internacionales, y
X. Las demás que establezcan la Ley y su Reglamento.

Las opiniones y recomendaciones emitidas por el Consejo no son vinculantes, pero siempre serán de carácter público.

Cualquier intromisión en aspectos sustantivos de la función fiscal tendrá como sanción la remoción del Consejero respectivo, por parte de la persona titular de la Fiscalía General de la República.

Artículo 43. De la Secretaría Técnica del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República.

Para el ejercicio de sus funciones, el Consejo Ciudadano se auxiliará con una Secretaría Técnica, así como con el personal que se requiera para el desempeño de sus funciones. Las y los integrantes de la Secretaría Técnica se seleccionarán por el Consejo Ciudadano, a partir de la propuesta que elabore el Servicio Profesional de Carrera, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley.

Capítulo VIII
De las Responsabilidades y Sanciones

Artículo 44. Régimen de Responsabilidades

Los servidores públicos de la Fiscalía General de la República en el ejercicio de sus funciones, están sujetos al régimen de responsabilidades a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de conformidad con lo dispuesto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Ley.

El personal de la Fiscalía en el desempeño de sus funciones deberá actuar con estricto apego al Código de Ética que emita el Órgano Interno de Control, por lo que cualquier incumplimiento constituirá una falta administrativa no grave en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 45. Incompatibilidades con el servicio público

En el desempeño de sus funciones, los servidores públicos de la Fiscalía General de la República no podrán:

I. Desempeñar empleo, cargo o comisión remunerada de cualquier naturaleza de derecho público o privado, nacional o internacional, salvo los de carácter docente, cultural, de beneficencia y aquellos que autorice la Fiscalía General de la República, siempre y cuando no sean incompatibles con sus funciones en la misma;
II. Conocer de asuntos cuando pudieran incurrir en conflictos de interés;
III. Ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona;
IV. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el carácter de heredero o legatario o se trate de sus ascendientes, descendientes, hermanos, adoptante o adoptado, y
V. Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, síndico, administrador, interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista, árbitro o arbitrador.

Los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, que contravengan esta disposición estarán sujetos a las faltas determinadas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como las leyes especiales.

Capítulo IX
De la Investigación y Acción Penal

Artículo 46. Unidades de investigación y litigación

Las unidades de investigación y litigación serán órganos compuestos por equipos de investigación y litigación, que tienen como función organizar y gestionar la estrategia de la Fiscalía General de la República de forma flexible y eficiente establecida en el Plan de Persecución Penal. Estarán dirigidas por fiscales y se integrarán por los equipos de investigación necesarios para su adecuado funcionamiento.

Artículo 47. Equipos de investigación y litigación

Los equipos de investigación serán las unidades orgánicas encargadas del desarrollo de las investigaciones y el ejercicio de la acción penal. Los equipos de investigación serán dirigidos por fiscales y además serán integrados, entre otros, por peritos, policía de investigación, analistas y técnicos que correspondan en cada caso.

Artículo 48. Equipos mixtos de investigación y litigación

La persona titular de la Fiscalía General de la República, podrá conformar equipos mixtos de investigación con integrantes de distintas unidades fiscales y coordinaciones, así como con personal de otras fiscalías o procuradurías de las entidades federativas a través de acuerdos de colaboración institucional, para el desarrollo de investigaciones y el ejercicio de la acción penal en el ámbito de sus competencias, cuando exista concurrencia de delitos, de fenómenos delictivos o para fines orientados al cumplimiento del Plan de Persecución Penal. En todos los casos se cuidará la integridad y no fragmentación de las investigaciones.

Los acuerdos de colaboración con las entidades federativas deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y el órgano de difusión de la entidad federativa correspondiente.

Artículo 49. Unidades de Análisis Estratégico y de Contexto

Tanto las Fiscalías Especializadas como la Coordinación de Investigación y Persecución Penal contarán con las Unidades de Análisis Estratégico y de Contexto para el cumplimiento de sus funciones y del Plan de Persecución Penal, las cuales tendrán, entre otros, los siguientes objetivos:

I. La identificación de patrones de actuación reiterada, sistemática o generalizada sobre ciertas estructuras o fenómenos criminales;
II. La identificación de niveles y tipos de responsabilidad o de los partícipes de los hechos delictivos incluyendo servidores públicos;
III. La identificación de niveles de responsabilidad de estructuras delincuenciales o paralelas al Estado; y
IV. La identificación de aspectos multifactoriales y multidelictivos de los fenómenos criminales.

Estas unidades actuarán coordinadamente con la Coordinación de Métodos de Investigación y será integrada por analistas, técnicos y expertos en las materias de su competencia.

Artículo 50. Comisiones Especiales

La persona titular de la Fiscalía General de la República, podrá crear comisiones especiales, de carácter temporal para colaborar en las investigaciones de fenómenos y delitos que debido a su contexto, a juicio del fiscal, amerita su creación, incluyendo aquellos sobre feminicidios, violencia sexual, trata de personas, o que impliquen violaciones a derechos humanos, en especial de los pueblos y las comunidades indígenas, de los niños,

niñas, adolescentes y personas migrantes. Los trabajos, recomendaciones y conclusiones de las comisiones podrán ser tomados en consideración por los órganos de la función fiscal, para la investigación y el ejercicio de la acción penal de los asuntos correspondientes.

Las Comisiones Especiales tendrán como enfoque el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición. Serán integradas, de manera multidisciplinaria, por expertos de reconocida experiencia, tanto nacionales o internacionales en las materias que se requieran, organismos internacionales, organismos de la sociedad civil, Universidades Públicas y Privadas y colectivos de víctimas.

Artículo 51. De la operación territorial estratégica

El despliegue territorial de la operación sustantiva definida en las normas y políticas centrales se llevará a cabo a través de unidades o equipos de investigación y litigación, cuya distribución, tamaño, recursos y temporalidad se apegarán al Plan de Persecución Penal y a los fines de la Fiscalía.

Las unidades o equipos deberán estar integrados por el personal necesario para ejercer la función fiscal dentro del ámbito territorial y por el tiempo que hubiere sido establecido por las fiscalías o coordinaciones conforme al Plan de Persecución Penal.

Las unidades o equipos desplegados se desintegrarán al cumplirse el objetivo establecido, debiendo reubicar al personal en otras unidades o equipos de investigación y litigación.

Artículo 52. Criterios para el despliegue territorial

La distribución territorial de las unidades o equipos de investigación y litigación se definirán conforme a cualquiera de los siguientes criterios:

I. La atención específica de fenómenos criminales;
II. La regionalización y coordinación en materia de procuración de justicia;
III. La distritación judicial, y
IV. El acceso a la justicia.

Artículo 53. Sistema de recepción y canalización

La Coordinación General establecerá un sistema central de recepción y canalización de los asuntos que sean competencia de la Fiscalía General de la República y al respecto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Recibir y canalizar los casos a los órganos competentes de la Fiscalía para su conocimiento, investigación o tramitación con base en el Plan de Persecución Penal;
II. Canalizar los casos y asuntos que no son competencia de la Fiscalía General de la República a las autoridades competentes;
III. Cooperar con otras instancias federales y locales para la atracción y remisión de asuntos;
IV. Orientar y canalizar a las personas víctimas con los órganos y autoridades competentes para su protección y asistencia, y
V. Las demás que disponga el Reglamento.

Podrá recomendar la creación de unidades o equipos de investigación y litigación para la atención de casos relevantes.

Determinará la competencia de las fiscalías o unidades de investigación y litigación para la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal.

Artículo 54. De la atención a las víctimas en territorio extranjero, a través del Mecanismo de Apoyo Exterior

A través del Mecanismo de Apoyo Exterior previsto por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; así como de la Ley General de Víctimas, los órganos de la función fiscal garantizarán a las víctimas tanto en el territorio nacional como en el extranjero en igualdad de condiciones el derecho a la verdad, justicia y reparación integral.

El Mecanismo de Apoyo Exterior deberá garantizar a todas las víctimas y sus representantes que se encuentren en el extranjero, el derecho a presentar denuncias, declaraciones y cualquier tipo de pruebas, documentación o información relacionada con los hechos denunciados; a presentar peticiones, a participar activamente en el desarrollo de las investigaciones y procesos penales, así como a recibir información completa y oportuna cuando la víctima lo requiera.

Las comunicaciones entre fiscales, víctimas y representantes legales deberá realizarse con fluidez, agilidad y debida diligencia, pudiendo utilizarse para el efecto cualquier medio de comunicación. De la misma manera se llevarán a cabo las comunicaciones entre la o el fiscal encargado del caso y las autoridades mexicanas que se encuentren en las sedes diplomáticas y consulares a cargo del Mecanismo de Apoyo Exterior; la Fiscalía podrá establecer los agregados que se requiera conforme al Plan de Persecución Penal.

Capítulo X
Del Servicio Profesional de Carrera

Artículo 55. Naturaleza y finalidad del Servicio Profesional de Carrera

El Servicio Profesional de Carrera será el sistema integral de regulación del empleo público de todo el personal que preste servicios en la Fiscalía General de la República, que garantizará la igualdad de oportunidades, idoneidad y mérito para el ingreso y reclutamiento, ascensos, estímulos y recompensas.

El sistema integral del Servicio Profesional de Carrera estará a cargo del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera, el cual contará con autonomía técnica y de gestión. Su estructura, procedimientos y gestión estarán regulados en el Reglamento correspondiente.

El Servicio Profesional de Carrera será organizado con la finalidad de estimular el profesionalismo, la rectitud, la independencia técnica; fomentar la iniciativa, innovación y la eficiencia institucional; y prevenir las violaciones a derechos humanos, así como los actos de corrupción.

Artículo 56. Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera

El Servicio Profesional de Carrera se integra por los siguientes subsistemas:

I. **Ingreso:** El reclutamiento y selección comprende el proceso de detección de necesidades de dotación de personal, elaboración de perfiles de puesto, convocatorias, evaluación y selección de aspirantes.

La formación inicial comprende las estrategias de nivelación de competencias técnicas y diseño de planes de desarrollo para los operadores de nuevo ingreso.

El proceso de inducción: Comprende el proceso de incorporación a la institución y el periodo a prueba de cada funcionario.

II. **Desarrollo:** Entrenamiento y fortalecimiento continúo de capacidades: Comprende el desarrollo continuo y progresivo de las capacidades de los servidores públicos, la construcción, evaluación y monitoreo de planes de carrera individuales; la detección de necesidades de formación y la evaluación, que se llevarán a cabo tomando como base el impacto en el desempeño individual. Los estímulos y recompensas se

establecerán en el Plan de Gestión del Desempeño y Desarrollo Humano, de acuerdo con el presupuesto y mediante disposiciones generales, a través de un sistema de estímulos. Dicho sistema podrá incluir estímulos económicos y no económicos, programados semestralmente con base al cumplimiento de metas individuales y grupales. Los estímulos y recompensas se otorgarán con base a los criterios establecidos en el plan de desempeño, el cual contendrá objetivos y resultados esperados, de acuerdo con cada puesto.

La salud y clima laboral. El Servicio Profesional de Carrera fomentará la salud física y mental del personal y condiciones laborales adecuadas, como factores de bienestar personal y profesional, individual y colectivo, así como de compromiso, productividad y eficiencia. Para ello, pondrá a disposición del personal actividades y servicios de apoyo a la salud y elaborará un manual sobre las condiciones mínimas de desempeño laboral, tomando en consideración la naturaleza de cada función al interior de la institución.

III. **Evaluación:** El sistema de gestión del desempeño comprenderá el diseño de lineamientos e instrumentos de evaluación del desempeño orientados a valorar las cualidades individuales y colectivas de los operadores, estableciendo la periodicidad y los mecanismos de recolección y análisis de la información. Dichos instrumentos tendrán como objetivo la profesionalización y eficiencia en el desempeño de funciones y darán lugar a la creación de planes de mejora del desempeño.

Comprenderá lineamientos técnico-jurídicos para el monitoreo, la supervisión, investigación, revisión y control de la actuación de fiscales, policías de investigación, peritos, analistas, técnicos y en general de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, en términos del Plan de Persecución Penal.

IV. **Promoción:** El sistema de ascensos se regirá por la evaluación formal, objetiva y periódica del desempeño de cada servidor público.

Los ascensos y promociones comprenden la dirección y rectoría de todos los concursos que tengan por objeto ocupar un cargo vacante o de reciente creación sujetos al Sistema de Servicio Profesional de Carrera. Estos procesos se regirán por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad e independencia, equidad de capacidades y velarán en todo momento por la erradicación de la violencia contra las mujeres al interior de la institución.

V. **Separación:** El personal de la Fiscalía General de la República, será inamovible salvo casos de responsabilidad en los términos establecidos en la ley y el

Reglamento, así como por razones técnicas que afecten al funcionamiento de la institución y que objetivamente sean acreditadas.

VI. **Reincorporación:** La reincorporación comprenderá las acciones y mecanismos que tome la Fiscalía para reinstalar al personal que previamente se haya separado de manera voluntaria, o bien, por razones institucionales excluyentes de responsabilidad y que cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto.

Todos estos subsistemas se desarrollarán de manera pública y de acuerdo con el Reglamento correspondiente.

Artículo 57. Derechos del personal de la Fiscalía General de la República

Además de las responsabilidades y obligaciones que contiene esta Ley, los sujetos a que se refiere la misma tendrán los siguientes derechos:

I. A participar en igualdad de oportunidades en el Servicio Profesional de Carrera conforme a las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y demás normatividad aplicable;
II. A que la aplicación de las reglas del Servicio Profesional de Carrera sea objetiva, justa, transparente e imparcial;
III. A desempeñar una carrera conforme a este servicio que se base en el mérito, en la superación constante y a tener estabilidad, conforme a las disposiciones aplicables, en el desempeño de su función;
IV. A desempeñarse en su asignación, contando con condiciones adecuadas y dignas de trabajo y a formarse de manera integral;
V. A contar con una remuneración adecuada, digna, irrenunciable y que corresponda a los servicios prestados en la fiscalía;
VI. A profesionalizarse y actualizarse de manera permanente para un mejor desempeño de sus funciones;
VII. A recibir estímulos, promociones y ascensos horizontales y verticales con motivo del desempeño de su función, y
VIII. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables.

Artículo 58. Plan de Gestión de Desempeño y Desarrollo Humano

El titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera elaborará un Plan de Gestión de Desempeño y Desarrollo Humano en coordinación con la Coordinación de Planeación y Administración y lo someterá a la persona titular de la Fiscalía General de la República, para su aprobación.

El Plan deberá elaborarse para un periodo de tres años y establecerá todos los elementos que componen el Servicio Profesional de Carrera, será revisado anualmente por el Consejo Ciudadano quien emitirá las recomendaciones que correspondan.

Artículo 59. Facultades del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera

El Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera tendrá las siguientes facultades:

I. Diseñar las políticas y criterios institucionales del Sistema de Servicio de Carrera;
II. Planear, diseñar y llevar a cabo los procesos de reclutamiento y selección con base en principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres, o por cualquier otro motivo o condición;
III. Dirigir la operación del Centro de Evaluación y Confianza, así como todos sus procedimientos, en todo lo que atañe al personal del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República;
IV. Proponer los procesos, procedimientos, lineamientos, convocatorias, para la gestión y desarrollo de capacidades;
V. Diseñar los planes y programas interdisciplinarios y llevar a cabo las acciones de fortalecimiento de capacidades técnicas del personal;
VI. Determinar los criterios y métodos necesarios para la operación del sistema de monitoreo y evaluación del desempeño;
VII. Llevar a cabo los concursos y procedimientos para ascensos y promociones en los términos que indique el Reglamento;
VIII. Diseñar el plan anual de estímulos a la excelencia en el desempeño individual;
IX. Administrar los expedientes del personal del Servicio Profesional de Carrera;
X. Promover la celebración de convenios de coordinación e intercambio científico y tecnológico con instituciones y organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, que realicen actividades afines, con el objeto de complementar y fortalecer las propias, y
XI. Las demás que dispongan esta ley y su Reglamento.

Artículo 60. De las Relaciones Administrativas y Laborales con la Fiscalía General de la República

Las relaciones laborales entre la Fiscalía General de la República y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el artículo 123 Constitucional, Apartado B, y por lo establecido en esta Ley.

TÍTULO TERCERO
Recursos

Capítulo Único
Del Patrimonio y Presupuesto

Artículo 61. Del Patrimonio y Presupuesto de la Fiscalía General de la República

Para la realización de sus funciones el patrimonio de la Fiscalía General estará constituido por los bienes y recursos que a continuación se enumeran:

I. Los bienes muebles o inmuebles que la Fiscalía General de la República adquiera;
II. Los bienes muebles o inmuebles que la Federación transfiera para el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General de la República;
III. Los bienes muebles o inmuebles que la Federación determine que son de uso exclusivo de la Fiscalía General de la República;
IV. Los recursos que anualmente determine la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación;
V. Los derechos de los fideicomisos o fondos destinados al cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General de la República;
VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rentas y aprovechamientos de sus bienes muebles e inmuebles;
VII. Los recursos que reciba por concepto de los bienes o productos que enajene;
VIII. Las sanciones económicas impuestas por las autoridades competentes a los servidores públicos de conformidad con esta Ley, mismas que tendrán la naturaleza de créditos fiscales y serán enviadas para su cobro al Servicio de Administración Tributaria, el que, una vez efectuado el mismo entregará las cantidades respectivas a la Fiscalía General de la República;
IX. Los bienes que le correspondan de conformidad con la legislación aplicable, vinculados con la comisión de delitos, así como los decomisados, y
X. Los demás que establezcan las leyes.

Artículo 62. Contrataciones

Para el caso de las contrataciones públicas que lleve a cabo la Fiscalía General de la República se sujetarán, en lo que resulte conducente y conforme a su autonomía constitucional, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, sin perjuicio de la

facultad de la persona titular de la Fiscalía General de la República de emitir normas particulares en acuerdo con la persona titular del Órgano Interno de Control.

Artículo 63. Del Presupuesto

La Fiscalía General de la República, elaborará su proyecto de presupuesto anual de egresos, el cual será remitido al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se remita a la Cámara de Diputados.

En todo caso deberá garantizarse la autonomía e independencia funcional y financiera.

Artículo 64. Recursos para Emergencias

La Fiscalía General de la República, contará con recursos para emergencias que garanticen el desarrollo de las investigaciones, en los casos que así se requiera. La Coordinación de Planeación y Administración emitirá reglas generales que se publicaran en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio, comprobación, justificación, rendición de cuentas, transparencia y fiscalización de estos recursos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Una vez publicado, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos deberá emitir la declaratoria expresa de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

SEGUNDO. Se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

TERCERO. Los casos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto serán resueltos en las unidades a las que están adscritos, conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se adscriban a nuevas unidades en tanto se avanza en la transición orgánica de la Fiscalía General de la Republica.

CUARTO. Todos los convenios y actos jurídicos celebrados por la Procuraduría General de la República se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Fiscalía General de la República o a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, según corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos posteriormente.

QUINTO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se contrapongan a la presente ley y al decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral del 10 de febrero de 2014, mediante la cual se creó la Fiscalía General de la República.

SEXTO. Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su titular respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. Las referencias normativas a los agentes del Ministerio Público se entenderán referidas a las y los fiscales en los términos de esta ley.

SÉPTIMO. La Cámara de Diputados, tomando en cuenta el principio de austeridad, contemplará en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 y subsecuentes, la asignación y garantía de la suficiencia presupuestal para la instalación de la Fiscalía General de la República y la ejecución de la planeación estratégica de transición, conforme a lo establecido en el Transitorio Décimo Segundo.

La Cámara de Diputados tendrá un plazo no mayor a noventa días para designar al titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República.

OCTAVO. A la entrada en vigor del presente Decreto, los bienes inmuebles, muebles y demás recursos materiales, financieros y presupuestales, en propiedad y/o posesión de la Procuraduría General de la República, pasarán a la Fiscalía General de la República o a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal según corresponda, en términos del artículo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. En lo relativo a bienes en posesión o servicios contratados para los fines de la Procuraduría General de la República, obtenidos por arrendamiento, comodato o cualquier otro contrato mediante el cual se haya transmitido la posesión o propalado dichos servicios, continuarán siendo utilizados por la Fiscalía General de la República.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un plazo no mayor de noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá efectuar las gestiones y trámites correspondientes, para dar cumplimiento cabal al presente artículo.

NOVENO. A partir de su nombramiento, la persona titular de la Fiscalía General de la República, contará con un plazo de un año para definir la estrategia de transición, a partir de la realización de un inventario integral y un diagnóstico de los recursos financieros, humanos y materiales, casos pendientes, procesos de colaboración e inteligencia y cualquier otro insumo que considere necesario para la integración de un Plan Estratégico de Transición. Priorizará en orden de importancia el establecimiento del Servicio Profesional de Carrera y su Estatuto, la consolidación del sistema de información y análisis estratégico para la función fiscal, así como la restructura y definición de los órganos administrativos y los sustantivos para la función fiscal.

El Plan comprenderá como mínimo los aspectos siguientes:

I. Diagnóstico, mapeo y análisis de los fenómenos criminales que perseguirá; así como la definición del plan de persecución penal y la operación y despliegue territorial del modelo de investigación criminal;

II. Definición de objetivos, estrategias, acciones, metas e indicadores de resultados del proceso de transición, con base en criterios de gradualidad que consideren los tipos y fenómenos delictivos, unidades operativas centrales y estatales, regiones geográficas u otros;

III. Estrategia específica respecto al personal en activo y al reclutamiento de nuevos talentos, que contemple a su vez esquemas de retiro, liquidación, certificación, capacitación, desarrollo y gestión del cambio;

IV. Estrategia para el diseño y activación de la nueva estructura organizativa; así como del proceso de cierre de las estructuras y procesos previos;

V. Estrategia de liquidación de casos, que contemple el inventario de casos en trámite; así como su situación jurídica, tanto del sistema inquisitivo mixto como del acusatorio, para garantizar su adecuada atención; así como la identificación de casos de alto impacto social o de violaciones graves a los derechos humanos. Los casos pendientes de resolución relacionados con violaciones graves de derechos humanos o corrupción no podrán ser liquidados. La Unidad de Transición determinará la forma de atención y trámite a estos casos hasta su conclusión;

VI. Estrategia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas del proceso de transición que asegure la publicidad y mecanismos necesarios para el seguimiento, colaboración y vigilancia;

VII. Estrategia de colaboración y articulación con otras instituciones con las que requiera coordinarse para llevar a cabo la función fiscal, tales como las instituciones de seguridad pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas, y demás instituciones; y

VIII. El plazo para su instrumentación.

DÉCIMO. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con treinta días hábiles a partir de su nombramiento para convocar una Comisión de Designaciones para dar inicio al proceso de designación de las primeras cinco personas integrantes del Consejo Ciudadano, siguiendo la norma marcada por esta Ley. Los primeros cinco consejeros terminarán su encargo atendiendo a la siguiente fórmula de escalonamiento: una persona integrante durará en su encargo dos años, una persona integrante tres años, una persona integrante cuatro años, una persona integrante cinco años y una persona integrante seis años.

Dentro del mismo plazo, la persona titular de la Fiscalía General de la República, nombrará al titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera. Asimismo, integrará una Unidad de Transición, que dependerá orgánicamente de él y que tendrá como objetivo la coordinación, implementación y evaluación del Plan Estratégico de Transición. Estará integrada por un grupo interdisciplinario de expertos con reconocido prestigio, experiencia y conocimiento en gestión de instituciones públicas o privadas, diseño institucional, evaluación e implementación de políticas públicas y proceso penal acusatorio.

La Unidad se organizará a su vez en una sub-unidad de Clausura de la Procuraduría General de la República y una sub-unidad de Diseño e Instalación de la Fiscalía General de la República, las cuales, desde sus respectivas competencias, deberán generar esquemas de coordinación para el traslado y liquidación de recursos humanos, materiales y financieros, así como para la liquidación y transferencia de los casos pendientes de resolución.

La Unidad hará del conocimiento del Fiscal General de la República las necesidades presupuestales y de cualquier índole para cumplir con sus objetivos. El Consejo Ciudadano tendrá la facultad de supervisar el proceso de transición establecido en dicho Plan.

La persona titular de la Fiscalía General de la República destinará los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para el cumplimiento del Plan Estratégico de Transición.

DÉCIMO PRIMERO. En cumplimiento del artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la Procuraduría General de la República pasarán a la Fiscalía General de la República.

Los lineamientos que expida deberán contener reglas para priorizar la implantación de las áreas estratégicas de la Fiscalía, así como las de análisis e información. Asimismo, deberá priorizarse la unificación de los sistemas informáticos.

DÉCIMO SEGUNDO. El proceso de transición del personal de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República se llevará a cabo de acuerdo con el Plan Estratégico de Transición y será coordinado por la Unidad a cargo. Este proceso deberá llevarse a cabo conforme a los siguientes lineamientos:

I. El personal administrativo, de confianza y de base adscrito a la Procuraduría General de la República conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su relación laboral, con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades;

II. El personal adscrito a la Procuraduría General de la República que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento, continuará en la función que desempeña y tendrá derecho a participar en el proceso de selección para acceder al Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República en términos de los principios establecidos en la presente ley. Para ello, se garantizará su acceso a los programas de formación, entrenamiento, fortalecimiento de capacidades y evaluación durante el periodo de transición, en los términos establecidos en los lineamientos provisionales;

III. En tanto se instale el Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalia General de la República, la profesionalización, el régimen disciplinario, la certificación y el régimen de seguridad social de las policías, peritos y analistas deberá cumplir con el régimen previsto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

IV. El Plan Estratégico de Transición garantizará condiciones dignas y apegadas a la ley para la liquidación del personal adscrito a la Procuraduría General de la República que decida concluir su relación laboral o no acceder al Servicio Profesional de Carrera reglamentado en la presente ley. El personal que no apruebe los procesos de selección del Servicio Profesional de Carrera dejará de formar parte de la Fiscalía General de la República;

V. La persona titular de la Fiscalía General de la República, a través de quien dirija la Unidad de transición presentará un informe al Congreso de la Unión que incluya un diagnóstico integral de la institución, un Programa de Transición, el modelo financiero y el presupuesto estimado de los recursos necesarios para implementar los cambios organizacionales y de personal requerido por parte de la Fiscalía General de la República. En el Programa de Transición, el titular de dicha Unidad incluirá un plan detallado de las etapas que comprenderán las acciones de transformación institucional y la estrategia de administración del cambio institucional que se llevarán a cabo para la operación de la Fiscalía General de la República.

DÉCIMO TERCERO. Transcurrido un año a partir del nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General de la República, y a la luz del Plan Estratégico de Transición y la experiencia acumulada en el proceso de transición, la o el Fiscal General de la República, realizará una convocatoria pública para la revisión del marco constitucional y jurídico de la Fiscalía General de la República. Dicha convocatoria tendrá como objetivo la identificación, discusión y formulación de las reformas constitucionales, de la legislación secundaria o de las reformas regulatorias necesarias para la operación óptima del modelo de Fiscalía General de la República, propuesto en la presente Ley. Los resultados obtenidos serán públicos y se comunicarán al Congreso de la Unión con el fin de que éste realice las adecuaciones al marco jurídico que considere sean necesarias y pertinentes.

La convocatoria comprenderá temas relacionados con la función fiscal y de persecución penal, el modelo de investigación criminal, la competencia, el servicio profesional de carrera, los órganos ciudadanos, los derechos humanos y la atención a víctimas; el régimen de responsabilidades de los servidores públicos de la fiscalía, revisión de la estructura

institucional, así como el régimen de transición, entre otros. Esta consulta deberá garantizar condiciones de apertura, transparencia y participación ciudadana de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, académicas y representantes del sector privado. Con base en las consultas realizadas, el Congreso de la Unión analizará y propondrá las reformas constitucionales y legales para el óptimo funcionamiento de la Fiscalía General de la República.

DÉCIMO CUARTO. La persona titular de la Fiscalía General de la República deberá emitir un Plan de Persecución Penal Provisional dentro de un plazo máximo de noventa días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

A partir de su nombramiento, la persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de hasta un año para formular el Plan de Persecución Penal, en términos del artículo 6 de la Ley materia del presente Decreto.

DÉCIMO QUINTO. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera, la persona titular de la Fiscalía General de la República deberá emitir normas generales relativas al desarrollo y operación de dicho servicio en coordinación con el titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera.

El Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera deberá establecer planes y programas tendientes a capacitar al nuevo personal a efecto de dar cumplimiento a las funciones asignadas a cada uno en esta Ley.

DÉCIMO SEXTO. Fiscales, policías de investigación, analistas, auxiliares y peritos, así como el personal profesional, técnico y administrativo que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren laborando en la Procuraduría General de la República se someterán a las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera que se expidan para tal efecto.

DÉCIMO SÉPTIMO. Dentro del Plan de Transición se establecerá un mecanismo expeditivo para establecer el sistema central de recepción y canalización de los asuntos nuevos que tenga que conocer la Fiscalía General de la República, a que se refiere el artículo 52 de esta Ley.

DÉCIMO OCTAVO. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo máximo de 180 días para nombrar a las personas titulares de las Fiscalías Especializadas en los términos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos o en esta Ley según sea el caso, verificando el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para su designación marcados en ambas disposiciones normativas.

DÉCIMO NOVENO. Una vez instaladas las Fiscalías Especializadas, sus respectivos titulares, de inmediato solicitarán a la persona titular de la Fiscalía General de la República, la asignación del personal que integrará las nuevas unidades fiscales, conforme marca esta Ley. En el proceso de asignación, se observarán, entre otros, los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres.

VIGÉSIMO. La Fiscalía General de la República a través de la Coordinación de Métodos de Investigación, contará con un plazo no mayor a 18 meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para la expedición de los Lineamientos Generales que regulen la operación de la Base Nacional de Información Genética, así como su instauración.

VIGÉSIMO PRIMERO. La creación de las unidades a que se refiere esta Ley se hará con el Acuerdo del Fiscal General de la República.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Los casos relativos a delitos relacionados con hechos de corrupción, así como cualquier otro delito cometido por un servidor público federal en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, que hayan sido iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto por la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, deberán continuar su curso correspondiente en la misma hasta su conclusión.

Una vez concluidos los casos pendientes en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, quedará sin vigencia el Acuerdo A/011/14 por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción podrá atraer cualquiera de los casos de corrupción cuyo trámite hubiese iniciado con anterioridad a la asignación de su gestión, cuando así lo considere pertinente su titular.

Las denuncias de los casos relacionados con hechos de corrupción que hayan ingresado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, serán remitidas en su totalidad a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Senado de la República, a 12 de noviembre de 2018.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Votación de las Senadoras y Senadores Integrantes de la Comisión de Justicia

NO.	NOMBRE:		A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
1		SEN. JULIO RAMÓN MENCHACA SALAZAR			
2		SEN. INDIRA DE JESÚS ROSALES SAN ROMÁN			
3		SEN. CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA			
4		SEN. CRUZ PÉREZ CUÉLLAR			
5		SEN. CRISTÓBAL ARÍAS SOLÍS			

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NO.	NOMBRE:		A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
6		SEN. RICARDO AHUED BARDAHUIL			
7		SEN. JESÚS LUCÍA TRASVIÑA WALDENRATH			
8		SEN. ANA LILIA RIVERA RIVERA			
9		SEN. NADIA NAVARRO ACEVEDO			
10		SEN. DAMIÁN ZEPEDA VIDALES			

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NO.	NOMBRE:		A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
11		SEN. CLAUDIA RUÍZ MASSIEU SALINAS			
12		SEN. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ			
13		SEN. GEOVANA DEL CARMEN BAÑUELOS DE LA TORRE			
14		SEN. SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA.			
15		SEN. MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA.			

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Votación de las Senadoras y Senadores Integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos

NO.	NOMBRE:		A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
1		SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS			
2		SEN. CRUZ PÉREZ CUELLAR			
3		SEN. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ			
4		SEN. RUBÉN ROCHA MOYA			

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

No.	NOMBRE:		A FAVOR	ABSTENCION	EN CONTRA
5		SEN. DANIEL GUTIÉRREZ CASTORENA			
6		SEN. NESTORA SALGADO GARCÍA			
7		SEN. VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO			
8		SEN. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ			
9		SEN. GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE			

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

No.	NOMBRE:		A FAVOR	ABSTENCION	EN CONTRA
10		SEN. SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA			
11		SEN. GEOVANNA DEL CARMEN BAÑUELOS DE LA TORRE			

Sala de Comisiones del Senado de la República, en la Ciudad de México a los 12 días del mes de noviembre de 2018.

15-11-2018
Cámara de Senadores.
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
Aprobado en lo general y en lo particular, de los artículo no reservados, por 70 votos en pro, 47 en contra y 0 abstenciones.
Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Diario de los Debates 13 de noviembre de 2018.
Discusión y votación 15 de noviembre de 2018.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIARIO DE LOS DEBATES

Sesión Pública Ordinaria Celebrada en la Ciudad de México, el 15 de Noviembre de 2018

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

(Dictamen de segunda lectura)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra al Senador Julio Ramón Menchaca Salazar, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Julio Ramón Menchaca Salazar: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

Sin duda ésta es una de las leyes que van a pasar por este Senado de la República más importantes en esta Legislatura, una iniciativa que recoge el reclamo del pueblo mexicano, de tener un órgano de procuración de justicia accesible, transparente, eficaz, creíble. Es un tema, es una propuesta, es una ley que genera inquietud y polémica, pero en donde se está disponiendo de un instrumento del Estado para hacer de la procuración de justicia un hecho cercano a la población para combatir la corrupción, para combatir la impunidad, para hacer eficientes los esfuerzos que se han venido dando en transformar nuestro sistema de justicia y particularmente el sistema penal.

La iniciativa está conformada por 64 artículos y 20 transitorios, en esta iniciativa se contempla su estructura, su funcionamiento, los requisitos tanto para ocupar la responsabilidad de la Fiscalía como de las fiscalías especializadas contra delitos electorales, para combatir la corrupción, para defender los derechos humanos y una muy importante, y es una innovación de asuntos internos. Hoy la procuración de justicia está envuelta en controversias de corrupción, está señalada como ineficiente y se tienen que tomar decisiones y una acción que se ha prolongado desde el 2014, hoy vamos a tener la oportunidad de discutir, de construir y de transformar.

En esta iniciativa, está plasmado un esfuerzo no solamente de legisladores, sino del equipo de transición, de instituciones educativas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del CIDE y de todas aquellas propuestas recogidas en los intensos caminos de campaña de muchos de los legisladores.

La presentación de esta ley estuvo a cargo de alguien, de una de las mujeres más excepcionales que ha tenido dentro de la vida jurídica nuestro país, de mi compañera Senadora, la ministra Olga Sánchez Cordero, que merece mi admiración y respeto siempre desde hace muchos años; desde luego, con la experiencia parlamentaria del Senador Ricardo Monreal y de la aportación de Senadoras y Senadores que conocen perfectamente su estado, que conocen sus municipios y que han sido acompañantes de muchas víctimas del delito.

Por eso, este dictamen, que es del conocimiento de ustedes, tendrá en esta sesión una discusión seria de parte de nosotros.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Julio Ramón Menchaca, Presidente de la Comisión de Justicia.

Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron propuestas de modificación a este dictamen, mismas que someteremos a su consideración. Las adecuaciones que se proponen no alteran lo aprobado por las comisiones y sólo tienen el propósito de dar claridad al contenido del proyecto. El texto correspondiente al que me refiero está a su disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento. Si la Asamblea las acepta, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas.

(Propuestas de modificación) **(1)**

Por lo tanto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren dichas modificaciones al texto del dictamen.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea si se autoriza que las modificaciones se integren al anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones a los artículos que fueron autorizadas por la Asamblea.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción II del Reglamento, será en orden creciente.

Sonido en el escaño del Senador Álvarez Icaza, por favor.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En consulta con todos los y la coordinadora de grupos parlamentarios, he solicitado el uso de la palabra previo a los grupos parlamentarios, todos han estado de acuerdo. Señor Presidente, quisiera hacer uso de la palabra.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muy bien, Senador.

Así lo haremos, en consecuencia.

Antes, quiero saludar a los estudiantes de Derecho de la Universidad UNEA y el Instituto “Guadalupe Victoria”, de Aguascalientes, invitados por el Senador Antonio Martín del Campo Martín del Campo.

¡Bienvenidos y bienvenidas alumnos y alumnas!

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Buenas tardes, distinguida Asamblea.

El día de hoy nos ocupa probablemente uno de los temas más importantes de los que vamos a ver en estos seis años.

El modelo de justicia en nuestro país está profundamente fracasado, es uno de los mayores dolores de nuestro país.

El Estado mexicano tiene una profunda deuda en materia de justicia, sobre todo, con las víctimas.

En campaña, en nuestras oficinas, aquí afuera y eventualmente en cualquier lugar donde nos encontremos, nos abordan personas desesperadas, dolidas, revictimizadas por el aparato de justicia; familiares de personas desparecidas que buscan desesperadamente un rastro de alguno de sus familiares para encontrarlos en vida. Víctimas de secuestro, homicidio, extorsión, en la indefensión, en la desprotección, incluso víctimas de abuso por parte de servidores públicos.

Hoy, compañeros y compañeras, lo que tenemos delante de nosotros es la discusión, la oportunidad histórica para refundar el modelo de justicia en nuestro país, un anhelo largamente acariciado; un proceso que han vivido distintos países en la región y está llegando el tiempo, está llegando el tiempo a México para poder tener la condición, para tener una Fiscalía autónoma e independiente al servicio de la gente, de las y los ciudadanos y no adaptada al poder político.

Y quiero, en esta ocasión, advertir incluso, tener una fiscalía independiente, sin la intervención de otros poderes, es la mejor manera de responder a la justicia.

En esta LXIV Legislatura, y quiero advertir sobre eso, hemos ya, en mi oficina, analizado el 15 por ciento de las iniciativas que se han presentado por esta Legislatura, son de carácter punitivo.

Más penas, más años de cárcel, más prisión, ese modelo está fracasado, compañeros.

Nosotras, nosotros mismos hemos sido testigos en estos dos meses cómo se propone una lógica punitiva para responder a este fracaso de justicia.

No es así, no es con más penas, más cárcel, es con una Fiscalía autónoma, independiente, para empezar, compañeros.

La reforma congruente con un estado democrático de derecho significa empezar por la reforma al artículo 102, compañeros. Generar las condiciones para que podamos tener una Fiscalía profesional, autónoma, capaz y sensible.

Este proceso significa poner a México al día, así pasó con Argentina, con Brasil, con Chile, con Colombia, con Paraguay, con otros países, incluso, que han acudido a la asistencia internacional, como Guatemala.

Yo los llamo, compañeros, a no repetir el error histórico, a no tener visión de Estado.

En 2003 se hizo un pacto, indebido, en la auditoría electoral, que fracturó la transición de la democracia y luego llevó a la traición de 2006 y más adelante, por no tener una visión de Estado, compañeros.

No basta que la mayoría aquí nos venga a decir que va por esta línea, necesitamos un pacto de Estado en materia de justicia.

¿Por qué? Porque si no tenemos una fiscalía autónoma, independiente, a nivel federal, sin la intervención del Presidente, se va a reproducir en los estados, vamos a tener entonces una condición donde la y los gobernadores se sentirán en condición de tener sus fiscalitos carnalitos y vamos a perder la oportunidad de reformar la justicia de fondo.

Por eso es tan importante, ¿y por qué lo digo? En el artículo 18 de esta propuesta, que tiene cosas valiosas, reconozco, el Presidente tiene la facultad para remover al Fiscal General.

¿Cómo se va a hacer realidad quitar el fuero si el fiscal es un empleado del Presidente?

¿Cómo se va a hacer realidad reformar de fondo la institución de la procuración de justicia en nuestro país si se va a reproducir un modelo de subordinación al poder político?

Por eso, compañeros que hoy están acá, les invito a que pensemos de fondo, vamos a nombrar, si sigue en esta ruta, a un fiscal por nueve años; pero no puede ser sólo por la bonhomía de una persona que se designe, tiene que ser un rediseño de fondo, tiene que ser una condición para que podamos manifestar un nuevo modelo y aprovechar la oportunidad histórica que acá tenemos.

Por todo lo anterior, insisto, que la urgencia nos lleva a reformar el artículo 102, primero, y luego, en consecuencia, modificar; si no se optase por ese camino, lo que tendríamos que hacer es no generar condiciones para que el Presidente participe en la designación y en la remoción. Eso sería perder una oportunidad histórica de reformar la justicia en este país.

Muchísimas gracias por su atención.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Emilio Álvarez Icaza.

Sonido en el escaño de la Senadora Lucía Trasviña.

La Senadora Lucía Trasviña Waldenrath: (Desde su escaño) Con su permiso, señor Presidente. Para manifestar mi punto de vista, difiero de la posición que asume el compañero Senador.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Perdón, perdone Senadora, estamos en los posicionamientos, y vamos a dar cuenta de los posicionamientos de los grupos parlamentarios.

La Senadora Lucía Trasviña Waldenrath: (Desde su escaño) Está bien, gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias a usted.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Sasil De León Villard, del Partido Encuentro Social.

La Senadora Sasil De León Villard: Gracias y con su permiso, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Quiero iniciar señalando que en esta nueva manera de hacer política y en este nuevo estilo democrático de hacer un buen gobierno, habrá resistencias naturales a los programas y planes de gobierno de nuestro Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, en esta “Cuarta Transformación” tenemos que dialogar en la búsqueda de consensos en sus decisiones, sabemos que el rasgo distintivo será el bienestar común.

El pasado lunes se llevó a cabo la discusión del dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía de la República, en las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos, y se escucharon posturas en contra de este dictamen. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, lo que faltó fueron argumentos de fondo para no estar de acuerdo con el presente dictamen.

Esta ley tiene por objeto reglamentar la forma de organización, funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El dictamen que hoy se presenta, propone la creación de la Fiscalía General de la República conforme a lo establecido en el nuevo sistema procesal acusatorio, vigente desde junio de 2016.

En dicho dictamen, en dicho proyecto de ley, se previene la estructura y el diseño de la institución, así como las facultades de los funcionarios de ésta, quienes deberán garantizar la procuración de justicia bajo los principios constitucionales previstos en el artículo 106 constitucional.

Se trata de un órgano público, autónomo, con personalidad jurídica y con patrimonio propio, con independencia técnica y de actuación.

Sus ejes rectores: la autonomía, la legalidad de actuación de sus servidores, eficiencia, profesionalismo y, sobre todo, respeto a los derechos humanos.

Permítanme, compañeros legisladores y legisladoras, señalar sólo algunos puntos fuertes de esta iniciativa.

En primer lugar, destacamos que el Fiscal General no será un empleado subordinado al Ejecutivo Federal. Que se entienda estoy muy bien.

Lo anterior se garantizará integrando a la fiscalía de servicio profesional de carrera que propone el dictamen.

También se establece la creación de un plan de persecución penal como una estrategia para combatir la incidencia delictiva.

Además de la Fiscalía General habrá cuatro fiscalías más, que son: derechos humanos, delitos electorales, combate a la corrupción y asuntos internos. Lo que detonará que la estructura funcional sea ordenada.

No contará con subprocuradurías ni con vicefiscales, lo que permitirá tener una atención adecuada en los temas prioritarios.

Se establece que, a partir del siguiente año, el nombramiento del Fiscal General deberá realizar una convocatoria pública para la revisión del marco constitucional y jurídico de la Fiscalía General de la República y así se nombre.

El gobierno en transición abrió la oportunidad para que la sociedad y organizaciones de la sociedad civil colaboren activamente en la aplicación de esta ley orgánica a través del Consejo Técnico de la Fiscalía, el cual estará integrado por cinco ciudadanos expertos en temas de impartición y procuración de justicia.

Por lo anterior es que las Senadoras que integramos el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social no tenemos duda en aprobar este dictamen.

Para nosotras es suficiente en cambiar la manera de administrar y procurar justicia a través de un nuevo modelo flexible.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Sasil De León.

Tiene el uso de la tribuna el Partido de la Revolución Democrática, que ha solicitado dividir su tiempo en dos intervenciones, en primer lugar, el Senador Juan Manuel Zepeda y después el Senador Miguel Ángel Mancera.

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

El dictamen que hoy se pone a consideración no es cualquier cosa, en las Comisiones Unidas tuvimos una discusión muy rica sobre lo que implica esta Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, es ni más ni menos que la autonomía del Fiscal General de la República. Lo que hoy se nos plantea en el dictamen, es una simple simulación; porque no se está dando cuenta al país de esa demanda, de que quien sea el encargado de procurar la justicia no dependa del Presidente de la República.

Hace unos meses, aquí, en este mismo recinto, se dio una discusión muy rica y se paró la transición de quien en ese momento encabezaba la Procuraduría General de la República al pase automático a la fiscalía, llamado “fiscal carnal”.

Y aquí, en este recinto, hubo un buen número de ex Senadores que ahora están en el grupo mayoritario, sí, en Morena, que en esta misma tribuna se pronunciaron porque eso no debía ser, y su principal argumento era que no iba a tener autonomía ese fiscal transexenal, porque lo que plantea la Ley Orgánica es que este fiscal venga por nueve años, es decir, tres años más de cuando el Presidente en turno deje el cargo.

Yo me pregunto, sí, aquí tengo algunos nombres a petición y tenemos, por ejemplo, que en este momento se abstuvieron, si hubiesen estado convencidos, hubiesen votado a favor.

Por ejemplo, quien fue el candidato en Puebla, Miguel Barbosa; quien ahora es el coordinador en la Cámara de Diputados, Mario Delgado; Zoé Robledo, David Monreal, entre otros. Es decir, si hubiesen estado convencidos, lo hubiesen votado a favor. Lo que nosotros sostenemos es que no podemos caer en ese mismo error.

Aquí quiero señalar y puntualizar, el actual Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, su principal bandera ha sido el combate a la corrupción, y ha puesto esa meta para terminarla en el país.

Lo preocupante es que un fiscal que dependa del Presidente de la República va a estar sujeto a los criterios del mismo Presidente de determinar quién sí es corrupto y quién no es corrupto; qué se tiene que investigar y qué no se puede investigar.

En estas pasadas sesiones en las Comisiones Unidas, cuando estábamos votando este dictamen, estuvo el anterior encargado de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, y ahí lo referí frente a él.

Él fue despedido por órdenes del Presidente de la República porque estaba investigando esto que estoy viendo en estos letreros que tienen en los escaños, el fraude Odebrecht. Eso fue de fondo lo que ocasionó que se parara la investigación.

¿Queremos eso para el país? ¡Por supuesto que no!

Quienes seamos demócratas y quienes nos reivindiquemos porque realmente el país tiene que cambiar esto, esta Ley Orgánica no puede ser aprobada como nos la están planteando.

Tiene que pasar por una reforma al artículo 102, en su apartado A, donde saquemos de la esfera de decisión del Presidente de la República, sea quien sea, ¡eh! no me quiero referir hoy a Andrés Manuel, sea quien sea el

titular, debe de salir de la esfera de decisión de poner al Fiscal General de la República, para que realmente cumplamos con el anhelo de acabar con la corrupción y que sea una fiscalía autónoma.

Esto, esto es lo de fondo, no los artículos que vamos a reservar y que en mi siguiente intervención, donde esté posicionando en contra, porque iremos en contra, estaré señalando algunos artículos que denotan, por supuesto, una deficiente técnica legislativa.

Como decidió el grupo parlamentario dividir el tiempo en dos participaciones, aquí concluyo la mía, y reitero el sentido de la votación del PRD en contra en lo general y en lo particular.

Es cuanto.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Zepeda Hernández.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Miguel Ángel Mancera.

Son intervenciones de diez minutos o hasta por diez minutos, por grupo parlamentario.

En este caso, el grupo parlamentario del PRD decidió dividir su tiempo en dos intervenciones, lo ha hecho también el grupo parlamentario del PAN y el grupo parlamentario de Morena, así es que esta Presidencia no tuvo inconveniente alguno en concederles esa petición.

Está en su tiempo, todavía resta para que concluyan los diez minutos.

Adelante, Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Me parece que en esta parte de la discusión en lo general se ha trabado la “litis”, como se dice entre los abogados y abogadas.

La “litis” está trabada en el tema de la autonomía.

Ya habrá tiempo de discutir en lo particular, pero en este momento yo quiero llamar la atención de ustedes, simplemente, para referirnos al procedimiento que estamos estableciendo, precisamente, en la Ley Orgánica.

La Constitución, hoy el artículo 102 nos dice que el fiscal puede ser removido por el Presidente de la República cuando incurra en alguna de las causas graves que establece la ley, y acá se están estableciendo las causas graves.

Y luego dice que el Ejecutivo Federal deberá acreditar la causa grave que motivó la remoción, ahí tenemos una primera nota.

Ante quién va a acreditar la causa grave. Ante el Senado de la República, porque después viene la obligación de informar al Senado.

A mí me parece que no estamos cumpliendo con lo que dice la propia Ley Orgánica, que dice, precisamente, que se trata de crear una institución autónoma, es uno de los primeros mandatos que viene en la ley, es establecer una institución que goce de autonomía.

Aquí lo dice, el proyecto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que abordamos en el presente dictamen respetará el señalamiento constitucional y creará un órgano autónomo y luego nos dicen: Es que hay varios tipos de autonomía.

Entonces, ésta tendrá alguna parte de la autonomía, no toda, pero alguna parte de la autonomía.

Yo creo que no se puede quedar así, porque en la consideración Décimo Primera, estamos diciendo que por cuanto hace a las disposiciones transitorias concluimos en la eventual publicación del decreto planteado en el presente dictamen surtan los efectos necesarios para que el Congreso de la Unión emita la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

Y ¿cómo?, si sigue esta posibilidad de remoción directa por parte del Presidente de la República.

Y parece que sí, en la ley, ponemos un candado y decimos: Pero tiene que ser calificado por el Senado, no lo estamos diciendo, no se está dejando claro.

Solamente por referirme a esta ley, vaya, lo ideal sería estar discutiendo la reforma a la Ley Orgánica.

Es por eso que el grupo parlamentario del PRD estará votando en contra de esta disposición, este cuerpo normativo.

Tenemos también observaciones en lo particular. Yo ya las he comentado, ojo, no estamos tomando en cuenta al Instituto Nacional de Ciencias Penales.

¿Lo vamos a borrar de un plumazo al Inacipe?, con 40 años de historia.

¿Cómo se va a regular la relación con la policía de investigación.

Los principales problemas que se han tenido entre la Fiscalía y la Policía Federal, es por esa falta de regulación y aunado a esto, subsiste lo que ya está trabado aquí en la "litis".

¿Es autónoma o no es autónoma esta fiscalía que se está plateando?

Desde nuestro punto de vista no puede haber autonomía cuando la facultad de remoción es directa y cuando en las reglas, que eso sí nos dejó la Constitución, para regular, no se establece claramente el procedimiento del Ejecutivo para acreditar la causa grave que motiva la remoción.

Así que estas son algunas de las razones iniciales del grupo parlamentario del PRD para sostener este voto en contra.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Miguel Ángel Mancera.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México.

El Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán: Muchas gracias. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Senadores:

El sistema de justicia de nuestro país requiere ya de una institución fortalecida y acorde a la situación actual de nuestro país.

Los ciudadanos exigen hoy una institución de justicia que brinde la certeza jurídica en la impartición pronta y efectiva.

Los artículos 14 y 16 constitucionales son el sustento de las bases del debido proceso en el sistema de justicia bajo los principios generales del derecho.

Este dictamen permite emitir, por parte del Congreso de la Unión, la declaratoria de entrada en vigor de la Fiscalía General de la República, la cual tiene un retraso de cuatro años.

Es por ello que la discusión del presente dictamen debe generar una reflexión seria, profunda y además responsable sobre lo que será el órgano más importante de procuración de justicia a nivel nacional y pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción.

Con la Ley Orgánica de la Fiscalía. podremos conocer la organización del actuar de esa dependencia, destacando entre sus funciones la investigación y ejercicio de la acción penal y la protección de los derechos humanos.

En este sentido, el titular de la Fiscalía General de la República contará con cuatro fiscalías y se apoyará de un Consejo Ciudadano, el cual será un órgano de consulta integrado por cinco personas destacadas por su contribución en la procuración, impartición de justicia e investigación criminal.

Asimismo, se establece un plan de persecución penal como estrategia y trámite en la política criminal para orientar los recursos humanos, materiales y financieros.

Con él, la ciudadanía podrá tener la tranquilidad de que la procuración de justicia dará prioridad a las situaciones que más trasgreden a la sociedad.

Es un acierto establecer un mecanismo de protección de los derechos de las víctimas con la participación de los propios familiares, saldando una añeja deuda en este tema tan sensible para la sociedad.

La fiscalía tendrá bajo su resguardo una base nacional de información genética que permitirá un puntual seguimiento de las víctimas, fortaleciendo los procesos de investigación.

Celebro la creación de un sistema integral de servicio profesional de carrera con la finalidad de fomentar el profesionalismo, la rectitud y la independencia técnica en la iniciativa de innovación para la prevención de los actos de corrupción.

A los legisladores del Partido Verde, nos congratula que en los primeros meses de esta LXIV Legislatura se debata un tema pendiente desde el año, como dije hace ratito, 2014. Estamos seguros que con la expedición de esta ley, se dará respuesta clara y contundente a los distintos fenómenos delictivos que afectan a la sociedad mexicana.

Es inconcebible, compañeros, que todos los días nosotros veamos en los puestos de periódicos imágenes de personas que son asesinadas, que fueron descuartizadas y que se esté convirtiendo eso en nuestra sociedad, que se esté sociabilizando el delito. Estamos perdiendo la sensibilidad.

¿Qué pasaría si un periódico de esos mostrara las imágenes que se muestran a diario aquí, en un país como Finlandia? ¿Qué ocurriría con esa sociedad? ¿Cómo lo percibiría?

¿Pero por qué en México no hay esa sensibilidad ya o porque se está perdiendo no sólo en los políticos, sino también ya empieza a permearse en la sociedad, en los ciudadanos, en cada uno de nosotros?, y eso ocurre porque no tenemos una efectiva impartición de justicia.

La impartición de justicia, la persecución de los delitos, que ningún delito quede impune, no puede postergarse más.

Todos los delitos deben de ser perseguidos, todos los delincuentes deben ser encontrados, no puede haber una víctima más cuya familia no reciba justicia y ellos mismos. Por todas las personas que han perdido la vida, es necesario que entre en vigor ya esta Ley Orgánica.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Zamora Guzmán.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Geovanna Bañuelos De la Torre, del Partido del Trabajo.

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre: Con su permiso, señor Presidente.

Los recientes gobiernos sumieron a nuestro país en una violencia que no sólo trastocó la tranquilidad de nuestra sociedad, sino que nos heredó el cementerio de inseguridad, y las estadísticas de horror documentadas en cada delito de alto impacto, en cada homicidio, en cada secuestro, en cada violación, en cada desaparición, está el brutal agravio a las víctimas.

México está agraviado. Agraviado por sus autoridades, por sus omisiones, por sus errores.

Apreciables Senadores, les solicito que no seamos presas de nuestros apasionamientos y que actuemos de manera congruente con esta nación que clama justicia. Les invito a jubilar, sin honores, a la PGR.

No hace falta profundizar en la historia, es sencillo, es simple, echar una vista a nuestra historia reciente. Ayotzinapa, 43 normalistas desaparecidos y la ridícula verdad histórica.

El llamado Dream Team, la generación de gobernadores, en su mayoría priístas, más corrupta en la historia de nuestro país, encabezada, evidentemente, por los Duarte, donde participaron los Moreira, Medina.

El propio Miguel Alonso Reyes, ex gobernador de mi tierra, Zacatecas, un hombre que dejó sumido en la pobreza y en la violencia a nuestra estado, la generación de mandatarios que se gradúo con altos honores, pero en abusos a la autoridad, en desfalcos, en enriquecimiento ilícito y en saqueos.

El caso Odebrecht, este entramado internacional que todos conocen bien donde México está involucrado, pero los implicados gozan del manto de la impunidad.

La “Estafa Maestra” o las 128 empresas fantasmas a través de las cuales se esfumaron millones de pesos del erario público.

Una mención honorífica a doña Rosario Robles por tener el doctorado, el más alto grado de corrupción en nuestro país.

Todos estos casos que acabamos de mencionar tienen algo en común: las omisiones, los errores, la protección, la impunidad con la que fueron manejados, todos estos casos son el sinónimo de la impunidad e incuestionable burla a la justicia.

Quienes conformamos el grupo parlamentario del Partido del Trabajo apelamos de manera respetuosa al resto de las fuerzas políticas que integran el Senado a tener la sensibilidad, a tener la voluntad social de avanzar a una verdadera procuración de justicia.

Con la aprobación de este dictamen que estamos discutiendo comienza el proceso de profunda transformación legal e institucional que la República demanda. Y no se equivoquen quienes detrás de una falsa preocupación por la supuesta ausencia de autonomía pretenden justificar su incapacidad y su falta de voluntad para realizar una reforma constitucional cuando eran mayoría y utilizaron a las instituciones para beneficio propio.

La justicia selectiva no será una característica de los nuevos tiempos. Sí lo será el combate frontal a la corrupción, a la delincuencia y a la impunidad.

Con la Ley de la Fiscalía General, además de crear una nueva institución, el Senado sentará las bases que nos permitirán revertir el estado de atraso y descomposición que priva en el país en materia de procuración de justicia y lucha contra la impunidad y la corrupción.

En el tránsito de la PGR a la nueva Fiscalía General daremos paso al primer ente autónomo que nacerá de una nueva mayoría que concibe a las instituciones como medios, no como fines.

La “Cuarta Transformación” tiene como eje de su proyecto político la conformación de un estado de derecho que coloque en el centro de su preocupación a la persona, al ser humano, a la víctima del delito. Un Estado que sustituya la visión formalista y la aplicación literal de la legalidad por una acción cuyo paradigma esencial sea el de garantizar la justicia y la vigencia de derechos.

Desde luego que se trata, y lo sabemos, de una nueva forma de entender y ejercer la democracia. Una forma que las anteriores mayorías no comparten porque no busca el mantenimiento del status ni la perpetuación de su estado de privilegio.

Por eso, nosotros, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, los invitamos, de manera respetuosa, a que juntos pongamos fin al México agraviado. No podemos seguir siendo una nación sumida en sangre y en dolor.

Reitero, hoy nos llama el deber en buscar, en cierta medida, reparar el daño a las víctimas del delito que hoy nos demandan a cada uno de nosotros justicia. Por eso, nuestra invitación respetuosa a que se vote a favor de este dictamen.

Muchísimas gracias, compañeras y compañeros Senadores.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Geovanna Bañuelos.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Samuel García Sepúlveda, de >Movimiento Ciudadano.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Gracias, señor Presidente.

Yo quisiera iniciar con algunas preguntas y es, ¿quién de aquí ha ido a denunciar a un Code de la PGR y preguntarles si el trato les gustó?

Datos de 2016 resaltan que de cada 25 delitos solamente uno termina como denuncia.

¿Por qué? Pues porque, o hay ignorancia de la ley para ir a denunciar o porque nos da flojera ir a ratificar o porque en la ratificación el MP llega de manera ostentosa a decirte que si hay falsedad vas a la cárcel o porque muchos no confiamos en la procuración de justicia.

Hoy, la PGR tiene el lugar 105 de 113, estamos a nivel de Siria, de impunidad y procuración de justicia, pero esto tiene tres motivos:

Uno, que no es una procuraduría autónoma e independiente.

Dos, que la institución ya está viciada de cuates y cuotas.

Y tres, porque no le apostamos a las tecnologías.

Yo les quiero preguntar, ¿cómo vamos a juzgar a un Presidente de un delito de corrupción si el Fiscal Anticorrupción lo puso, un Fiscal General y este fiscal es carnal del Presidente?

Explíquenme nada más, ¿quiero saber cómo?

Un Fiscal que le va a pagar, lo va a poner, lo puede quitar con un plan de persecución, le dice qué hacer, cómo va a lograr esa anticorrupción, Nieto o como se apellide, ir contra el Ejecutivo, si es un subordinado.

Voy más allá. En la Comisión de Justicia me llamó la atención porque vamos a sacar de manera paralela el fuero, pero no el fuero que está allá, quiere una minuta que nada más es de votarse, es un nuevo proyecto que le da un status especial al Presidente.

A todos nos van a quitar el fuero, a todos, pero al Presidente status especial; dos terceras partes de ambas Cámaras para quitarte la inmunidad, ¿eso es el fuero que queremos en México?

Se han puesto a pensar ustedes en su escaño, cuando nos quitemos el fuero y sigamos criticando el gasolinazo, el aeropuerto, el Tren Maya y que nos digan: "la carnicería".

¿Eso queremos para nuestro país?

Y fíjense, Nuevo León, fue el primer estado que nos animamos a sacar un verdadero Fiscal autónomo con un brazo armado, electoral, independiente y un brazo armado anticorrupción independiente, llevan funciones seis meses.

Cuando hicimos la reforma constitucional nos llegaron datos y por eso es importante, como dice Mancera, acudamos a las organizaciones civiles, llevan 40 años estudiando el tema de impunidad y de inseguridad.

¿Qué nos dijeron las asociaciones civiles?

Ya les dije, de cada 25 delitos solamente uno queda formalmente registrado.

De todos los que llegan registrados al Code, solamente tenemos la capacidad, y me refiero a dinero, personas, tecnologías, de investigar diez, de cada cien, diez, luego hay que ver si las pruebas son suficientes, y de esos diez salen tres o cuatro carpetas de investigación que luego hay que mandar al Procurador a que nos firme para consignar.

Y ahí, de cada cuatro solamente dos llegan a consigna ante un juez, hagamos la matemática, 25 delitos solamente llega uno, de los 100 delitos que llegan, solamente diez acaban en carpetas, y de esas carpetas, dos o tres acaban en consigna, es menos del 1 por ciento lo que llega realmente a sanción.

Insisto, ¿por qué? Pues porque hoy la PGR no es autónoma, está viciada ya al interior y no está aplicando tecnologías y el dictamen que hoy nos ponen a consideración persiste la subordinación al Ejecutivo, se traslada la PGR como está, nada más le vamos a cambiar el nombre y todo el personal va a quedar adscrito para la nueva Fiscalía, es un simple cambio de nombre.

Con todos sus vicios, con cuotas y compadres, como se dice coloquialmente, y yo no alcancé a ver tecnologías en este dictamen, ojalá vengan bases de datos, intercambio de información, nuevos tratados con la DEA, con el FBI, aquí no se ve.

Por todo eso, es que en Movimiento Ciudadano estamos en contra de un "fiscal carnal", estamos en contra de trasladar el personal y simplemente cambiarle de nombre, y estamos en contra de la prisa, ¿por qué de la prisa? Nos están diciendo que en un año vamos a ver si sale o no una reforma constitucional.

Yo apelo a su conciencia, fíjense, hay un Décimo Tercero Transitorio y establece que en un año vamos a ver los resultados, y entonces sí a ver si nos animamos a la reforma constitucional.

Yo les voy a decir por qué eso es falso. En un año ya tienes al Fiscal General nombrado y trabajando, ese Fiscal ya nombró al de anticorrupción, al electoral, al de derechos humanos, quizás al de feminicidios, ya mandó un equipo a Tamaulipas para el secuestro, ya mandó a Puebla huachicol, ya mandó a Guerrero temas de seguridad.

Ya probó un plan de persecución política, ya todo el personal de la PGR tiene derecho adquirido porque está adscrito ahora a la Fiscalía, ya le metimos un año de dinero y vamos a querer hacer una reforma en un año para poner requisitos de que por ningún motivo ese Fiscal sea militante, sea de un partido, sea de un subordinado, sea un amigo.

Señores, eso no va a pasar.

¿Cuál es la prisa?

Saquemos la reforma constitucional y si ya pasó el 1 de diciembre, pues con la ley actual pongan un Procurador, va a ser lo mismo si el 1 de diciembre ponen un Procurador en lo que sale la reforma constitucional, a poner un Procurador o un Fiscal con este nuevo dictamen.

Creo que tenemos la oportunidad histórica y lo subrayo, de cambiar el sistema de procuración de justicia en este país, podemos revertir esa tendencia desde los 70's donde el Procurador era el amigo y el encargado de cuidar al Presidente, a su equipo, a su partido y a su grupo de poder.

Hoy lo podemos hacer y, desgraciadamente, saliendo este dictamen, se los firmo, que no habrá reforma constitucional en un año.

Yo vine al Senado por dos cosas, fueron las que prometí en la calle: reversa al gasolinazo y Fiscalía que sirva, por eso no puedo ir con este dictamen.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Samuel García.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Adicionalmente las formas incorrectas y riesgosas para la legalidad de una iniciativa tan importante, podemos decir, que esta iniciativa no resuelve la exigencia de procuración de justicia que reclama la sociedad.

No la resuelve porque el cambio de nombre en las leyes no cambia las cosas.

No lo resuelve porque el cambio de organigrama no resuelve los obstáculos con los que se ha enfrentado la impartición de justicia en México.

Un Presidente que pone un fiscal, un Presidente que quita a un fiscal incómodo es el punto nodal de la falta de una fiscalía que sirva.

Pues este dictamen crea precisamente una fiscalía que no sirve, pues además de que el Presidente pone y quita al fiscal general, el fiscal general también pone y quita a los fiscales especiales, a los coordinadores y al resto del personal, incluso el fiscal puede quitar a los integrantes del Consejo Consultivo que le resulten incómodos.

¿Cuál sería entonces la independencia de la investigación? No existiría.

Dejó escrito Max Weber que: "En la política lo que no es posible es falso", así pues, si no es posible con esta iniciativa darle autonomía a la fiscalía, es mentira lo que se propone.

La propuesta no establece una organización clara que permita y propicie la máxima condición entre las instituciones responsables de perseguir los delitos, así como una organización entre los estados para lograr una investigación y procedimientos eficientes que garanticen el acceso a la justicia y la reducción de la impunidad.

¿Qué podemos decir sobre el fiscal? Las organizaciones de la sociedad civil nos insistieron mucho en la necesidad de reformar la Constitución, particularmente en el artículo 102, para lograr la independencia del fiscal.

Existen aspectos del perfil del fiscal que no se pueden describir en la Ley Orgánica sin pasar por la reforma al 102.

Esto no puede suceder, ya que es necesaria la autonomía del fiscal para garantizar la legitimidad de la investigación.

Para lograr reducir la impunidad necesitamos garantizar la justicia y la autonomía es fundamental para este fin.

Hoy, quienes voten a favor de este dictamen, estarán haciendo lo que tanto criticaron, no hay reforma al 102 ahora que ustedes tienen la mayoría.

Quiero hablarles de otra figura que viene en la Ley Orgánica, una figura sumamente importante, una figura con prácticamente las mismas funciones y facultades que el fiscal, pero sin ninguna responsabilidad constitucional de rendir cuentas. La figura del coordinador general que hace las veces de fiscal de facto o vicefiscal.

Estamos haciendo las leyes a modo de las personas y no sólo la ley, también los cargos. Dentro de las leyes están previamente dibujados para un perfil ya imaginado.

Existen cuatro fiscalías especiales: la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, la FEPADE, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos.

Se está quitando de la ley una Fiscalía por la que las organizaciones feministas lucharon durante años, una Fiscalía que tiene una especialización pericial en delitos de género, la Fevimtra.

La Fevimtra atiende con una perspectiva específica los delitos y los crímenes que se cometen contra la mujer. Lo veremos en las reservas en lo particular, pero no es posible mantener a la bolsa general de Derechos Humanos los temas específicos contra la mujer.

Respecto a las coordinaciones.

Tenemos tres coordinaciones: la Coordinación de Investigación y Persecución Penal, la Coordinación de Métodos de Investigación y la Coordinación de Planeación y Administración.

Tengan mucho cuidado, las atribuciones que les están dando a cada una de éstas, tiene empalme de funciones que puede provocar distorsión en el proceso de investigación. Esto es muy importante porque tiene que ver con el proceso de investigación.

Son varios detalles que en la discusión en lo particular, intentaremos ayudar a solventar.

En lo general, vamos a votar en contra haciendo un llamado a la altura de miras.

Pareciera que la democracia liberal se está resquebrajando, y que nacen las democracias iliberales, las que van con la intención de debilitar las instituciones, las que van con la intención de hacer la ley a modo, las que van por la concentración del poder en un solo hombre, las que van al retroceso de lo que ya se había evolucionado.

Mucho se ha mencionado que una de las premisas que sustenta este cambio de régimen es que nadie está por encima de la ley; sin embargo, dado el tratamiento que se le da a esta Ley Orgánica sin fiscal autónomo y con un vicefiscal plenipotenciario, es evidente que la premisa es sólo una palabra y dista mucho de los hechos.

Señala la sabiduría popular que no existen urgencias, que sólo existen personas con prisa.

El dictamen que hoy nos convoca requiere, ante todo, de discusión, de consenso y de acuerdo.

Lo que menos necesita el país son soluciones que no solucionan, con la promesa de que después vamos a corregir los errores y subsanar los faltantes como el del 102 constitucional.

Esos errores ya los cometimos quienes hoy somos oposición y por no atender a los detalles, hoy, desde otra posición queremos demostrar que hemos entendido y que queremos construir con quien ofreció una nueva manera de hacer las cosas.

Que esa nueva manera de hacer las cosas no sea hacerlas peor, no les vaya a pasar como el famoso cuento, pero al revés: “Hubo una vez un príncipe que con el beso democrático, se convirtió en sapo”.

El reclamo social más importante en este país, es la inseguridad y la justicia.

La fiscalía es la institución más importante para lograrlo, pensemos en dejar instituciones fuertes, a sabiendas de que el péndulo se mueve, a sabiendas de que el poder cambia de manos y solamente las instituciones podrán garantizar la fortaleza de nuestra nación.

Reflexionemos, el destino de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía está en nuestras manos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Claudia Edith Anaya Mota.

Tiene la palabra el Senador Damián Zepeda Vidales, del Partido Acción Nacional.

El Senador Damián Zepeda Vidales: Con su venia, señor Presidente.

Éste es quizá uno de los temas de mayor relevancia que vamos a discutir en este Pleno del Senado de la República.

Hoy, en México, la procuración de justicia no funciona, hay que decirlo tal cual. Al año tenemos más de 33 millones de delitos; la cifra negra, es decir, los datos que no son denunciados, que no hay averiguaciones previas, ronda el 95 por ciento.

La mitad de esa cifra negra, cuando le preguntas a la gente, te contesta que no tiene sentido denunciar, porque no creen en la institución que procura justicia en el país.

En inseguridad, el 75 por ciento de los mexicanos se siente inseguro, y en términos de resultados de la PGR hoy, sólo el 5 por ciento de los delitos que inician una averiguación previa, concluyen con una orden de aprehensión.

El sistema está colapsado, el principal problema que tiene este país se llama corrupción e impunidad, es un cáncer que existe en todos lados, en todos los colores, en todas las instituciones y que tenemos que acabar con él.

A eso venimos aquí, el grupo parlamentario del PAN al Senado de la República, a cambiar la realidad de este país, y no hay una institución más importante para combatir la corrupción y la impunidad en este país que la fiscalía general que vamos a crear.

La pregunta de fondo es, ¿cómo le hacemos para que funcione?, ¿cómo le hacemos para que verdaderamente en México se acabe la impunidad?

La respuesta es bien sencilla, con una fiscalía general autónoma e independiente. Hoy no lo es, se dio un paso con la reforma constitucional y la sociedad civil organizada nos mostró la debilidad de dicha reforma constitucional y nosotros aceptamos y salimos a impulsar su cambio.

La pregunta que hoy nos tenemos que hacer es, ¿lo que hoy se presenta a votación, aquí en el Senado de la República, logra una fiscalía general autónoma e independiente?

La respuesta, señoras y señores, díganse lo que quieran, es, no.

Esta reforma que presentan, ¿puede contestar las siguientes preguntas con un sí contundente? ¿Se garantiza que no se puede imponer un fiscal carnal con este dictamen? La respuesta es no.

¿Se garantiza que quien esté al frente de la fiscalía general sea independiente del Presidente de la República? La respuesta es, no.

¿Se garantiza que quien esté al frente de la fiscalía general no sea militante de un partido político, familiar o incondicional del próximo Presidente? La respuesta es no.

¿Se garantiza que el Fiscal Anticorrupción y de Delitos Electorales y de Derechos Humanos tengan plena independencia del fiscal general y del titular del Poder Ejecutivo? La respuesta, señoras y señores, es, no.

¿Se garantiza que esos fiscales no estén siempre maniatados por parte del titular del Poder Ejecutivo, porque los puede remover cuando guste, por lo que guste? La respuesta es, no.

¿Se garantiza que puedan tener presupuesto, recursos financieros, materiales y humanos libres de disposición para hacer su trabajo? La respuesta es, no.

Entonces no hay Fiscalía General autónoma, independiente, es un engaño de Morena y es un engaño de Andrés Manuel López Obrador.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Perdón, Senador.

Disculpe Senador Félix Salgado Macedonio, estamos en los posicionamientos de los grupos parlamentarios.

El Senador Damián Zepeda Vidales: Al finalizar, por favor, Senador, con mucho gusto, al finalizar la intervención, todas las que gusten.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Continúe el orador.

El Senador Damián Zepeda Vidales: Da tristeza ver a quienes hace apenas unos años escuchábamos exigir la verdadera autonomía e independencia de la fiscalía, hoy a de venir a defender lo indefendible.

Nadie está diciendo, ojo, que el dictamen en sí, que esa ley, que este producto sea malo. Lo que estamos diciendo es que no le da el paso de garantizar autonomía, independencia a la fiscalía general, porque no puede, señores.

Esa ley tiene que estar directamente ligada a lo que dice la Constitución y hoy la Constitución no permite una fiscalía general autónoma e independiente.

¿Qué características debe de tener un órgano, por supuesto, la Fiscalía, para ser autónoma e independiente?

Primero, tiene que garantizar que el nombramiento está ajeno de cualquier análisis político, de cualquier dependencia, sea el titular del Ejecutivo, y esta Constitución actual no lo prevé así.

No hay un solo señalamiento de que no pueda ser un militante, un directivo, es más, pueden agarrar al dirigente partidista y ponerlo de fiscal general, para que me entiendan.

No es correcto esto, necesitamos la Constitución, necesitamos garantizar autonomía e independencia.

En el tema de la remoción permite libremente que se quiete por parte del titular del Poder Ejecutivo.

Yo les pregunto, si alguien te puede remover, ¿es tu jefe, sí o no?, claro que sí, claro que sí, estás siempre subordinado, siempre amenazado a que te lo haga, no vas a poder hacer tu trabajo con garantía e independencia.

Los fiscales especiales no nada más no los nombra el Senado, los nombra directo el fiscal general, que a su vez no es autónomo ni independiente y los puede quitar cuando quiera.

Una experiencia con el pasado fiscal de delitos electorales, lo conocen bien ustedes, hoy va a colaborar con el gobierno futuro de Andrés Manuel López Obrador, se llama Santiago Nieto.

Y él, lo que decía, cuando lo removieron, que por cierto nos pareció a nosotros en el PAN injusta esa remoción, es que no funcionaba la fiscalía electoral, ni la anticorrupción iba a funcionar, por una sencilla razón, tiene completa dependencia, no tiene libertad en su presupuesto, se lo tiene que autorizar el fiscal general; no tiene libertad en su personal, se los tiene que autorizar el fiscal general.

Si quiere ir a hacer una diligencia le tiene que pedir permiso para que lo acompañen policías y si no se los autorizan no los van a acompañar.

Para acabar pronto, no tienen ni libertad para autorizar los viáticos para poder ir a un estado a hacer una investigación

¿Qué independencia va a garantizar ese esquema?

Lo mismo viene con este dictamen, que hoy aquí se está presentando, porque así está la Constitución.

Por último, para garantizar la autonomía se requiere blindar todo el esquema de la fiscalía general, de los fiscales especiales, de darles un andamiaje institucional que permita que operen y hagan su trabajo de manera correcta.

Todos aquí venimos a decir que queremos acabar con la impunidad, todos aquí venimos a decir que queremos que funcione bien el órgano, pues yo les digo algo, les decimos algo desde del grupo parlamentario del PAN: sin reforma al artículo 102 constitucional, no sirve la Fiscalía General, es una simulación y no va a dar resultados.

Yo he escuchado con atención los argumentos que han dado, soy miembro de la Comisión de Justicia y en el debate se decía, “es que urge”, “no hay tiempo que perder”, “necesitamos ya la fiscalía funcionando de manera adecuada”.

Coincidimos, nada más que para garantizar la fiscalía general autónoma e independiente. ¿Saben cuántos artículos necesitamos reformar? Principalmente uno y máximo cuatro, para darle garantía en todo lo que dije: nombramiento, remoción, autonomía en la manera de operar y obligar a que los estados también tengan que tener fiscalías generales autónomas e independientes.

Todos parejos, todos, de todos los colores, todo el país, para acabar con la impunidad. Cuatro artículos, señores.

Y el argumento es: “no hay tiempo”.

¿Saben cuántos artículos tiene este dictamen que hoy nos presentan? 64.

Si hubo tiempo para analizar 64 artículos de un proyecto de dictamen de la Ley Orgánica y no hubo tiempo para analizar cuatro artículos de la Constitución y garantizar la fiscalía general autónoma.

No, no nos engañemos, no es un tema de tiempo, se llama voluntad política.

Y Morena y Andrés Manuel López Obrador no tienen voluntad política para tener una fiscalía general autónoma e independiente, esa es la verdad y hay que decírsela de frente al pueblo de México.

Por último, decirles lo siguiente, con esto concluimos, aquí está el grupo parlamentario del PAN para hacer realidad una fiscalía que sirva.

Estamos listos para votar hoy, esta semana, la que sigue, un dictamen con reforma constitucional para garantizarle a México una fiscalía general autónoma e independiente.

La pregunta es si Morena tiene disposición o no de verdaderamente acabar con la corrupción y la impunidad en este país.

Vamos por una fiscalía general autónoma.

Vamos por una reforma al 102 constitucional. Lo demás es simulación.

Muchas gracias.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: (Desde su escaño) Señor Presidente, una pregunta.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: A juicio de esta Presidencia, estamos en el posicionamiento de los grupos parlamentarios y, por lo tanto, consideramos que no debe haber preguntas y respuestas.

No obstante, el Senador Damián Zepeda está aceptando la pregunta.

El Senador Damián Zepeda Vidales: Usted diga, como quiera.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: A juicio de esta Presidencia, estamos en los posicionamientos.

El Senador Damián Zepeda Vidales: Como ustedes quieran, ahorita, en otro momento, cuando ustedes gusten.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Estamos en los posicionamientos de los grupos parlamentarios, y ya vendrá el debate a favor y en contra, después.

El Senador Damián Zepeda Vidales: Yo estoy aquí con disposición, Senador, para escucharlo cuando le permita su grupo parlamentario preguntarme.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Bien. Gracias.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Olga Sánchez Cordero, del grupo parlamentario de Morena.

La Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Con la venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros del Senado de la República:

Por fin estamos aquí, cuatros años después de que este mismo poder aprobara la reforma constitucional del 102, donde se mandata la creación de una Fiscalía General de la República que hoy estamos discutiendo.

Sabemos, como ya nos han adelantado, que van a votar en contra, pero será votar en contra de su memoria.

Hagamos un recuento de lo ocurrido durante la discusión de la reforma aprobada en el 2013.

El 5 de diciembre de ese año, con el voto unánime del PRI, del PAN, del Verde y Nueva Alianza, con un total de 409 votos a favor y 69 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados remitió a este recinto la minuta que reformó el artículo 102 constitucional.

Siguiendo el proceso legislativo, el día 13 de diciembre de ese mismo año, el Pleno de esta Soberanía puso a discusión la minuta.

El resultado a favor de la misma fue la siguiente votación:

El PRI y el Partido Verde, votación unánime, a favor de esta reforma, con 50 votos a favor, y el segundo con cuatro, aquí presentes.

El PAN tuvo 32 votos a favor, una abstención y un voto en contra, también aquí presente.

El PRD, hagamos memoria, el PRD, 13 votos a favor y uno en contra en este Senado.

Finalmente, los legisladores del Partido del Trabajo, votaron cinco en contra y una abstención.

Llevamos dos legislaturas con un mandato constitucional pendiente para la creación de esta ley, la creación de un órgano capaz de hacer frente a la problemática actual de inseguridad, de corrupción y lacerante impunidad que vive nuestro país, y esto constituye y, perdón, una auténtica omisión legislativa.

Senadoras y Senadores, con la discusión de este dictamen escuchamos a todas las voces que han formado parte de este importante proceso para nuestro país y nuestras instituciones.

En el dictamen podemos encontrar, inclusive, las iniciativas presentadas por el grupo parlamentario del PRD, al igual que el de mi partido, pero más importante todavía, es necesario identificar las voces de la sociedad civil a quienes escuchamos puntualmente, las instituciones académicas como el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que siempre formaron parte de este importante proceso y fueron nuestra principal guía para lograr esta ley.

El objeto principal del presente dictamen, es reglamentar la organización, el funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones de este nuevo órgano público autónomo, que contará con la personalidad jurídica y su patrimonio propio.

Además de la creación de la fiscalía general, se crean la Fiscalía de Derechos Humanos, de Delitos Electorales, de Combate a la Corrupción y la Fiscalía de Asuntos Internos, así como en los titulares de las fiscalías especializadas.

Quiero ser enfática, se salvaguarda la independencia y autonomía técnica de esta institución. Esto basado en las atribuciones que los fiscales tendrán entre sí para adaptarse a los fenómenos delictivos con rapidez, con celeridad, con la que se requiere atender estos asuntos.

Se elimina de una vez por todas la rigidez con la que se desarrollaban y se desarrollan actualmente las investigaciones, dotando a los equipos de investigación con recursos humanos y materiales multidisciplinarios, atendiendo al fenómeno delictivo investigado, así como la atribución del fiscal de crear a través de acuerdos generales el número de fiscalías especializadas necesarias conforme a las incidencias delictivas y la frecuencia de determinados delitos. Aquí es donde reside, entre otras, las atribuciones de una verdadera autonomía.

Para restaurar el estado de derecho, y subrayo, restaurar el estado de derecho, es indispensable aprobar esta ley e iniciar el proceso para el nombramiento del titular de la Fiscalía General. Este nombramiento se encuentra ajustado a los principios establecidos en la Constitución vigente.

La convocatoria sellará por los principios de transparencia, publicidad, mérito, participación ciudadana e igualdad y no discriminación, estableciendo los requisitos de elegibilidad, así como las causas graves para su remoción.

El grupo parlamentario de Morena votará a favor de este dictamen como un acto de responsabilidad y congruencia con la República y con los mexicanos dentro del marco constitucional del artículo 102 vigente.

La nación ya no tolera más indiferencia ni negligencia en esta institución sumamente sensible para nuestro país.

México requiere contar con una fiscalía general y con un fiscal que atienda los retos que en esta materia enfrentamos día con día todos los mexicanos en un reclamo de paz y justicia.

Es lamentable que en ocasiones la procuración de justicia ha sido utilizada como instrumento de persecución entre adversarios políticos.

Morena defiende la Constitución y las reformas.

No podemos seguir dando prioridad a negociaciones políticas e ignorando las necesidades del país sin escuchar a la sociedad civil.

Compañeras y compañeros, los invito a votar a favor de este dictamen que marca un parteaguas en el combate a la corrupción, en el abatimiento de los altos índices delictivos y en el restablecimiento del estado de derecho.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Olga Sánchez Cordero.

Informo a la Asamblea que tenemos registradas 22 oradoras y oradores para la discusión en lo general, para hablar en pro o en contra del dictamen.

El Reglamento, en su artículo 199 establece que cuando hayan hablado cinco oradores en cada sentido se debe consultar si el asunto está suficientemente discutido. En caso afirmativo se puede realizar ya la votación en lo general; en caso negativo, debe continuar la discusión.

Es intención de esta Presidencia escuchar el mayor número de puntos de vista, por lo que invitamos ajustarse a los cinco minutos de la exposición.

Para la discusión en lo general, tenemos a la Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN.

Hay un cambio para iniciar la discusión en lo general.

¿Se encuentra la Senadora Guadalupe Murguía?

Si no, tiene la palabra la Senadora Indira Rosales, para hablar en contra.

Y después el Senador Raúl Rocha, a favor.

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva.

El Partido Acción Nacional ya dijo cuál es su postura, estamos en contra.

Estamos en contra porque esto no resuelve el problema de raíz. Estamos en contra porque es mentira que en un año vamos a volver a hablar de esto y vamos a legislar.

Si se tiene la mayoría, ¿por qué no atendemos el problema de raíz?

Voy a repetir lo que hablamos en las comisiones.

Efectivamente, las mexicanas y mexicanos de este país exigen justicia y la exigen de manera urgente; sin embargo, eso no justifica de ninguna manera que tengamos una Ley Orgánica mal hecha, que tengamos una Ley Orgánica a modo, que tengamos una Ley Orgánica que únicamente atiende los intereses de unos cuantos y que con eso se pretende únicamente pasar y seguir así como si en este país no pasara nada.

¿Cuáles son los ejes que tenemos en Acción Nacional, que nos molestan de sobremanera? No hay autonomía, no tenemos un fiscal independiente, tenemos fiscalías especializadas que se encuentran totalmente subordinadas a este fiscal general.

Yo pregunto si el Fiscal Anticorrupción, cuando tenga que atender algún punto específico referente al Ejecutivo, finalmente es su jefe, el Presidente de la República, ¿va a poder investigar a fondo? ¿Le va a dar el Fiscal General, efectivamente, los recursos necesarios tanto económicos como operativos para resolverlo? Por supuesto que no, simplemente se están poniendo personas a modo.

Tenemos una figura que en Acción Nacional, de verdad, nos parece muy triste, un coordinador general. Tenemos un “fiscalito”, un “fiscalito” que resulta que tiene todavía más facultades que el propio Fiscal General.

Tenemos un Coordinador General de la Fiscalía de la República que va a poder ejecutar extradiciones, que va a poder determinar la política de género al interior de la Fiscalía General de la República.

Esto no es posible, estas son funciones que deberían ser únicamente del Fiscal General de la República.

Tenemos una participación ciudadana que es a medias.

Tenemos una participación ciudadana a través de un supuesto Consejo Ciudadano que desafortunadamente le tiene que pedir permiso para todo o al coordinador general o al Fiscal General.

No hay independencia y definitivamente este propio Consejo Ciudadano, las recomendaciones que emite de ninguna forma son vinculatorias, y no tiene tampoco el propio Fiscal General ninguna obligación de responder a ellas, no tiene ningún sentido.

El propio artículo 63 que habla del presupuesto de la Fiscalía General de la República, tampoco se queda a medias, simplemente habla que debe tener un presupuesto, pues claro que debe de tener un presupuesto como cualquier otra dependencia; sin embargo, desconocemos, no se pone ahí que debiera ser mayor, no se pone ahí que debiera ser a lo mejor mayor, menor al del presupuesto anterior del ejercicio fiscal, no lo sabemos, se queda escueto. Ustedes pueden decidir y hacer lo que quieran con la Fiscalía porque esta ley lo permite.

Los servicios. El tema de Servicio Profesional de Carrera es muy importante, si se supone que estamos reformando esta Fiscalía, porque la PGR está llena de corrupción, está llena de malos servidores, están poniendo que únicamente sean algunas de estas personas que están trasladándose de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía, solamente algunos pasarán al servicio especial de carrera, no todos. Eso no lo podemos permitir, ahí hay gente que en teoría, años, se ha vinculado con temas de corrupción, porque no todos, por qué no, si vamos a hacer las cosas, las hacemos bien y no las hacemos nada más a medias y no las parchamos.

Finalmente, está de más que les diga que la ley es una tristeza, es una tristeza, saben que es una tristeza gramatical, es una tristeza ortográfica; digo cualquier persona que haya asistido a una clase de español, puede ver que está totalmente mal hecha porque la quisieron hacer de un día para otro y si se supone que ésta es la gran transformación de este país, esa ley es la gran tristeza y la gran vergüenza de este país.

El Partido Acción Nacional no puede acompañar algo que desde sus orígenes está mal hecho, nosotros no queremos ir un paso adelante, no queremos pasitos; ¡no!, nosotros queremos dar la gran reforma a la Constitución para que haya verdaderamente un fiscal autónomo y no un "fiscal carnal".

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Indira Rosales.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Rubén Rocha Moya, de Morena, para hablar a favor

El Senador Rubén Rocha Moya: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Bueno, es obvio que vengo a hablar a favor de la ley, del proyecto de ley, y lo hago porque ya ha habido razonamientos muy interesantes, eso es por el Senador Julio Menchaca, señor Presidente de la Comisión y la Senadora Sánchez Cordero, que hace muy poquito estuvo en esta tribuna.

Pero yo quiero decir que esencialmente destacaría, amén de lo que ellos han dicho, el tema del plan de persecución penal, que me parece una figura novedosa y que contiene ahí elementos fundamentales y que son los elementos que distinguen justamente la Fiscalía que estamos tratando de construir, de la Procuraduría General de la República.

¿Qué elementos? Primer punto, es que se van a ordenar, a partir de la planeación, los delitos conforme al impacto social que éstos traen, va a haber posibilidades, como ya lo hicieron en este proyecto de Decreto, de que participe la sociedad, las instituciones académicas y que se dé el control ciudadano en el ejercicio de la investigación penal, se van a cuidar y garantizar los derechos humanos.

Y algo que me parece fundamental, que destaco, a propósito de este tema de la autonomía, es que la Fiscalía General, su esencia autónoma está en el hecho de que los cuerpos técnicos, los investigadores, no los subordinados, los subordinados los había en la Procuraduría General o los hay, ya no los habría en la Fiscalía, tienen libertad, autonomía, independencia para investigar.

Ahí está la esencia de la autonomía de esta Fiscalía que estamos construyendo, y no en los esquemas propagandísticos, niños que los quieren remitir al hecho de que si el Presidente o el Jefe del Poder Ejecutivo participa de alguna manera en la selección del Fiscal, ya se pierde toda autonomía, incluso, hasta podríamos tener un "fiscal carnal".

¡Qué pobreza de argumentos se han venido a decir aquí!

Primero, se los digo, es el Senado, es el que hace la lista de diez, la manda al Ejecutivo, el Ejecutivo regresa una terna de una lista nuestra, no de él y el Senado lo nombra finalmente o nombra al fiscal.

Ahora fíjense ustedes, a propósito mis queridas compañeras y compañeros Senadores, tendríamos que decir que tenemos 11 ministros carnales, pero carnales de sus presidentes, de Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, porque resulta que los ministros de la Corte se nombran en el Senado pero a propuesta de una terna del Ejecutivo, tenemos cinco carnales de Felipe Calderón, tres de Fox y tres de Enrique Peña Nieto, es muy simplista su argumentación.

Eso no es posible que lo sigamos trayendo a un Parlamento serio, moderno como es éste.

En el derecho comparado, abundando, vamos a encontrar que Argentina, que Chile, que Colombia, que Estados Unidos nombre a sus fiscales con la intervención directa del Presidente, del Jefe del Ejecutivo y lo hace España, quiero decirles que en España, quien nombra al fiscal, es el Rey a propuesta del gobierno y le da vista solamente a la Corte.

Señor Presidente, le pido que me permita Y en nuestro caso, ¿qué ocurre, compañeros? El Presidente de la República aquí se nombra por votación universal, tiene por tanto el bono democrático, es el Presidente Jefe de Gobierno y es el Presidente, Jefe del Estado, maldita sea la cosa, que el Jefe del Estado no tuviera nada qué ver, ningún vínculo con un órgano del Estado, que sería autónomo el caso de la Fiscalía, por supuesto que lo tiene.

Señor Presidente, permítame concluir mi intervención.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprovecho para informarle que el Senador Mario Zamora, desea hacerle una pregunta, le pregunto a usted si la acepta.

El Senador Rubén Rocha Moya: Voy a terminar.

Disculpe, Mario.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Y concluya, por favor.

Adelante.

El Senador Rubén Rocha Moya: En nuestro caso, decía, ese vínculo con el organismo autónomo del Jefe del Ejecutivo, pues es elemental porque es el Jefe del Estado, como lo tiene con la Corte, con la Suprema Corte de Justicia, que ahí ni siquiera se trata de un organismo autónomo, se trata de un poder de la Federación, es todavía más fundamental y por eso yo quiero preguntarles aquí a los defensores, a los que proponen que primero reformemos el 102 constitucional, que por cierto, queremos que se nombre el Fiscal con su norma, con la norma que ustedes aprobaron y una norma constitucional para poder ser evaluada hay que ponerle en la práctica primero.

No hemos nombrado ningún fiscal, hay que nombrar uno con la norma de ustedes y al año reformamos si es necesario, yo nunca voy a estar de acuerdo en que se saque de la jugada, válgame la expresión, en el nombramiento del fiscal al Jefe del Ejecutivo, si ahora y dentro de un año lo evaluamos, voy a tener la misma opinión.

Entonces si, la pregunta sería la siguiente: Si tanto les preocupa el 102 constitucional, porque no han metido una iniciativa para reformar el 89 constitucional en su fracción XVIII, que le da la facultad al Presidente a presentar ternas para nombrar a los ministros.

Esa es una de las preguntas que tendrán que contestar ustedes.

Ya voy a terminar y voy a decir lo siguiente:

"En la "Cuarta Transformación" nos proponemos acabar con privilegios, por eso vamos a votar en contra del fuero.

En la "Cuarta Transformación" nos proponemos acabar con la corrupción, por eso vamos a elevar el delito de corrupción a delito grave.

En la "Cuarta Transformación" queremos que, efectivamente, transitemos en la lucha contra la criminalidad.

En este caso, y referido al Presidente más legitimado electoralmente, que es Andrés Manuel López Obrador, no quisiéramos ver que un fiscal, no carnal de él, pero sí carnal de los criminales y de los dueños de los dineros en este país, es decir, de los banqueros, de los empresarios, de los inversionistas, que se llaman poderes fácticos.

Si ustedes están luchando por quitarle la relación al fiscal con un poder del Estado, resulta que cuando eso ocurra el poder fáctico de los criminales y del dinero van a poder empujar al fiscal para que elabore alguna acusación al Presidente, por ejemplo, de corrupción y con ello conducir a un probable golpe de Estado desde la fiscalía.

¿Eso es lo que quieren?, ¿ahí quieren que lleguemos?

Pues yo creo que esta es la reflexión fundamental que tendríamos que hacer.

El tema de la autonomía no puede ser ahora el que nos lleve a…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Concluya, Senador, por favor.

El Senador Rubén Rocha Moya: El que nos lleve a quitarle la oportunidad a este país de que tenga una Ley Orgánica como la que está proponiendo ahora, la que estamos discutiendo ahora aquí, que se ha propuesto por las Comisiones Unidas a nuestro país para que, en efecto, empecemos a atacar el delito de manera eficiente, sin corrupción, con la debida transparencia.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Rubén Rocha.

Le pregunté y no aceptó la pregunta, dijo que no.

Tiene la palabra la Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra.

La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En el grupo parlamentario del PRI hemos analizado el dictamen que se propone a este Pleno.

Sabemos que no es un tema menor y creemos que es un asunto que requiere del más alto nivel del trabajo parlamentario, no podemos tomarlo a la ligera.

Construir las instituciones que queremos para tener un Estado democrático de derecho, darle al Estado mexicano el andamiaje constitucional, legal, el diseño institucional para garantizar un verdadero acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos, la división de poderes y la independencia y autonomía de las instituciones encargadas de procurar, administrar e impartir justicia nos ha tomado décadas.

Hay muchas cosas por hacer y muchas cosas que mejorar para que este sistema se consolide y tenga los efectos que queremos.

Todos queremos una fiscalía autónoma con capacidades suficientes para cumplir sus fines, que sea operativa, que esté integrada por servidores públicos profesionales y honestos que estén sujetos a un régimen de rendición de cuentas, que se respeten los derechos de las víctimas y los derechos humanos de todos quienes intervienen en el proceso.

Que la calidad de las investigaciones no esté en duda, que no haya discrecionalidad, que se respete la ley y los principios constitucionales.

El problema es que esa fiscalía que queremos no es la fiscalía que crea el dictamen que se está proponiendo al Pleno.

En el PRI resumimos la visión del dictamen en una frase: la fiscalía que crea este dictamen tiene deficiencias serias en su autonomía, afecta a la ciudadanía, no supera los vicios e ineficiencias de la Procuraduría General de la República y crea espacios de discrecionalidad preocupantes. No es la fiscalía que necesitamos.

Las tareas, responsabilidades y funciones de la nueva fiscalía requieren un marco normativo que ayude a sus titulares a resistir presiones, a marcar una clara prevalencia del orden jurídico sobre los intereses políticos y económicos.

Una verdadera autonomía ayudaría a que se recupere la credibilidad en las instituciones de procuración de justicia.

Pero el dictamen a discusión no promueve una verdadera autonomía, de hecho, la limita seriamente. Por ejemplo, no le da seguridad presupuestal ni estabilidad en el cargo a sus titulares, no hay ningún referente del presupuesto requerido para materializar a esta fiscalía, de tal manera que un futuro titular tendría que acudir al Poder Ejecutivo para pedirle un presupuesto adecuado, además, violentando otras disposiciones de responsabilidad presupuestal.

Ya se ha hablado aquí del tema de la remoción y cómo esa posibilidad de ser removido por causas laxas, sin precisar por el titular del Ejecutivo, vulnera el principio de autonomía.

En el esquema que se propone, no busca la verdadera autonomía de la fiscalía, que en un momento memorable en la discusión, en la sesión de la Comisión de Justicia, un compañero del grupo parlamentario de Morena dijo: “no importa que haya deficiencias en el dictamen, lo que urge es que el próximo Presidente tenga su fiscal”.

Si quisieran una verdadera autonomía no tendría una visión patrimonialista del fiscal respecto del futuro Presidente.

La fiscalía que proponen afecta también a la ciudadanía porque le dificulta el acceso a la justicia.

El dictamen que se nos presenta, mantiene un modelo de procuración de justicia que está agotado, que está rebasado. Está rebasado porque uno de los principales defectos del esquema de la actual Procuraduría es que las investigaciones se fragmentan en cadenas complejas de responsabilidades y de atribuciones que favorecen la impunidad y, con ello, la inseguridad.

El modelo que se buscaba, era un modelo flexible en donde los casos sean analizados por equipos multidisciplinarios, que puedan resolver los casos de manera integral a partir de conjuntar en distintas personas, habilidades y capacidades técnicas diferentes; unidades de investigación dirigidas por un fiscal en el que participen policías de investigación, peritos, técnicos, analistas.

Este modelo se vulnera al crear fiscalías especializadas que van a repetir el mismo patrón de errores y de ineficiencia.

Equipos diferentes, sin competencias definidas que investigan partes distintas de un mismo proceso, eso no va a ayudar a que se haga justicia y a que se elimine la impunidad.

En otras palabras, no están proponiendo una nueva institución, están proponiendo una institución con otro nombre que replica las viejas deficiencias que justamente son las que queremos superar.

Se ha hablado también del vicefiscal, un vicefiscal que tiene tantas atribuciones que incluso superan a las del fiscal.

Un nombramiento en el que no participa el Poder Legislativo a través del Senado y para el cual, para ocuparlo, no se establece ningún requisito de elegibilidad.

En suma, esta no es la visión que se quería, éste no es el diseño institucional que se requiere. Con este diseño no hay autonomía, se vulneran derechos, se resta certeza jurídica, ya para no hablar de la muy deficiente técnica legislativa que tiene el dictamen.

Son tantas las deficiencias e inconsistencias que, incluso, en distintos artículos aislados se hace referencia al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía, sin que dicho órgano sea creado en el ordenamiento que se busca aprobar, no se crea, pero se refiere y se le dan facultades.

Señoras y señores Senadores, la Fiscalía General de la República que necesitamos, exige una ley secundaria con visión de Estado, que sea integral, con rigor técnico y con precisión conceptual y terminológica, un ordenamiento de calidad.

En el PRI nos posicionamos en favor de un trabajo legislativo serio, de un debate parlamentario de altura que se base en argumentos y en un análisis sustantivo, con ánimo de construir consensos y productos legislativos que estén a la altura de lo que México requiere.

Pero este no es el caso, por ello, vamos a votar en contra de este dictamen. Hubo precipitación en el proceso legislativo y en los procedimientos.

No se privilegió un trabajo responsable y profundo que atendiera las inquietudes y preocupaciones de la sociedad civil y de los legisladores que representan a mi grupo parlamentario y a todos los grupos parlamentarios que integran este Senado.

Les recuerdo que son prácticamente todas las instancias y colectivos de la sociedad civil quienes se han pronunciado en contra de este dictamen, y han señalado sus deficiencias; incluso, quienes estuvieron presentes el lunes pasado en la sesión de la Comisión de Justicia dijeron con toda claridad que este dictamen era deficiente y no recogía sus preocupaciones. Los habrán escuchado, pero no les hicieron caso.

No se privilegió ese trabajo responsable, no se privilegió un debate profundo, se precipitó, se busca hacer una ley a modo, al vapor, con incongruencias y con inconsistencias.

Ésta no es la fiscalía que queremos, ésta no es la fiscalía que necesitamos, éste no es un dictamen que el grupo parlamentario del PRI pueda respaldar con sus votos.

Hacerlo sería irresponsable.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Claudia Ruiz Massieu.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Geovanna Bañuelos De la Torre, del Partido del Trabajo, a favor del dictamen.

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre: Gracias, señor Presidente.

En la pasada sesión, después de un airado debate, solicitaron y aceptamos el que se postergara al día de hoy la discusión y votación de este dictamen para que se les diera tiempo y oportunidad de leerlo, de analizar con detenimiento. No lo hicieron.

Se siguen vertiendo los mismos argumentos que en la sesión pasada, que en el seno de las comisiones dictaminadoras, y para nosotros es complejo entender que no solamente se está representando una minoría de carácter numérico, sino en el debate, en los argumentos, para poder contrarrestar algo que es una necesidad y una exigencia ciudadana, que es el que se pueda votar el debate de la Ley Orgánica de la Fiscalía General.

No es el Presidente quien tiene la facultad de nombrar al fiscal, no leyeron el dictamen, es el Senado de la República quien tiene esa facultad exclusiva.

Les recomiendo que lean el artículo 102 constitucional en el apartado A, y que lean también en el cuerpo del dictamen cuál es el procedimiento, es esta Soberanía, no se subestimen tanto, no de manera anticipada. Se puede lograr porque hemos mostrado voluntad en la mayoría de poder llegar a acuerdos, a consensos.

Se pueden lograr sin duda grandes acuerdos, en el nombramiento del fiscal, podemos con un escrutinio muy eficaz verificar cuál es el mejor perfil para que desempeñe esta función, yo los invito, insistimos, desde el Partido del Trabajo, a que voten a favor de la Ley Orgánica de la Fiscalía, no solamente va a ser el fiscal del Presidente, va a ser también el fiscal de cada uno de nosotros, de todos los mexicanos, va a ser el fiscal del país.

Tenemos la obligación y la competencia, la gran responsabilidad de nombrar nosotros al Fiscal General. Por eso hay que dar este instrumento legal para que pueda entrar en marcha, no podemos seguir con una PGR acéfala, una PGR que aparentemente defienden, pese a sus nulos resultados.

El escenario actual de nuestro país es éste, 2017 el año más violento de los últimos, pero todo indica, y hay que esperar que el 2018 lo va a superar con creces; existe un 99 por ciento de impunidad en el país; de las entidades federativas, en 26 estados el sistema judicial está colapsado, de 100 delitos solamente cinco se denuncian; de estos cinco, solamente al 12 por ciento se le da seguimiento o se integra una carpeta de investigación, de acuerdo con datos del Índice Global de Impunidad.

Pero lo más grave, es que la mayoría de los mexicanos no cree en las instituciones que imparten justicia, eso lo sabemos todos, evidentemente la PGR está colapsada, esta institución está saturada desde su sistema operativo y en la persecución de los delitos. Si a esto le aunamos las ineficiencias, estamos frente a una PGR politizada, que tiene un descrédito y muy poca fiabilidad en la procuración de justicia.

Por eso urge, compañeros Senadores, y lo expreso con respeto, que sin miedo, sin temores al cambio, desde el Senado de la República, impulsemos esta ley, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que, aparte, no sólo está consensada con los grupos parlamentarios de Morena, del PT, de Encuentro Social, nosotros sí tuvimos la atención de consensarla con grupos especializados, con organizaciones civiles, con la universidad autónoma de la ciudad.

Las víctimas de delito reclaman justicia, México reclama una fiscalía autónoma y fiscalías investigadoras donde se garantice de manera eficiente la persecución de diversos delitos.

Estamos, y hay que asumirlo, ante la oportunidad histórica de acabar con las pésimas integraciones de carpetas de investigación que son un atentado contra la justicia. Acabemos con las omisiones y las fallas que afectan el debido proceso por lo que las investigaciones que han sido cruciales de la historia reciente de nuestro país, se han venido abajo.

Es la invitación a que acabemos con la corrupción, principal impedimento para resolver diversos crímenes, que acabemos con la impunidad, que es el flagelo de justicia. Urge fortalecer el estado de derecho, y el tema es, definitivamente, impostergable.

Pero además, yo les pido de manera respetuosa que demos oportunidad a la transformación de este país, que concedan el beneficio de la duda a quienes hoy buscamos construir un nuevo futuro para nuestros país, porque de lo contrario, de no aprobar la creación de una Fiscalía General de la República, ¿qué les vamos a decir a todas aquellas personas que han sido víctimas de un delito?, no olvidemos que el primer paso para lograr la paz es garantizando una verdadera impartición de justicia.

Vamos a seguir, seguiremos insistiendo en el diálogo, en el consenso, pero, por favor, que los argumentos que se vierten en esta tribuna tengan un verdadero fundamento legal.

Se hablaba y escuché con respeto la participación de quien me antecedía en la voz, de que se están creando en esta ley espacios de discrecionalidad preocupantes. No, no se puede vivir bajo el viejo principio de cómo se vive, juzga.

Estamos ante un nuevo gobierno, estamos ante una nueva oportunidad, el sistema no tiene por qué repetir los mismos errores que en el pasado; ustedes, cuando fueron mayoría dijeron, no hay una evaluación del presupuesto del impacto presupuestal, también se argumentaba, es incorrecto, no leyeron el dictamen, en el Artículo Séptimo Transitorio señala cuál es el mecanismo para que se establezca el impacto presupuestal.

Los invito de manera respetuosa a votar a favor, a que se empapen del contenido del dictamen y a que les demos a México, al Presidente, a los Senadores, a los campesinos y a todos los ciudadanos un nuevo o una nueva Fiscal General.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Geovanna Bañuelos.

Tiene el uso de la palabra el Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra.

El Senador Clemente Castañeda Hoeflich: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

La lucha cívica por tener una fiscalía y un sistema de procuración de justicia autónomos lleva años en debate público, en el debate académico de este país.

Hay muchísimos estudios, diagnósticos, propuestas al respecto. Es una batalla que hace unos meses todos, muchos aquí, creíamos que iba a buen puerto ante la reconfiguración política del país, y hoy nos topamos con un obstáculo inesperado, el cambio de intereses, de prioridades y de compromisos de la nueva mayoría.

Alguien decía aquí: Que había que hacer memoria y lo hemos dicho en muchas ocasiones, en discusiones como éstas, nuestro mayor aliado es la memoria.

Hace poco más de un año, en el año 2017, las fuerzas políticas de oposición detuvimos en la Cámara de Diputados el pase automático del Procurador a fiscal. Esa fue una primera victoria que apuntaba hacia la reestructuración del modelo de una Fiscalía General y que abría la puerta a una reforma constitucional en la materia, una reforma que ampliara, fortaleciera y garantizara justamente la autonomía y, por supuesto, que tuviera como consecuencia la mejora en el modelo de procuración de justicia de México.

En aquel momento detuvimos el pase automático del “fiscal carnal”, y recibimos y abrimos la puerta a las organizaciones agrupadas en torno al colectivo o fiscalía que sirva. Quienes propusieron una reforma constitucional que, como muchos, Movimiento Ciudadano hicimos propia para llevarla al terreno legislativo.

Vino el proceso electoral y nuevamente las fuerzas políticas nos comprometimos en sacar adelante una fiscalía autónoma.

Vino el resultado electoral y una promesa de cambiar el régimen político, pero lamentablemente, en la posibilidad de emprender la reforma constitucional para tener una fiscalía que sirva, se ha diluido, y con ello la posibilidad de tener una fiscalía verdaderamente autónoma.

En Movimiento Ciudadano, y quisiera detenerme en esto. Entendemos por autonomía de la fiscalía contar con una institución, no solamente libre de ataduras políticas y partidistas, sino eficaz en su funcionamiento y capaz de revertir el ciclo de impunidad que vive México.

La autonomía significa diseñar un proceso de designación del fiscal que rompa con la lógica cupular y la injerencia del Presidente de la República.

La autonomía significa que el fiscal no pueda ser removido por el Presidente, porque la autonomía pasa por tener una instancia capaz de investigar al propio Presidente y al Poder Ejecutivo, los actos de corrupción, las violaciones a los derechos humanos y tantas otras situaciones que se cometen desde el poder del Estado.

Una fiscalía autónoma significa que los fiscales especializados tienen autonomía técnica y de gestión frente al propio Fiscal General, que tienen perfil idóneo y no tienen conflicto de interés.

La autonomía de la fiscalía significa que el Consejo Ciudadano y las Comisiones Especiales propuestas en el dictamen cuenten con instrumentos suficientes para hacer un trabajo de contrapeso y equilibrio, y no que sean ornamentos del fiscal.

Tener una fiscalía autónoma implica que el plan de persecución penal se construye en corresponsabilidad con el Poder Legislativo para que exista transparencia, rendición de cuentas en torno a la estrategia de procuración de justicia.

Estas y otras condiciones son necesarias para dotar de autonomía a la fiscalía y, lamentablemente, lo decimos claro, no los contempla esta reforma.

Somos conscientes, compañeras y compañeros Senadores, que diversos colectivos han impulsado el proyecto de Fiscalía que sirva, y que estos colectivos, cuando menos en un primer momento, reconocieron que había avances importantes en este proyecto.

Sin embargo, basta con ver en este momento las redes sociales para encontrar el pronunciamiento de fiscalía que sirva y vamos por más sobre la realidad y sobre el dictamen que estamos discutiendo.

Palabras más, palabras menos. Lo que dicen estas organizaciones de la sociedad civil, es que ellos acudieron con el equipo de transición de buena voluntad y bajo la promesa de que no se tocaría la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, después del anuncio de ayer y del Plan Nacional de Seguridad, tanto "fiscalía que sirva", como "vamos por más", han dicho categóricamente que emplazan al Congreso de la Unión a reformar el artículo 102 constitucional y garantizar la plena autonomía de la fiscalía.

En otras palabras, están acusando engaño, por no decir traición. Para todos los que se llenen la boca diciendo que esto se construyó con la sociedad civil, vale la pena, en este momento, leer el comunicado textual donde hablan justamente del engaño en el que cayeron y la urgencia que tiene este país, dada la eventual militarización de la propia policía, de garantizar la autonomía del fiscal.

Esto no es, compañeras y compañeros legisladores, un tema menor. Decimos que no hay garantías de que realmente se revisará el modelo y de que éste es un periodo de transición en el famoso Transitorio Décimo Tercero, que plantea que la revisión se hará solamente sobre el modelo de fiscalía de acuerdo al ordenamiento de la presente ley.

Es decir, el propio dictamen no abre la posibilidad para discutir, en un futuro inmediato, la autonomía constitucional de nuestra fiscalía.

Pero lo más grave de todo este proceso, y con esto termino, es que hoy se evidencia que el talante de la nueva mayoría del próximo gobierno parece que están dispuestos a ignorar, e incluso, a manipular las demandas de la sociedad civil organizada.

No es momento para dudar, no es momento para abusar de la confianza que les dio la mayoría del pueblo de México.

Nosotros lo decimos una vez más, desde Movimiento Ciudadano no vamos a dejar de luchar por tener un fiscal plenamente autónomo y un sistema de procuración de justicia independiente, eficaz y sólido.

Hoy nuestro voto es en contra de este dictamen, porque no podemos avalar que esta propuesta, parte fundamental de lo que se conoce como la "Cuarta Transformación", sea a todas luces un retroceso.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Clemente Castañeda.

Tiene el uso de la palabra el Senador Cristóbal Arias Solís, del Partido Morena, para hablar a favor.

El Senador Cristóbal Arias Solís: Muchas gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Yo formo parte de la Comisión de Justicia de este Senado de la República, y apenas este lunes por la tarde tuvimos reunión, sesión conjunta de las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos.

Y lo que hoy he venido a escuchar, en el Pleno del Senado, es el mismo discurso de quienes hoy, aprovechando esta tribuna y la presencia de los medios de comunicación, vienen con un discurso falso, es más, es el doble discurso, la doble moral, a darse golpes de pecho, porque ellos son los genuinos, auténticos, legítimos representantes en las anteriores legislaturas, en sus partidos políticos y en sus gobiernos del PAN y del PRI que heredan a la nación una dependencia decadente, corrupta, que ha solapado la inseguridad, la violencia y, sobre todo, la impunidad.

Me recuerda alguna ocasión de las veces que fui Diputado Federal, que siendo parte integrante de una delegación a otro país, un Diputado de Guanajuato, por cierto, de Acción Nacional, de los tiempos del filósofo del rancho San Cristóbal, en Guanajuato, en San Francisco del Rincón, recuerdo que en las mañanas temprano, bien vestido y peinado, atildadito salía de misa y decía que venía de confesarse y que estaba bien, y le daba gracias a Dios, y en la noche se iba a los prostíbulos a embriagarse, a emborracharse y a no sé cuántas cosas más.

Y ese es el discurso que estamos escuchando aquí, de aquellos que nos vienen a querer pretender que nos van a dar lecciones de derecho constitucional, que nos van a enseñar qué es el concepto de autonomía, cuando en prácticamente todos los países del mundo, para nombrar fiscales, la autonomía es con la injerencia de los órganos del Estado, sean legislativos o sea ejecutivo, pero el caso aquí no es la discusión realmente jurídica, es política.

Y quienes amenazan que van a votar en contra, yo digo, qué bueno que van a votar en contra, porque aquí estamos la mayoría que tenemos el voto del pueblo de México y que le dio más de 30 millones al Presidente más legitimado de la historia política electoral de nuestro país, al licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Y le dieron millones de votos a su favor.

En contra del PAN y del PRI que ha estado al frente de las instituciones de gobierno solapados por sus mayorías legislativas que en décadas prohijaron esta corrupción de una Procuraduría General de la República facciosa.

Que el PAN y el PRI tuvieron sus propios procuradores generales de la República carnales, los Lozano Gracia, que inventaron pruebas inverosímiles con "La Paca", la famosa vidente, sembrando osamentas. Y aquí habrá muchos de ustedes que seguramente lo recuerdan.

No nos equivoquemos entonces ni crean que nos asustan, señoras y señores Senadores del PAN y del PRI, de sus aliados.

Que quede muy claro que ante los ojos de la nación, los que van a votar en contra van a ratificar su minoría frente a la mayoría del pueblo de México que votó en contra de la corrupción y en contra de la impunidad.

¡Qué bueno que ratifiquen que están en contra de la gran mayoría de los mexicanos que votaron por el cambio!

Y estos son los tiempos del cambio y el cambio ha llegado a estos órganos legislativos con una mayoría que en respeto a lo que establece la Constitución General de la República, crea un instrumento, una herramienta para el nuevo gobierno que habrá de encabezar, en quince días, el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador.

Ante el pueblo quienes votan en contra ¡qué bueno que voten en contra!, nosotros vamos a votar a favor.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador, ¿acepta una pregunta?

El Senador Cristóbal Arias Solís: Ya voy a terminar y tienen el derecho de venir a la tribuna, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: No la acepta.

El Senador Cristóbal Arias Solís: No acepto. De tal manera, y ya voy a terminar, señor Presidente, además.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Concluya, por favor.

El Senador Cristóbal Arias Solís: No tuvieron nada más cuatro años. Claro que no, los cuatro años que les dijeron en su propia cara y que no se atrevieron a contestar el lunes en la reunión de las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos los representantes de la sociedad civil y organizada, a través de juristas, de especialistas en derechos humanos, de especialistas en derecho constitucional, estuvieron diciéndoles: anduvimos en todos los órganos legislativos de todos los partidos, de todos los grupos parlamentarios.

Y como dijo aquel Presidente, no tan sólo controvertido, sino deslegitimado, no los escucharon ni los oyeron como dijeron de nosotros a esos de la oposición: "ni los escucho ni los oigo".

Nosotros los escuchamos y los respetamos, pero están equivocados, su voto en contra no nos va a afectar, los va a seguir afectando a ustedes, se va a ratificar por qué no votaron por ustedes y por qué se tienen que ir del gobierno y por qué son minoría aquí en estas Cámaras.

Y seguirán siendo minoría durante muchos años.

Y en cada próxima elección estará presente el voto de ustedes en contra del cambio y de la transformación.

La transformación está del lado del pueblo.

Y si les preocupa tener un "fiscal carnal", sí va a haber un Fiscal carnal próximamente, un "fiscal carnal" de la mayoría de la sociedad mexicana agraviada por ustedes, por la corrupción, por el tráfico de influencia, por las masacres, por Tlatlaya, por Apatzingán, por Ayotzinapa, por la Casa Blanca, por mencionar uno de tantos y tantos agravios que ustedes han cometido en contra del pueblo de México.

Claro que queremos un "fiscal carnal" que efectivamente actúe con profesionalismo, con eficacia, con honestidad, con responsabilidad. Y es lo que vamos a tener, vamos a tener un fiscal comprometido con la ley y vigilado por este órgano legislativo y también por el Poder Ejecutivo.

De tal manera, que ustedes sigan desgarrándose las vestiduras porque con quien están quedando mal es con el pueblo y el pueblo está de lado de esta mayoría.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Cristóbal Arias.

En el uso de la tribuna el Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Hace unos días y particularmente a raíz de que el PRD votó en contra de éste, en ese momento pre dictamen, hoy ya dictamen, hubo quienes de ustedes, Senadoras, Senadores de Morena, se acercaron con un servidor y externaban su extrañeza y decían: ¿oye, y por qué está votando el PRD en contra de este pre dictamen?

Primero, claro que nos interesa una Fiscalía General de la República, pero nos interesa que en concordancia, de acuerdo a su línea discursiva de la "Cuarta Transformación", las cosas se haga distinto.

No por nada el 11 de septiembre y el 18 de septiembre presenté a este Pleno dos iniciativas.

Una, de reforma constitucional al 102, apartado A.

Y otra, una iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

No está la Senadora Olga Sánchez Cordero, que se ha dicho va a ser la próxima Secretaria de Gobernación. Me hubiese gustado que estuviese presente, me preocupa que utilice un lenguaje ambiguo, que no sea clara, que no sea precisa.

En su intervención dice que el dictamen que hoy nos presentan retoma partes de la iniciativa de ley del PRD.

Aquí tengo la iniciativa que presenté a nombre del grupo parlamentario del PRD, es un absurdo lo que retoman, de una ley que contiene 84 artículos, solamente retoman 15 renglones.

Compañeras y compañeros de Morena, esta es la razón, entre otras, por qué tampoco acompañamos este dictamen.

De esos 15 renglones, escuchen ustedes, lo absurdo que dicen que retoman de esta iniciativa, por ejemplo, que para el despacho de sus asuntos y los que competen al Ministerio Público de la Federación, bla, bla, bla, tendrá un consejo bajo, y dice: "Menciono en esta iniciativa, fíjense, al Fiscal Especializado en Delitos Electorales, así como el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción".

Esto tiene que ir en cualquier iniciativa de Ley Orgánica, porque así lo marca la Constitución y nos quieren vender que esto lo están retomando en el dictamen que presenta el grupo mayoritario a cuenta del PRD. De los 15 quedan 13 y después, artículo 63, de nuestra iniciativa: los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial, los oficiales ministeriales y peritos no podrán, numeral A desempeñar empleo, cargo, comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal en los gobiernos de la Ciudad de México y los estados integrantes de la Federación y municipios, bla, bla, bla.

Es decir, esto viene en cualquier machote de los requisitos para ser servidor público, de los 13, réstenle siete más, es decir, es una simulación, es un absurdo, es una falta de respeto y no me sorprende escuchar entonces este discurso de no los necesitamos, eh, quieren votar en contra, voten en contra, de todas maneras la vamos a sacar.

Pues no, ¿nos quejábamos de eso? y así van a empezar a gobernar nuestro país a partir del 1 de diciembre, hoy no se procura unir a México, hoy se sigue fomentando ese discurso de odio entre buenos y entre malos; hoy no se procura tender puentes de entendimiento, de acercarnos y de empezar el 1 de diciembre en armonía este país; me preocupa de sobremanera escuchar este lenguaje, ese discurso ambiguo, y para mí era importante señalar ante este Pleno y ante los medios de comunicación, y ante el país, que esa iniciativa no retoma nada de lo fundamental de la propuesta que hizo el PRD.

Miren, proponía, entre otras cosas, un órgano de gobierno para la fiscalía, es un ente autónomo o así nos lo quieren vender, bueno, cualquier ente autónomo tiene su órgano de gobierno, como el Banco de México, como el Inegi, como el Inai, como la Cofece, como la Cofetel, como el Coneval, todos ellos tienen un órgano de gobierno.

Saben quién en la propuesta de dictamen que nos hacen llegar asume eso? El coordinador general o el "fiscalito" que se le ha denominado.

Es decir, no podemos nosotros acompañar esto, si no nos interesara, no hubiésemos presentado la iniciativa de ley o la de reforma constitucional, pero además, me preocupa, de verdad, el discurso basado en la buena fe.

Todos hemos sido testigos, y lo he comentado con ustedes, compañeras y compañeros de Morena, que además, fuera de esto, nos llevamos bien.

El discurso del Presidente Electo de ataque constante, por ejemplo, a los medios de comunicación, donde hoy agarra un periodista, un reporte y no lo suelta.

¿Qué va a pasar con este poder plenipotenciario sobre el fiscal que, de ninguna manera va a ser autónomo?

Por supuesto que el Senado envía 10 propuestas de la cual regresa tres, pero aquí hay una mayoría.

Ingenuos no somos.

Hay un discurso de la "Cuarta Transformación", no se vayan con eso que dicen: "Ustedes lo hicieron mal, ustedes lo hicieron mal y ahora por eso nosotros también lo vamos a hacer".

Demuestren con hechos que realmente son distintos: reforma al 102 y fiscal autónomo.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Juan Manuel Zepeda.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Gabriela Benavides Cobos, del Partido Verde Ecologista, a favor.

La Senadora Gabriela Benavides Cobos: Gracias. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Senadores:

Hoy quiero hacer memoria, el día 3 de diciembre del año 2013, el Senado de la República aprobó una de las reformas más relevantes que marca la base constitucional para crear la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

En esta reforma, los grupos parlamentarios del PAN, del PRI, algunos del PRD y del Verde, votaron a favor de dicha transformación en la justicia mexicana.

En esta reforma ya se contemplaba en el artículo 102 la remoción del Fiscal General por el Ejecutivo, e incluso, durante la discusión del dictamen se modificó su redacción para especificar que dicha remoción sería exclusivamente por causas graves.

Bajo estas premisas y dada la situación de violencia que vivimos en el país, los legisladores estamos obligados a no obstaculizar con alguna visión parcial la aprobación de este dictamen que expide por fin la Ley Orgánica de la Fiscalía, que dicho sea de paso, ha sido materia de amplios debates y discusiones en ambas Cámaras en el Congreso de la Unión.

El Congreso lleva ya más de cuatro años en la construcción de este ordenamiento jurídico que es una demanda y una exigencia de primer orden para garantizar el estado de derecho y de la seguridad que demanda la ciudadanía.

Debemos tener presente que esta nueva fiscalía también es una pieza fundamental para el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema de Justicia Acusatorio.

Si el Pleno decide aprobar este dictamen en el momento procesal correspondiente, que no quede la menor duda que estaremos cuidadosos y atenderemos el proceso de selección de la persona que se encargará de la supervisión e impartición de justicia para que sea el más apto, con las mayores capacidades para desempeñar este cargo de manera honorable e imparcial, y protegiendo al pueblo de México.

Debemos también ser claros, la aprobación de una ley no va a cambiar de la noche a la mañana la procuración de justicia ni la impartición de la misma, pero va a sentar las bases para lograr una fiscalía que actúe bajo los principios de autonomía, de legalidad, de honradez, de respeto a los derechos humanos, con perspectiva de género, de protección en favor a las víctimas del delito, pero además, los legisladores debemos ser vigilantes de esta Fiscalía General de la República.

Todo es perfectible y aspiramos a que se contemplen fiscalías especializadas en delitos cometidos contra la mujer y contra los adultos mayores.

Hoy, los miembros del Partido Verde Ecologista de México, en el Senado, en congruencia con nuestra postura desde el año 2014, votaremos a favor de esta ley, porque sabemos que es necesario para la nueva Fiscalía. Damos un voto de confianza al nuevo gobierno, aspirando a que se logre una fiscalía cercana a la gente, sensible al dolor de la víctima, quien es el centro de esta discusión.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Gabriela Benavides.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Miguel Ángel Mancera, del PRD, para hablar en contra.

Bien, si no es así, entonces le damos el uso de la palabra a la Senadora Leonor Noyola Cervantes, para hablar en contra.

La Senadora María Leonor Noyola Cervantes: Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

En la administración del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, se reformó la Constitución Federal para que la hoy Procuraduría General de la República dejara de formar parte del Poder Ejecutivo y se convirtiera en un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

Asimismo, en dichas reformas se estipuló que el Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley.

La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso, el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.

Aunado a lo anterior, en la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, se estableció en el artículo 89 como facultad del Presidente de la República, la de intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo.

En términos de lo dispuesto en el artículo 102, Apartado A, de la Carta Maga, en los artículos transitorios se estableció que las reformas entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones referidas, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

Asimismo, se establece que una vez realizada la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, la Cámara de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el Apartado A del artículo 102 de la Constitución para la designación del Fiscal General de la República.

Sin duda, la función de la Fiscalía General de la República es muy importante para la vida de nuestro país, tiene que ver directamente con la procuración de justicia y con la investigación y persecución de los delitos, combate a la impunidad y a los delitos que más afecten y lesionen a la sociedad.

La reforma que dio autonomía a la Fiscalía General data de 2014.

El último Procurador General de la República, Raúl Cervantes, renunció en octubre de 2017, desde entonces, una institución tan importante sólo tiene un encargado del despacho.

En aquellos momentos la propia Organización de las Naciones Unidas, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hicieron observaciones en cuanto a que el Poder Legislativo no debía retrasar, por cuestiones políticas, la transición de la PGR.

En este sentido, han pasado algunos años y muchos meses y el tema del fiscal y de la fiscalía ha sido por demás importante en las campañas electorales para la Presidencia de la República, sin duda fue uno de los temas torales de los entonces candidatos.

Con todos estos antecedentes y muchos más que por cuestión de tiempo no relato, el día de hoy nos encontramos aquí en el Pleno para discutir en lo general y en lo particular la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, un tema que forma parte de nuestra vida diaria, pues la seguridad, en todos sentidos, es un tema prioritario para cualquier gobierno; sin embargo, quiero compartirles que después de un análisis exhaustivo al dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, respecto de las iniciativas con el proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Advertir cierta decepción que, todos estos meses de espera, arrojan una ley que establece que el Presidente de la República tendrá la facultad de remover por causa grave a la persona titular de la Fiscalía General de la República.

Al respecto señalo que por muchos meses, quizás por años, en nuestro país se ha luchado incansablemente por tener una Fiscalía General de la República y absolutamente independiente, no sólo eso, sino tal como hoy está previsto en la Constitución Federal, la Fiscalía es un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya naturaleza implicaría que, desde luego, el Ejecutivo Federal no tuviera injerencia en la remoción de su titular.

Si analizamos con detenimiento esta iniciativa de ley, sólo viene a corroborar lo que la propia Constitución Federal establece en materia de la remoción del Fiscal General, esto es, que es una facultad exclusiva del Presidente de la República hacerlo; esta forma que fue tan cuestionada y criticada por los candidatos a la Presidencia de la República en el pasado procesos electoral, siendo que la iniciativa que debía hacerse primero es a la Constitución.

Es cierto que se señala que el Senado tendrá facultad de objeción, pero, finalmente, lo relevante es la intromisión del Presidente de la República en un órgano autónomo, lo cual no deberíamos permitir que ocurriera porque si es autónomo, es autónomo, no debería haber duda.

Pero no nos debe causar extrañeza, el Presidente Electo, en su proyecto de nación plantea lo siguiente:

Reformar el artículo 102 constitucional para facultar al Presidente de la República en la designación de un fiscal que se encargue de la específica atribución de investigar y perseguir aquellos delitos que quebrante la seguridad pública.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores, la autonomía de la Fiscalía General de la República, dadas sus funciones tan importantes para la sociedad, no debe quedar al margen de las decisiones del Poder Ejecutivo en cuanto a la remoción de su titular.

Por ello estamos en contra de este dictamen, dado que se trata de una excelente simulación, pero no olvidemos que las personas son quienes al final dan su último veredicto de lo que hoy como legisladores hacemos.

Es cuanto.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Noyola Cervantes.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Cruz Pérez Cuéllar, del grupo parlamentario de Morena, para argumentar a favor del dictamen.

El Senador Cruz Pérez Cuéllar: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En algo estamos todos de acuerdo, el diagnóstico es terrible, lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años ha sido verdaderamente lamentable en materia de procuración de justicia.

Desde aquel asunto, que ya mencionó mi compañero Cristóbal, de “La Paca”, cuando Lozano fue Procurador, o partiendo del hecho de que desde el 16 de octubre de 2017 no hay un titular de la Procuraduría General de la República, que se aprobó por el PRI, por el PAN, por el PRD y por Movimiento Ciudadano un Sistema Nacional Anticorrupción, pero no tenemos Fiscal Anticorrupción.

Se destituyó de manera agresiva, violenta, al titular de la Fiscalía para la Persecución de los Delitos Electorales.

Organismos internacionales han refutado la verdad histórica en el caso de Ayotzinapa; Amnistía Internacional ha dicho que el Presiente Enrique Peña Nieto ha sido negligente e indolente en diversos temas que tienen que ver con la procuración de justicia.

El 99.7 por ciento de los crímenes contra periodistas han sido impunes. Tenemos la impunidad en el caso de Odebrecht, y aquí, la ironía, es que los que ya fracasaron, en el gobierno actual y en los gobiernos anteriores y sus cómplices que les aprobaron todas las reformas, a Enrique Peña Nieto, ahora nos hacen la pregunta que ¿cuál es la urgencia?

Son de esas ironías del destino. Los que fracasaron y quienes fueron sus cómplices hoy vienen a rasgarse las vestiduras y a preguntar cuál es la urgencia.

Verdaderamente lamentable, porque este dictamen se va o se pretende aprobar respetando el marco constitucional que PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD aprobaron, está fundamentado en ese marco constitucional, y está fundamentado precisamente en esa urgencia que tiene nuestro país de poner orden, de que no sigamos sin un titular en la que se llamaba o todavía se llama Procuraduría, y hoy será Fiscalía General de la República, y que tengamos los fiscales en cada una de las áreas.

Este dictamen promueve que tengamos al fiscal como conductor de la investigación y obliga la operación de equipos multidisciplinarios, abre la puerta de expertos y la participación de expertos internacionales y contempla la creación, como ya se ha dicho, de un plan estratégico de persecución penal.

La autonomía de la institución queda salvaguardada con el Servicio Profesional de Carrera, se tendrá un Consejo Ciudadano integrado por cinco ciudadanos expertos en temas de procuración e impartición de justicia.

Los ejes rectores de la actuación de la fiscalía serán: autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Y lo repito, porque el león cree que todos son de su condición, los ejes rectores de esta nueva fiscalía serán: autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Este dictamen, atiende a la urgencia que tiene México con relación a que la procuración de justicia tenga una estructura ordenada y funcional. Con la finalidad de superar la profunda crisis institucional y fortalecer el nuevo papel del Estado en la procuración de justicia y la seguridad pública.

Y además, este dictamen señala, con total apertura, en el Décimo Tercero Transitorio, que en un plazo de un año podremos revisar qué reformas a la Constitución y a las leyes secundarias debemos hacer para mejorar la procuración de justicia en nuestro país.

Pero desde mi perspectiva, y desde la perspectiva de millones de mexicanos, la urgencia es total y absoluta de darle un orden institucional a la procuración de justicia en México.

Por eso, cuando se alega en esta tribuna que atendamos a nuestra conciencia, a la responsabilidad histórica, al deseo de cambio, al deseo de que México recupere la paz y la tranquilidad, yo les digo que voy, y muchos de mis compañeros, vamos a votar a favor, precisamente, porque le vamos a responder a los millones de mexicanos que el 1 de julio votaron por un cambio, porque urge darle un orden a este país y que el Estado mexicano asuma la responsabilidad en la procuración e impartición de justicia.

No se puede perder un minuto más, ya ustedes, con sus reformas, perdieron años, traicionaron la confianza de México, ni siquiera tenemos un Procurador General de la República, y ahora, quienes se rasgan las vestiduras, se les olvida que ayer Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRI y el PRD le aplaudían todo a Enrique Peña Nieto, y son cómplices del fracaso de este país.

Vamos a favor y la “Cuarta Transformación”, va.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Cruz Pérez Cuéllar.

Al cumplirse la participación de cinco oradores en contra y cinco a favor, nos obliga el Reglamento a preguntar si está suficientemente discutido.

Voy a hacer la pregunta, y si no está suficientemente discutido, seguirá el debate.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no está suficientemente discutido, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No está suficientemente discutido, señor Presidente.

A ver, hay una confusión.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Repita la votación, por favor.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Voy a repetir la votación, por favor, levanten la mano los que crean que está suficientemente discutido.

(La Asamblea asiente)

Ahora levanten la mano los que crean que no está suficientemente discutido.

(La Asamblea no asiente)

Está suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria.

En virtud de que está suficientemente discutido, se ha abierto el registro para reservar artículos o presentar adiciones.

Informo a la Asamblea que para tal efecto se han presentado las siguientes reservas:

Del grupo parlamentario del PAN, la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, ha reservado los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y Décimo Segundo Transitorio, y ha presentado adiciones en el 3, 5, 7, 8, 9, 20, 24 y 25 .

Del PRI, el Senador Manuel Añorve Baños, ha presentado reservas en los artículos 1, 4, 21, 22, 26 y 63.

La Senadora Verónica Martínez García, del PRI, ha presentado reservas en los artículos 2 y 19.

La Senadora Vanessa Rubio Márquez, ha presentado reservas en los artículos 2, 28 y 50.

La Senadora Nuvia Mayorga Delgado, del PRI, ha presentado reservas en los artículos 2, 5, 27 y 54.

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, ha presentado reservas en los artículos 2, 5, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 22, 36, 42 y Séptimo y Décimo Transitorios.

El Senador Eruviel Ávila Villegas, del PRI, ha presentado reservas en los artículos 3, 16, 40, 41, 42 y 60.

La Senadora Beatriz Paredes Rangel, ha presentado reservas en los artículos 4, 6, 9 y Transitorios Noveno y Décimo Cuarto.

La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del PRI, ha presentado reservas en los artículos 5, 10 y 26.

La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI, ha presentado reservas en los artículos 6, 12, 14, 20, 21, 41 y el Primero, Séptimo, Décimo Cuarto y Décimo Séptimo Transitorios.

El Senador Juan Quiñonez Ruiz, de Movimiento Ciudadano, ha presentado reservas en los artículos 6 y 50.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, ha presentado reservas en los artículos 6, 14, 15, 18,19, 27, 30, 40, 42, y el Noveno y Décimo Transitorios, y la adición de un Vigésimo Tercero.

El Senador Ángel García Yáñez, del PRI, ha presentado reservas en los artículos 7, 41 y 49.

La Senadora María Leonor Noyola Cervantes, del PRD, ha presentado reservas en los artículos 9 y 17.

El Senador Mario Zamora Gastélum, del PRI, ha presentado reservas en los artículos 13, 18 y Transitorio Vigésimo Tercero.

La Senadora María Guadalupe Murguía, del PAN, ha presentado reservas en los artículos 14, 25, 32, 42 y Décimo Transitorio.

Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, en el 14, 19, 20, 27, 31; Décimo Transitorio, adición de un artículo 31 y Vigésimo Tercero Transitorio.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, en los artículos 18, 20 y Transitorio Noveno.

Juan Manuel Fócil Pérez, del PRD, en el 16.

Indira de Jesús Rosales San Román, del PAN, el 20 y 63.

Samuel Alejandro García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, en el 22 y Décimo Tercero Transitorio.

Julen Rementería del Puerto, del PAN, en el Décimo Tercero Transitorio.

También la Senadora Kenia López, en los artículos 19 y 20.

Adicionalmente, el Senador Miguel Ángel Mancera, también en los artículos 9 y 11.

¿Alguien más desea reservar algún otro artículo?

De no ser así, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general, y de los artículos no reservados.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Informo a la Asamblea que sigue abierto el sistema, así que pueden continuar con su votación, y seguirá abierto hasta que terminemos de votar.

Señor Presidente, doy el resultado de la votación: 70 votos a favor, 47 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Pasamos a lo discusión en lo particular.

Y tiene el uso de la tribuna la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, para presentar sus reservas.

En lugar de la Senadora Latifa, en nombre de ella, a nombre propio y de su grupo parlamentario, intervendrá la Senadora Xóchitl Gálvez, para presentar el conjunto de reservas.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Muy buenas tardeas tengan todas y todos.

Felicitar a Morena por el logro de esta Fiscalía General y decirles que la Senadora Latifa ya presentó sus reservas, pero a mí me gustaría hablar de un tema muy concreto.

En el año 2004, yo llegué al Gabinete invitada por los cazadores de talento, yo no era política, nunca había estado en la política, y vi con mucha preocupación el desafuero de Andrés Manuel López Obrador.

En corto le dije al entonces Presidente Fox, que estaba en desacuerdo y públicamente fui la única integrante del Gabinete que se opuso a dicho desafuero.

Me parece muy peligroso que cuando tú tienes la posibilidad de remover al fiscal, este fiscal difícilmente va a desobedecer al Presidente. Todos conocemos el desenlace, finalmente, en corto también, platicando con el Presidente Fox yo le decía que su Procurador había actuado de manera indebida, que no se pueden resolver a través de esa manera tus desacuerdos en la política.

Tiene razón Morena cuando dice que el PAN lo hizo mal. Es más, bastante mal, no tuvo la mayoría que ustedes tienen en los congresos, jamás, desde el 97, se había tenido una mayoría.

El pueblo de México le dio la oportunidad al PRI y lo volvió a hacer mal, tiene razón al señalar los muertos, tiene razón al señalar los desaparecidos. Por supuesto que les asiste la razón, pero por eso el pueblo de México votó por ustedes, para eso, para que lo hagan bien, que no les falte el valor de decirle al Presidente cuando lo que se está enviando no es lo adecuado. Démosle a este país, de una vez por todas, una Fiscalía autónoma, que no haya la tentación de que el Presidente persiga a sus adversarios políticos.

Y no se vayan con la finta de que todo lo que está en Morena no estaba en el PRD, de que todo lo que está acá es lo purificado. En mi estado hay personajes que si viviera Miguel Ángel Granados Chapa se moriría de la vergüenza de verlos en su partido.

Entonces, tampoco es un tema de buenos y malos, no es un tema de ustedes ya fueron.

Claro que lo hicimos mal, claro que lo pueden hacer ustedes bien, aprovechen esta enorme oportunidad que el pueblo de México les dio para que de una vez por todas modifiquemos el 102 constitucional.

Y yo quisiera el compromiso de ustedes, que en un año evaluemos con honestidad los resultados, y si no hay resultados, entonces, de verdad, cambiemos de una vez por todas la Constitución y evitemos esas tentaciones autoritarias del pasado.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Xóchitl Gálvez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Añorve Baños, para presentar sus reservas.

Permítame, Senador Añorve, permítame un momento, nos falta un trámite.

Dé lectura a las propuestas presentadas por la Senadora Xóchitl Gálvez y la Senadora Latifa Martínez, y consulte posteriormente si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Doy lectura al artículo 1.

(Propuestas de modificación)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Permítame, señora Secretaria, disculpe que la interrumpa.

Senador Damián Zepeda, sonido en su escaño, por favor.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Para trámite, sé que hay muchas reservas presentadas, es un paquete muy amplio el que presentamos, que son cuestiones, no de fondo, esta primera reserva, sino de técnica legislativa.

Yo le pediría que le diera publicidad a las mismas y en todo caso que pregunte directamente a la Asamblea si se aceptan o no a discusión, si la respuesta es que sí, pues ya podemos entrarle al detalle, pero si no, creo que sería sano para el debate y que se pueda omitir la lectura, se lo pedimos a nombre del grupo parlamentario del PAN.

Muchas gracias, se puede escuchar los temas de debate de fondo.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se acepta la moción del Senador Damián Zepeda.

Gracias.

Se incorporarán a la Gaceta Parlamentaria y pido a la Secretaría que pregunte si se aceptan a discusión las reservas presentadas por las Senadoras del PAN Xóchitl Gálvez y Latifa Martínez.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas al dictamen, presentadas por la Senadora Xóchitl Gálvez y la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón en lo referente a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26; adiciones 3, 5, 7, 8, 9, 20, 24 y 25. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: No se admiten a discusión, el dictamen va en sus términos.

Tiene la palabra el Senador Manuel Añorve Baños, para presentar sus reservas.

El Senador Manuel Añorve Baños: Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente quiero comentarle que en este momento vengo a presentar las reservas a los artículos 1 y 63.

A nombre del grupo parlamentario del PRI, como ya lo comenté, vengo a presentar en este acto las reservas al artículo 1 y 63 del dictamen, porque son complementarias entre sí.

En primer lugar, se propone incluir al artículo 1 del dictamen que la Fiscalía General sea un órgano público autónomo, con autonomía financiera, presupuestal, técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, para abonar a la autonomía financiera y presupuestal de este órgano.

La designación de presupuesto para la Fiscalía no puede quedar al contentillo del Ejecutivo, puesto que esto implicaría una subordinación de facto y que el actuar de la Fiscalía no sea independiente y autónomo, en otras palabras, tendríamos a un Fiscal General haciendo antesala en la Secretaría de Hacienda, tendríamos a un Fiscal General, por supuesto, al arbitrio de las decisiones presupuestales y tendríamos a un Fiscal General, como aquí se ha dicho, sin autonomía propia, ya que se encontraría, también, como lo he comentado, presionado para actuar de cierta forma a cambio de recibir el presupuesto suficiente para el ejercicio siguiente.

Como lo mencioné, esta adición al artículo 1, se encuentra también relacionada con el artículo 63, mediante el cual se adiciona una cláusula de no disminución del presupuesto de la Fiscalía entre ejercicios para evitar, como ya también lo sigo subrayando, la presión y manipulación por parte del Ejecutivo, cuando el actuar de la Fiscalía no sea acorde a sus expectativas.

Puntualmente, se propone agregar un segundo párrafo al artículo 63, en donde se establezca que: en todo caso, el presupuesto asignado no podrá ser menor en términos reales al aprobado en el ejercicio inmediato anterior.

Con esta adición, se garantiza no tener a un Fiscal como rehén por parte del Ejecutivo o el Congreso de la Unión cuando el actuar de la Fiscalía no sea del agrado de éstos.

Señoras y señores, si realmente queremos una Fiscalía autónoma, es necesario garantizarle mínimamente la suficiencia presupuestal de la Fiscalía General.

Con esto, queremos asegurarle no solamente la independencia, sino que obviamente no esté dependiendo, como lo he dicho, del Ejecutivo Federal.

Si bien coincidimos con los grupos parlamentarios que han hecho uso de la palabra, y que han expresado la necesidad de revisar la reforma al artículo 102 constitucional, con el objeto de dotar de mayor autonomía a la Fiscalía General, también asumimos nuestra responsabilidad como miembros de este Poder Legislativo, y por ello no vamos a claudicar nuestra obligación de participar en este proceso deliberativo.

Ya tendremos la oportunidad de hacer otras reservas, pero también vamos a estar señalando dónde adolece esta Fiscalía General o dónde se duplican sus atribuciones o cómo está secuestrado con el coordinador general, prácticamente que donde puede quedar subordinado el Fiscal al coordinador General.

No permitamos que este Senado rehúya del debate.

Por su atención, muchas gracias.

(Propuestas de modificación)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Añorve Baños.

Senadora Josefina Vázquez Mota, desde su escaño, por favor.

La Senadora Josefina Vázquez Mota: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Quisiera pedir su consideración y la del Pleno, porque estaba en una reunión de trabajo, no pude estar aquí en el momento en que se abrió el tablero y quiero expresar mi voto en en contra. Por favor, para que quede registrado.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: ¿De cuál votación?

La Senadora Josefina Vázquez Mota: (Desde su escaño) La general, señor Presidente, si es tan amable.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: ¿De qué tema?

La Senadora Josefina Vázquez Mota: (Desde su escaño) Fiscal, sobre la Fiscalía, señor Presidente.

Gracias, señor Presidente, muy amable.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Gloria Núñez.

La Senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez: (Desde su escaño) Señor Presidente, de la misma manera, estaba en comisión, los dos puntos de Acuerdo anteriores a este, el de los ascensos, tanto del Ejército como de la Marina, ya que si pudiese sentar mi voto a favor en ambos.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muy bien.

Senadora Citlalli Hernández.

La Senadora Citlalli Hernández Mora: (Desde su escaño) Sí, en el mismo sentido, no quisiera que no quedara registrado mi voto, mi voto es a favor. Yo también estuve fuera del Pleno en ese momento, sobre la Ley Orgánica.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En virtud… Senadora Paredes Rangel.

La Senadora Beatriz Paredes Rangel: (Desde su escaño) Sólo que no genere precedente. Porque en general, un precedente en ese sentido, puede distorsionar todas las futuras votaciones.

Entonces, mi enorme aprecio por las legisladoras y legisladores que han hecho uso de la palabra, que no se genere precedente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Solamente para efecto de que quede constancia de la intención de su voto, las votaciones ya se realizaron.

Continúe la Secretaría.

Consulte si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Manuel Añorve Baños.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas al dictamen presentadas por el Senador Manuel Añorve Baños.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Previa lectura, por favor.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Del dictamen presentado por el Senador Manuel Añorve Baños, en los artículos reservados 1, 4, 21 y 63.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas a los artículos 1 y 63. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Añorve Baños, sonido en su escaño, por favor. No, ya no.

Gracias.

Senador Samuel García, sonido en su escaño, ¿para qué efecto?

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: (Desde su escaño) Gracias. Es para la metodología de la votación.

Yo quisiera poner a consideración aquí del Pleno, ya se votó en lo general la Ley Orgánica, va a pasar a Cámara de Diputados, la mayoría de las reservas son temas técnicos que sí requieren discusión porque son temas que ya están hasta en la ciudadanía y que de no corregirse ahorita sufrimos el riesgo de que llegue a Diputados y por cambiar una coma, nos va a regresar de nuevo toda la minuta.

Entonces, tengamos la decencia como Pleno, y se lo pido respetablemente a la bancada mayoritaria, de no nada más votar “no” para ya irnos, o sea, sí hay temas importantes en estas reservas, ya van dos, ni están escuchando y la postura es que no se discuta, y hay temas muy importantes, que con que se nos vaya uno y lo modifiquen en Diputados vamos a perder meses o quizá lo que resta del año.

Por favor, apelo a la conciencia, para eso es el debate en este Pleno, no votemos “no” y discutamos las reservas.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: A ver, no es de procedimiento su intervención, Senador Samuel García, sino es un llamado a uno de los grupos parlamentarios, pero cada grupo parlamentario decide el sentido de su voto, en su caso.

Aquí se escuchan todos los argumentos y cada quien reflexiona y decide.

Senador Menchaca Salazar. Sonido en su escaño, por favor.

El Senador Julio Ramón Menchaca Salazar: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Nosotros no tenemos prisa, queremos hacer un ejercicio en donde podamos estar escuchando propuestas que enriquezcan la iniciativa.

Entonces, no va a ser mecánico la negativa para poder abrir el debate, creo que es el momento procesal, legislativo, oportuno, para estar escuchando cada una de las reservas, y tenga la seguridad de que si ayudan a mejorar la ley la vamos a aceptar.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Menchaca Salazar.

Bien, tiene el uso de la palabra la Senadora Vanessa Rubio Márquez, para presentar reservas en los artículos 2, 28 y 50.

La Senadora Vanessa Rubio Márquez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vengo a esta tribuna a presentar tres reservas, en este caso comentaré primero la del artículo 2 del dictamen en discusión, con base a una única consideración.

El desarrollo institucional de la nueva Fiscalía General debe atender a la necesidad de diseñar un sistema de procuración de justicia, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, faltaba más que no fuera así.

En tal sentido y con el propósito de robustecer y complementar el texto del presente Decreto, resaltamos las siguientes notas características en lo relativo a los fines institucionales contenidos en el artículo 2, ya que dichos fines deben de ser claros, precisos, constitucionales y en el marco de las competencias de la Fiscalía, y lo que se presenta carece de varios aspectos justamente en esta precisión de atribuciones y, en consecuencia, del propio organismo autónomo.

Enumero algunas de las inconsistencias detectadas y las propuestas de modificación:

Se plasma un solo principio del sistema procesal penal, aquel de procurar que el culpable no quede impune dejando a un lado todos los demás que también corresponden al ámbito de sus competencias.

Dos, se prevé como fin institucional la disminución de la inseguridad.

No nos confundamos, el objetivo del Estado debe ser acabar con la inseguridad, no disminuirla.

Tres, no se prevé una función principal de la Fiscalía, que es aquella de la persecución de delitos para hacer efectiva la seguridad pública.

No diluyamos, prioricemos.

Cuatro, la Fiscalía General de la República no puede garantizar la reparación integral, ya que con base en el artículo 20, Apartado C, fracción IV de la Constitución, es el Ministerio Público a quien compete esta atribución.

Y último, cinco, no se señala a qué tipo de reparación se hace referencia, aunque se sobreentiende que se hace alusión a la reparación integral del daño, además, posterior al fin institucional de la reparación integral, se contempla aquel de no repetición de las víctimas.

Por ende, debería omitirse la no repetición de las víctimas y mantenerse solamente la reparación del daño.

Ahora, en lo que respecta a la reserva al artículo 28 del dictamen en discusión, la primera consideración sería que se expidió el 31 de enero de 2014 la reforma que ordenó la creación de la Fiscalía General de la República.

Esta reforma implica una profunda transformación a la arquitectura institucional del órgano responsable de la procuración de justicia a nivel federal.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 102, Apartado A de la Constitución Política, el Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía autónoma, lo anterior implica que la Fiscalía debe asumir ciertas funciones y atribuciones.

Actualmente la persecución penal en México se maneja de manera reactiva, es decir, bajo un sistema de turnos o números de agencias, al Ministerio Público les es asignado el trámite de un caso particular, y todos sus esfuerzos se enfocan en el mismo hasta que se aplique la salida jurídica de cada caso.

Bajo este esquema de trabajo, el Ministerio Público realiza múltiples actividades en torno a un solo caso, sin planificación, sin orientación, lo que se traduce en una pérdida de eficiencia y efectividad en la investigación.

Es decir, bajo este esquema la actuación tradicional de las procuradurías o fiscalías se encuentra marcada por la respuesta a un caso, generalmente aislado, por lo que la institución no tendrá la capacidad de detectar patrones comunes, formas sociales y acciones colectivas de las estructuras de la criminalidad.

En consecuencia, este modelo repercute en las cargas de trabajo y en la efectividad y eficiencia de los Ministerios Públicos.

Segunda. Después de la instrumentación del sistema de justicia penal acusatorio, las procuradurías y fiscalías tanto locales como federales ya acumulan importantes niveles de rezago, lo que contribuye, en gran medida, a perpetuar la impunidad.

Del total de casos que llegaron a manos de un Ministerio Público en 2016, sólo fueron determinados 40 por ciento en el ámbito local, y 52 por ciento en el federal.

La mayoría de los delitos, como todos lo sabemos, ni siquiera son denunciados, es por ello que la transición hacia las Fiscalías autónomas deben implicar un diseño integral de todas las estructuras de estas instituciones.

Entre los problemas que llevaron a transformar el modelo de .procuradurías, se encuentra precisamente el del Ministerio Público que se desgasta en cuestiones que no son vitales para el ejercicio de su función.

Una de estas funciones que ha venido desempeñando el Ministerio Público puede ser realizada por otras autoridades y esto puede abonar a la despresurización de la nueva estructura de la Fiscalía, es decir, reitero, mayor eficiencia y mayor eficacia.

Tercera. Desde 1929 los Ministerios Públicos concentran la función de investigación, denuncia e inicio de la acción penal. Esto ha tenido como consecuencia que la autoridad condiciona el ejercicio de sus atribuciones.

Aunado a esto, las malas interpretaciones de las disposiciones legales y constitucionales han llevado a que en la ausencia de denuncia o querella de la víctima se haga imposible la investigación y persecución del delito cayendo nuevamente en la impunidad que queremos erradicar.

Respecto del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya se establece una solución para este tema en su artículo 132, el cual, señala entre las obligaciones de los policías, la de recibir denuncias. De seguir el esquema que plantea el Código, le permitirá a la policía realizar una función de proximidad incluso con la ciudadanía.

También, por último, debe tomarse en cuenta que lo relativo a los delitos electorales, las denuncias se presentan en línea directamente y sin intermediarios, además de que el despliegue ministerial es contrario a las finalidades, facultades y atribuciones que puede y debe tener la Fiscalía.

Por otro lado, y dado que el Senado interviene en el nombramiento del Fiscal electoral y el titular de la Fiscalía es su superior inmediato, es viable que el Fiscal electoral presente un informe al Fiscal integral, y desde luego también a esta Soberanía.

Por último, en relación al artículo 50, esbozo los siguientes comentarios:

El proyecto de Decreto que se somete a consideración propone la creación de comisiones especiales de carácter temporal, para colaborar en las investigaciones de fenómenos y delitos que, a juicio del Fiscal lo ameriten. Sin embargo, estas comisiones hacen referencia a las comisiones de la verdad, que aunque son muy útiles en muchos casos, pertenecen a medidas que son aplicables en la justicia penal internacional para crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad.

La justicia transicional es aquella que utilizan los países que dejan atrás periodos de conflicto y de represión.

En suma, el apoyo a las medidas de justicia transicional y su puesta en marcha dependerán, entre otras cosas, de múltiples factores, circunstancias y características. Es por ello que resulta necesario limitar su creación para casos especiales que demanden y que justifiquen dicha figura, quedando plena y legítimamente acreditada, previo su aplicación y con absoluta claridad de que se trata de una alternativa, y además de carácter extraordinario, exprofeso para cada caso justificado.

Es cuanto, muchas gracias, señora Presidenta.

(Propuestas de modificación)

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Vanessa Rubio.

En virtud de que fueron ampliamente explicadas las reservas de los artículos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas del dictamen que presenta la Senadora Vanessa Rubio Márquez de los artículos 2, 28 y 50. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Nuvia Mayorga Delgado, para presentar reservas a los artículos 2, 5, 27 y 54.

La Senadora Nuvia Mayorga Delgado: Con su permiso, señora Presidenta.

A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vengo a esta tribuna a presentar las siguientes reservas a los artículos 2, 5, 27 y 54 del dictamen en discusión, con base en las siguientes consideraciones:

Primera. El proyecto de Decreto sometido en materia de la dictaminación, establece afines que la Fiscalía General, la reparación integral del daño, lo que significa una obligación desmedida para dicho órgano y el erario público.

El concepto de reparación del daño dentro del derecho penal es de gran importancia, ya que es considerado como una medida de pacificación social.

El daño causado a la víctima puede ser de carácter material o moral.

El material se refiere a la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio.

El moral es la afectación que sufre la víctima en sus sentimientos, en el afecto, en la creencia, reputación, honor, vida privada, o el bien en consideración de que sí misma puede tener alguna resarcitorio en ella.

En la reforma constitucional 2008 que el Congreso de la Unión como unidad del orden constitucional estableció como principio general del sistema de justicia penal acusatorio la reparación del daño de la víctima; la posibilidad de que éste sea solicitado directamente por ella, e incluso legitimización para impugnar ante la autoridad judicial y el desistimiento de la acción penal.

Un sistema de impartición de justicia no sólo debe tener como finalidad declarar culpable a quien actualice una hipótesis normativa, sino que lo centra y lo debe de centrar en la plena reparación de quien o de quienes resultaron afectados.

En el tercer párrafo, la Ley General de Víctimas establece el derecho de las víctimas a ser reparadas o de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito.

Y a estas consideraciones se está considerando por parte de la fracción, la propia Constitución establece como finalidades del proceso penal la reparación del daño que consiste en la valorización del daño causado a la víctima en dinero; además de adaptarse el término reparación integral del daño, la Fiscalía quedaría obligada, junto con el sentenciado, a cumplir con determinados rubros de su contenido que no podrían ser cumplidos por la persona que se encuentre culpable, como el reconocimiento público las medidas de no repetición o incluso al mismo pago del daño en el caso que éste no pueda pagarlo.

También en el artículo 15, las fracciones VII y VIII se establece como única, si bien la principal función de la Fiscalía General es la persecución del delito, es decir, realizar la función de procuración de justicia en el ámbito penal ante los tribunales, sin embargo, resulta interesante advertir que en la Constitución de 1917, en los párrafos tercero y cuarto del artículo 102 constitucional, el Procurador General debía cumplir con la misión de intervenir personalmente en las controversias constitucionales.

De esta forma, la misión de velar por la Constitución ya era contemplada en la Constitución de 1917, lo cual puede observarse en la controversia constitucional 02/1932, en el cual el Procurador General defendió con éxito la competencia de la Federación para legislar en materia de ruinas y monumentos arqueológicos.

Una vez identificadas, la intención del Constituyente de 1917, de involucrar a la PGR en el ámbito de justicia constitucional, tal propósito se consolida en la reforma del 31 de diciembre de 1994, en la que de manera categórica el poder reformador de la Constitución deja clara la misión de garante constitucional que tiene el Procurador General de la República, asignándole responsabilidades de intervenir personalmente en las controversias constitucionales.

En este sentido, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, otorga la facultad de permitir opinión de todas las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que fueran presentadas.

Es por esto que se propone clarificar que la participación del Fiscal General de la República como defensor de la sociedad en la impartición de justicia constitucional, es fundamental para salvaguardar el orden jurídico.

En el artículo 27 del dictamen en discusión.

Primero. Considerando que la facultad de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos para conocer las violaciones en derechos humanos, independientemente de la clasificación de los hechos, la modificación en comento tiene por objeto eliminar la burocratización, garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva y evitar el desperdicio de recursos públicos al eliminar la posibilidad de que dos Fiscalías investiguen y acusen al mismo tiempo delitos de su competencia.

El texto propuesto establece la facultad de la Fiscalía Especializada para conducir la investigación y ejercer acciones penales en violaciones a derechos humanos, independientemente de la clasificación jurídica, y por ende, los bienes jurídicos tutelados se asume que no toda conducta tipificada en la legislación penal atienda a la protección de un bien jurídico tutelado, ya que existen tantos tipos penales como sean necesarios para garantizar la protección y garantía de diversos bienes jurídicos, lo cual, al final de cuentas se traducen en derechos humanos, mismos que son investigados por la Fiscalía en específico, según el que se trate.

Se propone que la Fiscalía Especializada tenga competencia para conocer únicamente de hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, lo que también permitirá un efectivo ejercicio del derecho de la verdad.

Por ello, de mantenerse el concepto jurídico de violaciones graves a los derechos humanos, entendiendo por estado de delitos, desaparición forzada de personas, tortura, tratos crueles e inhumanos, trata de personas y delitos de lesa humanidad, con fundamento en el derecho internacional.

Muchas gracias.

(Propuestas de modificación)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Nuvia Mayorga.

Solicitamos a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas a los artículos 2, 5, 27 y 54 presentados por la Senadora Mayorga Delgado.

El Secretario Senador José Luis Pech Várguez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por la Senadora Nuvia Mayorga Delgado a los artículos 2, 5, 27 y 54. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Verónica Martínez García, para presentar reservas a los artículos 2, 22, Primero, Octavo, Décimo, Décimo Segundo, Décimo Tercero y Vigésimo Transitorios.

La Senadora Verónica Martínez García: Con su venia.

El día de hoy vengo a esta tribuna a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a presentar diversas reservas al dictamen en discusión, bajo la siguiente argumentación.

La primera reserva es el artículo 2, donde viene como facultad de la Fiscalía absorber la obligación de garantizar la reparación integral de la víctima, lo que a nuestro parecer no es correcto, ya que la Fiscalía debería de exigir y garantizar la reparación del daño a favor del ofendido o de la víctima.

Como todos sabemos, las bases y principios del proceso penal se encuentran contenidas en el artículo 20 de nuestra Constitución General de la República, que señalan el Apartado C fracción IV de los derechos de las

víctimas, en particular, sobre la intervención del Ministerio Público en la reparación integral del daño, cito textualmente:

“En los casos en los que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño”.

En este sentido, el proyecto que hoy nos presentan rebasa las atribuciones de la Fiscalía, ya que no puede garantizar plenamente la reparación, solamente exigirla.

La segunda reserva es respecto al artículo 22. El artículo 102, Apartado A de la Constitución establece los requisitos para ser Fiscal General de la República, sin embargo, estos no deben ser exclusivamente cumplidos por quien aspira a ser Fiscal General de la República, sino también por los aspirantes a las Fiscalías locales por ser un símil de éste, y debido a que el texto constitucional establece en concordancia con lo que marcan los propios marcos jurídicos locales.

El estricto sentido, los tribunales de las Fiscalías especializadas contenidas en este dictamen, tendrían también que cumplir con los mismos requisitos aplicables para aquellas personas que aspiran a ser Fiscal General.

Por esta razón, es necesario que los Fiscales especializados cumplan también con dichos requisitos atendiendo una norma de techo, es decir, que se constituya un parámetro máximo, por lo que puede regular igual o por debajo, pero nunca por encima de los requisitos constitucionales.

Es por la importancia y trascendencia de sus funciones que se considera que no debe establecerse un estándar menor para aquellos servidores públicos que tendrán prácticamente las mismas funciones y responsabilidades que el Fiscal General.

Por último, presentamos reformas a diversos artículos del régimen transitorio de este dictamen, ya que en febrero de 2014, con la aprobación de la Fiscalía General de la República, se determinó un procedimiento específico donde se determinaba la entrada en vigor de la Ley Orgánica que hoy discutimos, debería ir aparejada a la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía de la Fiscalía General de la República.

Nuestra Constitución es clara. La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República entrará en vigor una vez que este Congreso haga la declaratoria de autonomía del Fiscal General de la República.

El proyecto que tenemos a consideración, establece en su Artículo Primero Transitorio, que la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación, y que posteriormente se deberá realizar la declaratoria de autonomía por el Congreso.

Esto no es posible, ya que sería inconstitucional establecer la vigencia de esta nueva ley antes de la declaratoria de la autonomía de la Fiscalía por parte de este Congreso.

Por esta razón, la propuesta que venimos a presentar busca reformar diversos transitorios para precisar que este Decreto entrará en vigor al momento en que se realice la declaratoria de autonomía de la Fiscalía.

Compañeras y compañeros:

Aprobemos esta ley apegados a la legalidad, a la constitucionalidad. Seamos pulcros en el procedimiento que nos exige nuestra Ley Suprema, por el bien de la justicia mexicana y por el bien de todos los mexicanos.

Es cuanto.

Muchas gracias.

(Propuestas de modificación)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Verónica Martínez.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por la Senadora Verónica Martínez García, referentes a los artículos 2, 22, Transitorios Primero, Octavo, Décimo, Décimo Segundo, Décimo Tercero y Vigésimo.

El Secretario Senador José Luis Pech Várguez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por la Senadora Verónica Martínez García, a los artículos 2 y 22, Transitorios Primero, Octavo, Décimo, Décimo Segundo, Décimo Tercero y Vigésimo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias.

En consecuencia, tiene la palabra el Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del grupo parlamentario del PRD.

En su lugar, el Senador Mancera. ¿Con las mismas reservas?

Con las reservas a los artículos 6, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 27, 30, 40, 42, y Noveno y Décimo Transitorios, y propone la adición de un Vigésimo Tercero.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Muchas gracias, señora Presidenta.

Algunas son adiciones o modificaciones que son indispensables. Por ejemplo, en relación al artículo 9, se dice en la fracción XVIII: "ejercer todas aquellas funciones que establezcan las leyes procesales o especiales, así como las que disponga el Fiscal".

Ya habíamos quedado en varios artículos que es la persona titular de la Fiscalía y ahí colocaron a el Fiscal.

En el artículo número 11 se habla, en la fracción V: "del titular de la coordinación general cuando se desempeñe en sustitución del Fiscal General". Y falta en suplencia del Fiscal General que se menciona en otras ocasiones y aquí se omite.

Lo que se refiere al artículo 6, se dice que: "se dará al Consejo Ciudadano el plan de persecución penal", y obviamente para su consulta sin la adición del visto bueno del mismo Consejo.

En lo que se refiere al artículo 14, que habla de la estructura de la Fiscalía General de la República, la fracción I dice: "Fiscal General". Debe decir: "Fiscalía General, no Fiscal General".

Por lo que corresponde al artículo 42. Esto es bien importante, porque se crea un Consejo Ciudadano y los ciudadanos además están y hemos estado reiterando aquí que es importantísima la participación de los ciudadanos, se establece en la Ley Orgánica estructura para los ciudadanos y actualmente dice: "las opiniones y recomendaciones emitidas por el Consejo no serán vinculantes".

¿Entonces para qué queremos el Consejo? Lo que estamos manejando aquí en la reserva es "serán vinculantes", para que tenga efecto el Consejo.

Otra que es más bien dedicada a Malú Micher, porque en el Artículo Décimo Transitorio se dice: "los legisladores concluimos". Y debe decir: "las y los legisladores".

Uno muy importante que es el Vigésimo Tercero, es un transitorio que tiene que ver con el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Perdón la insistencia, pero yo soy profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y la verdad me preocupa qué pueda pasar con este Instituto, estamos solicitando la adición del Vigésimo Tercero Transitorio para que refiera: "la persona titular de la Fiscalía General será el Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales. El régimen de la relación que existe entre el Inacipe y la Procuraduría General de la República se mantendrá con la nueva Fiscalía en términos de lo dispuesto por la normatividad aplicable, en tanto no se reforme o expida un nuevo estatuto orgánico del Inacipe".

Y bueno, si quieren también adicionar que debe ser la Fiscalía autónoma, se los dejo a su consideración también a mis compañeras y compañeros de Morena, por si quieren de una vez, ya que estamos entrados en éstas, nos vamos con la Fiscalía autónoma, pero por lo pronto éstas me parecen indispensables; si no, no va a funcionar la Fiscalía.

Lo hago de buena fe, de verdad se los digo.

Hasta ahí la dejamos.

(Propuestas de modificación)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Mancera Espinosa.

Someta la Secretaría a consideración del Pleno si son de aceptarse.

¿Quiere, Senador Mancera, que se someta cada una de las reservas o todas?

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Una por una.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le ruego a la Secretaría someta a consideración del Pleno, una por una, las reservas presentadas por el Senador Miguel Ángel Mancera, para que definan si se acepta la discusión.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Mancera, artículo 6. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.

(La Asamblea no asiente)

Es que ya lo había expuesto el Senador Mancera…

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Yo les puedo repetir. Se dice que el plan de persecución penal lo verá el Consejo Ciudadano para su consulta, y nada más sería para consulta y visto bueno del Consejo Ciudadano.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto ese artículo. Quienes estén por la afirmativa de la discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Está a discusión, señora Presidenta. Se admite.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias. Está a discusión el artículo.

Si no hay oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación planteada por el Senador Mancera al artículo 6, y se incorpora al dictamen.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta este artículo 6. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se acepta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias.

Someta la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, a consideración de este Pleno si se admite a discusión la reserva al artículo 9, previa lectura.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Doy lectura Artículo 9, menciona: “ejercer todas aquellas funciones que establezcan las leyes procesales o especiales, así como las que disponga el Fiscal General”. Cuando debe decir: “la persona titular de la Fiscalía General”.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada al artículo 9. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión la reserva presentada al artículo 9.

No hay oradores registrados. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse esta modificación y su incorporación al dictamen.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite el cambio al artículo 9. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se incorpora al texto del dictamen.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión la reserva al artículo 11 presentado por el Senador Mancera.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Dicho artículo en su fracción V señala:

El titular de la coordinación general, cuando se desempeña en sustitución del Fiscal de la República, de conformidad con lo previsto en la presente ley y es omiso en señalar sustitución o suplencia para que deba decir: Titular de la coordinación general en sustitución o suplencia del Fiscal General de la República.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se pone a discusión la reserva al artículo 11. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: No hay oradores registrados para la discusión, por lo tanto, le ruego a la Secretaría someta a consideración del Pleno si se acepta la modificación planteada en la reserva al artículo 11.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación al artículo 11. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se acepta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se incorpora al dictamen.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión la reserva al artículo 14.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Artículo 14, dice:

De la estructura de la Fiscalía General de la República tendrá la siguiente estructura, actualmente la fracción I dice: 1.- Fiscal General. Debe decir: 1.- Fiscalía General.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Consulte si se admite a discusión, señora Secretaria, por favor.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva al artículo 14. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Continuamos con el artículo 15, por favor, Senador Mancera.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Artículo 15. Perdón, vigésimo. No, esa la retiramos.

No tengo el documento, perdón, mejor dicho.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: ¿El 15?

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Es correcto, el artículo 15 dice:

El nombramiento del Fiscal, actualmente el nombramiento del Fiscal Titular de la Fiscalía General de la República se sujetará al procedimiento de requisitos previstos en el artículo 102 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se promoverán los principios. Debe decir: En el que se promoverán los principios. Nada más.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada al artículo 15. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se admite a discusión.

No habiendo oradores registrados, pregunte la Secretaría a la Asamblea, si se acepta la modificación al artículo 15 presentada por el Senador Mancera.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite el cambio al artículo 15. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se modifica, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se incorpora al texto del dictamen.

Continuamos con la reserva al artículo 18.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Artículo 18, actualmente dice: el Ejecutivo Federal deberá acreditar la causa grave que motivó la remoción de la persona titular de la Fiscalía General de la República. La propuesta es: El Ejecutivo Federal deberá acreditar ante el Senado la causa grave que motivó la remoción de la persona titular de la Fiscalía de la República.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva al artículo 18. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión.

No habiendo oradores registrados, le pido a la Secretaría someta a consideración del Pleno si se acepta la reserva al artículo 18.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite el cambio al artículo 18. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se acepta la modificación.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias. Se incorpora la modificación al texto del dictamen.

Continuamos con la reserva al artículo 19.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Actualmente el artículo 19 señala en su fracción número XIV, que es facultad del Fiscal, de la persona Titular de la Fiscalía General de la República, determinar el plan de persecución penal en los términos establecidos de la presente ley.

Esta fracción estamos sugiriendo que se suprima, porque ya se habló que lo elaboran, ya se habló que lo aprueban, en ninguna parte se había hablado qué significa que lo determine y aquí habla de que va a determinar el plan de persecución penal. La propuesta es que se suprima.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva al artículo 19. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: No habiendo oradores registrados, le pido a la Secretaría someta a consideración del Pleno de este Senado, si se aceptan las modificaciones planteadas al artículo 19.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación al artículo 19. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite la modificación.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: No se acepta. Queda el dictamen en sus términos.

Pasamos por favor a la reserva al artículo 27.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Actualmente el artículo 27 está propuesto: La Fiscalía Especializada en materia de derechos humanos conocerá por atracción casos del fuero común o por derivación de otras unidades fiscales al interior de la Fiscalía General de la República en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes generales".

La propuesta es adicionar, además de las leyes generales, "y especiales".

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Someta la Secretaría a consideración del Pleno, si se admite a discusión.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación al artículo 27. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión.

No habiendo oradores registrados, le pido a la Secretaría someta a consideración del Pleno, si se admite la modificación planteada.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite el cambio al artículo 27. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se admite la modificación, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Queda admitida la modificación, se incorpora al texto del dictamen.

Continuamos con el artículo 30.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Actualmente el artículo 30 habla de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, que estará a cargo de investigaciones y ejercicio de acción penal en delitos cometidos por el personal adscrito a los órganos sustantivos.

Y la parte sustancial, donde estamos haciendo la propuesta es, cuando refiere: “la persona titular de la Fiscalía General de la República podrá crear unidades de investigación”.

Este párrafo se ha repetido más de tres ocasiones, o sea, volver a decir “que la persona titular de la Fiscalía General de la República podrá crear unidades de investigación para casos especiales”, nosotros sentimos que es ya un exceso porque se ha mencionado cuando menos en tres ocasiones “que tiene la facultad de crear estas unidades de investigación para casos especiales”.

Aquí se está reiterando que puede crear unidades especiales para el caso de asuntos internos, en cada caso se tendría que reiterar el mismo párrafo.

Vale más que sobre.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le pedimos a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva al artículo 30.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva del artículo 30. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se acepta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Queda en sus términos del dictamen.

Continuamos con la presentación a consideración del Pleno, si admite a discusión la reserva presentada en el artículo 40.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Actualmente, artículo cuadragésimo, en la parte sustancial habla de que "el Consejo Ciudadano de la Fiscalía sesionará al menos una vez al mes", y para efectos de darle flexibilidad a lo que está proponiendo es: "sesionará al menos una vez al mes o cuando deba conocer de un tema para su opinión y visto bueno", que es simplemente por técnica legislativa para efectos de que pueda sesionar cuando requiera, no cuando menos una vez al mes.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: La propuesta es.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: O cuando deba conocer de un tema para su opinión, es decir, de manera extraordinaria no está prevista las formas extraordinarias para sesionar.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: La propuesta, si me permite, señora Presidenta, como está en el dictamen es: "sesionará al menos una vez al mes y estará presidido por uno de los integrantes de acuerdo con la normatividad".

Lo que propone el Senador Mancera es: "sesionará al menos una vez al mes o cuando deba conocer de un tema para su opinión y visto bueno y estará presidido por uno de los integrantes de acuerdo con la normatividad".

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Someta la Secretaría, a consideración del Pleno, si se admite a discusión.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva al artículo 40. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se acepta a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión.

No habiéndose inscrito ningún orador, someta la Secretaría a consideración del Pleno, si se admite la modificación al artículo 40.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite el cambio al artículo 40. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se acepta la modificación, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se incorpora al texto del dictamen.

Continuamos con el artículo 42.

Senador Mancera, ¿lo tienes?

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Dice actualmente el cuadragésimo segundo, en la parte que interesa para la propuesta: "las opiniones y recomendaciones emitidas por el Consejo, refiriéndose al Consejo Ciudadano, no son vinculantes, pero siempre serán de carácter público".

La propuesta es: "las opiniones y recomendaciones emitidas por el Consejo serán vinculantes y, pero, siempre serán de carácter público".

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Señora Secretaria, por favor, someta a consideración si se admite a discusión.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión el artículo 42. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Queda en sus términos del dictamen.

Senador Mancera, continuamos con los artículos transitorios.

¿El Noveno y el Décimo también los quiere por separado o es en la misma?

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Sí, por favor.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Entonces, vamos con el Artículo Noveno Transitorio.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Gracias, señora Presidenta.

El Noveno Transitorio, en el inciso k) dice: "dicho Consejo tendrá como facultades primordiales opinar, sin carácter vinculante, sobre el plan de persecución penal y otros programas anuales de trabajo", se requiere al Consejo Ciudadano.

La propuesta es: "dicho Consejo tendrá como facultades primordiales opinar y dichas opiniones serán con carácter vinculante con el Plan de Persecución Penal y otros programas anuales de trabajo".

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Por favor, señora Secretaria.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva del Noveno Transitorio. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se acepta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Queda el dictamen en sus términos.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: El que sigue sí me lo van a aceptar.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Continuamos con el Artículo Décimo Transitorio.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Este yo sé quién lo va a defender.

Actualmente dice: "los legisladores concluimos en una redistribución de facultades directas a cargo de la persona titular de la Fiscalía General de la República".

La propuesta es que diga: "las y los legisladores".

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Consulte, señora Secretaria.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva del Artículo Décimo Transitorio.

Quienes estén por la afirmativa…

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Perdón, Senadora.

Sonido en el escaño del Senador Menchaca.

El Senador Julio Ramón Menchaca Salazar: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Parece que ese transitorio no está en el dictamen final, pediría que lo confirmara la Mesa Directiva.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sí, sí está. Es el décimo. El décimo y textual como lo leyó el Senador Mancera, está en el dictamen final.

A ver, nos tomamos un minuto para revisar en el dictamen final si esta modificación ya está realizada.

El Senador Miguel Mancera Espinosa: El final, final, eso fue lo que propusimos, ¿sí?, que en todo el cuerpo del dictamen se revisara el lenguaje de género, en todo el cuerpo del dictamen; porque había varias ocasiones en donde decía, así es.

Así lo solicitamos, que se revisara que fuera con el lenguaje incluyente de género en todo el dictamen.

Si eso queda, pues listo.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Someta la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión esta modificación.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión el Décimo Transitorio. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: A ver, vamos a repetir la votación porque no se encuentra este planteamiento en el Artículo Décimo Transitorio.

Sonido al escaño del Senador Menchaca, por favor.

El Senador Julio Ramón Menchaca Salazar: (Desde su escaño) A ver, nosotros estamos en toda la disposición, Senadora Presidenta, de que todo lo que tenga que ver con la redacción de perspectiva de género se incluya, no tenemos ningún problema.

Aquí la duda es, si aparece en el Décimo, pero que lo cheque la Secretaría.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: No, pero si ya es perspectiva de género.

El Senador Miguel Mancera Espinosa: La propuesta del PRD sería que si está en todo el dictamen, pudiera estar este análisis de la perspectiva de género, es un caso concreto que nosotros detectamos, pero, está bien.

El Senador Julio Ramón Menchaca Salazar: (Desde su escaño) Está bien, nosotros nos allanamos a todo lo que no implique la perspectiva de género, que lo contemple, o sea, estamos a favor de que lo contemple el dictamen.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Senador Mancera, perdón, queda sin efecto porque esa parte en particular no se encuentra en el dictamen en el Artículo Décimo.

Entonces, pues no aplicaría.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Bueno, nos quedamos con la otra propuesta, de que van a revisar que esté en perspectiva de género el dictamen.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Perdón, Senador Mancera.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Sí, sí señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido al escaño del Senador Rementería, por favor.

El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Solamente para decir que, a pesar de que estamos absolutamente de acuerdo en que se incluya la perspectiva de género en el resto de los artículos que se aprobaron, no podríamos modificarlos ya en este momento.

Entonces, el que quisiera hacer ya esa puntualización, para que no fuéramos a cometer un error.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Rementería.

Ha quedado sin efecto esta propuesta, dado que no se encuentra.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Muy bien.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Pasamos a la reserva en el sentido de adicionar un Artículo Vigésimo Tercero Transitorio.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Sí, es para el efecto de proponer la siguiente redacción.

Vigésimo Tercero. La persona titular de la Fiscalía General de la República será el Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el régimen de relación que existe entre el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Inacipe y la Procuraduría General de la República se mantendrá con la nueva Fiscalía en términos de lo dispuesto en la normatividad aplicable, en tanto no se reforme o se expida un nuevo estatuto orgánico del Inacipe.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le ruego a la Secretaría someta a consideración la adición de un Artículo Vigésimo Tercero Transitorio.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la adición del Vigésimo Tercero Transitorio. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión, y dado de que no hay oradores registrados, le ruego a la Secretaría someta a consideración del Pleno, si se acepta la adición de este artículo al dictamen.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la adición de un Vigésimo Tercero Transitorio. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta la adición, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se adiciona un Artículo Vigésimo Tercero Transitorio al dictamen.

Son todas las reservas, Senador Miguel Mancera.

El Senador Miguel Mancera Espinosa: Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Tiene el uso de la tribuna la Senadora Beatriz Paredes Rangel, para presentar reservas a los artículos 6, 9, Noveno y Décimo Cuarto Transitorios.

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: Honorable Asamblea:

Estamos en la fase de discusión en lo particular de una legislación muy relevante para la República.

Yo deseo, por el bien del país, que se encuentren alternativas que permitan que la nueva Fiscalía funcione óptimamente.

Pero al mismo tiempo, y ese es el sentido de las dos propuestas que presento, cuando existen crisis de seguridad, se corre el riesgo de que la autoridad tienda a ser excesiva, y el difícil equilibrio entre el pleno respeto a los derechos humanos y ejercicio contundente de la capacidad de investigación, y de eficacia de los cuerpos de seguridad para que se garantice que la sociedad pueda vivir en paz, es un difícil equilibrio que nos desafía.

Por eso sometemos a su consideración unas reformas a los artículos 6 y 9, a efecto de cuidar esta posibilidad de que no obstante se ha cuestionado la falta de autonomía del futuro Fiscal, no se corre el riesgo de que haya exceso en sus funciones.

Estamos proponiendo que el Senado de la República pueda aprobar el programa de persecución del delito.

Es una reforma al artículo 6 que dice:

A partir de su nombramiento la persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de un año para definir la estrategia de transición a partir de la realización de un inventario integral y un diagnóstico

de los recursos financieros, humanos y materiales; casos pendientes, procesos de colaboración e inteligencia, y cualquier otro insumo que considere necesario para la integración de un plan estratégico de transición.

La propuesta de nuestra adición sería, que inmediatamente después de ese párrafo diga: “Mismo que deberá ser aprobado por la mayoría de los miembros presentes del Senado de la República”.

Quiero subrayar que en la discusión de esta propuesta de adición, se nos había planteado la posibilidad de que fuese mayoría calificada, pero nos parece que siendo mayoría simple, le vamos a dar al Senado de la República, que puede lo más, que es designar al Fiscal, la posibilidad de acompañar este nombramiento del Fiscal con la posibilidad de analizar su programa y su conducta, y esto enriquecerá la legitimidad de su actuación, y además está en consonancia de darle un peso específico a este órgano de representación de la sociedad.

Esa es la primera propuesta que someto a su consideración, y estamos hablando del artículo 6.

Correcto ¿verdad?

Artículo 6. Es el que habla del plan de persecución penal, artículo 6.

(Propuesta de modificación)

Nuestra segunda propuesta, que tiene la misma lógica…

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: ¿Quiere usted que se vote en lo individual?

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: ¿Sí se puede votar una por una?

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sometemos a consideración, señora Secretaria, por favor, del Pleno, si se acepta a discusión la propuesta de reserva planteada al artículo 6, por la Senadora Paredes.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva del artículo 6. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se acepta a discusión.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión.

No habiendo oradores registrados, le pido a la Secretaría someta a consideración del Pleno si se acepta la modificación planteada en el artículo 6.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación al artículo 6. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se acepta a discusión la modificación, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se incorpora la modificación al texto del dictamen.

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: Muchas gracias, señora Presidenta.

Procedo a explicar el motivo de la siguiente modificación al texto del artículo 9 en su fracción XX, en su numeral vigésimo.

El dictamen, en la fracción del artículo 9 dice: “Citar a los servidores públicos para la realización de entrevistas, obtención de información, acceso a lugares, archivos, documentos y, en general, para las diligencias necesarias por motivo de sus funciones en los lugares que establezca el personal a cargo de la función fiscal, sin sujeción a autorización o aceptación previa de sus superiores jerárquicos”.

Como ustedes saben, yo fui Embajadora en Brasil. Me parece que un artículo tan amplio puede dar lugar a persecuciones hacia el interior de instituciones, y a mí me tocó vivir esa realidad.

Nosotros pensamos que los servidores públicos tienen los derechos que tienen los ciudadanos, y que si tienen responsabilidades administrativas, hay órganos administrativos, contralorías internas, etcétera.

Entonces, nuestra propuesta es que la fracción XX del artículo 9, diga: "Citar a los servidores públicos para la realización de actuaciones y diligencias relacionadas con la investigación o el proceso en términos de la legislación aplicable".

Le ruego a la Presidenta someterlo a consideración.

(Propuesta de modificación)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Son dos propuestas, son dos fracciones de modificación al artículo 9.

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: Retiro la otra.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: ¿La otra? Ok.

Nada más quedaría la fracción XX del artículo 9.

Dé lectura, por favor, la Secretaría a la propuesta.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: La propuesta es: "Citar a los servidores públicos para la realización de actuaciones y diligencias relacionadas con la investigación o el proceso en términos de la legislación aplicable".

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Someta por favor, Secretaria, a consideración del Pleno si se acepta a discusión la modificación planteada.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación a la fracción XX del artículo 9. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se acepta la modificación.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión.

No habiendo oradores inscritos, le ruego a la Secretaría someta a consideración de esta Soberanía si se acepta la modificación planteada a la fracción XX del artículo 9.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación a la fracción XX del artículo 9. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se acepta la modificación, señora Presidenta.

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora. Se incorpora al texto del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRI, para presentar reservas, y lo consulto con usted, Senadora, a los artículos 14, 19, 20, 27, Décimo Transitorio y adición de un artículo 31.

¿Es correcto?

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Es correcto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Adelante, por favor.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: De igual manera pediría que se votara la aceptación de discusión por cada artículo en lo individual.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Así se hará, Senadora.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Bien.

Artículo 14. Este es para modificar la estructura orgánica.

Actualmente meten todas las atribuciones que anteriormente tenía la Fevimtra, que es una Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y la Trata de Personas a una Fiscalía de Derechos Humanos.

Me parece importante, necesario que exista la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y en materia de Trata de Personas, a razón de que los crímenes que se cometen contra las mujeres requieren de peritos especiales, que además, a lo largo del tiempo se han estado formando, que ya existe una capacitación, que la Fevimtra ha hecho investigaciones especiales, tanto nacionales como en coadyuvancia con los órganos locales de impartición de justicia, y en ese sentido me parece que sería un retroceso volver a la bolsa general y dejar en derechos humanos los temas que tienen que ver con trata y con crímenes de mujeres.

Por eso es que se adiciona una fracción al artículo 14 para crear la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y en materia de Trata de Personas, de igual manera, pues se les dan sus respectivas atribuciones, que es el de atender las propias, que anteriormente tenía la Fevimtra, que es:

"Las funciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y en materia de Trata de Personas, estará a cargo de investigar y perseguir los delitos federales relacionados con hechos de violencia contra la mujer y los de trata de personas, con pleno respeto a los derechos humanos, a la igualdad de género y atendiendo a la atención de niñas, niños y adolescentes, de igual forma brindará a las víctimas y a sus hijos e hijas las acciones necesarias para asegurar la protección de su integridad".

Es la referente al artículo 14.

Le pediría consultar a votación, señora Presidenta.

(Propuestas de modificación)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sí, Senadora.

Le pido, señora Secretaria, someta a consideración de esta Soberanía si se admite a discusión la reserva al artículo 14.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva al artículo 14. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Queda en sus términos del dictamen.

Pasamos a la presentación de la reserva del artículo 19.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: El artículo 19 tiene que ver con vincular la fracción VIII, con lo observado en el artículo 56 del presente Decreto.

La fracción VIII habla de que el Fiscal podrá nombrar y remover a los titulares de las Fiscalías especializadas en los términos señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero la redacción aquí es confusa porque ya no marca ese mismo requisito para los demás Fiscales especiales, así como para los otros servidores públicos adscritos a la Fiscalía.

Por eso la adición consiste en que se agregue: “observando en todo momento lo dispuesto en el artículo 56, fracción V de la presente ley, que habla precisamente del servicio profesional de carrera y no se violenten los derechos de los trabajadores”.

(Propuesta de modificación)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de reserva al artículo 19.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada en el artículo 19. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Queda el dictamen en sus términos.

Pasamos a la presentación de la reserva del artículo 20.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: El artículo 20 habla del coordinador general. Como les había comentado, el coordinador general tiene prácticamente las mismas funciones que el Fiscal, pero no tiene responsabilidades constitucionales, entonces, se trata de hacer una adición para que el nombramiento de la persona titular de la Coordinación General de la Fiscalía General de la República se sujetará al mismo procedimiento y requisitos que se prescriben en el artículo 15 de la presente ley para el nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General de la República, es decir, si van a tener las mismas atribuciones, que también se les pidan los mismos requisitos para ocupar el encargo.

Esa sería la adición, señora Presidenta.

(Propuesta de modificación)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Consulte, por favor, la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada al artículo 20.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva al artículo 20. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Queda el dictamen en sus términos.

Pasamos a la presentación de la reserva del artículo 27.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: El artículo 27 tiene que ver con la atracción de casos del fuero común, y estos específicamente hablan de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, y lo que estamos pidiendo es que esta Fiscalía conozca los casos por derivación de otras unidades Fiscales al interior de la Fiscalía General de la República, en los mismos términos que lo prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(Propuesta de modificación)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Someta la Secretaría a consideración del Pleno, si se admite a discusión la reserva presentada al artículo 27.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva al artículo 27. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se acepta a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Queda el dictamen en sus términos.

Proseguimos con la reserva al artículo Décimo Transitorio.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Es muy importante este transitorio, yo les pediría que pusieran atención. Un transitorio no puede contravenir a lo que dice un artículo.

El artículo 41 dice que: "es el Senado de la República el que va a nombrar a los integrantes del Consejo Consultivo".

Y el Transitorio Décimo dice que: "es el Fiscal General de la República el que va a nombrar a los integrantes del Consejo Consultivo".

Lo que estoy proponiendo en este transitorio es homologar con lo que dice el artículo 41, darle el plazo de 30 días al Senado de la República para que cumpla con la función que le atribuye el artículo 41 de emitir la convocatoria para el Consejo Consultivo.

Lo que dice actualmente el Transitorio Décimo es lo contrario, le está dando facultades al Fiscal de nombrar al Consejo Consultivo.

Contraviene lo que dice el artículo 41, los tenemos que homologar.

(Propuesta de modificación)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: ¿Senadora, es el Décimo Transitorio?

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Sí, Décimo Transitorio.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: ¿Qué párrafo del Décimo Transitorio?

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: No tengo el párrafo, es: "la persona titular de la Fiscalía General de la República contará con 30 días hábiles a partir de su nombramiento para convocar una Comisión de Designaciones para dar inicio al proceso de designación de las primeras cinco personas integrantes del Consejo Ciudadano".

A ver, el artículo 41 de la ley es el que faculta al Senado para emitir la convocatoria del Consejo Ciudadano, entonces, lo que tenemos que hacer es poner que: "el Senado de la República contará con un plazo de 30 días hábiles a efecto de proceder conforme a lo estipulado en el artículo 41".

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: ¿Este artículo que está usted proponiendo la modificación es el Décimo Transitorio?

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Décimo Transitorio y contraviene el transitorio con el artículo 41 que faculta al Senado.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Ok. Sonido al escaño del Senador Menchaca, por favor.

El Senador Julio Ramón Menchaca Salazar: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Dentro del adendum que se presentó a la Mesa Directiva y al Pleno, está contemplado precisamente lo que está solicitando la Senadora.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: No tengo el adendum, ¿queda entonces corregido a que el Senado tenga 30 días?

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: A ver, le pido por favor a la Secretaría lea el adendum, lo que está planteado en el adendum del dictamen.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Doy lectura.

Décimo. “Para los efectos de los artículos 40 y 41 de la Ley que se crea en virtud del presente Decreto, el procedimiento para la designación de los primeros Consejeros Ciudadanos iniciará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la designación del Fiscal General de la República; observando la siguiente fórmula de escalonamiento: las personas integrantes durarán en su encargo uno, dos, tres, cuatro y cinco años, respectivamente”.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Creo que está considerada ya su reserva Senadora.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Es correcto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: ¿Está usted de acuerdo, quiere que se someta a consideración o la deja sin efecto?

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: No, estoy de acuerdo, ya se corrige lo que venía.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Perfecto. Gracias, Senadora.

¿Entonces, pasamos a la presentación de la adición de un artículo 31?

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Sí, sería y tiene que ver con creo un error que se acaba de cometer hace un momento. La Ley Orgánica de la Fiscalía tiene ya una figura distinta al ser un órgano autónomo. Un órgano autónomo no puede tener un instituto desconcentrado dentro de sí, y ustedes acaban de aprobar por un transitorio del Senador Mancera que sí se quede el Inacipe dentro de la estructura orgánica de la Ley Orgánica, y no se puede, entonces, yo estoy proponiendo otro transitorio donde el Instituto Nacional de Ciencias Penales, organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, actualmente sectorizado a la Procuraduría General de la República, será sectorizado a la esfera administrativa de la Secretaría de Gobernación.

Las citadas modificaciones deberán ser realizadas en un plazo máximo de 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

Esto por un ordenamiento jurídico.

(Propuestas de modificación)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora.

Se somete, le pedimos a la Secretaría que consulte al Pleno si se admite a discusión la adición de un artículo 31 tal y como lo propone la Senadora Anaya.

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se somete a discusión la adición del artículo 31. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Queda el dictamen en sus términos.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Gracias, señora Presidenta.

Quiero nada más dejar testimonio que retrocedemos en materia de género.

Que el regresar la Fevimtra y la Fiscalía Especializada en temas de delitos de violencia hacia la mujer y meterla a la bolsa de derechos humanos es un retroceso para atender los crímenes contra la mujer, desafortunadamente sí hay gente que nada más vino de levanta dedos y no a defender los derechos de las mujeres.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Tenía usted aquí inscrita una reserva en el artículo 23.

Se retira la reserva al artículo 23.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del grupo parlamentario del PRD, para presentar reservas a los artículos:

2, 5, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 22, 36, 42, Séptimo y Decimo Transitorios.

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Gracias, señora Presidenta.

Le quiero solicitar que retire todos los artículos que había reservado, derivado de la discusión que hemos escuchado, algunos ya se han resuelto, algunos creo que del lenguaje inclusive a género se resuelven por sí solos y solamente quiero dejar vigente el Artículo Décimo Transitorio.

Por supuesto que el transitar de la Procuraduría General de la República a una nueva Fiscalía General de la República con este nuevo marco normativo, producto de esta discusión, nos va a generar retos a todos.

Yo quisiera que le fuese bien a esta Fiscalía, porque en efecto, la demanda de los ciudadanos es latente y nosotros, todos, a pesar de haber votado en contra en lo general sobre el espíritu de esto, estamos demostrando voluntad para enriquecer la propuesta.

Creo que eso es por el bien de México y por el bien de nuestras instituciones. Por eso salvo el Artículo Décimo Transitorio que en el adendum que nos entregaron dice a la letra:

“Décimo Transitorio. Para los efectos de los artículos 40 y 41 de la Ley que se crea en virtud del presente Decreto, el procedimiento para la designación de los primeros Consejeros Ciudadanos iniciará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la designación del Fiscal General de la República, observando la siguiente fórmula de escalonamiento: las personas integrantes durarán en su encargo uno, dos, tres, cuatro y cinco años, respectivamente.

Sobre esta fórmula de escalonamiento creo yo que se tiene que modificar, quienes hemos sido integrantes de alguna autoridad, de alguna institución, sabemos que cuando llegamos 1 ó 2 años, son insuficientes, más aún cuando esto apenas va a iniciar, cuando es la primera Fiscalía General de la República y se requiere más tiempo.

Por eso le quiero plantear al Pleno que se modifique esta fórmula de escalonamiento.

Lo que yo propongo es que sea o que se agregue ese nuevo párrafo con esta nueva redacción, que sería la siguiente fórmula de escalonamiento:

Dos personas integrantes que durarán tres años en su encargo.

Dos personas integrantes que durarán cuatro años en su encargo, y

Una persona integrante que durará cinco años en su encargo.

Esto con la finalidad de que quienes lleguen en este primer Consejo Ciudadano, tengan el tiempo suficiente como para poder adquirir experiencia y fijar metas a tres años.

Imaginemos a uno que llega por un año, en lo que llega, en lo que se están creando las bases prácticamente tiene que salirse y eso aplica también para el que va por dos años, por eso la propuesta es: Dos de tres años. Dos de cuatro años. Y uno de cinco años para que se genere la experiencia y que puedan tener planes a largo plazo.

Quisiera solicitarle a esta Presidencia pueda poner a discusión esta propuesta que hago.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le pido a la Secretaría someta a consideración, previa lectura de la propuesta del Senador Juan Manuel Zepeda, del Artículo Décimo Transitorio.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Someta a consideración la Secretaría a este Pleno si se admite a discusión.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite. . .

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Perdón, perdón, antes le damos sonido al escaño del Senador Menchaca y les rogamos un poco de bajar el volumen en sus pláticas.

Sonido en el escaño del Senador Menchaca.

El Senador Julio Ramón Menchaca Salazar: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Yo quisiera que se ajustara la lectura a la propuesta del Senador Zepeda, porque no corresponde, según me están dando la información.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Por favor, sonido, Senador.

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Si me permite, señora Presidenta, toda vez que el adendum se entregó posterior a que habíamos hecho la propuesta, quisiera leer la redacción propuesta y que sea esa la que se someta a votación.

Diría así:

Artículo Décimo Transitorio. Para los efectos de los artículos 40 y 41 de la Ley que se crea en virtud del presente Decreto, el procedimiento para la designación de los primeros Consejeros Ciudadanos iniciará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la designación del Fiscal General de la República, observando la siguiente fórmula de escalonamiento: dos personas integrantes que durarán tres años en sus encargos, dos personas integrantes que durarán cuatro años en sus encargos y una persona integrante que durará cinco años en su encargo.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión en los términos planteados por el Senador Zepeda.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión el Artículo Transitorio Décimo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se acepta a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión.

No habiendo oradores registrados, le pido a la Secretaría someta a consideración de este Pleno si se admite la modificación al Artículo Décimo Transitorio.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación al Artículo Transitorio Décimo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se acepta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias. Se incorpora al texto del dictamen.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, con reservas a los artículos 5, 10 y 26.

La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

Vengo a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a presentar tres reservas, si me permiten exponerlas:

Primero, del artículo 5, fracción III, en cuanto a que dice: “que la Fiscalía General de la República debe procurar la reparación del daño”.

Nosotros creemos que no es así, que la Fiscalía General de la República debe exigirla como un derecho inalienable de la víctima u ofendido.

La reparación no sólo estriba en la retribución de tipo económico, sino que también de derechos y garantías que se le otorgan a la víctima para reparar el daño.

Esta reparación, según nuestro artículo 20 constitucional, debe ser solicitada por la víctima o el Ministerio Público, reiterando la obligación de ordenar su pago si ha emitido una sentencia condenatoria.

Esta reparación del daño, como dice la doctrina jurídica, “debe correr a cargo del autor del delito o, en su caso, de un tercero ajeno a él”, y los sujetos obligados a la reparación del daño, como sabemos, son los tutores, las corporaciones o gremios, los dueños de empresas, comisionados de negocios o compañías mercantiles de cualquier tipo y gobierno federal, de las entidades federativas, ya sea estatal o municipal.

El establecer como obligación de la Fiscalía que se procure la reparación integral de la víctima implicaría que: “en caso de que el autor del delito no pueda cubrir con la reparación del daño, la Fiscalía absorbería ese costo con las implicaciones financieras y presupuestales que eso significa”, cuando además ya se cuenta con un fondo contemplado para esto en la Ley General de Víctimas.

Aunado a lo anterior, las mismas consideraciones del dictamen dan la razón a esto, ya que dice en la primera consideración, tercer párrafo, “que la Fiscalía General de la República observará plenamente los derechos del imputado y de las víctimas en el marco de un proceso penal garantista que también incorpore y visibilice la justicia de no repetición y reparación del daño”, más no que la Fiscalía absorberá la obligación de la reparación del daño, contemplando el daño económico que causaría a la misma.

En virtud de lo anterior, se considera necesario realizar la siguiente modificación tal y como lo establece la Constitución y la Ley General de Víctimas, eso por lo que hace al artículo 5.

En cuanto al artículo 10, de acuerdo con la teoría constitucional, el reconocimiento de los derechos humanos resulta necesario para afirmar que vivimos en un Estado constitucional de derecho, donde el Estado y los órganos, a través de los cuales ejerce sus atribuciones, encuentren un límite a su actuar en las obligaciones de reconocimiento, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

Sin embargo, desde el surgimiento del movimiento constitucionalista, se ha reconocido que todo listado de aquellas disposiciones que puedan contener normas, que se traduzcan en derechos para las víctimas, siempre resultará restrictivo, puesto que el Estado reconoce aquellos derechos respecto a los cuales adquiere las obligaciones contenidas en el artículo 1o. de nuestra Constitución, lo cual resulta en perjuicio de las víctimas u ofendidos del delito.

Además es preciso hacer referencia que las obligaciones del personal de la Fiscalía, respecto a las víctimas, resulta innecesario y de difícil aplicación ante la existencia de una ley de jerarquía constitucional, como lo es la Ley General de Víctimas, que busca proteger los derechos y el trato de todas las víctimas por parte de las autoridades, y agregando que el Código Nacional de Procedimientos Penales, que reglamenta la función primordial de la Fiscalía, ya prevé un parámetro de actuación del personal que desempeña estas funciones y los derechos de las víctimas.

Finalmente, en este artículo también debe atenderse a que la ley que pretendemos aprobar se trata de una disposición reglamentaria de la Constitución y, por lo tanto, se encuentra estrictamente sujeta a lo que se estableció por el Constituyente Permanente en el artículo 102, Apartado A.

Y finalmente, en cuanto al artículo 26, se proponen cambios de técnica legislativa para establecer de forma clara dentro de las atribuciones comunes a la Fiscalía, la posibilidad de solicitar información a otras instituciones que no contempla actualmente, para aplicar el principio de exhaustividad dentro de sus funciones de investigación, para facilitar la efectiva persecución y sanción de los delitos. La importancia de la transparencia en una democracia es de suma trascendencia.

En los últimos años el derecho de acceso a la información ha permitido dar puntual seguimiento al ejercicio de las atribuciones de los organismos públicos y ha aportado elementos importantes para la formación de expedientes y formulación de acusaciones por hechos delictivos.

Para garantizar la autonomía de la Fiscalía y el efectivo ejercicio de sus funciones, resulta necesario que este organismo nazca con las facultades necesarias para poder hacer frente a la criminalidad actual del país, dotándolo de herramientas que le permitan allegarse de toda la información necesaria para integrar la carpeta de investigación y realizar las diligencias necesarias para garantizar el acceso a la justicia.

Estas serían las tres reservas que presento al Pleno, señora Presidenta.

Muchas gracias.

(Propuestas de modificación)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Beltrones Sánchez.

Dos consultas.

¿La tercera es la reserva al artículo 25 ó 26?

La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: 26, puntualmente en sus fracciones III, IV, V, VI y VIII.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: ¿Quiere votaciones por cada una de las reservas?

La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: No. En paquete, señora Presidenta.

Gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le pedimos a la Secretaría ponga a consideración de este Pleno si se acepta a discusión las reservas presentadas por la Senadora Beltrones, referentes a los artículos 5, 10 y 26 en sus fracciones III, IV, V, VI y VIII.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por la Senadora Sylvana Beltrones a los artículos 5, 10 y 26. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Queda el dictamen en sus términos.

Tiene, si está listo el Senador Manuel Añorve, para presentar reservas los artículos 4 y 21.

¿Son el 4 y el 21 nada más?

El Senador Manuel Añorve Baños: Solamente el artículo 4. Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

En el grupo parlamentario del PRI estamos ciertos que hay muchos puntos que se pueden modificar, y por supuesto también fortalecer este dictamen con estas modificaciones.

Uno de los más relevantes, que es lo que trae en este momento a tribuna, es el ejercicio de la facultad de atracción que puede ejercer el Fiscal General.

En el grupo parlamentario del PRI coincidimos en que las reglas para ejercer la facultad de atracción deben de ser claras y deben evitar su ejercicio excesivo o dejar muy clara su aplicación.

Por eso, en el artículo 4 queremos hacer estas modificaciones y, por supuesto, subrayarlas de manera muy puntual, ya que se debe de demostrar la inactividad o ineficacia de la Fiscalía local competente cuando se tenga que ejercer esta atracción o esta competencia o facultad.

El artículo 4, con nuestra propuesta debe decir:

"La Fiscalía General de la República tendrá las competencias señaladas en la Constitución, esta ley y las demás leyes aplicables.

La Fiscalía General de la República tendrá la facultad de atraer casos del fuero común, y se añade: en los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y leyes aplicables en, así se añade también: los casos en que demuestre la inactividad o ineficacia de la Fiscalía local competente, garantizándose que la investigación y la persecución de los delitos no sea fragmentada.

La víctima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción, estoy leyendo el tercer párrafo: la negativa de atracción podrá ser impugnada en los términos previstos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Propuestas de modificación)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Añorve Baños.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión la reserva al artículo 4.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, por favor, si se admite a discusión.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Manuel Añorve al artículo 4. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta a discusión la reserva.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión.

No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación planteada para el artículo 4.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación al artículo 4. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se incorpora al texto del dictamen.

Tiene el uso de la palabra el Senador Eruviel Ávila, para presentar reservas a los artículos 16, 41 y 60.

Y, comento, sólo para verificar, son las reservas a los artículos 16, 41 y 60.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: Efectivamente, señora Presidenta, gracias y con su permiso.

El grupo parlamentario que me honro en participar y militar, el PRI, venimos a poner a consideración de ustedes, apreciadas, apreciados, Senadoras, Senadores, tres reservas muy concretas, muy específicas, también de muy buena fe, así las consideramos.

Primero. Estamos proponiendo una precisión, una modificación para armonizar lo que contempla hoy día nuestra Carta Magna con la ley que hoy se ha aprobado.

Es decir, respecto al artículo 16, de la designación de la persona titular de la Fiscalía General, estamos proponiendo que se estipule, en lugar de tener la ciudadanía mexicana, establecer como lo contempla la Carga Magna, ser ciudadano mexicano por nacimiento, ciudadano mexicano por nacimiento, es muy concreta la propuesta, señora Presidenta, por si gustan ponerla a consideración, con muchísimo gusto o platico el resto. Es la primera, artículo 16.

Artículo 60.

Aquí estamos varios ex gobernadores y futuras gobernadoras, seguramente también, están ex alcaldes, ex alcaldesas, etcétera, y, miren qué difícil era a veces remover, por ejemplo, a un elemento de la policía municipal, a un agente del MP que estaba haciendo actos de corrupción, no era tan fácil, el tribunal contencioso, a veces juicios de amparo.

Por eso, y de muy buena fe, insisto, que estamos proponiendo reformar, adicionar el artículo 60 de la ley, ya aprobada hace unas horas o hace unos minutos, para que diga lo siguiente:

Voy a citarles qué dice hoy día, y cuál es la propuesta.

Las relaciones laborales entre la Fiscalía General de la República y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el artículo 123 constitucional, Apartado B y, por lo establecido por esta ley. Así se aprobó esta tarde.

La adición es la siguiente:

Apartado B, fracción XIII, y les voy a leer rápidamente parte de esta fracción:

Los agentes del MP, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes en el momento del acto, señalen, para permanecer en dichas instituciones y aquí lo importante, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.

Si la autoridad judicial resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquiera otra forma de terminación del servicio fuera injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda a su reincorporación.

Es decir, con esta fracción estamos evitando, y si todos tenemos este objetivo de acabar con la corrupción en cualquier nivel, pues es muy importante adicionar esta fracción XIII al artículo 60 de la ley, que insisto, fue aprobada, que es simplemente adicionar esta fracción.

Y concluyo con el artículo 41 de la ley que hoy se ha aprobado, que habla respecto a la designación de los integrantes del Consejo Ciudadano.

Aquí la propuesta habla de que con mayoría simple se pueda nombrar a los consejeros.

Yo los invito, Senadoras y Senadores, para que pudiera ser con mayoría calificada, y esto genere un consenso y podamos todos poder opinar y aportar respecto a quiénes pueden integrar este Consejo Ciudadano, que estoy cierto desde ahorita serán mujeres y hombres que van a aportarle mucho a México, y especialmente a la Fiscalía, porque es algo que nos interesa a todos.

Así es que, dejo las tres propuestas muy concretas, señora Presidenta, y agradecería mucho se puedan votar por separado.

(Propuestas de modificación)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Así se hará, Senador.

Le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión la propuesta de modificación al artículo 16.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Eruviel Ávila Villegas al artículo 16.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: ¿Y puede dar lectura, por favor, a la modificación?

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Con mucho gusto.

Artículo décimo sexto. De la designación de la persona Titular de la Fiscalía General de la República.

Fracción I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento. La persona Titular de la Fiscalía General de la República durará en su encargo 9 años y no podrá ser reelegida para un nuevo periodo.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión la modificación al artículo 16, presentada por el Senador Ávila Villegas.

No habiéndose registrado ningún orador, le pido a la Secretaría someta a consideración del Pleno si se acepta la modificación.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación a la reserva presentada por el Senador Eruviel Ávila al artículo 16. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite la modificación, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se incorpora al texto del dictamen.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le pido a la Secretaría someta a consideración de esta Soberanía si se admite a discusión la adición al artículo 60, que ha presentado el Senador Ávila Villegas.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Eruviel Ávila al artículo 60. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión.

No habiéndose registrado oradores, le pido a la Secretaría someta a consideración de esta Soberanía si se admite la modificación al artículo 60.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación presentada por el Senador Eruviel Ávila al artículo 60. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite la modificación.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se incorpora al texto del dictamen.

Le pido a la Secretaría, que en votación económica, someta a consideración del Pleno si se admite a discusión la modificación planteada en el artículo cuadragésimo primero.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión las reservas presentadas por el Senador Eruviel Ávila al artículo 41. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Queda el dictamen en sus términos.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, Senadoras y Senadores. Muy amables.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Ávila Villegas.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Juan Quiñonez Ruiz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar reservas a los artículos 6 y 50.

El Senador Juan Quiñonez Ruiz: Quiero comunicarle que declino a la reserva del artículo 6, y nada más reservamos el artículo 50.

Una de las novedades que se ha presentado en esta ley son las llamadas Comisiones Especiales que colaborarán en la investigación de fenómenos y casos especiales, particularmente los vinculados con violaciones a derechos humanos.

Se establece que estas comisiones están integradas de manera multidisciplinaria, tendrán un carácter temporal y su enfoque será el de acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la garantía de no repetición.

El gran problema de esta propuesta es que se plantea que estas Comisiones Especiales sean un apéndice del propio Fiscal General, es decir, que carecerían de autonomía.

Estas disposiciones abren la puerta de manera muy riesgosa, ya que se construyen verdades históricas, desde la Fiscalía, pero legitimadas por una Comisión Especial, entre ellas la electoral, la de derechos humanos, desde luego anticorrupción, y la de asuntos internos.

Por ello resulta fundamental establecer que estas Comisiones Especiales gozarán de autonomía técnica y de gestión, porque de lo contrario se corre el riesgo de caer en una simulación y de que estas comisiones no funcionen como deben ser.

Hay que tener presente que las violaciones a los derechos humanos, los fenómenos que estas Comisiones Especiales investigarán, por lo general, son sometidas directamente o con la anuencia de agentes del Estado.

Por ello resultará absurdo que estas Comisiones Especiales, que buscarán la verdad y la reparación integral, fueran apéndices de la propia Fiscalía General.

Proponemos corregir lo anterior mediante una modificación al artículo 50, estableciendo que las Comisiones Especiales gozarán de autonomía técnica y de gestión.

Yo les pido a nuestros compañeros de Morena, que hoy tienen esa mayoría, que recuerden que hay cosas donde los dichos populares nos vienen a la medida, y hay uno que dice: “Hazlo como bien te decimos, no como mal lo hicimos”.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Quiñonez Ruiz.

Le ruego a la Secretaría someta a consideración de esta Soberanía si se acepta la discusión de la reforma planteada al artículo 50 de este dictamen.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea…

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le pedimos que previamente lea la propuesta.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Doy lectura a la modificación, y es la propuesta del artículo 50 con respecto a las Comisiones Especiales.

Diría así: “La persona Titular de la Fiscalía General de la República podrá crear Comisiones Especiales de carácter temporal, y esta es la adición, que gozarán de autonomía técnica y de gestión.

Continúo, para colaborar en las investigaciones de fenómenos y delitos que debido a su contexto, a juicio del Fiscal, amerita su creación, incluyendo aquellos sobre feminicidios, violencia sexual, trata de personas o que impliquen violaciones a derechos humanos en especial de los pueblos y las comunidades indígenas, de los niños, niñas, adolescentes y personas migrantes”.

(Propuesta de modificación)

Sería el texto.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Juan Quiñonez al artículo 50. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión.

No habiéndose registrado ningún orador, le pido a la Secretaría someta a consideración del Pleno si se acepta la modificación al artículo 50 que ha presentado el Senador Quiñonez.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación presentada por el Senador Juan Quiñonez al artículo 50. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aceptan las modificaciones.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se incorporan al texto del dictamen.

Tiene el uso de la palabra el Senador Ángel García Yáñez, para presentar reservas a los artículos 7 y 41.

He informamos también que las reservas planteadas por la Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, las han retirado.

El Senador Ángel García Yáñez: Con la venia, señora Presidenta.

A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vengo a esta tribuna a presentar la siguiente reserva al artículo 7 y al artículo 41, primer párrafo del dictamen a discusión, con base a las siguientes consideraciones:

Primero. La reforma constitucional del 31 de enero de 2014, ordenó la creación de la Fiscalía General de la República con autonomía constitucional, en sustitución de la actual Procuraduría General de la República, reforma que implica una transformación de la arquitectura del órgano responsable de la Procuraduría de Justicia.

El artículo 102, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice: “El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios.

Sin embargo, actualmente la persecución penal en México se realiza de manera reactiva bajo un sistema de turnos o números de agencias al Ministerio Público, ya que le es asignado el trámite de un caso en particular, y todos los esfuerzos se enfocan en el mismo, realizando por inherencia múltiples actividades en torno a un solo caso, sin planificación ni orientación, traducido en una pérdida de eficiencia en la investigación.

En consecuencia, este modelo repercute en las cargas de trabajo de los Ministerios Públicos, por lo que se confirma con los niveles de rezago que se acumulan en las procuradurías o fiscalías.

Segundo. Es preciso que la Fiscalía no sea una mera transformación de la figura del Ministerio Público, ya que debe dejar atrás la figura de policía, mediador y juez, y en cambio reflejarse como el defensor de la sociedad y de las víctimas.

Es por ello que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha dispuesto que el Ministerio Público de la Federación tiene la obligación de informarle a cualquier víctima de delito, aquellos derechos que se le otorgan constitucionalmente.

Tercero. Estableciendo un artículo específico de las facultades del Ministerio Público que haga referencia a sus principales funciones, tal y como lo establece el artículo 21, dispuesto en la Ley Suprema.

El Ministerio Público de la Federación y los policías deben actuar de tal manera que ninguno de ellos interfiera en las atribuciones, facultades y obligaciones de cada uno, con lo que se propone fortalecer la investigación de los delitos, lo anterior sin dejar de lado de la conducción y el mando de investigación de ésta a cargo del Ministerio Público.

El Ministerio Público de la Federación, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de esclarecer el hecho delictivo, deberá reunir los datos y pruebas y, en su caso, los elementos probatorios que le

permitan sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación en contra del imputado, determinar y cuantificar la reparación del daño.

La coordinación de todas las autoridades en condiciones de brindar apoyo en la investigación de los delitos contribuye un elemento fundamental en el nuevo esquema de combate al crimen y la conducción de la violencia, por lo que se dota a la Fiscalía General las facultades para consolidar esta interacción y participación oportuna de las autoridades involucradas.

El Ministerio Público de la Federación, previa autorización del Fiscal General o del servidor público en quien delegue la facultad, podrá solicitar a la autoridad jurisdiccional la sustitución de la prisión preventiva oficiosa, por alguna otra medida cautelar, con el fin de ejercer una equilibrada ponderación entre el principio de persecución de inocencia que le asiste a todo imputado, con la necesidad de protección de los bienes jurídicos tutelados. De esta forma las facultades de la Fiscalía mantendrán las funciones relacionadas con la institución y su relación con los demás poderes.

Artículo 41, primer párrafo.

Consideraciones.

Se propone establecer que se requiere una mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado en el proceso de selección de los miembros del Consejo Ciudadano.

Con esta propuesta se garantiza una mayor legitimidad en los nombramientos, puesto que las fuerzas políticas se verán obligadas en forma de consensos amplios en la designación de los consejeros.

Con estos nombramientos resultantes de un amplio consenso se logra que este Consejo tenga mayor autoridad y mayor autonomía.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Propuestas de modificación)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Ángel García.

¿Se someten a consideración en lo individual o en paquete?

El Senador Ángel García Yáñez: En paquete.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le ruego a la Secretaría que someta a consideración del Pleno si se acepta la discusión de las modificaciones planteadas a los artículos 7 y 41.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Ángel García a los artículos 7 y 41. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Permanece el dictamen en sus términos.

Quiero informar que del grupo parlamentario del PRD las reservas que había presentado la Senadora María Leonor Noyola Cervantes y el Senador Juan Manuel Fócil a los artículos 9 y 17, así como el 16 respectivamente, han sido retiradas.

Y nos llega una solicitud, hubo un error de lectura en la Secretaría respecto a la votación sobre el artículo 16 que fue aprobado aquí, pero se leyó de más, entonces, les vamos a rogar si ponemos a consideración que se acepte este artículo tal cual como debe decir, para lo que le pido a la Secretaría que le dé lectura, por favor.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Artículo 16. De la designación de la persona titular de la Fiscalía General de la República, ser ciudadano mexicano por nacimiento.

Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias.

Consultamos al Pleno si es de aprobarse esta modificación en estos términos, por favor.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse en estos términos el artículo 16. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se acepta la modificación en sus términos.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aclaro que fue un error de lectura del documento que ya les dieron así por parte de Servicios Parlamentarios, porque ya los secretarios, que están haciendo su mejor esfuerzo, repelaron.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, para presentar reservas a los artículos 14, 25, 32 y 42.

La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Muy buenas noches, compañeras Senadoras y Senadores:

Someto a la consideración de esta Asamblea, las reservas a los artículos 14, 25, 32 y 42 del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, por el que se expide el dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Estas cuatro reservas son relativas a dos materias: Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y en materia de participación ciudadana.

Por lo que hace al primero, en el apartado de descripción de la iniciativa, se refiere al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, como un órgano administrativo, desconcentrado de la Fiscalía, dotado de autonomía técnica en sus funciones.

Sin embargo, posteriormente en el texto, en el artículo 32, se señala como atribuciones del coordinador de métodos de investigación, precisamente coordinar y asignar los servicios periciales.

El artículo 14 prevé que el titular del Instituto sea designado por el Fiscal General, y que el Consejo Técnico del mismo sea presidido también por el titular de la Fiscalía.

En tal virtud, el planteamiento inicial de establecer los servicios periciales como un órgano desconcentrado no se cumple, pues no existe ningún nivel de desconcentración, de atribuciones, si el Fiscal designa al titular del Instituto de Servicios Periciales, el coordinador de métodos de investigación coordina y asigna los trabajos periciales.

El Consejo Técnico es presidido por el Fiscal y no cuenta con autonomía presupuestal, luego entonces no existe desconcentración de atribuciones, ni autonomía técnica de funciones.

Esto tiene particular relevancia, toda vez que uno de los principales señalamientos que se ha hecho al sistema de procuración de justicia, es que la autoridad que determine el ejercicio de la acción penal, es la misma que coordina la realización de los dictámenes periciales, con base a las cuales se demuestra o no la existencia de un delito y la probable responsabilidad de quien lo cometió.

Esta es una crítica reiterada del GIEI en las investigaciones del caso Ayotzinapa, en donde se señaló que servicios periciales de la PGR buscó dar soporte a la denominada verdad histórica, lo cual resulta particularmente grave, ya que es a partir de los dictámenes periciales como debe surgir la teoría del caso y no a la inversa.

En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al presentar el informe de su visita in loco, en octubre de 2015, evidenció la falta de profesionalización de funcionarios adscritos a los servicios forenses, por lo que exhortó a la creación de un Instituto Nacional Forense autónomo, independiente, de injerencias políticas que se rige estrictamente por criterios técnicos y científicos.

Por tal motivo, consideramos fundamental que el apartado de servicios periciales, a través del Instituto, se regule a través de una reforma constitucional, que establezca un órgano con autonomía técnica, operativa y presupuestal como requisito fundamental para lograr una justicia eficiente, autónoma y capaz de tener la confianza ciudadana.

Respecto al tema de la participación ciudadana, en Acción Nacional estamos totalmente a favor de la participación ciudadana en la Fiscalía General de la República.

De hecho consideramos esta intervención de la ciudadanía como un avance, tanto en el apoyo de las funciones a la Fiscalía General como del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

Sin embargo, creemos que no es suficiente el alcance que se da a la participación ciudadana.

El artículo 25 establece como funciones del Consejo Ciudadano opinar y dar seguimiento y emitir recomendaciones públicas, pero señala que las opiniones y recomendaciones emitidas no serán vinculantes.

De igual manera, el mismo artículo 25 establece que cualquier ciudadano puede participar en el proceso de designación de las Fiscalías especializadas, sin que nuevamente dichas participaciones tengan ningún carácter vinculante.

Creemos que es verdaderamente relevante la participación ciudadana en las acciones de procuración de justicia, los ciudadanos quieren estar informados, quieren hacer aportaciones, conocer desde adentro cómo funciona la Fiscalía, ya que sólo así podrá recuperarse la confianza y la credibilidad ciudadana en esta Institución.

Por eso consideramos de vital importancia incluir en el artículo 42, que las autoridades de la Fiscalía expresen los motivos para el rechazo, en su caso, de las opiniones o recomendaciones que formule el Consejo Ciudadano respecto del desempeño de la Fiscalía.

Senadoras, Senadores, son algunos de los elementos más relevantes que contienen estas reservas, esperando que puedan tener una valoración positiva.

Es cuanto.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Murguía Gutiérrez.

¿Quiere que se voten en paquete o de uno en uno?

La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Me parece que la última puede, la de participación ciudadana.

Esa póngala a votación.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Es el artículo 42.

La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: 25 y 42.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Todos los ponemos.

Por favor, le rogamos a la Secretaría que en votación económica ponga a consideración cada uno de los artículos reservados, es decir, una votación para cada artículo.

Le pedimos que consulte si se admite a discusión el artículo 14.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez al artículo 14. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Queda el dictamen en sus términos.

Le ruego a la Secretaría consulte al Pleno si se admite a discusión la modificación al artículo 25.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez al artículo 25. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión la reforma planteada al artículo 25.

Al no haberse inscrito ningún orador, le pido a la Secretaría someta a consideración, en votación económica, si se admite la modificación a dicho artículo.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación de la reserva presentada por la Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez al artículo 25. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite la modificación, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se incorpora al texto del dictamen.

Le pido a la Secretaría que someta a consideración si se admite a discusión la propuesta al artículo 32.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez al artículo 32. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión la reserva, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Queda en los términos del dictamen.

Le pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si admite a discusión la modificación propuesta al artículo 42.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez al artículo 42. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión.

Como no se ha registrado ningún orador, le pido a la Secretaría someta a consideración del Pleno si se acepta la modificación planteada por la Senadora Murguía al Artículo 42.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación presentada por la Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez al artículo 42. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite la modificación, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se incorporan al texto del dictamen. Gracias, Senadora Murguía.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, para presentar reservas a los artículos 18, 20 y Noveno Transitorio.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Estimadas Senadoras y Senadores:

Le comentaba un poco en broma, pero mucho en serio, al señor presidente de la comisión, que pocas veces he visto un trabajo de comisión tan bien hecho en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Pero tiene un extraordinario mérito, el producto que se va a obtener es un producto mejor que el que los Senadores empezaron a examinar, y eso se debe a la tarea realizada por todos ustedes y al comedimiento o, mejor dicho, el mérito que le está dando a cada una de las propuestas la comisión, cosa que se valora por supuesto.

En ese mismo orden debo decir, que una de las virtudes de esta ley va a ser, y se aquilatará con el tiempo, el lenguaje en el que está redactada, que es un lenguaje más sencillo y más coloquial, pero con un inconveniente. El uso de términos coloquiales puede inducir al error, y tratándose de una ley relacionada con términos judiciales, es mejor no correr ese tipo de riesgos.

Pongo algunos ejemplos que son los que menciono, el Transitorio Noveno.

En el Transitorio Noveno, por ejemplo, es el que habla del proceso de transición, es el que dice que el plan, la palabra “plan” no corresponde a este documento, debe decir: “el programa de transición”, es el término correcto para la función que se va a realizar.

Luego dice: “el programa, si aceptan la modificación, debe comprender diagnóstico, mapeo, la palabra “mapeo” no corresponde a la verdadera intención con la que los señores Senadores están redactando esta ley, debe decir: diagnóstico, ubicación geográfica”, lo que cuenta no es el papel, que es el mapa, sino lo que cuenta es el dato, la ubicación geográfica.

Otra precisión que es imprescindible hacer en este importantísimo transitorio, es la que se refiere al término “liquidación”.

Cómo y cuándo van a quedar terminados los asuntos, dice: “establecerá el programa una estrategia de liquidación”.

La liquidación corresponde a términos económicos, en este caso se trata de una estrategia de conclusión de casos, que contempla el inventario de asuntos en trámite, etcétera, etcétera, tal como está redactado.

Elimina: “no podrán ser liquidados”. Y dice: “sólo podrán concluirse cuando se hubieran agotado las investigaciones sin la identificación de la persona imputada o los procedimientos penales mediante sentencia”.

Esta es la primera modificación que propongo a esta Honorable Asamblea en el espíritu de que esta ley quede en mejores condiciones.

Por favor.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le rogamos a la Secretaría, tal y como lo ha solicitado el Senador Ramírez Marín, que ponga a consideración de este Pleno si se admite a discusión la modificación planteada en el Artículo Noveno Transitorio.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín al Artículo Noveno Transitorio. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Queda el dictamen en sus términos.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: No. Senadora, perdón, pero no hubo votación.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Perdón.

A ver, pedimos que se repita la votación porque hay dudas.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto nuevamente a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín al Artículo Noveno Transitorio. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

¿Leemos la redacción?

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: A ver.

Vamos a repetir la votación y le pedimos a la Secretaría que lea cómo quedaría la propuesta del Senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame.

Le solicito atentamente me permita explicarla brevísimamente.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Por favor.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Sustituye unas palabras, para que no lea todo el artículo porque son largos.

Sustituye la palabra “plan” por la palabra “programa”, “programa estratégico de transición”.

Substituye la palabra “mapeo” por las palabras “ubicación geográfica”.

Y sustituye la palabra “liquidación” por las palabras “conclusión de casos”.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido, por favor, al escaño del Senador Menchaca.

El Senador Julio Ramón Menchaca Salazar: (Desde su escaño) Con su permiso, señora Presidenta.

Yo les pediría, coincidiendo con la intención del Senador Ramírez Marín, en el caso de “plan y programa” estamos revisando que en el cuerpo de la ley se mencione “plan”.

En los otros dos términos estamos de acuerdo, pero por cuestiones de concordancia, en el cuerpo de toda la ley, solamente en el caso de “plan”, tendríamos que seguir con la misma redacción.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Estaría de acuerdo en que fuera parcialmente aprobada, retiro la parte correspondiente a la modificación de plan y programa.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Senador Menchaca.

El Senador Julio Ramón Menchaca Salazar: En el caso de liquidación también nos genera un problema de interpretación, y solamente estaríamos por la ubicación geográfica.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Si está usted de acuerdo, Senador Jorge Carlos.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Entonces, le rogamos a la Secretaría que ponga a consideración del Pleno si se admite a discusión la modificación planteada exclusivamente en una palabra ¿no?, la modificación de una palabra, mapeo por ubicación geográfica.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Ubicado en el Noveno Transitorio.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Con estas aclaraciones, insisto y repito, cambiando la palabra mapeo por ubicación geográfica en toda la redacción del Artículo Noveno Transitorio, consulto a la Asamblea. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se admite a discusión la modificación, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión.

Al no haber oradores inscritos, le ruego a la Secretaría someta a consideración del Pleno, en votación económica, si se admite esta modificación al Artículo Noveno Transitorio.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación presentada por el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín al Artículo Noveno Transitorio. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se acepta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se incluye en el texto del dictamen.

Continúe, por favor, Senador Ramírez Marín.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias.

En el artículo 102 constitucional se plasmó: “el Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley”.

Sin duda es la que se deriva del artículo 108 constitucional, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en su artículo 78, fracción II señala: que una de las sanciones de las faltas graves corresponde a la destitución del cargo.

Dicha ley en sus artículos 51 a 64 prevé esas faltas graves de los servidores públicos, por lo que contemplar otras en una ley de naturaleza orgánica es, a todas luces, inconstitucional.

Por tanto, la adecuación que se propone es la siguiente:

El artículo 18 en la iniciativa aprobada ya en lo general, dice: la persona titular de la Fiscalía General de la República, sólo podrá ser removida por el Presidente de la República por incurrir en alguna de las siguientes causas graves:

I. Cuando incumpla de manera reiterada con los fines institucionales previstos en el artículo 2 de esta ley; y

II. Participar, tolerar, consentir o apoyar violaciones graves a los derechos humanos o cometer violaciones graves a la Constitución.

Como proponemos, dice lo siguiente:

“Artículo 18. Causas graves de remoción de la persona titular de la Fiscalía General de la República.

La persona titular de la Fiscalía General de la República, sólo podrá ser removida por el Presidente de la República por incurrir en alguna de las causas graves contempladas en el Capítulo II del Título Tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas o por la comisión de uno o más delitos considerados como graves por la legislación penal u otros ordenamientos”.

Esta es la propuesta de modificación.

(Propuesta de modificación)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le pedimos a la Secretaría que, en votación económica, someta a consideración del Pleno la propuesta de modificación al Artículo 18.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si admite a discusión la reserva presentada por el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín al Artículo 18. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión.

Al no haberse inscrito oradores, le pido a la Secretaría que someta a consideración de este Pleno, en votación económica, si se acepta la modificación al Artículo 18.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica si admite la modificación al artículo 18. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la modificación, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se incluyen en el texto del dictamen.

Continúe Senador, por favor.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias.

Finalmente, estimadas Senadoras y Senadores, hemos hablado a lo largo de la tarde del tema de la coordinación general, y una presunta invasión de facultades o un exceso de facultades.

Estamos tratando de resolver esto a la inversa, en lugar de decir que no puede tener esas facultades, precisemos cuáles son las facultades que son únicas para el Fiscal General, es decir, las que tiene solo él, siempre y cuando no sea necesario transferirlas al coordinador general por una ausencia que fuera mayor a siete días.

Esta es la propuesta, cuáles son estas facultades indelegables como lo diría el artículo 20 de la propuesta de modificación, pues básicamente las que se refieren a las que requieren la firma implícita del Fiscal General, como es el caso de las controversias constitucionales, las acciones del artículo 105, fracción II y su ley reglamentaria, solicitar a la Corte que ejerza la facultad de atracción, los recursos de apelación, los amparos directos, las denuncias ante el órgano jurisdiccional respectivo, promover acciones colectivas, proponer a las autoridades con derecho para iniciar leyes, proyectos de iniciativa, expedir normas reglamentarias, emitir acuerdos, protocolos y lineamientos, todo esto que corresponde a la función del Fiscal General, siempre y cuando no implique una ausencia de siete días que haga indispensable que alguien cumpla con estas funciones.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le ruego a la Secretaría ponga a consideración del Pleno si se acepta a discusión la modificación planteada al Artículo 20 del dictamen.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si admite a discusión la reserva presentada por el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín al artículo 20. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén pro la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: A ver, les voy a pedir que podamos repetir la votación, porque no estaban pendientes.

Señor Secretario, le ruego repita la votación.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín al artículo 20. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: A ver, perdón, antes de la votación, sonido al escaño del Senador Menchaca.

El Senador Julio Menchaca Salazar: Pediría, con mucho respeto, que se pudiera leer cómo quedaría el texto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: ¿Lo tiene usted, Senador?

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí, señora Presidenta. Artículo 20.

El artículo 20 no tiene en este momento un correlativo, lo único que dice es, en lo referente al término de género, ahí tendría que incorporarse todo este articulado.

Artículo 20. Facultades indelegables de la persona titular de la Fiscalía General de la República.

Son facultades indelegables: 1. Promover y participar en las controversias constitucionales, que refiere el artículo 105.

2. Promover y participar en las acciones a que se refiere el artículo 105, fracción II de la Constitución y su ley reglamentaria.

Solicitar a la Suprema Corte que ejerza facultad de atracción para conocer de recursos de apelación, amparos directos, denunciar ante el órgano jurisdiccional correspondiente la contradicción de tesis a fin de que se decida lo que debe prevalecer como jurisprudencia en asuntos de materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones.

Promover acciones colectivas, promover a las autoridades con derecho a oficializar leyes, los proyectos de iniciativas para la exacta observancia de la Constitución, en el ámbito de su competencia.

Expedir las normas reglamentarias que se requieran para el funcionamiento de la Fiscalía General.

Emitir acuerdos, protocolos, lineamientos y demás normas que establezcan los requisitos y los procedimientos para la ejecución de las actuaciones, conducción del Ministerio Público.

Crear las unidades administrativas necesarias para el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General.

Adscribir orgánicamente en las unidades administrativas de la Fiscalía General previstas.

Proponer, el titular del Ejecutivo Federal, la suscripción de tratados internacionales.

Celebrar acuerdos de colaboración, convenios y demás instrumentos jurídicos.

Celebrar convenios de colaboración, acuerdos interinstitucionales.

Aprobar el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Fiscalía.

Nombrar y remover libremente a titulares de unidades administrativas que integran la Fiscalía General y determinar sus facultades.

Emitir acuerdos, protocolos, circulares, instructivos, bases, criterios.

Expedir los acuerdos en materia de recompensas.

Emitir las políticas de disposiciones generales para la aplicación de criterios de oportunidad de procedimiento abreviado, en los términos que prevea la legislación procesal penal aplicable.

Estas facultades sólo podrán ser ejercidas por el Fiscal General o por la autoridad que así determine la ley en suplencia, cuando su ausencia sea mayor a siete días.

El Senador Julio Ramón Menchaca Salazar: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido al escaño del Senador Menchaca, por favor.

El Senador Julio Ramón Menchaca Salazar: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Entiendo el espíritu de la propuesta del Senador Ramírez Marín, yo le pediría que abriera un espacio nada más para poder deslindar algunas de las facultades que están contempladas en su iniciativa que corresponden a la Consejería Jurídica, particularmente al Fiscal General.

Adecuamos lo que corresponde al Fiscal General, porque si no tendríamos que votar en contra.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Lo podemos proponer más tarde esta modificación al artículo 20.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprecio mucho la generosidad de la comisión.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Ramírez Marín.

Gracias, Senador Menchaca.

El Senador del grupo parlamentario del PRI, Mario Zamora Gastélum retiró las reservas que había propuesto.

Informo a la Asamblea, que en la lectura de la propuesta que presentó la Senadora Paredes, al artículo 6 del proyecto, misma que obtuvo la aprobación de la Asamblea, existe la necesidad de hacer una precisión para certeza de lo que se debe someter a consideración.

En consecuencia, deberemos rehacer el trámite de consulta al Pleno sobre la modificación del artículo 6 con el texto correcto, que le pido a la Secretaría que lea en este momento.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Doy lectura al artículo 6.

Dice: Artículo 6. Plan de Persecución Penal.

La persona Titular de la Fiscalía General de la República aprobará el Plan de Persecución Penal, considerando las prioridades nacionales establecidas en la política criminal para orientar las atribuciones institucionales, las prioridades en la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal y las funciones que deben desempeñar las personas que presentan servicios en la institución; así como los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, mismo que deberá ser aprobado por la mayoría de los miembros presentes del Senado de la República.

En eso consiste la propuesta de modificación.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión.

No habiendo oradores registrados, le pido a la Secretaría que en votación económica, someta a consideración del Pleno la modificación al artículo 6.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta, señora Presidenta. Aprobada esta modificación.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobada esta modificación que se incorpora al texto del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna el Presidente de la Mesa Directiva.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Tiene el uso de la tribuna la Senadora Kenia López Rabadán, para presentar reservas de los artículos 14, 19 y 20.

Vamos viendo uno por uno. 14, luego 19 y luego 20. Adelante.

La Senadora Kenia López Rabadán: Con su venia, señor Presidente.

Es evidente la necesidad de ser congruentes en esta Legislatura, y hoy quiero apelar a la libertad de las mujeres para votar, a ese poder que nos han dado los ciudadanos para estar aquí representándoles, tanto a nivel de entidad federativa como de partidos políticos.

La propuesta que hoy hago, señor Presidente, es para que se cree una Fiscalía Especializada de Protección de los Derechos de las Mujeres.

Cuando nosotros vemos el artículo 14, en el dictamen que tenemos en nuestros escaños, veremos que, por supuesto, se habla de temas electorales, de temas de combate a la corrupción, de muchos temas importantes en nuestro país, de muchos temas importantes para cada una y cada uno de los legisladores.

Sin embargo, es necesario, y lo hemos dicho aquí, y lo hemos dicho Senadoras de distintos partidos políticos, y nos han acompañado los Senadores hombres, es necesario visibilizar lo que nos pasa a las mujeres, o en su caso, lo que queremos defender de los derechos de las mujeres para que las políticas públicas, para que los presupuestos, para que los servidores públicos accionen en beneficios de ellas.

Díganme ustedes ¿Cómo no preocuparnos por salvaguardar los derechos de las mujeres? Porque hay muchos muy importantes: la trata laboral, la discriminación laboral, los feminicidios, compañeras y compañeros, la violencia hacia las mujeres en sus distintas modalidades, la violencia física, la psicológica, la económica.

¿Cómo no buscar una Fiscalía Especializada de Protección de los Derechos de las Mujeres, hoy que tenemos esa gran oportunidad?

Yo quisiera preguntarles una cosa.

¿Quién de ustedes en campaña no habló, a propósito de los derechos de las mujeres, en las comunidades, en los eventos grandes, en las casas, en todos lados? Y yo diría casi todos los días cada una y cada uno de ustedes cuando se referían a que iban a cambiar este país, en cualquier partido político y bajo cualquier ideología decíamos: “vamos a proteger a las mujeres y nos vamos a preocupar por las mujeres. Y yo, señora, estoy aquí en su casa, estoy aquí en su municipio, estoy aquí en su colonia porque la voy a cuidar”.

Todas y todos lo dijimos en campaña, no importa el partido político al que nos estemos refiriendo, todos lo dijimos.

Hoy, compañeras, es el día de materializar eso que propusimos en campaña.

Hoy es el día de visibilizar que nos estamos preocupando por las mujeres de este país.

Claro que es importante combatir la corrupción, por supuesto que sí, evidentemente es importante poner énfasis en los temas electorales, todos aquí habremos de vivir cada tres años una elección, o cada seis años, pero hoy lo que nos toca hacer es ser empáticos y, sobre todo, es ser responsables de lo que dijimos en campaña.

Por eso hoy vengo a apelar al voto libre de las mujeres de todos los partidos, de todos y cada uno de los partidos representados aquí. Que no piensen en una línea, que no piensen en una obligación de votar porque un partido o por alguien nos lo haya impuesto, hoy vengo a pedirles, compañeras de todos los partidos, que piensen en las mujeres de su distrito, que piensen en las mujeres de su entidad federativa.

Vengo a decirles a los hombres que acompañen a esas mujeres.

Hoy a esas mujeres libres, que vengan a decir aquí y que vengan a votar aquí por una Fiscalía Especializada de Protección de los Derechos de las Mujeres, porque es hoy, compañeros, no es después, es hoy cuando tenemos que dar respuesta a todas esas promesas que hicimos en campaña.

Por ello, señor Presidente, me permito solicitar que se adicione una fracción al artículo 14 que a la letra dice: "de la estructura de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de la República tendrá la siguiente estructura", y se adiciona la fracción número VII: "una Fiscalía Especializada de Protección de los Derechos de las Mujeres".

Quiero concluir, compañeras y compañeros, diciendo, levantemos esta cartulina hoy para que podamos dar respuesta a las millones de mujeres que están esperando una protección de sus derechos. Hacerlo distinto es simple y sencillamente claudicar por línea, hoy no se lo pueden permitir, compañeras y compañeros.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora, tiene más propuestas.

Dé lectura a la propuesta del artículo 14 de la Senadora Kenia López Rabadán.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señor Presidente.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Pregunte a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Señor Presidente, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva al artículo 14. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión la propuesta.

Senadora Lucía Trasviña.

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: (Desde su escaño) Con su permiso, señor Presidente. Con el respeto a la propuesta que hace la Senadora.

Quiero decirle que sí está contemplada la Fiscalía de Derechos Humanos. Dentro de esa Fiscalía está precisamente la protección de derechos humanos de mujeres, de niñas, de niños, de adolescentes, trata de personas, sí está contemplado.

Y se sustenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos humanos son para todos los seres humanos que habitamos este planeta, así es.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Tiene el uso de la palabra al Senadora Xóchitl Gálvez.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: (Desde su escaño) A ver, yo quiero hacerle un llamado a mi Senador de Hidalgo, él mejor que nadie sabe la violencia que hay contra las mujeres, no sólo en Hidalgo, en todo el país, la mayor demanda en este momento por los feminicidios, no podemos permitir que nos engloben en otro artículo.

Queremos una Fiscalía para proteger los derechos de las mujeres.

No más feminicidios.

No más mujeres violentadas.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Tiene el uso de la palabra la Senadora Malú Micher.

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: Gracias, señor Presidente.

A ver, no vengamos aquí a rasgarnos las vestiduras por los derechos humanos y a decir que ustedes.

A ver, no compañeras, compañeros, no, con todo respeto a todas y a todos, con todo respeto a todas y a todos les digo, que sería un error terrible que no hubiese aparecido en el texto de esta ley. Y no quieran hacer pensar a la gente que no está incorporado.

Sí está incorporado con todas sus letras, y lo leo textual:

"En el artículo 14 habla de la estructura de la Fiscalía General de la República y habla de las diferentes estructuras".

Siguiente párrafo dice: "la Fiscalía General de la República se apoyará en un Consejo Ciudadano, etcétera, etcétera".

Y luego dice: "la Fiscalía de Derechos Humanos tendrá a su cargo las Fiscalías…

¡Ah!

¿Cómo dije? Fiscalías de Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres.

¿Cómo? Derechos Humanos de las Mujeres, lean, niñas, niños y adolescentes. Aquí está en el párrafo, no hay ninguna omisión de la ley, punto y coma.

¡Qué bárbaras!

No nos traten como si no existiera la redacción y no nos traten para incorporar una redacción; no, señoras, no nos equivoquemos, aquí está.

Y luego dice, punto y coma: "de trata de personas, de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, de migrantes, de investigación de tortura, de las cuales todas están las mujeres".

Entonces, no me vengan a mí a decir que ahora resulta que no hay. Sí se menciona y se menciona muy bien, y luego dice: "y todas aquellas Fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General de la República"

Entonces, que nos vengan ahora con que no aparece en el cuerpo, uno, sí aparece; dos, Morena no ignora los derechos humanos de las mujeres, no habríamos avalado esta redacción jamás, al contrario, muchas de las compañeras y compañeros que venían redactando esto, no lo habían incorporado, y se los digo, nos costó mucho trabajo incorporar esto porque el argumento de muchas instituciones, de organizaciones, fue que como no servía la Fevimtra, había que sacarla y la volvimos a incorporar, una Fiscalía Especializada para los Derechos Humanos de las Mujeres.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Tiene la palabra el Senador Samuel García Sepúlveda.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: (Desde su escaño) Señor Presidente, pues de parte del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, y felicitamos a las Senadoras, sí queremos textual, en el artículo 14 una fracción que diga para las mujeres, no ahí en un cajón de sastre, al final de un párrafo, y ojo, esto no lo dicen 30 millones de mexicanos, lo decimos todos los mexicanos y mexicanas.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Con base en el artículo 202 han hablado dos oradores en contra y dos oradores a favor.

Tengo que preguntar si el asunto ha sido suficientemente discutido, si votan que sí, ahí se queda, si votan que no, continúo dando la palabra.

Pregunte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se encuentra suficientemente discutido.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la Senadora Olga Sánchez Cordero.

La Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Como lo ha señalado mi compañera Malú, efectivamente había, cuando redactamos esta fracción y este artículo concretamente, había oposición, había oposición de los redactores, incluyendo a muchos que estaban participando, porque decían que la Fiscalía no había servido.

Nosotros textualmente dijimos: no solamente queremos una Fiscalía que proteja los Derechos Humanos de las Mujeres, sino que por primera vez en la historia se está contemplando una Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes como no había habido nunca, nunca.

Y entonces se contempla la Fiscalía de los Derechos Humanos de las Mujeres, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de trata de personas que tampoco había, de desaparición forzada, de desaparición cometida por particulares, de periodistas, de personas defensoras de derechos humanos, de migrantes, de investigación de tortura y todas aquellas Fiscalías, órganos, unidades que determine la persona, porque ahí está la flexibilidad del Fiscal General de la República.

Se trató de contemplar cualquier cantidad de personas en estado de vulnerabilidad y precisamente por eso se contempló en este artículo la Fiscalía de Derechos Humanos que tendrá estas Fiscalías y por primera vez en la historia de niños, niñas y adolescentes.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Tiene la palabra el Senador Mario Zamora.

Sonido en el escaño del Senador Mario Zamora, por favor.

El Senador Mario Zamora Gastélum: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Y con todo respeto para todos, creo que lo compartimos, lo compartimos y habemos hombres que como bien lo dijo nuestra compañera Kenia, nos comprometimos en campaña a defender a las mujeres, primero a las mujeres y coincido con mi compañero Samuel, no en un cajón de sastre, primero y antes que todos. ¡Por las mujeres!

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Tiene el uso de la palabra el Senador Víctor Castro.

El Senador Víctor Manuel Castro Cosío: Compañeras y compañeros:

Con todo respeto me dirijo a ustedes, porque de verdad se habían tardado, se habían tardado en sacar lo que llevan por dentro, se habían tardado porque no encontraban manera para seguir siendo omisos, para seguir olvidándose de su historia.

Hace apenas unos días aquí en este Senado aprobaron que tomara protesta un agresor de mujeres y no dijeron nada, es una vergüenza que ahora en su chicanada legislativa y en su desesperación.

Miren, la Fiscalía va, a pesar de todos estos trucos, de estas, se habían tardado, toda la tarde no encontraban fórmula, alguien les armó desde afuera una fórmula en la que dijeron: “Por aquí podemos poner en crisis”. No, la gente los tiene bien ubicados, los responsables de los feminicidios en muchos estados son gobiernos de ustedes que no quieren declarar la alerta de feminicidios, se convierten de pronto, encontraron un resquicio. No compañeras y compañeros, he venido a esta tribuna a decir, seamos congruentes, quieren 40 Fiscalías por delito, quieren Fiscalía de trata, quieren Fiscalía de mujeres.

Sí, esta noche, claro que esta noche hay Fiscalía Kenia, esta noche se va a votar la Fiscalía donde ustedes cuatro años tardaron en ser cómplices del delito de la impunidad.

Ahora nos dijeron hoy en la mañana, todos los partidos son corruptos, no, dense cuenta que este país cambió, y saben qué, los tenemos bien ubicados, quienes tienen a la situación jurídica en la que nos hayamos los mexicanos, son ustedes, la PGR no funciona porque fueron cómplices del saqueo, del asesinato, de la violencia que hay en este país, no vengan como blancas palomas cuando hay miles y miles de delitos, millones de delitos declaró el dirigente del PAN hoy, es la realidad de su país hoy.

¿Y saben qué? Se van a quedar en esa condición solamente de espectáculo, ya el Senado no está para espectáculos, estamos para tomar medidas profundas, que vengan a sustituir lo que ustedes irresponsablemente dejaron.

Ahí están los crímenes, ahí están los 43, ahí están las víctimas y ustedes encontraron una chicanada legislativa para encontrar el espectáculo, ya no van a hacer más espectáculo, el día de hoy México, con toda la responsabilidad de lo que hoy somos capaces de hacer, tendrá Fiscalía.

Hace unos días, aquí en este recinto, hoy que se rasgan las vestiduras, de verdad, porque encontraron eso, qué bueno, a estas horas de la noche les dijeron: "encuentren algo" porque hoy han quedado, de nuevo, clarísimas las posiciones.

Los que quieren que continúe este país como estaba, pues saben qué, dense cuenta que este país cambió, dense cuenta que se transformó, están tratando con gente decente, con gente que quiere que este cambio haya en el país lo que ustedes le negaron, lo saquearon, le robaron, les hicieron a esta nación el daño y todavía no están contentos.

Dentro de unas semanas este país, con Andrés Manuel López Obrador, va a transitar por el país de la justicia, de la igualdad, de la decencia que ustedes le negaron por muchos años.

No va a haber ninguna oportunidad más para que la impunidad y la complicidad de ustedes, que se juntan hoy la triple alianza moderna, hoy la triple alianza moderna aparece con tratar de apagar lo que el pueblo reclama, el pueblo reclama justicia, paz con dignidad.

Eso tendremos.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Castro Cosío.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Claudia Anaya.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Muchas gracias, señor Presidente.

No queramos engañar a la gente con discursos fuera de lugar, las reservas están presentadas desde que empezó la discusión del dictamen, las reservas están presentadas desde hace horas, y desde hace horas hicimos visible que faltaba una Fiscalía Especializada para los crímenes que se cometen contra las mujeres.

No es lo mismo, y discúlpenme, meter todo al cajón de los derechos humanos, el mismo dictamen dice: "que las Fiscalías Especializadas tendrán peritos especializados".

¿De qué se trata esto?

No es lo mismo una desaparición de un hombre que una desaparición de una mujer. No nos desaparecen por las mismas razones, se necesitan médicos, químicos, forenses especializados en temas de género.

Los crímenes contra la mujer necesitan una investigación especializada, y no lo digo yo, lo dice la sentencia de Campo Algodonero, la sentencia de Campo Algodonero le pide a México que los crímenes que se cometen contra las mujeres se traten con peritos especializados, se traten con perspectiva de género.

Los derechos humanos no tienen perspectiva de género, son generales y son universales, por eso nacen las Fiscalías Especializadas para tratar asuntos específicos y puntuales.

Todos y todas los aquí presentes, estoy cierta, hicimos el compromiso de proteger a las mujeres.

Justamente porque somos un país con una alta incidencia en feminicidios, es importante que exista una Fiscalía con peritos especiales, que coadyuve a las investigaciones en lo local, que vaya generando los procedimientos y las técnicas de investigación.

De ninguna manera pueden meter los crímenes contra la mujer al "cajón de sastre" de los derechos humanos.

Está bien que exista una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, pero esta Fiscalía tiene todo, tiene mujeres, niñas, niños, adolescentes, trata de personas, desaparición forzada cometida por particulares, de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos, de migrantes, de investigación, de tortura y de todas aquellas otras que a los órganos de la Fiscalía le competan.

Queremos una especializada para las mujeres, Fiscalía Especializada para crímenes contra las mujeres.

Yo respaldo la propuesta de Kenia, porque hace unas horas yo metí una reserva similar, una reserva también al artículo 14 para incorporar una Fiscalía Especializada en delitos o en crímenes contra la mujer y trata.

Por eso estoy contigo, Kenia, pero principalmente estoy con todas las víctimas de feminicidio, estoy con las víctimas de trata, estoy con las mujeres.

Vamos por una Fiscalía Especializada, compañeros.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se ha dado una segunda ronda de dos oradoras y oradores a favor y en contra.

Así es que quiero pedirle a la Secretaría que vuelva a consultar si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se encuentra suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Pregunte si es de aceptarse la modificación propuesta.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la modificación propuesta.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sí, Senadora Kenia.

Sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Kenia López Rabadán: (Desde su escaño) Para la discusión me parece que están absolutamente claras las posiciones de cada grupo parlamentario.

Por respeto, señor Presidente, una vez que una servidora concluyó, seis Senadores nos paramos a pedir, una, que la votación fuera por tablero, le pediría que respetara esa solicitud porque, además de que es evidente la posición de cada grupo parlamentario, me parece que es necesario dejar en claro para la ciudadanía la votación de esta noche.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Bien.

Ya se votó si el asunto está suficientemente discutido y ya está suficientemente discutido.

Vamos a proceder a la siguiente votación, que es sobre si se aprueba la modificación propuesta.

En esa se pide el tablero.

Ábrase el tablero hasta por tres minutos por favor.

(Se recoge la votación)

Senadora Margarita Valdez, sí la anoté en la lista, aquí la tenía anotada a usted para hablar en contra.

Estaba Antares Vázquez, Marcela Mora y usted, sin embargo, ya no pude darle la palabra porque se votó que estaba suficientemente discutido.

Sonido en el escaño de la Senadora Margarita Valdez, por favor.

La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: (Desde su escaño) A ver, ¿tienen miedo de que yo hable?, pregúnteles, si dicen que sí tienen miedo de que yo hable, no hablo.

¿Tienen miedo?, bueno, permítanme.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora, ¿para qué efecto?

La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Nadamás para dar una opinión.

En este país es muy difícil ser mujer.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Pero ya se votó. Está suficientemente discutido.

La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: (Desde su escaño) Permítame, no lo voy a discutir, nada más les quiero decir a las mujeres que es muy difícil ser mujer, porque si no es una por una cosa es por otra, pero siempre estamos sometidas a la voluntad de los hombres, y este es un caso igual, no están preocupadas por las mujeres campesinas, no están preocupadas por las mujeres asesinadas, están preocupadas porque no nos han podido ganar una sola votación, y ahorita se las vamos a volver a ganar.

Gracias, señor Presidente.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Se emitieron 47 votos a favor, 52 en contra y cero abstenciones, por lo cual, no se acepta la modificación al artículo 14.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Kenia López Rabadán, tiene la palabra para exponer la propuesta de modificación del artículo 19.

La Senadora Kenia López Rabadán: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo lamento diferir muchísimo con lo que se ha dicho aquí, a propósito de la visión que en esta ley se está plasmando para las mujeres. Lo hemos dicho muchas veces, lo que no se visibiliza, no se puede corregir.

Qué lamentable que hoy muchas mujeres empoderadas reciban línea, y lo digo de verdad, desde el fondo de mi corazón.

Qué lamentable porque no es fácil llegar a un escaño, a mí me costó 22 años para estar aquí parada. Y es increíble que después de tanta lucha, de tanto esfuerzo, muchas de mis compañeras hoy tengan que recibir una línea en contra de lo que piensan y de lo que creen.

Vuelvo a apelar en este mismo tema.

En el artículo 19 y en el artículo 20 están concentradas en la ley, en el 19 las facultades de la persona titular de la Fiscalía General de la República, y en el artículo 20 la Coordinación General de la Fiscalía General de la República.

La reserva que presento hoy ante ustedes es transferir del artículo 20, que habla de la Coordinación General, al artículo 19 que establece las facultades del Fiscal o de la Fiscal.

Dice: Tener a su cargo la unidad especial de género y violencia contra la mujer que tendrá como objetivo la institucionalización de la perspectiva y transversalidad de género en todas las áreas de la Fiscalía, a través de la incorporación del enfoque de igualdad y no discriminación a la cultura institucional a través del diseño, planeación, presupuesto, ejecución y evaluación de las políticas de la Fiscalía, y será responsable de coordinar y gestionar acciones con todas las áreas de la Fiscalía General de la República para incorporar en su actuación los principios rectores de la igualdad sustantiva y de oportunidades entre mujeres y hombres.

Déjenme decirles, compañeras, que el talentosísimo que hizo esta ley, ¿por qué no le pone esta facultad al segundo de abordo, y no al primero?

¿Por qué no dejárselo al subordinado y no al Fiscal?

Porque no solamente no visibiliza una Fiscalía especial para mujeres. No, seguramente él encuentra, él o ella, quien la haya discutido, encuentra que las mujeres no somos suficientemente importantes para darnos una Fiscalía. No sólo eso, sino además establece que la unidad de género vaya al subordinado y no al Fiscal.

Perdón, es que es increíble que la Ley Orgánica que están proponiendo para la administración pública, hable sí, de transversalizar los temas de género con los titulares, y no esta ley, es increíble que lo hayan hecho de manera tan desaseada, y desafortunadamente otra vez en contra de las mujeres.

La única propuesta, la sencilla, la fácil, la que no les va a violentar seguramente en ningún acuerdo, compañeros, solamente es que transfieran del artículo 20 al artículo 19 esta facultad.

Me parece que no tiene que ver con ideologías, no tiene que ver con principios de partidos, tiene que ver, de verdad, se los digo con congruencia, no puede ser que le dejen esta unidad de género a el subordinado del Fiscal y no al Fiscal. En verdad no entiendo por qué.

Ojalá, ojalá y lo puedan valorar.

Ojalá y puedan acompañar esta reserva. Si no es así, yo lo entiendo; si no es así, seguramente han recibido línea; si no es así, las mujeres, para el partido que hoy mayoritea en esta Cámara, simple y sencillamente no importa.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Olga Sánchez Cordero.

Pregunte la Secretaría si se admite la proposición a discusión.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión el artículo 19. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente. Sí se admite a discusión.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión la propuesta.

Se ha inscrito la Senadora Olga Sánchez Cordero, a favor.

Pregunto si hay alguien en contra.

Si no hay nadie en contra, sólo pueden hablar dos a favor.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Olga Sánchez Cordero, y posteriormente la Senadora Xóchitl Gálvez.

La Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Primero, no tenemos ningún inconveniente en lo que acaba de decir mi compañera Kenia, de transferir este párrafo del artículo 20 al 19, no hay ningún problema.

A ver, pero sí quiero… ¿Tengo cinco minutos señor Presidente, o cuántos minutos tengo?

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sí, cinco minutos.

La Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Miren ustedes.

Este modelo de procuración de justicia para grupos vulnerables, que anteriormente sí existían estas Fiscalías Especializadas, yo pienso que como una respuesta política a las exigencias de la sociedad civil.

Sin embargo, ese esquema, en mi opinión, no fue efectivo para investigar delitos por razón de género, y tan es así, que las sociedades de la sociedad civil que nos acompañaron en la redacción nos decían: “Es que no sirve, no sirve”, porque muchas veces estos tienen conectidad con otros delitos de competencias de otras Fiscalías, generalmente eso sucedía. Y más allá de garantizar que resuelvan los delitos, se quedaban imposibilitados para conocer el fenómeno completo.

Por eso hoy la ley prevé un modelo nuevo que crea unidades flexibles, que permite crear tantas unidades flexibles para investigar fenómenos criminales relacionados con el género, niños, adolescentes, migrantes, trata, entre otros, y entre otros como se necesite.

Por eso es que nosotros establecimos y redactamos en esta ley, y esto lo redacté yo personalmente, que es momento de investigar en serio estos delitos de grupos vulnerables.

¿Por qué? Porque muchas veces las competencias locales y federales se entrelazaban y acababan por no investigarse. Por eso la redacción de estos artículos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Xóchitl Gálvez.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Muchas gracias.

Primero quiero agradecer a la Ministra Olga Sánchez Cordero, su disposición a que esta unidad de género pase directamente al Fiscal.

Ya ve cómo, don Víctor, no es un tema de chicanadas. Las mujeres no somos chicanada de nadie.

Realmente estamos aquí porque queremos hacer mejor las cosas, y creo que podemos dialogar, dialogar y seguir dialogando. Nunca nos cansemos de dialogar, y creo que ustedes como mayoría nunca se deben de cansar de escuchar, así estemos aquí hasta las 3 ó 4 de la mañana.

Simplemente precisarle a la Ministra, con todo respeto, que las mujeres no somos grupos vulnerables. Hay mujeres en condiciones de vulnerabilidad, pero yo como mujer no me condiciono.

Gracias.

La Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: (Desde su escaño) Para alusiones, señor Presidente.

El Presiente Senador Martí Batres Guadarrama: Para alusiones.

Sonido en el escaño, por favor, en el que se encuentra la Senadora Sánchez Cordero.

La Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Yo decía a estos grupos de niñas, niños y adolescentes. Pero sí quiero decir algo.

Una mujer cuando es violentada, no tú, no yo, una mujer cuando es violentada, por supuesto está en una vulnerabilidad que hay que protegerla reforzadamente.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: (Desde su escaño) Por eso.

Si precisamente el lenguaje, estoy de acuerdo. Mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Disculpe, Senadora, no fue una pregunta, sino que habló por alusiones.

Su turno ha terminado, su intervención ya terminó.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: (Desde su escaño) Para hacerle una pregunta a la oradora.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Tiene una pregunta la Senadora Edith Anaya.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: (Desde su escaño) Gracias.

Senadora, ¿Por qué cree usted que estando tan convencidas de este nuevo modelo, tanto la Senadora Olga Sánchez Cordero como la Senadora Malú Micher, por qué cree que no votaron en el tablero ahorita que hicimos la votación?

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Bueno, yo aquí tengo que confesar que fui una mujer violentada muy fuerte desde mi casa. De verdad, el alcoholismo, la violencia hacia las mujeres lo viví en carne propia.

Por eso me queda claro que sí hay que visibilizar el tema, pero quizá las condiciones y el modelo yo lo respeto, y creo que están convencidos que si nos meten en ese cajón va a funcionar.

Vamos a verlo con el tiempo. Yo daría el beneficio de la duda, pero sí creo que hubiera sido muy importante para las mujeres crear una Fiscalía específica, pero creo que tiene que ver también un poco la condición en la que te toca crecer y vivir, pero bueno.

Muchas gracias.

La Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: (Desde su escaño) Para alusiones.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: No hice ninguna alusión, por cierto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Xóchitl Gálvez.

Para alusiones, tiene el uso de la palabra el Senador Víctor Castro.

El Senador Víctor Manuel Castro Cosío: Compañeras y compañeros:

Primero queremos expresar con toda claridad que la propuesta que votamos en lo general está sustentada, yo soy parte de la Comisión de Estudios Legislativos, estuve en uno de los últimos debates.

Leí con atención, pregunté con atención a varios actores. ¿Por qué no coincidíamos y qué era lo que había qué hacer para coincidir y evitar cualquier tipo de discusión que nos pusiera en esta confrontación?

La había evadido, pero vuelvo a repetirles. Lo más importante para la cuarta transformación es la inclusión, son las y los. Por eso aceptamos el gran desafío de evitar mantenernos con una PGR descabezada.

Duraron cuatro años en preocuparse por esto.

Duraron años sin tomar el tema, cuando eran esa mayoría, que ahora nosotros tenemos, y no lo hicieron, no lo hicieron.

Y hoy, no solamente es ese tema, sino se sienten como lastimados cuando ustedes por décadas…

¿Por qué creen que nos irritamos? Por el agravio tan grande que ha habido en este país por sus omisiones.

¿Saben quiénes están en la cárcel? Mujeres indígenas, mujeres que abortaron y que aquí algunas y algunos orgullosamente dimos la batalla contra esta ultraderecha que se ahoga en sí misma ahora y patalea gritando lo que encuentra para achacárselo a Morena.

Va a ser muy difícil que lo que no hicieron, y voy a repetir algo que lo acabo de sostener, en esta vida se actúa por complicidad, por omisión o por convicción, y también por intereses muy privados, particulares, respetables de todos, pero no nos quieran venir el día de hoy con sus fotos del tablero a chantajear, no.

Se lo digo al pueblo de México, vean las fotos.

Y yo voté porque estaban, y lo vuelvo a repetir, incluyendo un tema de última hora cuando tuvimos tiempo para haberlo platicado, discutido y analizado con la oportunidad debida.

Hoy por la tarde salió a relucir lo que no habían podido hacer en las comisiones.

Yo solamente quiero decirles que alguien decía que “le daba tristeza la ley”. No, no es un asunto de tristeza.

La omisión, cuando ustedes hace apenas unos meses fueron mayoría, cuando ustedes hace apenas unos meses fueron responsables de la seguridad pública, le fallaron a este país…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: ¿Acepta una pregunta de la Senadora Kenia López?

El Senador Víctor Manuel Castro Cosío: La acepto con gusto.

¿Quién me la quiere hacer?

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Senadora Kenia López.

El Senador Víctor Manuel Castro Cosío: Adelante, Kenia, yo te respeto y respeto tu lucha.

La Senadora Kenia López Rabadán: (Desde su escaño) Muchas gracias, Senador.

Quiero decirles que fuimos compañeros legisladores Diputados juntos.

Qué lástima que la Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género pida que no aceptes mi pregunta.

Gracias por tu generosidad.

Déjame decirte, querido Víctor, que conozco tu trabajo en tu estado y conozco, por supuesto, muchas cosas en las que podemos disentir y lo hemos hecho siempre.

Solamente quiero decirte si tú acudiste a campaña diciendo que ibas a proteger a las mujeres.

Me adelanto a tu respuesta y sé que sí.

Y mi segunda pregunta es.

¿Si sí, por qué no poner con nombre y apellido una Fiscalía para los derechos de las mujeres, por qué no?

Muchas gracias.

El Senador Víctor Manuel Castro Cosío: A ver, Kenia, con toda serenidad.

En primer lugar, a mí ese lenguaje de “vamos a proteger a las mujeres” no se me ha dado. He luchado codo a codo con muchísimas mujeres a través de mi vida para que haya de manera plena derechos plenos para mujeres y hombres, no he tenido esa idea paternal de “vamos a protegerte”. No, patriarcal incluso; no, yo no tengo esa idea. Tengo la idea muy clara de que debe de haber derechos plenos para hombres y mujeres en un país libre.

Que realmente haya lo que modernamente se ha llamado ahora en lugar de lo que nosotros dijimos.

La democracia, a alguna compañera le va a resultar conocida esta frase: “la democracia empieza en casa”.

Yo levanté esos carteles, los pegué una y otra vez, no se me olvida mi información. Es lo que menos quiero que se me olvide, mis principios.

Y nuestros principios siempre, desde que tengo esta convicción, fueron que no podía haber justicia mientras no se tomaran en consideración los derechos plenos de la mujer. Y lo sigo sosteniendo, no solamente en sus libertades individuales, yo estoy convencido en el derecho de la mujer a elegir si tiene o no hijos; no como otros y otras que para algunas cosas son defensoras de la mujer y en sus principios partidarios se oponen a los derechos plenos de la mujer.

Yo no voy a medias, voy de todo.

Y también defiendo la libertad de las lesbianas y de los homosexuales, para que les quede claro de una vez mi posición desde hace años absolutamente.

Y no como otros partidos que se dan golpes de pecho y tienen un doble discurso sus militantes, su práctica y se oponen a grito abierto a los derechos plenos de las mujeres.

Esa es mi respuesta.

Y saben por qué la otra, compañeras y compañeros, porque estoy convencido que en este dictamen se incluyó plenamente los derechos de las mujeres. No me sorprendieron ni nos van a sorprender, está en este dictamen incluida la mujer.

¿Saben para quién ha sido invisible? Para quienes tienen otros intereses políticos de que no haya Fiscalía, esa es la realidad. Y están buscando por donde quiera a ver qué encuentran.

No. Yo lamento mucho que en esta lucha no digan la verdad. Es una lucha política, es una visión política, y por supuesto, es una visión ideológica y es una visión ideológica porque durante décadas le dieron a este país de verdad muy duro en un elemento fundamental.

Miren, encarcelados de conciencia, que no lo mencioné en mi discurso pasado.

¿Saben quiénes son responsables?

¿Cuántos compañeros nuestros no los encarcelaron, no los asesinaron sus partidos o los responsables de sus gobiernos?

¿Cuántos compañeros míos no cayeron encarcelados por luchar por democracia sindical?

¿Cuántos más despidieron?

¿A cuántos no reprimieron?

Compañeros, claro que queremos que haya una Fiscalía que ya no permita esto. Por eso estamos aquí, por eso esa larga lucha.

Ya voy a terminar.

Por eso esa larga lucha incluye a las mujeres y este dictamen incluye a las mujeres de todo el país.

Y va a haber una Fiscalía que traiga paz y justicia al país.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La modificación propuesta al artículo 19 afecta al artículo 20, pues plantea trasladar el último párrafo de la fracción XXIV del artículo 20 al artículo 19, para convertirse en la fracción XXIII de este último artículo.

Consulte la Secretaría si son de aceptarse las modificaciones a los artículos 19 y 20.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las modificaciones a los artículos 19 y 20. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta la modificación, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se acepta la modificación. Y en consecuencia, se incorpora al texto del dictamen.

Continuamos con la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del grupo parlamentario del PAN, para presentar propuestas de modificación a los artículos 20 y 63.

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Con la venia de la Presidencia. Cmpañeras y compañeros Senadores:

Vengo a someter a la consideración de la Asamblea, una reserva relativa al artículo 20 donde se crea la figura del Coordinador General de la Fiscalía General de la República.

Esta figura que se busca crear, digo, además de lo que ya hemos planteado aquí, lo que más nos preocupa dentro del Partido Acción Nacional, son todas las facultades que le dieron y que repito, son mayores que las que tiene el propio Fiscal General.

Entones a nosotros nos preocupa que la figura del Fiscal General únicamente sea una figura decorativa y que sea realmente este coordinador general al que hemos denominado “fiscalito”, el que pudiera realmente realizar todas las actividades y facultades inherentes realmente al Fiscal General y no a este coordinador general.

Por ello, voy ir leyendo las propuestas que tenemos respecto a cada una de las fracciones.

En el texto del dictamen, en el artículo 20 que dice:

La Coordinación General de la Fiscalía General de la República tendrá las facultades siguientes:

Fracción I. Suplir a la persona titular de la Fiscalía General de la República en sus ausencias.

El Partido Acción Nacional está proponiendo que agreguemos que las ausencias sean temporales de hasta tres meses, de tal manera que no se vuelva una figura que de manera permanente se encuentre supliendo a la persona titular.

Fracción II. La posibilidad de representar a la Fiscalía General de la República en las relaciones institucionales con otras entidades u órganos de gobierno, locales, nacionales, federales e internacionales, nuestra propuesta del Partido Acción Nacional, es eliminarla definitivamente, puesto que esto sí debería ser una facultad exclusiva del Fiscal General de la República.

Respecto al artículo 20, en la fracción VI comenta: “Desarrollar y ejecutar las políticas de transparencia y rendición de cuentas, y atender las solicitudes de información pública”.

La propuesta del Partido Acción Nacional es que sea vigilar el cumplimiento de las políticas de transparencia y rendición de cuentas. Creemos que el desarrollar y ejecutar estas políticas, debería ser facultad exclusiva del Fiscal General.

De igual forma proponemos que la fracción VII que a la letra dice: “Atender las quejas, recomendaciones y solicitudes de los organismos públicos de derechos humanos, nacionales e internacionales, así como las quejas presentadas por las personas”.

Realmente nuestra propuesta es que sean canalizadas a las áreas correspondientes de la Fiscalía General, que no sea atender a estas quejas.

El mismo artículo 20 en la fracción VIII dice: “Ejecutar las extradiciones, así como las acciones relacionadas con la cooperación internacional”.

Definitivamente eso no debería ser una facultad del coordinador general, por lo cual nosotros estamos proponiendo que esta fracción de manera textual se traslade al artículo 31, que habla de la coordinación de investigación y persecución penal, creemos que la ejecución de las extradiciones realmente debería ser una facultad de esta coordinación de investigación y no de la coordinación general.

Respecto a la fracción IX que dice: “Formalizar los convenios de colaboración con el exterior para el adecuado funcionamiento del Mecanismo de Apoyo Exterior y las demás funciones que se requieran”.

De igual forma, nosotros creemos que la formalización de dichos convenios, deberá de ser facultad exclusiva del Fiscal General y no del Coordinador General, por lo que proponemos de manera específica, que esa

únicamente coadyuvar en la formalización de los convenios de colaboración con el exterior para el adecuado funcionamiento del mecanismo de apoyo exterior.

Respecto a la fracción X, a la letra dice: “Representar legalmente a la Fiscalía General de la República, en los asuntos jurídicos de acciones promovidas en su contra o por la propia Fiscalía”, la propuesta del Partido Acción Nacional es que sea representar legalmente a la Fiscalía General de la República en los asuntos jurídicos de acciones promovidos en su contra o por la propia Fiscalía, así como también ante las autoridades administrativas, judiciales y laborales, esto es únicamente un tema de técnica legislativa y con la propia congruencia respecto a otra fracción que habla de ello, creemos que lo podemos agrupar únicamente.

En la fracción XIII, a la letra dice: “Coordinar y colaborar con entidades gubernamentales nacionales e internacionales para la implementación de los esquemas de seguridad de víctimas, testigos y demás sujetos procesales.

A nosotros, definitivamente esta fracción nos parece que es un exceso respecto a las facultades que tiene este propio coordinador general.

En la fracción XIV dice: “Resolver los conflictos que se susciten en el ámbito administrativo con motivo de la interpretación o aplicación de la presente Ley y su Reglamento, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera y demás normatividad institucional, así como presentar opinión a la persona titular de la Fiscalía General de la República, en los casos no previstos, para que resuelva lo conducente en el marco de sus facultades”.

Respecto a este caso nosotros pensamos que debería ser coadyuvar en la resolución de los conflictos que se susciten en lugar de resolver los conflictos de manera absoluta, puesto que también ésta debiera ser una facultad exclusiva de la Fiscalía General y no de este súper coordinador.

Y, respeto a la fracción XV, dice: “Conocer y resolver sobre las solicitudes de atracción, que el Fiscal General le encomiende”.

Esta fracción, nosotros creemos también que debiera de irse al artículo 31 y debiera ser una facultad de la Coordinación de Investigación y Persecución Penal, para eso es esta Coordinación de Investigación y Persecución Penal y definitivamente no tendría nada qué hacer con las facultades del propio coordinador general.

¿Podríamos ir votando una por una?

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Ruego a la Secretaría, ponga a consideración del Pleno si se admite a discusión la propuesta sobre el artículo 20 que ha hecho la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román.

Le pedimos que lo lea, por favor.

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Le pediría que fuera una por una, porque es por fracción.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: ¿Por cada una de las fracciones?

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Sí, porque cada una tiene una temática especial.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: ¿Cuántas fracciones son?

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Si quiere le voy diciendo una por una, primero sería sobre la fracción I, que es suplir a la persona titular hasta en ausencias hasta por tres meses.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: La propuesta de la Senadora es una adición la fracción I.

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Quedaría de manera textual: Suplir a la persona titular de la Fiscalía General de la República en sus ausencias temporales de hasta tres meses.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Esa es una adición a la fracción I del artículo 20.

¿Es correcto?

Por favor, señora Secretaria, someta a consideración del Pleno si se admite a discusión la adición a la fracción I del artículo 20.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Solamente una precisión el material que recibió el Presidente de la Mesa no coincide con lo que la Senadora está presentando, pero con mucho gusto someto a consulta de la Asamblea.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación del artículo 20 en la fracción I. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se somete a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión la fracción I del artículo 20.

Al no haber registrado ningún orador, solicito a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación del artículo 20 en su fracción I.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación al artículo 20, fracción I. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta la modificación, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se incorpora el texto al dictamen.

Continúe, Senadora, por favor.

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Sería votación sobre la, suprimir la fracción II, que hablar de representar a la Fiscalía General de la República en las relaciones institucionales con otras entidades u órganos de gobierno locales, nacionales, federales e internacionales.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si acepta la discusión de la modificación planteada en la fracción II del artículo 20.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión que se elimine la fracción II del artículo 20. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Queda el texto original.

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Continúo, sería, la otra modificación es respecto a la fracción VIII, que habla de ejecutar las extradiciones, así como las acciones relacionadas con la cooperación internacional.

La propuesta que tenemos es que esta fracción de manera completa, de manera literal se pase al artículo 31, que es la que habla de las facultades de la Coordinación de Investigación y Persecución Penal.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: ¿Qué fracción, Senadora?

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Es la fracción VIII.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Solicito, a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si la fracción VIII del artículo 20 se traslada al artículo 31 del mencionado dictamen para su discusión.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación del artículo 20 en su fracción VIII, para que sea incorporada en el artículo 31. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se admite la discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión esta adición, esta modificación.

Por favor, sonido al escaño del Senador Israel Zamora.

El Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Creo que esta propuesta no sería procedente si tomamos en consideración que acabamos de votar que no se eliminara la fracción II del artículo 20, es decir, si la coordinación general es la que va a tener la facultad para representar a la Fiscalía en las relaciones institucionales con otros gobiernos extranjeros, creo que no, internacionales, no podríamos pasarla a la facultad de otra coordinación.

Ese es mi punto de vista.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: ¿Puedo comentar?

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Estamos en este momento en la discusión, si hay alguien más que se anote para hacer la discusión.

La misma proponente, por favor.

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Lo que pasa es que son, serían dos temas distintos: uno es representar a la Fiscalía General en las relaciones institucionales con otras entidades, y un tema sí por separado totalmente es el de ejecutar las extradiciones, o sea, no se encuentran, no se contrapone una con la otra.

Digo, si se mantiene la fracción II puede continuar haciendo estas representaciones, sin embargo, no tendría la facultad de ejecución de las extradiciones debido a que creemos que sí, ésta sí debiera ser una facultad exclusiva, y por algo existe la propia Coordinación de Investigación y Persecución Penal para que ellos sean los encargados de ejecutarla.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Si hay más oradores inscritos, si no hay más oradores inscritos, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación del artículo 20 que ha propuesto la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, consistente en que la fracción VIII se traslade al artículo 31.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación del artículo 20 en la fracción VIII para pasar al artículo 31. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta la modificación, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se incorpora al texto del dictamen.

Continúe Senadora, por favor.

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Gracias, señora Presidenta.

En la fracción X del artículo 20, el texto del dictamen dice: "representar legalmente a la Fiscalía General de la República, en los asuntos jurídicos de acciones promovidas en su contra o por la propia Fiscalía".

Nuestra propuesta es dejar intacta esta redacción y agregarle "así como también ante las autoridades administrativas, judiciales y laborales".

No es un tema nada más de ampliar el propio rango de acción respecto a esta representación que va a tener la coordinación.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión la adición a la fracción X del artículo 20 que ha propuesto la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la fracción X del artículo 20. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta la discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión.

Sonido en el escaño del Senador Mancera Espinosa.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Solamente para ver si esta adición no está también vinculada con, ahora ya se me perdió, la que dice "representar", perdón, se me perdió, pero está, hay una fracción, aquí, representar jurídicamente.

La fracción XXI, ¿no está vinculada ahí?

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Sí está vinculada, es que la idea sería, eliminamos esta XXI para que quede en una sola fracción.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) ¡Ah! está incluido eliminar la fracción XXI.

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Sí, bueno, posteriormente.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Como va, fracción por fracción la votación, no hemos llegado.

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Se puede solicitar su votación después para que la eliminemos.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) La fracción XXI tiene "representar jurídicamente a la Fiscalía ante las autoridades administrativas, judiciales y laborales".

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Sí, es un tema nada más de simplificarlo en una sola fracción y que tenga un poco más de orden dentro de las facultades realmente.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Sí, gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Al no haber inscritos más oradores, le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación planteada de adición a la fracción X del artículo 20.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación de la fracción X del artículo 20. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se incorpora al texto del dictamen.

Continúe, Senadora, por favor.

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Gracias, señora Presidenta.

La siguiente propuesta es que en la fracción XV, que a la letra dice: "conocer y resolver sobre las solicitudes de atracción que el Fiscal General le encomiende".

La propuesta del Partido de Acción Nacional, de igual forma, como ya ocurrió anteriormente, es enviar literal esta fracción también a la Coordinación de Investigación y Persecución Penal, al artículo 31.

De igual forma ésta es la propia naturaleza de esta coordinación el conocer y resolver sobre las solicitudes de atracción. Creemos que sí sería un exceso que la coordinación general fuera quién resolviera estas solicitudes.

Entonces, la propuesta sería a que esta fracción XV textual, del dictamen se fuera integra al artículo 31 de la Coordinación de Investigación y Persecución Penal.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Me piden de la Secretaria de Servicios Parlamentarios, nada más que haga mención que a la propuesta de reservas que entregó a la Mesa Directiva no coinciden con las que está planteando, pero usted las está explicando ampliamente.

Con esta aclaración le solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, la modificación de la fracción XV del artículo 20 que plantea la Senadora Indira Rosales en el sentido de trasladarla al artículo 31.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se hace la modificación a la fracción XV del artículo 20 para que se sume al artículo 31. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se incorpora al texto del dictamen.

Continúe por favor, Senadora.

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Gracias, señora Presidenta.

En la fracción XVIII de este mismo dictamen, y de este mismo artículo 20 menciona: "Auxiliar a la persona titular de la fiscalía General de la República en la elaboración de los lineamientos y bases del servicio profesional de carrera de la institución, de nombramiento y remoción de servidores públicos de conformidad con la normatividad".

La propuesta que se hace respecto a esta fracción es que creemos que esto debiera ser una facultad del centro de formación y servicio profesional de carrera, que se encuentra ya estipulada a sus facultades dentro del artículo 59, que esto no debiera competer a la coordinación general, sino que a esta facultad de formación.

O sea, la propuesta sería que íntegra esta fracción se fuera al artículo 59 del mismo dictamen.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: ¿Es la fracción XVIII?

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Sí, fracción XVIII.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se pone a discusión la modificación que acaba de explicar la Senadora Indira Rosales.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se pone a discusión la fracción XVIII del artículo 20 para que pase al artículo 59. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Está a discusión.

Al no haber oradores inscritos, le ruego a la Secretaría, ponga a consideración del Pleno si aceptan la modificación planteada al artículo 20 en su fracción XVIII, trasladando la misma al artículo 59.

El artículo 59, al que proponen trasladar la fracción XVIII no fue reservado, por lo tanto, ya fue votado en lo general, y ya fue aprobado, y ya no se puede cambiar, no es válida la reserva, porque se afecta ese artículo, que ya fue votado.

Entonces, queda sin efecto, si podemos continuar, Senadora.

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Gracias, señora Presidenta.

Continúo con el mismo artículo 20, la fracción XX que se encuentra vinculado con uno que ya votamos, con la fracción X, la fracción XX, es el que dice coordinar a la red, perdón la fracción XXI, dice: “Representar jurídicamente a la Fiscalía General de la República ante las autoridades administrativas judiciales y laborales”.

La propuesta es, que como ya fue esta reserva aprobada hace unos minutos, respecto a la fracción X que fue donde agregamos estas autoridades administrativas, judiciales y laborales, la propuesta es eliminar esta fracción, la fracción XXI.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión la eliminación de la fracción XXI del artículo 20.

La Secretaria Senadora Nancy de la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión, la reserva presentada por la Senadora, correspondiente a la eliminación de la fracción XXI del artículo 20. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se acepta a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Al no haberse inscrito ningún orador para discutir el tema, le solicito a la Secretaria consulte a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación que plantea la Senadora Indira, en el sentido de eliminar la fracción XXI del artículo 20.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación de eliminar la fracción XXI del artículo 20. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se acepta la modificación, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se incorpora al texto del dictamen.

Continúe Senadora. ¿Ya terminamos el artículo 20?

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: No, señora Presidenta.

Respecto al mismo artículo en la fracción XXIII, que habla de conocer y resolver los conflictos de competencia entre órganos fiscales, la propuesta es que esta misma fracción de igual forma se vaya al artículo 31, de la

Coordinación de Investigación y Persecución, Penal, puesto que también ésta debiera ser una facultad de esta Coordinación de Investigación y Persecución Penal, y no de la Coordinación General de la Fiscalía.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si aceptan la discusión de la modificación de la fracción XXIII del artículo 20.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada en el artículo 20, fracción XXIII, para pasarla al artículo 31. Quienes estén por la afirmativa, favor levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Queda el dictamen en su texto original.

Continuamos Senadora, por favor.

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Ya terminó el artículo 20, y paso al artículo 63.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Permítame un momento, por favor, Senadora.

Por cuestiones de técnica legislativa, las propuestas aceptadas afectan a los artículos 20 y 31, por ello debemos despacharlas conjuntamente para que el resultado de la votación abarque ambas propuestas.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las propuestas a los artículos 20 y 31 del proyecto de Decreto.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aceptan las propuestas al artículo 20 y que afectan al artículo 31. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aceptada, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Quedan aprobadas las modificaciones y se incorporan al texto del dictamen.

Continúe, por favor, Senadora con las propuestas de modificación al artículo 63.

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Muchas gracias, señora Presidenta.

Respecto al artículo 63, es el que habla del presupuesto, este artículo a la letra dice, dentro del dictamen que la Fiscalía General de la República, elaborará su proyecto de presupuesto anual de egresos, el cual será remitido al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se remita a la Cámara de Diputados y que en todo caso deberá garantizarse la autonomía e independencia funcional y financiera.

La propuesta que tenemos es, dejarla de manera textual, pero agregamos: “Que en ningún caso, el presupuesto que se apruebe para la Fiscalía General podrá ser menor en términos reales que el asignado para el año fiscal inmediato anterior”.

Esto, por supuesto, con el objetivo de garantizar que cada año el presupuesto de la Fiscalía, en lugar de disminuir, pues sea mayor y fortalecer la institución.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Indira de Jesús.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aceptan a discusión las modificaciones planteadas para el artículo 63.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las modificaciones presentadas por la Senadora Indira Jesús Rosales San Román al artículo 63. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Queda el texto íntegro del dictamen.

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Es cuanto.

Gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Rosales San Román.

Tiene el uso de la palabra el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para plantear reservas a los artículos 22 y al Décimo Tercero Transitorio.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Gracias, señora Presidenta.

Muy breve. Ya se platicó con el Senador Juan Menchaca, que quiero felicitar por su trabajo; el Senador Menchaca de presidente de la Cmisión de Justicia, Julio Menchaca.

Vamos a rechazar el 50 y únicamente proponer una modificación a un Transitorio, que es el Décimo Tercero Transitorio, y sobre todo lo hacemos por los colectivos.

Los que somos miembros de las Comisiones de Justicia; y Estudios Legislativos, a mí me toca estar en ambas.

El lunes, pues, tuvieron la amabilidad de invitar a “Fiscalía que Sirva”, al ex FEPADE, Nieto, y a muchos colectivos, quienes secundaban la ley, y ellos, pues, pedían como compromiso que en un año, en un año textual, se revisara la reforma al artículo 102 constitucional.

Hoy, el dictamen, la décimo tercera propuesta del Transitorio, detalla que la convocatoria comprenderá temas relacionados con la función del Fiscal de la Persecución Penal, el modelo de investigación criminal, la competencia, Servicio Civil de Carrera, etcétera, pero no viene textual que la convocatoria va a estudiar el mecanismo de designación, y es un compromiso que hicimos con los colectivos.

Entonces, simplemente, lo que se pide es agregar al décimo tercer transitorio, y creo que sí es el último, y ojalá salga a favor, agregar en su segundo párrafo lo siguiente:

“La convocatoria comprenderá temas relacionados, se agrega, con el mecanismo de designación del titular, con la función fiscal y de persecución penal, el modelo de investigación” y seguimos.

Simplemente es cumplirle a los colectivos, que en un año que se haga la convocatoria, parte de la discusión sea el mecanismo de designación.

Es cuanto, y esperemos que salga a favor la presente reserva.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Senador, nada más una pregunta.

Tenía registrado reserva al artículo 22, ya no está.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Se retiró.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Ok.

Mencionó al artículo 50, también no está, y se queda nada más con la reserva al Décimo Tercero Transitorio.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Sí.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: OK. Gracias.

Consulte, por favor, la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión la propuesta del Senador Samuel García, en el sentido de modificar el Artículo Décimo Tercero Transitorio.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, al Artículo Décimo Tercero Transitorio. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite, señora Presidenta.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Queda el texto del dictamen original.

Gracias, Senador García Sepúlveda.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón para presentar reserva al Artículo Décimo Segundo Transitorio.

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón: Gracias. Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

La reserva que hoy presento va en cuanto a la redacción de la propuesta del Artículo Décimo Segundo Transitorio en su numeral primero, en el cual especifica que el personal administrativo, de confianza y de base adscrito a la hoy Procuraduría General de la República conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su relación laboral con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades.

Así también señala que el personal administrativo, de confianza y de base adscrito a la Procuraduría General de la República conservará los derechos a que haya adquirido en virtud de su relación laboral con independencia de la denominación que corresponda por sus actividades.

Lo que nosotros estamos señalando aquí es que todo el personal, tanto administrativo, de confianza y de base se van a trasladar, de lo que hoy es la Procuraduría General de la República, se estarán trasladando a un nuevo ente, que en este caso se creará como la Fiscalía General de la República, y esto en virtud de esta relación laboral, y no tendrán el proceso de selección como el personal que tiene nombramientos; es decir, es un traslado en automático que establece este transitorio.

Pero también hay que aclarar que no estamos en contra de que las personas que laboran en la PGR pierdan su trabajo, sino que estamos a favor de que en el ánimo de crear una Fiscalía sin corrupción, independiente y eficaz, y toda vez que en esencia esta institución va a renacer, es estrictamente necesario que todo su personal cumpla las expectativas de esta nueva etapa en la institución.

Es por ello que lo que nosotros estamos estableciendo es que ahora no sólo la Procuraduría General de la República, quien instituye este ente público tiene o falta credibilidad y confianza a la ciudadanía, sino que los ciudadanos también no tienen la confianza y la credibilidad de los que trabajan y laboran en la propia Procuraduría, en la PGR.

Por eso la propuesta es de que todos aquellos trabajadores de base, de confianza, administrativos que se puedan trasladar, pero que puedan, insistimos, llevar un proceso de selección, porque así como está establecido, inclusive, pareciera que va a permitir un pase automático de trabajadores de confianza y administrativos que no tengan control de evaluación y, sobre todo, que puedan sujetarse a este proceso de selección para que puedan continuar laborando en la Fiscalía.

Repetimos, no estamos en contra de que el personal adscrito de la PGR deje de laborar en la nueva Fiscalía. Proponemos que el personal administrativo y de confianza, hoy adscrito a la PGR, pueda participar precisamente en el proceso de selección para continuar laborando en la Fiscalía pasando por las etapas que ese propio proceso establezca.

Para lo cual, compañeras y compañeros Senadores, queremos una Fiscalía nueva, sin corrupción en el seno de la misma, confiable y con credibilidad de la ciudadanía hacia el personal que también se desempeña en ella, porque también ha dolido a la sociedad precisamente los actos de corrupción que se logran dar también en el personal; no todos, pero sí necesitamos y queremos que el personal que labore esté a la altura de las circunstancias y de las exigencias ciudadanas.

Por eso queremos que el personal sea personal confiable, preparado y, sobre todo, también evaluado en esta nueva figura como Fiscalía General de la República.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Latifa Martínez.

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón: Si quiere nada más comento cómo sería la propuesta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sí, por favor.

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón: Digo, de todos modos la pasamos, pero con mucho gusto en el Artículo Décimo Segundo Transitorio, fracción I, la propuesta es: "el personal de base adscrito a la Procuraduría General de la República conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su relación laboral con independencia de la denominación correspondiente a sus actividades". Y aquí viene el párrafo que proponemos: "el personal administrativo y de confianza continuará en la función que desempeña y tendrá derecho a participar en el proceso de selección para continuar laborando en la Fiscalía".

Ese es el párrafo que estaríamos proponiendo de adición.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Martínez Simón.

Le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la discusión de esta adición a la fracción I del Artículo Décimo Segundo Transitorio que ha propuesto la Senadora Martínez Simón.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón al Artículo Décimo Segundo Transitorio. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Queda el texto original del dictamen.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Tiene el uso de la tribuna el Senador Julen Rementería del Puerto, para presentar las reservas del Artículo Décimo Tercero Transitorio.

El Senador Julen Rementería del Puerto: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero, además de poder hacer la propuesta para la modificación del Articulo Décimo Tercero Transitorio, quiero hacer notar en este dictamen se han cumplido ya prácticamente las nueve horas de discusión, y no es para menos, es un tema que tiene que ver con lo que yo creo que es el principal pesar de todos los mexicanos, el poder garantizar una justicia pronta y expedita, el poder tener esos instrumentos que puedan hacer de nuestro país un lugar en donde el estado de derecho cobre verdaderamente vigencia.

Y, bueno, no me sorprende porque así lo esperaba el hecho de que no se aceptara, de alguna forma era un strike cantado el que no se aceptara la verdadera autonomía de la Fiscalía. En todas estas nueves horas podríamos haber modificado, como se ha modificado una gran cantidad de artículos en las reservas que han presentado distintos compañeros Senadores, se podían haber hecho también la redacción de aquellos cuatro artículos que hacen falta para reformar y verdaderamente darle a México un Fiscal autónomo, el artículo 102, por supuesto, de la Constitución, y los otros tres que habría qué hacer para acuerpar perfectamente toda esta reforma, y sí ir a fondo, habernos dado el tiempo.

Porque miren, yo he escuchado con atención prácticamente las nueve horas y no he encontrado ningún argumento de ningún legislador, en contra de una Fiscalía que realmente rinda fruta, no hay nadie que no quiera eso, nadie ha venido a esta tribuna a hablar de una cosa distinta, todo mundo quiere eso, todo mundo quiere la Fiscalía. Lo que no se comprende es por qué no realmente dar ese paso y poder entonces estar en condiciones de lograrlo.

Bueno, decía yo, esa no era una cosa que esperara de manera diferente, aunque sí hay que seguirlo señalando.

Lo que sí llama la atención es lo que hace un rato causó polémica y no se autorizó, la Fiscalía Especializada para las Mujeres, ya sé, van a decir, les que ya está contemplada ahí", la ministra lo dijo en varias ocasiones, algunos otros Senadores lo han mencionado por parte del grupo mayoritario; sin embargo, lo que se pedía es que fuera un poco más puntual, no era una cosa que no se pudiera hacer.

Yo entiendo que hay un dictamen y llama la atención, lo que efectivamente dijo hace un rato Kenia López aquí, el que yo estoy convencido que en un examen de conciencia de muchos legisladores, hombres y mujeres, habrían estado a favor de poderla crear la Fiscalía.

¿Qué es lo que pasó? Que como ya venía de saque esta modificación, entonces, no se permitió que en absoluta libertad a quien yo creo que lo hubieran hecho, pudier haber logrado esto desde el cuerpo del dictamen.

Yo creo que eso es algo que sí nos sorprende a todos, como ya se dijo aquí, no a los 30 millones que les dieron el voto, que nadie duda, sino a todos los mexicanos. Yo creo que esto habría hablado muy bien precisamente del grupo mayoritario que por supuesto juegan a las votaciones, pero yo no creo que este debate lo esté ganando frente a la sociedad, no creo que lo gane ahora y no creo que lo gane nunca.

Por otro lado, también quisiera hacer notar en el Artículo Décimo Tercero Transitorio pareciera que lo que se le está dando es al Fiscal una responsabilidad adicional de las muchas que ya tiene. Yo quisiera proponer, y lo digo con verdadero respeto y con buena fe, reconozco la disposición de la comisión del Senador Menchaca por haber aceptado una gran cantidad de cambios en donde se reconoció que habían detalles que podrían perfeccionar este dictamen. Y yo creo que esto es una situación que va más allá de una palabra que pueda ampliar el significado, por ejemplo: "él, los o las", o cosas de esas que había que hacerlas, se hizo y se aceptó en algún caso.

Pero aquí, miren, en el Artículo Décimo Tercero Transitorio le están pidiendo al Fiscal que en el término de un año haga una evaluación, o sea que realice una convocatoria pública para la revisión del marco constitucional y jurídico de la Fiscalía General de la República, dicha convocatoria tendrá como objetivo la identificación, discusión, formulación de las reformas constitucionales, de la legislación secundaria o de la reforma regulatoria.

Y dice que bueno, y se comunicará al Congreso el resultado de esa convocatoria, ¿qué acaso no es en esencia, precisamente la labor de esta Asamblea junto con la de la Cámara de Diputados el poder llevar a cabo esas convocatorias? y que no se argumente el tema de la experiencia de un Fiscal que apenas va a entrar, porque en un año, con todo lo que tiene que hacer, con todo lo que tiene que desarrollar, a mí me parece que esa consulta, esta convocatoria para analizar todo el marco normativo, bien se podría hacer desde aquí, se han hecho en los congresos locales.

Los congresos locales en algunas partes del país han hecho estas consultas y estas convocatorias para ver qué es lo que hay que modificar y entonces, pues con esa atribución que se tiene por ley de poder legislar, pues sea precisamente esta Cámara la que lo haga.

De manera que lo que yo propongo es que se pueda sustituir en el Artículo Décimo Tercero Transitorio, esta, digamos que obligación que se le transfiere al Fiscal para dejársela al Congreso de la Unión.

Me permitiré leer la parte sustantiva:

"Artículo Décimo Tercero. Transcurrido un año partir del nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General de la República, y a la luz del Plan Estratégico de Transición y la experiencia acumulada en el proceso de transición, el Congreso de la Unión, realizará una convocatoria pública para revisión del marco constitucional y jurídico de la Fiscalía General de la República. Dicha convocatoria tendrá como objetivo la identificación, discusión y formulación de las reformas constitucionales, de la legislación secundaria o de las reformas regulatorias necesarias para la operación óptima de la Fiscalía General de la República, propuesta en la presente Ley. Los resultados obtenidos serán públicos y se comunicarán al Congreso de la Unión, con el fin de que éste realice las adecuaciones al marco jurídico que se considere, sean necesarias y pertinentes".

Este es el total de la redacción propuesta.

Me parece a mí, y de verdad lo digo, como se ha dicho aquí, igual que otras tiene esta propuesta un sentido de buena fe, de poder hacer que a esta Soberanía sea la que se le encargue llevar a cabo esta convocatoria, realizar este análisis de todo el marco normativo para la correcta operación de la Fiscalía a un año de distancia.

Y entonces estar en condiciones a partir de eso, precisamente quien hace esta convocatoria, quien la conduce aquí en el Senado, tal vez encabezándola la propia Comisión de Justicia, podamos estar en condiciones de, efectivamente, tener todo este análisis del marco normativo y entonces ya con los elementos, que no nos los

tenga que venir a explicar el Fiscal, sino una cosa que aquí hagamos y podamos estar en condiciones desde aquí, de hacer que la ley se pueda modificar o las leyes necesarias se puedan modificar.

Es una facultad de esta Cámara, no entiendo por qué se la tenemos que dar precisamente al Fiscal, me parece que no es oportuno, el Fiscal tendrá muchísimo trabajo, ojalá lo haga bien, ese es el mejor deseo, el mayor deseo de todos los Senadores, así lo entiendo, pero a final de cuentas creo que es algo que esto que se pueda hacer desde aquí, para conocerlo mejor y para en todo caso, ni siquiera tener una sesión en su momento tan larga como esta, donde tengamos que ver detalles, que ya se sepan desde la propia convocatoria en donde se analice todo el marco normativo.

Respetuosamente, le pido a la comisión, a cada uno de los Senadores se pueda considerar con seriedad, es una propuesta que entendemos de buena fe, que lo que queremos es simplemente que se pueda procesar para poder dejarle al Senado lo que le toca, las propuestas a las reformas, a las distintas leyes que tengamos que proponer para tener una mejor Fiscalía.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Rementeria del Puerto.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión la propuesta del Senador Julen Rementeria.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presenta por el Senador Julen Rementería del Puerto, al Artículo Décimo Tercero Transitorio. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Tiene la palabra el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, para presentar su propuesta de modificación al artículo 19.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Martín: Gracias, señor Presidente. Señores Senadores:

El artículo reservado es el artículo 19, el objeto del trabajo que hemos realizado ahora con el personal de la comisión, a quienes, por cierto, agradezco cumplidamente todo el esfuerzo que han puesto para poder captar el espíritu de esta reserva y reflejarlo, queda en el artículo 19 y se resume prácticamente a un párrafo, se había enumerado el listado completo de las que serían facultades indelegables del Fiscal General y éstas quedan comprendidas en “serán facultades indelegables del Fiscal General de la República, las establecidas en las fracciones I, IV, VII, VIII, XI, XIV, XV, XVII, XX y XXIII del presente artículo”.

De esta manera encontramos una forma ordenada de presentar las que serán las facultades indelegables del Fiscal General, lo cual me parece un avance extraordinario en esta ley.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión la propuesta.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación si se admite a discusión las reservas presentadas por el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín al artículo 19. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión la propuesta.

No habiendo oradores para intervenir, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones al artículo 19. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aceptan las modificaciones, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se incorpora la propuesta al texto del dictamen.

Está agotada la discusión en lo particular de los artículos reservados del proyecto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Procederemos a realizar la votación nominal de todos los artículos reservados en un solo acto.

Les informo que los artículos reservados los votaremos de la siguiente manera:

El artículo 4 del proyecto con la modificación propuesta por el Senador Manuel Añorve, y aceptada por la Asamblea.

El artículo 6 con la propuesta presentada por la Senadora Paredes, y aceptada por la Asamblea.

El artículo 9 con la modificación únicamente en la fracción XX, propuesta también por la Senadora Paredes, y aceptada por la Asamblea.

Los artículos 9, 11, 15, 18, 27 y 40 con las modificaciones propuestas por el Senador Miguel Ángel Mancera, y aceptadas por la Asamblea.

Los artículos 16 y 60 con las modificaciones propuestas por el Senador Eruviel Ávila Villegas, y aceptadas por la Asamblea.

Los artículos 18 y Transitorio Noveno con las modificaciones propuestas por el Senador Jorge Carlos Ramírez, y aceptadas por la Asamblea.

Los artículos 19 y 20 con las modificaciones propuestas por la Senadora Kenia López Rabadán, y aceptadas por la Asamblea.

Los artículos 20 y 31 con las modificaciones propuestas por la Senadora Indira Rosales, y aceptadas por la Asamblea.

Los artículos 25 y 42 con las modificaciones propuestas por la Senadora Guadalupe Murguía, y aceptadas por la Asamblea.

El artículo 50 con la modificación propuesta por el Senador Juan Quiñonez Ruiz, y aceptada por la Asamblea.

El Artículo Décimo Transitorio con la modificación propuesta por el Senador Juan Zepeda, y aceptada por la Asamblea.

Los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 32, 36, 41, 49, 54 y 63, y los Transitorios Primero, Séptimo, Octavo, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Séptimo y Vigésimo en los términos del dictamen.

Asimismo, el Artículo Vigésimo Tercero Transitorio propuesto por el Senador Mancera, y que la Asamblea aceptó adicional al proyecto de Decreto.

Finalmente, con la modificación aceptada al artículo 19 propuesto por el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal de los artículos reservados.

Para información del Pleno, aún y cuando sabemos que cada Senadora y Senadora decide libremente el sentido de su voto, simplemente informo que se están votando las reservas. Se están votando los artículos reservados.

Lo digo por la congruencia en la votación.

Sonido en el escaño del Senador Damián Zepeda.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) A ver, señor Presidente.

Yo lamento el comentario, pero déjeme explicar por qué sí es congruente el voto del grupo parlamentario del PAN.

Nosotros nos manifestamos en contra de todo el proyecto, hicimos toda una argumentación de que no es suficiente, nunca, por ideal que sea la ley secundaria, porque se requiere, si me permiten, con respeto, si me permiten, porque se requiere una reforma constitucional.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Permitan hablar al Senador, por favor.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Que se hagan unas cuantas mejoras de redacción con las reservas, que se desechen el 80 por ciento de las reservas y que se cambien algunas fracciones de un artículo no significa que haga ya correcta la ley.

Qué bueno que se mejoró, por supuesto, por supuesto.

A ver, le pido que me permita, por supuesto que qué bueno que se puedan mejorar un producto, pero eso no lo hace ya correcto.

Pongo un ejemplo:

Nosotros estamos en contra de toda la figura de la Coordinación General, el llamado “fiscalito”.

Qué bueno que mejoraron tres o cuatro fracciones, pero eso no implica que el Coordinador General debe existir.

Entonces no podemos votar a favor porque están votando todos los artículos reservados, es congruente con nuestra votación en lo general porque queremos un Fiscal General autónomo e independiente; sin embargo, participamos para mejorar lo que la mayoría va a aprobar.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sólo aclaro.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Tiene derecho cada Senador a participar, Senador.

Para nada, Senador.

Farsante es quien quiere engañar al pueblo de México diciéndole que está logrando una Fiscalía autónoma cuando sólo está logrando una ley secundaria que nada tiene de autónoma.

Así es que no me venga a decir y, además, respeten el derecho a votar que tiene cada Senador, para empezar.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Cada Senador tiene derecho de votar libremente, como quiera.

Sólo preciso que lo que se está votando no es en lo general, se están votando las reservas presentadas a lo largo de la tarde.

Se están votando los artículos reservados, que se votaron ya a favor cada uno por separado y se están votando en conjunto.

Senadora Citlalli Hernández, sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora: (Desde su escaño) Gracias, sólo señalar, compañeros se los digo con mucho respeto.

A diferencia de cuando ustedes han sido mayoría han votado todo en contra sólo porque lo hemos propuesto nosotros.

Nosotros hemos dedicado tiempo a escuchar con mucha puntualidad las reservas que presentaron y aprobar las que consideramos congruentes con el dictamen de la ley.

Entonces sí es incongruente porque ustedes están presentando reservas, nosotros estamos dedicando tiempo, estamos votando y ahora ustedes votan en contra de todas las reservas que presentan.

Nada más para dejar puntualidad porque entonces es una farsa y reitera una hipótesis que nosotros tenemos, que es que ustedes ahora en vez de tratar de construir están tratando de construir de todo un show, una farsa y de desacreditar y de construir de manera conjunta.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Samuel García, sonido en su escaño, por favor.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Déjeme, le doy ahora mi hipótesis, Senadora.

Fíjese, votamos en contra en lo general, se preguntaron por las reservas, teníamos más de cinco, y partiendo de la buena fe Senadores de su grupo se acercaron para tratar de encontrar un punto medio.
.
De seis nos quedamos con una, partiendo de la buena fe y de cumplir el compromiso con los colectivos de que en un año, como dijo el Senador Julen, en un año íbamos a revisar la reforma constitucional, y a pesar del compromiso, y a pesar de haber bajado y planteando la congruencia que dice el Presidente, nos lo votaron en contra, a pesar de la buena fe que se partió, nos lo votaron en contra, y a pesar de que el lunes hubo compromiso con los colectivos, de que en el Artículo Décimo Tercero Transitorio se iba a poner explícito que iba a ser el Senado quien iba a convocar para ver si reformábamos la Constitución, aún y con eso nos negaron la reserva.

Por eso no me extraña que hoy, esos colectivos se sienten engañados, y en los medios y en twitter están poniendo que así como plantean la reforma para militarizar el país, debieron haber reformado la Constitución para darle autonomía, por eso el voto en contra.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sí, Senador, bueno, ya habló el Senador Damián Zepeda.

Senador Higinio Martínez, sonido en su escaño, y vamos a pedir el resultado de la votación.

El Senador Higinio Martínez Miranda: (Desde su escaño) Yo quisiera, bueno, muy breve, una pregunta, Senador Damián.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: No se puede, Senador; si tiene algún comentario, hágalo, por favor.

El Senador Higinio Martínez Miranda: (Desde su escaño) Bueno, déjeme hacer la pregunta, preguntármelo yo.

Déjeme preguntarme, nos llevan toda la tarde, votan en un sentido, y ahora votan en otro sentido, Perdón, lo que yo, claro, primero voto de una forma, vienen aquí con el Presidente de la Comisión de Justicia, le piden, traen documentos, toda la tarde, le dicen, cambia esto, esto, lo otro, se acepta; y ahora, voto de otra manera, voto en contra. ¿Eso cómo se llama?

Eso qué, o sea, voto hoy, en una hora voto de una manera, y dos o tres horas voto de otra manera, en eso no hay congruencia. Eso es burlarse, querían la nota, no sé si se llevaron la nota, pero esto que están haciendo, qué significa, Senador Damián, qué significa esto en verdad. Si hubiera un poco de ética, qué es lo que existe en esta votación.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Damián Zepeda. Vamos a escuchar al Senador Damián Zepeda, y después al Senador Monreal.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Porque hay que acostumbrarnos porque ahí está el proceso legislativo, y de una vez lo decimos, ¿sabe cuántas reservas presentó el grupo parlamentario del PAN el día hoy? Fueron 40.

¿Sabe cuántos cambios aceptó, con gran generosidad la mayoría? Dos y parciales. Claro que sí, del PAN, del grupo parlamentario del PAN, dos de 40, y parciales. Porque tiene varias fracciones uno de ellos. Por eso, señor Senador.

A ver, ustedes, varios de ustedes, y si quieren en algún otro momento les traigo las versiones estenográficas del Diario de los Debates, en muchas reformas estructurales dieron el debate, votaron en contra de toda la reforma y luego subieron a participar, ya habiéndose aprobado, a presentar reformas, a tratar de mejorar partes de la ley, se llama proceso legislativo, pues si no es exclusivo de quién vota a favor en lo general, participar en la votación en lo particular de cada artículo, perdón, pero claro que no, es un absurdo lo que están diciendo; como si se tuviera que votar todo o nada, ¡no!

Ahora quieren cada artículo que lo votemos, separen cada uno de los artículos, cada uno, abran tablero de cada artículo que separó en las reservas, y entonces, quizá un artículo en modificado que esté correcto este artículo lo podemos votar a favor, con mucho gusto.

El que propuso aquí la votación de todo junto fue el Presidente de la Mesa Directiva, entonces, porque es importante que nos hablemos con claridad, no estamos engañando a nadie, estamos en contra por completo del paquete de la Fiscalía General, lo dijimos cuando posicionamos que podía ser un producto que tuviera una u otra cosa bien, y que íbamos a participar para mejorar, pero que en el planteamiento general no estamos de acuerdo.

Así es que, es una actitud congruente, y además, ahí está el tablero, señor Presidente, pero yo reitero, lamento mucho el comentario hecho por usted en relación con la congruencia, porque me parece que es una valoración que está fuera de lugar, viniendo de usted.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sí, ahorita comentaremos sobre eso.

Sonido en el escaño del Senador Ramírez Marín.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: (Desde su escaño) Esta tarde he recordado las muchas tardes y noches que pasamos en la Cámara de Diputados con el grupo parlamentario del Partido Morena, extraordinariamente belicoso, extraordinariamente preparado muchas veces, pero sobre todo buscando que las sesiones fueran muy largas, y lo que dice Morena hoy es cierto, nosotros, la mayor parte de las veces en automático no les aceptábamos ni las reformas de redacción, que eran bastante lógicas, y se las votábamos en contra, eso es cierto.

Pero el problema, queridos amigos, el problema no es de Morena, del PAN o del PRI, es el Reglamento, si tú votas a favor las reservas en un solo voto, estás votando todas las reservas que te aprobaron, pero también estás votando todas las reservas que no te aprobaron; por eso las reservas se votan individualmente.

Esta votación solamente representa que la mayoría esté de acuerdo con el conjunto de la ley que se está votando.

Nos pasó muchas veces con el PAN, que después de negociar el presupuesto, lo votaban a favor, en lo general, y lo votaban en contra en lo particular, porque no se habían admitido todas sus reservas, y nos pasaba siempre, y le pasara a los grupos parlamentarios, mientras no cambiemos que la votación en lo particular no puede ser en un solo acto, ya no es necesaria, hemos votado todos y cada uno de los artículos que ya cambiamos, en realidad, aquí sólo estamos votando los artículos que no se cambiaron y quedaron reservados, y esos los tenemos que votar en contra, porque nosotros los reservamos, y no los aprobó la mayoría.

Esa es la razón de este voto, no tiene que ver con condiciones, tiene que ver con la lógica de lo que se está votando.

Y, nuevamente felicito a la fracción mayoritaria por su apertura, de eso se trata, a eso venimos.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sonido en el escaño del Senador Julio Menchaca.

El Senador Julio Ramón Menchaca Salazar: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Este es un ejercicio de parlamento, de discusión, de diálogo, de construcción, el grupo parlamentario del Partido Morena en esta, y en todas las ocasiones, va a escuchar las voces discordantes, y va a construir. No nos cansan las horas de trabajo, esta ha sido una jornada larga, y nos van a quedar todavía muchas más, pero el pueblo de México va a estar muy claro de que no estamos utilizando nuestra mayoría para imponer; estamos en la mejor disposición de hacer la construcción legal que le beneficie a las mexicanas y a los mexicanos, en eso nos vamos a empeñar y no se vale que en un afán protagónico, simplemente por alguna nota en particular, que no tenía nada que ver, particularmente en el caso de la Fiscalía para las Mujeres se desprenda de la esencia, de la exigencia de la procuración de justicia de una manera cercana a la gente.

Este es un ejercicio de Parlamento, este es un ejercicio de construcción de leyes que son necesarias para nuestra población, vamos a seguir esa conducta, vamos a escuchar, vamos a utilizar también cuando así se requiera la fuerza que nos dio el respaldo de la votación de la mayoría de los mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sonido en el escaño del Senador José Narro.

El Senador José Narro Céspedes: (Desde su escaño) La reforma constitucional del artículo 102 constitucional fue la base fundamental de esta propuesta de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Esa propuesta de reforma al artículo 102 la votaron los que ahora plantean prácticamente su voto en contra, pero ese fue el marco en el que se tuvo que trabajar para hacer la ley secundaria.

Algunos planteábamos que había que hacerle otros cambios y otras modificaciones, pero también entendemos que después de tantos años se requería de un instrumento para construir justicia y resolver el grave problema del crecimiento de la delincuencia que había rebasado al marco institucional.

Tenemos una procuraduría ahora, en este momento, prácticamente inmovilizada, que está en manos de la corrupción y del estancamiento, que ha llevado al país prácticamente a la inseguridad y que estemos en manos de la delincuencia.

Por eso era importante, y es muy importante que se apruebe, aún no planteamos la Fiscalía indígena, planteamos otros temas importantes que son igual de atendibles como los de otras compañeras y compañeros, pero creo que la gran importancia era contar con un instrumento, y por eso se planteó que en un año pudiera ser evaluada, que en un año se revisara y se modificara, porque entendemos que las leyes son perfectibles.

Se votó, se discutió, se aceptaron muchos planteamientos que se consideraban importantes, se demostró voluntad de diálogo y de acuerdo, y creo que la señal debería de ser de que, por lo menos, en lo particular, donde se señalaron y se aprobaron muchos planteamientos de las otras fracciones se votara a favor, para tratar de plantear congruencia con lo que se aceptó.

¿Hubieron avances? ¿Hubieron cambios? ¡Sí!

¿No se logró lo que algunos planteaban? ¡No! y a lo mejor lo que algunos queríamos, tampoco, pero creo que es muy importante señalar que hubo grandes avances, que hubo voluntad de diálogo y de acuerdo, y que la propuesta original, si la revisamos, tuvo innumerables modificaciones a favor de darle más eficacia, más eficiencia, más imparcialidad, más autonomía al órgano.

Por eso yo quiero reconocer la labor que hicieron mis compañeros Julio Menchaca y la maestra Olga Sánchez, y quiero pedirles que: trabajemos para coincidir, no para hacer la diferencia, no para confrontar, no para dividir, para unir a México que es lo que necesitamos para enfrentar los grandes y los graves problemas que tiene nuestro país.

Por eso yo los convoco a que reflexionemos. La verdad, es que la votación que se expresa ahorita no es muy entendible y tampoco es congruente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sonido en el escaño del Senador Miguel Ángel Mancera, y terminamos.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo creo que el ejercicio que hemos tenido el día de hoy es un ejercicio muy importante.

Aquí hemos manifestado, las Senadoras, los Senadores, nuestros puntos de vista respecto de esta figura trascendental que es la Fiscalía General de la República.

Y hemos escuchado con atención y, yo diría, con respeto a cada uno de los que han expuesto y cada una de las compañeras que han expuesto sus ideas, y esa va a ser la parte más importante en este ejercicio, porque ahora le corresponde a Morena ser la mayoría y no ser, pues, la parte que tiene que reaccionar con beligerancia o con enojo.

Me parece que hay que entender lo que explicó aquí el Senador Ramírez Marín, es perfectamente claro.

Todos tuvimos varias propuestas. Yo agradezco al Senador Menchaca, agradezco a mi maestra la Senadora Olga Sánchez Cordero y a todos y cada uno de los Senadores y Senadoras de Morena por la oportunidad para poder platicar con quienes votaron a favor las propuestas que así fue.

Pero también entendí cuando me votaron en contra, y cuando me votaron en contra, que fuera vinculante la opinión del consejo de los ciudadanos, tanto que estamos hablando de los ciudadanos, y no se aceptó, y no tiene por qué molestarnos.

Me parece que al final, pues, la mayoría tiene una razón de ser, y estamos claros. Hoy se tendrá esta Ley de la Fiscalía, en lo general y en lo particular, y habrá que avanzar, pero las partes de reglamento, pues, hay que entenderlas así.

Si hubiéramos votado cada uno de los artículos por separado, claro que nos hubiera llevado tres veces el tiempo que ahora hemos invertido, pero la votación sería diferente.

Sólo hay que entenderlo así, hay partes que no se votaron como las propusimos, y por eso es que se está mostrando este tablero, que no obedece a que hubiéramos querido sorprender o a que no se reconozca el ejercicio de la mayoría de aceptar también las observaciones.

Al final, compañeros, compañeras de Morena, créanme que es por el bien de la ley que se está construyendo cada una de esas observaciones.

Si no se hubieran aceptado, teníamos desde errores de sintaxis hasta cuestiones que sí hubieran afectado el transcurso del ejercicio de la Fiscalía. Entonces, yo creo que hay que continuar, pues, y estar atentos a esta parte del Reglamento.

Si queremos que haya un tablero diferente en cada artículo, pues obtenemos por una mecánica diferente para las votaciones.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Ricardo Monreal, tiene el uso de la palabra.

El Senador Ricardo Monreal Ávila: Señor Presidente.

Ciudadanos legisladores, legisladoras:

Había pensado no intervenir, pero es conveniente fijar la posición del grupo parlamentario mayoritario en la Cámara de Senadores.

“Los hombres que obran bien siempre andan temiendo que otros le respondan con las acciones que los propios suyos le merecen.

Cuando veas a un servidor pensar más en sus propios intereses que en los Nuestros y en la sociedad, y que interiormente buscan sus propios beneficios, ese hombre nunca será confiable, pocos podrán tenerle fe”. Fue Maquiavelo quien pronuncio esta frase. Dos frases del político Florentino que aún tienen vigencia.

He sido parlamentario muchas veces, muchas. Algunos otros compañeros de aquí también, casi siempre de la oposición, casi siempre.

A mí no me molesta ni me extraña el que las estrategias que se usen, las tácticas que se empleen sean así: ruidosas, incluso discordantes.

Pero una cosa sí deben de saber los miembros de esta Asamblea. En un Parlamento hay acuerdos, no todo es contra, ni es todo en favor, pero cuando hay acuerdos se honran.

Cuando yo fui parte de la oposición, ahora quienes son ya ex legisladores y que fueron coordinadores de mayoría, tomábamos acuerdos.

Acudía con el líder de la mayoría y le decía: “Oye, tengo cinco propuestas de reserva”. Me decían el 99 por ciento: “no podemos, Ricardo, no vamos a aceptar ninguna”.

Y en ocasiones muy distantes me decían: “te aceptamos una de las diez, con una condición: vas a votar a favor”. Y yo aceptaba, no firmaba nada, pero honraba mi palabra.

Y pueden decirlo, aquí está Gustavo Madero, que fue Senador conmigo, al que yo respeto porque honraba su palabra.

Siendo coordinador nos poníamos de acuerdo y decían: “¿podríamos pactar el debate, Ricardo?” Y yo les decía: “no”, y lo respetaban; pero cuando yo decía “sí”, honraba a mi palabra empeñada.

Y recuerdo hombres del PAN extraordinarios: Gómez Verónica, Gerardo Medina, impresionantes porque cumplían con su palabra.

Un Parlamento no puede funcionar sin acuerdos.

Cuando a mi Julio Menchaca y la Senadora Olga me plantearon la posibilidad de modificar la ley con reservas, les dije: “si ustedes creen conveniente, adelante”. La Senadora Olga me dijo: “Ricardo, vamos a lograr mayor consenso con las reservas”. Le dije: “van a lograr que voten en favor, sí, adelante”. Olga me lo planteó.

No lo sé, no lo sé.

Les platico la historia porque entonces nosotros no tenemos dificultades. Comenzamos en este proceso, nos quedan muchos años y lamento que se estén dando desencuentros, aún con propuestas que ustedes nos hicieron para intentar mejorar la redacción de las leyes; pero entendimos la lección, no hay problema, finalmente estaremos viviendo entracto sucesivo toda una etapa nueva.

Yo viví, se los digo a todos los legisladores, la cerrazón, la exclusión, la sordera de la mayoría y resistí. Yo no quiero copiar los moldes de aquella mayoría ciega y sorda, por eso aceptamos los debates y por eso ahora les decimos que el grupo parlamentario respalda al Presidente de la Comisión de Justicia y a la Senadora Olga que se encargaron del debate, tiene todo nuestro respaldo a pesar de que hubo al interior del equipo reclamos, porque los que hemos sido parlamentarios siempre sabemos que se tiene que ceder para lograr consensos.

No nos sorprende, no nos asusta, no nos conmueve el que se den estos desencuentros, es parte de la vida de un Parlamento. Sólo les decimos que nosotros actuaremos en consecuencia.

Había compañeros que querían votar en contra y cambiar su votación. No lo acepté porque no es un asunto de caprichos ni es un asunto de vendettas, es un asunto de conciencia y nosotros creemos y defendemos que el país está hecho un océano de sangre, un panteón, que nunca en la historia de este país había estado la nación en un estado de emergencia, nunca; territorios completos sin control institucional en manos del crimen organizado, un océano de violencia. Y por eso creemos que es el momento de crear esta ley.

Podrán no estar de acuerdo, y ese es su derecho, sólo les pido a aquellos que hicieron compromiso honren su palabra, nosotros actuaremos con certeza, serenidad, pero sin ingenuidad.

Actuamos de buena fe, pero no somos ingenuos.

Es simplemente una experiencia que lamentamos y ojalá y podamos, en el futuro, tener más encuentros que desencuentros.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Pido a la Secretaría dé cuenta con el resultado de la votación.

Ya escuchamos ampliamente.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Ángel Osorio Chong.

El Senador Miguel Ángel Osorio Chong: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Compañeras, compañeros:

Escuché con mucha atención al Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo mayoritario del Senado de la República, y no podemos, en el grupo parlamentario del PRI, dejar pasar señalamientos al aire respecto a acuerdos que quiero dejar claro en esta Cámara, no se hicieron de ninguna manera con el Partido Revolucionario Institucional, no hubo ninguno porque si de algo les ha hecho falta al grupo mayoritario es buscar consensos y buscar acuerdos con los otros grupos y fracciones representadas en el Senado de la República.

No ha habido un guiño para buscar mejorar, que es lo único que nos mueve a nosotros, lo que ustedes van a utilizar en cuanto sean, a partir del 1° de diciembre, gobierno en este país. Lo único que nos mueve es que las instituciones trabajen y trabajen bien, y eso nos corresponde a nosotros como Senado de la República.

Y no nos equivoquemos, compañeras y compañeros, es proceso legislativo, no nos están haciendo ningún favor en discutir y buscar que se mejoren las leyes, para eso estamos aquí todas y todos nosotros, es un proceso en el que cuando aceptamos ser candidatos sabíamos a lo que veníamos unas y otros y, por supuesto, que estamos convencidos que aquí en el Senado se debe de aplicar la política, pero la buena política compañeras y compañeros, la que construye, la que hace, no la que genera distancias y esa aquí no se ha aplicado, y ahora les corresponde a ustedes, porque son el grupo mayoritario.

No tuvimos nosotros ningún acuerdo ni con la Senadora Olga, ni con el Senador Julio Menchaca, no logramos ningún acuerdo que a cambio de 5 de 47 reservas que tuvimos nosotros, habremos de votar a favor de todas las reservas.

De ninguna manera, nosotros queremos y por eso lo hicimos en lo general, que esta institución que se está creando está mal, desde su inicio y lo veremos en el tiempo.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora, vamos a, permíteme tantito, vamos a hacer lo siguiente: estamos en una parte bastante informal, escuchamos los puntos de vista, no hay tema a discusión, voy a solicitar su comprensión porque en un momento dado voy a cortar estas intervenciones y les ruego, por favor que no se busque presionar a la Mesa en ese sentido.

Solamente vamos a escuchar al Senador Juan Zepeda, aun y cuando ya ha hablado varias veces, vamos a escuchar al Senador Damián Zepeda y voy a cerrar con la Senadora Olga Sánchez Cordero y no le voy a dar la palabra a nadie más.

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Gracias, señor Presidente, Hace un momento escuchando con mucha atención al Senador Ricardo Monreal y cuando termina su intervención yo me resistí a quedarme con un cargo de conciencia, porque por supuesto que sus argumentos son contundentes para aquellos que hicieron acuerdos para que se les aprobara alguna modificación o adición.

En mi primera intervención, yo les decía, y creo, y por eso solicité intervenir, porque soy parte directamente involucrada, como nadie más, yo sí presenté una iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. De 84 artículos, lo vuelvo a repetir, solamente retomaron “15 renglones” y después pasé aquí, reservé el Artículo Décimo Transitorio, y lo dije en mi intervención, de buena fe, para ayudar a que funcione esta Fiscalía que ha sido muy cuestionada por todos nosotros, y planteé el tema de la temporalidad de los integrantes del Consejo Ciudadano a cambio de nada, como lo hicieron y estoy seguro todos los que pasaron aquí de mejorar esta ley, no a cambio de prebendas, no a cambio de espacios, no a cambio absolutamente de nada.

Pero también coincido con lo que decía el coordinador del PRI, hemos sido nosotros, en algún momento desde el 1º de septiembre a lo que lleva esta Legislatura, sujetos a lo que la mayoría decida y no nos hemos quejado, hemos aceptado que hay una mayoría contundente que puede o no nos puede escuchar, pero sí hemos agradecido y hemos reconocido cuando se abre el debate y cuando tienen esa sensibilidad de escucharnos y lo seguiremos haciendo, pero no podía yo dejar pasar esta oportunidad para decirles que hoy les faltó generosidad, de 84 artículos, 15 renglones que hace rato decía cuáles fueron y se queda en nada, y el objetivo de esta Ley Orgánica era algo que le sirviera al país.

Por eso el PRD se niega a quedarse con un cargo de conciencia, por votar así.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Zepeda Hernández.

El Senador Damián Zepeda Vidales: Gracias, señor Presidente.

Voy a separar y tratar de hacer este razonamiento lo más tranquilo posible para comunicarlo bien.

Se cambió el tema de la Litis, nosotros ya dimos el debate de la Fiscalía General, fuimos honestos desde el principio, en la Comisión de Justicia expusimos nuestra postura en contra, total, sin titubeo, hicimos el mismo razonamiento que, sin distingo de ello íbamos a participar, tratar de mejorar ese dictamen, pero que estábamos en contra, lo dijimos aquí en nuestra primera intervención y hemos participado como todos, todos los grupos parlamentarios de la mejor manera en el debate parlamentario, no es generosidad aprobar una idea de un Senador, se aprueba cuando se cree que es correcto, si no, no se aprueba.

Sí es generosidad tener apertura a la discusión de los temas, como ahorita en el próximo dictamen se la reconocemos al Presidente de la comisión y como hoy mismo, por más pasional que estuvo este debate, se le reconoce al Presidente de la Comisión de Justicia.

Pero ese ya no es el tema hoy aquí, el tema ahorita aquí es una acusación de un incumplimiento, de un Acuerdo hecho sin sustento, jamás vamos a permitir que al grupo parlamentario del PAN ni a ninguno de sus integrantes ni a su coordinador se le diga que falta la palabra.

La palabra es lo más valioso que existe en política, dar certeza, no hay un solo incumplimiento que el grupo parlamentario del PAN haya hecho, ni su coordinador, ni nadie.

No hay un solo acuerdo que hoy se haya hecho aquí, y de haberse planteado esa condición de sólo te aprobamos, sólo les aprobamos esta reserva si a cambio votan estas decenas de artículos, la respuesta del PAN hubiese sido no, y de hecho es temerario si quiere el planteamiento.

Se plantean artículos en particular y se votan esos artículos, y como bien dijo el Vicepresidente, esos artículos ya fueron votados, señores, estamos votando los artículos que no fueron modificados con reserva, como por qué habría cualquiera de los grupos que no estuvo de acuerdo con ello votarlo, o sea, sí es bien delicado que se quede la idea en el grupo mayoritario de que eso no está pasando, porque no es así, nosotros damos nuestros debates de frente, como ustedes también los dieron hoy y eso es respetable, tienen mayoría y hoy lograron aprobar el documento que querían, nosotros diferimos y lo expresamos, donde hubo coincidencia los votamos y se aprobaron, esto no es eso.

Entonces creo que todo parte de una confusión y yo sí creo que vale la pena aclararlo aquí porque no es válido que se venga a afirmar a esta tribuna algo falso.

Yo no sé si parte de un desconocimiento, yo no sé si parte de una mala comunicación interna, pero no hubo ningún acuerdo, ni hoy, ni nunca con el Partido Acción Nacional que no se haya cumplido y se va a cumplir siempre.

Entonces, sí hablemos con claridad, no es válido hacer esas afirmaciones, creo que todos aprendimos mucho hoy, si el planteamiento del grupo mayoritario, yo espero que no es que de aquí en adelante a cambio de las reservas se tiene que votar obligatoriamente todo, un paquete legislativo, eso es bien delicado para este Pleno del Senado de la República.

Yo les pediría que revalorarán ese planteamiento, porque es muy grave.

Le digo a cada integrante, a cada integrante del grupo parlamentario de Morena, a cada uno, Senador, y lo estoy haciendo con respeto, y le pido lo mismo, ya no estamos debatiendo el tema, estamos hablando aquí de palabra de honor, de cumplimiento, de acuerdos.

No hubo, jamás, un acuerdo con el Partido Acción Nacional.

Cuando ustedes hagan un acuerdo con el Partido Acción Nacional, el Partido Acción Nacional se los va a cumplir.

Hemos tenido diferencias, precisamente por decir las cosas, no estamos de acuerdo en esto, como lo dijimos ayer o hace dos días con los magistrados, si ese nombre sube no vamos a estar de acuerdo, y lo dije de frente, previo, como lo hemos dicho en otros acuerdos que no hemos firmado.

Dice: ¿por qué no lo quieres firmar? Porque no estamos de acuerdo, porque hay temas que no hemos todavía acordado y hemos ido muy derechos, no vamos a permitir jamás que se afirme que el Partido Acción Nacional incumple la palabra porque eso no es cierto, y creo que deben de saberlo todos ustedes para que sepan con quién están tratando, y nosotros de vuelta también, y creo que así nos vamos a entender bien.

Se vale diferir, todos tenemos derecho a pensar distinto, no se vale afirmar que alguien incumple la palabra cuando eso es mentira, lo digo aquí con mucho respeto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Tiene la palabra la Senadora Olga Sánchez Cordero.

La Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Bueno, a pesar de las diez horas en donde hemos estado en este debate yo estoy satisfecha porque las reservas que se propusieron y que se votaron a favor definitivamente han mejorado la propuesta de ley que puse a su consideración hace unas semanas.

Hace unas semanas presenté el proyecto y mi última mención, la última frase fue que este proyecto se enriquezca con la participación de todos, como no podría haber sido de otra manera.

Así se construyen las leyes, así se construyen las sentencias en un colegiado y así se construye el camino de la vida.

Quiero decirles que el mandato de la Constitución Política, porque es una Constitución Política, en el fondo hay que respetarla porque hay un mandato en el artículo 102 constitucional para crear una Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Dije que estaba a su consideración y construimos y convencimos en algunas partes, es por ello que tomo esta tribuna.

Primero, para agradecerles a todos y a todas ustedes sus aportaciones para construir esta ley.

Segundo, para decirles que no es que yo, en lo personal, como en la alusión, hubiese convenido, sino que prácticamente estaba convencida de que se iba a votar a favor porque pensé que habríamos construido juntos, no fue así, ya nos lo recordó nuestro compañero Senador Ramírez Marín que ahí está el Reglamento.

Pero termino diciendo, han pasado ya cuatro largos años, este artículo 102 fue aprobado por la mayoría de estas fracciones parlamentarias que hoy están votando en contra.

Cumplimos nuestro deber de este mandato, del artículo 102, para tener hoy una Ley Orgánica de la Fiscalía General.

Gracias a todas y a todos por sus aportaciones.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Dé cuenta la Secretaría con el resultado de la votación.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señor Presidente. Conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 61 votos a favor, 37 en contra y cero abstenciones.

Por lo cual se aprueba por mayoría, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 40, 41, 42, 49, 50, 54, 60 y 63; y los Transitorios Primero, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Séptimo, Vigésimo y Vigésimo Tercero del proyecto de Decreto.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. **Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.**

Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos

Ciudad de México a 14 de noviembre de 2018.

Senador Martí Batres Guadarrama
Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República
Presente

Los que suscriben, Sen. Julio Ramón Menchaca Salazar y Sen. Manuel Añorve Baños, Presidentes de las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, respectivamente, hacen de su conocimiento la modificación al texto del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, que contiene proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la cual se propone con el objeto de que sea incorporada en el dictamen.

DICE	DEBE DECIR
Fiscalía General de la República	
Artículo 10. Obligaciones de las y los fiscales ante las víctimas. ... I. Coordinar con las víctimas, sus representantes y organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales que las acompañan y asesoran, la generación de planes de investigación y la práctica de diligencias específicas que las involucren, de conformidad con lo que establezca el Reglamento; II. a VIII. ...	**Artículo 10. Obligaciones de las y los fiscales ante las víctimas.** ... I. Coordinar con las víctimas, sus representantes y organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales que las acompañan y asesoran, la generación de planes de investigación y la práctica de diligencias específicas que las involucren, de conformidad con lo que establezca el Reglamento **de esta Ley**; II. a VIII. ...

010389
CAMARA DE SENADORES
SECRETARIA GENERAL DE
SERVICIOS PARLAMENTARIOS
2018 NOV 15 AM 8:13
RECIBIDO
030030
SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
15 NOV 2018 08:51 AM
SENADORES

41-A

DICE	DEBE DECIR
Artículo 11. Órganos a cargo de la función fiscal ... I. ... II. Titulares de la Fiscalía de Derechos Humanos, la Fiscalía de Delitos Electorales, la Fiscalía de Combate a la Corrupción y la Fiscalía de Asuntos Internos; III. a VI. ...	**Artículo 11. Órganos a cargo de la función fiscal** ... I. ... II. Titulares de la Fiscalía Especializada **en materia de Derechos Humanos**, de la **Fiscalía Especializada de Delitos Electorales**, de la Fiscalía **Especializada en** Combate a la Corrupción y la Fiscalía **Especializada** de Asuntos Internos; III. a VI...
Artículo 14. De la Estructura de la Fiscalía General de la República ... I. a XIII. ... ... La Fiscalía de Derechos Humanos tendrá a su cargo las fiscalías de protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes; de trata de personas; de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; de migrantes; de investigación de tortura, y todas aquellas fiscalías órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General de la República. ~~La Coordinación de Investigación y Persecución Penal contará con un~~	**Artículo 14. De la Estructura de la Fiscalía General de la República** ... I. a XIII. ... ... La Fiscalía **Especializada en Materia de** Derechos Humanos tendrá a su cargo las fiscalías de protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes; de trata de personas; de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; de migrantes; de investigación de tortura, y todas aquellas fiscalías órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General de la República. **El** Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de

órgano administrativo desconcentrado denominado Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias responsable de la aplicación de los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, con independencia técnica y de gestión.	Controversias**, será** responsable de la aplicación de los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, con independencia técnica y de gestión. ... ...
Capítulo III **De la Persona Titular de la Fiscalía General de la República~~, y los Órganos de la Fiscalía~~**	**Capítulo III** **De la Persona Titular de la Fiscalía General de la República**
Artículo 18. Causas graves de remoción de la persona titular de la Fiscalía General de la República. ... I. y II. ... El Ejecutivo Federal deberá acreditar la causa grave que motivó la remoción de la persona titular de la Fiscalía General de la República, e informar al Senado de la República, quien decidirá si objeta o no la remoción, en términos del artículo 102 apartado A, fracciones IV y V.	**Artículo 18. Causas graves de remoción de la persona titular de la Fiscalía General de la República.** ... I. y II. ... El Ejecutivo Federal deberá acreditar la causa grave que motivó la remoción de la persona titular de la Fiscalía General de la República, e informar al Senado de la República, quien decidirá si objeta o no la remoción, en términos del artículo 102 apartado A, fracciones IV y V **de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio de lo**

~~Lo dispuesto en las fracciones anteriores se aplicará~~ sin perjuicio de lo previsto en los artículos 110 y 111 ~~de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.~~	**previsto en los artículos 110 y 111** de la misma.
Artículo 19. Facultades de la persona titular de la Fiscalía General de la República ... I. a XXII. ... XXIII. Las demás que señale esta Ley, el Reglamento, así como otras disposiciones legales aplicables en la materia.	**Artículo 19. Facultades de la persona titular de la Fiscalía General de la República** ... I. a XXII. ... XXIII. Las demás que señale esta Ley, **su** Reglamento, así como otras disposiciones legales aplicables en la materia.
Artículo 20. La Coordinación General de la Fiscalía General de la República. ... I. a III. ... IV. Desarrollar la política del sistema de gestión documental y administración de archivos de la Institución, de conformidad con la normatividad aplicable; V. a XXIII. ... XXIV. Las demás que disponga la Ley y el Reglamento. ...	**Artículo 20. La Coordinación General de la Fiscalía General de la República.** ... I. a III. .... IV. Desarrollar la política del sistema de gestión documental y administración de archivos de la **Fiscalía General**, de conformidad con la normatividad aplicable; V. a XXIII. ... XXIV. Las demás que disponga **ésta** Ley y **su** Reglamento. ...

DICE	DEBE DECIR
Artículo 26. Funciones comunes para las Fiscalías Especializadas ... I. a VII. ... VIII. Las personas titulares de las Fiscalías Especializadas implementarán medidas y estrategias de coordinación con las unidades, mecanismos y otras instancias especializadas creadas por las leyes especiales, tratados internacionales y demás leyes especiales vinculadas con su competencia, a efecto de facilitar el ejercicio del mandato de dichos mecanismos y de la propia Fiscalía, en lo que les corresponde. Las medidas de articulación y colaboración comprenderán acciones tales como: a. a c. ... d. Facilitar el contacto entre los mecanismos especializados y las personas vinculadas a las investigaciones a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos; e. a f. ... IX. y X.	**Artículo 26. Funciones comunes para las Fiscalías Especializadas** ... I. a VII. ... VIII. Las personas titulares de las Fiscalías Especializadas implementarán medidas y estrategias de coordinación con las unidades, mecanismos y otras instancias especializadas creadas por las leyes especiales, tratados internacionales y demás **ordenamientos vinculados** con su competencia, a efecto de facilitar el ejercicio del mandato de dichos mecanismos y de la propia Fiscalía, en lo que les corresponde. Las medidas de articulación y colaboración comprenderán acciones tales como: a. a c. ... d. Facilitar el contacto entre los mecanismos especializados y las personas vinculadas a las investigaciones a cargo de la Fiscalía **Especializada en Materia** de Derechos Humanos; e. a f... IX. y X. ...

DICE	DEBE DECIR
Artículo 27. Funciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos ... La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos conocerá por atracción casos del fuero común o por derivación de otras unidades fiscales al interior de la Fiscalía General de la República, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las ~~**Leyes Generales.**~~	**Artículo 27. Funciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos** ... La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos conocerá, por atracción, casos del fuero común o por derivación de otras unidades fiscales al interior de la Fiscalía General de la República, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes **aplicables**.
Artículo 28. Funciones de la Fiscalía Especializada en ~~materia de~~ Delitos Electorales La Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos establecidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y en cualquier otro ordenamiento legal en la materia. En los procesos electorales, en los procesos de consulta popular y en el desarrollo de mecanismos de democracia directa, realizará despliegues ~~**ministeriales**~~ en el ámbito local y federal con la finalidad de que las y los fiscales puedan atender directamente las denuncias de la ciudadanía.	**Artículo 28. Funciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales** La **Fiscalía Especializada en Delitos Electorales** tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos establecidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y en cualquier otro ordenamiento legal en la materia. En los procesos electorales, en los procesos de consulta popular y en el desarrollo de mecanismos de democracia directa, realizará despliegues **operativos** en el ámbito local y federal con la finalidad de que las y los fiscales puedan atender directamente las denuncias de la ciudadanía. ... ...

DICE	DEBE DECIR
Artículo 29. Funciones de la Fiscalía Especializada en ~~Materia de~~ Combate a la Corrupción	**Artículo 29. Funciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción** ... ...
Artículo 30. Funciones de la Fiscalía de Asuntos Internos.	**Artículo 30. Funciones de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.** ... ...
Artículo 32. De la Coordinación de Métodos de Investigación. ... I. a IX. ... X. Realizar los actos de investigación, en apoyo a la Coordinación de Investigaciones y Persecución Penal, conforme lo determine el Reglamento; XI. y XII.	**Artículo 32. De la Coordinación de Métodos de Investigación.** ... I. a IX. ... X. Realizar los actos de investigación, en apoyo a la Coordinación de Investigaciones y Persecución Penal, conforme lo determine el Reglamento **de ésta Ley**; XI. y XII. ... ...

DICE	DEBE DECIR
Artículo 33. De la Coordinación de Planeación y Administración. ... Apartado A. ... I. a X. ... XI. Coordinar a las unidades y órganos de la Fiscalía General en el suministro de información y asegurar su consolidación, consistencia, oportunidad y confiabilidad para los fines de formulación ~~de la Política de~~ Persecución Penal. Apartado B. ... I. ... II. Ejercer los actos de administración, de mandatario judicial y de dominio que requiera la Fiscalía General de la República, en el ámbito de su competencia para su debido funcionamiento de conformidad con las políticas aprobadas por la persona titular de la Fiscalía General de la República y de conformidad con lo que prevea el Reglamento; III. a XIX. ...	**Artículo 33. De la Coordinación de Planeación y Administración.** ... Apartado A. ... I. a X. ... XI. Coordinar a las unidades y órganos de la Fiscalía General en el suministro de información y asegurar su consolidación, consistencia, oportunidad y confiabilidad para los fines de formulación de**l Plan** de Persecución Penal. Apartado B. ... I. ... II. Ejercer los actos de administración, de mandatario judicial y de dominio que requiera la Fiscalía General de la República, en el ámbito de su competencia para su debido funcionamiento de conformidad con las políticas aprobadas por la persona titular de la Fiscalía General de la República y de conformidad con lo que prevea el Reglamento **de ésta Ley**; III. a XIX. ...

DICE	DEBE DECIR
Artículo 34. ~~El~~ Órgano Interno de Control El Órgano Interno de Control es un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Fiscalía y de particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía de Asuntos Internos. ... Serán facultades del Órgano Interno de Control las siguientes: I. a XVII. ... XVIII. Vigilar, en colaboración con las autoridades competentes el cumplimiento de las normas de control interno, fiscalización, integridad, transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y combate a la corrupción en la Fiscalía General de la República; ~~XIX. Vigilar, en colaboración con las autoridades competentes, el cumplimiento de las normas de control interno, fiscalización, integridad, transparencia, rendición de cuentas,~~	**Artículo 34. Órgano Interno de Control** El Órgano Interno de Control es un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Fiscalía y de particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía **Especializada** de Asuntos Internos. ... Serán facultades del Órgano Interno de Control las siguientes: I. a XVII. ... XVIII. Vigilar, en colaboración con las autoridades competentes el cumplimiento de las normas de control interno, fiscalización, integridad, transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y combate a la corrupción en la Fiscalía General de la República, y

~~acceso a la información y combate a la corrupción en la Fiscalía General de la República, y~~ XX. Las demás que señalen las leyes y reglamentos.	XIX. Las demás que señalen las leyes y reglamentos.
Artículo 40. Integración del Consejo Ciudadano de la Fiscalía El Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República será un órgano especializado de consulta, de carácter honorífico, que ejercerá las funciones establecidas en la presente Ley. Estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución en materia de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, en especial de las mujeres, de los pueblos y las comunidades indígenas, de los niños, niñas, adolescentes y personas migrantes. Sesionará al menos una vez al mes y estará presidido por uno de los integrantes, de acuerdo con ~~la normatividad.~~	**Artículo 40. Integración del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República** El Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República será un órgano especializado de consulta, de carácter honorífico, que ejercerá las funciones establecidas en la presente Ley. Estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución en materia de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, en especial de las mujeres, de los pueblos y las comunidades indígenas, de los niños, niñas, adolescentes y personas migrantes. Sesionará al menos una vez al mes y estará presidido por uno de los integrantes, de acuerdo con **el Reglamento de ésta Ley.** ... ...

DICE	DEBE DECIR
Artículo 42. Facultades del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República. ... I. a IX. ... III. Las demás que establezcan la Ley y su Reglamento.	**Artículo 42. Facultades del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República.** ... I. a IX. ... X. Las demás que establezcan **ésta** la Ley y su Reglamento. ... ...
Artículo 53. Sistema de recepción y canalización ... I. a IV. ... V. Las demás que disponga el Reglamento.	**Artículo 53. Sistema de recepción y canalización** ... I. a IV. ... V. Las demás que disponga el Reglamento **de ésta Ley**. ... ...
Artículo 56. Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera ... I. ... II. ... ~~La salud y clima laboral.~~ El Servicio Profesional de Carrera fomentará la salud física y mental del personal y condiciones laborales adecuadas, como factores de bienestar personal y profesional, individual y colectivo, así como de compromiso, productividad y eficiencia. Para ello, pondrá a disposición del personal	**Artículo 56. Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera** ... I. ... II. ... El Servicio Profesional de Carrera fomentará la salud física y mental del personal y condiciones laborales adecuadas, como factores de bienestar personal y profesional, individual y colectivo, así como de compromiso, productividad y eficiencia. Para ello, pondrá a disposición del personal actividades y servicios de apoyo a la

actividades y servicios de apoyo a la salud y elaborará un manual sobre las condiciones mínimas de desempeño laboral, tomando en consideración la naturaleza de cada función al interior de la institución. III. a IV. ... V. **Separación:** El personal de la Fiscalía General de la República será inamovible, salvo casos de responsabilidad en los términos establecidos en la ley y el Reglamento, así como por razones técnicas que afecten al funcionamiento de la institución y que objetivamente sean acreditadas. VI.	salud y elaborará un manual sobre las condiciones mínimas de desempeño laboral, tomando en consideración la naturaleza de cada función al interior de la institución. III. a IV. **...** V. **Separación:** El personal de la Fiscalía General de la República será inamovible, salvo casos de responsabilidad en los términos establecidos en **ésta L**ey y **su** Reglamento, así como por razones técnicas que afecten al funcionamiento de la institución y que objetivamente sean acreditadas. VI. ... ...
Artículo 60. ~~De las~~ Relaciones Administrativas y Laborales con la Fiscalía General de la República ...	**Artículo 60. Relaciones Administrativas y Laborales con la Fiscalía General de la República** ...
Artículo 61. ~~Del~~ Patrimonio y Presupuesto de la Fiscalía General de la República ... I. a X. ...	**Artículo 61. Patrimonio y Presupuesto de la Fiscalía General de la República** ... I. a X. ...

DICE	DEBE DECIR
TÍTULO TERCERO Recursos	TÍTULO TERCERO De los Recursos
TRANSITORIOS	
DÉCIMO. ~~La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con treinta días hábiles a partir de su nombramiento para convocar una Comisión de Designaciones para dar inicio al proceso de designación de las primeras cinco personas integrantes del Consejo Ciudadano, siguiendo la norma marcada por ésta Ley. Los primeros cinco consejeros terminarán su encargo atendiendo a la siguiente fórmula de escalonamiento: una persona integrante durará en su encargo dos años, una persona integrante tres años, una persona integrante cuatro años, una persona integrante cinco años y una persona integrante seis años.~~	DÉCIMO. Para los efectos de los artículos 40 y 41 de la Ley que se crea en virtud del presente Decreto, el procedimiento para la designación de los primeros Consejeros Ciudadanos iniciará dentro de los treinta días hábiles siguientes a la designación del Fiscal General de la República; observando la siguiente fórmula de escalonamiento: las personas integrantes durarán en su encargo uno, dos, tres, cuatro y cinco años, respectivamente.
…	…
…	…
…	…
…	…

DICE	DEBE DECIR
DÉCIMO PRIMERO. En cumplimiento del artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la Procuraduría General de la República pasarán a la Fiscalía General de la República. ...	**DÉCIMO PRIMERO.** En cumplimiento del artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la Procuraduría General de la República pasarán a la Fiscalía General de la República**, en términos de la presente Ley.** ...
DÉCIMO SÉPTIMO. Dentro del Plan de Transición se establecerá un mecanismo expeditivo para establecer el sistema central de recepción y canalización de los asuntos nuevos que tenga que conocer la Fiscalía General de la República, a que se refiere el artículo 52 de esta Ley.	**DÉCIMO SÉPTIMO.** Dentro del Plan de Transición se establecerá un mecanismo expeditivo para establecer el sistema central de recepción y canalización de los asuntos nuevos que tenga que conocer la Fiscalía General de la República, a que se refiere el artículo **53** de esta Ley.

Por lo anterior, se solicita se considere por el Pleno la presente propuesta de modificación.

Salón de sesiones a los 14 días del mes de noviembre de 2018.

ATENTAMENTE

Sen. Julio Ramón Menchaca Salazar
Presidente de la Comisión de Justicia

Sen. Manuel Añorve Baños
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Gaceta Parlamentaria

Año XXII | Palacio Legislativo de San Lázaro, martes 20 de noviembre de 2018 | Número 5159-IV

CONTENIDO

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República

Anexo IV

Martes 20 de noviembre

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-1P1A.-3562

Ciudad de México, 15 de noviembre de 2018

Túrnese a [illegible] de Justicia, para [illegible]. 20 de [illegible] 2018

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
P R E S E N T E

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a Ustedes expediente que contiene **PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

A t e n t a m e n t e

SEN. ANTARES GUADALUPE VÁZQUEZ ALATORRE
Secretaria

CÁMARA DE DIPUTADOS
Dirección General de
Proceso Legislativo
NOVIEMBRE 20, 2018
10:45 hrs
Fol.
RECIBIDO

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Artículo Único. Se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, como sigue:

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Capítulo I
Marco General de Operación

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente Ley tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables.

Artículo 2. Fines institucionales

La Fiscalía General de la República tendrá como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.

Artículo 3. Principios Rectores

La Fiscalía General de la República regirá su actuación por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de niñez y adolescencia, accesibilidad, debida diligencia e imparcialidad.

En todos los casos deberán observarse los principios de equidad, igualdad sustantiva y no discriminación en razón de la condición étnica, migratoria, de género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencia, orientación o identidad sexual, estado civil o cualquier otra condición o motivo que atente contra la dignidad humana; o bien, tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables.

Artículo 4. Competencia

La Fiscalía General de la República tendrá las competencias señaladas en la Constitución, esta Ley y las demás leyes aplicables.

La Fiscalía General de la República tendrá la facultad de atraer casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las leyes aplicables, en los casos en que se demuestre la inactividad o ineficacia de la fiscalía local competente, garantizándose que la investigación y la persecución de los delitos no se fragmente.

La víctima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción. La negativa de atracción podrá ser impugnada en los términos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 5. Funciones de la Fiscalía General de la República

Corresponde a la Fiscalía General de la República:

I. Investigar y perseguir los delitos;
II. Ejercer la acción penal;
III. Procurar la reparación del daño de las víctimas;
IV. Adoptar y, en su caso, promover la adopción de medidas de protección a favor de las víctimas, testigos u otros sujetos procesales;
V. Intervenir en el proceso de ejecución penal;

VI. Intervenir en las acciones de extradición activa y pasiva;
VII. Intervenir en las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, y
VIII. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables.

Capítulo II
Del Plan de Persecución Penal

Artículo 6. Plan de Persecución Penal

La persona titular de la Fiscalía General de la República aprobará el Plan de Persecución Penal, considerando las prioridades nacionales establecidas en la política criminal para orientar las atribuciones institucionales, las prioridades en la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal y las funciones que deben desempeñar las personas que prestan servicios en la institución; así como los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, mismo que deberá ser aprobado por la mayoría de los miembros presentes del Senado de la República.

El Plan de Persecución Penal, contendrá una estrategia de atención y trámite en la que se deberá considerar:

I. Los distintos análisis de la incidencia delictiva;
II. Los diagnósticos situacionales;
III. Las estadísticas de percepción de la violencia en la ciudadanía;
IV. Los análisis de información elaborados por instancias especializadas;
V. Los diagnósticos elaborados por organizaciones civiles;
VI. Los informes sobre la situación de las víctimas del delito;
VII. Los informes sobre violaciones a los derechos humanos;
VIII. Los demás instrumentos que sean fuente certera de información relacionada con los fenómenos criminales.

El diseño del Plan de Persecución Penal, previo a su aprobación, deberá garantizar la participación ciudadana, así como de otras entidades de seguridad, procuración e impartición de justicia, conforme a la metodología que apruebe el Fiscal General de la República.

Para efectos de control, la persona titular de la Fiscalía General de la República, al inicio de su gestión deberá presentar ante el Senado de la República el Plan de Persecución Penal, previa consulta al Consejo Ciudadano. Asimismo, deberá presentar anualmente ante dicha Cámara los resultados y modificaciones del mismo en su caso.

Artículo 7. Publicidad y transparencia

La Fiscalía General de la República garantizará el acceso a la información pública generada en el marco de sus atribuciones y conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable.

Respecto a las investigaciones relacionadas con las violaciones a los derechos humanos, se estará a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 8. Del mandato o solicitud de colaboración

Los órganos a cargo de la función fiscal y de investigación podrán solicitar la colaboración de cualquier autoridad para la práctica de un acto de investigación o procedimental.

Los actos de colaboración entre la Fiscalía General con autoridades federales, estatales y municipales, se realizarán de conformidad con lo previsto en los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Capítulo IV del Título IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la presente Ley, así como en las disposiciones contenidas en otras normas y convenios de colaboración que se hayan emitido o suscrito.

TÍTULO SEGUNDO
Funciones y Facultades

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 9. Facultades de los órganos fiscales

Los órganos que ejercen la función fiscal tendrán las siguientes facultades:

I. La persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal;
II. Solicitar las medidas cautelares contra los imputados;
III. Buscar y presentar los medios de prueba que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito;
IV. Procurar que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita;
V. Pedir la aplicación de las penas;
VI. Intervenir en todos los asuntos que la ley determine;
VII. Ejecutar los lineamientos de la política y Plan de Persecución Penal dictados por la persona titular de la Fiscalía General de la República;
VIII. Conducir legalmente la investigación de los delitos, ejercer la acción penal y abstenerse o desistirse de ésta, de acuerdo con las leyes aplicables;
IX. Dirigir funcionalmente a las policías en lo concerniente a la investigación de los delitos;
X. Solicitar y efectuar actos de investigación, dentro o fuera del territorio nacional, conforme al principio de libertad probatoria;
XI. Garantizar la protección de las víctimas, testigos y otros sujetos procesales, en el marco de la legislación vigente, por sí o en coordinación con otras entidades públicas o privadas;
XII. Intervenir para garantizar el pleno cumplimiento de las resoluciones judiciales en los términos establecidos por la legislación nacional de ejecución penal;
XIII. Requerir y coordinar la cooperación y coadyuvancia necesaria de instituciones públicas y privadas, en la conducción legal de la investigación y ejercicio de la acción penal;
XIV. Garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas vinculadas con las investigaciones, con independencia de su situación jurídica, así como de las víctimas del delito;
XV. Aplicar los estándares, nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de niñez y adolescencia, así como el enfoque diferencial y especializado, en las investigaciones y procesos penales;
XVI. Aplicar los protocolos de investigación que les competan;

XVII. Informar a las personas extranjeras, especialmente a quienes sean migrantes, víctimas o testigos de delitos cometidos en territorio nacional sobre los derechos que les asisten en materia de apoyo consular en los casos que se requiera, de retornar a su país de origen o permanecer en territorio nacional y, en su caso, de solicitar la condición de visitante por razones humanitarias, la condición de persona refugiada o protección complementaria, así como requerir a la autoridad competente un informe de las acciones que haya realizado respecto de su canalización a las instituciones públicas o privadas especializadas para brindarles la atención correspondiente, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

XVIII. Ejercer todas aquellas funciones que establezcan las leyes procesales o especiales, así como las que disponga la persona Titular de la Fiscalía General a través de la normatividad interna, en el ámbito de su competencia;

XIX. Acceder de conformidad con la legislación aplicable a la información, documentos, registros físicos y electrónicos en poder de las instituciones públicas y privadas;

XX. Citar a los servidores públicos para la realización de actuaciones y diligencias relacionadas con la investigación o el proceso en términos de la legislación aplicable, y

XXI. Las demás que les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás leyes en la materia.

Artículo 10. Obligaciones de las y los fiscales ante las víctimas.

En toda investigación y proceso penal las y los fiscales deberán garantizar los derechos de las víctimas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual tendrá las siguientes obligaciones:

I. Coordinar con las víctimas, sus representantes y organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales que las acompañan y asesoran, la generación de planes de investigación y la práctica de diligencias específicas que las involucren, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley;

II. Proporcionar de forma clara y permanente a las víctimas, sus representantes y asesores, información sobre sus derechos, sobre el estado de los casos y actos de investigación previstos y programados, garantizando su participación en las diligencias que correspondan;

III. Dar acceso a los registros y proporcionar copia gratuita de estos en forma física o magnética solicitadas por las víctimas y sus representantes, con relación a los casos, para facilitar su conocimiento y participación en los mismos;

IV. Garantizar el derecho de las víctimas y sus representantes, a presentar peritajes independientes, facilitando para ello, su acceso a los casos;

V. Garantizar a las víctimas la protección y asistencia a la que tienen derecho, por parte de las entidades públicas o privadas que correspondan, de conformidad con la presente Ley y demás aplicables;

VI. Garantizar a las víctimas o sus familiares, el uso exclusivo de la información genética resguardada en la Base Nacional de Información Genética, para la identificación de cuerpos o restos humanos, en el caso de personas desaparecidas, de conformidad con lo que establezcan los Lineamientos Generales en esta materia;

VII. Garantizar la perspectiva de género, de interculturalidad, de niñez y adolescencia, así como el enfoque diferencial y especializado en la investigación y ejercicio de la acción penal, de acuerdo a las condiciones específicas de las víctimas, y

VIII. Garantizar a las víctimas que lo requieran intérprete y traductor, por sí o en coordinación con otras entidades públicas, privadas o personas en lo individual.

Artículo 11. Órganos a cargo de la función fiscal

La representación de la Fiscalía General de la República corresponde a los siguientes órganos:

I. Titular de la Fiscalía General de la República;

II. Titulares de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos;

III. Titulares de las Fiscalías Especializadas;

IV. Titular de la Coordinación de Investigación y Persecución Penal;

V. Titular de la Coordinación General, en sustitución o suplencia del Fiscal General de la República, de conformidad con lo previsto en la presente Ley, y

VI. Fiscales con nombramiento del Servicio Profesional de Carrera, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento.

Artículo 12. Independencia Técnica de las y los Fiscales

Las y los Fiscales ejercerán sus funciones con independencia y autonomía, libres de cualquier tipo de coacción o interferencia en su actuar. En el ejercicio de sus funciones, se conducirán conforme al criterio de objetividad, con base en el cual dirigirán la investigación de los hechos y circunstancias que prueben, eximan o atenúen la responsabilidad de las personas imputadas, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable y el Plan de Persecución Penal.

Artículo 13. Asignación

Los órganos a cargo de la función fiscal contarán con el personal policial, técnico, pericial, y en general, el relativo a la operación sustantiva de la fiscalía, asignados de forma directa para el cumplimiento de los fines de la función fiscal y del Plan de Persecución Penal, de conformidad con el Servicio Profesional de Carrera.

La persona titular de la Fiscalía General de la República, sustentará la asignación del personal que integrará las unidades fiscales, conforme al Plan de Persecución Penal, quienes no podrán cambiarse de asignación, salvo previo acuerdo de los titulares.

El personal mencionado en el párrafo que antecede también podrá ser asignado, de manera temporal y para el cumplimiento de objetivos específicos, a las fiscalías o unidades de investigación y litigación. El titular de cada una de estas unidades, para todos los efectos, asumirá el mando del personal asignado.

Capítulo II
De la Estructura

Artículo 14. De la Estructura de la Fiscalía General de la República

La Fiscalía General de la República tendrá la siguiente estructura:

I. Fiscal General;
II. Coordinación General;
III. Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos;
IV. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales;
V. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;
VI. Fiscalía Especializada de Asuntos Internos;
VII. Coordinación de Investigación y Persecución Penal;
VIII. Coordinación de Métodos de Investigación;

IX. Coordinación de Planeación y Administración;
X. Órgano Interno de Control;
XI. Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera;
XII. Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; y
XIII. Las fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General, a través de acuerdos generales, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento, y acorde con el Plan de Persecución Penal.

La Fiscalía General de la República, se apoyará de un Consejo Ciudadano el cual cuenta con las facultades señaladas por esta Ley.

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos tendrá a su cargo las fiscalías de protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes; de trata de personas; de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; de migrantes; de investigación de tortura, y todas aquellas fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General de la República.

El Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias será responsable de la aplicación de los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, con independencia técnica y de gestión.

El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de la República contará con un Consejo Técnico, que estará integrado por la persona titular de ia Fiscalía, quien lo presidirá y por los Fiscales a que se refiere esta Ley y estará facultado para aprobar, evaluar y conocer de la ejecución de los programas y proyectos a cargo del Instituto y conocer y aprobar en su caso los informes que presente su titular, el cual será designado por la persona titular de la Fiscalía General de la República.

El Consejo Técnico del Instituto, que deberá sesionar por lo menos tres veces al año y en el cual participará el titular del Instituto, con voz, pero sin voto, se organizará y operará conforme a las reglas que expida al efecto.

Las personas titulares de la Fiscalía General de la República o de la Coordinación General, establecerán los criterios para evitar la fragmentación de las investigaciones y, en su caso, la creación de unidades mixtas de investigación.

La Fiscalía General de la República contará con fiscales, policía de investigación, analistas, auxiliares y peritos, así como con el personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. En los casos relacionados con violencia de género y contra la mujer, el personal deberá ser especializado.

Asimismo, podrá allegarse de personal técnico especializado de otras entidades para colaborar en las investigaciones.

Capítulo III
De la Persona Titular de la Fiscalía General de la República

Artículo 15. Nombramiento del Fiscal

El nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General de la República se sujetará al procedimiento y requisitos previstos en el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se promoverán los principios de transparencia, publicidad, mérito, participación ciudadana, e igualdad y no discriminación.

Artículo 16. De la designación de la persona titular de la Fiscalía General de la República

Quienes aspiren a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos de elegibilidad:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
III. Contar, con una antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho;
IV. Gozar de buena reputación, y
V. No haber sido condenado por delito doloso.

Artículo 17. Buena reputación

La buena reputación, a la que se refiere el artículo 102 constitucional, está compuesta por dos elementos:

I. El Objetivo que se refiere a la calidad profesional relevante, trayectoria en el servicio público o en ejercicio de la actividad jurídica, y

II. El Subjetivo que se refiere a la honorabilidad, alta calidad técnica, compromiso con valores democráticos, independencia y reconocimiento social.

Artículo 18. Causas graves de remoción de la persona titular de la Fiscalía General de la República.

La persona titular de la Fiscalía General de la República, sólo podrá ser removida por el Presidente de la República por incurrir en alguna de las causas graves contempladas en el Capítulo II del Título Tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas o por la comisión de uno o más delitos considerados como graves por la legislación penal u otros ordenamientos.

El Ejecutivo Federal deberá acreditar ante el Senado la causa grave que motivó la remoción de la persona titular de la Fiscalía General de la República, e informar al Senado de la República, quien decidirá si objeta o no la remoción, en términos del artículo 102 apartado A, fracciones IV y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 110 y 111 de la misma.

Artículo 19. Facultades de la persona titular de la Fiscalía General de la República

La persona titular de la Fiscalía General de la República intervendrá por sí o por conducto de los fiscales y demás órganos de la fiscalía en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y las demás disposiciones aplicables y tendrá las siguientes facultades.

I. Dirigir y coordinar la política general de la Fiscalía General de la República, así como vigilar y evaluar la operación de las unidades administrativas que la integran;

II. Representar a la Fiscalía General de la República en las relaciones institucionales con otras entidades u órganos de gobiernos locales, federales, nacionales, e internacionales;

III. Participar en el sistema de atención a las víctimas y ofendidos por la comisión de delitos;

IV. Celebrar los convenios de colaboración con el exterior para el adecuado funcionamiento del Mecanismo de Apoyo Exterior y las demás funciones que se requieran;

V. Solicitar la colaboración de otras autoridades, así como auxiliar a las que lo soliciten, directamente o por conducto de la Coordinación General, en la persecución de los probables autores o partícipes del hecho delictivo, en los términos que dispongan las leyes, acuerdos, convenios, bases y demás instrumentos de colaboración celebrados para tal efecto;

VI. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública;

VII. Autorizar los lineamientos y bases del servicio público de carrera de la Institución y de conformidad con la normatividad aplicable;

VIII. Nombrar y remover a las personas titulares de las Fiscalías Especializadas en los términos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los demás fiscales que considere pertinente, así como otros servidores públicos adscritos a la Fiscalía;

IX. Ejercer atracción sobre los asuntos competencia de la Institución, para conocer personalmente o designar la Fiscalía Especializada, Unidad de Investigación o Coordinación que deberá conocer de los mismos;

X. Instruir la integración de unidades o equipos especiales para la investigación de casos;

XI. Crear coordinaciones, fiscalías, direcciones, unidades y departamentos, de acuerdo con las necesidades institucionales y con el Plan de Persecución Penal;

XII. Presidir la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;

XIII. Ofrecer y entregar recompensas, en los casos, términos y condiciones que determine el Reglamento de esta Ley;

XIV. Determinar el Plan de Persecución Penal en los términos establecidos en la presente Ley, los criterios generales y prioridades en la investigación de los delitos, así como en el ejercicio de la acción penal;

XV. Coordinar acciones y suscribir convenios con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, para el desarrollo de acciones conjuntas, de fortalecimiento institucional y de cumplimiento de los fines institucionales;

XVI. Representar a la Fiscalía General de la República en las relaciones institucionales con otros entidades u órganos nacionales e internacionales;

XVII. Promover la celebración de tratados, convenios, declaraciones o acuerdos internacionales relacionados con los fines institucionales;

XVIII. Decidir sobre la atracción de los casos;

XIX. Coordinar a las unidades y órganos de la Fiscalía General de la República en el suministro de información y asegurar su consolidación, consistencia, oportunidad, y confiabilidad para los fines de formulación de la Política de Persecución Penal;

XX. Establecer las directrices y controlar los procesos de generación, sistematización y análisis de la información para su óptimo resguardo y aprovechamiento;

XXI. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de sistematización y análisis de la información a fin de apoyar el desarrollo de las funciones sustantivas de la Fiscalía;

XXII. Establecer medios de información sistemática y directa a la ciudadanía, para dar cuenta de sus actividades, de conformidad con la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública, y

XXIII. Tener a su cargo la Unidad Especial de Género y Violencia Contra la Mujer, que tendrá como objetivo la institucionalización de la perspectiva y transversalidad de género en todas la áreas de la Fiscalía, a través de la incorporación del enfoque de igualdad y no discriminación a la cultura institucional a través del diseño, planeación, presupuesto, ejecución y evaluación de las políticas de la Fiscalía y será responsable de coordinar y gestionar acciones con todas las áreas de la Fiscalía General de la República, para incorporar en su actuación, los principios rectores de la igualdad sustantiva y de oportunidades entre mujeres y hombres.

XXIV. Aquellas facultades establecidas en los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Fiscal General de la República.

XXV. Las demás que señala esta Ley, su Reglamento, así como otras disposiciones legales aplicables en la materia.

Serán facultades indelegables del Fiscal General de la República las establecidas en las fracciones I, IV, VII, VIII, XI, XIV, XV, XVII, XX y XXIV.

Capítulo IV
De la Coordinación General de la Fiscalía General de la República

Artículo 20. La Coordinación General de la Fiscalía General de la República.

La Coordinación General tendrá las siguientes facultades:

I. Suplir a la persona titular de la Fiscalía General de la República en sus ausencias temporales de hasta tres meses;

II. Representar a la Fiscalía General de la República, en las relaciones institucionales con otras entidades u órganos de gobierno locales, nacionales, federales e internacionales;

III. Elaborar las normas y políticas a las que deberán sujetarse las unidades y los órganos de la Fiscalía, en la materia de su competencia;

IV. Desarrollar la política del sistema de gestión documental y administración de archivos de la Fiscalía General, de conformidad con la normatividad aplicable;

V. Integrar el sistema de información legislativa, jurisprudencial y doctrinal, nacional e internacional a efecto de dar cumplimiento a las atribuciones de la Fiscalía General de la República, en materia de medios de control constitucional de asuntos de su competencia;

VI. Desarrollar y ejecutar las políticas de transparencia y rendición de cuentas, y atender las solicitudes de información pública;

VII. Atender las quejas, recomendaciones y solicitudes de los organismos públicos de derechos humanos, nacionales e internacionales, así como las quejas presentadas por las personas;

VIII. Formalizar los convenios de colaboración con el exterior para el adecuado funcionamiento del Mecanismo de Apoyo Exterior y las demás funciones que se requieran;

IX. Representar legamente a la Fiscalía General de la República, en los asuntos jurídicos de acciones promovidas en su contra o por la propia Fiscalía, así como también ante las autoridades administrativas, judiciales y laborales;

X. Canalizar la información generada por la persona titular de la Fiscalía General de la República, a las áreas correspondientes de la Fiscalía General de la República;

XI. Evaluar riesgos y proteger a personas ofendidas, víctimas, testigos y demás sujetos en los casos en que existan amenazas o riesgos a su integridad o vida;

XII. Coordinar y colaborar con entidades gubernamentales nacionales e internacionales para la implementación de los esquemas de seguridad de víctimas, testigos y demás sujetos procesales;

XIII. Resolver los conflictos que se susciten en el ámbito administrativo con motivo de la interpretación o aplicación de la presente Ley y su Reglamento, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, y demás normatividad institucional, así como presentar opinión a la persona titular de la Fiscalía General de la República, en los casos no previstos, para que resuelva lo conducente en el marco de sus facultades;

XIV. Desahogar las consultas jurídicas internacionales que formulen las diversas áreas de la Fiscalía General de la República, así como de los órganos del Estado Mexicano en materia de procuración de justicia;

XV. Auxiliar a la persona titular de la Fiscalía General de la República, en la elaboración de los lineamientos y bases del servicio profesional de carrera de la institución, de nombramiento y remoción de servidores públicos, de conformidad con la normatividad;

XVI. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de las políticas institucionales del servicio profesional de carrera;

XVII. Coordinar y dirigir a las representaciones de la Fiscalía General de la República en el extranjero;

XVIII. Coordinar y dirigir la implementación de la política de género y violencia contra la mujer así como para la atención con enfoque diferencial para personas colocadas en situación especial de vulnerabilidad en razón de la condición étnica, migratoria, de género, sexo, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, orientación o identidad sexual y de género, estado civil o cualquier otra condición o motivo que atente contra la dignidad humana; o bien, tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas;

XIX. Conocer y resolver los conflictos de competencia entre órganos fiscales, y

XX. Las demás que disponga esta Ley y su Reglamento.

Artículo 21. Cobertura de suplencias de la persona titular de la Fiscalía General de la República.

La persona titular de la Fiscalía General de la República, será suplida en sus excusas, ausencias o faltas temporales por la persona titular de la Coordinación General y a falta de ésta, por quien disponga el Reglamento de esta Ley, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos para ser titular de la Fiscalía General de la República.

En caso de ausencia definitiva, la titularidad de la Fiscalía General de la República, será ocupada temporalmente por la persona titular de la Coordinación General, quien deberá notificar al Senado de la República a efectos que proceda conforme al artículo 102 constitucional.

Capítulo V
De las Fiscalías Especializadas

Artículo 22. De la designación y remoción de las personas titulares de las Fiscalías Especializadas

La persona titular de la Fiscalía General de la República designará a las personas titulares de las Fiscalías Especializadas con base a sus méritos y capacidades para ejercer el cargo y con un perfil previamente establecido.

El Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes podrá objetar dicha designación o remoción, en un plazo máximo de veinte días hábiles, para dichos efectos, el Fiscal General de la República, enviará al Senado de la República una comunicación donde expondrá las razones que sustentan la designación o la remoción de las personas titulares de las fiscalías especializadas.

En su caso, serán removidos en términos de las disposiciones constitucionales, respetando el derecho de audiencia y debido proceso conforme a la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 23. Principio del mérito

Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para la designación de fiscales especializados, los órganos competentes valorarán los antecedentes y trayectoria profesional de las personas candidatas, con el propósito de evaluar los elementos objetivos y subjetivos que se señalan en esta Ley. Dichos requisitos de elegibilidad deberán cumplir como mínimo con los requisitos señalados en el artículo 16 y 17 de esta Ley.

Artículo 24. Transparencia y publicidad

Todo proceso de designación estará sujeto a los principios de máxima transparencia y publicidad, desde su convocatoria hasta la designación. Las autoridades que intervengan en dichos procesos deberán hacer pública, de manera proactiva, oportuna, completa y accesible, toda la información y documentación que se reciba solicite, obtenga o produzca con ocasión del procedimiento, con excepción de aquella que pueda afectar la vida privada e intimidad, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública.

El incumplimiento de lo antes dispuesto será motivo de responsabilidad, en términos de la normatividad administrativa aplicable.

Artículo 25. Participación ciudadana

Cualquier ciudadana y ciudadano podrá participar en el proceso de designación, de los Fiscales Especializados, aportando información fidedigna relevante sobre los aspirantes; así como su apoyo u objeción contra candidaturas específicas, asistiendo y proponiendo preguntas durante las comparecencias, dichas participaciones no conllevan carácter vinculante.

En el caso de que sea rechazada una opinión o recomendación, ésta deberá estar debidamente fundada y motivada.

Artículo 26. Funciones comunes para las Fiscalías Especializadas

Las Fiscalías Especializadas adscritas a la Fiscalía General de la República, gozarán de autonomía técnica y de gestión, en el ámbito de su competencia y tendrán las siguientes atribuciones:

I. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con las instancias públicas o privadas que se requieran para el ejercicio de sus funciones;

II. En ejercicio de su autonomía técnica, participar en estrategias de coordinación internacional con las instancias homólogas o que resulten pertinentes para el ejercicio de sus funciones, dando aviso a la Coordinación General;

III. Elaborar solicitudes de información a instancias, empresas o particulares nacionales;

IV. Elaborar solicitudes de información a instancias, empresas o particulares internacionales, dando aviso a la Coordinación General;

V. Emitir dentro del ámbito de sus competencias la normatividad necesaria para el desempeño de sus funciones;

VI. Presentar un informe público anual sobre los avances y resultados de su gestión; dichos informes deben ser añadidos al informe que la persona titular de la Fiscalía General de la República presentará ante el Congreso;

VII. En los casos que involucre delincuencia organizada, tomar medidas que privilegien la integridad y no fragmentación de la investigación y el ejercicio de la acción penal;

VIII. Las personas titulares de las Fiscalías Especializadas implementarán medidas y estrategias de coordinación con las unidades, mecanismos y otras instancias especializadas creadas por las leyes especiales, tratados internacionales y demás ordenamientos vinculados con su competencia, a efecto de facilitar el ejercicio del mandato de dichos mecanismos y de la propia Fiscalía, en lo que les corresponde. Las medidas de articulación y colaboración comprenderán acciones tales como:

a. El intercambio de información, documentación, bases de datos, a través de sistemas de interoperabilidad;
b. La designación de enlaces;
c. La realización de mesas de trabajo y encuentros en los que participen, inclusive, organizaciones de víctimas, de la sociedad civil especializadas y organismos internacionales;
d. Facilitar el contacto entre los mecanismos especializados y las personas vinculadas a las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos;
e. Las demás que se acuerden y consideren necesarias;

f. La colaboración entre las Fiscalías Especializadas y los mecanismos creados por leyes especiales serán revestidas de flexibilidad y de formalidad mínima, a efecto de no obstaculizar, complicar ni dilatar las mismas.

IX. Para llevar a cabo la función fiscal, las y los fiscales especializados colaborarán con las instancias de seguridad pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y demás instituciones del Ejecutivo Federal, y

X. Las demás que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 27. Funciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos estará a cargo de la conducción legal de la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal en casos de violaciones a los derechos humanos, en el ámbito de sus competencias, independientemente de la clasificación jurídica de los hechos, que afecten la vida, la integridad, el patrimonio y la libertad de las personas; cuando afecten gravemente a la sociedad o por motivo de la condición de vulnerabilidad de las víctimas, o cuando existan falta de garantías para el ejercicio independiente de la investigación en las entidades federativas o cuando la participación de funcionarios o servidores públicos obstaculice la investigación. También conocerá este tipo de hechos cometidos por particulares cuando así lo determine una ley especial.

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos conocerá, por atracción, casos del fuero común o por derivación de otras unidades fiscales al interior de la Fiscalía General de la República, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes generales y especiales.

Artículo 28. Funciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos establecidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y en cualquier otro ordenamiento legal en la materia.

En los procesos electorales, en los procesos de consulta popular y en el desarrollo de mecanismos de democracia directa, realizará despliegues operativos en el ámbito local y federal con la finalidad de que las y los fiscales puedan atender directamente las denuncias de la ciudadanía.

Deberá informar mensualmente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las investigaciones, así como las determinaciones o procesos según sea el caso.

Igualmente, de forma anual, presentará ante la persona titular de la Fiscalía General de la República, al Senado y al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, este último sólo en los casos en que exista correlación entre los delitos electorales y posibles actos de corrupción cometidos desde la función pública, un informe sobre actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 29. Funciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos contenidos en el Título Décimo del Libro Segundo del Código Penal Federal.

La persona titular de la Fiscalía participará como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, atendiendo las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley correspondiente.

Igualmente, presentará de forma anual ante el Senado de la República un informe público y de fácil acceso, respecto de sus actividades y resultados, mismo que será entregado a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Artículo 30. Funciones de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.

La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos estará a cargo de las investigaciones y el ejercicio de la acción penal en delitos cometidos por personal adscrito a los órganos sustantivos y administrativos de la Fiscalía General de la República, en ejercicio de sus funciones.

La persona titular de la Fiscalía General de la República podrá crear unidades de investigación para casos especiales, incluyendo la probable comisión de delitos por parte de integrantes de la Fiscalía de Asuntos Internos.

Establecerá lineamientos técnico-jurídicos para el monitoreo, la supervisión, investigación, revisión y control de la actuación de los fiscales, los policías de investigación, peritos, analistas, técnicos y en general de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, en términos del Plan de Persecución Penal.

En caso de excusas, ausencias o faltas temporales de las o los fiscales o coordinadores, éstos serán suplidos por el funcionario con rango inmediato inferior.

Capítulo VI
De las Coordinaciones de la Fiscalía General de la República

Artículo 31. De la Coordinación de Investigación y Persecución Penal

La Coordinación de Investigación y Persecución Penal tendrá las siguientes facultades:

I. Coordinar la gestión, movilidad e integración de las unidades de investigación y litigación, las cuales realizarán las investigaciones y el ejercicio de la acción penal, así como de los equipos de investigación que los conforman;
II. Realizar los actos de investigación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes aplicables;
III. Coordinar los esquemas de colaboración con otras autoridades federales o locales en la materia de sus competencias;
IV. En los casos que así se requiera, conducir legalmente la investigación y ejercer la acción penal;
V. Cuando así se requiera, designar a las y los fiscales encargados de los casos, salvo que el nombramiento sea realizado por la persona titular de la Fiscalía General de la República;

VI. Garantizar la independencia y condiciones de trabajo de las unidades de investigación y litigación por el tiempo que sean creadas;

VII. Establecer las unidades de investigación especializada para ejercer la acción penal en materia de delitos de delincuencia organizada y de secuestro, conforme a las leyes en la materia;

VIII. Ejecutar las extradiciones, así como las acciones relacionadas con la cooperación internacional;

IX. Conocer y resolver sobre las solicitudes de atracción, que el Fiscal General le encomiende;

X. Coordinar, dirigir y canalizar el ejercicio de las atribuciones de las y los fiscales en materia internacional;

XI. Las demás que señale la ley.

Artículo 32. De la Coordinación de Métodos de Investigación.
La Coordinación de Métodos de Investigación tendrá las siguientes facultades:

I. Coordinar y asignar los servicios periciales, la policía de investigación, técnicos y analistas que formen parte de la Fiscalía General de la República;

II. Crear la Base Nacional de Información Genética, que contenga los resultados de la información genética proporcionada por víctimas o familiares de personas desaparecidas, en los términos que establezcan los Lineamientos Generales en esta materia;

III. Analizar de forma estratégica los datos agregados del fenómeno criminal, la realización de estudios criminógenos y geo delictivos, así como la información de contexto que se considere relevante para coadyuvar en la investigación;

IV. Efectuar reportes estratégicos sobre criminalidad regional y nacional, identificación de patrones, estructuras y organizaciones, así como cualquier otro que se considere necesario para la investigación de los casos;

V. Servir de apoyo para el análisis técnico científico de los actos de investigación y datos de prueba, a solicitud de las y los fiscales para el desarrollo de sus investigaciones;

VI. Apoyar la verificación y control de las pruebas periciales y exámenes forenses practicados a solicitud de las autoridades competentes;

VII. Suministrar información a la Coordinación de Planeación y Administración, relativa a los patrones, estructuras y organizaciones criminales para el diseño de las políticas institucionales y toma de decisiones;

VIII. Comunicar la información de utilidad relativa a la seguridad pública que obtenga en el ejercicio de sus funciones a la persona titular de la Fiscalía General de la República, para que la remita a la autoridad competente;

IX. Efectuar reportes estratégicos, así como cualquier otro que se considere necesario sobre el análisis de la criminalidad y de contexto que oriente las políticas de operación de la Fiscalía y contar con un área de análisis criminal que analice sistemática y oportunamente la información relativa a los asuntos de la Fiscalía General de la República, para su procesamiento en materia de estrategia e inteligencia operativa;

X. Realizar los actos de investigación, en apoyo a la Coordinación de Investigaciones y Persecución Penal, conforme lo determine el Reglamento de esta Ley;

XI. Evaluar riesgos y proteger a las personas ofendidas, víctimas, testigos y demás sujetos procesales, en los casos que existan amenazas o riesgos a su integridad o vida, y

XII. Coordinar y colaborar con entidades gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, para la implementación de los esquemas de seguridad de víctimas, testigos y demás sujetos procesales.

El personal de la Coordinación de Métodos de Investigación podrá ser comisionado conforme a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 33. De la Coordinación de Planeación y Administración.

La Coordinación de Planeación y Administración será el área encargada de formular ante la persona titular de la Fiscalía General de la República el Plan de Persecución Penal, y será la responsable de la información institucional, así como de la administración y gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a través de las áreas correspondientes.

Apartado A.

Ejercerá las siguientes facultades, en materia de Planeación Estratégica:

I. Proponer y dar seguimiento a las políticas de vinculación y coordinación interinstitucional en el ámbito de su competencia;

II. Apoyar las labores necesarias para el seguimiento y evaluación de la política y Plan de Persecución Penal definidos por la Fiscalía;

III. Coordinar la integración del Plan de Persecución Penal de las fiscalías especializadas;

IV. Definir indicadores y metas institucionales, de acuerdo con el Plan de Persecución Penal, así como dar seguimiento puntual a los mismos;

V. Proponer a la persona titular de la Fiscalía General las adecuaciones necesarias al Plan de Persecución Penal, de acuerdo con los estudios y análisis de su competencia;

VI. Definir las políticas institucionales para el desarrollo y modernización institucional basada en resultados y evaluación del desempeño;

VII. Consolidar la información administrativa y financiera para elaborar estudios e informes;

VIII. Establecer directrices para la generación, sistematización e integración de los informes de las distintas unidades y órganos de la Fiscalía;

IX. Realizar estudios sobre el desarrollo organizacional de la Fiscalía;

X. Recopilar los reportes estratégicos de la Coordinación de Métodos de Investigación, así como cualquier otro que se considere necesario sobre el análisis de la criminalidad y de contexto para orientar las políticas de operación de la Fiscalía, y

XI. Coordinar a las unidades y órganos de la Fiscalía General en el suministro de información y asegurar su consolidación, consistencia, oportunidad y confiabilidad para los fines de formulación del Plan de Persecución Penal.

Apartado B.

Ejercerá las siguientes facultades, en materia de Administración:

I. Representar legalmente a la Fiscalía General de la República, en materia de administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, financieros, patrimoniales, presupuestales y cualquier otro, de conformidad con las políticas aprobadas por la persona titular de la Fiscalía General de la República;

II. Ejercer los actos de administración, de mandatario judicial y de dominio que requiera la Fiscalía General de la República, en el ámbito de su competencia para su debido funcionamiento de conformidad con las políticas aprobadas por la persona titular de la Fiscalía General de la República y de conformidad con lo que prevea el Reglamento de esta Ley;

III. Proponer a la persona titular de la Fiscalía General de la República, para su aprobación, los criterios generales en materia administrativa, en términos de la legislación aplicable;

IV. Aprobar el uso de los recursos financieros de la Fiscalía en materia de contrataciones, ejercicio del gasto, adquisiciones, arrendamientos y contratación de bienes, servicios y obras públicas, así como de asociaciones público-privadas de conformidad con la normativa aplicable;

V. Administrar y ejercer los fondos federales destinados a la procuración de justicia, de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables, transparentando su aplicación;

VI. Conformar el comité de adquisiciones, de conformidad con el Reglamento que emita la persona titular de la Fiscalía General de la República;

VII. Proporcionar los servicios administrativos generales que requieran las áreas de la Fiscalía General de la República;

VIII. Suscribir convenios o cualquier otro acto o instrumento jurídico en el ámbito administrativo de su competencia;

IX. Colaborar con la Coordinación General para asegurar la suficiencia presupuestal para el cumplimiento y desarrollo de los rubros que contempla el Servicio Profesional de Carrera;

X. Emitir las normas para que los recursos patrimoniales y financieros sean aprovechados y aplicados respectivamente, con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa; así como, realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias, todo lo anterior en coordinación con la persona titular de la Fiscalía General de la República;

XI. Integrar los informes específicos o individuales, requeridos por la Auditoría Superior de la Federación en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;

XII. Proponer a la persona titular de la Fiscalía General de la República a los auditores externos, así como normar y controlar su desempeño;

XIII. Consolidar la información administrativa y financiera para elaborar estudios e informes;

XIV. Realizar estudios sobre el desarrollo organizacional de la Fiscalía;

XV. Coordinar la integración y elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de la Fiscalía con base a las necesidades detectadas en el Plan de Persecución Penal y para el apoyo administrativo del mismo;

XVI. Establecer y controlar las políticas y procedimientos de adquisición, aprovechamiento y administración de bienes y servicios;

XVII. Elaborar y orientar el plan de inversiones en infraestructura física;

XVIII. Tener a su cargo la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, financieros, patrimoniales, presupuestales y cualquier otro asignado a la Fiscalía General de la República, de conformidad con las políticas aprobadas por la persona titular de la Fiscalía General de la República, en esta materia, y

XIX. Las demás que señale la presente Ley y su Reglamento, así como la normativa emitida por la persona titular de la Fiscalía General de la República.

Capítulo VII
De la Transparencia, Rendición de Cuentas y Acción Ciudadana

Artículo 34. Órgano Interno de Control

El Órgano Interno de Control es un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Fiscalía y de particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.

El Órgano Interno de Control, su titular y el personal adscrito al mismo, estarán impedidos de intervenir o interferir en forma alguna en el desempeño de las facultades y ejercicio de la Fiscalía General de la República.

Serán facultades del Órgano Interno de Control las siguientes:

I. Las que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;

II. Verificar que el ejercicio de gasto de la Fiscalía se realice conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados;

III. Realizar auditorías, revisiones y evaluaciones y presentar al Fiscal General de la República, los informes correspondientes con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia, eficacia y legalidad en su gestión y encargo, así como emitir recomendaciones;

IV. Revisar que las operaciones presupuestales que realice la Fiscalía, se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables y, en su caso, determinar las desviaciones de las mismas y las causas que les dieron origen;

V. Promover ante las instancias correspondientes, las acciones administrativas y legales que se deriven de los resultados de las auditorías;

VI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de la Fiscalía;

VII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos de la Fiscalía, empleando la metodología que determine;

VIII. Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables;

IX. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas y órganos de la Fiscalía General para el cumplimento de sus funciones;

X. Ejercer en el ámbito de la Fiscalía General de la República, en lo que resulte conducente, las facultades que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Asociaciones Público Privadas, prevén para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública;

XI. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de la Fiscalía en los términos de la normativa aplicable;

XII. Participar, conforme a las disposiciones vigentes, en los comités y subcomités de los que el Órgano Interno de Control forme parte, e intervenir en los actos que se deriven de los mismos;

XIII. Formular el anteproyecto de presupuesto del Órgano Interno de Control;

XIV. Presentar al Fiscal General de la República los informes, previo y anual, de resultados de su gestión;

XV. Presentar al Fiscal General de la República los informes respecto de los expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su caso, sobre la imposición de sanciones en materia de responsabilidades administrativas;

XVI. Emitir el Código de Ética de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la procuración de justicia;

XVII. Establecer mecanismos, en coordinación con la Coordinación General, que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;

XVIII. Vigilar, en colaboración con las autoridades competentes el cumplimiento de las normas de control interno, fiscalización, integridad, transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y combate a la corrupción en la Fiscalía General de la República, y

XIX. Las demás que señalen las leyes y reglamentos.

Artículo 35. Designación del titular del Órgano Interno de Control

El titular del Órgano Interno de Control será designado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 36. Requisitos para ser el titular del Órgano Interno de Control

El titular del Órgano Interno de Control deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener treinta y cinco años;

II. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año;

III. Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público;

IV. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

V. Contar con reconocida solvencia moral;

VI. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación, a despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios a la Fiscalía, o haber fungido como consultor o auditor externo de la Fiscalía en lo individual durante ese periodo;

VII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y

VIII. No haber sido Secretario de Estado, Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación.

Artículo 37. Duración del encargo de titular del Órgano Interno de Control

El titular del Órgano Interno de Control durará en su encargo cuatro años y podrá ser designado por un periodo inmediato posterior al que se haya desempeñado, previa postulación y cumpliendo los requisitos previstos en esta Ley y el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tendrá un nivel jerárquico igual al de un Coordinador o su equivalente en la estructura orgánica de la Fiscalía, y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación a que se refiere el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El titular del Órgano Interno de Control deberá rendir informe semestral y anual de actividades al Fiscal General de la República, del cual marcará copia a la Cámara de Diputados.

Artículo 38. Responsabilidades de los servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control

El titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República será sujeto de responsabilidad en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y podrá ser sancionado de conformidad con el procedimiento previsto en la normatividad aplicable.

Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, serán sancionados por el titular del Órgano Interno de Control o el servidor público en quien delegue la facultad, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 39. Obligaciones ante el Sistema Nacional Anticorrupción

El titular del Órgano Interno de Control deberá inscribir y mantener actualizada la información correspondiente del Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, de todos los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 40. Integración del Consejo Ciudadano de la Fiscalía

El Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República será un órgano especializado de consulta, de carácter honorífico, que ejercerá las funciones establecidas en la presente Ley. Estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución en materia de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, en especial de las mujeres, de los pueblos y las comunidades indígenas, de los niños, niñas, adolescentes y personas migrantes. Sesionará al menos una vez al mes o cuando deba conocer de un tema para su opinión y visto bueno y estará presidido por uno de los integrantes, de acuerdo con el Reglamento de esta Ley.

Las personas integrantes del Consejo Ciudadano durarán en su encargo cinco años improrrogables y serán renovados de manera escalonada. Sólo podrán ser removidas por inasistencias reiteradas a las sesiones del Consejo, por divulgar información reservada o confidencial o por alguna de las causas establecidas en la normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Las personas integrantes del Consejo Ciudadano tendrán obligación de guardar confidencialidad cuando por razón de su función tuvieren acceso a información confidencial o reservada.

Las personas titulares de la Fiscalía General de la República y de las Fiscalías Especializadas podrán asistir a las reuniones con voz, pero sin voto.

Artículo 41. Designación de las personas integrantes del Consejo

El Senado nombrará una Comisión de selección, integrada por cinco personas de reconocida honorabilidad y trayectoria, debiendo justificar las razones de la selección. La citada Comisión abrirá una convocatoria pública por un plazo de quince días para recibir propuestas para ocupar el cargo de Consejero Ciudadano. Posteriormente, el Senado elegirá entre los candidatos a cinco personas, respetando los principios a que se refieren los artículos 22, 23 y 24 de esta Ley.

Esta lista será dada a conocer por diez días para que la sociedad se pronuncie y, en su caso, presente sus objeciones, que serán tomadas en cuenta para motivar la elección. Una vez concluido este proceso, el Senado hará público el nombre de las personas seleccionadas.

Artículo 42. Facultades del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República.

El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes facultades:

I. Opinar, dar seguimiento y emitir recomendaciones públicas sobre el contenido e implementación del Plan de Persecución Penal que presente la persona titular de la Fiscalía General de la República, así como los programas anuales de trabajo y su implementación;
II. Opinar sobre la creación de nuevas estructuras propuestas por la persona titular de la Fiscalía General de la República;
III. Hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control cuando advierta una probable responsabilidad administrativa;
IV. Dar opiniones para fortalecer el presupuesto de la institución;
V. Opinar sobre la normatividad interna de la Fiscalía General de la República;
VI. Opinar sobre las propuestas y planes del Servicio Profesional de Carrera;
VII. Establecer las reglas operativas del Consejo;
VIII. En general, emitir opiniones y recomendaciones sobre el desempeño de la Fiscalía y sus áreas;
IX. Para un mejor desarrollo de sus funciones el Consejo Ciudadano podrá invitar a personas expertas, nacionales e internacionales, y
X. Las demás que establezcan esta Ley y su Reglamento.

Las opiniones y recomendaciones emitidas por el Consejo no son vinculantes. La Fiscalía y las áreas a las que vayan dirigidas las recomendaciones deberán fundar y motivar las razones por las cuales se acepta o rechaza la recomendación. Siempre serán de carácter público.

Cualquier intromisión en aspectos sustantivos de la función fiscal tendrá como sanción la remoción del Consejero respectivo, por parte de la persona titular de la Fiscalía General de la República.

Artículo 43. De la Secretaría Técnica del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República.

Para el ejercicio de sus funciones, el Consejo Ciudadano se auxiliará con una Secretaría Técnica, así como con el personal que se requiera para el desempeño de sus funciones. Las y los integrantes de la Secretaría Técnica se seleccionarán por el Consejo Ciudadano, a partir de la propuesta que elabore el Servicio Profesional de Carrera, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley.

Capítulo VIII
De las Responsabilidades y Sanciones

Artículo 44. Régimen de Responsabilidades

Los servidores públicos de la Fiscalía General de la República en el ejercicio de sus funciones, están sujetos al régimen de responsabilidades a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de conformidad con lo dispuesto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Ley.

El personal de la Fiscalía en el desempeño de sus funciones deberá actuar con estricto apego al Código de Ética que emita el Órgano Interno de Control, por lo que cualquier incumplimiento constituirá una falta administrativa no grave en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 45. Incompatibilidades con el servicio público

En el desempeño de sus funciones, los servidores públicos de la Fiscalía General de la República no podrán:

I. Desempeñar empleo, cargo o comisión remunerada de cualquier naturaleza de derecho público o privado, nacional o internacional, salvo los de carácter docente, cultural, de beneficencia y aquellos que autorice la Fiscalía General de la República, siempre y cuando no sean incompatibles con sus funciones en la misma;

II. Conocer de asuntos cuando pudieran incurrir en conflictos de interés;

III. Ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona;

IV. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el carácter de heredero o legatario o se trate de sus ascendientes, descendientes, hermanos, adoptante o adoptado, y

V. Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, síndico, administrador, interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista, árbitro o arbitrador.

Los servidores públicos de la Fiscalía General de la República que contravengan esta disposición estarán sujetos a las faltas determinadas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como las leyes especiales.

Capítulo IX
De la Investigación y Acción Penal

Artículo 46. Unidades de investigación y litigación

Las unidades de investigación y litigación serán órganos compuestos por equipos de investigación y litigación, que tienen como función organizar y gestionar la estrategia de la Fiscalía General de la República de forma flexible y eficiente establecida en el Plan de Persecución Penal. Estarán dirigidas por fiscales y se integrarán por los equipos de investigación necesarios para su adecuado funcionamiento.

Artículo 47. Equipos de investigación y litigación

Los equipos de investigación serán las unidades orgánicas encargadas del desarrollo de las investigaciones y el ejercicio de la acción penal. Los equipos de investigación serán dirigidos por fiscales y además serán integrados, entre otros, por peritos, policía de investigación, analistas y técnicos que correspondan en cada caso.

Artículo 48. Equipos mixtos de investigación y litigación

La persona titular de la Fiscalía General de la República, podrá conformar equipos mixtos de investigación con integrantes de distintas unidades fiscales y coordinaciones, así como con personal de otras fiscalías o procuradurías de las entidades federativas a través de acuerdos de colaboración institucional, para el desarrollo de investigaciones y el ejercicio de la acción penal en el ámbito de sus competencias, cuando exista concurrencia de delitos, de fenómenos delictivos o para fines orientados al cumplimiento del Plan de Persecución Penal. En todos los casos se cuidará la integridad y no fragmentación de las investigaciones.

Los acuerdos de colaboración con las entidades federativas deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y el órgano de difusión de la entidad federativa correspondiente.

Artículo 49. Unidades de Análisis Estratégico y de Contexto

Tanto las Fiscalías Especializadas como la Coordinación de Investigación y Persecución Penal contarán con las Unidades de Análisis Estratégico y de Contexto para el cumplimiento de sus funciones y del Plan de Persecución Penal, las cuales tendrán, entre otros, los siguientes objetivos:

I. La identificación de patrones de actuación reiterada, sistemática o generalizada sobre ciertas estructuras o fenómenos criminales;
II. La identificación de niveles y tipos de responsabilidad o de los partícipes de los hechos delictivos incluyendo servidores públicos;
III. La identificación de niveles de responsabilidad de estructuras delincuenciales o paralelas al Estado, y
IV. La identificación de aspectos multifactoriales y multidelictivos de los fenómenos criminales.

Estas unidades actuarán coordinadamente con la Coordinación de Métodos de Investigación y será integrada por analistas, técnicos y expertos en las materias de su competencia.

Artículo 50. Comisiones Especiales

La persona titular de la Fiscalía General de la República podrá crear comisiones especiales, de carácter temporal, que gozarán de autonomía técnica y de gestión, para colaborar en las investigaciones de fenómenos y delitos que debido a su contexto, a juicio del fiscal, amerite su creación, incluyendo aquellos sobre feminicidios, violencia sexual, trata de personas, o que impliquen violaciones a derechos humanos, en especial de los pueblos y las comunidades indígenas, de los niños, niñas, adolescentes y personas migrantes. Los trabajos, recomendaciones y conclusiones de las comisiones podrán ser tomados en consideración por los órganos de la función fiscal, para la investigación y el ejercicio de la acción penal de los asuntos correspondientes.

Las Comisiones Especiales tendrán como enfoque el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición. Serán integradas, de manera multidisciplinaria, por expertos de reconocida experiencia, tanto nacionales o internacionales en las materias que se requieran, organismos internacionales, organismos de la sociedad civil, universidades públicas y privadas y colectivos de víctimas.

Artículo 51. De la operación territorial estratégica

El despliegue territorial de la operación sustantiva definida en las normas y políticas centrales se llevará a cabo a través de unidades o equipos de investigación y litigación, cuya distribución, tamaño, recursos y temporalidad se apegarán al Plan de Persecución Penal y a los fines de la Fiscalía.

Las unidades o equipos deberán estar integrados por el personal necesario para ejercer la función fiscal dentro del ámbito territorial y por el tiempo que hubiere sido establecido por las fiscalías o coordinaciones conforme al Plan de Persecución Penal.

Las unidades o equipos desplegados se desintegrarán al cumplirse el objetivo establecido, debiendo reubicar al personal en otras unidades o equipos de investigación y litigación.

Artículo 52. Criterios para el despliegue territorial

La distribución territorial de las unidades o equipos de investigación y litigación se definirán conforme a cualquiera de los siguientes criterios:

I. La atención específica de fenómenos criminales;
II. La regionalización y coordinación en materia de procuración de justicia;
III. La distritación judicial, y
IV. El acceso a la justicia.

Artículo 53. Sistema de recepción y canalización

La Coordinación General establecerá un sistema central de recepción y canalización de los asuntos que sean competencia de la Fiscalía General de la República y al respecto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Recibir y canalizar los casos a los órganos competentes de la Fiscalía para su conocimiento, investigación o tramitación con base en el Plan de Persecución Penal;
II. Canalizar los casos y asuntos que no son competencia de la Fiscalía General de la República a las autoridades competentes;
III. Cooperar con otras instancias federales y locales para la atracción y remisión de asuntos;
IV. Orientar y canalizar a las personas víctimas con los órganos y autoridades competentes para su protección y asistencia, y
V. Las demás que disponga el Reglamento de esta Ley.

Podrá recomendar la creación de unidades o equipos de investigación y litigación para la atención de casos relevantes.

Determinará la competencia de las fiscalías o unidades de investigación y litigación para la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal.

Artículo 54. De la atención a las víctimas en territorio extranjero, a través del Mecanismo de Apoyo Exterior

A través del Mecanismo de Apoyo Exterior previsto por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; así como de la Ley General de Víctimas, los órganos de la función fiscal garantizarán a las víctimas tanto en el territorio nacional como en el extranjero en igualdad de condiciones el derecho a la verdad, justicia y reparación integral.

El Mecanismo de Apoyo Exterior deberá garantizar a todas las víctimas y sus representantes que se encuentren en el extranjero, el derecho a presentar denuncias, declaraciones y cualquier tipo de pruebas, documentación o información relacionada con los hechos denunciados; a presentar peticiones, a participar activamente en el desarrollo de las investigaciones y procesos penales, así como a recibir información completa y oportuna cuando la víctima lo requiera.

Las comunicaciones entre fiscales, víctimas y representantes legales deberá realizarse con fluidez, agilidad y debida diligencia, pudiendo utilizarse para el efecto cualquier medio de comunicación. De la misma manera se llevarán a cabo las comunicaciones entre la o el fiscal encargado del caso y las autoridades mexicanas que se encuentren en las sedes diplomáticas y consulares a cargo del Mecanismo de Apoyo Exterior; la Fiscalía podrá establecer los agregados que se requiera conforme al Plan de Persecución Penal.

Capítulo X
Del Servicio Profesional de Carrera

Artículo 55. Naturaleza y finalidad del Servicio Profesional de Carrera

El Servicio Profesional de Carrera será el sistema integral de regulación del empleo público de todo el personal que preste servicios en la Fiscalía General de la República, que garantizará la igualdad de oportunidades, idoneidad y mérito para el ingreso y reclutamiento, ascensos, estímulos y recompensas.

El sistema integral del Servicio Profesional de Carrera estará a cargo del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera, el cual contará con autonomía técnica y de gestión. Su estructura, procedimientos y gestión estarán regulados en el Reglamento correspondiente.

El Servicio Profesional de Carrera será organizado con la finalidad de estimular el profesionalismo, la rectitud, la independencia técnica; fomentar la iniciativa, innovación y la eficiencia institucional; y prevenir las violaciones a derechos humanos, así como los actos de corrupción.

Artículo 56. Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera

El Servicio Profesional de Carrera se integra por los siguientes subsistemas:

I. **Ingreso:** El reclutamiento y selección comprende el proceso de detección de necesidades de dotación de personal, elaboración de perfiles de puesto, convocatorias, evaluación y selección de aspirantes.

La formación inicial comprende las estrategias de nivelación de competencias técnicas y diseño de planes de desarrollo para los operadores de nuevo ingreso.

El proceso de inducción comprende el proceso de incorporación a la institución y el periodo a prueba de cada funcionario.

II. **Desarrollo:** Entrenamiento y fortalecimiento continuo de capacidades comprende el desarrollo continuo y progresivo de las capacidades de los servidores públicos, la construcción, evaluación y monitoreo de planes de carrera individuales; la detección de necesidades de formación y la evaluación, que se llevarán a cabo tomando como base el impacto en el desempeño individual. Los estímulos y recompensas se establecerán en el Plan de Gestión del Desempeño y Desarrollo Humano, de acuerdo con el presupuesto y mediante disposiciones generales, a través de un sistema de estímulos. Dicho sistema podrá incluir estímulos económicos y no económicos, programados semestralmente con base al cumplimiento de metas individuales y grupales. Los estímulos y recompensas se otorgarán con base a los criterios establecidos en el plan de desempeño, el cual contendrá objetivos y resultados esperados, de acuerdo con cada puesto.

El Servicio Profesional de Carrera fomentará la salud física y mental del personal y condiciones laborales adecuadas, como factores de bienestar personal y profesional, individual y colectivo, así como de compromiso, productividad y eficiencia. Para ello, pondrá a disposición del personal actividades y servicios de apoyo a la salud y elaborará un manual sobre las condiciones mínimas de desempeño laboral, tomando en consideración la naturaleza de cada función al interior de la institución.

III. **Evaluación:** El sistema de gestión del desempeño comprenderá el diseño de lineamientos e instrumentos de evaluación del desempeño orientados a valorar las cualidades individuales y colectivas de los operadores, estableciendo la periodicidad y los mecanismos de recolección y análisis de la información. Dichos instrumentos tendrán como objetivo la profesionalización y eficiencia en el desempeño de funciones y darán lugar a la creación de planes de mejora del desempeño.

Comprenderá lineamientos técnico-jurídicos para el monitoreo, la supervisión, investigación, revisión y control de la actuación de fiscales, policías de investigación, peritos, analistas, técnicos y en general de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, en términos del Plan de Persecución Penal.

IV. **Promoción:** El sistema de ascensos se regirá por la evaluación formal, objetiva y periódica del desempeño de cada servidor público.

Los ascensos y promociones comprenden la dirección y rectoría de todos los concursos que tengan por objeto ocupar un cargo vacante o de reciente creación sujetos al Sistema de Servicio Profesional de Carrera. Estos procesos se regirán por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad e independencia, equidad de capacidades y velarán en todo momento por la erradicación de la violencia contra las mujeres al interior de la institución.

V. **Separación:** El personal de la Fiscalía General de la República será inamovible, salvo casos de responsabilidad en los términos establecidos en esta Ley y su Reglamento, así como por razones técnicas que afecten al funcionamiento de la institución y que objetivamente sean acreditadas.

VI. **Reincorporación:** La reincorporación comprenderá las acciones y mecanismos que tome la Fiscalía para reinstalar al personal que previamente se haya separado de manera voluntaria, o bien, por razones institucionales excluyentes de responsabilidad y que cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto.

Todos estos subsistemas se desarrollarán de manera pública y de acuerdo con el Reglamento correspondiente.

Artículo 57. Derechos del personal de la Fiscalía General de la República

Además de las responsabilidades y obligaciones que contiene esta Ley, los sujetos a que se refiere la misma tendrán los siguientes derechos:

I. A participar en igualdad de oportunidades en el Servicio Profesional de Carrera conforme a las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y demás normatividad aplicable;
II. A que la aplicación de las reglas del Servicio Profesional de Carrera sea objetiva, justa, transparente e imparcial;
III. A desempeñar una carrera conforme a este servicio que se base en el mérito, en la superación constante y a tener estabilidad, conforme a las disposiciones aplicables, en el desempeño de su función;
IV. A desempeñarse en su asignación, contando con condiciones adecuadas y dignas de trabajo y a formarse de manera integral;
V. A contar con una remuneración adecuada, digna, irrenunciable y que corresponda a los servicios prestados en la fiscalía;
VI. A profesionalizarse y actualizarse de manera permanente para un mejor desempeño de sus funciones;
VII. A recibir estímulos, promociones y ascensos horizontales y verticales con motivo del desempeño de su función, y
VIII. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables.

Artículo 58. Plan de Gestión de Desempeño y Desarrollo Humano

El titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera elaborará un Plan de Gestión de Desempeño y Desarrollo Humano en coordinación con la Coordinación de Planeación y Administración y lo someterá a la persona titular de la Fiscalía General de la República, para su aprobación.

El Plan deberá elaborarse para un periodo de tres años y establecerá todos los elementos que componen el Servicio Profesional de Carrera, será revisado anualmente por el Consejo Ciudadano quien emitirá las recomendaciones que correspondan.

Artículo 59. Facultades del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera

El Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera tendrá las siguientes facultades:

I. Diseñar las políticas y criterios institucionales del Sistema de Servicio de Carrera;
II. Planear, diseñar y llevar a cabo los procesos de reclutamiento y selección con base en principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres, o por cualquier otro motivo o condición;
III. Dirigir la operación del Centro de Evaluación y Confianza, así como todos sus procedimientos, en todo lo que atañe al personal del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República;
IV. Proponer los procesos, procedimientos, lineamientos, convocatorias, para la gestión y desarrollo de capacidades;
V. Diseñar los planes y programas interdisciplinarios y llevar a cabo las acciones de fortalecimiento de capacidades técnicas del personal;
VI. Determinar los criterios y métodos necesarios para la operación del sistema de monitoreo y evaluación del desempeño;
VII. Llevar a cabo los concursos y procedimientos para ascensos y promociones en los términos que indique su Reglamento;
VIII. Diseñar el plan anual de estímulos a la excelencia en el desempeño individual;
IX. Administrar los expedientes del personal del Servicio Profesional de Carrera;
X. Promover la celebración de convenios de coordinación e intercambio científico y tecnológico con instituciones y organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, que realicen actividades afines, con el objeto de complementar y fortalecer las propias, y

XI. Las demás que dispongan esta Ley y su Reglamento.

Artículo 60. Relaciones Administrativas y Laborales con la Fiscalía General de la República

Las relaciones laborales entre la Fiscalía General de la República y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el artículo 123 Constitucional, Apartado B, Fracción XIII y por lo establecido en esta Ley.

TÍTULO TERCERO

De los Recursos

Capítulo Único
Del Patrimonio y Presupuesto

Artículo 61. Patrimonio y Presupuesto de la Fiscalía General de la República

Para la realización de sus funciones, el patrimonio de la Fiscalía General estará constituido por los bienes y recursos que a continuación se enumeran:

I. Los bienes muebles o inmuebles que la Fiscalía General de la República adquiera;
II. Los bienes muebles o inmuebles que la Federación transfiera para el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General de la República;
III. Los bienes muebles o inmuebles que la Federación determine que son de uso exclusivo de la Fiscalía General de la República;
IV. Los recursos que anualmente determine la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación;
V. Los derechos de los fideicomisos o fondos destinados al cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General de la República;
VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rentas y aprovechamientos de sus bienes muebles e inmuebles;
VII. Los recursos que reciba por concepto de los bienes o productos que enajene;

VIII. Las sanciones económicas impuestas por las autoridades competentes a los servidores públicos de conformidad con esta Ley, mismas que tendrán la naturaleza de créditos fiscales y serán enviadas para su cobro al Servicio de Administración Tributaria, el que, una vez efectuado el mismo entregará las cantidades respectivas a la Fiscalía General de la República;

IX. Los bienes que le correspondan de conformidad con la legislación aplicable, vinculados con la comisión de delitos, así como los decomisados, y

X. Los demás que establezcan las leyes.

Artículo 62. Contrataciones

Para el caso de las contrataciones públicas que lleve a cabo la Fiscalía General de la República se sujetarán, en lo que resulte conducente y conforme a su autonomía constitucional, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, sin perjuicio de la facultad de la persona titular de la Fiscalía General de la República de emitir normas particulares en acuerdo con la persona titular del Órgano Interno de Control.

Artículo 63. Del Presupuesto

La Fiscalía General de la República elaborará su proyecto de presupuesto anual de egresos, el cual será remitido al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se remita a la Cámara de Diputados.

En todo caso deberá garantizarse la autonomía e independencia funcional y financiera.

Artículo 64. Recursos para Emergencias

La Fiscalía General de la República contará con recursos para emergencias que garanticen el desarrollo de las investigaciones, en los casos que así se requiera. La Coordinación de Planeación y Administración emitirá reglas generales que se publicaran en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio, comprobación, justificación, rendición de cuentas, transparencia y fiscalización de estos recursos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Una vez publicado, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos deberá emitir la declaratoria expresa de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

SEGUNDO. Se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

TERCERO. Los casos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto serán resueltos en las unidades a las que están adscritos, conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se adscriban a nuevas unidades en tanto se avanza en la transición orgánica de la Fiscalía General de la Republica.

CUARTO. Todos los convenios y actos jurídicos celebrados por la Procuraduría General de la República se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Fiscalía General de la República o a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, según corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos posteriormente.

QUINTO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se contrapongan a la presente Ley y al decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral del 10 de febrero de 2014, mediante la cual se creó la Fiscalía General de la República.

SEXTO. Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su titular respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. Las referencias normativas a los agentes del Ministerio Público se entenderán referidas a las y los fiscales en los términos de esta Ley.

SÉPTIMO. La Cámara de Diputados, tomando en cuenta el principio de austeridad, contemplará en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 y subsecuentes, la asignación y garantía de la suficiencia presupuestal para la instalación de la Fiscalía General de la República y la ejecución de la planeación estratégica de transición, conforme a lo establecido en el Transitorio Décimo Segundo.

La Cámara de Diputados tendrá un plazo no mayor a noventa días para designar al titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República.

OCTAVO. A la entrada en vigor del presente Decreto, los bienes inmuebles, muebles y demás recursos materiales, financieros y presupuestales, en propiedad y/o posesión de la Procuraduría General de la República, pasarán a la Fiscalía General de la República o a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal según corresponda, en términos del artículo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. En lo relativo a bienes en posesión o servicios contratados para los fines de la Procuraduría General de la República, obtenidos por arrendamiento, comodato o cualquier otro contrato mediante el cual se haya transmitido la posesión o propalado dichos servicios, continuarán siendo utilizados por la Fiscalía General de la República.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un plazo no mayor de noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá efectuar las gestiones y trámites correspondientes, para dar cumplimiento cabal al presente artículo.

NOVENO. A partir de su nombramiento, la persona titular de la Fiscalía General de la República, contará con un plazo de un año para definir la estrategia de transición, a partir de la realización de un inventario integral y un diagnóstico de los recursos financieros, humanos y materiales, casos pendientes, procesos de colaboración e inteligencia y cualquier otro insumo que considere necesario para la integración de un Plan Estratégico de Transición. Priorizará en orden de importancia el establecimiento del Servicio Profesional de Carrera y su Estatuto, la consolidación del sistema de información y análisis estratégico para la función fiscal, así como la restructura y definición de los órganos administrativos y los sustantivos para la función fiscal.

El Plan comprenderá como mínimo los aspectos siguientes:

I. Diagnóstico, ubicación geográfica y análisis de los fenómenos criminales que perseguirá; así como la definición del Plan de Persecución Penal y la operación y despliegue territorial del modelo de investigación criminal;

II. Definición de objetivos, estrategias, acciones, metas e indicadores de resultados del proceso de transición, con base en criterios de gradualidad que consideren los tipos y fenómenos delictivos, unidades operativas centrales y estatales, regiones geográficas u otros;

III. Estrategia específica respecto al personal en activo y al reclutamiento de nuevos talentos, que contemple a su vez esquemas de retiro, liquidación, certificación, capacitación, desarrollo y gestión del cambio;

IV. Estrategia para el diseño y activación de la nueva estructura organizativa; así como del proceso de cierre de las estructuras y procesos previos;

V. Estrategia de liquidación de casos, que contemple el inventario de casos en trámite; así como su situación jurídica, tanto del sistema inquisitivo mixto como del acusatorio, para garantizar su adecuada atención; así como la identificación de casos de alto impacto social o de violaciones graves a los derechos humanos. Los casos pendientes de resolución relacionados con violaciones graves de derechos humanos o corrupción no podrán ser liquidados. La Unidad de Transición determinará la forma de atención y trámite a estos casos hasta su conclusión;

VI. Estrategia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas del proceso de transición que asegure la publicidad y mecanismos necesarios para el seguimiento, colaboración y vigilancia;

VII. Estrategia de colaboración y articulación con otras instituciones con las que requiera coordinarse para llevar a cabo la función fiscal, tales como las instituciones de seguridad pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y demás instituciones, y

VIII. El plazo para su instrumentación.

DÉCIMO. Para los efectos de los artículos 40 y 41 de la Ley que se crea en virtud del presente Decreto, el procedimiento para la designación de los primeros Consejeros Ciudadanos iniciará dentro de los treinta días hábiles siguientes a la designación del Fiscal General de la República; observando la siguiente fórmula de escalonamiento: dos personas integrantes que durarán tres años en sus encargos, dos personas integrantes que durarán cuatro años en sus encargos y una persona integrante que durará cinco años en su encargo.

Dentro del mismo plazo, la persona titular de la Fiscalía General de la República, nombrará al titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera. Asimismo, integrará una Unidad de Transición, que dependerá orgánicamente de él y que tendrá como objetivo la coordinación, implementación y evaluación del Plan Estratégico de Transición. Estará integrada por un grupo interdisciplinario de expertos con reconocido prestigio, experiencia y conocimiento en gestión de instituciones públicas o privadas, diseño institucional, evaluación e implementación de políticas públicas y proceso penal acusatorio.

La Unidad se organizará a su vez en una sub-unidad de Clausura de la Procuraduría General de la República y una sub-unidad de Diseño e Instalación de la Fiscalía General de la República, las cuales, desde sus respectivas competencias, deberán generar esquemas de coordinación para el traslado y liquidación de recursos humanos, materiales y financieros, así como para la liquidación y transferencia de los casos pendientes de resolución.

La Unidad hará del conocimiento del Fiscal General de la República las necesidades presupuestales y de cualquier índole para cumplir con sus objetivos. El Consejo Ciudadano tendrá la facultad de supervisar el proceso de transición establecido en dicho Plan.

La persona titular de la Fiscalía General de la República destinará los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para el cumplimiento del Plan Estratégico de Transición.

DÉCIMO PRIMERO. En cumplimiento del artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la Procuraduría General de la República pasarán a la Fiscalía General de la República, en términos de la presente Ley.

Los lineamientos que expida deberán contener reglas para priorizar la implantación de las áreas estratégicas de la Fiscalía, así como las de análisis e información. Asimismo, deberá priorizarse la unificación de los sistemas informáticos.

DÉCIMO SEGUNDO. El proceso de transición del personal de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República se llevará a cabo de acuerdo con el Plan Estratégico de Transición y será coordinado por la Unidad a cargo. Este proceso deberá llevarse a cabo conforme a los siguientes lineamientos:

I. El personal administrativo, de confianza y de base adscrito a la Procuraduría General de la República conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su relación laboral, con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades;

II. El personal adscrito a la Procuraduría General de la República que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento, continuará en la función que desempeña y tendrá derecho a participar en el proceso de selección para acceder al Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República en términos de los principios establecidos en la presente Ley. Para ello, se garantizará su acceso a los programas de formación, entrenamiento, fortalecimiento de capacidades y evaluación durante el periodo de transición, en los términos establecidos en los lineamientos provisionales;

III. En tanto se instale el Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República, la profesionalización, el régimen disciplinario, la certificación y el régimen de seguridad social de las policías, peritos y analistas deberá cumplir con el régimen previsto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

IV. El Plan Estratégico de Transición garantizará condiciones dignas y apegadas a la ley para la liquidación del personal adscrito a la Procuraduría General de la República que decida concluir su relación laboral o no acceder al Servicio Profesional de Carrera reglamentado en la presente Ley. El personal que no apruebe los procesos de selección del Servicio Profesional de Carrera dejará de formar parte de la Fiscalía General de la República;

V. La persona titular de la Fiscalía General de la República, a través de quien dirija la Unidad de Transición presentará un informe al Congreso de la Unión que incluya un diagnóstico integral de la institución, un Programa de Transición, el modelo financiero y el presupuesto estimado de los recursos necesarios para implementar los cambios organizacionales y de personal requerido por parte de la Fiscalía General de la República. En el Programa de Transición, el titular de dicha Unidad incluirá un plan detallado de las etapas que comprenderán las acciones de transformación institucional y la estrategia de administración del cambio institucional que se llevarán a cabo para la operación de la Fiscalía General de la República.

DÉCIMO TERCERO. Transcurrido un año a partir del nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General de la República, y a la luz del Plan Estratégico de Transición y la experiencia acumulada en el proceso de transición, la o el Fiscal General de la República, realizará una convocatoria pública para la revisión del marco constitucional y jurídico de la Fiscalía General de la República. Dicha convocatoria tendrá como objetivo la identificación, discusión y formulación de las reformas constitucionales, de la legislación secundaria o de las reformas regulatorias necesarias para la operación óptima del modelo de Fiscalía General de la República, propuesto en la presente Ley. Los resultados obtenidos serán públicos y se comunicarán al Congreso de la Unión con el fin de que éste realice las adecuaciones al marco jurídico que considere sean necesarias y pertinentes.

La convocatoria comprenderá temas relacionados con la función fiscal y de persecución penal, el modelo de investigación criminal, la competencia, el servicio profesional de carrera, los órganos ciudadanos, los derechos humanos y la atención a víctimas; el régimen de responsabilidades de los servidores públicos de la fiscalía, revisión de la estructura institucional, así como el régimen de transición, entre otros. Esta consulta deberá garantizar condiciones de apertura, transparencia y participación ciudadana de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, académicas y representantes del sector privado. Con base en las consultas realizadas, el Congreso de la Unión analizará y propondrá las reformas constitucionales y legales para el óptimo funcionamiento de la Fiscalía General de la República.

DÉCIMO CUARTO. La persona titular de la Fiscalía General de la República deberá emitir un Plan de Persecución Penal Provisional dentro de un plazo máximo de noventa días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

A partir de su nombramiento, la persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de hasta un año para formular el Plan de Persecución Penal, en términos del artículo 6 de la Ley materia del presente Decreto.

DÉCIMO QUINTO. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera, la persona titular de la Fiscalía General de la República deberá emitir normas generales relativas al desarrollo y operación de dicho servicio en coordinación con el titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera.

El Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera deberá establecer planes y programas tendientes a capacitar al nuevo personal a efecto de dar cumplimiento a las funciones asignadas a cada uno en esta Ley.

DÉCIMO SEXTO. Fiscales, policías de investigación, analistas, auxiliares y peritos, así como el personal profesional, técnico y administrativo que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren laborando en la Procuraduría General de la República se someterán a las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera que se expidan para tal efecto.

DÉCIMO SÉPTIMO. Dentro del Plan de Transición se establecerá un mecanismo expeditivo para establecer el sistema central de recepción y canalización de los asuntos nuevos que tenga que conocer la Fiscalía General de la República, a que se refiere el artículo 53 de esta Ley.

DÉCIMO OCTAVO. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo máximo de 180 días para nombrar a las personas titulares de las Fiscalías Especializadas en los términos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en esta Ley según sea el caso, verificando el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para su designación marcados en ambas disposiciones normativas.

DÉCIMO NOVENO. Una vez instaladas las Fiscalías Especializadas, sus respectivos titulares, de inmediato solicitarán a la persona titular de la Fiscalía General de la República, la asignación del personal que integrará las nuevas unidades fiscales, conforme marca esta Ley. En el proceso de asignación, se observarán, entre otros, los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres.

VIGÉSIMO. La Fiscalía General de la República a través de la Coordinación de Métodos de Investigación, contará con un plazo no mayor a 18 meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para la expedición de los Lineamientos Generales que regulen la operación de la Base Nacional de Información Genética, así como su instauración.

VIGÉSIMO PRIMERO. La creación de las unidades a que se refiere esta Ley se hará con el Acuerdo del Fiscal General de la República.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Los casos relativos a delitos relacionados con hechos de corrupción, así como cualquier otro delito cometido por un servidor público federal en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, que hayan sido iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto por la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, deberán continuar su curso correspondiente en la misma hasta su conclusión.

Una vez concluidos los casos pendientes en la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, quedará sin vigencia el Acuerdo A/011/14 por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción podrá atraer cualquiera de los casos de corrupción cuyo trámite hubiese iniciado con anterioridad a la asignación de su gestión, cuando así lo considere pertinente su titular.

Las denuncias de los casos relacionados con hechos de corrupción que hayan ingresado a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, serán remitidas en su totalidad a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

VIGÉSIMO TERCERO. La persona titular de la Fiscalía General de la República será el Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). El régimen de relación que existía entre el INACIPE y la Procuraduría General de la República se mantendrá con la nueva Fiscalía en términos de lo dispuesto en la normatividad aplicable en tanto no se reforme o se expida un nuevo estatuto orgánico del INACIPE.

SALÓN DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES. -
Ciudad de México, 15 de noviembre de 2018

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
Presidente

SEN. ANTARES VÁZQUEZ ALATORRE
Secretaria

Se remite a la Honorable Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales. - Ciudad de México, 15 de noviembre de 2018

DR. ARTURO GARITA
Secretario General de Servicios Parlamentarios

LA SUSCRITA, SENADORA ANTARES GUADALUPE VÁZQUEZ ALATORRE, SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 220.4 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE ES ORIGINAL DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y QUE SE REMITE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 220 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.

SEN. ANTARES GUADALUPE VÁZQUEZ ALATORRE
Secretaria

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Gaceta Parlamentaria

Año XXII | Palacio Legislativo de San Lázaro, martes 11 de diciembre de 2018 | Número 5175-II

CONTENIDO

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República

Anexo II

Martes 11 de diciembre

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Declaratoria de Publicidad. Diciembre 6 de 2018.

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura le fue turnada la Minuta con proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, los miembros de esta Comisión de Justicia sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable asamblea el presente Dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la Minuta.

II. En el apartado "CONTENIDO" se hace una descripción de la Minuta y se resumen los objetivos, motivos y alcances de las propuestas.

III. En las "CONSIDERACIONES", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos de cada una de las reformas y adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 11 de septiembre de 2018, el Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. En esa misma fecha se dictó su turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.

2. En la sesión celebrada el 25 de septiembre de 2018, la Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, presentó Iniciativa con proyecto

de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con Aval del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. En esa misma fecha, se dictó su turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.

3. En sesión celebrada el 15 de noviembre de 2018, se aprobó en el Pleno de la Cámara de Senadores el Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

4. En sesión de 20 de noviembre de 2018, la Cámara de Diputados recibió la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó turnarla a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.

II. CONTENIDO

A continuación, se sintetizan las consideraciones de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República

- Es un mandato constitucional que tiene como origen la reforma al artículo 102 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. La reforma establece una reconfiguración del Ministerio Público y la creación de la Fiscalía General de la República. En 2016, volvió a reformarse el contenido del artículo 102.

- Se considera como base para la creación de la propuesta el que en el nuevo sistema penal, la Fiscalía General de la República deberá observar plenamente los derechos del imputado y de las víctimas en el marco de un proceso penal garantista que también incorpore y visibilice la justicia de no repetición y reparación del daño.

- Que a más de 4 años de la publicación de la reforma constitucional en comento aún no se ha legislado sobre la Fiscalía General; mucho menos con la designación de un Fiscal General, por lo que resulta impostergable en ejercicio de sus atribuciones.

- Los integrantes de estas Dictaminadoras coincidimos plenamente en que la tarea no es sencilla, en México la figura de la fiscalía como ente persecutor de delitos prácticamente no ha cambiado desde 1857 en el que se estableció la

existencia de un fiscal competente en materia penal y de un Procurador General con funciones de vigilancia para asegurar la legalidad en los procesos. Hasta 1917 se recogió en la Constitución la figura del Ministerio Público, presidido por un Procurador General, al que prácticamente se le atribuyó el monopolio de la acción penal, con la policía judicial bajo su mando, consolidándose también como representante de los intereses sociales y de la Federación, así como Consejero Jurídico del Gobierno. Se entiende entonces porqué esta arquitectura institucional no ha favorecido a la población, ni ha podido cumplir su función como procuradora de justicia y la persecución penal, sino que ha fungido como un aparato coactivo, inadecuado y con grandes márgenes de discreción y manipulación.

- El diseño institucional de la nueva Fiscalía General de la República debe incorporar mecanismos diferentes para la sana rendición de cuentas de la institución, a través de los cuales se promuevan eficiencia, la integridad y se combata la corrupción interna.

- Actualmente, la estructura de la Procuraduría General de la República responde a un proceso penal inquisitivo, caracterizada por la burocratización y la ineficiente la conducción de la investigación. Por otra parte, en el sistema acusatorio el papel de los Ministerios Públicos o Fiscales es el litigio penal, situación para la que hoy en día no están preparados los Ministerios Públicos.

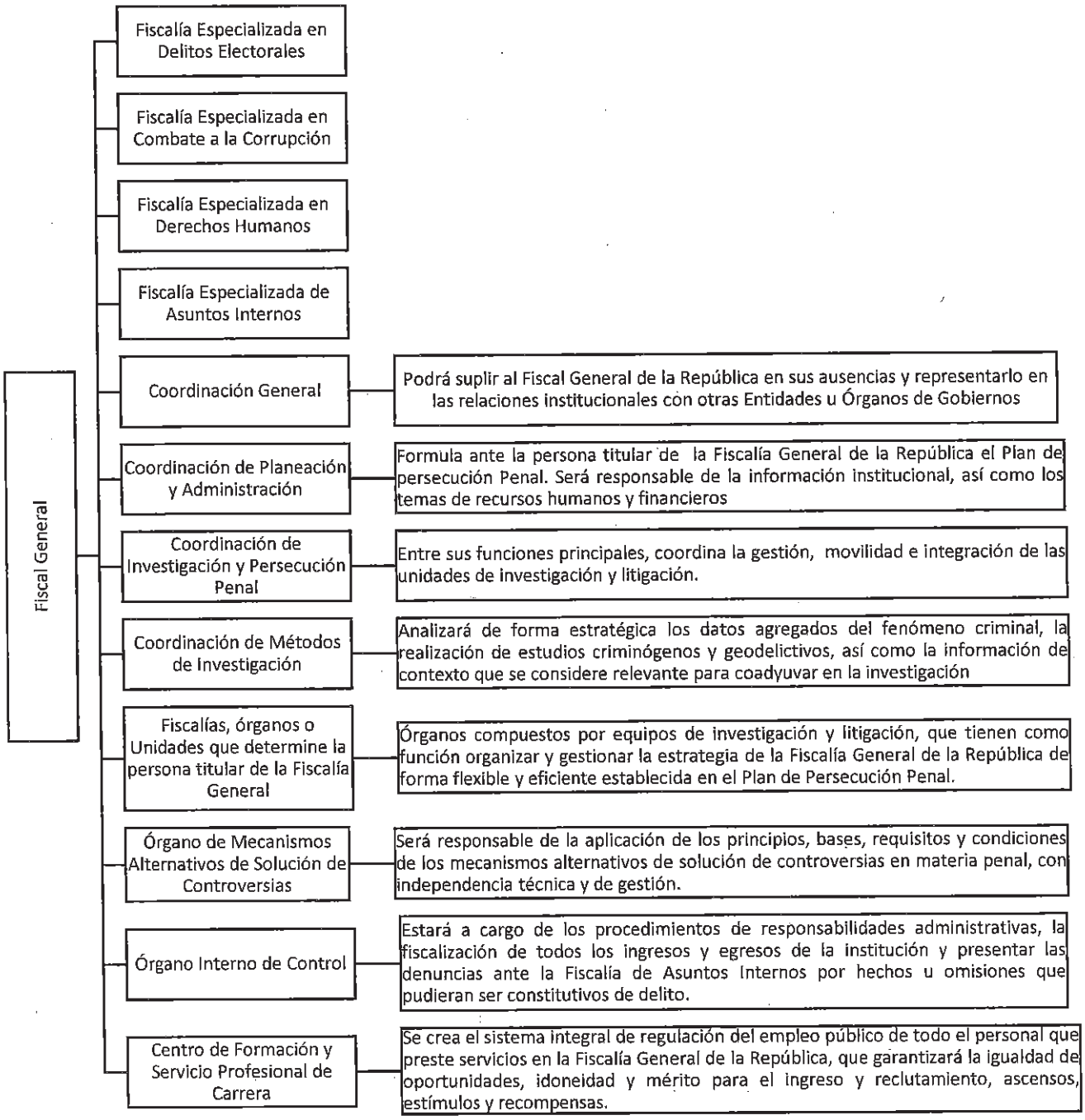
- Si bien existe una Minuta remitida por la Cámara de Diputados; ante la imposibilidad de dictaminarlas en conjunto y la urgencia de crear el marco jurídico, es necesario analizar únicamente las dos iniciativas presentadas este periodo legislativo.

- Se destaca la importancia de incorporar al ámbito de atribuciones de la Fiscalía General de la República, a través de la Coordinación de Métodos de Investigación, la Base Nacional de Información Genética, que integre la información proporcionada por víctimas o familiares de víctimas respecto de personas desaparecidas en el territorio nacional. Dicha información contendrá los resultados de laboratorio a este respecto.

- Se considera que los principios rectores de la actuación de la Fiscalía deben ser los de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, accesibilidad, debida diligencia, imparcialidad y otros establecidos en la Constitución, tratados internacionales, leyes y demás disposiciones aplicables.

- Se considera la reconfiguración de las causas graves de remoción del Titular de la Fiscalía General de la República y se precisan en la ley.

- Se establece que las reglas de atracción se encuentran en las leyes especiales.
- Se plantea la siguiente estructura:



- En los transitorios se prevé lo siguiente:
    - Se abrogue la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se especifica en qué casos esta ley continúa vigente, de conformidad con las disposiciones transitorias del propio Decreto y los acuerdos que emita el Fiscal General, en ejercicio de su autonomía.
    - Que una vez instaladas las Fiscalías Especializadas, sus respectivos titulares de inmediato soliciten a la persona titular de la Fiscalía General, la asignación del personal que integrará las nuevas unidades fiscales, conforme marca esta ley
    - Se plantea un proceso de transición que establezca las estrategias y la asignación de recursos para alcanzar los objetivos inmediatos y dar seguimiento en la toma de decisiones a través de un Plan de Transición; contando con suficiencia presupuestal para el proceso.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. La Cámara de Diputados es competente para conocer de la presente minuta de conformidad con lo que establece el artículo 73, fracción XXX en relación con los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA. Esta Comisión de Justicia es competente para conocer y dictaminar este asunto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la fracción I, numeral 1 del artículo 80 y la fracción I, numeral 1 del artículo 157 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

TERCERA. La Junta Directiva de la Comisión de Justicia, emitió un acuerdo para regular el proceso de discusión y análisis de la Minuta con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en los términos siguientes:

ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, POR EL QUE SE APRUEBA LA RUTA DE TRABAJO PARA ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA

QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2 y 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 146, numeral 3, 149, numeral 2, fracción V, VI, IX y XII, 158, numeral 1, fracción XII, y 191 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Junta Directiva de la Comisión de Justicia emite el presente acuerdo, conforme a las siguientes:

CONSIDERANDOS

I *Que el artículo 149 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece como atribución de las Juntas Directivas Resolver los asuntos de su competencia que hayan sido turnados.*

II *Que el Plan de Trabajo aprobado por esta Comisión establece en el apartado de "Objetivos específicos" que en el análisis de los proyectos una de las líneas a seguir es "incorporar a los trabajos de la Comisión la participación de la sociedad civil a través de mecanismos de parlamento abierto".*

III *Que en sesión de 20 de noviembre de 2018, la Cámara de Diputados recibió la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó turnarla a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.*

IV *Que por la trascendencia que reviste el contenido de la Minuta y ante el interés mostrado por la sociedad civil durante el proceso de dictaminación en la Colegisladora y las expresiones de diversas organizaciones sociales han manifestado en el sentido de atender sus inquietudes.*

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de la Junta Directiva el siguiente:

ACUERDO

***Primero**. Llevar a cabo el proceso de discusión y dictaminación de la Minuta que contiene Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.*

***Segundo**. Se entrega el proyecto enviado por la Mesa Directiva relativo a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República a cada uno de los integrantes de la Comisión de Justicia en esa fecha.*

***Tercero**. Se fija el próximo 26 de noviembre de 2018, como fecha para escuchar y atender las opiniones de los ciudadanos, expertos y*

representantes de diversos grupos de la sociedad civil que serán convocados a una reunión con los integrantes de esta Comisión.
***Cuarto**. Se determina como fecha para reunión de Junta Directiva a fin de validar el proyecto de dictamen, el día 28 de noviembre de 2018 a las 9:00 horas. El proyecto de dictamen deberá circularse el mismo día a los integrantes de la Comisión de Justicia para efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 177, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados.*
Quinto. Se establece como fecha para llevar a cabo la reunión para la presentación, análisis y discusión del Proyecto de Dictamen al que se refiere el resolutivo anterior, el día 5 de diciembre de 2018, a las 16:00 horas, en los salones C y D del edificio G, Cristales.

CUARTA. Derivado del acuerdo anterior, y en un ejercicio de Parlamento Abierto se llevó a cabo una reunión de trabajo para el análisis de la Minuta.
Las participaciones de la sociedad civil que participaron en tal ejercicio, se sintetizan a continuación.

María Isabel Miranda de Wallace, Alto al Secuestro.

- Es necesario determinar los requerimientos para los titulares de las Fiscalías especializadas a observarse en su designación.
- El artículo 20 de la Minuta dota de facultades aparentemente extralimitadas a la Coordinación de Investigaciones y Persecución Legal sin que se establezca ningún control, de sus facultades. Se considera necesario que se equiparen a las de los Fiscales.
- Es relevante considerar la existencia de Fiscalías especializadas que tienen funciones sustantivas, así como sus facultades; tal es el caso de la Ley de trata.
- El artículo 21 de la Minuta establece que la falta definitiva del Fiscal será cubierta por el Coordinador General de forma temporal, sin que se precise cual sería la situación si no hay titular de la coordinación.
- Es necesario establecer los supuestos para la designación de Encargado de Despacho en los casos de falta de Coordinador General, no dejarlo al Reglamento.
- Es necesaria la creación de una Fiscalía de Extinción de Dominio, conforme al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Se considera que la redacción de la Minuta de Ley se prevé en todo momento el término "Fiscal" mientras que la redacción de todas las referencias en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es a los Ministerios Públicos.
- La minuta no cuenta con la opinión del Centro Finanzas Públicas por la modificación de relación laboral de los actuales empleados de la Procuraduría General de la República.

- Se considera oportuno que cada fiscalía pudiera contar con policía propia y el personal de servicios periciales que requiera para su adecuado funcionamiento.
- En los asuntos que tengan que ver con la materia internacional, se considera oportuno que se fortalezca el régimen de rendición de cuentas a este H. Congreso.

David Alejandro Jiménez Padilla, Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C.

- La elaboración de un Plan de Persecución Penal efectivo para un adecuado intercambio de información entre las fiscalías especiales es indispensable.
- Los Fiscales deben tener independencia en su toma de decisiones a través de lineamientos establecidos en el modelo de persecución penal.
- Se sugiera que en la estructura se la nueva ley se distinga entre la investigación y el litigio.
- Se deben procurar mecanismos para garantizar la independencia de las decisiones de los fiscales, para eliminar las sanciones informales que hoy se llevan a cabo, por ejemplo, adscribir al servidor público a lugares "difíciles" como Tamaulipas en donde nadie quiere estar.
- Se deben establecer parámetros de recompensas a Ministerios Públicos que trabajan de manera adecuada a través de privilegios para fomentar el buen desempeño.
- El Servicio Profesional de Carrera debe prever de manera adecuada la capacitación para el buen desempeño de los servidores públicos.

Samuel González Ruíz, Alto al Secuestro.

- Una Ley Orgánica es aquella que regula órganos, otorgando facultades y atribuciones; esta Ley no cumple a cabalidad con ese objeto.
- Que se incorpore de forma expresa la facultad a órganos fiscales en materia de recuperación de activos
- La Minuta aprobada por la Cámara de Diputados no prevé elementos que considera básicos para el buen desempeños de las investigaciones, tales como:
    - El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla en el artículo 229 el aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito, el proyecto no contempla a nadie que esté facultado para realizarlo; lo anterior tiene como resultado la nulidad de los actos.
    - No se cumplen los requisitos para los actos de molestia contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Marco Antonio Fernández Martínez, México Evalúa-Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

- Es necesario reformar los requisitos del artículo 102 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a la preocupación de la politización de las funciones de los órganos de justicia
- De no contemplarse el régimen especial de responsabilidades de los servidores de la fiscalía, la Fiscalía de Asuntos Internos (causas graves) carecerá de los fundamentos jurídicos para ejercer sus funciones. Asimismo, es necesario precisar las funciones de dicha fiscalía, tal y como ocurre actualmente con la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República. De esta forma las faltas administrativas graves cometidas en términos de su carácter de servidores públicos serán procesadas por el Órgano Interno de Control de la fiscalía, mientras que en el caso de las faltas asociadas a la función sustantiva de los servidores como miembros de la Fiscalía, serán procesadas por la Fiscalía de Asuntos Internos.
- Se omite el procedimiento de remoción y de separación del cargo, lo cual no puede estar en un Reglamento, para eso existe la Ley Orgánica.
- Existen problemas para el establecimiento del Sistema de Profesionalización del personal a través del Servicio Civil de Carrera, todo el personal no puede ser de este carácter ya que formulara un problema sustantivo de operación.
- El personal no removible, salvo faltas graves, sin especificar cuáles son estas.
- Que se incorpore de forma expresa la facultad a órganos fiscales en materia de recuperación de activos.

Adicional a su participación, el ciudadano envió a la Comisión de Justicia una nota con las observaciones a la minuta, además de las que presentó en la reunión de trabajo realizada en los términos siguientes.

Propuestas concretas por temas:

(a) Falta de coherencia con los artículos 21 y 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Incorporar en el Capítulo X del Proyecto, los preceptos que establezcan los siguientes tópicos:

- Requisitos de ingreso y permanencia de agente del ministerio público federal (AMPF), agentes de la policía federal ministerial (APFM) y Peritos.
- Régimen especial de responsabilidades: Causales, procedimientos y órganos que instruirán y aprobarán la **separación** (incumplimiento a requisitos de ingreso o permanencia), **sanción** (faltas no graves relativas a la función) o **destitución** (faltas graves relativas a la función) de dicho personal.

- Es preciso recordar que en el marco de la reforma que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, no se hicieron modificaciones al artículo 123 constitucional, el cual en el apartado B fracción XIII, se establece que el ministerio público, peritos y policías pueden ser removidos en función de las leyes que los rijan. Es decir, se contempla un régimen propio de responsabilidades a su función sustantiva, complementario al régimen de responsabilidades que rige a todos los servidores públicos. Esta dualidad de responsabilidades ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia en distintas jurisprudencias y se ha aplicado por los tribunales actualmente, sin que ello haya sido causal de un problema de constitucionalidad.

Recordemos que las causales de responsabilidad están contempladas actualmente en el capítulo VIII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en sus artículos 62 y 63. Destacan por ejemplo:

"Artículo 62.- Son causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y, en lo conducente, de los oficiales ministeriales y peritos:
I. No cumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público de la Federación;...
IV. No solicitar los dictámenes periciales correspondientes o abstenerse de realizarlos;
V. No trabar el aseguramiento de bienes, objetos, instrumentos o productos de delito y no solicitar el decomiso cuando así proceda en los términos que establezcan las leyes penales;
VI. Omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto...".

Estas son algunas conductas específicas en las que pueden incurrir el personal sustantivo de la fiscalía y que actualmente le sirven al OIC como sustento jurídico para encuadrar las conductas del personal que investiga cuando han cometido faltas administrativas graves. Esto junto con la ley general de responsabilidades rige el comportamiento del personal de la procuraduría. Si se hace una revisión de las faltas administrativas graves enlistadas en el capítulo II de la Ley General de Responsabilidades, las conductas mencionadas no podrían encuadrarse en dicho listado. De no incluirse este apartado de causales de responsabilidades específicas al personal de la fiscalía, el OIC estará severamente limitado a realizar sus investigaciones en contra de los funcionarios de la institución que hayan incurrido en conductas indebidas.

A esto se agrega el segundo párrafo contenido actualmente en la minuta dentro del artículo 34, el cual establece actualmente:

"El Órgano Interno de Control, su titular y el personal adscrito al mismo, estarán impedidos de intervenir o interferir en forma alguna en el desempeño de las facultades y ejercicio de la Fiscalía General de la República".

Para efectos prácticos dicho párrafo anula las investigaciones que pudiera realizar el OIC contra funcionarios que hayan cometido faltas graves en el ejercicio de su labor como personal sustantivo de la fiscalía. Por ejemplo, si se investiga a un ministerio público que haya actuado con negligencia en una diligencia o que, por ejemplo, se haya abstenido de ejercitar la acción de extinción de dominio en los casos y términos que determine la ley (causal que hoy se contempla en el artículo 62 de la ley orgánica de la PGR), el OIC no podrá actuar en contra del funcionario que haya incurrido en esta conducta indebida, pues la defensa de éste argumentara que el OIC está interfiriendo en el desempeño de las facultades y ejercicio de la Fiscalía General de la República.

- De no contemplarse el régimen especial de responsabilidades de los servidores de la fiscalía, el OIC carecerá de los fundamentos jurídicos para ejercer sus funciones. Por ende, es imprescindible retomar el régimen de responsabilidades y sanciones especiales propias que rigen actualmente a la PGR para tener un régimen equivalente para los integrantes de la Fiscalía General. Actualmente dicho régimen se encuentra enlistado en el capítulo IX de la Ley Orgánica de la PGR. Dicho apartado tendría que agregarse al capítulo VIII del dictamen bajo análisis.
- Asimismo, un problema fundamental en la minuta es la omisión del procedimiento de separación del personal de la fiscalía. Dicha figura está contemplada como parte sustantiva para hacer operable el servicio de carrera del personal de la fiscalía, pues se activa como mecanismo de salida del personal que hayan dejado de cumplir con los requisitos para continuar ejerciendo su función. Al no contemplarse dicho procedimientos –como sí ocurre actualmente en la ley orgánica de la PGR- no se podrá operar adecuadamente el servicio civil de carrera. Por reserva de ley, dicho procedimiento debe estar contemplados en la ley orgánica de la fiscalía y no puede circunscribirse al reglamento, por lo que deben añadirse al articulado de la minuta con los ajustes necesarios para que el OIC pueda realizar el procedimiento mencionado con base en los supuestos.
  (Actualmente el proceso de separación está contemplado en el artículo 46 y 47 de la Ley Orgánica de la PGR).
  Por ende es necesario 1) por un lado, incorporar como parte de las facultades del Centro de Formación y Servicio Profesional: Resolver en única instancia el procedimiento de separación del servicio, así como respecto de las solicitudes de reingreso que le sean presentadas de acuerdo con las normas aplicables; 2) por el otro, incorporar los artículos que especifiquen el procedimiento de separación a cargo de dicho Centro de Formación y Servicio Profesional.
- Vinculado a esta observación, destaca que en el artículo 56 en el que se enumeran los subsistemas del servicio profesional de carrera (ingreso, desarrollo, evaluación, promoción, separación y reincorporación) se establece en la fracción V como parte de la separación: "Separación: **El personal de la Fiscalía General de la República será inamovible**, salvo

casos de responsabilidad en los términos establecidos en esta Ley y su Reglamento, **así como por razones técnicas que afecten al funcionamiento de la institución y que objetivamente sean acreditadas**". Para efectos prácticos esto dificultará sustantivamente la operación del servicio de carrera, al pasar del extremo de la falta de protección del personal a la protección absoluta por inamovilidad, pues no se especifica cuáles son las razones técnicas que afectan el funcionamiento de la fiscalía, lo que su vez hará prácticamente inviable que puedan acreditarse por parte del OIC cuando busque activar el procedimiento de separación (mismo que como se comentó está ausente de la minuta y que por reserva de ley no puede referirse a un reglamento interno).

- La minuta bajo análisis contempla en su artículo 29 las funciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la cual, se establece en su primer párrafo que "tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos contenidos en el Título Décimo del Libro Segundo del Código Penal Federal". Sin embargo, al restringir el ámbito de la labor de dicha fiscalía a este título décimo, se le imposibilitará de realizar correctamente sus investigaciones anticorrupción, ya que no podrá llevar a cabo como parte de su labor, diligencias relacionadas con el lavado de dinero, entre otros delitos, que están asociados a conductas delictivas de corrupción y que no están contemplados en el capítulo décimo en mención. Pensar que estas diligencias específicas las lleve a cabo otra unidad fiscal dentro de la institución, fragmentaría las investigaciones, aspecto que justo que contradice el propósito primario que busca esta ley para garantizar una investigación flexible y con claridad de responsabilidad de los fiscales que la conducen. Por ende, se sugiere añadir que la Fiscalía en mención pueda investigar los delitos por conexidad que se hayan cometido junto con los delitos de corrupción que esté investigando, con el fin de no limitar su actuación y fragmentar la investigación (lo que diluirá responsabilidades de los fiscales que la conducen como ocurre actualmente en la PGR).

- Una de las preocupaciones centrales para la desarticulación de las redes del crimen organizado y de corrupción que operan en el país es la posibilidad de combatir eficazmente los beneficios económicos producto de su actividad delincuencial. Para ello desde 2008 se aprobó la ley de extinción de dominio, la cual, originalmente solo se contempló para los casos de delincuencia organizada y secuestro. Actualmente, dicha figura se está analizando en la Cámara de Diputados, una vez que los Senadores aprobaron incorporar la posibilidad de extinción de dominio a los bienes productos de delitos de corrupción. Para la aplicación de dicha facultad, actualmente se contempla en el inciso j del artículo 4 de la ley orgánica de la PGR como parte de las facultades de los ministerios públicos: "Ejercer las acciones que las disposiciones normativas en materia de extinción de dominio de bienes prevean a favor o en beneficio de las víctimas y ofendidos". Sin embargo, en

el listado de las facultades de los fiscales enumerada en el artículo 9 de la minuta, no se contempla esta facultad, por lo cual, los fiscales no tendrían interés legítimo para poder actuar en esta materia. Por ende se sugiere incorporar dicha facultad al listado del artículo 9 de la minuta.

María Novoa ITESM y México Evalúa

- Precisar en el artículo 46 relativo a las Unidades de Investigación y Litigación que la conducción legal de la investigación será realizada por los fiscales, mientras que el desarrollo material de la misma, será competencia de la policía de investigación.
- En el artículo 47 sobre los equipos de investigación y litigación se debe precisar que los equipos de investigación serán dirigidos por Fiscales, mientras que el desarrollo material corresponde a la policía de investigación.
- Respecto al artículo 32 en el que se precisan las facultades de la Coordinación de Métodos de Investigación se sugiere precisar en el último párrafo, que el personal de este centro podrá ser adscrito o comisionado a Unidades de Investigación y litigación conforme a esta ley y su reglamento.

Rubén Quintino Zepeda, INACIPE

- Destacó que existen áreas de oportunidad que se pueden subsanar:
  - Formas de imputación y ejercicio de la acción penal para personas físicas y morales.
  - Especialización del Ministerio Público para desempeñar adecuadamente su rol frente al nuevo sistema penal que rige nuestro país.
  - Especialización de los fiscales en economía para poder detectar perseguir y sancionar la delincuencia organizada

Jorge Alberto Lara Rivera, Alto al Secuestro.

- Sostuvo que los actos de molestia que puedan emitirse por los fiscales conforme a la Minuta no cumplirían con los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional.
- No se prevén facultades de ningún servidor para los temas de abandono y recuperación de activos; a pesar de estar regulados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
- La Ley será impugnada por abogados litigantes ya que contempla muchos espacios de oportunidad.
- No se prevé ninguna facultad específica en materia de delincuencia organizada; lo que genera una laguna en la Ley de la materia.
- No se prevén ninguna de las siguientes facultades:
  - Al Procurador para generar acuerdos de agentes encubiertos y entregas vigiladas.
  - Al Ministerio Publico para la regulación de cuentas bancarias.

- Dentro de las Facultades del Fiscal se debe incluir la de expedir Acuerdos para los casos de agentes encubiertos y entregas vigiladas. Esta previsión que ahora se contempla en la LOPGR tiene gran relevancia en el desarrollo de la investigación.
- Sostuvo que existe la necesidad de adicionar en el artículo Décimo Segundo Transitorio una disposición en relación al personal que podrá integrarse al Servicio Profesional de Carrera.
- Considero necesario que los titulares de fiscalías especializadas, coordinación general, coordinaciones y unidades no estén sujeto al servicio civil de carrera.

Leonor Quiroz Carrillo, COPARMEX

- Es necesario reformar el artículo 102 de la CPEUM para dar autonomía a la Fiscalía, garantizar los Senadores no den "carta abierta" a la designación del Fiscal General por parte del Ejecutivo. Afirmó que es necesario establecer requisitos técnicos para ser Fiscal General. Así como el artículo 116 de la CPEUM, lo que dará legitimidad a la nueva ley a través de la eliminación de los vicios.
- La temporalidad transexenal del Fiscal General es excesiva; propone una temporalidad de 4 a 6 años de forma transexenal.
- La revisión del marco jurídico que prevé el artículo Décimo Tercero Transitorio en un año a partir del nombramiento del Titular de la Fiscalía General debe ser menor.
- Los nombramientos de las nuevas fiscalías deben darse con la participación de los ciudadanos.
- Considera relevante la existencia de un fiscal de transición.

Ilian Katz Mayo

- Es necesario contar con personal técnico jurídico para lograr funcionarios mejor capacitados.
- El OIC debe tener autonomía de acción.
- La Ley Orgánica debe organizar de forma eficiente La Fiscalía.
- Es correcto el planteamiento de la desaparición de las fiscalías especiales toda vez que esto realiza un acercamiento con las víctimas, agilidad en su acción y mejores resultados. Es necesario acercar las fiscalías al lugar donde más se necesitan.
- Necesitamos un fiscal que pueda determinar la prioridad de la Fiscalía; la prioridad no es crear un plan sino perseguir los delitos; esa acción no puede dejar de realizarse.
- La temporalidad establecida (9 años) es excesivo.
- Los delitos deben perseguirse de una forma eficiente.

Sue Valenzuela Contreras

- Necesitamos una fiscalía eficaz autónoma e independiente a la altura de la actual crisis de derechos humanos que atraviesa el país.
- Es indispensable reformar el artículo 102 para garantizar la autonomía del próximo Fiscal General.
- Se entregan más de 20 observaciones técnicas a la minuta recibida por la Cámara de Diputados.
- Es necesario que la atención a víctimas sea de manera ágil y respeto a los derechos humanos.
- Se tienen que escuchar a más organizaciones, quienes van a llevar casos a las Fiscalías. Es bueno el primer ejercicio, pero no es suficiente.

En la participación escrita entregada a todos los Diputados presentes en la reunión, destacan los siguientes puntos:

- Incorporar al artículo 14 al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y generar un nuevo artículo para establecer sus atribuciones.
- Incorporar un apartado para el establecimiento de faltas graves cometidas por parte de los servidores públicos de la Fiscalía en el artículo 44.
- En el artículo 20 se establece que el Fiscal Anticorrupción sólo puede investigar los delitos previstos en Título X del Código Penal, siendo necesario agregar a esta disposición la investigación de delitos en conexidad con los establecidos en ese Título.

Adicional a su participación, el ciudadano envió a la Comisión de Justicia una nota con las observaciones a la minuta, además de las que presentó en la reunión de trabajo realizada.

Karla de la Cuesta

- No puede ser viable la desaparición de las fiscalías especializadas, ya que las víctimas del delito deben recibir atención especializada en función del tipo de delito.
- Es necesaria la reforma constitucional y la de la Ley Orgánica.
- Lo que se busca son resultados tratándose de la persecución del delito de trata de personas
- Es necesario entender el proceso que atraviesan las víctimas de este delito, hoy en día, no se persigue de forma adecuada.

Julio Cesar Guillen

- La Procuraduría provoca también sus propias víctimas a través del descuido de su propia plantilla laboral; es necesario regular las relaciones laborales y el 123 constitucional.
- La victimizan a las integrantes de la Procuraduría genera revictimización a las víctimas y ofendidos del delito.

- Actualmente existen situaciones de hecho en las condiciones de trabajo en la PGR que generan víctimas en los procuradores de Justicia: acoso, problemas con maternidad, etc.
- Uno de los mayores retos es garantizar condiciones dignas para los servidores públicos, las condiciones en las que trabajan son muy precarias.
- Art 57 dela minuta habla de derechos para un tema de ascenso, pero no reconoce derechos laborales mínimos.
- La Ley General de Víctimas tiene que agotar una serie de elementos que alguien tiene que determinar; el MP no integra metodología para determinar la reparación de los daños.
- Es necesaria una creación de una oficina que integre especialistas necesarios para empezar a unificar criterios para determinar la reparación del daño.
- Analizar si la especialización abre las puertas o las cierra y complica el acceso a la justicia de las víctimas.

Patricia González

- Es necesaria la integración de fiscalías especiales.
- Es indispensable adecuar la norma en este momento y no dejar que se publique con los errores que se han hecho evidentes en esta reunión.
- Es necesario un personal profesional y calificado.
- Se necesita un trato especial a las víctimas.

Tomas Larios Palacios

- Es necesario que se establezca la competencia de los órganos perseguidores del delito.
- Se necesita especialización para los servidores de la Fiscalía General.
- Se necesita una nueva ley, que permita trabajar al Fiscal, independiente de la que se realizó.
- La máxima preocupación del Fiscal es la creación de un Plan.
- La redacción de la Minuta tiene un perfil criminológico, eso no es lo que se busca.

Daniel Balboa

- Es necesario establecer el ámbito de aplicación y objeto de la ley autonomía presupuestal.
- Es necesario un Glosario.
- Del artículo 3 es necesario eliminar el contenido del artículo y establecer sólo CPEUM.
- El artículo 4 victimiza más.
- Establecer qué se entiende por cada principio
- Se hicieron diversas propuestas al Capítulo Segundo.
- Se omite qué sucederá con el INACIPE
- Política de persecución penal y es plan de persecución penal

José Arturo Yáñez Romero

- El supuesto institucional en esta Ley Orgánica no es congruente con el diseño institucional que encontramos en países que cuentan con un sistema procesal acusatorio, como el caso de Chile, donde existe el Plan de Persecución Penal. Este tipo de estructuras no pueden adoptarse de forma literal porque tienen 2 variables, la organización política y la organización policial, muy diferentes a nuestro contexto institucional; por ejemplo, La fiscalía en Chile es nacional y no hay dos fueros penales, es decir no hay 33 procuradurías o fiscalías.
- En la Ley Orgánica de la FGR, nunca se menciona a la institución de la Policía Ministerial Federal, como si no existiera.
- Propuso 4 ideas.
    - Elaborar un plan no de reducción de los delitos a investigar, sino de administración de la investigación de los delitos que contenga nuevas formas de relacionar al Ministerio Público con los investigadores.
    - En tanto seamos una federación, debemos crear instituciones federales de investigación como agentes especiales para diversos delitos, como lo son las agencia de investigación federales en los Estados Unidos de América. Esto es, debemos tener varias agencias de agentes especiales de investigación no dependientes de la PGR, sino de la Secretaría de Seguridad Pública o de la de Gobernación.
    - Establecer la independencia funcional de los investigadores del delito y crear la figura y facultades de detectives o Agentes especiales. Ello implica más responsabilidad para los policías investigadores y más altos estándares éticos y profesionales.
    - Esto significa duplicar el número de Ministerio Públicos Federales y triplicar el número de Agentes federales de Investigación policial y pericial. Robustecer a la institucional policial y pericial de manera conjunta.

Adicional a su participación, el ciudadano envió a la Comisión de Justicia una nota con las observaciones a la minuta, además de las que presentó en la reunión de trabajo realizada.

Ana Sofía López, Participación Ciudadana 29 Laguna A. C

- Se considera que la designación del Fiscal no debe depender de la designación de perfiles por parte del Senado y del Ejecutivo, sino deben de ser designados y escogidos en conjunto con la Sociedad Civil. Los perfiles deben ser apartidistas y tener como mínimo 10 años fuera del Servicio Público, esto para evitar pago de favores.
- En la Minuta, el Fiscal debe de ser escogido por voto popular en las urnas, igual que cualquier otro puesto público, con la publicación previa de su perfil, e investigación de su persona haciéndolo público en medios de comunicación.

- De acuerdo con el Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fracción IX. Se considera que el Ejecutivo no debe de poder remover al Fiscal, puesto que le quita autonomía y facultades, sobre todo cuando se investigue al Ejecutivo (Ejemplo La Casa Blanca). Se propone que sea el Congreso quien realice la remoción del Fiscal.
- Se deben de contar con más requisitos para designar al Fiscal, donde se compruebe que sea una persona Capaz, Honesta, con Principios y Valores, Firme en sus convicciones y sobre todo investigado a profundidad por la Sociedad Civil para poder hacer público su perfil.
- Que en los requisitos para la designación del Fiscal no se agregue el de Discrecionalidad, tales como ensayos, y opiniones personales, pues esto haría de la designación una decisión parcial y no imparcial.
- No se menciona ningún tipo de penalización para quién obstaculice o elabore carpetas de investigación mal hechas.
- En el artículo 45 en la Minuta no se menciona ningún tipo de penalización para quién aún estando en el puesto no esté cumpliendo con las bases establecidas.

Karla Jacinto Romero, Fundación REINTEGRA.

- Destaco la necesidad de no eliminar la fiscalía especial de Trata de personas, ya que como sobreviviente de este delito considera que debe de concientizarse a los servidores públicos y en el ámbito de sus competencias actuar en consecuencia para poder apoyar a las víctimas de todos los delitos de alto impacto ya que cada delito, víctimas y victimarios deben de ser tratados conforme a la naturaleza de cada hecho.

México SOS

- Considera necesario demanda homologar los procedimientos, criterios y estructuras institucionales en las 33 procuradurías y/o fiscalías de la República mexicana, a fin de integrar los elementos mínimos que den sustento, tanto a los principios derivados del debido proceso, como a los objetivos que persigue el nuevo proceso penal mexicano.
- La simple reforma al 102 Constitucional no basta para dotar de autonomía operativa a la Fiscalía. Para ello es necesario iniciar un proceso de reordenación del derecho penal, revisar la legislación penal nacional, colocar parámetros para dar uniformidad a la legislación penal sustantiva, elaborar un Código Penal Único y colocar reglas rígidas para sus eventuales reforma.
- Se propone:
    - Reformar el artículo 73 Constitucional, a fin de otorgar facultades al Congreso de la Unión para expedir un Código Penal Único y generar una mejor articulación en los ámbitos de competencia federal y estatales en materia penal. Consecuentemente, deberá legislarse sobre el Código Penal Único en el cual tendrá que incorporarse un

mecanismo de reserva para permitir la tipificación de ciertas conductas en el ámbito local.

QUINTA. Las Diputados y Diputadas de diversos grupos parlamentarios presentaron ante esta Comisión, diversas observaciones a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Los Diputados que presentaron observaciones son los siguientes:

DIP. OSCAR MARTÍNEZ TERRAZAS
Grupo Parlamentario de Acción Nacional

Remitió las siguientes propuestas:

"RESERVA PARA REFORMAR, MODIFICAR Y ADICIONAR *DICTAMEN DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA*, PRESENTADA POR SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y APROBADO EN EL **SENADO DE LA REPUBLICA** EN LA SESIÓN DEL PLENO, CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, LA CUAL SE REMITIÓ A LA **CÁMARA DE DIPUTADOS** Y SE PUBLICA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE EN LA GACETA PARLAMENTARIA RESPECTIVA, A CARGO DEL **DIPUTADO OSCAR DANIEL MARTÍNEZ TERRAZAS,** DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN E INTEGRANTE DE LA **LXIV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.**

Quien suscribe **Oscar Daniel Martínez Terrazas**, Diputado Federal, integrante de la **LXIV Legislatura** de la **Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión**, del Grupo **Parlamentario del Partido Acción Nacional**, con fundamento en el *Artículo 109 numeral 1, 2 y 3 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados*, que presenta RESERVA PARA REFORMAR, MODIFICAR Y ADICIONAR *DICTAMEN DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA*,

Exposición de Motivos

La criminalidad económica ha tenido su impacto en muchos países del mundo, y México también ha tenido que buscar alternativas a su enfrentamiento tanto desde el punto de vista preventivo, o apoyados en la política criminal y penal, trazada, para controlar y disminuir sus efectos nocivos.

La ciudadanía frecuentemente muestra una tolerancia casi generalizada ante los delitos económicos, a los comúnmente llamados "**Delincuencia de Cuello Blanco"**, por la escasa incidencia o afectación directa a los bienes jurídicos personales. Por otra parte, los niveles elevados de inteligencia del infractor han llevado a un aumento de la **cifra negra** de estas tipologías delictivas, lo que resulta

aún más pernicioso y comparable con el *efecto iceberg*, donde lo más nocivo se encuentra oculto.

El perjuicio económico provocado por la delincuencia económica es cuantioso y, unido a ello, trae consigo además la pérdida de confianza en el tráfico mercantil, en la credibilidad de las instituciones del Estado, de Crédito, de Autor, Intelectuales, de las Personas.

Los delitos económicos más frecuentes están estipulados en diferentes Leyes y Códigos, entre ellos son los cometidos contra los derechos de autor establecidos en el Código Penal Federal, los delitos Patrimoniales, los Delitos Fiscales, y los Delitos contra las Instituciones Bancarias y de Seguros. (Véase el Cuadro No. 1).

Cuadro No. 1. Delitos Fiscales y Financieros, 2012-2017

TIPO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION/1	7,568	4,415	3,659	4,117	3,440	3,307	**4,418**
PATRIMONIALES/2	17,375	20,785	23,301	22,935	20,138	36,670	**23,534**
EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR	1,878	1,106	959	1,031	1,858	587	**1,237**
LEYES DE INSTITUCIONES DE CREDITO, INVERSION, FIANZAS Y SEGUROS	4,893	4,240	2,563	3,269	4,316	8,099	**4,563**
Total	**31,714**	**30,546**	**30,482**	**31,352**	**29,752**	**48,663**	**33,752**

Fuente: Elaboración Propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Consultado en http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-federal.php.

1/ El Rubro del "Código Fiscal de la Federación sustituye a los delitos "Fiscales", entre ellos los de contrabando, defraudación fiscal, suplantación de identidad, operaciones contables o sociales, con diferentes contenidos; perjuicio del fisco federal, entre otros.

2/ Delitos Patrimoniales entre otros, Abuso de confianza, fraude, extorción, despojo de cosas.

Este tipo de delitos son aquellos que proporcionan un beneficio económico al criminal, donde el crimen no es violento e involucra muchas prácticas ilegales;

aunque en ocasiones únicamente son poco éticas y creen estar amparados por el marco legal.

Las proporciones del daño de estos delitos han hecho que este tipo de delitos sea uno de los principales problemas económicos de nuestro siglo. Las personas pierden sus casas, sus empleos, su seguridad y sus sueños. De hecho, un único crimen corporativo podría hacer más daño que cientos de delitos de la calle.

El impacto del aumento de la criminalidad, así como la multiplicidad y complejidad de su expresión contemporánea, han requerido de la diversificación de la reacción y de las respuestas para su contención que aminoren sus consecuencias, pero que también ponderen el diagnóstico de sus causas.

La delincuencia económica irrumpe en este contexto con una abrumadora carga de perjuicios no solo para la economía, sino que ha subvertido valores de muchas personas y ha dejado prácticamente afónico al Derecho Penal que no estaba diseñado para estos retos por los escasos recursos con que cuenta para replicar convenientemente.

Las personas que cometen **Delitos Fiscales y Financieros** han mostrado una faz diferente para la ejecución penal que se siente desafiada para responder diferenciada y adecuadamente.

La clausura de las empresas que estas personas dirigen, la prohibición de ejercer una profesión, cargo u oficio, especialmente como gerente de la entidad, así como de realizar publicidad respecto a su empresa, son variantes punitivas que tendrían el efecto de disuadir y desmotivar sus conductas codiciosas. Por ello, urge adecuar la ejecución penal, y en ella la penitenciaria, donde se expresen las particularidades punitivas para estos tipos de delitos y de sancionados.

Se aspira que el **GP PAN** presente **Reservas**, para proponer la creación de una nueva **Fiscalía Especializada para el Combate a Delitos de Fiscales y Financieros,** Reformando, Modificando y Adicionando varios *Artículos* a este *Proyecto*.

Quien suscribe **Oscar Daniel Martínez Terrazas**, Diputado Federal, integrante de la **LXIV Legislatura** de la **Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión**, del Grupo **Parlamentario del Partido Acción Nacional**, con fundamento en el *Artículo 109 numeral 1, 2 y 3 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados*, que presenta RESERVA PARA REFORMAR, MODIFICAR Y ADICIONAR *DICTAMEN DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA*, somete a consideración del pleno de esta soberanía:

TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO

Artículo 14. De la Estructura de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General dela República tendrá la siguiente estructura: I.- ..... VI.- ..... **VII.-** Coordinación de Investigación y Persecución Penal;. VIII.- .....XIII.-.....	**Artículo 14.** De la Estructura de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General dela República tendrá la siguiente estructura: I.- ..... VI.- ..... **VII.- Fiscalía Especializada para el Combate a Delitos Fiscales y Financieros.** VIII.- .....XIV.-...

RESERVA PARA REFORMAR, MODIFICAR Y ADICIONAR *DICTAMEN DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA*.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma y modifica el *Artículo 14 Fracción VII para incluir una fracción y las subsecuentes de la VIII se recorren un número consecutivo inmediato y se adiciona el Artículo 30-Bis de LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA*

Artículo 14. De la Estructura de la Fiscalía General de la República.

La Fiscalía General dela República tendrá la siguiente estructura:

I.- ..... VI.- .....

VII.- Fiscalía Especializada para el Combate a Delitos Fiscales y Financieros.

VIII.- ..... XIII.-.....

Artículo 30 BIS. Funciones de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Fiscales y Financieros.

Conocer entre otros, de los delitos fiscales y delitos financieros relacionados con el sistema financiero previstos en el *Código Penal Federal, Código Fiscal de la Federación, Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Instituciones Financieras, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, Ley General de Instituciones Mutualistas de Seguros, Ley del Mercado de Valores* y demás Leyes relacionadas con la materia.

Conocer de las investigaciones relacionadas con los delitos señalados".

DIP. VERÓNICA JUÁREZ PIÑA
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Secretaria de la Comisión de Justicia

Remitió las siguientes propuestas:

DICE	DEBE DECIR
Artículo 11. Órganos a cargo de la función fiscal La representación de la Fiscalía General de la República corresponde a los siguientes órganos: I. Titular de la Fiscalía General de la República; II. Titulares de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos; III. Titulares de las Fiscalías Especializadas; IV. Titular de la Coordinación de Investigación y Persecución Penal; ~~V. Titular de la Coordinación General, en sustitución o suplencia del Fiscal General de la República, de conformidad con lo previsto en la presente Ley, y~~ VI. Fiscales con nombramiento del Servicio Profesional de Carrera, de conformidad **o** con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento	**Artículo 11. Órganos a cargo de la función fiscal** La representación de la Fiscalía General de la República corresponde a los siguientes órganos: I. Titular de la Fiscalía General de la República; II. Titulares de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos; III. Titulares de las Fiscalías Especializadas **y unidades de investigación que sean creadas por el o la titular de la Fiscalía General de la República**; IV. Titular de la Coordinación de Investigación y Persecución Penal; y **V.** Fiscales con nombramiento del Servicio Profesional de Carrera, de conformidad **o** con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento.
Capítulo II **De la Estructura** **Artículo 14. De la Estructura de la Fiscalía General de la República** ... I. ... ~~II. Coordinación General;~~	**Capítulo II** **De la Estructura** **Artículo 14. De la Estructura de la Fiscalía General de la República** ... I. ... ~~II.~~ Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos;

III. Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos; IV. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; V. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; VI. Fiscalía Especializada de Asuntos Internos; VII. Coordinación de Investigación y Persecución Penal; VIII. Coordinación de Métodos de Investigación; IX. Coordinación de Planeación y Administración; X. Órgano Interno de Control; XI. Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera; XII. Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; y XIII. Las fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General, a través de acuerdos generales, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento, y acorde con el Plan de Persecución Penal. ... ... El Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias **será** responsable de la aplicación de los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, con independencia técnica y de gestión. El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de la República contará con **autonomía técnica. Su titular** ~~un Consejo Técnico, que estará integrado~~	III. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; IV. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; V. Fiscalía Especializada de Asuntos Internos; VI. **Cuerpo de Policía de Investigación;** VII. Coordinación de Investigación y Persecución Penal; VIII. Coordinación de Métodos de Investigación; IX. Coordinación de Planeación y Administración; X. Órgano Interno de Control; XI. Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera; XII. Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; y XIII. Las fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General, a través de acuerdos generales, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento, y acorde con el Plan de Persecución Penal. ... ... El Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias **será** responsable de la aplicación de los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, con independencia técnica y de gestión. El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de la República contará con **autonomía técnica. Su titular**-será

~~por la persona titular de la Fiscalía, quien lo presidirá y por los Fiscales a que se refiere esta Ley y estará facultado para aprobar, evaluar y conocer de la ejecución de los programas y proyectos a cargo del Instituto y conocer y aprobar en su caso los informes que presente su titular, el cual~~ será designado por la persona titular de la Fiscalía General de la República. ~~El Consejo Técnico del Instituto, que deberá sesionar por lo menos tres veces al año y en el cual participará el titular del Instituto, con voz, pero sin voto, se organizará y operará conforme a las reglas que expida al efecto.~~ Las personas titulares de la Fiscalía General de la República ~~o de la Coordinación General~~, establecerán los criterios para evitar la fragmentación de las investigaciones y en su caso, la creación de unidades mixtas de investigación. ...	designado por la persona titular de la Fiscalía General de la República. Las personas titulares de la Fiscalía General de la República establecerán los criterios para evitar la fragmentación de las investigaciones y en su caso, la creación de unidades mixtas de investigación. ...
Artículo 19. Facultades de la persona titular de la Fiscalía General de la República ... I. - IV. ... V. Solicitar la colaboración de otras autoridades, así como auxiliar a las que lo soliciten~~, directamente o por conducto de la Coordinación General~~, en la persecución de los probables autores o partícipes del hecho delictivo, en los términos que dispongan las leyes, acuerdos, convenios, bases y demás instrumentos de colaboración celebrados para tal efecto; VI....	**Artículo 19. Facultades de la persona titular de la Fiscalía General de la República** ... I. - IV. ... V. Solicitar la colaboración de otras autoridades, así como auxiliar a las que lo soliciten en la persecución de los probables autores o partícipes del hecho delictivo, en los términos que dispongan las leyes, acuerdos, convenios, bases y demás instrumentos de colaboración celebrados para tal efecto; VI....
~~**Capítulo IV**~~	Se elimina el capítulo IV

~~De la Coordinación General de la Fiscalía General de la República~~ **~~Artículo 20. La Coordinación General de la Fiscalía General de la República.~~** ~~La Coordinación General tendrá las siguientes facultades:~~ ~~I. Suplir a la persona titular de la Fiscalía General de la República en sus ausencias **temporales de hasta tres meses;**~~ ~~II. Representar a la Fiscalía General de la República, en las relaciones institucionales con otras entidades u órganos de gobierno locales, nacionales, federales e internacionales;~~ ~~III. Elaborar las normas y políticas a las que deberán sujetarse las unidades y los órganos de la Fiscalía, en la materia de su competencia;~~ ~~IV. Desarrollar la política del sistema de gestión documental y administración de archivos de la **Fiscalía General,** de conformidad con la normatividad aplicable;~~ ~~V. Integrar el sistema de información legislativa, jurisprudencial y doctrinal, nacional e internacional a efecto de dar cumplimiento a las atribuciones de la Fiscalía General de la República, en materia de medios de control constitucional de asuntos de su competencia;~~ ~~VI. Desarrollar y ejecutar las políticas de transparencia y rendición de cuentas, y atender las solicitudes de información pública;~~ ~~VII. Atender las quejas, recomendaciones y solicitudes de los organismos públicos de derechos humanos, nacionales e internacionales, así como las quejas presentadas por las personas;~~	

~~VIII. Formalizar los convenios de colaboración con el exterior para el adecuado funcionamiento del Mecanismo de Apoyo Exterior y las demás funciones que se requieran;~~ ~~IX. Representar legamente a la Fiscalía General de la República, en los asuntos jurídicos de acciones promovidas en su contra o por la propia Fiscalía,~~ **~~así como también ante las autoridades administrativas, judiciales y laborales;~~** ~~X. Canalizar la información generada por la persona titular de la Fiscalía General República;~~ ~~XI. Evaluar riesgos y proteger a personas ofendidas, víctimas, testigos y demás sujetos en los casos en que existan amenazas o riesgos a su integridad o vida;~~ ~~XII. Coordinar y colaborar con entidades gubernamentales nacionales e internacionales para la implementación de los esquemas de seguridad de víctimas, testigos y demás sujetos procesales;~~ ~~XIII. Resolver los conflictos que se susciten en el ámbito administrativo con motivo de la interpretación o aplicación de la presente Ley y su Reglamento, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, y demás normatividad institucional, así como presentar opinión a la persona titular de la Fiscalía General de la República, en los casos no previstos, para que resuelva lo conducente en el marco de sus facultades;~~ ~~XIV. Desahogar las consultas jurídicas internacionales que formulen las diversas áreas de la Fiscalía General de la República, así como de los órganos del Estado Mexicano en materia de procuración de justicia;~~	

~~XV. Auxiliar a la persona titular de la Fiscalía General de la República, en la elaboración de los lineamientos y bases del servicio profesional de carrera de la institución, de nombramiento y remoción de servidores públicos, de conformidad con la normatividad;~~ ~~XVI. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de las políticas institucionales del servicio profesional de carrera;~~ ~~XVII. Coordinar y dirigir a las representaciones de la Fiscalía General de la República en el extranjero;~~ ~~XVIII. Coordinar y dirigir la implementación de la política de género y violencia contra la mujer así como para la atención con enfoque diferencial para personas colocadas en situación especial de vulnerabilidad en razón de la condición étnica, migratoria, de género, sexo, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, orientación o identidad sexual y de género, estado civil o cualquier otra condición o motivo que atente contra la dignidad humana; o bien, tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas;~~ ~~XIX. Conocer y resolver los conflictos de competencia entre órganos fiscales, y XX. Las demás que disponga esta Ley y su Reglamento.~~	
Artículo 21. Cobertura de suplencias de la persona titular de la Fiscalía General de la República. La persona titular de la Fiscalía General de la República, será suplida en sus excusas, ausencias o faltas temporales por la persona **en la que determine por acuerdo** ~~titular de la Coordinación General y a falta de ésta, por quien disponga el Reglamento de esta Ley, quien deberá cumplir con los requisitos~~	**Artículo 21. Cobertura de suplencias de la persona titular de la Fiscalía General de la República.** La persona titular de la Fiscalía General de la República, será suplida en sus excusas, ausencias o faltas temporales por la persona **en la que determine por acuerdo.**

~~establecidos para ser titular de la Fiscalía General de la República~~. En caso de ausencia definitiva, la titularidad de la Fiscalía General de la República, será ocupada temporalmente por la persona titular de la Coordinación General, quien deberá notificar al Senado de la República a efectos que proceda conforme al artículo 102 constitucional	En caso de ausencia definitiva, la titularidad de la Fiscalía General de la República, será ocupada temporalmente por la persona titular de la Coordinación General, quien deberá notificar al Senado de la República a efectos que proceda conforme al artículo 102 constitucional
Artículo 22. De la designación y remoción de las personas titulares de las Fiscalías Especializadas La persona titular de la Fiscalía General de la República designará a las personas titulares de las Fiscalías Especializadas con base a sus méritos y capacidades para ejercer el cargo y con un perfil previamente establecido. El Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes podrá objetar dicha designación o remoción, en un plazo máximo de veinte días hábiles, para dichos efectos, el Fiscal General de la República, enviará al Senado de la República una comunicación donde expondrá las razones que sustentan la designación o la remoción de las personas titulares de las fiscalías especializadas. En su caso, serán removidos en términos de las disposiciones constitucionales, respetando el derecho de audiencia y debido proceso conforme a la presente Ley y su Reglamento. ~~En el caso de que sea rechazada una opinión o recomendación, ésta deberá estar debidamente fundada y motivada.~~	**Artículo 22. De la designación y remoción de las personas titulares de las Fiscalías Especializadas** La persona titular de la Fiscalía General de la República designará a las personas titulares de las Fiscalías Especializadas con base a sus méritos y capacidades para ejercer el cargo y con un perfil previamente establecido. El Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes podrá objetar dicha designación o remoción, en un plazo máximo de veinte días hábiles, para dichos efectos, el Fiscal General de la República, enviará al Senado de la República una comunicación donde expondrá las razones que sustentan la designación o la remoción de las personas titulares de las fiscalías especializadas. En su caso, serán removidos **por causas graves** en términos de las disposiciones constitucionales, respetando el derecho de audiencia y debido proceso conforme a la presente Ley y su Reglamento. ~~.~~**Las recomendaciones del Senado no podrán ser rechazadas por el titular de la Fiscalía General si fueron aprobadas por mayoría calificada**
Artículo 26. Funciones comunes para las Fiscalías Especializadas …	**Artículo 26. Funciones comunes para las Fiscalías Especializadas** …

I. ... II. En ejercicio de su autonomía técnica, participar en estrategias de coordinación internacional con las instancias homólogas o que resulten pertinentes para el ejercicio de sus funciones, dando aviso a la ~~Coordinación General~~; III. ... IV. Elaborar solicitudes de información a instancias, empresas o particulares internacionales, dando aviso a la ~~Coordinación General~~; V- X. ...	I. ... II. En ejercicio de su autonomía técnica, participar en estrategias de coordinación internacional con las instancias homólogas o que resulten pertinentes para el ejercicio de sus funciones, dando aviso a la **Fiscalía General;** III. ... IV. Elaborar solicitudes de información a instancias, empresas o particulares internacionales, dando aviso a la **Fiscalía General**; V- X. ...
Artículo 33. De la Coordinación de Planeación y Administración. ... Apartado A. ... I. XI.... **Apartado B.** ... I- VIII. ... IX. Colaborar con la ~~Coordinación General~~ para asegurar la suficiencia presupuestal para el cumplimiento y desarrollo de los rubros que contempla el Servicio Profesional de Carrera; X. - XIX. ...	**Artículo 33. De la Coordinación de Planeación y Administración.** ... Apartado A. ... I. XI.... **Apartado B.** ... I- VIII. ... IX. Colaborar con la **Fiscalía General** para asegurar la suficiencia presupuestal para el cumplimiento y desarrollo de los rubros que contempla el Servicio Profesional de Carrera; X. - XIX. ...
Artículo 53. Sistema de recepción y canalización La **Fiscalía General** ~~Coordinación General~~ establecerá un sistema central de recepción y canalización de los asuntos que sean competencia de la Fiscalía General de la República y al respecto tendrá las siguientes atribuciones: I. – V	**Artículo 53. Sistema de recepción y canalización** La **Fiscalía General** ~~Coordinación General~~ establecerá un sistema central de recepción y canalización de los asuntos que sean competencia de la Fiscalía General de la República y al respecto tendrá las siguientes atribuciones: I. – V ... ...
Artículo 55. Naturaleza y finalidad del Servicio Profesional de Carrera	**Artículo 55. Naturaleza y finalidad del Servicio Profesional de Carrera**

El Servicio Profesional de Carrera será el sistema integral de regulación del empleo público de todo el personal que preste servicios en la Fiscalía General de la República, que garantizará la igualdad de oportunidades, idoneidad y mérito para el ingreso y reclutamiento, ascensos, estímulos y recompensas. El sistema integral del Servicio Profesional de Carrera estará a cargo del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera, el cual contará con autonomía técnica y de gestión. Su estructura, procedimientos y gestión estarán regulados en el Reglamento correspondiente. El Servicio Profesional de Carrera será organizado con la finalidad de estimular el profesionalismo, 'la rectitud, la independencia técnica; fomentar la iniciativa, innovación y la eficiencia institucional; y prevenir las violaciones a derechos humanos, así como los actos de corrupción.	El Servicio Profesional de Carrera será el sistema integral de regulación del empleo público de todo el personal que preste servicios en la Fiscalía General de la República, que garantizará la igualdad de oportunidades, idoneidad y mérito para el ingreso y reclutamiento, ascensos, estímulos y recompensas, **garantizando las condiciones que le permitan al personal y a sus familias tener acceso a una vida digna.** El sistema integral del Servicio Profesional de Carrera estará a cargo del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera, el cual contará con autonomía técnica y de gestión. Su estructura, procedimientos y gestión estarán regulados en el Reglamento correspondiente.
Artículo 57. Derechos del personal de la Fiscalía General de la República Además de las responsabilidades y obligaciones que contiene esta Ley, los sujetos a que se refiere la misma tendrán los siguientes derechos: I. A participar en igualdad de oportunidades en el Servicio Profesional de Carrera conforme a las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y demás normatividad aplicable; II. A que la aplicación de las reglas del Servicio Profesional de Carrera sea objetiva, justa, transparente e imparcial;	**de la Fiscalía General de la República** Además de las responsabilidades y obligaciones que contiene esta Ley, los sujetos a que se refiere la misma tendrán los siguientes derechos: **I. A que se les garanticen condiciones laborales que les permitan a ellos y a sus familias tener acceso a una vida digna.** **II.** A participar en igualdad de oportunidades en el Servicio Profesional de Carrera conforme a las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y demás normatividad aplicable;

III. A desempeñar una carrera conforme a este servicio que se base en el mérito, en la superación constante y a tener estabilidad, conforme a las disposiciones aplicables, en el desempeño de su función; IV. A desempeñarse en su asignación, contando con condiciones adecuadas y dignas de trabajo y a formarse de manera integral; V. A contar con una remuneración adecuada, digna, irrenunciable y que corresponda a los servicios prestados en la fiscalía; VI. A profesionalizarse y actualizarse de manera permanente para un mejor desempeño de sus funciones; VII. A recibir estímulos, promociones y ascensos horizontales y verticales con motivo del desempeño de su función, y VIII. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables.	**III.** A que la aplicación de las reglas del Servicio Profesional de Carrera sea objetiva, justa, transparente e imparcial; **IV.** A desempeñar una carrera conforme a este servicio que se base en el mérito, en la superación constante y a tener estabilidad, conforme a las disposiciones aplicables, en el desempeño de su función; **V.** A desempeñarse en su asignación, contando con condiciones adecuadas y dignas de trabajo y a formarse de manera integral; **VI.** A contar con una remuneración adecuada, digna, irrenunciable y que corresponda a los servicios prestados en la fiscalía; VI. A profesionalizarse y actualizarse de manera permanente para un mejor desempeño de sus funciones; **VII.** A recibir estímulos, promociones y ascensos horizontales y verticales con motivo del desempeño de su función, y **VIII.** Las demás que señalen otras disposiciones aplicables.

DIP. JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR
Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano
Secretario de la Comisión de Justicia

Envió las propuestas de modificación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano al Dictamen de Proyecto de Decreto por el que se crea La Ley Orgánica de la Fiscalía de la Republica;

Para quedar como sigue:

TEXTO DEL DICTAMEN	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.
Articulo 4.- Competencia La Fiscalía General de la Republica tendrá las competencias señaladas en la Constitución, esta Ley y las demás Leyes aplicables. ~~La Fiscalía General de Republica tendrá la facultad de atraer casos de fuero común garantizándose que la investigan y la persecución de los delitos no se fragmente.~~ La victima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción. La negativa de atracción podrá ser impugnada ~~en los términos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.~~	**Articulo 4.-** Competencia La Fiscalía General de la Republica tendrá las competencias señaladas en la Constitución, esta Ley y las demás Leyes aplicables. La Fiscalía General de la Republica tendrá la facultad para atraer casos del fuero común conforme a las reglas de atracción establecidas en las leyes aplicables en los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las leyes aplicables en los casos en que se demuestre la inactividad o ineficacia de la Fiscalía Local competente en los casos de delitos que trasciendan el ámbito de una o más entidades federativas y cuando exista sentencia, resolución o pronunciamiento de un órgano u organismo previsto en tratado internacional; debiendo garantizar que la investigación no se fragmente. La victima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción. La negativa de atracción podrá ser impugnada conforme a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento.

TEXTO DEL DICTAMEN	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.

Artículo 14. De la Estructura de la Fiscalía General de la Republica. La Fiscalía General de la Republica tendrá la siguiente estructura: I. Fiscal General; II. Coordinación General; III. Fiscalía Especializada en Derechos Humanos; IV. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; V. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; VI. Fiscalía Especializada de Asuntos Internos; VII. Coordinación de Investigaciones y Persecución Penal; VIII. IX. Coordinación de Métodos de Investigación; X. Coordinación de Planeación y Administración; XI. Órgano Interno de Control: XII. Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera; XIII. Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; y XIV. Las fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General, a través de acuerdos generales, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento, y acorde con el Plan de Persecución Penal. La Fiscalía General de Republica, se apoyara de un Consejo	VIII. Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses; … … … …

Ciudadano el cual cuenta con las facultades señaladas por esta Ley.	
~~La Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, tendrá a su cargo las Fiscalías de Protección de los Derechos Humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes de trata de personas de desapariciones forzadas y de desaparición cometida por particulares;~~	...
~~De periodistas y personas defensoras de los Derechos Humanos;~~ ~~De migrantes;~~ ~~De Investigación de tortura y de todas aquellas Fiscalías, Órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General de Republica.~~	XIV. Las fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General, a través de acuerdos generales, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento y acorde con el Plan de Persecución Penal.
El órgano de mecanismos alternativos de solución de controversias será responsable de la aplicación de los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, con independencia técnica y de gestión.	
~~El instituto de servicios periciales y ciencias forenses de la Fiscalía General de la Republica contara con un Consejo Técnico que estará~~	

~~integrado por la persona titular de la Fiscalía quien lo presidirá y por los Fiscales a que se refiere esta Ley y estará facultado para aprobar avaluar y conocer de la ejecución de los programas y proyectos a cargo del Instituto y conocer y aprobar en su caso los informes que presente su titular el cual será designado por la persona titular de la Fiscalía General de Republica.~~ ~~El Consejo Técnico del Instituto que deberá de sesionar por lo menos tres veces al año y en el cual participara el titular del Instituto, con voz pero sin voto se organizara y operara conforme a las reglas que expida al efecto.~~ ~~Las personas titulares de la Fiscalía General de la Republica o de la Coordinación General establecerán los criterios para evitar la fragmentación de las investigaciones y en su caso la creación de unidades mixtas de investigación.~~ La Fiscalía General de la Republica contara con Fiscales, Policía de Investigación, Analistas, Auxiliares y Peritos, así como con el personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones, en términos de las disposiciones Jurídicas aplicables. En los casos relacionados con violencia de género y contra la mujer, el personal deber de ser especializado.	

Así mismo podrá allegarse de personal técnico especializado de otras entidades para colaborar en las investigaciones.	

TEXTO DEL DICTAMEN.	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.
Articulo 14.- De la estructura de la Fiscalía General de la Republica. La Fiscalía General de la Republica tendrá la siguiente estructura: .... I a XII ...	**Articulo 14.-** De la estructura de la Fiscalía General de la Republica. La Fiscalía General de la Republica tendrá la siguiente estructura: ... I a VI **VII. Fiscalía Especializada en delitos contra mujeres e Investigación de Feminicidios.** *Se recorren los fracciones subsecuentes*

TEXTO DEL DICTAMEN.	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.
Articulo 16.- De la designación de la persona titular de la Fiscalía General de Republica. Quienes aspiren a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la Republica, deberá cumplir como mínimo, los siguientes requisitos de elegibilidad: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;	**Articulo 16.-** De la designación de la persona titular de la Fiscalía General de Republica. Quienes aspiren a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la Republica, deberá cumplir como mínimo, los siguientes requisitos de elegibilidad: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; III. Contar con una antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; IV. Gozar de buena reputación, y; V. No haber sido condenado por delito doloso	II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; III. Contar con una antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; **IV. Ser experto y tener amplio conocimiento comprobable de la materia penal y de procuración de Justicia** *Se recorren las fracciones subsecuentes*

TEXTO DEL DICTAMEN.	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.
Articulo 18.- Causas graves de remoción de la persona titular de la Fiscalía General de la Republica. ~~La persona titular de la Fiscalía General de la Republica, solo podrá ser removida por el Presidente de la Republica por incurrir en alguna de las causas graves contempladas en el capítulo II del Título Tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas o por la comisión de uno o más delitos considerados como graves por la legislación penal u otros ordenamientos.~~	**Articulo 18.-** Causas graves de remoción de la persona titular de la Fiscalía General de la Republica. El Fiscal General de la Republica solamente podrá ser removido por el Presidente de la Republica, cuando incurra en alguna de la siguientes causas graves: I. Cuando de manera sistemática no se cumplan con los objetivos establecidos en el Plan de Persecución Penal; II. Participar en el ataque a las instituciones democráticas y a la forma de gobierno republicano y federal; III. Participar, tolerar, consentir o apoyar violaciones graves a los derechos humanos. IV. Cometer cualquier violación a la Constitución que motive algún trastorno ilícito de

El Ejecutivo Federal deberá de acreditar ante el Senado la causa grave que motivo la remoción de la persona titular de la Fiscalía General de la Republica, e informar al Senado de la Republica, quien decidirá si objeta o no la remoción en términos del artículo 102 apartado A, fracciones IV y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 110 y 111 de la misma.	forma en el funcionamiento normal de las instituciones. El Ejecutivo Federal deberá de acreditar ante el Senado la causa grave que motivo la remoción de la persona titular de la Fiscalía General de la Republica, e informar al Senado de la Republica, quien decidirá, respetando el derecho de defensa y debido proceso, si objeta o no la remoción, en términos del artículo 102 apartado A, fracciones IV y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 110 y 111 de la misma.

TEXTO DEL PROYECTO.	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.
Artículo 19. Facultades de la persona titular de la Fiscalía General de la Republica. I-IV... V.- Solicitar la colaboración de otras autoridades, así como auxiliar a las que lo soliciten, directamente o por conducto de la Coordinación ~~General,~~ en la persecución de los probables autores o participes del hecho delictivo, en los términos que dispongan las leyes, acuerdos, convenios, bases y demás instrumentos de colaboración celebrados para tal efecto; VI-VII... VIII.- Nombrar y remover a las personas titulares de las Fiscalías Especializadas en los términos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ~~a los demás fiscales que considere pertinente, así como~~	**Artículo 19.** Facultades de la persona titular de la Fiscalía General de la Republica. I-V... V. Solicitar la colaboración de otras autoridades, así como auxiliar a las que lo soliciten, directamente o por conducto de la Coordinación de Investigación y persecución Penal, en la persecución de los probables autores o participes del hecho delictivo, en los términos que dispongan las leyes, acuerdos, convenios, bases y demás instrumentos de colaboración celebrados para tal efecto; VI-VII VIII.- Nombrar y remover a las personas titulares de las Fiscalías Especializadas en los términos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Ley. Los demás fiscales y servidores

~~otros servidores públicos adscritos a la Fiscalía.~~ IX...	públicos de la Fiscalía General de la Republica deberán ser nombrados conforme al Servicio Profesional de Carrera y removidos según lo dispuesto por la legislación aplicable, garantizando el debido proceso.

TEXTO DEL PROYECTO.	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.
Artículo 21. Cobertura de suplencias de la persona titular de la Fiscalía General de la Republica. La persona titular de la Fiscalía General de la Republica, será suplida en sus excusas, ausencias o faltas temporales por la persona titular de la Coordinación General y a falta de esta, por quien disponga el Reglamento de esta Ley, quien deber de cumplir con los requisitos establecidos para ser titular de la Fiscalía General de la Republica. En caso de ausencia definitiva, la titularidad de la Fiscalía General de la Republica, será ocupada temporalmente por la persona titular de la Coordinación General, quien deberá de notificar al Senado de la Republica a efectos que proceda conforme al artículo 102 constitucional.	**Artículo 21.** Cobertura de suplencias de la persona titular de la Fiscalía General de la Republica. La persona titular de la Fiscalía General de la Republica, será suplida en sus excusas, ausencias o faltas temporales por la persona titular de la Coordinación General y a falta de esta, por quien disponga el Reglamento de esta Ley, quien deber de cumplir con los requisitos establecidos para ser titular de la Fiscalía General de la Republica. En caso de ausencia definitiva, el Fiscal General será suplido temporalmente por la persona titular del Coordinación General, quien deberá de notificar al Senado de la Republica y al Ejecutivo Federal para que según sea el caso, procedan conforme a lo previsto en el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La persona titular de la Coordinación General de la Fiscalía General de la Republica, en ningún caso podrá ser designada para cubrir la ausencia definitiva del Fiscal General de la Republica; ni podrá ser designada como titular de la Fiscalía General de la Republica para el periodo inmediato

	siguiente al encargo como titular de la Coordinación General.

TEXTO DEL DICTAMEN.	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.
Artículo 22. De la designación y remoción de las personas titulares de las Fiscalías Especializadas.	**Artículo 22. De la designación y remoción de las personas titulares de las Fiscalías Especializadas.**
La persona titular de la Fiscalía General de la Republica designara a las personas titulares de las Fiscalías Especializadas con base a sus méritos y capacidades para ejercer el cargo y con un perfil previamente establecido.	La persona titular de la Fiscalía General de la Republica designara a las personas titulares de las Fiscalías Especializadas con base a sus méritos y capacidades para ejercer el cargo y con un perfil previamente establecido. **Para ello, convocara a una Comisión de Selección integrada por cinco personas de reconocida honorabilidad y trayectoria en materias de seguridad, procuración de justicia y derechos humanos. Dicha comisión emitirá una convocatoria pública y propondrá al Fiscal General una terna por cada una de las Fiscalías Especializadas de donde se designara a la persona que ocupara el cargo.**
El Senado de la Republica por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes podrá objetar dicha designación o remoción, en un plazo máximo de veinte días hábiles, para dichos efectos, el Fiscal General de la Republica, enviara al Senado de la Republica una comunicación donde expondrá las razones que sustenten la designación o la remoción de las personas titulares delas Fiscalías Especializadas.	[...]
En su caso, serán removidos en términos de las disposiciones constitucionales, respetando el derecho de audiencia y debido proceso y	[...]

conforme a la presente ley y su reglamento.	

TEXTO DEL DICTAMEN.	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.
Artículo 42. Facultades del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la Republica. El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes facultades I. Opinar, dar seguimiento y emitir recomendaciones públicas sobre el contenido e implementación del Plan de Persecución Penal que presente la persona titular de la Fiscalía General de la Republica, así como los programas anuales de trabajo y su implementación; II. Opinar sobre la creación de nuevas estructuras propuestas por la persona titular de la Fiscalía General de la Republica; III. Hacer de conocimiento del Órgano Interno de Control cuando advierta probable responsabilidad administrativa; IV. Dar opiniones para fortalecer el presupuesto de la institución; V. Opinar sobre la normatividad interna de la Fiscalía General de la Republica;	**Artículo 42. Facultades del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la Republica.** ...

VI. Opinar sobre las propuestas y planes del Servicio Profesional de Carrera; VII. Establecer reglas operativas del Consejo; VIII. En general emitir opiniones y recomendaciones sobre el desempeño de la Fiscalía y sus áreas; IX. Para mejor desarrollo de sus funciones el Consejo Ciudadano podrá invitar a personas expertas nacionales e internacionales, y X. Las demás que establezca la Ley y sus Reglamentos. Las opiniones y recomendaciones emitidas por el Consejo no son vinculantes. La Fiscalía y las áreas a las que vayan dirigidas las recomendaciones deberán de fundar y motivar las razones por las cuales se acepta o rechaza la recomendación. Siempre serán de carácter público. Cualquier intromisión en aspectos sustantivos de la función fiscal tendrá como sanción la remisión del Consejo respectivo, por parte de la persona titular de la Fiscalía General de la Republica.	Las opiniones y recomendaciones emitidas por el consejo **serán** vinculantes. La Fiscalía y las áreas a las que vayan dirigidas las recomendaciones deberán de fundar y motivar las razones por las cuales se acepta o rechaza la recomendación. Siempre serán de carácter público. ...

TEXTO DEL DICTAMEN.	**PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.**

Tercero Transitorio. Los casos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto serán resueltos en las unidades a las que estén adscritos, conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior sin perjuicio de que se adscriban a nuevas unidades en tanto e avanza en la transición orgánica de la Fiscalía General de la Republica.	**Tercero Transitorio.** Los casos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto seguirán siendo conocidos **por las unidades orgánicas y agentes del Ministerio Publico que los tenga a su cargo hasta que las Fiscalías Especializadas o la Coordinación de Investigación y Persecución Penal ejerzan la facultad de atracción conforme a lo que establezca el plan de transición.** **Los casos que ingresen a partir de la vigencia de la presente Ley seguirán siendo conocidos por las unidades orgánicas y agentes del Ministerio Público que correspondan hasta que las Fiscalías Especializadas o la Coordinación de Investigación y Persecución ejerzan la facultad de atracción conforme a lo que establezca el plan de transición.**

TEXTO DEL DICTAMEN.	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.
DECIMO TERCERO TRANSITORIO. Transcurrido un año a partir del nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General de la Republica, y a la luz del Plan Estratégico de Transición y la experiencia acumulada en el proceso de Transición, la o el Fiscal General de la Republica, realizara una consulta pública para la revisión del marco constitucional y jurídico de la Fiscalía General de la Republica. Dicha convocatoria tendrá como objetivo la identificación discusión y formulación de las reformas constitucionales, de la legislación secundaria o de las reformas regulatorias necesarias para	**DECIMO TERCERO TRANSITORIO.** Transcurrido un año a partir del nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General de la Republica, y a la luz del Plan Estratégico de Transición y la experiencia acumulada en el proceso de Transición, la o el Fiscal General de la Republica, realizara una consulta pública para la revisión del marco constitucional y jurídico de la Fiscalía General de la Republica. Dicha convocatoria tendrá como objetivo la identificación discusión y formulación de las reformas constitucionales, de la legislación secundaria o de las reformas regulatorias necesarias para

la operación optima del modelo de Fiscalía General de la Republica, propuesto en la presente Ley. Los resultados obtenidos serán públicos y se comunicaran al Congreso de la Unión con el fin de que este realice las adecuaciones al marco jurídico que considere sean necesarias y pertinentes.	la operación optima del modelo de Fiscalía General de la Republica, **como órgano constitucional autónomo.** Los resultados obtenidos serán públicos y se comunicaran al Congreso de la Unión con el fin de que este realice las adecuaciones al marco jurídico que considere sean necesarias y pertinentes.
La convocatoria temas relacionados con la función del Fiscal y de persecución penal, el modelo de investigación criminal, la competencia, el servicio profesional de carrera, los órganos ciudadanos, los derechos humanos y la atención a víctimas; el régimen de responsabilidades de los servidores públicos de la fiscalía, revisión de la estructura institucional así como el régimen de transición entre otros. Esta consulta deberá garantizar condiciones de apertura, transparencia y participación ciudadana de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, academias y representantes del sector privado. Con base en las consultas realizadas, el Congreso de la Unión analizara y propondrá las reformas constitucionales y legales para el óptimo funcionamiento de la Fiscalía General de la Republica.	La convocatoria temas relacionados **con el mecanismo de designación del titular de la Fiscalía General y las Fiscalías Especializadas,** con la función del Fiscal y de persecución penal, el modelo de investigación criminal, la competencia, el servicio profesional de carrera, los órganos ciudadanos, los derechos humanos y la atención a víctimas; el régimen de responsabilidades de los servidores públicos de la fiscalía, revisión de la estructura institucional así como el régimen de transición entre otros. Esta consulta deberá garantizar condiciones de apertura, transparencia y participación ciudadana de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, academias y representantes del sector privado. Con base en las consultas realizadas, el Congreso de la Unión analizara y propondrá las reformas constitucionales y legales para el óptimo funcionamiento de la Fiscalía General de la Republica.

DIP. MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Secretaria de la Comisión de Justicia

Se recibieron las siguientes observaciones:

DICE	DEBE DECIR
Artículo 7. Publicidad y transparencia La Fiscalía General de la República garantizará el acceso a la información pública generada en el marco de sus atribuciones y conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable. Respecto a las investigaciones relacionadas con las violaciones a los derechos humanos, se estará en los dispuesto por el artículo 5 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública	**Artículo 7. Publicidad y transparencia** La Fiscalía General de la República garantizará el acceso a la información pública generada en el marco de sus atribuciones y conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable. **La información derivada de una investigación penal abierta será considerada confidencial, a fin de preservar el derecho de presunción de inocencia, el resguardo de identidad de las víctimas y garantizar la inviolabilidad del proceso.** **Las investigaciones relacionadas con las violaciones a los derechos humanos o por la comisión de actos de corrupción no podrán ser consideradas reservadas.**
Artículo 11. Órganos a Cargo de la Función fiscal La representación de la Fiscalía General de la República corresponde a los siguientes órganos: I. Titular de la Fiscalía General de la República; II. Titulares de la Fiscalía de Derechos Humanos, ~~la Fiscalía~~ de Delitos Electorales, la Fiscalía de Combate a la Corrupción y ~~la Fiscalía~~ de Asuntos Internos.	**Artículo 11. Órganos a Cargo de la Función fiscal** La representación de la Fiscalía General de la República corresponde a los siguientes órganos: I. Titular de la Fiscalía General de la República; II. Titulares de la Fiscalías **Especializadas** en Materia de Derechos Humanos, **Atención de** Delitos Electorales, Combate a la Corrupción y Asuntos Internos.

~~III. Titulares de las Fiscalías Especializadas;~~ IV. Titular de la Coordinación General de Investigación y Persecución Penal; V. Titular de la Coordinación General, cuando se desempeñe en su situación del Fiscal General de la República, de conformidad con lo previsto en la presente Ley; y VI. Fiscales con nombramiento del Servicio Profesional de Carrera, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y su reglamento.	~~III. Titulares de las Fiscalías Especializadas;~~ ~~IV.~~ **III.** Titular de la Coordinación General de Investigación y Persecución Penal; ~~V.~~ **IV.** Titular de la Coordinación General, cuando se desempeñe en su situación del Fiscal General de la República, de conformidad con lo previsto en la presente Ley; y ~~VI.~~ **V.** Fiscales con nombramiento del Servicio Profesional de Carrera, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y su reglamento.

DICE	DEBE DECIR
Artículo 16. De la designación de la persona titular de la Fiscalía General de la República ... I. Tener la ciudadanía mexicana; II. a V. ... (Sin correlativo)	**Artículo 16. De la designación de la persona titular de la Fiscalía General de la República** ... I. **Ser ciudadano mexicano por nacimiento**; II. a V. ... **La persona titular de la Fiscalía General de la República durará en su encargo nueve años y no podrá ser reelegida para un nuevo periodo.**
Artículo 18. Causas graves de remoción de la persona titular de la Fiscalía General de la República. La persona titular de la Fiscalía General de la República sólo podrá ser removida por el Presidente de la República por	**Artículo 18. Causas graves de remoción de la persona titular de la Fiscalía General de la República.** La persona titular de la Fiscalía General de la República sólo podrá ser removida por el Presidente de la República por

~~incurrir en alguna de las siguientes~~ causas graves: ~~I. Cuando incumpla de manera reiterada con los fines institucionales previstos en el artículo 2. de esta Ley; y~~ ~~II. Participar, tolerar, consentir o apoyar violaciones graves a los derechos humanos, o~~ ~~Cometer violaciones graves a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.~~ El Ejecutivo Federal deberá ~~acreditar la causa grave que motivó la remoción de~~ la persona titular de la Fiscalía General de la República, e informar al Senado de la República, quien decidirá si objeta o no la remoción, en términos del artículo 102 apartado A, fracciones IV y V. Lo dispuesto en las fracciones anteriores se aplicará sin perjuicio de lo previsto en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	las causas graves **en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.** **Una vez que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa imponga la sanción de destitución,** el Ejecutivo Federal deberá **remover a** la persona titular de la Fiscal General de la República, e informar al Senado de la República, quien decidirá si objeta o no la remoción, en términos del artículo 102 apartado A, fracciones IV y V. Lo dispuesto en las fracciones anteriores se aplicará sin perjuicio de lo previsto en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DICE	DEBE DECIR
Artículo 26. Funciones comunes para las Fiscalías Especializadas. Las Fiscalías Especializadas adscritas a la Fiscalía General de la República, gozarán de autonomía técnica y de	**Artículo 26. Funciones comunes para las Fiscalías Especializadas.** Las Fiscalías Especializadas adscritas a la Fiscalía General de la República, gozarán de autonomía técnica y de

gestión, en el ámbito de su competencia y tendrán las siguientes atribuciones: III.- Elaborar solicitudes de información a instancias, empresas o particulares nacionales; V.- Emitir dentro del ámbito de sus competencias la normatividad, necesaria para el desempeño de sus funciones;	gestión, en el ámbito de su competencia y tendrán las siguientes atribuciones: III.- Elaborar solicitudes de información a **las instituciones de gobierno, dependencias, instancias y entes públicos para el cumplimiento de sus funciones**; V. Emitir dentro del ámbito de sus competencias **los mecanismos y criterios de actuación necesarios** para el desempeño de sus funciones;
Artículo 28. Funciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales. La Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos establecidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y en cualquier otro ordenamiento legal en la materia. En los procesos electorales, ~~en los procesos de consulta popular y en el desarrollo de mecanismos de democracia directa~~, realizará despliegues ministeriales en el ámbito local y federal con la finalidad de que las y los fiscales puedan atender directamente las denuncias de la ciudadanía. ~~Deberá informar mensualmente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las investigaciones, así como las~~	**Artículo 28. ...** La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos establecidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales ~~y en cualquier otro ordenamiento legal en la materia~~. En los procesos electorales, ~~en los procesos de consulta popular y en el desarrollo de mecanismos de democracia directa~~, realizará despliegues ministeriales en el ámbito local y federal con la finalidad de que las y los fiscales puedan atender directamente las denuncias de la ciudadanía. Se elimina

~~determinaciones o procesos según sea el caso.~~ Igualmente, de forma anual, presentará ante la persona titular de la Fiscalía General de la República, al Senado ~~y al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, este último solo en los casos en que exista correlación entre los delitos electorales y posibles actos de corrupción cometidos desde la función pública~~, un informe sobre actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás disposiciones aplicables en la materia.	Igualmente, de forma anual, presentará ante la persona titular de la Fiscalía General de la República, al Senado, un informe sobre actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás disposiciones aplicables en la materia.
Artículo 36. Requisitos para ser el titular del Órgano Interno de Control El titular del Órgano Interno de Control deberá reunir los siguientes requisitos: I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener treinta y cinco años; II. a VIII. ...	Artículo 36. Requisitos para ser el titular del Órgano Interno de Control El titular del Órgano Interno de Control deberá reunir los siguientes requisitos: I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener **cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de su designación**; II. a VIII. ...

DICE	DEBE DECIR
Artículo 41. Designación de las personas integrantes del Consejo. El Senado nombrará una Comisión de selección, integrada por cinco personas de reconocida honorabilidad y trayectoria, debiendo justificar las razones de la selección. La citada	Artículo 41. Designación de las personas integrantes del Consejo. El Senado nombrará, **por las dos terceras partes de los integrantes presentes,** una Comisión de selección,

Comisión abrirá una convocatoria pública por un plazo de quince días para recibir propuestas para ocupar el cargo de Consejero Ciudadano. Posteriormente, el Senado elegirá entre los candidatos a cinco personas, respetando los principios a que se refieren los artículos 22, 23 y 24 de esta Ley. Esta lista será dada a conocer por diez días para que la sociedad se pronuncie y en su caso presente sus objeciones que serán tomadas en cuenta para motivar la elección. Una vez concluido este proceso, el Senado hará público el nombre de las personas seleccionadas.	integrada por cinco personas de reconocida honorabilidad y trayectoria, debiendo justificar las razones de la selección. La citada Comisión abrirá una convocatoria pública por un plazo de quince días para recibir propuestas para ocupar el cargo de Consejero Ciudadano. Posteriormente, **por mayoría de las dos terceras partes de los integrantes presentes,** el Senado elegirá entre los candidatos a cinco personas, respetando los principios a que se refieren los artículos 22, 23 y 24 de esta Ley. Esta lista será dada a conocer por diez días para que la sociedad se pronuncie y en su caso presente sus objeciones que serán tomadas en cuenta para motivar la elección. Una vez concluido este proceso, el Senado hará público el nombre de las personas seleccionadas.
Artículo 50. Comisiones Especiales. La persona titular de la Fiscalía General de la República podrá crear comisiones especiales, de carácter temporal para colaborar en las investigaciones de fenómenos y delitos que debido a su contexto, a juicio del fiscal, amerita su creación, incluyendo aquellos sobre feminicidios, violencia sexual, trata de personas, o que impliquen violaciones a derechos humanos, en especial de los pueblos y las comunidades indígenas, de los niños, niñas, adolescentes y personas migrantes. Los trabajos, recomendaciones y conclusiones de las comisiones podrán ser tomados en consideración por los órganos de la función fiscal, para la investigación y el	Artículo 50. Comisiones Especiales. **Excepcionalmente,** la persona titular de la Fiscalía General de la República podrá crear comisiones especiales de carácter temporal, para colaborar en las investigaciones de fenómenos y delitos que, debido a su **génesis,** contexto y **características,** ameriten su creación. **No podrá crearlas cuando para la atención de la materia de la investigación la Fiscalía General cuente con una unidad u órgano a cargo de los fenómenos delictivos y tipos penales de que se trate.**

ejercicio de la acción penal de los asuntos correspondientes. Las Comisiones Especiales tendrán como enfoque el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición. Serán integradas, de manera multidisciplinaria, por expertos de reconocida experiencia, tanto nacionales o internacionales en las materias que se requieran, organismos internacionales, organismos de la sociedad civil, Universidades Públicas y Privadas y colectivos de víctimas.	**El acuerdo para su creación establecerá sus objetivos, planeación inicial de sus actividades y tiempo estimado para la conclusión de sus tareas.** Los trabajos, recomendaciones y conclusiones de las comisiones podrán ser tomados en consideración por los órganos de la función fiscal, para la investigación y el ejercicio de la acción penal de los asuntos correspondientes. Las Comisiones Especiales tendrán como enfoque el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición. Serán integradas de manera multidisciplinaria por expertos de reconocida experiencia, nacionales o internacionales, en las materias que se requieran. **En estas Comisiones podrán participar organismos de la sociedad civil, organizaciones internacionales, instituciones de educación superior** y colectivos de víctimas.

DICE	DEBE DECIR
Artículo 54. De la atención a las víctimas en territorio extranjero, a través del Mecanismo de Apoyo Exterior A través del Mecanismo de Apoyo Exterior previsto por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; así como de la Ley General de Víctimas, los órganos de la función fiscal garantizarán a las víctimas tanto en el territorio nacional como en el extranjero en igualdad de	**Artículo 54. ...** A través del Mecanismo de Apoyo Exterior previsto por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; así como de la Ley General de Víctimas, los órganos de la función fiscal garantizarán a las víctimas tanto en el territorio nacional como en el extranjero en igualdad de condiciones el derecho a la verdad, justicia y reparación integral **del daño.**

condiciones el derecho a la verdad, justicia y reparación ~~integral.~~	
Artículo 63. Del Presupuesto La Fiscalía General de la República, elaborará su proyecto de presupuesto anual de egresos, el cual será remitido al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se remita a la Cámara de Diputados. En todo caso deberá garantizarse la autonomía e independencia funcional y financiera.	**Artículo 63. Del Presupuesto** La Fiscalía General de la República, elaborará su proyecto de presupuesto anual de egresos, el cual será remitido al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se remita a la Cámara de Diputados. **El presupuesto asignado no podrá ser menor, en términos reales, al aprobado en el ejercicio inmediato anterior.**

DICE	DEBE DECIR
Artículo 14. De la Estructura de la Fiscalía General de la República La Fiscalía General de la República tendrá la siguiente estructura: I.Fiscal General; II. Coordinación General; III. Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos; IV. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; V. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; VI. Fiscalía Especializada de Asuntos Internos; VII. Coordinación de Investigación y Persecución Penal; VIII. Coordinación de Métodos de Investigación; IX. Coordinación de Planeación y Administración; X. Órgano Interno de Control;	Artículo 14. De la Estructura de la Fiscalía General de la República La Fiscalía General de la República tendrá la siguiente estructura: I. Fiscal General; II. Coordinación General; III. Fiscalía Especializada en **m**ateria de Derechos Humanos; IV. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; V. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; **VI. Fiscalía Especializada de Protección de los Derechos de las Mujeres;** VII. Fiscalía Especializada de Asuntos Internos; VIII. Coordinación de Investigación y Persecución Penal; IX. Coordinación de Métodos de Investigación;

XI. Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera; XII. Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; y XIII. Las fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General, a través de acuerdos generales, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento, y acorde con el Plan de Persecución Penal. [...]	X. Coordinación de Planeación y Administración; XI. Órgano Interno de Control; XII. Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera; XIII. Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; XIV. Las fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General, a través de acuerdos generales, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento, y acorde con el Plan de Persecución Penal. [...]

DICE	**DEBE DECIR**
Artículo 14. De la Estructura de la Fiscalía General de la República La Fiscalía General de la República tendrá la siguiente estructura: IV.Fiscal General; V. Coordinación General; VI. Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos; VII. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; III. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; IX. Fiscalía Especializada de Asuntos Internos; XX. Coordinación de Investigación y Persecución Penal; XXI. Coordinación de Métodos de Investigación;	Artículo 14. De la Estructura de la Fiscalía General de la República La Fiscalía General de la República tendrá la siguiente estructura: XV. Fiscal General; VI. Coordinación General; VII. Fiscalía Especializada en **materia** de Derechos Humanos; III. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; IX. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; **X. Fiscalía Especializada de Protección de los Derechos de las Mujeres;** XXI. Fiscalía Especializada de Asuntos Internos;

XII. Coordinación de Planeación y Administración; XIII. Órgano Interno de Control; XIV. Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera; XV. Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; y XVI. Las fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General, a través de acuerdos generales, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento, y acorde con el Plan de Persecución Penal. [...]	XII. Coordinación de Investigación y Persecución Penal; **XIII. Unidad especializada en investigación en materia de secuestro;** XIV. Coordinación de Métodos de Investigación; XV. Coordinación de Planeación y Administración; XVI. Órgano Interno de Control; XVII. Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera; VIII. Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; XIX. Las fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General, a través de acuerdos generales, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento, y acorde con el Plan de Persecución Penal. [...]

DIP. MARÍA DEL ROSARIO GUZMÁN AVILÉS
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Secretaria de la Comisión de Justicia

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- Nos encontramos ante una reforma que podría ser y definir a este congreso como responsable, sensible con la sociedad y sus necesidades, sin dejar de lado, el urgente fortalecimiento de las instituciones.

Es por ello que la minuta que crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, es una oportunidad única de darle una nueva ingeniería a la aún Procuraduría General de la República, como una fiscalía AUTONOMA, HUMANA Y QUE EN LOS RESULTADOS SÍ SIRVA.

SEGUNDO.- La minuta que nos ocupa tiene muchas deficiencias de carácter jurídico, que se ven impregnadas de intereses políticos.

Desde esta comisión y en diferentes reuniones se han planteado las mismas y sus posibles consecuencias.

TERCERO.- Yo me quiero enfocar en el tema ciudadano, la actual Procuraduría General de la República desde sus orígenes ha desestimado la atención ciudadana por parte de sus servidores públicos.

Debemos reestablecer la confianza en la ciudadanía en primera instancia como un congreso preocupado en resolver las problemáticas con soluciones tangibles a la sociedad y que tengan resultados inmediatos.

Y por otra parte fomentando la formación de instituciones con sensibilidad ciudadana, que den resultados prácticos y ciertos.

CUARTO.- Este es el caso de la próxima **Fiscalía General de la Republica**, en el dictamen que nos ocupa encuentro un total apartamiento de la preocupación ciudadana.

Hablo como cualquier ciudadano que sufre algún tipo de delito, el que sea, lo primero es la negación a presentar la respectiva denuncia.

¿Por qué?, no es muy difícil adivinarlo, todos sabemos el trato deshumanizado al tener que acudir ante cualquier ministerio público, ya sea de orden local o federal.

Esperar horas a que nos atiendan, y ya que nos atienden la atención recibida no es digna para una persona que va a denunciar la comisión de un ilícito en su agravio.

Debemos establecer en este dictamen como prioridad la atención y acompañamiento ciudadana en todas las etapas de la investigación.

De este modo en primera instancia propiciaremos una mayor cultura de la denuncia, lo que es un primer obstáculo para la investigación de delitos, las autoridades no deben ser consideradas como enemigos de la sociedad.

En segunda instancia, sensibilizaremos a todos los integrantes de la institución respecto de un trato humanitario a las víctimas y sus familias; sin distingo alguno.

Haciendo especial énfasis al trato que se otorgue a las víctimas y sus familias, en delitos de carácter sexual, feminicidios, delitos donde sean vulnerados derechos de niñas niños y adolescentes, así como de desaparición forzada; esto de manera enunciativa y no limitativa.

Por todo lo expuesto propongo que el artículo 2 del dictamen que nos ocupa, se modifique con el fin de establecer como fines institucionales y eje rector de la institución, el acercamiento y la atención ciudadana, con un trato digno y humano hacía las víctimas y sus familias desde la presentación de las denuncias, durante la investigación y el esclarecimiento de los delitos.

Esto atendiendo lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Víctimas.

En consecuencia, de lo anterior hago la siguiente:

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL DICTAMEN QUE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

DICE	DEBE DECIR
Artículo 2. Fines institucionales	Artículo 2. Fines institucionales
La Fiscalía General de la República tendrá como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad; reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.	La Fiscalía General de la República tendrá como fines **el acercamiento y la atención ciudadana, con un trato digno y humano hacía las víctimas y sus familias desde la presentación de las denuncias,** la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, **respetando los derechos humanos en todo momento y** que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad; reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.

Por lo expuesto y fundado atenta como respetuosamente a Usted Diputada Presidenta pido:

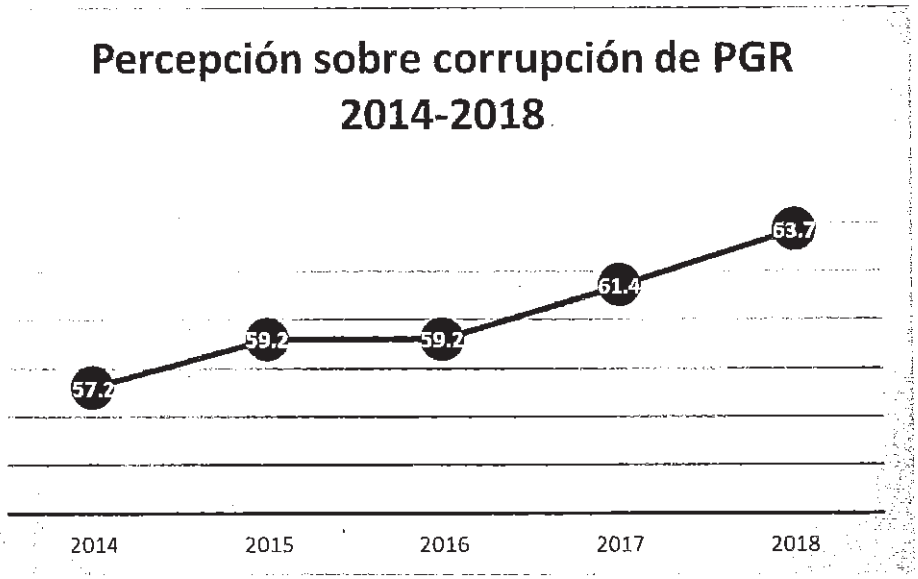
ÚNICO.- Me tenga por presentada haciendo la propuesta de modificación al dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y sea tomada en cuenta en el proyecto final.

SEXTA. Se coincide con la Colegisladora respecto de la necesidad de expedir una Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, ya que derivado de la Reforma Constitucional en materia político electoral de 2014, en su artículo décimo sexto transitorio se precisó que "las reformas relativas a la Fiscalía General de la República entrarán en vigor a partir de que el Congreso de la Unión expida las refomas secundarias necesarias".

Uno de los elementos que determinan a un país es su sistema de Derecho Penal; en México la implementación del sistema acusatorio se ha dado en los últimos años

y constituye uno de los avances más importantes del Estado de Derecho. La inmediación y la oralidad se han dado a partir de las reformas al Sistema, el cual ha tenido un retraso cuando se habla de la creación de una nueva figura del Ministerio Público y de la creación de la Fiscalía General de la República.

Hoy en día la institución del Ministerio Público no ha sido una institución al servicio de la seguridad y la justicia a las víctimas del delito. Hoy en día es de observar problemas como la baja capacidad de investigación, malas prácticas, corrupción. Desde la óptica del ciudadano es una de las instituciones que más baja confianza se le tiene, en la Encuesta Nacional de Víctimas (ENVIPE) de 2014 a 2018 indica que además, un gran sector de la población considera que la Procuraduría General de la República es corrupta; dicha percepción ha ido en aumento, como se muestra a continuación.



** Elaboración propia con base en la ENVIPE, INEGI 2014-2018.

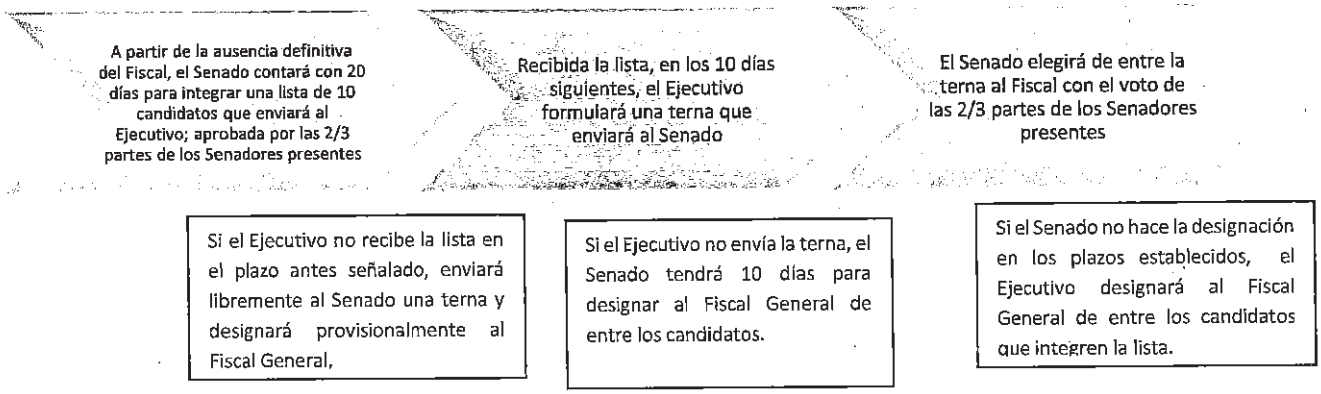
Sin duda, nuestro país necesita un nuevo modelo de investigación. Es necesaria la creación de una Fiscalía General de la República que esté verdaderamente al servicio de los ciudadanos, con una alta capacidad para la investigación de los delitos, que genere la certeza en los ciudadanos que la justicia se realizará igual para todos, sin favoritismos. El proyecto que determina la organización y funcionamiento de la Fiscalía General de la República debe representar un modelo que funcione como un eje central en la gobernabilidad del país.

En efecto, desde la creación de la figura de Ministerio Público en la Carta Magna de 1917, el artículo 102 consideró al Ministerio Público de la Federación como el encargado de la persecución de los delitos del orden federal; aunque también desde aquella época y hasta la reforma de 2014 se consideró también como un ente ligado directamente al Ejecutivo Federal, nombrado y removido libremente por el este. No

fue hasta la reforma publicada el 10 de febrero de 2014, en donde por primera vez se prevé la autonomía del Fiscal/Procurador General.

Destaca la función de representante social del Ministerio Público de la Federación no sólo en la investigación y persecución de los delitos, sino en aquellos otros asuntos que por su relevancia para la sociedad dispongan las leyes para la protección de los intereses individuales y sociales en general, como lo son la protección de los derechos e intereses de las personas menores, aquellos que cuentan con alguna incapacidad, ausentes, adultos mayores y cuando se encuentren en situación de riesgo o peligro, así como en los casos del procedimiento para la declaración de ausencia y presunción de muerte o de alimentos para personas menores de edad, regulados en la legislación civil. El ordenamiento jurídico no sólo le encomienda la defensa de los intereses de determinadas personas en situación de vulnerabilidad, sino que también le atribuye la defensa de intereses colectivos.
Con la reforma de 2014 antes citada se ordena la organización del Ministerio Público en una Fiscalía General de la República dotada de independencia y objetividad en las actividades que realice respecto de la investigación y persecución de delitos, bajo los siguientes parámetros constitucionales:

- Se prevé la creación de la Fiscalía General de la República como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
- Se establecen condiciones mínimas para ser Fiscal General: ciudadano mexicano por nacimiento, 35 años cumplidos al día de la designación, antigüedad mínima de 10 años con título profesional de licenciado en derecho, buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.
- El Fiscal General durará en su encargo 9 años y será designado y removido conforme al procedimiento previsto en la Constitución General.



Se atribuye al Ministerio Público de la Federación la persecución ante los Tribunales de todos los delitos del orden federal.

- Se prevé que en su estructura existan al menos dos Fiscalías especializadas, en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley.
- Que la ley prevea las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos.
- El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión un informe de actividades. Comparecerá cuando sea citado a rendir cuentas.
- El Fiscal General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones; podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.

En ese sentido, los mandatos que impone la Constitución al Congreso y que debe contener la Ley Orgánica de la Fiscalía General son:

1. Establecer el procedimiento que llevará a cabo el Senado para el nombramiento del Fiscal.
2. La creación de 2 fiscalías especializadas: en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción.
3. Establecer el plazo para que el Senado pueda objetar el nombramiento de la asignación o remoción de los Fiscales especializados.
4. Las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos.

En ese sentido, esta Colegisladora considera necesario el adecuar el marco jurídico a la nueva realidad constitucional. Los mexicanos necesitamos no sólo una ley distinta o nueva, necesitamos una ley que en la medida de lo posible haga prevalecer el espíritu del constituyente, que dote a la Fiscalía General con las herramientas necesarias para que desempeñe sus funciones en armonía con la Constitución General; en total autonomía.

Las reformas constitucionales al artículo 102 consolidaron la necesidad de nuestro país de transitar hacia una nueva estructura de Ministerio Público en el que el eje central sea la autonomía de la Institución. En todo sistema democrático de derecho, su sistema penal debe estar encabezado por una autoridad investigadora que pueda realizar sus funciones de manera imparcial y objetiva alejada de todo tipo de influencia, dependencia o presión, en donde el Fiscal es un verdadero órgano de acusación y de conducción jurídica de la investigación del delito, bajo los principios

de objetividad, eficacia y autonomía del propio modelo acusatorio.

Sin un verdadero cambio en la estructura de la Fiscalía General no es posible contar con un aparato de justicia que realice sus funciones, porque la investigación eficiente del Ministerio Público es el primer paso al acceso a la justicia. Es necesario cambiar el primer eslabón que representa esta institución; porque sin él, el resto del sistema difícilmente podrá funcionar.

No pasa desapercibido que el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Minuta que contiene Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República establece la necesidad de que en un año a partir del nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General se revise el marco jurídico constitucional a partir de una consulta ciudadana que tendrá como objetivo la identificación, discusión y formulación de las reformas constitucionales, de la legislación secundaria o de las reformas regulatorias necesarias para la operación óptima del modelo de Fiscalía General de la República.

Atendiendo a esta disposición transitoria, se considera que el marco constitucional y la legislación secundaria son siempre instrumentos perfectibles, por lo que es obligación de los órganos Legislativos velar permanentemente por adecuar las normas a la realidad del país; por lo que se considera que la Cámara de Diputados deberá realizar a la brevedad un análisis puntual de lo establecido los artículos 102, 116 y demás disposiciones constitucionales necesarias a fin de dotar al sistema de Justicia Mexicano de un modelo de procurtación de justicia que garantice la autonomía del órgano de procuración de justicia, el perfil adecuado de su titular, los instrumentos de profesionalización necesarios así como el mecanismo de nombramiento con controles democráticos.

SEXTA. Con fecha 28 de Noviembre del presente, se llevó a cabo reunión de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia para los efectos de lo dispuesto en la fracción IX del artículo 149 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en la que se convino la necesidad que se llevaran a la sesión ordinaria de discusión y votación de la Comisión de Justicia las propuestas de modificación a la Minuta que remitió la colegisladora.

SÉPTIMA. Por todo lo anterior, y para los efectos **del artículo 72** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Justicia, someten a la consideración de esta soberanía la Ley que Expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Artículo Único. Se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, como sigue:

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Capítulo I
Marco General de Operación

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente Ley tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables.

Artículo 2. Fines institucionales

La Fiscalía General de la República tendrá como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.

Artículo 3. Principios Rectores

La Fiscalía General de la República regirá su actuación por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de niñez y adolescencia, accesibilidad, debida diligencia e imparcialidad.

En todos los casos deberán observarse los principios de equidad, igualdad sustantiva y no discriminación en razón de la condición étnica, migratoria, de género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencia, orientación o identidad sexual, estado civil o cualquier otra condición o motivo que atente contra la dignidad humana; o bien, tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables.

Artículo 4. Competencia

La Fiscalía General de la República tendrá las competencias señaladas en la Constitución, esta Ley y las demás leyes aplicables.

La Fiscalía General de la República tendrá la facultad de atraer casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las leyes aplicables, en los casos en que se demuestre la inactividad o ineficacia de la fiscalía local competente, garantizándose que la investigación y la persecución de los delitos no se fragmente.

La víctima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción. La negativa de atracción podrá ser impugnada en los términos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 5. Funciones de la Fiscalía General de la República

Corresponde a la Fiscalía General de la República:

I. Investigar y perseguir los delitos;
II. Ejercer la acción penal;
III. Procurar la reparación del daño de las víctimas;
IV. Adoptar y, en su caso, promover la adopción de medidas de protección a favor de las víctimas, testigos u otros sujetos procesales;
V. Intervenir en el proceso de ejecución penal;
VI. Intervenir en las acciones de extradición activa y pasiva;
VII. Intervenir en las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, y
VIII. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables.

Capítulo II
Del Plan de Persecución Penal

Artículo 6. Plan de Persecución Penal

La persona titular de la Fiscalía General de la República aprobará el Plan de Persecución Penal, considerando las prioridades nacionales establecidas en la política criminal para orientar las atribuciones institucionales, las prioridades en la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal y las funciones que deben

desempeñar las personas que prestan servicios en la institución; así como los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, mismo que deberá ser aprobado por la mayoría de los miembros presentes del Senado de la República.

El Plan de Persecución Penal, contendrá una estrategia de atención y trámite en la que se deberá considerar:

I. Los distintos análisis de la incidencia delictiva;
II. Los diagnósticos situacionales;
III. Las estadísticas de percepción de la violencia en la ciudadanía;
IV. Los análisis de información elaborados por instancias especializadas;
V. Los diagnósticos elaborados por organizaciones civiles;
VI. Los informes sobre la situación de las víctimas del delito;
VII. Los informes sobre violaciones a los derechos humanos;
VIII. Los demás instrumentos que sean fuente certera de información relacionada con los fenómenos criminales.

El diseño del Plan de Persecución Penal, previo a su aprobación, deberá garantizar la participación ciudadana, así como de otras entidades de seguridad, procuración e impartición de justicia, conforme a la metodología que apruebe el Fiscal General de la República.

Para efectos de control, la persona titular de la Fiscalía General de la República, al inicio de su gestión deberá presentar ante el Senado de la República el Plan de Persecución Penal, previa consulta al Consejo Ciudadano. Asimismo, deberá presentar anualmente ante dicha Cámara los resultados y modificaciones del mismo en su caso.

Artículo 7. Publicidad y transparencia

La Fiscalía General de la República garantizará el acceso a la información pública generada en el marco de sus atribuciones y conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable.

Respecto a las investigaciones relacionadas con las violaciones a los derechos humanos, se estará a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 8. Del mandato o solicitud de colaboración

Los órganos a cargo de la función fiscal y de investigación podrán solicitar la colaboración de cualquier autoridad para la práctica de un acto de investigación o procedimental.

Los actos de colaboración entre la Fiscalía General con autoridades federales, estatales y municipales, se realizarán de conformidad con lo previsto en los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Capítulo IV del Título IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la presente Ley, así como en las disposiciones contenidas en otras normas y convenios de colaboración que se hayan emitido o suscrito.

TÍTULO SEGUNDO
Funciones y Facultades

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 9. Facultades de los órganos fiscales
Los órganos que ejercen la función fiscal tendrán las siguientes facultades:

I. La persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal;
II. Solicitar las medidas cautelares contra los imputados;
III. Buscar y presentar los medios de prueba que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito;
IV. Procurar que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita;
V. Pedir la aplicación de las penas;
VI. Intervenir en todos los asuntos que la ley determine;
VII. Ejecutar los lineamientos de la política y Plan de Persecución Penal dictados por la persona titular de la Fiscalía General de la República;
VIII. Conducir legalmente la investigación de los delitos, ejercer la acción penal y abstenerse o desistirse de ésta, de acuerdo con las leyes aplicables;
IX. Dirigir funcionalmente a las policías en lo concerniente a la investigación de los delitos;
X. Solicitar y efectuar actos de investigación, dentro o fuera del territorio nacional, conforme al principio de libertad probatoria;
XI. Garantizar la protección de las víctimas, testigos y otros sujetos procesales, en el marco de la legislación vigente, por sí o en coordinación con otras entidades públicas o privadas;
XII. Intervenir para garantizar el pleno cumplimiento de las resoluciones judiciales en los términos establecidos por la legislación nacional de ejecución penal;
XIII. Requerir y coordinar la cooperación y coadyuvancia necesaria de instituciones públicas y privadas, en la conducción legal de la investigación y ejercicio de la acción penal;

XIV. Garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas vinculadas con las investigaciones, con independencia de su situación jurídica, así como de las víctimas del delito;

XV. Aplicar los estándares, nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de niñez y adolescencia, así como el enfoque diferencial y especializado, en las investigaciones y procesos penales;

XVI. Aplicar los protocolos de investigación que les competan;

XVII. Informar a las personas extranjeras, especialmente a quienes sean migrantes, víctimas o testigos de delitos cometidos en territorio nacional sobre los derechos que les asisten en materia de apoyo consular en los casos que se requiera, de retornar a su país de origen o permanecer en territorio nacional y, en su caso, de solicitar la condición de visitante por razones humanitarias, la condición de persona refugiada o protección complementaria, así como requerir a la autoridad competente un informe de las acciones que haya realizado respecto de su canalización a las instituciones públicas o privadas especializadas para brindarles la atención correspondiente, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

XVIII. Ejercer todas aquellas funciones que establezcan las leyes procesales o especiales, así como las que disponga la persona Titular de la Fiscalía General a través de la normatividad interna, en el ámbito de su competencia;

XIX. Acceder de conformidad con la legislación aplicable a la información, documentos, registros físicos y electrónicos en poder de las instituciones públicas y privadas;

XX. Citar a los servidores públicos para la realización de actuaciones y diligencias relacionadas con la investigación o el proceso en términos de la legislación aplicable, y

XXI. Las demás que les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás leyes en la materia.

Artículo 10. Obligaciones de las y los fiscales ante las víctimas.

En toda investigación y proceso penal las y los fiscales deberán garantizar los derechos de las víctimas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual tendrá las siguientes obligaciones:

I. Coordinar con las víctimas, sus representantes y organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales que las acompañan y asesoran, la generación de planes de investigación y la práctica de diligencias específicas que las involucren, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley;

II. Proporcionar de forma clara y permanente a las víctimas, sus representantes y asesores, información sobre sus derechos, sobre el estado de los casos y actos de investigación previstos y programados, garantizando su participación en las diligencias que correspondan;
III. Dar acceso a los registros y proporcionar copia gratuita de estos en forma física o magnética solicitadas por las víctimas y sus representantes, con relación a los casos, para facilitar su conocimiento y participación en los mismos;
IV. Garantizar el derecho de las víctimas y sus representantes, a presentar peritajes independientes, facilitando para ello, su acceso a los casos;
V. Garantizar a las víctimas la protección y asistencia a la que tienen derecho, por parte de las entidades públicas o privadas que correspondan, de conformidad con la presente Ley y demás aplicables;
VI. Garantizar a las víctimas o sus familiares, el uso exclusivo de la información genética resguardada en la Base Nacional de Información Genética, para la identificación de cuerpos o restos humanos, en el caso de personas desaparecidas, de conformidad con lo que establezcan los Lineamientos Generales en esta materia;
VII. Garantizar la perspectiva de género, de interculturalidad, de niñez y adolescencia, así como el enfoque diferencial y especializado en la investigación y ejercicio de la acción penal, de acuerdo a las condiciones específicas de las víctimas, y
VIII. Garantizar a las víctimas que lo requieran intérprete y traductor, por sí o en coordinación con otras entidades públicas, privadas o personas en lo individual.

Artículo 11. Órganos a cargo de la función fiscal

La representación de la Fiscalía General de la República corresponde a los siguientes órganos:

I. Titular de la Fiscalía General de la República;
II. Titulares de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos;
III. Titulares de las Fiscalías Especializadas;
IV. Titular de la Coordinación de Investigación y Persecución Penal;
V. Titular de la Coordinación General, en sustitución o suplencia del Fiscal General de la República, de conformidad con lo previsto en la presente Ley, y
VI. Fiscales con nombramiento del Servicio Profesional de Carrera, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento.

Artículo 12. Independencia Técnica de las y los Fiscales

Las y los Fiscales ejercerán sus funciones con independencia y autonomía, libres de cualquier tipo de coacción o interferencia en su actuar. En el ejercicio de sus funciones, se conducirán conforme al criterio de objetividad, con base en el cual dirigirán la investigación de los hechos y circunstancias que prueben, eximan o atenúen la responsabilidad de las personas imputadas, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable y el Plan de Persecución Penal.

Artículo 13. Asignación

Los órganos a cargo de la función fiscal contarán con el personal policial, técnico, pericial, y en general, el relativo a la operación sustantiva de la fiscalía, asignados de forma directa para el cumplimiento de los fines de la función fiscal y del Plan de Persecución Penal, de conformidad con el Servicio Profesional de Carrera.

La persona titular de la Fiscalía General de la República, sustentará la asignación del personal que integrará las unidades fiscales, conforme al Plan de Persecución Penal, quienes no podrán cambiarse de asignación, salvo previo acuerdo de los titulares.

El personal mencionado en el párrafo que antecede también podrá ser asignado, de manera temporal y para el cumplimiento de objetivos específicos, a las fiscalías o unidades de investigación y litigación. El titular de cada una de estas unidades, para todos los efectos, asumirá el mando del personal asignado.

Capítulo II
De la Estructura

Artículo 14. De la Estructura de la Fiscalía General de la República

La Fiscalía General de la República tendrá la siguiente estructura:

I. Fiscal General;
II. Coordinación General;
III. Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos;
IV. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales;
V. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;
VI. Fiscalía Especializada de Asuntos Internos;
VII. Coordinación de Investigación y Persecución Penal;
VIII. Coordinación de Métodos de Investigación;
IX. Coordinación de Planeación y Administración;
X. Órgano Interno de Control;
XI. Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera;
XII. Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; y
XIII. Las fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General, a través de acuerdos generales, de conformidad con

la presente Ley y su Reglamento, y acorde con el Plan de Persecución Penal.

La Fiscalía General de la República, se apoyará de un Consejo Ciudadano el cual cuenta con las facultades señaladas por esta Ley.

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos tendrá a su cargo las fiscalías de protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes; de trata de personas; de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; de migrantes; de investigación de tortura, y todas aquellas fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General de la República.

El Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias será responsable de la aplicación de los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, con independencia técnica y de gestión.

El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de la República contará con un Consejo Técnico, que estará integrado por la persona titular de la Fiscalía, quien lo presidirá y por los Fiscales a que se refiere esta Ley y estará facultado para aprobar, evaluar y conocer de la ejecución de los programas y proyectos a cargo del Instituto y conocer y aprobar en su caso los informes que presente su titular, el cual será designado por la persona titular de la Fiscalía General de la República.

El Consejo Técnico del Instituto, que deberá sesionar por lo menos tres veces al año y en el cual participará el titular del Instituto, con voz, pero sin voto, se organizará y operará conforme a las reglas que expida al efecto.

Las personas titulares de la Fiscalía General de la República o de la Coordinación General, establecerán los criterios para evitar la fragmentación de las investigaciones y, en su caso, la creación de unidades mixtas de investigación.

La Fiscalía General de la República contará con fiscales, policía de investigación, analistas, auxiliares y peritos, así como con el personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. En los casos relacionados con violencia de género y contra la mujer, el personal deberá ser especializado.

Asimismo, podrá allegarse de personal técnico especializado de otras entidades para colaborar en las investigaciones.

Capítulo III
De la Persona Titular de la Fiscalía General de la República

Artículo 15. Nombramiento del Fiscal

El nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General de la República se sujetará al procedimiento y requisitos previstos en el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se promoverán los principios de transparencia, publicidad, mérito, participación ciudadana, e igualdad y no discriminación.

Artículo 16. De la designación de la persona titular de la Fiscalía General de la República

Quienes aspiren a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos de elegibilidad:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
III. Contar, con una antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho;
IV. Gozar de buena reputación, y
V. No haber sido condenado por delito doloso.

Artículo 17. Buena reputación

La buena reputación, a la que se refiere el artículo 102 constitucional, está compuesta por dos elementos:

I. El Objetivo que se refiere a la calidad profesional relevante, trayectoria en el servicio público o en ejercicio de la actividad jurídica, y
II. El Subjetivo que se refiere a la honorabilidad, alta calidad técnica, compromiso con valores democráticos, independencia y reconocimiento social.

Artículo 18. Causas graves de remoción de la persona titular de la Fiscalía General de la República.

La persona titular de la Fiscalía General de la República, sólo podrá ser removida por el Presidente de la República por incurrir en alguna de las causas graves contempladas en el Capítulo II del Título Tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas o por la comisión de uno o más delitos considerados como graves por la legislación penal u otros ordenamientos.

El Ejecutivo Federal deberá acreditar ante el Senado la causa grave que motivó la remoción de la persona titular de la Fiscalía General de la República, e informar al Senado de la República, quien decidirá si objeta o no la remoción, en

términos del artículo 102 apartado A, fracciones IV y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 110 y 111 de la misma.

Artículo 19. Facultades de la persona titular de la Fiscalía General de la República

La persona titular de la Fiscalía General de la República intervendrá por sí o por conducto de los fiscales y demás órganos de la fiscalía en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y las demás disposiciones aplicables y tendrá las siguientes facultades.

I. Dirigir y coordinar la política general de la Fiscalía General de la República, así como vigilar y evaluar la operación de las unidades administrativas que la integran;
II. Representar a la Fiscalía General de la República en las relaciones institucionales con otras entidades u órganos de gobiernos locales, federales, nacionales, e internacionales;
III. Participar en el sistema de atención a las víctimas y ofendidos por la comisión de delitos;
IV. Celebrar los convenios de colaboración con el exterior para el adecuado funcionamiento del Mecanismo de Apoyo Exterior y las demás funciones que se requieran;
V. Solicitar la colaboración de otras autoridades, así como auxiliar a las que lo soliciten, directamente o por conducto de la Coordinación General, en la persecución de los probables autores o partícipes del hecho delictivo, en los términos que dispongan las leyes, acuerdos, convenios, bases y demás instrumentos de colaboración celebrados para tal efecto;
VI. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública;
VII. Autorizar los lineamientos y bases del servicio público de carrera de la Institución y de conformidad con la normatividad aplicable;
VIII. Nombrar y remover a las personas titulares de las Fiscalías Especializadas en los términos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los demás fiscales que considere pertinente, así como otros servidores públicos adscritos a la Fiscalía;
IX. Ejercer atracción sobre los asuntos competencia de la Institución, para conocer personalmente o designar la Fiscalía Especializada, Unidad de Investigación o Coordinación que deberá conocer de los mismos;
X. Instruir la integración de unidades o equipos especiales para la investigación de casos;
XI. Crear coordinaciones, fiscalías, direcciones, unidades y departamentos, de acuerdo con las necesidades institucionales y con el Plan de Persecución Penal;
XII. Presidir la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;

XIII. Ofrecer y entregar recompensas, en los casos, términos y condiciones que determine el Reglamento de esta Ley;

XIV. Determinar el Plan de Persecución Penal en los términos establecidos en la presente Ley, los criterios generales y prioridades en la investigación de los delitos, así como en el ejercicio de la acción penal;

XV. Coordinar acciones y suscribir convenios con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, para el desarrollo de acciones conjuntas, de fortalecimiento institucional y de cumplimiento de los fines institucionales;

XVI. Representar a la Fiscalía General de la República en las relaciones institucionales con otros entidades u órganos nacionales e internacionales;

XVII. Promover la celebración de tratados, convenios, declaraciones o acuerdos internacionales relacionados con los fines institucionales;

XVIII. Decidir sobre la atracción de los casos;

XIX. Coordinar a las unidades y órganos de la Fiscalía General de la República en el suministro de información y asegurar su consolidación, consistencia, oportunidad, y confiabilidad para los fines de formulación de la Política de Persecución Penal;

XX. Establecer las directrices y controlar los procesos de generación, sistematización y análisis de la información para su óptimo resguardo y aprovechamiento;

XXI. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de sistematización y análisis de la información a fin de apoyar el desarrollo de las funciones sustantivas de la Fiscalía;

XXII. Establecer medios de información sistemática y directa a la ciudadanía, para dar cuenta de sus actividades, de conformidad con la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública, y

XXIII. Tener a su cargo la Unidad Especial de Género y Violencia Contra la Mujer, que tendrá como objetivo la institucionalización de la perspectiva y transversalidad de género en todas la áreas de la Fiscalía, a través de la incorporación del enfoque de igualdad y no discriminación a la cultura institucional a través del diseño, planeación, presupuesto, ejecución y evaluación de las políticas de la Fiscalía y será responsable de coordinar y gestionar acciones con todas las áreas de la Fiscalía General de la República, para incorporar en su actuación, los principios rectores de la igualdad sustantiva y de oportunidades entre mujeres y hombres.

XXIV. Aquellas facultades establecidas en los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Fiscal General de la República.

XXV. Las demás que señala esta Ley, su Reglamento, así como otras disposiciones legales aplicables en la materia.

Serán facultades indelegables del Fiscal General de la República las establecidas en las fracciones I, IV, VII, VIII, XI, XIV, XV, XVII, XX y XXIV.

Capítulo IV
De la Coordinación General de la Fiscalía General de la República

Artículo 20. La Coordinación General de la Fiscalía General de la República.

La Coordinación General tendrá las siguientes facultades:

I. Suplir a la persona titular de la Fiscalía General de la República en sus ausencias temporales de hasta tres meses;
II. Representar a la Fiscalía General de la República, en las relaciones institucionales con otras entidades u órganos de gobierno locales, nacionales, federales e internacionales;
III. Elaborar las normas y políticas a las que deberán sujetarse las unidades y los órganos de la Fiscalía, en la materia de su competencia;
IV. Desarrollar la política del sistema de gestión documental y administración de archivos de la Fiscalía General, de conformidad con la normatividad aplicable;
V. Integrar el sistema de información legislativa, jurisprudencial y doctrinal, nacional e internacional a efecto de dar cumplimiento a las atribuciones de la Fiscalía General de la República, en materia de medios de control constitucional de asuntos de su competencia;
VI. Desarrollar y ejecutar las políticas de transparencia y rendición de cuentas, y atender las solicitudes de información pública;
VII. Atender las quejas, recomendaciones y solicitudes de los organismos públicos de derechos humanos, nacionales e internacionales, así como las quejas presentadas por las personas;
VIII. Formalizar los convenios de colaboración con el exterior para el adecuado funcionamiento del Mecanismo de Apoyo Exterior y las demás funciones que se requieran;
IX. Representar legamente a la Fiscalía General de la República, en los asuntos jurídicos de acciones promovidas en su contra o por la propia Fiscalía, así como también ante las autoridades administrativas, judiciales y laborales;
X. Canalizar la información generada por la persona titular de la Fiscalía General de la República, a las áreas correspondientes de la Fiscalía General de la República;
XI. Evaluar riesgos y proteger a personas ofendidas, víctimas, testigos y demás sujetos en los casos en que existan amenazas o riesgos a su integridad o vida;
XII. Coordinar y colaborar con entidades gubernamentales nacionales e internacionales para la implementación de los esquemas de seguridad de víctimas, testigos y demás sujetos procesales;
XIII. Resolver los conflictos que se susciten en el ámbito administrativo con motivo de la interpretación o aplicación de la presente Ley y su Reglamento,

del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, y demás normatividad institucional, así como presentar opinión a la persona titular de la Fiscalía General de la República, en los casos no previstos, para que resuelva lo conducente en el marco de sus facultades;

XIV. Desahogar las consultas jurídicas internacionales que formulen las diversas áreas de la Fiscalía General de la República, así como de los órganos del Estado Mexicano en materia de procuración de justicia;

XV. Auxiliar a la persona titular de la Fiscalía General de la República, en la elaboración de los lineamientos y bases del servicio profesional de carrera de la institución, de nombramiento y remoción de servidores públicos, de conformidad con la normatividad;

XVI. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de las políticas institucionales del servicio profesional de carrera;

XVII. Coordinar y dirigir a las representaciones de la Fiscalía General de la República en el extranjero;

XVIII. Coordinar y dirigir la implementación de la política de género y violencia contra la mujer así como para la atención con enfoque diferencial para personas colocadas en situación especial de vulnerabilidad en razón de la condición étnica, migratoria, de género, sexo, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, orientación o identidad sexual y de género, estado civil o cualquier otra condición o motivo que atente contra la dignidad humana; o bien, tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas;

XIX. Conocer y resolver los conflictos de competencia entre órganos fiscales, y

XX. Las demás que disponga esta Ley y su Reglamento.

Artículo 21. Cobertura de suplencias de la persona titular de la Fiscalía General de la República.

La persona titular de la Fiscalía General de la República, será suplida en sus excusas, ausencias o faltas temporales por la persona titular de la Coordinación General y a falta de ésta, por quien disponga el Reglamento de esta Ley, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos para ser titular de la Fiscalía General de la República.

En caso de ausencia definitiva, la titularidad de la Fiscalía General de la República, será ocupada temporalmente por la persona titular de la Coordinación General, quien deberá notificar al Senado de la República a efectos que proceda conforme al artículo 102 constitucional.

Capítulo V
De las Fiscalías Especializadas

Artículo 22. De la designación y remoción de las personas titulares de las Fiscalías Especializadas

La persona titular de la Fiscalía General de la República designará a las personas titulares de las Fiscalías Especializadas con base a sus méritos y capacidades para ejercer el cargo y con un perfil previamente establecido.

El Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes podrá objetar dicha designación o remoción, en un plazo máximo de veinte días hábiles, para dichos efectos, el Fiscal General de la República, enviará al Senado de la República una comunicación donde expondrá las razones que sustentan la designación o la remoción de las personas titulares de las fiscalías especializadas.

En su caso, serán removidos en términos de las disposiciones constitucionales, respetando el derecho de audiencia y debido proceso conforme a la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 23. Principio del mérito

Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para la designación de fiscales especializados, los órganos competentes valorarán los antecedentes y trayectoria profesional de las personas candidatas, con el propósito de evaluar los elementos objetivos y subjetivos que se señalan en esta Ley. Dichos requisitos de elegibilidad deberán cumplir como mínimo con los requisitos señalados en el artículo 16 y 17 de esta Ley.

Artículo 24. Transparencia y publicidad

Todo proceso de designación estará sujeto a los principios de máxima transparencia y publicidad, desde su convocatoria hasta la designación. Las autoridades que intervengan en dichos procesos deberán hacer pública, de manera proactiva, oportuna, completa y accesible, toda la información y documentación que se reciba solicite, obtenga o produzca con ocasión del procedimiento, con excepción de aquella que pueda afectar la vida privada e intimidad, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública.

El incumplimiento de lo antes dispuesto será motivo de responsabilidad, en términos de la normatividad administrativa aplicable.

Artículo 25. Participación ciudadana

Cualquier ciudadana y ciudadano podrá participar en el proceso de designación, de los Fiscales Especializados, aportando información fidedigna relevante sobre los aspirantes; así como su apoyo u objeción contra candidaturas específicas, asistiendo y proponiendo preguntas durante las comparecencias, dichas participaciones no conllevan carácter vinculante.

En el caso de que sea rechazada una opinión o recomendación, ésta deberá estar debidamente fundada y motivada.

Artículo 26. Funciones comunes para las Fiscalías Especializadas

Las Fiscalías Especializadas adscritas a la Fiscalía General de la República, gozarán de autonomía técnica y de gestión, en el ámbito de su competencia y tendrán las siguientes atribuciones:

I. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con las instancias públicas o privadas que se requieran para el ejercicio de sus funciones;

II. En ejercicio de su autonomía técnica, participar en estrategias de coordinación internacional con las instancias homólogas o que resulten pertinentes para el ejercicio de sus funciones, dando aviso a la Coordinación General;

III. Elaborar solicitudes de información a instancias, empresas o particulares nacionales;

IV. Elaborar solicitudes de información a instancias, empresas o particulares internacionales, dando aviso a la Coordinación General;

V. Emitir dentro del ámbito de sus competencias la normatividad necesaria para el desempeño de sus funciones;

VI. Presentar un informe público anual sobre los avances y resultados de su gestión; dichos informes deben ser añadidos al informe que la persona titular de la Fiscalía General de la República presentará ante el Congreso;

VII. En los casos que involucre delincuencia organizada, tomar medidas que privilegien la integridad y no fragmentación de la investigación y el ejercicio de la acción penal;

VIII. Las personas titulares de las Fiscalías Especializadas implementarán medidas y estrategias de coordinación con las unidades, mecanismos y otras instancias especializadas creadas por las leyes especiales, tratados internacionales y demás ordenamientos vinculados con su competencia, a efecto de facilitar el ejercicio del mandato de dichos mecanismos y de la propia Fiscalía, en lo que les corresponde. Las medidas de articulación y colaboración comprenderán acciones tales como:

   a. El intercambio de información, documentación, bases de datos, a través de sistemas de interoperabilidad;
   b. La designación de enlaces;
   c. La realización de mesas de trabajo y encuentros en los que participen, inclusive, organizaciones de víctimas, de la sociedad civil especializadas y organismos internacionales;
   d. Facilitar el contacto entre los mecanismos especializados y las personas vinculadas a las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos;

e. Las demás que se acuerden y consideren necesarias;

f. La colaboración entre las Fiscalías Especializadas y los mecanismos creados por leyes especiales serán revestidas de flexibilidad y de formalidad mínima, a efecto de no obstaculizar, complicar ni dilatar las mismas.

IX. Para llevar a cabo la función fiscal, las y los fiscales especializados colaborarán con las instancias de seguridad pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y demás instituciones del Ejecutivo Federal, y

X. Las demás que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 27. Funciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos estará a cargo de la conducción legal de la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal en casos de violaciones a los derechos humanos, en el ámbito de sus competencias, independientemente de la clasificación jurídica de los hechos, que afecten la vida, la integridad, el patrimonio y la libertad de las personas; cuando afecten gravemente a la sociedad o por motivo de la condición de vulnerabilidad de las víctimas, o cuando existan falta de garantías para el ejercicio independiente de la investigación en las entidades federativas o cuando la participación de funcionarios o servidores públicos obstaculice la investigación. También conocerá este tipo de hechos cometidos por particulares cuando así lo determine una ley especial.

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos conocerá, por atracción, casos del fuero común o por derivación de otras unidades fiscales al interior de la Fiscalía General de la República, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes generales y especiales.

Artículo 28. Funciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos establecidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y en cualquier otro ordenamiento legal en la materia.

En los procesos electorales, en los procesos de consulta popular y en el desarrollo de mecanismos de democracia directa, realizará despliegues operativos en el ámbito local y federal con la finalidad de que las y los fiscales puedan atender directamente las denuncias de la ciudadanía.

Deberá informar mensualmente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las investigaciones, así como las determinaciones o procesos según sea el caso.

Igualmente, de forma anual, presentará ante la persona titular de la Fiscalía General de la República, al Senado y al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, este último sólo en los casos en que exista correlación entre los delitos electorales y posibles actos de corrupción cometidos desde la función pública, un informe sobre actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 29. Funciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos contenidos en el Título Décimo del Libro Segundo del Código Penal Federal.

La persona titular de la Fiscalía participará como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, atendiendo las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley correspondiente.

Igualmente, presentará de forma anual ante el Senado de la República un informe público y de fácil acceso, respecto de sus actividades y resultados, mismo que será entregado a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Artículo 30. Funciones de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.

La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos estará a cargo de las investigaciones y el ejercicio de la acción penal en delitos cometidos por personal adscrito a los órganos sustantivos y administrativos de la Fiscalía General de la República, en ejercicio de sus funciones.

La persona titular de la Fiscalía General de la República podrá crear unidades de investigación para casos especiales, incluyendo la probable comisión de delitos por parte de integrantes de la Fiscalía de Asuntos Internos.

Establecerá lineamientos técnico-jurídicos para el monitoreo, la supervisión, investigación, revisión y control de la actuación de los fiscales, los policías de investigación, peritos, analistas, técnicos y en general de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, en términos del Plan de Persecución Penal.

En caso de excusas, ausencias o faltas temporales de las o los fiscales o coordinadores, éstos serán suplidos por el funcionario con rango inmediato inferior.

Capítulo VI
De las Coordinaciones de la Fiscalía General de la República

Artículo 31. De la Coordinación de Investigación y Persecución Penal

La Coordinación de Investigación y Persecución Penal tendrá las siguientes facultades:

I. Coordinar la gestión, movilidad e integración de las unidades de investigación y litigación, las cuales realizarán las investigaciones y el ejercicio de la acción penal, así como de los equipos de investigación que los conforman;
II. Realizar los actos de investigación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes aplicables;
III. Coordinar los esquemas de colaboración con otras autoridades federales o locales en la materia de sus competencias;
IV. En los casos que así se requiera, conducir legalmente la investigación y ejercer la acción penal;
V. Cuando así se requiera, designar a las y los fiscales encargados de los casos, salvo que el nombramiento sea realizado por la persona titular de la Fiscalía General de la República;
VI. Garantizar la independencia y condiciones de trabajo de las unidades de investigación y litigación por el tiempo que sean creadas;
VII. Establecer las unidades de investigación especializada para ejercer la acción penal en materia de delitos de delincuencia organizada y de secuestro, conforme a las leyes en la materia;
VIII. Ejecutar las extradiciones, así como las acciones relacionadas con la cooperación internacional;
IX. Conocer y resolver sobre las solicitudes de atracción, que el Fiscal General le encomiende;
X. Coordinar, dirigir y canalizar el ejercicio de las atribuciones de las y los fiscales en materia internacional;
XI. Las demás que señale la ley.

Artículo 32. De la Coordinación de Métodos de Investigación.

La Coordinación de Métodos de Investigación tendrá las siguientes facultades:

I. Coordinar y asignar los servicios periciales, la policía de investigación, técnicos y analistas que formen parte de la Fiscalía General de la República;
II. Crear la Base Nacional de Información Genética, que contenga los resultados de la información genética proporcionada por víctimas o

familiares de personas desaparecidas, en los términos que establezcan los Lineamientos Generales en esta materia;

III. Analizar de forma estratégica los datos agregados del fenómeno criminal, la realización de estudios criminógenos y geo delictivos, así como la información de contexto que se considere relevante para coadyuvar en la investigación;

IV. Efectuar reportes estratégicos sobre criminalidad regional y nacional, identificación de patrones, estructuras y organizaciones, así como cualquier otro que se considere necesario para la investigación de los casos;

V. Servir de apoyo para el análisis técnico científico de los actos de investigación y datos de prueba, a solicitud de las y los fiscales para el desarrollo de sus investigaciones;

VI. Apoyar la verificación y control de las pruebas periciales y exámenes forenses practicados a solicitud de las autoridades competentes;

VII. Suministrar información a la Coordinación de Planeación y Administración, relativa a los patrones, estructuras y organizaciones criminales para el diseño de las políticas institucionales y toma de decisiones;

VIII. Comunicar la información de utilidad relativa a la seguridad pública que obtenga en el ejercicio de sus funciones a la persona titular de la Fiscalía General de la República, para que la remita a la autoridad competente;

IX. Efectuar reportes estratégicos, así como cualquier otro que se considere necesario sobre el análisis de la criminalidad y de contexto que oriente las políticas de operación de la Fiscalía y contar con un área de análisis criminal que analice sistemática y oportunamente la información relativa a los asuntos de la Fiscalía General de la República, para su procesamiento en materia de estrategia e inteligencia operativa;

X. Realizar los actos de investigación, en apoyo a la Coordinación de Investigaciones y Persecución Penal, conforme lo determine el Reglamento de esta Ley;

XI. Evaluar riesgos y proteger a las personas ofendidas, víctimas, testigos y demás sujetos procesales, en los casos que existan amenazas o riesgos a su integridad o vida, y

XII. Coordinar y colaborar con entidades gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, para la implementación de los esquemas de seguridad de víctimas, testigos y demás sujetos procesales.

El personal de la Coordinación de Métodos de Investigación podrá ser comisionado conforme a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 33. De la Coordinación de Planeación y Administración.

La Coordinación de Planeación y Administración será el área encargada de formular ante la persona titular de la Fiscalía General de la República el Plan de Persecución Penal, y será la responsable de la información institucional, así como

de la administración y gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a través de las áreas correspondientes.

Apartado A.
Ejercerá las siguientes facultades, en materia de Planeación Estratégica:

I. Proponer y dar seguimiento a las políticas de vinculación y coordinación interinstitucional en el ámbito de su competencia;
II. Apoyar las labores necesarias para el seguimiento y evaluación de la política y Plan de Persecución Penal definidos por la Fiscalía;
III. Coordinar la integración del Plan de Persecución Penal de las fiscalías especializadas;
IV. Definir indicadores y metas institucionales, de acuerdo con el Plan de Persecución Penal, así como dar seguimiento puntual a los mismos;
V. Proponer a la persona titular de la Fiscalía General las adecuaciones necesarias al Plan de Persecución Penal, de acuerdo con los estudios y análisis de su competencia;
VI. Definir las políticas institucionales para el desarrollo y modernización institucional basada en resultados y evaluación del desempeño;
VII. Consolidar la información administrativa y financiera para elaborar estudios e informes;
VIII. Establecer directrices para la generación, sistematización e integración de los informes de las distintas unidades y órganos de la Fiscalía;
IX. Realizar estudios sobre el desarrollo organizacional de la Fiscalía;
X. Recopilar los reportes estratégicos de la Coordinación de Métodos de Investigación, así como cualquier otro que se considere necesario sobre el análisis de la criminalidad y de contexto para orientar las políticas de operación de la Fiscalía, y
XI. Coordinar a las unidades y órganos de la Fiscalía General en el suministro de información y asegurar su consolidación, consistencia, oportunidad y confiabilidad para los fines de formulación del Plan de Persecución Penal.

Apartado B.
Ejercerá las siguientes facultades, en materia de Administración:

I. Representar legalmente a la Fiscalía General de la República, en materia de administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, financieros, patrimoniales, presupuestales y cualquier otro, de conformidad con las políticas aprobadas por la persona titular de la Fiscalía General de la República;
II. Ejercer los actos de administración, de mandatario judicial y de dominio que requiera la Fiscalía General de la República, en el ámbito de su competencia para su debido funcionamiento de conformidad con las

políticas aprobadas por la persona titular de la Fiscalía General de la República y de conformidad con lo que prevea el Reglamento de esta Ley;

III. Proponer a la persona titular de la Fiscalía General de la República, para su aprobación, los criterios generales en materia administrativa, en términos de la legislación aplicable;

IV. Aprobar el uso de los recursos financieros de la Fiscalía en materia de contrataciones, ejercicio del gasto, adquisiciones, arrendamientos y contratación de bienes, servicios y obras públicas, así como de asociaciones público-privadas de conformidad con la normativa aplicable;

V. Administrar y ejercer los fondos federales destinados a la procuración de justicia, de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables, transparentando su aplicación;

VI. Conformar el comité de adquisiciones, de conformidad con el Reglamento que emita la persona titular de la Fiscalía General de la República;

VII. Proporcionar los servicios administrativos generales que requieran las áreas de la Fiscalía General de la República;

VIII. Suscribir convenios o cualquier otro acto o instrumento jurídico en el ámbito administrativo de su competencia;

IX. Colaborar con la Coordinación General para asegurar la suficiencia presupuestal para el cumplimiento y desarrollo de los rubros que contempla el Servicio Profesional de Carrera;

X. Emitir las normas para que los recursos patrimoniales y financieros sean aprovechados y aplicados respectivamente, con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa; así como, realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias, todo lo anterior en coordinación con la persona titular de la Fiscalía General de la República;

XI. Integrar los informes específicos o individuales, requeridos por la Auditoría Superior de la Federación en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;

XII. Proponer a la persona titular de la Fiscalía General de la República a los auditores externos, así como normar y controlar su desempeño;

XIII. Consolidar la información administrativa y financiera para elaborar estudios e informes;

XIV. Realizar estudios sobre el desarrollo organizacional de la Fiscalía;

XV. Coordinar la integración y elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de la Fiscalía con base a las necesidades detectadas en el Plan de Persecución Penal y para el apoyo administrativo del mismo;

XVI. Establecer y controlar las políticas y procedimientos de adquisición, aprovechamiento y administración de bienes y servicios;

XVII. Elaborar y orientar el plan de inversiones en infraestructura física;

XVIII. Tener a su cargo la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, financieros, patrimoniales, presupuestales y cualquier otro asignado a la Fiscalía General de la República, de conformidad con las

políticas aprobadas por la persona titular de la Fiscalía General de la República, en esta materia, y

XIX. Las demás que señale la presente Ley y su Reglamento, así como la normativa emitida por la persona titular de la Fiscalía General de la República.

Capítulo VII
De la Transparencia, Rendición de Cuentas y Acción Ciudadana

Artículo 34. Órgano Interno de Control

El Órgano Interno de Control es un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Fiscalía y de particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.

El Órgano Interno de Control, su titular y el personal adscrito al mismo, estarán impedidos de intervenir o interferir en forma alguna en el desempeño de las facultades y ejercicio de la Fiscalía General de la República.

Serán facultades del Órgano Interno de Control las siguientes:

I. Las que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;

II. Verificar que el ejercicio de gasto de la Fiscalía se realice conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados;

III. Realizar auditorías, revisiones y evaluaciones y presentar al Fiscal General de la República, los informes correspondientes con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia, eficacia y legalidad en su gestión y encargo, así como emitir recomendaciones;

IV. Revisar que las operaciones presupuestales que realice la Fiscalía, se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables y, en su caso, determinar las desviaciones de las mismas y las causas que les dieron origen;

V. Promover ante las instancias correspondientes, las acciones administrativas y legales que se deriven de los resultados de las auditorías;

VI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de la Fiscalía;

VII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos de la Fiscalía, empleando la metodología que determine;

VIII. Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables;

IX. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas y órganos de la Fiscalía General para el cumplimento de sus funciones;

X. Ejercer en el ámbito de la Fiscalía General de la República, en lo que resulte conducente, las facultades que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Asociaciones Público Privadas, prevén para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública;

XI. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de la Fiscalía en los términos de la normativa aplicable;

XII. Participar, conforme a las disposiciones vigentes, en los comités y subcomités de los que el Órgano Interno de Control forme parte, e intervenir en los actos que se deriven de los mismos;

XIII. Formular el anteproyecto de presupuesto del Órgano Interno de Control;

XIV. Presentar al Fiscal General de la República los informes, previo y anual, de resultados de su gestión;

XV. Presentar al Fiscal General de la República los informes respecto de los expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su caso, sobre la imposición de sanciones en materia de responsabilidades administrativas;

XVI. Emitir el Código de Ética de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la procuración de justicia;

XVII. Establecer mecanismos, en coordinación con la Coordinación General, que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;

XVIII. Vigilar, en colaboración con las autoridades competentes el cumplimiento de las normas de control interno, fiscalización, integridad, transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y combate a la corrupción en la Fiscalía General de la República, y

XIX. Las demás que señalen las leyes y reglamentos.

Artículo 35. Designación del titular del Órgano Interno de Control

El titular del Órgano Interno de Control será designado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 36. Requisitos para ser el titular del Órgano Interno de Control

El titular del Órgano Interno de Control deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener treinta y cinco años;

II. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año;

III. Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público;

IV. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

V. Contar con reconocida solvencia moral;

VI. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación, a despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios a la Fiscalía, o haber fungido como consultor o auditor externo de la Fiscalía en lo individual durante ese periodo;

VII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y

VIII. No haber sido Secretario de Estado, Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación.

Artículo 37. Duración del encargo de titular del Órgano Interno de Control

El titular del Órgano Interno de Control durará en su encargo cuatro años y podrá ser designado por un periodo inmediato posterior al que se haya desempeñado, previa postulación y cumpliendo los requisitos previstos en esta Ley y el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tendrá un nivel jerárquico igual al de un Coordinador o su equivalente en la estructura orgánica de la Fiscalía, y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación a que se refiere el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El titular del Órgano Interno de Control deberá rendir informe semestral y anual de actividades al Fiscal General de la República, del cual marcará copia a la Cámara de Diputados.

Artículo 38. Responsabilidades de los servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control

El titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República será sujeto de responsabilidad en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y podrá ser sancionado de conformidad con el procedimiento previsto en la normatividad aplicable.

Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, serán sancionados por el titular del Órgano Interno de Control o el servidor público en quien delegue la facultad, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 39. Obligaciones ante el Sistema Nacional Anticorrupción

El titular del Órgano Interno de Control deberá inscribir y mantener actualizada la información correspondiente del Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, de todos los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 40. Integración del Consejo Ciudadano de la Fiscalía

El Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República será un órgano especializado de consulta, de carácter honorífico, que ejercerá las funciones establecidas en la presente Ley. Estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución en materia de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, en especial de las mujeres, de los pueblos y las comunidades indígenas, de los niños, niñas, adolescentes y personas migrantes. Sesionará al menos una vez al mes o cuando deba conocer de un tema para su opinión y visto bueno y estará presidido por uno de los integrantes, de acuerdo con el Reglamento de esta Ley.

Las personas integrantes del Consejo Ciudadano durarán en su encargo cinco años improrrogables y serán renovados de manera escalonada. Sólo podrán ser removidas por inasistencias reiteradas a las sesiones del Consejo, por divulgar información reservada o confidencial o por alguna de las causas establecidas en la normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Las personas integrantes del Consejo Ciudadano tendrán obligación de guardar confidencialidad cuando por razón de su función tuvieren acceso a información confidencial o reservada.

Las personas titulares de la Fiscalía General de la República y de las Fiscalías Especializadas podrán asistir a las reuniones con voz, pero sin voto.

Artículo 41. Designación de las personas integrantes del Consejo

El Senado nombrará una Comisión de selección, integrada por cinco personas de reconocida honorabilidad y trayectoria, debiendo justificar las razones de la selección. La citada Comisión abrirá una convocatoria pública por un plazo de quince días para recibir propuestas para ocupar el cargo de Consejero Ciudadano. Posteriormente, el Senado elegirá entre los candidatos a cinco personas, respetando los principios a que se refieren los artículos 22, 23 y 24 de esta Ley.

Esta lista será dada a conocer por diez días para que la sociedad se pronuncie y, en su caso, presente sus objeciones, que serán tomadas en cuenta para motivar la elección. Una vez concluido este proceso, el Senado hará público el nombre de las personas seleccionadas.

Artículo 42. Facultades del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República.

El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes facultades:

I. Opinar, dar seguimiento y emitir recomendaciones públicas sobre el contenido e implementación del Plan de Persecución Penal que presente la persona titular de la Fiscalía General de la República, así como los programas anuales de trabajo y su implementación;
II. Opinar sobre la creación de nuevas estructuras propuestas por la persona titular de la Fiscalía General de la República;
III. Hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control cuando advierta una probable responsabilidad administrativa;
IV. Dar opiniones para fortalecer el presupuesto de la institución;
V. Opinar sobre la normatividad interna de la Fiscalía General de la República;
VI. Opinar sobre las propuestas y planes del Servicio Profesional de Carrera;
VII. Establecer las reglas operativas del Consejo;
VIII. En general, emitir opiniones y recomendaciones sobre el desempeño de la Fiscalía y sus áreas;
IX. Para un mejor desarrollo de sus funciones el Consejo Ciudadano podrá invitar a personas expertas, nacionales e internacionales, y
X. Las demás que establezcan esta Ley y su Reglamento.

Las opiniones y recomendaciones emitidas por el Consejo no son vinculantes. La Fiscalía y las áreas a las que vayan dirigidas las recomendaciones deberán fundar y motivar las razones por las cuales se acepta o rechaza la recomendación. Siempre serán de carácter público.

Cualquier intromisión en aspectos sustantivos de la función fiscal tendrá como sanción la remoción del Consejero respectivo, por parte de la persona titular de la Fiscalía General de la República.

Artículo 43. De la Secretaría Técnica del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República.

Para el ejercicio de sus funciones, el Consejo Ciudadano se auxiliará con una Secretaría Técnica, así como con el personal que se requiera para el desempeño de sus funciones. Las y los integrantes de la Secretaría Técnica se seleccionarán por el Consejo Ciudadano, a partir de la propuesta que elabore el Servicio Profesional de Carrera, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley.

Capítulo VIII
De las Responsabilidades y Sanciones

Artículo 44. Régimen de Responsabilidades

Los servidores públicos de la Fiscalía General de la República en el ejercicio de sus funciones, están sujetos al régimen de responsabilidades a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de conformidad con lo dispuesto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Ley.

El personal de la Fiscalía en el desempeño de sus funciones deberá actuar con estricto apego al Código de Ética que emita el Órgano Interno de Control, por lo que cualquier incumplimiento constituirá una falta administrativa no grave en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 45. Incompatibilidades con el servicio público

En el desempeño de sus funciones, los servidores públicos de la Fiscalía General de la República no podrán:

I. Desempeñar empleo, cargo o comisión remunerada de cualquier naturaleza de derecho público o privado, nacional o internacional, salvo los de carácter docente, cultural, de beneficencia y aquellos que autorice la Fiscalía General de la República, siempre y cuando no sean incompatibles con sus funciones en la misma;
II. Conocer de asuntos cuando pudieran incurrir en conflictos de interés;
III. Ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona;
IV. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el carácter de heredero o legatario o se trate de sus ascendientes, descendientes, hermanos, adoptante o adoptado, y

V. Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, síndico, administrador, interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista, árbitro o arbitrador.

Los servidores públicos de la Fiscalía General de la República que contravengan esta disposición estarán sujetos a las faltas determinadas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como las leyes especiales.

Capítulo IX
De la Investigación y Acción Penal

Artículo 46. Unidades de investigación y litigación

Las unidades de investigación y litigación serán órganos compuestos por equipos de investigación y litigación, que tienen como función organizar y gestionar la estrategia de la Fiscalía General de la República de forma flexible y eficiente establecida en el Plan de Persecución Penal. Estarán dirigidas por fiscales y se integrarán por los equipos de investigación necesarios para su adecuado funcionamiento.

Artículo 47. Equipos de investigación y litigación

Los equipos de investigación serán las unidades orgánicas encargadas del desarrollo de las investigaciones y el ejercicio de la acción penal. Los equipos de investigación serán dirigidos por fiscales y además serán integrados, entre otros, por peritos, policía de investigación, analistas y técnicos que correspondan en cada caso.

Artículo 48. Equipos mixtos de investigación y litigación

La persona titular de la Fiscalía General de la República, podrá conformar equipos mixtos de investigación con integrantes de distintas unidades fiscales y coordinaciones, así como con personal de otras fiscalías o procuradurías de las entidades federativas a través de acuerdos de colaboración institucional, para el desarrollo de investigaciones y el ejercicio de la acción penal en el ámbito de sus competencias, cuando exista concurrencia de delitos, de fenómenos delictivos o para fines orientados al cumplimiento del Plan de Persecución Penal. En todos los casos se cuidará la integridad y no fragmentación de las investigaciones.

Los acuerdos de colaboración con las entidades federativas deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y el órgano de difusión de la entidad federativa correspondiente.

Artículo 49. Unidades de Análisis Estratégico y de Contexto

Tanto las Fiscalías Especializadas como la Coordinación de Investigación y Persecución Penal contarán con las Unidades de Análisis Estratégico y de Contexto

para el cumplimiento de sus funciones y del Plan de Persecución Penal, las cuales tendrán, entre otros, los siguientes objetivos:

I. La identificación de patrones de actuación reiterada, sistemática o generalizada sobre ciertas estructuras o fenómenos criminales;
II. La identificación de niveles y tipos de responsabilidad o de los partícipes de los hechos delictivos incluyendo servidores públicos;
III. La identificación de niveles de responsabilidad de estructuras delincuenciales o paralelas al Estado, y
IV. La identificación de aspectos multifactoriales y multidelictivos de los fenómenos criminales.

Estas unidades actuarán coordinadamente con la Coordinación de Métodos de Investigación y será integrada por analistas, técnicos y expertos en las materias de su competencia.

Artículo 50. Comisiones Especiales

La persona titular de la Fiscalía General de la República podrá crear comisiones especiales, de carácter temporal, que gozarán de autonomía técnica y de gestión, para colaborar en las investigaciones de fenómenos y delitos que debido a su contexto, a juicio del fiscal, amerite su creación, incluyendo aquellos sobre feminicidios, violencia sexual, trata de personas, o que impliquen violaciones a derechos humanos, en especial de los pueblos y las comunidades indígenas, de los niños, niñas, adolescentes y personas migrantes. Los trabajos, recomendaciones y conclusiones de las comisiones podrán ser tomados en consideración por los órganos de la función fiscal, para la investigación y el ejercicio de la acción penal de los asuntos correspondientes.

Las Comisiones Especiales tendrán como enfoque el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición. Serán integradas, de manera multidisciplinaria, por expertos de reconocida experiencia, tanto nacionales o internacionales en las materias que se requieran, organismos internacionales, organismos de la sociedad civil, universidades públicas y privadas y colectivos de víctimas.

Artículo 51. De la operación territorial estratégica

El despliegue territorial de la operación sustantiva definida en las normas y políticas centrales se llevará a cabo a través de unidades o equipos de investigación y litigación, cuya distribución, tamaño, recursos y temporalidad se apegarán al Plan de Persecución Penal y a los fines de la Fiscalía.

Las unidades o equipos deberán estar integrados por el personal necesario para ejercer la función fiscal dentro del ámbito territorial y por el tiempo que hubiere

sido establecido por las fiscalías o coordinaciones conforme al Plan de Persecución Penal.

Las unidades o equipos desplegados se desintegrarán al cumplirse el objetivo establecido, debiendo reubicar al personal en otras unidades o equipos de investigación y litigación.

Artículo 52. Criterios para el despliegue territorial

La distribución territorial de las unidades o equipos de investigación y litigación se definirán conforme a cualquiera de los siguientes criterios:

I. La atención específica de fenómenos criminales;
II. La regionalización y coordinación en materia de procuración de justicia;
III. La distritación judicial, y
IV. El acceso a la justicia.

Artículo 53. Sistema de recepción y canalización

La Coordinación General establecerá un sistema central de recepción y canalización de los asuntos que sean competencia de la Fiscalía General de la República y al respecto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Recibir y canalizar los casos a los órganos competentes de la Fiscalía para su conocimiento, investigación o tramitación con base en el Plan de Persecución Penal;
II. Canalizar los casos y asuntos que no son competencia de la Fiscalía General de la República a las autoridades competentes;
III. Cooperar con otras instancias federales y locales para la atracción y remisión de asuntos;
IV. Orientar y canalizar a las personas víctimas con los órganos y autoridades competentes para su protección y asistencia, y
V. Las demás que disponga el Reglamento de esta Ley.

Podrá recomendar la creación de unidades o equipos de investigación y litigación para la atención de casos relevantes.

Determinará la competencia de las fiscalías o unidades de investigación y litigación para la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal.

Artículo 54. De la atención a las víctimas en territorio extranjero, a través del Mecanismo de Apoyo Exterior

A través del Mecanismo de Apoyo Exterior previsto por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; así como de la Ley

General de Víctimas, los órganos de la función fiscal garantizarán a las víctimas tanto en el territorio nacional como en el extranjero en igualdad de condiciones el derecho a la verdad, justicia y reparación integral.

El Mecanismo de Apoyo Exterior deberá garantizar a todas las víctimas y sus representantes que se encuentren en el extranjero, el derecho a presentar denuncias, declaraciones y cualquier tipo de pruebas, documentación o información relacionada con los hechos denunciados; a presentar peticiones, a participar activamente en el desarrollo de las investigaciones y procesos penales, así como a recibir información completa y oportuna cuando la víctima lo requiera.

Las comunicaciones entre fiscales, víctimas y representantes legales deberá realizarse con fluidez, agilidad y debida diligencia, pudiendo utilizarse para el efecto cualquier medio de comunicación. De la misma manera se llevarán a cabo las comunicaciones entre la o el fiscal encargado del caso y las autoridades mexicanas que se encuentren en las sedes diplomáticas y consulares a cargo del Mecanismo de Apoyo Exterior; la Fiscalía podrá establecer los agregados que se requiera conforme al Plan de Persecución Penal.

Capítulo X
Del Servicio Profesional de Carrera

Artículo 55. Naturaleza y finalidad del Servicio Profesional de Carrera

El Servicio Profesional de Carrera será el sistema integral de regulación del empleo público de todo el personal que preste servicios en la Fiscalía General de la República, que garantizará la igualdad de oportunidades, idoneidad y mérito para el ingreso y reclutamiento, ascensos, estímulos y recompensas.

El sistema integral del Servicio Profesional de Carrera estará a cargo del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera, el cual contará con autonomía técnica y de gestión. Su estructura, procedimientos y gestión estarán regulados en el Reglamento correspondiente.

El Servicio Profesional de Carrera será organizado con la finalidad de estimular el profesionalismo, la rectitud, la independencia técnica; fomentar la iniciativa, innovación y la eficiencia institucional; y prevenir las violaciones a derechos humanos, así como los actos de corrupción.

Artículo 56. Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera

El Servicio Profesional de Carrera se integra por los siguientes subsistemas:

I. **Ingreso:** El reclutamiento y selección comprende el proceso de detección de necesidades de dotación de personal, elaboración de perfiles de puesto, convocatorias, evaluación y selección de aspirantes.

La formación inicial comprende las estrategias de nivelación de competencias técnicas y diseño de planes de desarrollo para los operadores de nuevo ingreso.

El proceso de inducción comprende el proceso de incorporación a la institución y el periodo a prueba de cada funcionario.

II. **Desarrollo:** Entrenamiento y fortalecimiento continuo de capacidades comprende el desarrollo continuo y progresivo de las capacidades de los servidores públicos, la construcción, evaluación y monitoreo de planes de carrera individuales; la detección de necesidades de formación y la evaluación, que se llevarán a cabo tomando como base el impacto en el desempeño individual. Los estímulos y recompensas se establecerán en el Plan de Gestión del Desempeño y Desarrollo Humano, de acuerdo con el presupuesto y mediante disposiciones generales, a través de un sistema de estímulos. Dicho sistema podrá incluir estímulos económicos y no económicos, programados semestralmente con base al cumplimiento de metas individuales y grupales. Los estímulos y recompensas se otorgarán con base a los criterios establecidos en el plan de desempeño, el cual contendrá objetivos y resultados esperados, de acuerdo con cada puesto.

El Servicio Profesional de Carrera fomentará la salud física y mental del personal y condiciones laborales adecuadas, como factores de bienestar personal y profesional, individual y colectivo, así como de compromiso, productividad y eficiencia. Para ello, pondrá a disposición del personal actividades y servicios de apoyo a la salud y elaborará un manual sobre las condiciones mínimas de desempeño laboral, tomando en consideración la naturaleza de cada función al interior de la institución.

III. **Evaluación:** El sistema de gestión del desempeño comprenderá el diseño de lineamientos e instrumentos de evaluación del desempeño orientados a valorar las cualidades individuales y colectivas de los operadores, estableciendo la periodicidad y los mecanismos de recolección y análisis de la información. Dichos instrumentos tendrán como objetivo la profesionalización y eficiencia en el desempeño de funciones y darán lugar a la creación de planes de mejora del desempeño.

Comprenderá lineamientos técnico-jurídicos para el monitoreo, la supervisión, investigación, revisión y control de la actuación de fiscales, policías de investigación, peritos, analistas, técnicos y en general de los

servidores públicos de la Fiscalía General de la República, en términos del Plan de Persecución Penal.

IV. **Promoción:** El sistema de ascensos se regirá por la evaluación formal, objetiva y periódica del desempeño de cada servidor público.

Los ascensos y promociones comprenden la dirección y rectoría de todos los concursos que tengan por objeto ocupar un cargo vacante o de reciente creación sujetos al Sistema de Servicio Profesional de Carrera. Estos procesos se regirán por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad e independencia, equidad de capacidades y velarán en todo momento por la erradicación de la violencia contra las mujeres al interior de la institución.

V. **Separación:** El personal de la Fiscalía General de la República será inamovible, salvo casos de responsabilidad en los términos establecidos en esta Ley y su Reglamento, así como por razones técnicas que afecten al funcionamiento de la institución y que objetivamente sean acreditadas.

VI. **Reincorporación:** La reincorporación comprenderá las acciones y mecanismos que tome la Fiscalía para reinstalar al personal que previamente se haya separado de manera voluntaria, o bien, por razones institucionales excluyentes de responsabilidad y que cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto.

Todos estos subsistemas se desarrollarán de manera pública y de acuerdo con el Reglamento correspondiente.

Artículo 57. Derechos del personal de la Fiscalía General de la República
Además de las responsabilidades y obligaciones que contiene esta Ley, los sujetos a que se refiere la misma tendrán los siguientes derechos:

I. A participar en igualdad de oportunidades en el Servicio Profesional de Carrera conforme a las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y demás normatividad aplicable;
II. A que la aplicación de las reglas del Servicio Profesional de Carrera sea objetiva, justa, transparente e imparcial;
III. A desempeñar una carrera conforme a este servicio que se base en el mérito, en la superación constante y a tener estabilidad, conforme a las disposiciones aplicables, en el desempeño de su función;
IV. A desempeñarse en su asignación, contando con condiciones adecuadas y dignas de trabajo y a formarse de manera integral;
V. A contar con una remuneración adecuada, digna, irrenunciable y que corresponda a los servicios prestados en la fiscalía;

VI. A profesionalizarse y actualizarse de manera permanente para un mejor desempeño de sus funciones;
VII. A recibir estímulos, promociones y ascensos horizontales y verticales con motivo del desempeño de su función, y
VIII. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables.

Artículo 58. Plan de Gestión de Desempeño y Desarrollo Humano

El titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera elaborará un Plan de Gestión de Desempeño y Desarrollo Humano en coordinación con la Coordinación de Planeación y Administración y lo someterá a la persona titular de la Fiscalía General de la República, para su aprobación.

El Plan deberá elaborarse para un periodo de tres años y establecerá todos los elementos que componen el Servicio Profesional de Carrera, será revisado anualmente por el Consejo Ciudadano quien emitirá las recomendaciones que correspondan.

Artículo 59. Facultades del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera

El Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera tendrá las siguientes facultades:

I. Diseñar las políticas y criterios institucionales del Sistema de Servicio de Carrera;
II. Planear, diseñar y llevar a cabo los procesos de reclutamiento y selección con base en principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres, o por cualquier otro motivo o condición;
III. Dirigir la operación del Centro de Evaluación y Confianza, así como todos sus procedimientos, en todo lo que atañe al personal del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República;
IV. Proponer los procesos, procedimientos, lineamientos, convocatorias, para la gestión y desarrollo de capacidades;
V. Diseñar los planes y programas interdisciplinarios y llevar a cabo las acciones de fortalecimiento de capacidades técnicas del personal;
VI. Determinar los criterios y métodos necesarios para la operación del sistema de monitoreo y evaluación del desempeño;
VII. Llevar a cabo los concursos y procedimientos para ascensos y promociones en los términos que indique su Reglamento;
VIII. Diseñar el plan anual de estímulos a la excelencia en el desempeño individual;
IX. Administrar los expedientes del personal del Servicio Profesional de Carrera;

X. Promover la celebración de convenios de coordinación e intercambio científico y tecnológico con instituciones y organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, que realicen actividades afines, con el objeto de complementar y fortalecer las propias, y
XI. Las demás que dispongan esta Ley y su Reglamento.

Artículo 60. Relaciones Administrativas y Laborales con la Fiscalía General de la República

Las relaciones laborales entre la Fiscalía General de la República y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el artículo 123 Constitucional, Apartado B, Fracción XIII y por lo establecido en esta Ley.

TÍTULO TERCERO

De los Recursos

Capítulo Único
Del Patrimonio y Presupuesto

Artículo 61. Patrimonio y Presupuesto de la Fiscalía General de la República

Para la realización de sus funciones, el patrimonio de la Fiscalía General estará constituido por los bienes y recursos que a continuación se enumeran:

I. Los bienes muebles o inmuebles que la Fiscalía General de la República adquiera;
II. Los bienes muebles o inmuebles que la Federación transfiera para el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General de la República;
III. Los bienes muebles o inmuebles que la Federación determine que son de uso exclusivo de la Fiscalía General de la República;
IV. Los recursos que anualmente determine la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación;
V. Los derechos de los fideicomisos o fondos destinados al cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General de la República;
VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rentas y aprovechamientos de sus bienes muebles e inmuebles;
VII. Los recursos que reciba por concepto de los bienes o productos que enajene;
VIII. Las sanciones económicas impuestas por las autoridades competentes a los servidores públicos de conformidad con esta Ley, mismas que tendrán la naturaleza de créditos fiscales y serán enviadas para su cobro al Servicio de Administración Tributaria, el que, una vez efectuado el mismo entregará las cantidades respectivas a la Fiscalía General de la República;
IX. Los bienes que le correspondan de conformidad con la legislación aplicable, vinculados con la comisión de delitos, así como los decomisados, y

X. Los demás que establezcan las leyes.

Artículo 62. Contrataciones

Para el caso de las contrataciones públicas que lleve a cabo la Fiscalía General de la República se sujetarán, en lo que resulte conducente y conforme a su autonomía constitucional, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, sin perjuicio de la facultad de la persona titular de la Fiscalía General de la República de emitir normas particulares en acuerdo con la persona titular del Órgano Interno de Control.

Artículo 63. Del Presupuesto

La Fiscalía General de la República elaborará su proyecto de presupuesto anual de egresos, el cual será remitido al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se remita a la Cámara de Diputados.

En todo caso deberá garantizarse la autonomía e independencia funcional y financiera.

Artículo 64. Recursos para Emergencias

La Fiscalía General de la República contará con recursos para emergencias que garanticen el desarrollo de las investigaciones, en los casos que así se requiera. La Coordinación de Planeación y Administración emitirá reglas generales que se publicaran en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio, comprobación, justificación, rendición de cuentas, transparencia y fiscalización de estos recursos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Una vez publicado, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos deberá emitir la declaratoria expresa de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

SEGUNDO. Se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

TERCERO. Los casos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto serán resueltos en las unidades a las que están adscritos,

conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se adscriban a nuevas unidades en tanto se avanza en la transición orgánica de la Fiscalía General de la Republica.

CUARTO. Todos los convenios y actos jurídicos celebrados por la Procuraduría General de la República se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Fiscalía General de la República o a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, según corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos posteriormente.

QUINTO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se contrapongan a la presente Ley y al decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral del 10 de febrero de 2014, mediante la cual se creó la Fiscalía General de la República.

SEXTO. Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su titular respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. Las referencias normativas a los agentes del Ministerio Público se entenderán referidas a las y los fiscales en los términos de esta Ley.

SÉPTIMO. La Cámara de Diputados, tomando en cuenta el principio de austeridad, contemplará en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 y subsecuentes, la asignación y garantía de la suficiencia presupuestal para la instalación de la Fiscalía General de la República y la ejecución de la planeación estratégica de transición, conforme a lo establecido en el Transitorio Décimo Segundo.

La Cámara de Diputados tendrá un plazo no mayor a noventa días para designar al titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República.

OCTAVO. A la entrada en vigor del presente Decreto, los bienes inmuebles, muebles y demás recursos materiales, financieros y presupuestales, en propiedad y/o posesión de la Procuraduría General de la República, pasarán a la Fiscalía General de la República o a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal según corresponda, en términos del artículo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. En lo relativo a bienes en posesión o servicios contratados para los fines de la Procuraduría General de la República, obtenidos por arrendamiento, comodato o cualquier otro contrato mediante el cual se haya transmitido la posesión o propalado dichos servicios, continuarán siendo utilizados por la Fiscalía General de la República.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un plazo no mayor de noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá efectuar las gestiones y trámites correspondientes, para dar cumplimiento cabal al presente artículo.

NOVENO. A partir de su nombramiento, la persona titular de la Fiscalía General de la República, contará con un plazo de un año para definir la estrategia de transición, a partir de la realización de un inventario integral y un diagnóstico de los recursos financieros, humanos y materiales, casos pendientes, procesos de colaboración e inteligencia y cualquier otro insumo que considere necesario para la integración de un Plan Estratégico de Transición. Priorizará en orden de importancia el establecimiento del Servicio Profesional de Carrera y su Estatuto, la consolidación del sistema de información y análisis estratégico para la función fiscal, así como la restructura y definición de los órganos administrativos y los sustantivos para la función fiscal.

El Plan comprenderá como mínimo los aspectos siguientes:

I. Diagnóstico, ubicación geográfica y análisis de los fenómenos criminales que perseguirá; así como la definición del Plan de Persecución Penal y la operación y despliegue territorial del modelo de investigación criminal;

II. Definición de objetivos, estrategias, acciones, metas e indicadores de resultados del proceso de transición, con base en criterios de gradualidad que consideren los tipos y fenómenos delictivos, unidades operativas centrales y estatales, regiones geográficas u otros;

III. Estrategia específica respecto al personal en activo y al reclutamiento de nuevos talentos, que contemple a su vez esquemas de retiro, liquidación, certificación, capacitación, desarrollo y gestión del cambio;

IV. Estrategia para el diseño y activación de la nueva estructura organizativa; así como del proceso de cierre de las estructuras y procesos previos;

V. Estrategia de liquidación de casos, que contemple el inventario de casos en trámite; así como su situación jurídica, tanto del sistema inquisitivo mixto como del acusatorio, para garantizar su adecuada atención; así como la

identificación de casos de alto impacto social o de violaciones graves a los derechos humanos. Los casos pendientes de resolución relacionados con violaciones graves de derechos humanos o corrupción no podrán ser liquidados. La Unidad de Transición determinará la forma de atención y trámite a estos casos hasta su conclusión;

VI. Estrategia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas del proceso de transición que asegure la publicidad y mecanismos necesarios para el seguimiento, colaboración y vigilancia;

VII. Estrategia de colaboración y articulación con otras instituciones con las que requiera coordinarse para llevar a cabo la función fiscal, tales como las instituciones de seguridad pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y demás instituciones, y

VIII. El plazo para su instrumentación.

DÉCIMO. Para los efectos de los artículos 40 y 41 de la Ley que se crea en virtud del presente Decreto, el procedimiento para la designación de los primeros Consejeros Ciudadanos iniciará dentro de los treinta días hábiles siguientes a la designación del Fiscal General de la República; observando la siguiente fórmula de escalonamiento: dos personas integrantes que durarán tres años en sus encargos, dos personas integrantes que durarán cuatro años en sus encargos y una persona integrante que durará cinco años en su encargo.

Dentro del mismo plazo, la persona titular de la Fiscalía General de la República, nombrará al titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera. Asimismo, integrará una Unidad de Transición, que dependerá orgánicamente de él y que tendrá como objetivo la coordinación, implementación y evaluación del Plan Estratégico de Transición. Estará integrada por un grupo interdisciplinario de expertos con reconocido prestigio, experiencia y conocimiento en gestión de instituciones públicas o privadas, diseño institucional, evaluación e implementación de políticas públicas y proceso penal acusatorio.

La Unidad se organizará a su vez en una sub-unidad de Clausura de la Procuraduría General de la República y una sub-unidad de Diseño e Instalación de la Fiscalía General de la República, las cuales, desde sus respectivas competencias, deberán generar esquemas de coordinación para el traslado y liquidación de recursos humanos, materiales y financieros, así como para la liquidación y transferencia de los casos pendientes de resolución.

La Unidad hará del conocimiento del Fiscal General de la República las necesidades presupuestales y de cualquier índole para cumplir con sus objetivos.

El Consejo Ciudadano tendrá la facultad de supervisar el proceso de transición establecido en dicho Plan.

La persona titular de la Fiscalía General de la República destinará los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para el cumplimiento del Plan Estratégico de Transición.

DÉCIMO PRIMERO. En cumplimiento del artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la Procuraduría General de la República pasarán a la Fiscalía General de la República, en términos de la presente Ley.

Los lineamientos que expida deberán contener reglas para priorizar la implantación de las áreas estratégicas de la Fiscalía, así como las de análisis e información. Asimismo, deberá priorizarse la unificación de los sistemas informáticos.

DÉCIMO SEGUNDO. El proceso de transición del personal de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República se llevará a cabo de acuerdo con el Plan Estratégico de Transición y será coordinado por la Unidad a cargo. Este proceso deberá llevarse a cabo conforme a los siguientes lineamientos:

I. El personal administrativo, de confianza y de base adscrito a la Procuraduría General de la República conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su relación laboral, con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades;

II. El personal adscrito a la Procuraduría General de la República que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento, continuará en la función que desempeña y tendrá derecho a participar en el proceso de selección para acceder al Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República en términos de los principios establecidos en la presente Ley. Para ello, se garantizará su acceso a los programas de formación, entrenamiento, fortalecimiento de capacidades y evaluación durante el periodo de transición, en los términos establecidos en los lineamientos provisionales;

III. En tanto se instale el Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República, la profesionalización, el régimen disciplinario, la certificación y el régimen de seguridad social de las policías, peritos y

analistas deberá cumplir con el régimen previsto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

IV. El Plan Estratégico de Transición garantizará condiciones dignas y apegadas a la ley para la liquidación del personal adscrito a la Procuraduría General de la República que decida concluir su relación laboral o no acceder al Servicio Profesional de Carrera reglamentado en la presente Ley. El personal que no apruebe los procesos de selección del Servicio Profesional de Carrera dejará de formar parte de la Fiscalía General de la República;

V. La persona titular de la Fiscalía General de la República, a través de quien dirija la Unidad de Transición presentará un informe al Congreso de la Unión que incluya un diagnóstico integral de la institución, un Programa de Transición, el modelo financiero y el presupuesto estimado de los recursos necesarios para implementar los cambios organizacionales y de personal requerido por parte de la Fiscalía General de la República. En el Programa de Transición, el titular de dicha Unidad incluirá un plan detallado de las etapas que comprenderán las acciones de transformación institucional y la estrategia de administración del cambio institucional que se llevarán a cabo para la operación de la Fiscalía General de la República.

DÉCIMO TERCERO. Transcurrido un año a partir del nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General de la República, y a la luz del Plan Estratégico de Transición y la experiencia acumulada en el proceso de transición, la o el Fiscal General de la República, realizará una convocatoria pública para la revisión del marco constitucional y jurídico de la Fiscalía General de la República. Dicha convocatoria tendrá como objetivo la identificación, discusión y formulación de las reformas constitucionales, de la legislación secundaria o de las reformas regulatorias necesarias para la operación óptima del modelo de Fiscalía General de la República, propuesto en la presente Ley. Los resultados obtenidos serán públicos y se comunicarán al Congreso de la Unión con el fin de que éste realice las adecuaciones al marco jurídico que considere sean necesarias y pertinentes.

La convocatoria comprenderá temas relacionados con la función fiscal y de persecución penal, el modelo de investigación criminal, la competencia, el servicio profesional de carrera, los órganos ciudadanos, los derechos humanos y la atención a víctimas; el régimen de responsabilidades de los servidores públicos de la fiscalía, revisión de la estructura institucional, así como el régimen de transición, entre otros. Esta consulta deberá garantizar condiciones de apertura, transparencia y participación ciudadana de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, académicas y representantes del sector privado. Con base en las consultas realizadas, el Congreso de la Unión analizará y propondrá las reformas constitucionales y legales para el óptimo funcionamiento de la Fiscalía General de la República.

DÉCIMO CUARTO. La persona titular de la Fiscalía General de la República deberá emitir un Plan de Persecución Penal Provisional dentro de un plazo máximo de noventa días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

A partir de su nombramiento, la persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de hasta un año para formular el Plan de Persecución Penal, en términos del artículo 6 de la Ley materia del presente Decreto.

DÉCIMO QUINTO. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera, la persona titular de la Fiscalía General de la República deberá emitir normas generales relativas al desarrollo y operación de dicho servicio en coordinación con el titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera.

El Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera deberá establecer planes y programas tendientes a capacitar al nuevo personal a efecto de dar cumplimiento a las funciones asignadas a cada uno en esta Ley.

DÉCIMO SEXTO. Fiscales, policías de investigación, analistas, auxiliares y peritos, así como el personal profesional, técnico y administrativo que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren laborando en la Procuraduría General de la República se someterán a las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera que se expidan para tal efecto.

DÉCIMO SÉPTIMO. Dentro del Plan de Transición se establecerá un mecanismo expeditivo para establecer el sistema central de recepción y canalización de los asuntos nuevos que tenga que conocer la Fiscalía General de la República, a que se refiere el artículo 53 de esta Ley.

DÉCIMO OCTAVO. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo máximo de 180 días para nombrar a las personas titulares de las Fiscalías Especializadas en los términos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en esta Ley según sea el caso, verificando el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para su designación marcados en ambas disposiciones normativas.

DÉCIMO NOVENO. Una vez instaladas las Fiscalías Especializadas, sus respectivos titulares, de inmediato solicitarán a la persona titular de la Fiscalía General de la República, la asignación del personal que integrará las nuevas unidades fiscales, conforme marca esta Ley. En el proceso de asignación, se observarán, entre otros, los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres.

VIGÉSIMO. La Fiscalía General de la República a través de la Coordinación de Métodos de Investigación, contará con un plazo no mayor a 18 meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para la expedición de los Lineamientos Generales que regulen la operación de la Base Nacional de Información Genética, así como su instauración.

VIGÉSIMO PRIMERO. La creación de las unidades a que se refiere esta Ley se hará con el Acuerdo del Fiscal General de la República.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Los casos relativos a delitos relacionados con hechos de corrupción, así como cualquier otro delito cometido por un servidor público federal en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, que hayan sido iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto por la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, deberán continuar su curso correspondiente en la misma hasta su conclusión.

Una vez concluidos los casos pendientes en la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, quedará sin vigencia el Acuerdo A/011/14 por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción podrá atraer cualquiera de los casos de corrupción cuyo trámite hubiese iniciado con anterioridad a la asignación de su gestión, cuando así lo considere pertinente su titular.

Las denuncias de los casos relacionados con hechos de corrupción que hayan ingresado a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, serán remitidas en su totalidad a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

VIGÉSIMO TERCERO. La persona titular de la Fiscalía General de la República será el Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). El régimen de relación que existía entre el INACIPE y la Procuraduría General de la República se mantendrá con la nueva Fiscalía en términos de lo dispuesto en la normatividad aplicable en tanto no se reforme o se expida un nuevo estatuto orgánico del INACIPE.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2018

11-12-2018
Cámara de Diputados.
DICTAMEN de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
Aprobado en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 341 votos en pro, 119 en contra y 1 abstención.
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Gaceta Parlamentaria 11 de diciembre de 2018.
Discusión y votación 11 de diciembre de 2018.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Diario de los Debates

México, DF, martes 11 de diciembre de 2018

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Primero, hacer del conocimiento de todos ustedes, como ya lo hicimos en la Mesa Directiva, que hemos logrado ocupar toda una sesión para la discusión de un proyecto de iniciativa, lo que le da sentido y orientación a las discusiones de esta Cámara.

Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. En términos de lo dispuesto por el artículo 104 del Reglamento de esta Cámara, vengo a presentar por parte de la Comisión de Justicia el dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en cumplimiento al mandato constitucional que tiene como origen la reforma al artículo 102 de nuestra Constitución, publicada en el Diario Oficial el 10 de febrero del 2014.

Este dictamen debe ser considerado como la base para la creación de la Fiscalía General de la República, que no ha existido, la cual busca, dentro del Sistema Penal Acusatorio...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Me permite, señor diputado? Quiero rogar a las señoras diputadas y diputados, tomen sus asientos, porque este es el fundamento del debate que vamos a seguir, y si no siguen uno, difícilmente seguirán el otro. Les ruego, por favor, para no obligarnos a un receso, que ocupen sus asientos, porque durante tantos años lucharon, y por eso es lamentable que lo dejen vacío. Por favor. Continúe el orador.

El diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero:...se busca observar plenamente los derechos del imputado y de las víctimas, en el marco de un proceso garantista que incorpore y visibilice la justicia, la búsqueda de la verdad, la garantía de no repetición y la reparación del daño.

A más de cuatro años de la publicación de la reforma constitucional, no ha sido posible constituir la fiscalía. Hoy se propone que esta Cámara de Diputados, en ejercicio de sus atribuciones, concluya con esta primera fase del proceso.

En México la figura de la fiscalía, como ente persecutor de delitos, prácticamente no ha cambiado desde 1857, donde se estableció la existencia de un fiscal competente en materia penal y de un procurador general con funciones de vigilancia para asegurar la legalidad en los procesos.

En 1917 se recogió en la Constitución la figura del Ministerio Público encabezado por un procurador general, al que se le atribuyó el monopolio de la acción penal, con la Policía Judicial bajo su mando, consolidándose como representante de los intereses sociales y de la Federación, así como consejero jurídico del gobierno.

Esta dualidad explica por qué el procurador no termina por resolver en favor de la población, ni ha podido cumplir sus funciones como procurador de justicia y en la persecución penal. Más bien ha fungido como aparato coactivo, inadecuado, con grandes márgenes de discreción y manipulación.

El diseño institucional de la nueva Fiscalía es completamente distinto, aquí se incorporan mecanismos diferentes para la rendición de cuentas, a través de los cuales se promueve la transparencia, la eficiencia, la integridad y se combata a la corrupción.

Actualmente la estructura de la procuraduría responde un proceso penal inquisitivo, caracterizado por la burocratización y la ineficiente conducción de las investigaciones. En el sistema acusatorio, el papel de los fiscales es el litigio penal, situación para la que hoy en día no están preparados los ministerios públicos.

En el dictamen que se presenta se destaca la importancia de incorporar al ámbito de atribuciones de la Fiscalía, a través de una coordinación de métodos de investigación, la base nacional de información genética, que integre la información proporcionada por víctimas o por familiares respecto a las personas desaparecidas.

Los principios rectores de la actuación de la Fiscalía serán: la autonomía, la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, la honradez, el respeto a los derechos humanos, accesibilidad, imparcialidad.

Se plantea como estructura un fiscal general, una coordinación general, una Fiscalía Especializada en materia de derechos humanos. La Fiscalía Especializada en delitos electorales, la Fiscalía en combate a la corrupción y una fiscalía especializada en asuntos internos, justamente con el mismo propósito de combatir la corrupción a lo interior.

Hay una coordinación de investigación y persecución penal, una coordinación de métodos de investigación, y una de planeación, administración, además del órgano de control.

Muy importante el Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera, el órgano de mecanismos alternativos de solución y las fiscalías, órganos, unidades que determine el titular. Habrá un consejo ciudadano que contará con diversas facultades establecidas en la ley, que es clave en materia de participación ciudadana.

La Fiscalía Especializada en derechos humanos tendrá a su cargo fiscalías de protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes; de trata de personas; de desaparición forzada; desaparición cometida por particulares; de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; de migrantes; de investigación de tortura y todas aquellas fiscalías, órganos, unidades que determine el titular de la Fiscalía.

El órgano de mecanismos alternativos será responsable de aplicar bases y principios, mecanismos alternativos de solución en materia penal con independencia técnica y de gestión; el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, que contará con un consejo técnico.

Las personas titulares de la Fiscalía establecerán los criterios para evitar la fragmentación de las investigaciones y, en su caso, la creación de unidades mixtas de investigación.

La Fiscalía contará con fiscales, policía de investigación, analistas, auxiliares, peritos, todo el personal técnico y administrativo y profesional necesario para realizar sus funciones. Se establece que las reglas de atracción de casos están previstas en las leyes especiales.

La implementación del sistema acusatorio que se ha dado en los últimos años ha sido un avance fundamental en materia del Estado de derecho y de derechos. Hoy en día, el Ministerio Público no ha sido una institución al servicio de la seguridad y de la justicia para las víctimas, la incapacidad, la corrupción y las malas prácticas han hecho que desde la óptica del ciudadano dicho Ministerio Público sea una de las instituciones con mayor descrédito y desconfianza.

Nuestro país requiere con urgencia un nuevo modelo de investigación. Es imprescindible la creación de la Fiscalía que esté verdaderamente al servicio de los ciudadanos, con alta capacidad de investigación especializada, que genere certeza a todas y a todos de que la justicia llegará igual para todos, sin favoritismos ni influyentismo.

Se establece claramente la obligación de rendición de cuentas del fiscal general, al presentar anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión un informe de actividades y, en su caso, la obligación de comparecer.

En todo sistema democrático el sistema penal debe estar encabezado por una autoridad investigadora que pueda realizar sus funciones de manera imparcial y objetiva, alejada de influencias, dependencia o presión alguna, donde el fiscal es un verdadero órgano de acusación y conducción jurídica de la investigación, bajo los principios de objetividad, eficacia y autonomía del propio modelo penal acusatorio.

Sin un verdadero cambio, no es posible contar con un aparato de justicia que realice sus funciones. La investigación eficiente de los delitos es invariablemente el primer paso para que exista el acceso a la justicia.

Es importante señalar que el artículo decimotercero transitorio establece la necesidad de que en un año, a partir del nombramiento de la persona titular de la fiscalía, se revisará el marco jurídico constitucional, que tendrá como objetivo la identificación, discusión y formulación de las reformas constitucionales a la legislación secundaria o de las reformas necesarias para la óptima operación del modelo y, en su caso, su mejoramiento.

Por lo antes expuesto, solicitamos, ponemos a consideración esta propuesta de dictamen y pedimos su voto a favor del mismo. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Para fundamentar una moción suspensiva, se concede el uso de la palabra a la diputada Verónica Juárez Piña.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, presento la siguiente moción suspensiva con la finalidad de que la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, que hoy se pone a consideración de este pleno, sea devuelto a ese órgano legislativo debido a que contiene, desde nuestra perspectiva, graves deficiencias, mismas que fueron señaladas en el proceso legislativo, tanto por las organizaciones sociales como por las y los integrantes de la comisión dictaminadora y que sin ningún estudio ni discusión fueron desechadas en automático por la mayoría de Morena.

Nuestro grupo parlamentario se encuentra plenamente convencido de que resulta imprescindible la reforma al artículo 102 constitucional, para modificar el procedimiento del nombramiento del fiscal general.

De tal manera que se garantice la autonomía e independencia de este órgano de procuración de justicia, con el objeto de que se convierta en una Fiscalía que sirva a México y a las y a los mexicanos y no al presidente en turno que quiere, por ejemplo, garantizar la impunidad concediendo perdones anticipados sin que esa sea su facultad, atropellando las disposiciones constitucionales.

Resulta importante decirlo, tal y como se está aprobando esta Ley Orgánica, lo que vamos a tener es un fiscal carnal, un fiscal a modo. Sin embargo, entramos a la discusión porque creímos que realmente se tenía la intención de mejorar esta minuta y contribuir a subsanar las deficiencias que contiene, haciéndola un instrumento que de verdad fortalezca el disminuir los índices de violencia de nuestro país.

No obstante, los compromisos y ofrecimientos de las y los integrantes de la comisión, el ejercicio de parlamento abierto no fue más que una simulación, ya que no se retomó ni una sola propuesta ni observaciones de las organizaciones de la sociedad civil, por lo que lo que se nos presenta es un dictamen en sus términos, sin cambiar una coma.

Entre los mayores defectos que podemos señalar de esta ley, es que despoja al Ministerio Público de una policía de investigación, acota la autonomía de las fiscalías especializadas, no contiene el catálogo de las faltas graves que darán lugar a la remoción de los titulares de las fiscalías, establece una base nacional de datos genéticos, en lugar del Banco Nacional de Datos Forenses, ordenada por la Ley General en Materia de Desaparición

Forzada de Personas, Desaparición Cometida Por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Estas son solo un ejemplo de las deficiencias que deberíamos atender y que gracias a la prisa de quienes hoy detentan la mayoría de esta Cámara no serán subsanadas. Es por ello que llamamos a la cordura y a la prudencia, para lograr una Fiscalía que goce de la autonomía que requiere la procuración de justicia en nuestro país, que abata los índices de impunidad y coadyuve en la superación de la crisis humanitaria que hoy nos aqueja. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se toma en consideración para su discusión la moción suspensiva.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. En votación económica se pregunta si se toma en consideración de inmediato para su discusión, la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias, señor presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se desecha.

Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, del Grupo Parlamentario del Partido del Verde, hasta por cinco minutos.

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Gracias, presidente. Con su permiso. Buen día a todos. El Partido Verde está a favor del presente dictamen por las razones siguientes:

Primero. El ordenamiento legal que se pone a consideración de la presente asamblea reconoce y reafirma la autonomía y patrimonio propio de la nueva Fiscalía General de la República y es acorde a lo previsto por el artículo 102 de la Constitución.

El presente ordenamiento significa un paso más para lograr la entrada en vigor de la nueva Fiscalía General de la República, lo que constituye un logro de todos los partidos aquí representados para construir un sistema de procuración de justicia eficiente y con credibilidad.

La ley que hoy nos ocupa establece el mecanismo en que habrá de organizarse la nueva Fiscalía General de la República, y suple a la antigua Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Votaremos a favor porque el presente ordenamiento establece la posibilidad de crear fiscalías adicionales a la de derechos humanos y electoral, como podría ser una procuraduría que atienda el tema de los feminicidios. Establece también la posibilidad de atracción de los temas que en el ámbito local puedan ser de interés de la federación.

Votaremos a favor porque se establece la creación de un servicio profesional de carrera que redundará en la profesionalización de la procuración de justicia en nuestro país.

Se establece la creación de la Base Nacional de Información Genética, la cual permitirá un puntual seguimiento de las víctimas, al tiempo que fortalecerá los procesos de investigación.

Y, finalmente, con esta nueva ley se crea un órgano ciudadano independiente e interdisciplinario que será integrado por cinco ciudadanos expertos en temas de procuración de justicia, investigación criminal y derechos humanos. No tenemos duda de que la participación de ciudadanos procurará el desarrollo de políticas públicas más eficientes y efectivas.

Es importante recordar que la aprobación de esta ley permitirá emitir por parte del Congreso de la Unión la declaratoria de entrada en vigor de la Fiscalía General de la República, derivada de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, cuyo propósito principal es la reconfiguración del Ministerio Público.

Esta reforma se desprendió de auténticos procesos democráticos que buscaron resolver verdaderamente los problemas estructurales de la procuración de justicia en nuestro país, teniendo como propósito regresar la credibilidad institucional que se ha visto mermada a los ojos de los ciudadanos.

Hoy damos un paso más en el camino de contar con un fiscal independiente y autónomo de terceros. A cuatro años de la reforma constitucional no podemos seguir postergando la aprobación de la ley que permitirá a la procuración de justicia ser funcional y eficiente.

La sociedad así lo reclama. Por esa razón la bancada del Partido Verde votará a favor del presente proyecto. Muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Lilia Villafuerte Zavala.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, la minuta que estamos por votar sin duda alguna es una de las reformas más importantes para la vida democrática de nuestro país.

Regular la institución del Ministerio Público como organismo dotado de autonomía constitucional debe llevarnos a un replanteamiento integral de la institución para contar con una Fiscalía que le sirva al país, que verdaderamente investigue, consigne ante los jueces a los presuntos responsables. Sea independiente de cualquier influencia política garantice a todos y a todas y a todos los mexicanos y mexicanas el derecho a la justicia. Abata los altos índices de impunidad y, en consecuencia, inicie la superación de la grave crisis humanitaria que en muchos casos, por fallas de orden técnico, se sufre en México.

Lamentablemente, no se refleja así, pues a pesar de los esfuerzos de acercar a las organizaciones de la sociedad civil, no ha existido la voluntad para acoger las propuestas realizadas al dictamen.

Si bien el llamado pase automático se eliminó desde el texto constitucional, el dictamen no lo garantiza, por el contrario, no hay elementos objetivos que nos permitan sostener que el próximo fiscal general será verdaderamente autónomo e independiente.

No percibimos estándares de idoneidad para designar al fiscal general, prácticamente el estándar para acceder al cargo se mantiene igual. No orienta por sí mismo un criterio para seleccionar al mejor perfil por una responsabilidad de tal envergadura, ni desde el punto de vista de sus atributos técnicos, ni desde la lógica de su autonomía e independencia política.

El Partido de la Revolución Democrática votará en contra de esta minuta por las siguientes razones:

1. La ley que se emite con el presente dictamen no cumple con los requerimientos que el Constituyente Permanente estableció para la construcción de una Fiscalía que goce de autonomía e independencia en el desarrollo de sus investigaciones.

2. Las fiscalías especializadas en materia de combate a la corrupción de delitos electorales, de derechos humanos y asuntos internos que se crean a través de esta ley tienen múltiples factores que acotan su autonomía, lo que vulnera el derecho de acceso a la justicia de todas y todos los mexicanos.

3. La coordinación general constituye en los hechos una vicefiscalía general lo cual lesiona gravemente la autonomía de las fiscalías especializadas al constituirse como un órgano fiscalizador de su actividad.

4. Los servicios periciales no gozan de la independencia que han recomendado los organismos internacionales, lo cual transgrede la naturaleza de las investigaciones que desarrolle.

5. No se crea dentro de la estructura orgánica de la Fiscalía, un cuerpo policíaco especializado y autónomo que lleve a cabo las investigaciones, situación que contraviene los principios del nuevo sistema penal acusatorio y, en consecuencia, no se garantizará la integridad y la calidad de las investigaciones.

6. No se establecen los mecanismos correspondientes para dar cumplimiento al mandato judicial de constituir una comisión de investigación para la verdad y la justicia, en el caso Iguala, violando con ello los derechos humanos de las víctimas.

7. El plan de investigación penal no constituye un plan estratégico institucional y presenta una serie de inconsistencias y aspectos que van desde la prevención social del delito, la estadística, los diagnósticos cuyas funciones ya realizan otras instituciones como el Inegi, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y en donde como pone como potestativa la consideración de los análisis y diagnósticos.

8. No señala qué pasará con el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

9. No hay elementos objetivos que nos permitan sostener que el próximo fiscal general sea verdaderamente autónomo e independiente ni desde la lógica de su autonomía e independencia política.

10. No es congruente con la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas.

Por estas razones técnico-jurídicas que no fueron atendidas, el Grupo Parlamentario del PRD votará en contra del presente dictamen. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Con su venia, señor presidente. Señoras legisladoras y legisladores. La autonomía del sistema de procuración de justicia es una demanda histórica en nuestro país, dado que su dependencia al Poder Ejecutivo ha generado una aplicación selectiva y discrecional de la justicia, al tiempo que no ha contribuido a los índices de impunidad que imperan en los principales delitos.

Prueba de la resistencia de contar con una fiscalía plenamente autónoma fue el episodio conocido como el pase automático de procurador a fiscal, que hubiera permitido imponer durante nueve años a un fiscal carnal vinculado a un partido político, y que esta intentona fue detenida en diciembre de 2017 gracias a la presión de la sociedad civil y distintas fuerzas de oposición logrando aprobar una reforma constitucional que canceló la posibilidad de este paso automático.

En enero de 2018 un grupo de 302 organizaciones de la sociedad civil, así como colectivos de víctimas presentaron a las Cámaras del Congreso de la Unión una propuesta de reforma constitucional para fortalecer la autonomía de la Fiscalía General de la República en particular para afinar el proceso de designación de este servidor público, favoreciendo una mayor apertura y una mayor participación de la sociedad civil.

Dicha propuesta fue impulsada por la campaña Fiscalía que Sirva. Estas organizaciones hicieron un llamado al Congreso de la Unión para atender la exigencia ciudadana de tener una fiscalía independiente, autónoma y eficaz.

La impunidad y la injusticia han lacerado durante décadas a los mexicanos. Las cifras en estos temas son vergonzosas y poco alentadoras. Nuestro país ocupa el cuarto lugar, mayor a nivel mundial en corrupción. El número uno en el continente americano, y la impunidad en México es del 99.3 por ciento. No se investigan los delitos ni se cuenta con los jueces ni policías suficientes.

Actualmente existe un déficit de 120 mil policías locales. En consecuencia, nuestro sistema de procuración e impartición de justicia está colapsado en 26 de 32 estados.

En Movimiento Ciudadano estamos conscientes de la urgencia de dar respuesta a las miles de familias que hasta hoy no han encontrado justicia.

Sin embargo, siempre hemos sostenido, al igual que los colectivos de la sociedad civil, que el punto de partida para tener resultados que espera la sociedad es un marco jurídico que garantice plena autonomía a la Fiscalía

General y a las fiscalías especializadas, y que este debe ser a partir de la reforma al artículo 102 constitucional, que además serviría como marco general para adecuar las legislaciones locales.

El país requiere una fiscalía ajena a la lógica partidista. Esto es, crear una fiscalía que investigue, que persiga y que esté libre de la influencia de los políticos y los poderosos, cuyo titular sea una persona competente y no un aliado político del gobierno en turno, una fiscalía donde el personal esté debidamente formado y capacitado, con presupuesto suficiente y les rinda cuentas a los ciudadanos.

Por supuesto que necesitamos ponerle alto a los casos de impunidad como Odebrecht, la casa blanca, Ayotzinapa, entre otros. Pero no podemos estar de acuerdo en aprobar una ley con serias inconsistencias orgánicas y estructurales que no atiende a las propuestas y observaciones de la sociedad civil, más aún que durante el proceso legislativo de la Comisión de Justicia, estos fueron resultados de un ejercicio de participación ciudadana y parlamento abierto que pareciera que para la mayoría legislativa fue una simulación, y que también para la mayoría es sencillo ignorar nuevamente las opiniones de los demás grupos parlamentarios.

Por eso votaremos en contra, porque no podemos ignorar que esta ley omita a las víctimas, menosprecie la importancia de los servicios periciales u omita a la policía ministerial en la estructura de la fiscalía.

No podemos ser omisos en permitir un fiscal general sin requisitos de experiencia y capacidad en la materia o sin plasmar las causas graves para poder destituirlo sin considerar una fiscalía especializada en temas tan trascendentes como los feminicidios o la extinción de dominio.

El que una figura como el coordinador general tenga atribuciones iguales y parecidas a la del fiscal, y no tener un proceso de selección en donde se inmiscuya a la sociedad civil y al Senado.

Lo decimos de forma clara y congruente: seguiremos apoyando sin sumisión lo que el país y los ciudadanos nos demandan, lo que en esta lógica de hacer lo correcto y la responsabilidad que tengamos que hacer.

Y seguiremos impulsando la participación ciudadana y el parlamento abierto como eje fundamental de nuestras decisiones, pero con el ejercicio pleno de las facultades revisoras de esta soberanía, no seremos una cámara de obediencia.

Por eso reafirmamos que en esta ocasión votaremos en contra de dicha ley, y si en el futuro se abre un verdadero diálogo sin simulaciones y sin hipocresías, estaremos dispuestos, los de Movimiento Ciudadano, a entrarle a buscar lograr una fiscalía autónoma que le dé respuesta a los ciudadanos y que no tengamos un fiscal a modo como se intenta implementar en este momento. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Ana Ruth García Grande, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Ana Ruth García Grande: Muy buenos días tengan todos y todas ustedes, señores diputados y diputadas. Nuevamente haciendo uso de la tribuna, lo que me representa un alto honor, y antes de proceder a fijar el posicionamiento del Partido del Trabajo, quiero expresar un saludo con mucho afecto a mis electores de Baja California Sur, nuevamente, no me cansaré de darle las gracias de darme esta magnífica oportunidad.

Con el permiso de la Presidencia, saludando desde luego a toda la Mesa Directiva, procedo a formalizar la posición del grupo parlamentario con respecto al dictamen que se nos presenta esta mañana por parte de la Comisión de Justicia, por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Iniciaré diciendo que la democracia se construye en el disenso, que luego entonces respetamos todos los posicionamientos que se viertan en esta honorable soberanía, pero por lo que hace al Partido del Trabajo, no escapa como fundamentación el hecho de que el lunes 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial la reforma a diversas disposiciones de nuestra Constitución Política, en particular, en el transitorio décimo sexto, lo referente a la designación del fiscal general de la República.

En cuatro años 10 meses no fue posible designar un fiscal general, porque en el Senado de la República las fuerzas políticas de la anterior integración de esa legislatura no se pusieron de acuerdo.

Tampoco fue posible designar al fiscal Anticorrupción y solo se logró acuerdo para el nombramiento del fiscal de Delitos Electorales, mismo que posteriormente fue cesado por el anterior encargado del despacho.

Este Congreso de la Unión tiene la alta e ineludible responsabilidad de dotar a la sociedad mexicana que está sedienta de justicia, de una Ley de la Fiscalía General de la República para que se materialice una adecuada persecución de delitos, ya del orden federal y en su caso los del fuero común donde hay conexidad entre ambos.

Es muy importante que superemos los esquemas de las leyes orgánicas de las procuradurías anteriores, porque sencillamente mostraron ineficiencia en este marco normativo. Es indiscutible y un hecho del que todos los días damos cuenta, cómo la delincuencia organizada se ensañó del país sin que estas instituciones de procuración de justicia pudieran combatirlas eficazmente.

Desde luego sabemos que en el círculo virtuoso del diseño de las leyes e inacabado, el constructo normativo se aprueba, se aplica y dependiendo de su eficacia o ineficacia puede perfeccionarse. En esta ocasión votaremos a favor del proyecto, porque consideramos que no podemos anticipar una visión de lo que este diseño pueda dar como resultado, y sin embargo tenemos conciencia que nuestro México debe dotarse de las instituciones y de los reglamentos necesarios para que estas le den resultado.

Partimos de que las instituciones son el rostro más tangible de la democracia y por lo que hace a las que procuran justicia, estamos en evidente falta con nuestro pueblo mexicano.

En el caso de la Fiscalía Especializada en materia de derechos humanos que se prevé en este dictamen, la misma será competente en el caso de comisión de delitos en materia de trata de personas, agresiones a periodistas, desaparición de personas, entre otros que se encuentran previstos en las leyes de la materia que corresponde.

También el dictamen prevé la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, un tema en el que todos coincidimos que también México, y nosotros como sus representantes, debemos ponernos las pilas.

La Fiscalía Especializada en delitos electorales será competente para conocer y resolver sobre la comisión de estas conductas previstas en la Ley General de Delitos Electorales.

Es importante también mencionar que el dictamen prevé sanciones a quien, abusando de su relación jerárquica o influencia en determinados sectores, fuerzan la voluntad de los votantes. Por eso creemos que sí le aporta ese dictamen a lo que la realidad en México hoy día nos está exigiendo.

Compañeras y compañeros legisladores, la fiscalía que se crea mediante la ley que aprobaremos será un órgano constitucional autónomo en su aspecto formal, porque así lo dispone el artículo 102 constitucional. Y, en el material, porque el titular de la misma deberá sujetar su actuación estrictamente al marco normativo que la rige, para evitar órdenes o instrucciones en la procuración de justicia.

Y aquí estaremos como soberanía del país, en su caso, y hago votos porque no suceda, para señalar cualquier exceso o defecto de esta normatividad. Los tiempos en que el Ministerio Público...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, señora diputada, quiere usted hacer un fin.

La diputada Ana Ruth García Grande: –Enseguida termino, presidente–. ...actuaba bajo el principio de que un vaso de agua y un auto de formal prisión no se negaban a nadie, tienen que proscribirse. Nuestro México tiene que avanzar, no podemos ser un obstáculo para que los mexicanos obtengan procuración de justicia bajo principios de debido proceso y de tutela judicial efectiva.

Exhortamos en el Partido del Trabajo para que con esa visión de compromiso y para no seguir siendo ese obstáculo que ya mencioné, vayamos todos a aprobar este dictamen y sobre la marcha vayamos...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor.

La diputada Ana Ruth García Grande: ...constatando sus virtudes. Muchas gracias, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina: Con su venia, presidente. En 2014 este Congreso de la Unión aprobó una de las reformas más trascendentales en la época moderna de nuestro país, conocida como la reforma política electoral. Tuvo a bien el reconfigurar el Ministerio Público y la creación de la Fiscalía General de la República, dotándola de autonomía para la procuración de justicia eficaz y efectiva.

Sin embargo, a más de cuatro años de haber logrado un gran avance en materia de justicia, no hemos dado las herramientas para que el fiscal pueda cumplir con las tareas y demandas de la sociedad.

Cabe señalar que, a diciembre de 2018, el Senado no ha nombrado al titular de esta tan importante dependencia. Además, no quiero dejar de mencionar que la anterior administración no tuvo en su último año a un procurador general de la República ni a un fiscal especializado para la atención de delitos electorales.

El primero presentó su renuncia dejando el cargo de dicha institución a un encargado de despacho, limitando su actuación. Y el segundo, por una decisión controversial.

Por lo anterior, esta legislatura debe poner punto final a los conflictos partidarios y unirnos en favor de los mexicanos, para poder consolidar esta reforma expidiendo la ley que tendrá por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de la Fiscalía General de la República, basándose principalmente en los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

De igual forma, que contemple las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la fiscalía y el desarrollo profesional de los mismos, buscando con ello que quienes ejecuten medidas de protección a las víctimas sean las adecuadas a las necesidades de estos, así como atender a la ineficacia y la falta de profesionalización de quienes investigan y persiguen los delitos.

En un sistema verdaderamente democrático se debe contar con una autoridad fuerte, autónoma e imparcial, alejada de toda influencia y presión, por lo que esta ley cumple con lo establecido por la Constitución.

En Encuentro Social estamos a favor de contar con un aparato de justicia que realice sus funciones con plena autonomía y que favorezca a la población. Los mexicanos estamos hartos de que la procuración de justicia sea inadecuada y que cuente con actitudes de discreción y manipulación de unos cuantos. Necesitamos un marco legal que haga que se respete el debido proceso.

Legisladores y legisladoras, es momento de dar paso final a la implementación de un sistema de procuración de justicia capaz de cumplir con las exigencias de la sociedad, cortando de tajo a la impunidad y a la corrupción que tanto ha dañado a México.

Un sistema de procuración de justicia profesional y moderna que realice las investigaciones y responda a los reclamos de las víctimas, así como de los grupos vulnerables, con decisiones basadas en hechos, estudios de manera imparcial y objetiva.

El Grupo Parlamentario de Encuentro Social votará en lo general a favor del presente dictamen, pues consideramos que la ley que aquí se nos presenta otorga los suficientes instrumentos para que exista por fin en nuestro país una verdadera procuración de justicia. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Con su venia, diputado presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Partamos el día de hoy de las realidades con las que nos estamos confrontando y que son de dos simulaciones más del grupo parlamentario mayoritario.

A ver, se prometió una Fiscalía autónoma y se dijo que en ejercicio de parlamento abierto se escucharía a la sociedad. La minuta que se pone a consideración del pleno el día de hoy no cumple con ninguna de estas dos premisas.

Para que fuera una Fiscalía autónoma, compañeras y compañeros, y que el fiscal no fuera designado como un fiscal carnal que tanto se criticó por la sociedad, tendríamos que ir, como ya se dijo aquí, a la reforma al artículo 102 constitucional para poder cambiar la manera, como ya lo dije, de designar y de remover al fiscal y que ya no sea una discrecionalidad del titular del Poder Ejecutivo.

Y para que el ejercicio de parlamento abierto hubiera sido real, tendríamos que haber tomado en consideración lo dicho por las organizaciones que vinieron aquí a platicar con nosotros.

Aprovecho este momento para hacer, por parte de mi partido, el Revolucionario Institucional, un amplio reconocimiento a todas aquellas personas y organizaciones que atendieron la invitación de la Comisión de Justicia y vinieron a darnos sus opiniones. Lamentamos profundamente que no hayan sido tomadas en consideración.

Quiero dejar muy claro que, a nuestro juicio, esta Fiscalía propuesta no es el modelo que nuestro país requiere y que nuestro país merece. Desde los requisitos que se están enumerando, que no garantiza que sea el mejor perfil a la creación de una figura de coordinador general que en los hechos representa un vicefiscal que tendrá las facultades de fiscal, más no su proceso de selección.

Se pierde también lo ganado en el tema de visibilizar los delitos que más laceran a la sociedad, al suprimir fiscalías especializadas en materia de delitos cometidos contra las mujeres, el secuestro, la trata de personas, entre otras, y no se adjunta un presupuesto ni un calendario que nos diga cuánto costará esta Fiscalía ni en cuanto tiempo transitaremos de una a otra.

No tiene una unidad de atención a las víctimas del delito, aun cuando se les prometió en campaña un lugar central en los procedimientos penales. Y como ya también se ha dicho, no tiene una policía especializada.

Podría yo seguir enumerando los faltantes, pero solo quiero decir y reiterar que esta Fiscalía propuesta no solventa los vicios que le han sido imputados a la actual Procuraduría General de la República.

Pero si aun con todo lo dicho, compañeras y compañeros, la mayoría insiste en aprobar esta Ley de la Fiscalía como viene, sabedores como lo somos de que la procuración de justicia es una de las demandas más sentidas de nuestra sociedad, y sabedores también de que el nuevo gobierno tiene el derecho a organizarse como lo crea conveniente para afrontar sus responsabilidades constitucionales.

El PRI no será impedimento para que se nombre a un fiscal que en teoría logre bajar los índices de violencia e impunidad, que, como creo ya ha quedado demostrado, compañeras y compañeros, no bastan los buenos deseos ni las buenas intenciones para lograrlo.

El primero de diciembre ya fue y vino y la violencia en el país no solo no ha bajado o descendido, sino que se sigue incrementando. Para muestra pondría yo a mi querido estado de Tamaulipas.

Es su responsabilidad, del nuevo gobierno, pacificar al país y esperamos –de corazón se los digo, eh– no tener que subir a esta tribuna a decirles: les dijimos que este modelo de Fiscalía no es el que nuestro querido México necesita. Es cuanto, diputado presidente. Gracias por su atención.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos. Ah, perdón, es que aquí pusieron una raya adicional. Tiene la palabra, con una disculpa mía, la diputada Pilar Ortega.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Gracias. Con su permiso, presidente. Señoras y señores legisladores. La reforma constitucional de 2014 en materia político-electoral trajo consigo una reforma al artículo 102 constitucional, por la que se crea la Fiscalía General de la República como órgano constitucional dotado de plena autonomía.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, dotar de autonomía al Ministerio Público fue una bandera impulsada por décadas, lo que se pretendía era buscar que el órgano responsable de la procuración de justicia en el país no respondiera a factores políticos, no tuviera una sujeción al Poder Ejecutivo, tuviera plena independencia y pudiera, a partir de ello, procurar justicia para todos los mexicanos.

Generar investigaciones de delitos que fueran suficientes para formar convicción en un tribunal y con ello llevar a los delincuentes a la cárcel, impartir justicia, ésa era la finalidad.

Lamentablemente con la reforma también se establecieron una serie de transitorios y disposiciones en el texto del propio artículo 102, que lejos de fortalecer la creación de un nuevo órgano autónomo derivaron en la imposibilidad de transitar a su puesta en marcha y es que hay que decirlo, el artículo 102 constitucional previó la construcción de un órgano autónomo, pero no previó mecanismos adecuados.

Por ejemplo, para su nombramiento. Cuando el nombramiento debería estar a cargo del Senado, se establecieron unas cláusulas en donde en los hechos está todavía sujeto a una validación del titular del Ejecutivo.

La remoción es otro ejemplo. La remoción queda sujeta al titular del Ejecutivo aun cuando puede ser objetada por el Senado; esta objeción se estableció de manera muy débil.

El perfil del fiscal, muy acotado. El perfil que hoy establece la Constitución para los que serán fiscales o las que serán fiscales, pues es muy reducido, en fin. No brinda garantías de funcionamiento que fue el motor de la reforma.

Es decir, este órgano autónomo, construido como está hoy en el 102, no es el órgano autónomo que debe responder a las demandas del nuevo sistema penal acusatorio. Querer imponer la técnica y el derecho en la investigación, que no use a la policía ministerial como instrumento de poder y persecución política, sino como órgano de investigación para sostener las causas penales en juicio.

Que privilegie la investigación científica en la actuación autónoma de los servicios periciales, que destierre la corrupción que lamentablemente permea en su organización, que se aleja de la dependencia del Poder Ejecutivo y deje de ser su subordinado, que sea coadyuvante, eficaz en la lucha contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia. Ese no es el modelo que hoy se aprobará.

Es que las reformas legislativas siempre son perfectibles, lo importante es reconocer estas falencias y reemprender el camino. Por eso desde hace más de dos años Acción Nacional y una serie de organizaciones de la sociedad civil han levantado la voz para destacar la necesidad que tenemos de reformar el artículo 102, y corregir estas fallas de origen.

Hoy, lejos de atender este llamado, y hoy, cuando se puede tener mayorías que pudieran simplificar el proceso legislativo, no se ha podido construir el mismo. Se ha rechazado trazar el camino para una reforma constitucional y nos están entregando una reforma que tampoco ha sido puesta a discusión de los legisladores, tan solo ha sido producto de la nueva mayoría que se impone en la Cámara por encima de todo, por encima de razones y argumentos.

Hoy, debido a estas fallas que además tiene esta ley que se traducen, por ejemplo, en un plan de persecución penal que no establece prioridades y líneas de desarrollo dentro de la ley de las actividades de la fiscalía general, de una coordinación general con enormes facultades que no tendrá control parlamentario, de la eliminación de las fiscalías sustantivas para la persecución de delincuencia organizada, trata, secuestro; de la independencia de los servicios periciales, a lo que se hizo caso omiso; de la imposibilidad de establecer faltas graves para el caso de la remoción de los funcionarios de la fiscalía, es que Acción Nacional votará en contra.

Hoy, lo que nosotros tenemos que hacer como órgano legislativo no es responder a otro Poder, sino responder a nuestra obligación...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, vaya a un fin, compañera.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez: –Termino, presidente–. ...como órgano legislativo tenemos la obligación de generar las mejores leyes, los mejores instrumentos legislativos al servicio de la sociedad.

Hoy ante la negativa de escuchar ninguna voz, ya se dijo aquí que la sociedad civil estuvo en un ejercicio muy interesante en donde se generaron muchas ideas, pero las cuales se tiraron al bote de la basura...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez: ...porque no se aceptó ninguna. Es por ello, reitero, presidente, y con esto concluyo, que hoy votaremos en contra de este dictamen relativo a la minuta con la que no se genera ningún cambio, y es necesario...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañera. Creo que se ha extendido.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez:... mejorarlo. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Rubén Cayetano García: Con su venia, diputado presidente Porfirio Muñoz Ledo. Diputadas y diputados, las víctimas y ofendidos que en este país son millones, lo que buscan es justicia. Mientras se concede, merecen un trato solidario que les ayude a recuperar la dignidad humana.

A ellas, a las víctimas, les duele el desdén y el olvido de sus carpetas de investigación causas penales o carpetas judiciales, de cuyos casos jamás son resueltos.

Esa desatención es la extinta esperanza para obtener ese bien jurídico que todo Estado democrático de derecho debe conceder y que es la justicia.

Lo anterior significa que deben existir en México constancias oficiales contundentes para sostener una acusación ante un juez de conducir a jueces a dictar, sin titubeos, un auto de vinculación a proceso, impedir que un delincuente salga de la cárcel, y esto significa obtener una sentencia condenatoria que sea jurídicamente irrevocable y no conceder un caso más de impunidad.

Para lograr todo esto se requiere un Ministerio Público sensible y profesional, obteniendo informes y testimonios fehacientes, coordinado con policías y peritos, cuyas actuaciones infalibles se sostengan en la verdad y no en la fabricación de delitos a través de viejas prácticas como la tortura para consignar chivos expiatorios y acceder al peor escenario que es encarcelar a inocentes.

La cabeza de todo este propósito debe ser un experto en derecho, mujer u hombre ese que debe, ese que nos hace falta y que aquí se regatea bajo leguleyos argumentos políticos ausentes de un verdadero debate e interés por la justicia.

Quienes dudan de la posibilidad de encontrar al *bonus vir ius dicendi peritus,* que se refiere al abogado virtuoso para decir el derecho, es porque han perdido toda esperanza en la justicia y prefieren allanarse con mezquindad al fracaso, a ellos les haremos saber que México es cuna de grandes juristas, que las víctimas tendrán un abogado y que se fortalecerá el Estado derecho.

Vergüenza debería darles por intentar distraer el legítimo objetivo, de constituir una institución nueva que recupere la credibilidad ante el pueblo de México como debe ser la Fiscalía General de la República.

Que quede claro, tenemos en nuestras manos, y así lo asumimos hoy, la posibilidad de dar vida a la institución encargada de hacer valer lo dispuesto por los artículos 19, 20 y 21 constitucionales, y ustedes, el PRI y el PAN, en su oportunidad, los soslayaron.

Vienen a cuestionar que a la ley discutida le hace falta esto o aquello, bajo argumentos absurdos, como el que no se establece un trato humano a las víctimas, cuando esos derechos se encuentran establecidos con

meridiana claridad en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tanto para las víctimas como para los ofendidos.

Vale la pena precisarles que la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República no es una norma sustantiva y ni adjetiva del derecho penal, de fondo o procesal, como sí lo son los códigos penal y el de procedimientos. Esta es una norma administrativa que regulará la vida interna de la institución postergada y postrada ante la delincuencia. Y no vamos a caer en la provocación absurda de rebajar los derechos de las víctimas u ofendidos a una norma inferior.

Que quede claro, desde Morena pugnamos para incrementar y respetar los derechos de las víctimas en lugar de menoscabarlos. Además, no debemos olvidar que es el Ministerio Público y no el fiscal general el principal operador del sistema penal mexicano por la carga constitucional de probar la culpabilidad del infractor de la ley y cubrir totalmente el principio de presunción de inocencia que establece el artículo 21 constitucional. Todo lo cual queda intocado para bien del derecho punitivo.

Cuidado con los falsos debates, como el del fiscal carnal que quisieron crear. Más allá de esta tribuna y del Canal del Congreso, hay una sociedad expectante, una ciudadanía que no le agradaría que se dilapide su confianza, y una comunidad jurídica experimentada con esperanza de poner en práctica el principal instrumento de la justicia, que es el derecho.

Nosotros vamos a favor. Muera la impunidad. Que vivan los más altos principios de la justicia. Es cuanto. Muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se informa. Por favor, orden en la sala. Se informa que reglamentariamente con esta intervención se acabó el plazo para registrar reservas. Continuará el debate sobre la ley y después las reservas. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada María de los Dolores Padierna Luna

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos a la discusión en lo general. Tiene la palabra la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Partido Encuentro Social. A ver, un momentito, por favor.

Primero son las intervenciones en contra. Tiene la palabra la diputada Carmen Julia Prudencio González, de Movimiento Ciudadano, para hablar en lo general en contra del proyecto.

La diputada Carmen Julia Prudencio González: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, hace cinco años en el marco del análisis y discusión de la minuta de la reforma político-electoral de 2014, que se impulsó la reforma constitucional al artículo 102, mediante la cual se inscribió en nuestra Carta Magna la Fiscalía General de la República, el entonces diputado federal Ricardo Monreal Ávila, en este mismo recinto señaló lo siguiente.

La transformación de la PGR en Fiscalía General de la Nación habría de sacarla de la esfera de influencia del Ejecutivo federal, para darle autonomía, independencia y libertad de gestión. Que se convierta en la instancia imparcial de procuración de justicia y no en la instancia de venganzas políticas del mandatario en turno.

Asimismo, haciendo referencia al procedimiento legislativo, el entonces diputado federal y actual senador de Morena, Ricardo Monreal, desde esta misma tribuna, hace cinco años, refirió que la Cámara de Diputados se había convertido en una oficialía de partes, una oficina de trámites y la mayoría de sus integrantes en aplaudidores irreflexivos y condescendientes de los dictadores de poder.

Y sobre la iniciativa de fiscalía general señaló lo siguiente: Si el futuro fiscal fuera designado en una primera instancia por un órgano colegiado no partidista, de prestigio académico, gremial y de investigación judicial, podría ser atendible. Pero no será así, la partidocracia designará al nuevo fiscal y el presidente en turno tendrá la facultad de removerlo cuando así lo juzgue conveniente.

Con este diseño bipolar un Poder designará al fiscal y otro podrá destituirlo. Habrá un juego de pelotas entre poderes, un ping-pong político, pero no un mejoramiento de justicia.

Debemos señalar que, como hace cinco años en este proceso legislativo, esta Cámara ha renunciado a su función revisora, pues el pasado 15 de noviembre de 2018 fue aprobado el dictamen de iniciativa de proyecto de decreto por la que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en la Cámara de Senadores. En sesión del 20 de noviembre de este mismo año se recibió como minuta en esta Cámara. Solo unos días después, el 5 de diciembre, fue aprobada por la Comisión de Justicia, sin aceptar ninguna modificación. El 6 de diciembre se agendó el dictamen para declaratoria de publicidad.

La presente minuta carece de condiciones claras. No está a la altura de las exigencias de los ciudadanos mexicanos.

Este dictamen no es menor, el contar con un fiscal general dotado de autonomía con fortaleza orgánica y con una nueva estructura para enfrentar los retos que hoy enfrenta el sistema de justicia mexicano debe ser conquista a favor de la sociedad, en su búsqueda del derecho de acceso a la justicia. Pero las circunstancias del actual diseño constitucional de dicha figura, es necesario reflexionar con seriedad si el mismo responde a estas demandas, partiendo de que toda reforma es perfectible y de que esta surgió en el contexto de una reforma de otra naturaleza, es necesario reconocer que la misma requiere ajustes.

Por tales razones Movimiento Ciudadano se pronunciará en contra del presente dictamen, ya que para nosotros no es más que un acto de simulación y permitir la discrecionalidad de las instituciones y ver nuevamente la imposición de un fiscal carnal que velará por los intereses partidistas y con compadrazgo, como se ha realizado en todas las administraciones pasadas. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Tiene la palabra, para hablar en pro, la diputada Rocío Barrera Badillo, de Morena.

La diputada Rocío Barrera Badillo: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, después de largas y fructíferas reuniones de intocables e incansables debates con académicos, especialistas, víctimas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, ha llegado el momento en que podremos transformar a la Procuraduría General de la República en una Fiscalía que sirva.

Contamos ya con un soporte constitucional suficiente y con un proyecto de ley que garantiza un sistema de procuración de justicia, fundado en una institución sólida, fortalecida gracias a las garantías de independencia y autonomía que le fueron otorgadas.

De todos son conocidos los graves problemas de impunidad, corrupción y violación a los derechos humanos que motivaron tan profundo cambio de diseño institucional. Conocemos y reconocemos también el conjunto de esfuerzos que hace más de un lustro han confluido en esta causa, en particular a las personas y organizaciones que integran los colectivos Fiscalía que Sirva y Vamos por Más, a quienes debemos, por ejemplo, la eliminación del llamado pase automático del procurador general de la República.

Hoy discutiremos un proyecto de ley construido sobre la base de la discusión libre y la colaboración. Un proyecto que dejó atrás serias amenazas a la independencia de la institución, como lo era el riesgo latente de tener un fiscal subordinado al Ejecutivo o fiscales que no pudieran defender ante un juez las carpetas que integran.

En esta ley, por ejemplo, no se dejó cabida al fiscal carnal, pero sí se establecieron esquemas de servicio de carrera y de rendición de cuentas que garantizan una estructura profesional y en constante fortalecimiento.

El proyecto que hoy discutimos es fruto de la pluralidad y el diálogo desde el momento de su concepción, recordemos que desde el inicio de agosto los equipos técnicos de los colectivos Fiscalía que Sirva, Vamos por Más, así como académicos de la UNAM y del CIDE trabajaron en su redacción.

Estamos ante la oportunidad, pero sobre todo ante la imperiosa necesidad de superar un esquema de procuraduría que no solo se ha mostrado ineficaz, sino que ha proporcionado impunidad, un esquema en el que la estructura administrativa es 80 por ciento más voluminosa que la operativa. Una estructura que no propiciaba la colaboración intraorgánica, resultado de un número muy bajo de sentencias. Un conjunto de procedimientos que no se acoplaban al sistema de justicia penal acusatorio y adversarial. Un sistema sin servicio profesional de carrera. En suma, un sistema agotado, como lo estuvieron algunos de sus titulares.

Estamos pues, en condiciones de aprobar una minuta que prioriza la estructura operativa sobre la burocrática, establece un modelo flexible de investigación, elimina las malas prácticas y establece un servicio de carrera para todos los miembros de la Fiscalía, cuestiones que redundan en el fortalecimiento de las capacidades de investigación.

Bajo el esquema de procuraduría, la efectividad de las investigaciones es casi nula. Por ejemplo, en los últimos ocho años, la dependencia inició la investigación de 400 homicidios en el país, pero en este mismo plazo solo cerró dos casos con sentencias condenatorias.

Por ello, es necesario un plan de persecución penal que defina los criterios de actuación para la ejecución de la acción penal y delimite sus políticas de persecución, adoptando una política criminal que identifique los problemas, priorice su atención, establezca una estrategia para atenderlos con las herramientas disponibles y emita lineamientos de actuación institucional.

Por ejemplo, muchas de las reservas se refieren a la figura de coordinación general establecida de manera principal en el artículo 20. La figura de la coordinación general es especialmente interesante, pues entre sus funciones está el evitar la fragmentación de las investigaciones, así como suplir al fiscal general de la República en sus ausencias y representarlo en las relaciones interinstitucionales con otras entidades u órganos de gobierno, por lo que se deben tener facultades muy similares a las del fiscal general.

La crítica es un conjunto de facultades que se le confieren, pero la propuesta no se refiere a dichas facultades sino a la nomenclatura de dicha figura.

¿Cuál es el núcleo constructivo de esta propuesta? ¿Es válida la crítica si las modificaciones no atienden a lo señalado o estamos acaso ante una táctica dilatoria?

Finalmente, debe señalarse que el esquema de transición de la ley se desprende observando tres principios rectores: planeación, gradualidad y orden, permitiendo en todo momento la participación y vigilancia ciudadana, y buscará favorecer ejercicios reales de apertura gubernamental en el proceso de diseño de la nueva institución.

Avancemos hacia una Fiscalía que sirva, es urgente y hoy es nuestra responsabilidad. Los insto a aprobar la minuta que cuenta ya con un entramado jurídico y adecuado. Estamos a la altura de lo que nos están exigiendo los ciudadanos. Por ello, les pido que voten a favor. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Tiene la palabra, para hablar en contra, el diputado Marco Antonio Adame Castillo, de Acción Nacional.

El diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, presidenta. Con su permiso.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Marco Antonio Adame Castillo: Legisladoras, legisladores, estoy seguro de que no hay en este pleno un solo legislador o legisladora que no esté interesado en alcanzar un sistema de justicia donde brille la objetividad, la eficacia y la independencia. Un sistema que garantice el Estado de derecho y no la impunidad, como sucede actualmente, cuando más del 94 por ciento de los delitos no alcanzan una sentencia.

También creo que somos sensibles al dolor de la injusticia. Probablemente no exista un campo de la actividad humana donde se acumule tanto dolor evitable como en la injusticia por derechos conculcados, doble victimización e impunidad.

También creo que hemos escuchado las voces que se han levantado en demanda de justicia y a favor de las víctimas, y que hoy son clamor. Y también pienso que sabemos que la verdadera paz es fruto de la justicia, del imperio del Estado de derecho.

Por ello, la discusión de este dictamen es un asunto de la mayor importancia. Para los legisladores de Acción Nacional es un tema central, porque representa una demanda sentida de la sociedad que exige una respuesta eficaz y adecuada. También porque el nuevo sistema de justicia penal, el acusatorio adversarial, requiere de

una Fiscalía que sirva, una Fiscalía autónoma que garantice el derecho humano y constitucional a la justicia, que investigue y que consigne con independencia.

Compañeras, compañeros, no nos engañemos, no es la amnistía como dádiva, como discurso o posición discrecional la que va a resolver el problema de la injusticia, la demanda de justicia. Y no lo es, porque lo que requiere México es un sistema de justicia, no decisiones discrecionales y metaconstitucionales.

No se trata, pues, de una decisión más sobre un órgano de la administración pública federal, tampoco de un nombramiento más. Se trata de garantizar una Fiscalía que sirva y que garantice con su autonomía la independencia y la eficacia que demanda la sociedad.

Por ello, es una grave omisión y se falta a la verdad cuando se afirma que se han escuchado a todas las voces. No, ha habido oídos sordos, ha habido cerrazón, ha habido negativa a escuchar propuestas de organizaciones sociales, de colectivos en favor de las víctimas y de legisladores de distintos partidos políticos.

No se ha escuchado tampoco la experiencia y la voz, por ejemplo, del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que sostiene que debe haber garantías para una Fiscalía totalmente autónoma con independencia de quienes están al frente del gobierno.

Tampoco se ha escuchado a Naciones Unidas, cuando el relator especial ha exigido a autoridades mexicanas asegurar independencia a la Fiscalía General de la República mediante el nombramiento de un fiscal general sin vínculos partidistas y con amplio reconocimiento social. Tampoco se ha escuchado la experiencia internacional.

Y es que se trata de investigar y consignar con independencia, dejando lejos a la procuración de justicia del alcance de la mano del poder en turno para no politizar la justicia. No basta decir, compañeras y compañeros, que en un año se revisará la legislación porque esto retarda la justicia, y justicia retardada es justicia denegada.

Los legisladores de Acción Nacional votaremos en contra porque no se ha dado un ejercicio de democracia participativa y deliberativa, porque el parlamento abierto ha quedado en una declaración, en una simulación.

Los legisladores del PAN votaremos en contra de este dictamen porque no garantiza justicia pronta y expedita. Votaremos como exige la población y la Constitución. Justicia pronta, expedita y gratuita, y una fiscalía que sirva. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Partido Encuentro Social, para hablar en pro.

La diputada Nayeli Salvatori Bojalil: Con su venia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Nayeli Salvatori Bojalil: En días pasados el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Con esto se aprobó la ley para reglamentar la organización de este órgano público autónomo y que sustituirá a la Procuraduría General de la República.

De entrada ya es ganancia, ¿o no les parece, compañeras y compañeros? Seguramente algunas voces como las del PAN o las del PRI dirán que no, pero eso es natural, es normal y ya lo esperábamos.

Muchos años les sirvió como un instrumento de poder para atacar a sus adversarios, si no, pregúntenle a Ricardo Anaya. Pero ya se les acabó su instrumento de presión política, ya se les acabó tener un procurador a modo.

Con esta fiscalía que gozará de autonomía tanto en su funcionamiento como en su presupuesto, tendrá a su cargo procurar una justicia eficaz y el acceso a la reparación integral de los daños y las víctimas también podrán

solicitar a la fiscalía que se atraiga su caso, pero sobre todo esta fiscalía actuará con legalidad y respeto a los derechos tanto de la víctima como del acusado.

Pero déjenme quitarles a mis compañeros del PAN y del PRI uno de sus argumentos en contra. Lo voy a decir despacio y claro para que lo entiendan, no es un fiscal ni a modo y menos aún un fiscal carnal. Dejen de confundirse y tratar de confundir a la opinión pública. Sean responsables. Ya lo dijeron sus pares en la discusión en el Senado, pero no les funcionó.

¿Saben por qué? Es muy simple, será el Senado de la República el encargado de designar al fiscal general, no será el presidente López Obrador el que lo designará, como ustedes lo han sostenido con sus cartelitos, que por cierto ya no manden a hacer tantos porque le hacen un daño al planeta con tanta tala, eh.

Pero, por si fuera poco, permítanme decirles algunos otros beneficios de esta fiscalía:

Primero. No se trata de una dependencia más del gobierno federal.

Segundo. Además de la fiscalía general habrá cuatro fiscalías más que son: derechos humanos, delitos electorales –que el PAN para eso se pinta solo– combate a la corrupción y asuntos internos.

Tercero. No contará con subprocuradurías ni con vicefiscalías.

Cuarto. Contará con una estructura orgánica mucho más sencilla y no tan amplia como lo tiene la actual Procuraduría General de la República.

Quinto. Se establece que, a partir de siguiente año al nombramiento del fiscal general, este deberá realizar una convocatoria pública para la revisión del marco constitucional y jurídico de la Fiscalía General de la República.

Argumentos los tenemos, diputadas y diputados de todas las fracciones. Estamos en un momento histórico, estamos en una manera distinta de hacer política y de hacer bien las cosas, aunque les cueste trabajo.

Hoy deben votar a favor, como lo hará nuestra fracción parlamentaria, porque estamos convencidos de que va a haber una verdadera Fiscalía General de la República.

No se vayan a confundir más, ya vivieron muchos años confundidos. Están a tiempo de hacer lo adecuado y están del lado correcto de la historia. Bienvenidos. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Para hablar en lo general en contra, la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del PRD.

La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la construcción de la democracia mexicana siempre ha tenido como obstáculo las tentaciones autoritarias de los gobernantes del país.

No obstante, en los últimos 20 años, con el esfuerzo de distintas fuerzas políticas, entre las que destaca el Partido de la Revolución Democrática, se han edificado instituciones autónomas para generar equilibrios entre los Poderes.

En principio, la autonomía implica independencia administrativa y financiera de las instituciones, lo que permite que dichos entes puedan llevar a cabo sus funciones sin subordinarse a ningún otro poder público.

Por ello, la ruta que ha seguido el país con la creación de este tipo de instituciones ha servido para mermar el férreo autoritarismo que se vivió a mediados del siglo XX.

Históricamente el Ejecutivo es quien ha buscado los mecanismos para concentrar el poder. Por ello, la figura del presidente de la República se transformó, en su momento, en una figura poderosa a partir del que giraba

todo el sistema político, dinámica que comenzó a transformarse a razón de la creación desde hace dos décadas de los órganos constitucionales autónomos.

Dichos órganos, sin embargo, no están exentos de ser subordinados el Ejecutivo federal a través de la imposición de sus integrantes. El control de los recursos públicos o políticamente, por lo que su simple existencia no garantiza un contrapeso al poder político, para eso estamos las y los diputados de esta honorable Cámara, quienes debemos legislar para establecer de manera precisa las funciones, atribuciones y mecanismos bajo los cuales operará una institución autónoma.

En el caso de la Fiscalía General de la República, esta requiere gozar de plena autonomía para afrontar los retos en materia de impartición de justicia que enfrenta el país, cumpliendo para ello, con los principios de legalidad, independencia y objetividad. Además, la Fiscalía debe ser firme para investigar los delitos cometidos no solo por los ciudadanos o grupos criminales, sino también para investigar los delitos cometidos por los servidores públicos. No debe ser una extensión más del Poder Ejecutivo, sino por el contrario, debe garantizar la procuración de justicia.

La Fiscalía requiere una reconstrucción en su modelo para no seguir operando con las prácticas que con anterioridad venía funcionando, en donde la corrupción y la impunidad reinaban por encima de garantizar justicia para todos los mexicanos.

Para ello es importante que sea efectiva la autonomía de dicha institución, pues de no ser así, la Fiscalía será solo un ornamento institucional más del país.

La autonomía de la fiscalía nace desde el nombramiento de fiscal general de la República, mismo que se debe dar bajo en la evaluación de perfiles idóneos que cumplan con las responsabilidades que el cargo demanda y por la venía de un grupo político.

Debe ser una persona imparcial emanada del equilibrio entre los Poderes que genere contrapesos y que se mantenga al margen de los intereses particulares de grupos políticos. Para cumplir con lo anterior el perfil del titular y su proceso de designación también debe de ir acompañado del consenso generalizado de la ciudadanía.

Hoy su nombramiento está en debate no solo por parte de grupos políticos, sino por un amplio número de organizaciones civiles y ciudadanos que nos exigen exista una Fiscalía que sea eficiente y eficaz en la materia.

En el caso del nombramiento del fiscal general de la República por parte del Poder Ejecutivo, como lo establece hasta hoy la normatividad, implica un nombramiento a modo, que bien puede ser interpretado como un mecanismo a través del cual el presidente de la República puede resguardarse ante cualquier acto que viole o irrumpa la institucionalidad del país, o en el peor de los casos como un mecanismo de control político en contra de grupos opositores.

Por ello, la bancada parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática propone que el fiscal sea realmente autónomo y su nombramiento no quede sujeto a la figura del presidente, ya que ello implicaría poner en riesgo la autonomía del organismo, por lo que proponemos se analice el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de designación del fiscal general de la República. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, para hablar en pro, el diputado Luis Fernando Salazar Fernández, de Morena. Adelante, diputado.

El diputado Luis Fernando Salazar Fernández: Gracias, compañera. Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el diagnóstico no podría ser más claro, nos hemos convertido en un país en el que, ante tanta violencia, delincuencia, impunidad, hemos optado por dejar de sentir para poder sobrevivir.

Nos hemos convertido en un país en el que las noticias de homicidios, de fosas clandestinas, de familiares buscando a sus hijos o a sus hijas se han convertido en parte de la cotidianeidad de nuestras vidas. Sin duda, muchos son los factores que nos han llevado hasta aquí, sin embargo, hemos de reconocer que la ausencia de

instituciones de justicia capaces de perseguir de manera eficaz los delitos, ha sido uno de los principales motivos.

Tan solo el contraste entre las estadísticas de la Procuraduría General de la República respecto de denuncias presentadas e investigaciones iniciadas frente a las pocas o casi nulas sentencias condenatorias, hacen evidente que las estructuras, las habilidades y las herramientas no han sido las suficientes.

Fueron esas mismas estadísticas las que desde 2014 nos llevaron a coincidir en la necesidad de replantear el modelo de instituir una Fiscalía con órganos competentes, para dirigir investigaciones, litigar los casos ante los jueces y conseguir sentencias en las que se esclarecieran los hechos y se garantizara la justicia a las víctimas.

Fue en esa reforma constitucional en febrero de 2014, donde las y los compañeros de las bancadas de Acción Nacional y PRD votaron a favor del artículo 102 constitucional. Por ello mi voto será a favor de este dictamen, porque después de cuatro años de omisión legislativa de una reforma constitucional y de años de trabajo y de análisis legislativo, esta Ley Orgánica propone un cambio radical al modelo inoperante de una Procuraduría que ha tenido como resultado el fracaso, la parálisis y el colapso. Una Procuraduría definitivamente desarticulada con la realidad que vive nuestro país.

En su lugar, esta ley instaura un modelo que responde a criterios de flexibilidad y pertinencia para abordar los distintos fenómenos delictivos que aquejan a la sociedad, mediante la posibilidad para integrar unidades multidisciplinarias, conformar equipos de investigación y litigación, o crear comisiones especiales de carácter temporal para dar respuestas adecuadas y diferenciadas a las demandas ciudadanas en cada entidad.

Un modelo que atiende una política de persecución penal, que permita ser más efectivo el trabajo de la Fiscalía por medio de la priorización de problemas y la definición de estrategias con base en la incidencia delictiva de relevancia nacional.

Un modelo cuyo diseño normativo contempla como política la excelencia profesional y el desarrollo integral para la prestación de los servicios que debe brindar la Fiscalía.

Contempla además, con el fin de garantizar que este nuevo diseño no solo signifique un cambio de nombre o de letrero, un proceso planificado y gradual, el cual se llevará a cabo mediante un plan estratégico de transición con procesos de evaluación, de cierre de estructuras existentes y de análisis de riesgos inherentes a las transformaciones que afectan intereses.

Por lo anterior, mi voto será a favor de este dictamen, porque aunado a esto se reconoce la relevancia del acompañamiento de especialistas expertos y, sobre todo, de una ciudadanía que tendrá derecho a ser vigilante en todo momento.

Ciudadanía que también habrá de asistir al análisis de las reformas necesarias a la Constitución a partir de un año de la puesta en marcha de este modelo, que permita valorar qué sirve o qué debe mejorar. Ciudadanía a la que no podemos seguirle negando una ley de la que depende la operatividad de una Fiscalía que resuelva y que verdaderamente sirva.

Una Fiscalía que de manera gradual y paulatina recupere la confianza de quienes se han convencido que presentar una denuncia equivale a perder el tiempo. De quienes han debido padecer el maltrato de personal, intentando armar carpetas de investigación para encontrar a los suyos. De los miles de familiares y amigos que han visto reducidos al anonimato los nombres y las historias de sus seres queridos ante la ausencia de un equipo de expertos, investigadores y litigantes capaces de hacer suyos los casos y honrar, por lo menos, por medio de la verdad, de la reparación integral a cada una de las víctimas de los delitos que se cometen en México. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Para hablar en contra, la diputad Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano, en el uso de la palabra, hasta por cinco minutos.

La diputada Martha Tagle Martínez: Gracias, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Martha Tagle Martínez: Debo decir que me siento muy decepcionada porque aquellos que fueron mis compañeros en la oposición y como minoría, desde el Senado de la República, dimos fuertes batallas para contar con una Fiscalía que sirva.

Estuvimos batallando desde la reforma constitucional y además insistimos e hicimos todo lo posible para evitar que hubiera una Fiscalía a modo. Hoy, hoy que son mayoría utilicen los mismos argumentos de aquellos que se oponían a contar con una Fiscalía que procurara justicia a quienes lo necesitan, que son los ciudadanos.

Y de verdad me decepciona muchísimo porque dentro de sus filas esos compañeros hoy no sé con qué argumentos van a salir para defender que no hay de otra, que se tiene que aprobar, porque en el marco del 102 constitucional no nos queda más que aprobar este diseño a modo de Fiscalía General, que queda muy lejos de ser una Fiscalía que sirva, cuando tuvieron la oportunidad de reformar el artículo 102 constitucional, porque los hubiéramos acompañado desde quienes, en la oposición, en la legislatura anterior hemos estado insistiendo en que lo que hace falta es una Fiscalía que sirva, que pasa por reformar el artículo 102 constitucional para contar, no solamente con un fiscal autónomo, sino con el diseño de una Fiscalía que realmente sirva a los intereses de la ciudadanía y no un cambio de nombre.

Impunidad. Impunidad es la palabra que cruza la violencia que hay en nuestro país y la inseguridad que existe en muchos municipios y comunidades de nuestro país. Impunidad ante la falta de procuración de justicia.

Y ante ello, este dictamen que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General no es una alternativa y mucho menos es la respuesta proporcional a la dimensión y gravedad de la situación que carcome a nuestro país.

Este dictamen, y por consecuencia, la creación de la Fiscalía General de la República, no es una herramienta para alcanzar la justicia transicional ni esa reconciliación nacional de la que tanto se ha hablado.

¿Cómo encontrar la verdad si hay serias deficiencias en torno al nombramiento de la persona que estará al frente de la Fiscalía General y de la figura que habrá de ser el coordinador general si no hay un control antes y después del ejercicio del poder público?

Recordemos que la facultad de control parlamentario, del nombramiento y ratificación de los integrantes de un Poder diferente al Legislativo debe tener como fin asegurar no solo los mejores perfiles en cuanto a méritos académicos y profesional, sino también de autonomía, tanto de intereses políticos como fácticos.

Blindar las decisiones de los órganos legislativos en cuanto a los nombramientos de perfiles especializados en impartición de justicia u otras materias que por su naturaleza requieren de autonomía. Esa es la vía idónea para garantizar el beneficio del interés público frente al particular.

Quizás los legisladores de Morena, que hoy en día son la mayoría, no se han enterado o no se han dado cuenta que en el diseño que estamos por aprobar el día de hoy en la Cámara de Diputados, el fiscal general no será más que una figura decorativa de esa Fiscalía General de la República. Porque en quien recaen las funciones reales de la Fiscalía General de la República es en quien ocupará la Coordinación General.

Y también, no sé si sepan que el único que tendrá que pasar por el filtro de ser nombrado por el Senado de la República es quien ocupe la Fiscalía General, el titular, pero el coordinador general no.

Y, de hecho, el coordinador general ya se encuentra en funciones y es quien realmente va a tener el poder de la Fiscalía General de la República, y eso, compañeros de Morena, se llama simulación.

No, no va a ser un fiscal carnal. Ya hay el nombre de una persona honorable, pero desafortunadamente va a ser un fiscal decorativo. A quien le están dando las facultades por ley en esta iniciativa es al coordinador general.

Y espero que lo hayan leído bien y que se den cuenta de lo que están aprobando, todavía están a tiempo. No de prometer que van a cumplir dentro de un año, como se los han prometido en un transitorio a las organizaciones de la sociedad civil. Están a tiempo hoy porque contarían con una mayoría acompañada desde la oposición para reformar de manera integral el artículo 102 constitucional y atender, desde la ley, algo que la ciudadanía demanda: contar no solamente con una Fiscalía General, sino con fiscalías en los estados que se

dediquen realmente a procurar justicia, a hacer de este derecho de las y los ciudadanos la posibilidad real de procurar justicia y de acabar la impunidad. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, el diputado Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo, para hablar en pro.

El diputado Benjamín Robles Montoya: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, en el PT pensamos que la transformación de México va en el sentido proporcional a la transformación de la Fiscalía General de la República. Si la Fiscalía funciona bien y mejor, el país irá recuperando poco a poco la confianza en sus autoridades.

Sin embargo, el estado de desastre en el que los gobiernos de derecha dejaron a las instituciones de procuración de justicia lleva a afirmar que esta tarea no será fácil. Incluso resulta casi tan complejo como revivir un muerto.

Por eso, este Congreso no pretende con el dictamen hoy puesto a consideración de este Congreso y de la República, no pretende, reitero, solo lavarle el rostro a la PGR. Y menos que todo siga como siempre.

Por el contrario, lo que pretendemos es refundar el organismo y con el debido cuidado institucional abonar a que México cuente con una Fiscalía confiable, autónoma y profesional, a la altura de lo que exigió la ciudadanía en los comicios de julio.

Destaco diversos aspectos, comenzando por este, el debido cuidado institucional.

En los artículos transitorios, compañeras, compañeros, el noveno en particular de este dictamen, se señala que a partir del nombramiento la persona que será elegida como nuevo fiscal general contará con un año para definir una estrategia de transición, es decir, las y los mexicanos pueden estar tranquilos, pues la transformación de este organismo de ninguna manera significará un pretexto para dilatar investigaciones, ni para entorpecer litigios.

Por el contrario, el nuevo fiscal deberá presentar un plan con estrategias detalladas que incluso contemple un inventario de casos en trámite y una estrategia de liquidación de casos en la cual por cierto se señala expresamente que en los casos pendientes relacionados con violaciones graves de derechos humanos o de corrupción no podrán ser liquidados.

Y este es el segundo aspecto importante que voy a resaltar, ningún diseño institucional, compañeras y compañeros, ningún diseño institucional por perfecto que sea puede soportar el pesado lastre de la corrupción, menos aún en el área donde es más trascendente que los elementos estén limpios y los procedimientos sean ejemplares.

Por eso, que a nadie le quepa ninguna duda, en la nueva Fiscalía se debe garantizar la persecución de la corrupción y el abatimiento sin excusa de la impunidad. Y allí que sea indispensable que el titular, en su caso, de la fiscalía especializada en combate a la corrupción rinda cuentas también ante el Senado de la República, tal y como se señala en el documento que estamos debatiendo.

Finalmente, para quienes todavía piensan en tentaciones autoritarias, las que por cierto reinaron durante décadas y nunca los vimos tan preocupados como ahora, se está contemplando que quien desee ser designado en la titularidad de alguna de las fiscalías especializadas, sea valorado, evaluado, bajo la lupa del principio de mérito, es decir, se deberán comprobar antecedentes y trayectoria profesional de las personas candidatas.

Se acabaron los fiscales carnales, los compadres y los cómplices, es decir, aquellos a que en los otros gobiernos que nos tuvieron acostumbrados durante tantos años.

Por todo esto, compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de este dictamen en la conciencia de que se vota por la refundación ordenada del organismo de procuración de justicia en México.

Pero, insisto, que a nadie le quepa duda, tampoco de que esto no es un cheque en blanco. Creo que el PT y López Obrador hemos sido claros en estas consideraciones. La mayor lealtad al proyecto democrático es actuar con honestidad y con un máximo profesionalismo, y ello va para todas y para todos, pero fundamentalmente para quienes estén encabezando la procuración de justicia. La transformación de México es proporcional al avance de la justicia. La transformación de México es proporcional a la restauración de la convivencia leal en todo el territorio.

Concluyo, diputada presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, a ustedes que siguen siendo oposición y que estuvimos juntos en otras legislaturas en el Senado, siguen siendo oposición porque quieren, y yo soy quien tiene más decepción de su actitud. Antes estábamos contra el autoritarismo, la corrupción y la impunidad.

Entiendan, México ya cambió. Lo que siempre hemos creído, los que siempre hemos creído en López Obrador, vamos a seguir apoyando los cambios de la cuarta transformación. Ya es hora de que se sumen todos. Este México cambió a partir del primero de julio.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Para hablar en pro, tiene la palabra el diputado Rubén Moreira Valdez, del PRI.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Es claro que no es la ley que hoy votamos la que merece el país. También sabemos que la pasada legislatura no dio la autonomía que merece la justicia mexicana a la fiscalía que hoy tenemos, y tampoco puso en la ley el perfil de fiscal que debe contenerse. Lo que hoy reformamos no es lo suficiente, pero es lo que se puede a partir del marco constitucional que tenemos.

En el PRI vamos a presentar serias reservas a lo que hoy se va a votar. Entre muchas cosas nos preocupa la desaparición de la Fiscalía para la Persecución de los Crímenes contra Mujeres, Secuestro y Trata de Personas.

Mi bancada, su servidor, votaremos a favor porque no le vamos a regatear al presente gobierno los nombramientos que requiere para cumplir el compromiso de paz.

Hacemos votos porque en los próximos meses, en esta legislatura, se discuta la autonomía de la Fiscalía General de la República. El PRI, nuestro partido, está listo para esa discusión.

Le pedimos a la mayoría que reflexione eso, que discutamos muy pronto sobre cómo tener en la norma constitucional, en el 102, una fiscalía autónoma.

Para mis compañeros y para mí, lo más importante es la paz del país, es la seguridad. Queremos a los narcotraficantes, a los secuestradores, en la cárcel. Por eso hoy vamos a votar a favor en lo general. Gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado. En el uso de la palabra, para hablar en pro, el diputado David Orihuela Nava, de Morena.

El diputado David Orihuela Nava: Con su venia, señora diputada presidenta. Compañero diputados y diputadas, es claro que nuestro país continúa viviendo una crisis en materia de seguridad, que no ha hecho más que incrementar año tras año las alarmantes cifras de feminicidios, los secuestros, desapariciones forzadas, los atentados contra la vida de periodistas, los crímenes de corrupción y lavado de dinero, los constantes descubrimientos de fosas clandestinas en toda la República, son solo algunos de los temas en los que la procuración de justicia en nuestro país tiene enormes deudas con la ciudadanía.

Los mexicanos hemos tenido que lidiar durante años con las omisiones, la ineficiencia e ineptitud de las autoridades que han desfilado como titulares de la PGR, institución que lejos de dar un seguimiento y solución eficaz a sus responsabilidades, se convirtió en un emblema nacional de corrupción, torpeza, cinismo e impunidad.

Cuesta recordar un solo caso en que la Procuraduría haya actuado de manera oportuna, o cuando menos profesional en los últimos sexenios, liderados claro está, por gobiernos priistas y panistas.

Los mexicanos no nos cansaremos de exigir justicia por cada uno de los crímenes que siguen sin correcta resolución.

En Morena somos conscientes de la necesidad urgente de reformar nuestro sistema de procuración de justicia, y estamos convencidos de que la creación de una nueva Fiscalía General será el primer paso firme en nuestro avance hacia asegurar un verdadero Estado de derecho.

Debemos recordar que fue en el 2014 cuando se realizó una reforma constitucional en la que se evidenció la necesidad de crear una Fiscalía que resuelva de manera clara y eficaz el clamor de justicia del pueblo mexicano.

Desde entonces hemos estado discutiendo y construyendo este tema. La minuta que aquí se está presentando es producto de por lo menos 15 meses de diálogo realizadas con integrantes de los colectivos Fiscalía que Sirva y Vamos por Más, además de investigadores de la UNAM y del CIDE.

Hoy, cuatro años después de la mencionada reforma, no podemos aguardar a que la situación de inseguridad y violencia en nuestro país, continúe aumentando, debemos actuar. Y eso es lo que hemos decidido hacer porque México no puede esperar ni un día más.

Es por ello que estamos proponiendo un nuevo órgano independiente del Poder Ejecutivo, con autonomía técnica, cuya principal apuesta está en una capacidad real de investigación para poder construir y resolver de manera eficaz los casos a través de unidades de investigación especializadas e interdisciplinarias.

No solo se combatirá la inseguridad, sino que se atacarán sus causas con el fin de disminuirla, la prioridad será la construcción de un sistema de prevención de los delitos.

Que quede claro, la propuesta de dictamen que hoy aprobaremos no está construida para colocar un fiscal a modo, como ha señalado la oposición. Recuerden que hoy somos mayoría y gobierno, porque el pueblo mexicano sabe que somos ciudadanos con principios, ideales y valores, y ese será el perfil de nuestro próximo fiscal general.

Estamos a punto de abatir la debilidad del sistema de justicia, y con ello logaremos recuperar la credibilidad social y confianza ciudadana en nuestras instituciones.

Hoy los partidos de siempre no están votando en contra de la Ley Orgánica que se ha construido desde las bases de la cuarta transformación, sino que estarán votando, como siempre, en contra del desarrollo nacional, en contra del progreso del sistema de procuración de justicia. Estarán votando en contra de lo que no les beneficia de manera directa, en contra de lo que no está hecho a su modo, de lo que no perpetúa sus prácticas corruptas. Estarán votando como siempre nos han demostrado, en contra de nuestro México.

El día de hoy, las bases de Morena le decimos sí a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, le decimos sí a avanzar hacia una institución eficaz, que logrará consolidarse como un ente cercano a la ciudadanía.

Le decimos que sí a la procuración de justicia pronta y expedita, porque no solo se trata de un cambio de nombre a la Procuraduría General de la República, sino cambiar la concepción de justicia que tiene el pueblo de México a causa de la corrupción que ha invadido a esta honorable institución durante tantos años a causa de los malos gobiernos priistas y panistas. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la

afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: No se considera suficientemente discutido, por lo tanto, continúa la discusión.

Para hablar en contra, tiene la palabra la diputada Martha Tagle Martínez. Iniciamos otra ronda.

La diputada Martha Tagle Martínez: Gracias, presidenta. Los cambios, compañeros legisladores, no se dan por decreto ni mucho menos por dogma de fe; se demuestran en los hechos. Y hoy este Congreso no está demostrando en los hechos que quiere cambiar las cosas.

No quiere cambiar las cosas porque, si no lo recuerdan, cuando dimos la batalla porque hubiera una fiscalía que sirva, dijimos claramente que se necesitaba reformar el artículo 102 constitucional, porque de otra manera el fiscal estaría siempre ligado a la posibilidad de que lo ponga y lo quite el presidente y que eso no generaría autonomía, y que el proceso de ratificación por parte del Senado se prestaría a lo que ya hemos vivido y que además hoy estamos sufriendo con otros órganos autónomos, a un proceso de cuotas y cuates, y que por eso se requería para poder garantizar la autonomía del fiscal general de la República reformar el artículo 102 constitucional. En aquella ocasión fue la mayoría en el Senado la que no nos permitió hacer ese cambio.

Sin embargo, nos resistimos con todo. Y por eso es que ahora les hago un llamado a que en los hechos demuestren que quieren hacer un cambio. Para contar realmente con una Fiscalía General que sirva se requiere una reforma al artículo 102 constitucional.

No pongan de pretexto que no se va a modificar la Constitución, porque hoy justamente en Puntos Constitucionales hemos tenido sesiones para revisar y analizar diferentes iniciativas de reforma constitucional.

No, no es falta de tiempo, es falta de voluntad, la misma falta de voluntad que demostró la mayoría anterior la están demostrando ahora ustedes aquí, cerrándose a discutir el tema como debe ser y tener una Fiscalía que sirva.

Se habla que vamos a tener una Fiscalía autónoma. ¿Saben ustedes que estos fiscales especializados que estarán nombrados igual como estaban en el pasado, tendrán una dependencia presupuestal total y absolutamente ligadas al coordinador general de la nueva Fiscalía General de la República? Eso quiere decir que tendrán que obedecer al coordinador general de la República y son dos fiscalías creadas por Constitución, me refiero a la Fiscalía de Delitos Electorales y la Fiscalía Anticorrupción.

¿Se acuerdan lo que pasó con el fiscal Santiago Nieto, al cual se le pidió su renuncia cuando empezó a investigar delitos electorales ligados con actos de corrupción? Se le pidió su renuncia. Bueno, eso no lo estamos corrigiendo y va a poder seguirse haciendo, pero ahora ni siquiera a cargo del fiscal general, sino de un coordinador general, al que insisto, le estamos dando facultades porque ni siquiera él va a tener que pasar por el señuelo del Senado de la República.

Por eso, compañeras y compañeras legisladores, para poder garantizar la seguridad a las y los ciudadanos. Pero, sobre todo, para garantizar justicia, que es lo que demandan las y los ciudadanos.

No, no se trata de aprobar leyes a modo, se trata de hacer conciencia de cuál es nuestra responsabilidad. Y no, tampoco pretendan engañar y manipular la información, quien esté en contra de este dictamen, no es porque esté en contra de garantizar y procurar justicia, sino justamente por lo contrario, porque estamos en contra de las simulaciones, porque estamos en contra de que pretendan, desde Morena, engañar la confianza de la gente que votó por ustedes. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Para hablar en pro del dictamen, tiene la palabra el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Partido Encuentro Social.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Lo que el día de hoy hemos escuchado respecto a las posiciones y las voces, que no han comprendido que México necesita transitar de instituciones que sirvieron a intereses que no necesariamente tenían como objetivo el velar por el interés supremo de la sociedad, hoy que finalmente se presenta una propuesta de diseño institucional para que la Fiscalía General deje de ser una estructura a modo, que además cumplía ineficazmente con sus objetivos, con sus atribuciones, pero también de manera, y hay que decirlo con todas sus letras, nefasta con su principal objetivo que era el demostrar que en este país, tal como lo dijeron los clásicos, como se ha venido precisando a lo largo de la historia, se tuviera confianza en la figura de la representación social.

Lo que hoy hemos escuchado ha sido una serie de denostaciones a la que finalmente podría ser una fiscalía que recupera muchos de los anhelos y de las aspiraciones que históricamente muchas diputadas, diputados y senadores, que en su momento pertenecieron a las mayorías, soñaban con que se perfilara una buena estructura.

Hoy lo que vamos a aprobar es un dictamen que conlleva tres premisas básicas:

La primera, la posibilidad de eliminar para siempre el que esas investigaciones, como las que se dieron en torno a los magnicidios que tanto lastimaron a la República, finalmente tengan un interés que es *ad hoc* a la exigencia de los ciudadanos de que haya justicia.

Hoy lo que necesitamos es que esa autonomía que hoy muchos ponen en duda, cuando no lo hicieron con los nombramientos en los diferentes gobiernos del partido tradicional y también de Acción Nacional, que finalmente tuvieron que echar reversa en muchas de las ocasiones, cuando la opinión pública no permitió que se le engañara con investigaciones que en nada abonaban a ese sentido de justicia que se ha reclamado históricamente.

Lo que vamos a aprobar hoy, las y los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, de la cual Encuentro Social es parte fundamental, dará un paso importante en la construcción del entramado institucional que verdaderamente requiere México.

Ya no necesitamos que las leyes queden únicamente como un gran escrito de retórica y demagogia en temas tan sensibles como son: el garantizar que las familias puedan salir a la calle con tranquilidad. Que puedan estar ciertos de que en el momento en el que se presenten ante las instancias correspondientes serán escuchados.

La historia no miente. El Ministerio Público y la Procuraduría se convirtieron en escritorios de trámite que nunca privilegiaron verdaderamente a la procuración de la justicia.

Hoy México está en una dinámica distinta. El gobierno del cambio estará, como se exigió el primero de julio y como se ha hecho en estas primeras semanas de ejercicio, el gobierno de México y sus instituciones estarán a la altura de las circunstancias, estarán a la altura de la demanda, de un reclamo legítimo de la sociedad.

Sí a la justicia. No a las instituciones burocráticas e ineficientes. La Fiscalía General de la República finalmente será un instrumento democrático y aliado de la sociedad mexicana. Es cuanto y muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Para hablar en contra del dictamen, tiene la palabra la diputada Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano.

La diputada Ruth Salinas Reyes: Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Ruth Salinas Reyes: La Fiscalía General de la República, como una figura jurídica relativamente y altamente en proceso de crecimiento y mejora, la cual se considera fundamental para el desarrollo de este país, partiendo de la perspectiva de que se tiene que eliminar o por lo menos disminuir considerablemente el desarrollo de un nuevo sistema penal, avanza lentamente sin duda.

Movimiento Ciudadano sabe que debemos atender el avance a una velocidad deseada para la sociedad. Se deben observar los derechos de los imputados y de las víctimas garantizando un proceso penal en estricto apego a los derechos humanos. Que sea ágil y que se visibilice la justicia para que haya menos reincidentes y además una reparación del daño significativa.

En este tenor, en Movimiento Ciudadano sabemos que a través de los años la procuración de justicia en nuestro país era y lamentablemente seguirá siendo uno de los entes públicos considerados más corruptos. Entes que trabajan bajo una figura poderosa, la cual no se obligaba a actuar conforme a la ley sino que desde esta Cámara era opaca.

Hoy, compañeras y compañeros diputados, tenemos la gran oportunidad de que esta Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo nos podamos comprometer a erradicar justamente los grandes males de nuestro país.

Créanme que esta Fiscalía estará navegando sin rumbo fijo si no se limita y se obliga a que cumpla los más altos requisitos para su actuación.

El primero de diciembre estuvo aquí el actual presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador. Él comentó que las cosas no podían seguir igual y hoy vemos que continúan tal cual y todavía con más opacidad, sin transparencia, sin vigilancia.

Por lo que hoy no debemos limitarnos sino obligarnos a cumplir los mínimos requisitos para su actuación, la cual deberá tener una vinculación extraordinaria con la transparencia, la rendición de cuentas y anticorrupción.

Movimiento Ciudadano está a favor de avanzar, pero no con leyes arbitrarias y que no se revisen cada párrafo, cada coma, cada punto, para su mejora y para que llevemos a las y los ciudadanos de México lo que realmente esperan de nosotros. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, para hablar en pro, el diputado Armando Contreras Castillo, de Morena.

El diputado Armando Contreras Castillo: Con su permiso, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Armando Contreras Castillo: Compañeros y compañeras. La minuta que hoy está a discusión llega tomando en consideración los preceptos constitucionales vigentes.

La discusión procesal de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República contó con la participación de importantes colectivos técnicos, como Fiscalía que Sirva, Vamos por Más, UNAM, CIDE, así como de todos los grupos parlamentarios en el Senado, como en la Cámara de Diputados, donde las diferencias fueron de forma, nunca de fondo. Nadie planteó una estructura de fiscalía distinta, por lo que tener una fiscalía que sirva es prioridad y la minuta asegura de forma general y con creces ese objetivo, misma que investigará y perseguirá los delitos, ejercerá la acción penal, procurará la reparación del daño y adoptará y promoverá la adopción de medidas de protección a favor de las víctimas.

¿Qué novedades plantea la nueva fiscalía? Tener una estructura operativa con capacidad real para investigar casos de crimen organizado, corrupción y violaciones graves a derechos humanos. Y se propone colocar a las víctimas y a la ciudadanía en el centro de sus funciones, es decir, que sea una fiscalía que realmente le sirva a la gente.

La creación de dos fiscalías nuevas, con lo cual serían cuatro las que trabajarían sobre los siguientes temas: fiscalía de delitos electorales, fiscalía anticorrupción, de derechos humanos y de asuntos internos, para investigar los posibles casos de corrupción al interior incluso de la propia institución.

La Fiscalía General de la República estará facultada para crear comisiones especiales de investigación, las cuales tendrán el propósito de atender casos emblemáticos de relevancia nacional, la creación de un Consejo

Técnico integrado por ciudadanos expertos, quienes podrían hacer recomendaciones al fiscal general sobre cómo mejorar su trabajo y la estrategia de investigación con una visión ciudadana.

La fiscalía podrá investigar incluso al presidente de la República. La autonomía del fiscal general estará garantizada respecto de la autoridad máxima del país, quien será sujeto de investigación. Se contempla un programa de profesionalización y de despido del personal que no apruebe los procesos de selección del servicio profesional de carrera que se establecerán.

Actualmente el artículo 102 constitucional establece el mecanismo de designación del fiscal general y de los fiscales especializados. El proyecto expone que el fiscal general de la República será removido del cargo por causas graves, entre ellas cuando de manera sistemática no cumpla con los objetivos establecidos en el plan de persecución penal; participe en el ataque a las instituciones democráticas y a la forma de gobierno republicano y federal y participe, tolere, consienta o apoye violaciones graves a los derechos humanos.

El principal objetivo de la Fiscalía General de la República es modificar la forma de entender la procuración de justicia en el país a partir de incorporar modelos exitosos en otros países del mundo.

Por ello plantea crear un nuevo modelo institucional que permitirá medir y evaluar el desempeño de sus integrantes, así como la calidad de las investigaciones bajo estándares nacionales e internacionales de investigación.

A diferencia de la actual Procuraduría General de la República en donde menos del 30 por ciento de sus integrantes provienen del servicio profesional de carrera, en la fiscalía habrá un esquema de ascensos, compensaciones, permanencia y evaluación de desempeño, para garantizar su eficiencia e integridad.

Por lo tanto, llamo a todos los diputados, a todas las diputadas, a razonar su voto y aprobar esta minuta que hoy tenemos como responsabilidad sacarla adelante. Morena estará siempre adelante y tomando en cuenta todas las opiniones. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado. Para hablar en contra, en el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Villarreal, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Con su venia, señora presidenta. Hoy solo no se pierde la oportunidad de tener un fiscal autónomo y de darle participación a la sociedad civil en su designación.

Hoy también lo que no podemos dejar pasar es que no se está respetando la facultad constitucional que tiene esta Cámara como Cámara revisora.

Esta soberanía está pasando a ser una Cámara de segunda, en contra del espíritu del constituyente, en relación a su facultad de poder hacer la revisión y la modificación de las minutas que vienen de la Cámara de origen.

Como lo ha hecho el Senado, inclusive en algunas minutas que esa Cámara, cuando le ha tocado ser Cámara de origen, el Senado ha hecho revisiones como la Ley de la Administración Pública y la Ley de los Pueblos Indígenas.

Pero aquí esta soberanía ha pecado de obediencia porque no ha podido ser capaz de permitir el cambio de un punto, una coma, de la minuta que llega del Senado. Y no podemos ser omisos ante este intento de convertirnos en una ventanilla de trámites, no podemos hacer que esta Cámara sea una Cámara obediente de la línea del Poder Ejecutivo.

La función legislativa y el proceso parlamentario están haciéndose a un lado, violentando nuestra Ley Orgánica, el Reglamento de la Cámara, pero sobre todo, nuestro marco constitucional plural.

No podemos estar a favor de esta minuta, por eso iremos en contra, porque aquí se propone hacer a un lado las opiniones de todas las fracciones parlamentarias que participamos en la Comisión de Justicia, porque aquí se propone hacer a un lado a todas las opiniones de las organizaciones civiles que participaron en el foro del pasado 26 de noviembre.

Y miren, no le regateamos y no se le regatea a la mayoría su capacidad de aprobar este modelo de fiscalía; háganlo, pero no se puede evocar los errores del pasado para justificar los errores del presente.

Hoy, se diga lo que se diga, le vamos a dar paso a un fiscal que se nombrará entre el ámbito del partido de la mayoría y el presidente de la República, por eso votaremos en contra, porque no estamos de acuerdo de votar para que tengamos un fiscal a modo o de la cuarta transformación. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Partido del Trabajo, para fundamentar a favor el dictamen.

La diputada Maribel Martínez Ruiz: Por aquello de las voces en contra, un posicionamiento de arranque. Vamos a cambiar este país a pesar de ustedes. No entienden que no entienden, el cambio arrancó el primero de julio y lo encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Compañeras y compañeros diputados, la aprobación de esta ley representa la consecución de una de las más añejas propuestas que la izquierda ha abanderado. Una propuesta que la izquierda ha trabajado desde hace ya muchas legislaturas, aunque ahora haya quienes se quieran adjudicar esta lucha, pero cuando fueron gobierno, jamás la impulsaron.

Unos porque siempre hicieron un uso faccioso del Ministerio Público, como instrumento de represión y control político. Otros, porque desmantelaron al darle al Ejército y a su Secretaría de Seguridad Pública manga ancha para investigar delitos y obtener concesiones sin presencia del Ministerio Público ni de defensor, pero sí de cámaras de televisión.

Desafortunadamente, con esta nueva ley vienen también nuevas mentiras de la derecha. Hoy se nos pretende acusar falsamente de querer imponer un fiscal carnal, cuando fuimos nosotros, quienes junto con las miles de voces de la sociedad civil que se alzaron, impedimos semejante atropello por parte del anterior gobierno, del cual por cierto fueron aliados.

No nos sorprende esta nueva embestida de la derecha. Su forma de hacer política es y ha sido siempre la difamación y la campaña de miedo, la guerra sucia. No saben actuar de otra forma. Pero la izquierda, la izquierda verdadera impulsora de la autonomía del Ministerio Público está hoy aquí para hacer realidad esta propuesta.

Con esta ley finalmente llevaremos a la práctica la reforma constitucional que otorga autonomía al Ministerio Público, por fin podremos llevar a cabo una transformación real y profunda de la investigación y persecución de los delitos.

Dejaremos atrás una institución caduca, disfuncional, sometida a los designios del gobierno en turno y profundamente corroída por la corrupción, el abuso de autoridad, la intimidación, la tortura, la negligencia y las violaciones sistémicas a los derechos humanos. Una institución incompatible con el sistema acusatorio, una institución al servicio del poder y no de las personas.

Esta Ley de la Fiscalía General de la República no solo es un ordenamiento orgánico, se caracteriza también por darle a la labor de la Fiscalía un perfil de respeto a los derechos humanos, perspectiva de género y atención a grupos vulnerables.

Se establecen fiscalías para delitos cometidos contra las mujeres, contra niñas, niños y adolescentes; para trata de personas; desaparición forzada y cometida por particulares; para delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos; contra migrantes y para investigación de tortura. Se incorporan también mecanismos para el combate a la corrupción.

Para beneplácito de quienes, como su servidora, propugnamos por consolidar el sistema acusatorio y no regresar al inquisitivo, se sientan bases sólidas para que los fiscales investiguen, no para que torturen, obtengan información a través de ello y siembren pruebas.

La Policía Ministerial, que hoy es el eslabón más débil del sistema acusatorio, queda debidamente sujeta al mando y conducción del Ministerio Público. También se establecen mecanismos de evaluación permanente del desempeño de la Fiscalía y de los servidores públicos en lo particular.

Habremos de estar atentos a que se terminen los esquemas de complicidad institucional entre el Ministerio Público, policías y peritos.

Compañeras y compañeros, la seguridad y la justicia son dos de las principales demandas de las y los mexicanos, esta ley avanza también en el combate a la impunidad, que es hija de la corrupción que tanto lastima a nuestro país.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reafirmamos votamos a favor del dictamen.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Agotada esta lista de oradores, consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. En votación económica, se pregunta si se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se considera suficientemente discutido en lo general.

Esta Presidencia anuncia que fueron reservados los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 44, 47, 53, 55, 56, 57, 58, 63, el primero transitorio, séptimo transitorio, octavo transitorio, décimo segundo transitorio, décimo tercero transitorio, vigésimo transitorio, y se propone una adición a un artículo transitorio.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Mientras está la votación queremos informar a la asamblea que se encuentran niñas y niños, invitados por el diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Trabajo, que llevaron a cabo un evento titulado Transparencia para Niños e hicieron entrega de capas de súper héroes en valores, a los cuales les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos la pulsera que nos obsequiaron, gracias.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 341 votos en pro, 119 en contra y 1 abstención.

Presidencia del diputado Porfirio Muñoz Ledo

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 341 votos.

La diputada Ivonne Liliana Álvarez García (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Sí, vamos a dar la palabra, pero tiene que haber claridad. Muchas gracias.

La diputada Ivonne Liliana Álvarez García (desde la curul): Presidente, lo que quiero es que se acredite mi voto a favor.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ya se cerró el voto. Está cantado, cerrado y apagado.

La diputada Ivonne Liliana Álvarez García (desde la curul): ¿Y no puede usted?

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ya se hizo declaratoria. Bueno, conforme al Reglamento y con tiempos holgados.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Lilia Villafuerte Zavala, del PRD, para presentar reservas a los artículos 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 25, 27 y 37.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Con su permiso, diputado presidente. A nombre del Partido de la Revolución Democrática, vengo a presentar un bloque de reservas a la denominación de la ley, así como en los artículos 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 25, 27, 32, 63 y vigésimo transitorio.

Son observaciones que nuestro grupo parlamentario teníamos a la minuta que nos envió el Senado de la República y, como ya se ha dicho, no hubo la oportunidad de discutirlas en la Comisión de Justicia.

Desde la denominación de la ley observamos la intención de acotar la autonomía de la nueva Fiscalía General de la República, al establecer su regulación desde una ley orgánica, que son aquellas que regulan y organizan a los tres Poderes de la Unión, respectivamente, y no en una ley específica como se regulan los organismos dotados de autonomía constitucional.

En ese sentido, debemos destacar que a la nueva fiscalía se le acota presupuestalmente en su autonomía técnica y de gestión establecida en la propia Constitución, al no existir reglas que impidan disminuir su presupuesto.

Existe también una libre y discrecional remoción del presidente de la República en turno al titular de la fiscalía, sin establecer expresamente las causales de remoción del mismo, lo que de suyo lo torna completamente vulnerable.

Observamos también que el plan de persecución penal presenta una serie de inconsistencias, que van desde la intervención de las investigaciones hasta realizar funciones que ya desempeñan otras autoridades.

Consideramos que debería existir un plan estratégico institucional para separarlo de las investigaciones de los delitos que realizan ministerios públicos. En ese sentido la minuta es omisa respecto a la participación de la Fiscalía en el sistema acusatorio, sobre todo en funciones de dirigir y coordinar a las policías de investigación, asegurar los elementos materiales probatorios y evidencias, garantizar su cadena de custodia, así como toda su participación en el litigio estratégico del juicio oral y la teoría del caso correspondientes.

Es importante destacar que esta minuta no es congruente con lo que dispone la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas, así como los protocolos, los lineamientos generales en esta materia.

De igual manera, queremos ser enfáticos en señalar que no se prevén mecanismos para la creación de una comisión de investigación de la verdad que mandató la sentencia del primer tribunal colegiado del décimo noveno circuito, que ordenó reponer la investigación sobre el caso Iguala, ya que la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

Vemos que no existe una transformación a fondo de los servicios periciales, la cual es una de las principales recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hecha al Estado mexicano, consistente en contar con un organismo pericial y forense competente con autonomía administrativa y financiera, sin depender de ningún organismo investigativo o judicial.

Es una reforma que se ha quedado corta con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, incluso se ha olvidado del propio Instituto Nacional de Ciencias Penales, institución fundamental para la investigación científica y docente en el ámbito del derecho penal, donde se han especializado muchos servidores públicos en

las áreas de seguridad pública, procuración y administración de justicia y en la formación de investigadores, profesores, especialistas y técnicos de las diversas áreas de las ciencias penales y de la política criminal, la realización de investigaciones sobre los principales problemas nacionales en estas áreas y la información y difusión de los conocimientos sobre ellas.

Como podemos observar, esta minuta no resuelve de fondo las dos grandes preocupaciones de la sociedad. Un fiscal que no sea fiscal carnal y una fiscalía verdaderamente autónoma, alejada de todo vínculo político, fundamentalmente de la figura del presidente de la República que en turno corresponda. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión, salvo los artículos 2 y 6, los demás reservados.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión, salvo los artículos 2 y 6. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Disculpen, aquí hay una diferencia de criterio que sentimos que no se apreció: cuál es el sentido del voto. Bueno, era para darles una oportunidad, hombre, qué bárbaro. De plano que no lo entendí. Repita la votación, secretaria.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión, con excepción de los artículos 2 y 6. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se va a discutir todo, todo, sí, aquí con literas, con mucho gusto. Perdón que haya hecho la observación, pero noté que votaban de una manera distinta a lo que los mismos partidos se han expresado, cambiando la convicción que tenían. Lorena Villavicencio Ayala, tiene la palabra para hablar en contra. Tiene la palabra la diputada Lorena Villavicencio Ayala.

La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Gracias, diputado presidente. Sabíamos, y no nos sorprende, que el día de hoy los partidos que votaron en contra en lo general, harían uso del famoso tema de la sociedad civil. Es un tema al que han recurrido constantemente para descalificar una ley orgánica que es lo que se está discutiendo el día de hoy, y no el artículo 102 de la Constitución.

Y lo quiero decir con toda claridad, porque se ha hablado de simulación, cosa que no puedo aceptar bajo ninguna circunstancia, porque quienes aprobaron el artículo 102 de la Constitución, está perfectamente claro, fueron los partidos, y Morena no participó en esa votación.

Y eso fue lo que le dio contenido. El día de hoy es lo que le da contenido y alcance a la minuta de la Ley Orgánica de la Fiscalía General; sí, por eso. Pero ustedes tuvieron la oportunidad, los partidos que tenían mayoría desde hace cuatro años, en el 2014, y de ninguna manera se preocuparon en ese momento, por lo que hoy vienen a expresar a esta tribuna.

Y no acepto tampoco el tema de la autonomía, y voy a explicar por qué, y le pido respeto –porque me estoy expresando– como yo lo tengo respeto a usted, cuando usted está en el uso de la palabra. Y diría lo siguiente: estamos hablando, sí, de un órgano autónomo, con patrimonio propio y personalidad jurídica, que tiene capacidad de generar su propio presupuesto, que no tiene ninguna vinculación con el Ejecutivo, que tiene fines perfectamente definidos, que es lo que me tiene aquí, fundamentalmente el artículo 2, y además decirles que tiene elementos muy positivos, porque se trata de un nuevo modelo que, dentro de sus fines, establece el tema de la prevención.

A nosotros nos interesa el tema de la prevención, atacar las causas, nos parece que los sistemas punitivos tienen que ir a la baja. Necesitamos atacar las causas que están generando hoy las conductas delictivas; pero, además un elemento adicional, que está en los fines, y lo dice con toda claridad. Están los elementos de la justicia transicional, que son los que van a permitir el proceso de paz en este país. Y digo claramente cuáles son:

Es el derecho a la verdad, que no se repitan este tipo de conductas; y además hay un capítulo entero, porque han dicho también aquí que dónde están las víctimas en este dictamen. Señores, lean bien el dictamen, se establece todo un artículo con un catálogo de derechos puntuales para las víctimas. Por primera vez vemos en una ley orgánica un catálogo de este tamaño.

Finalmente, decirles: aquí no venimos a simular, aquí hay una memoria histórica de la que nos tenemos que hacer cargo todos y nosotros sabemos perfectamente, porque hemos hablando con la sociedad civil, porque no hay, aquí no hay monopolios de la sociedad civil...

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (desde la curul): Señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón, diputada Tagle. ¿Con qué objeto?

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (desde la curul): Presidente, con la intención de hacer una moción de orden, en el sentido de que estamos en la presentación de reservas y me parece...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Eso es lo que estamos haciendo.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (desde la curul): Por eso, pero no se está refiriendo a los temas de las reservas, sino un posicionamiento en general, y ese momento procesal ya pasó en la Cámara de Diputados y, en todo caso, se tiene que referir exclusivamente a las reservas, y me parece, en ese sentido, que por eso no podemos discutir en bloque las reservas que se presentan, sino tenemos que ir por temas.

El momento procesal de posicionamientos en lo general ya fue concluido y en ese momento se tuvo que haber hecho este tipo de posicionamientos.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ha terminado casi la intervención. Por favor termine concentrándose en el tema.

La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Sí, nada más termino diciendo que aquí no hay monopolios de la sociedad civil y que ustedes no respetaron muchas de las propuestas que tenía.

Segundo –nada más con esto termino, presidente, un segundo–. Quien propuso que se discutiera en estos términos fue el PRD, que obviamente discutió cinco artículos al mismo tiempo.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Claudia López Rayón, en contra.

La diputada Claudia López Rayón: Voy a hablar a favor del dictamen y en contra de la reserva del artículo 2.

Aclaremos: incorporar a los fines de fiscalía el acercamiento y la atención ciudadana, desde la presentación de las denuncias. Es necesario decir lo siguiente: en primer lugar, la política de persecución penal que propone esta fiscalía tiene como objetivo hacer más efectivo el trabajo de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de dar respuestas adecuadas y diferenciadas a las distintas demandas ciudadanas relacionadas con la incidencia delictiva.

Relevancia nacional: iniciará una política de priorización que identifique los problemas, incidencias de fenómenos delictivos, priorice su atención, establezca una estrategia para atender con herramientas disponibles y emita lineamientos de actuación institucional.

Es necesario mencionar que se propone mejorar la coordinación con las policías, sobre todo en la recepción de las denuncias, el esclarecimiento y la atención ciudadana. Se busca mejorar en distintas funciones. En este sentido, es necesario que las policías, en quienes recae el trato directo con los ciudadanos, mejoren su trato y acercamiento para incrementar la confianza con los ciudadanos.

Entonces, la Fiscalía eficiente, como está planteada, se coordina adecuadamente con los policías y es capaz de llevar a cabo investigaciones pertinentes, que sigan el debido proceso. Proveerá el esclarecimiento en la atención ciudadana que se busca.

Por otro lado, en lo que se refiere a adicionar el respeto de los derechos humanos en todo momento, es necesario mencionar que, desde el planteamiento en conjunto con la sociedad civil, se ha pensado en el modelo de la Fiscalía bajo una óptica de derechos humanos, pues se entiende que solo mejorando el modelo actual, transformando, es como se dará respuesta a los modelos de corrupción e impunidad. Solo con el personal capacitado para enfrentar el nuevo sistema de justicia penal y para realizar investigaciones conforme al debido proceso se pueda atender el reto en materia de derechos humanos que atraviesa nuestro país.

Esta debe ser nuestra meta en común, nuestro enfoque: crear un órgano eficiente que sea capaz de dar respuesta a las demandas de justicia de la población. Únicamente así mejoraremos realmente el trato a la ciudadanía y garantizaremos sus derechos humanos. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría si aceptan las modificaciones a la propuesta.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se consulta si se aceptan las modificaciones propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se desechan.

Tiene la palabra la diputada María del Rosario Guzmán Avilés, del Partido Acción Nacional, para presentar modificaciones a los artículos 2 y 56.

La diputada María del Rosario Guzmán Avilés: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, expongo ante esta tribuna la propuesta de reserva al artículo 2 de este dictamen, misma que presenté por escrito en la Comisión de Justicia en tiempo y forma, pero que fue imposible someterla siquiera a su lectura.

La presentación de este dictamen podría definir a este Congreso como responsable, sensible con la sociedad y sus necesidades, sin dejar de lado el urgente fortalecimiento de las instituciones.

Es por ello que el dictamen que crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República es una oportunidad única de darle una nueva ingeniería a la aún Procuraduría General de la República, como una fiscalía autónoma, humana y que, en los resultados, sí sirva.

Es prudente hacer una mención de agradecimiento a las organizaciones de la sociedad civil que comparecieron inmediatamente a la convocatoria hecha por la Comisión de Justicia, para poder escuchar sus voces, posturas y valoraciones respecto de la minuta en comento, aunque estas no hayan sido tomadas en cuenta.

Yo me quiero enfocar en el tema ciudadano. La actual Procuraduría General de la República, desde sus orígenes, ha desestimado la atención ciudadana por parte de sus servidores públicos. Debemos restablecer la confianza en la ciudadanía; en primera instancia, como un Congreso preocupado en resolver las problemáticas con soluciones perceptibles para la sociedad y que tengan resultados inmediatos.

Por otra parte, fomentando la formación de instituciones con sensibilidad humana, que den resultados prácticos y eficaces.

Desgraciadamente, en el dictamen que nos ocupa, existe un total apartamiento por la preocupación ciudadana. Y hablo como cualquier ciudadano que sufre algún tipo de delito, el que sea.

Primero: la negación a presentar la respectiva denuncia. ¿Por qué? No es muy difícil adivinarlo, todos sabemos el trato deshumanizado al tener que acudir ante cualquier Ministerio Público, ya sea de orden local o federal.

Esperar horas a que nos atiendan; y ya que nos atienden, la atención recibida no es digna para una persona que va a denunciar la comisión de un ilícito en su agravio.

Debemos establecer en este dictamen, como prioridad, la atención y acompañamiento ciudadano en todas las etapas de la investigación, y que se despliegue como fin institucional, desde la Fiscalía General hasta todas las fiscalías del país.

De este modo, en primera instancia, propiciaremos una mayor cultura de la denuncia, lo que es un primer obstáculo para la investigación de delitos. Las autoridades no deben ser consideradas como enemigos de la sociedad.

En segunda instancia, sensibilizaremos a todos los integrantes de la institución respecto de un trato humanitario a las víctimas y sus familias, sin distingo alguno, haciendo especial énfasis en el trato que se otorgue a las víctimas y sus familias en delitos de carácter sexual, feminicidios, delitos donde sean vulnerados derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de desaparición forzada. Esto, de manera enunciativa y no limitativa.

Es por ello que la reserva al artículo 2 del presente dictamen la presento en este momento para que se modifique con el fin de establecer con fines institucionales y eje rector de la institución el acercamiento y la atención ciudadana con un trato digno y humano hacia las víctimas y sus familias, desde la presentación de las denuncias, durante la investigación y el esclarecimiento de los delitos. Esto atendiendo a lo establecido en diversos artículos y aplicables de la Ley General de Víctimas.

Debido a la falta de tiempo, me reservo a presentar en su momento el artículo 56, diputado presidente. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la secretaría, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se desecha.

Tiene la palabra la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del PRI, para referirse al artículo 4.

La diputada María Alemán Muñoz Castillo: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, para el PRI las víctimas del delito son lo fundamental. En congruencia, hemos presentado iniciativas para fortalecer los derechos de las víctimas del delito.

Con la introducción del sistema acusatorio en México la víctima adquirió un rol central en la procuración de justicia. Hoy no se trata únicamente de castigar al culpable, sino que los derechos de las víctimas deben ser respetados, protegidos y restituidos cuando estos son violados a causa de un delito.

El dictamen que discutimos establece la posibilidad de que la víctima solicite que la Fiscalía General de la República ejerza su facultad de atracción. Si bien esto podría ser considerado un parteaguas en el marco de la consolidación de una justicia para las víctimas.

Lo cierto es que el precepto cuenta con un error gravísimo, el artículo 4 del dictamen establece que la víctima podrá impugnar la negativa del ejercicio de la facultad de atracción de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El problema no está, o más bien el problema está que con esta redacción o con la redacción actualmente, que existe en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no se prevé ningún mecanismo de impugnación ante la negativa de la Fiscalía para ejercer la facultad de atracción y, por consiguiente, pues no existe ningún recurso real.

La redacción del precepto es engañosa, por una parte, advierte la importancia de la víctima y la importancia de que la víctima coadyuve en la investigación, pero al mismo tiempo crean textos normativos inoperantes que van en contra del principio de la debida diligencia. Sí, la víctima tiene derecho a impugnar la negativa de la facultad de atracción, ¿pero cómo? ¿Cómo se realiza la impugnación? ¿Ante qué autoridad se puede realizar esta impugnación?

El Código no lo dice, la Ley Orgánica tampoco lo dice; por tanto, es una mentira. Una mentira que la víctima pueda impugnar. Es precisamente por tales motivos que presentamos una reserva a la redacción del artículo 4 del dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, a fin de establecer un mecanismo jurídico viable, real, que permita garantizar el derecho procesal que dicho artículo refiere.

Se pretende modificar el último párrafo del citado artículo, a fin de establecer que la negativa del ejercicio de la facultad de atracción deberá ser fundada y motivada, es decir, que deberá contar con suficientes razones que impidan cumplimentar con la solicitud de la víctima.

Adicionalmente, dado que la solicitud del ejercicio de la facultad de atracción se prevé como un derecho procesal, la redacción establece la posibilidad de que la víctima se ampare ante la resolución del acto de la autoridad.

De esta forma, se conforma un vehículo jurídico claro que, a diferencia del que existe actualmente, sí opera y sí defiende a la víctima y sí da certeza jurídica. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se desecha.

Tiene la palabra la diputada Lizbeth Mata Lozano, en referencia a los artículos 19, 31 y 44, y el 6.

La diputada Lizbeth Mata Lozano: Con su venia, presidente. De acuerdo al artículo 111 del Reglamento, solicito que estas cuatro reservas sean discutidas en un mismo momento.

Primero, señalar la falta de congruencia que existe en esta Cámara principalmente por la mayoría. ¿A qué me refiero? Han hecho declaraciones constantes, sobre todo la diputada Tatiana Clouthier, de escuchar a la sociedad, que en esta Cámara se escucha a la sociedad, y eso, en este caso específico, es totalmente falso.

Solicitamos que estas reservas se incluyeran en el dictamen porque son reservas de la sociedad organizada. La presidenta de la Comisión de Justicia realizó un foro de parlamento abierto; se escuchó a estas asociaciones, pero al final se decidió que no se movería ni una coma, porque el presidente electo no quería que se moviera ninguna coma.

Esta es una falta de congruencia total hacia escuchar a la sociedad organizada, y las reservas de estas asociaciones, por supuesto que quedaron fuera. Es por eso que en el Grupo Parlamentario del PAN hoy las hacemos propias, y hacemos mención principalmente en el artículo 6o., donde se habla del plan de persecución penal.

Si bien es cierto que se deriva de la persona titular de la Fiscalía General de la República, deben de existir ciertos candados. ¿A qué me refiero? Que esta investigación no sea a criterio del propio fiscal, sino que se integre privilegiando la investigación y persecución de delitos complejos de alto impacto, de agresividad social, de alto impacto social y de cuantías significativas.

La reserva al artículo 19 también se refiere a que debemos expedir los protocolos para la realización de entregas vigiladas y operaciones encubiertas.

Asimismo, el artículo 31, la reserva se refiere a que la Coordinación de Investigación y Persecución Penal debe ser del Ministerio Público. Especificar que es facultad del Ministerio Público.

Y el artículo 44, de gran importancia, ya que son causas de régimen de responsabilidades. Las causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial, manifestando no cumplir, retrasar o perjudicar la negligencia, la debida actuación del Ministerio Público de la Federación.

Punto número dos: no solicitar los dictámenes periciales correspondientes o abstenerse de realizarlos. Es importante que quede esto establecido en esta ley, porque precisamente son las responsabilidades en las que los agentes del Ministerio Público encauzarían en caso de que esto sucediera.

No trabar el aseguramiento de bienes, objetos, instrumentos o productos de delito, y no solicitar el decomiso cuando así proceda en los términos que establezcan las leyes penales, omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto, abstenerse de ejercitar la acción de extinción de dominio en los casos y en los términos que establezca la ley en la materia, y abstenerse de promover en la vía incidental, ante la autoridad judicial, el reconocimiento de la calidad de víctima u ofendido, en términos de las disposiciones aplicables; negar indebidamente a la víctima u ofendido el acceso a los fondos contemplados en la ley cuando tenga derecho a ello; no registrar la detención conforme a las disposiciones aplicables, o abstenerse de actualizar el registro correspondiente, y las demás que establezcan otras disposiciones.

Esas reservas, es importante que estén dentro de esta ley orgánica, porque es prioridad que tengamos una fiscalía que sirva. Si bien todavía esta Cámara no quiere entrar al debate sobre el artículo 102 constitucional, y que verdaderamente exista un fiscal autónomo, entonces démosles una fiscalía que sirva, démosles herramientas para que verdaderamente haya justicia y no estemos simulando.

Yo los reto a que el próximo periodo estemos aquí discutiendo el artículo 102 constitucional y generemos una fiscalía autónoma, que es lo que la sociedad exige y reclama. Es cuanto.

Presidencia del diputado Marco Antonio Adame Castillo

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se acepta a discusión.

En consecuencia, tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en contra.

El diputado Rubén Terán Águila: Con su permiso, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Rubén Terán Águila: Compañeras y compañeros, quiero iniciar esta postura que trae la fracción parlamentaria de Morena, pidiéndole a los diputados, sobre todo de Acción Nacional y algunos del Partido Revolucionario Institucional, que reserven los artículos en lo particular, pero solamente de a uno, porque vienen, dan su lista de artículos, dicen de manera muy suscitan lo que pretenden y después nos atacan que somos nosotros los que no nos puntualizamos en el tema. Compañeros diputados, de un artículo, y no importa que nos amanezcamos, estamos aquí para debatir. Por otra parte, comentarles que con lo que respecta...

El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame el orador. ¿Con qué objeto diputado Elías Lixa?

El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Para hacer, si me lo permite, una pregunta al orador.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame. Orador, ¿acepta la pregunta?

El diputado Rubén Terán Águila: Cuando concluya, compañero diputado.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Al término, diputado. Continúe.

El diputado Rubén Terán Águila: Comentarles, compañeros diputados, con todo respeto, que lo que hoy se pretende es tener una fiscalía fortalecida, y es lo que estamos debatiendo, nosotros, como fracción mayoritaria; efectivamente, asumimos esa responsabilidad y lo hacemos con pleno conocimiento de la importancia que tiene.

No comprendo por qué hoy ustedes hacen alusión al artículo 102 constitucional, cuando tuvieron como fracción parlamentaria cuatro años parada esta ley reglamentaria a la que hoy estamos dándole rumbo y que requiere el país.

Por tanto, en verdad es una incongruencia el que hoy nos ataquen por algo que en cuatro años ustedes no hicieron.

Por otra parte, de acuerdo al artículo 19 que estaban comentando en esta tribuna, que tiene que ver con las facultades de la persona titular de la Fiscalía General de la República, estamos conscientes que le están dando mayor importancia –escúchenme bien– a la persona que a la institución. Y aquí habría que entender perfectamente la diferencia.

Yo escucho en ustedes que están hablando mucho del fiscal, no de la fiscalía. Que no les preocupe este tema, compañeros diputados, porque hoy tendremos una fiscalía que en verdad dé resultados.

Desafortunadamente el actual Ministerio Público es obsoleto, y ustedes lo saben; y ante el nuevo sistema de justicia penal que tenemos en el país, tenemos que actualizar nuestras instituciones, y lo que proponemos con esta fiscalía, lo que proponemos en esta ley reglamentaria, es precisamente que se salvaguarden los derechos de las víctimas, que se tenga, por supuesto, por respetado todo el proceso, todos los artículos que rigen el proceso penal y, sobre todo –para concluir– decirles que sí hemos escuchado a la sociedad civil, a las asociaciones civiles.

Quiero decirles que la izquierda por antonomasia, por derecho de sangre, estamos más apegados a las asociaciones civiles que todos ustedes que hoy están aprendiendo a ser oposición. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: A ver. Había usted indicado que al término podría o no aceptar una pregunta. ¿Acepta la pregunta del diputado Elías Lixa? Adelante, diputado.

El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Ya estaría un poco fuera de tiempo, porque es a su primera referencia. Hizo referencia al procedimiento. ¿Conoce usted, diputado, el artículo 111 del Reglamento, que permite presentarlo de esta forma?

El diputado Rubén Terán Águila: Claro que sí, compañero diputado. Lo que yo dije y aclaré, no sé si no me puso atención. Yo dije que preferiría que fuese por artículo, para poder enriquecer el debate.

Yo reconozco que están interesados en poder debatir esta ley, y nosotros también, diputado, porque aquí estamos para legislar para nuestro país y, en esa parte coincidimos, solamente que, para enriquecer el debate, creo que coincides diputado, que tres minutos no bastan para poder debatir 5, 7, 9, 10, 11 artículos, que suben en bloque. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por tres minutos para hablar en pro.

La diputada Lizbeth Mata Lozano: Gracias, presidente. Le tomo la palabra al diputado que me antecedió, sobre que insiste en que la izquierda escucha a los organismos de la sociedad civil y que hoy se vea reflejado aquí en Cámara; que les avise además a sus compañeros miembros de la Comisión de Justicia, que no aceptaron ninguna reserva de los organismos de la sociedad civil, ninguna, ni una coma aceptaron cambiarme.

Si ustedes insisten en que escuchan, demuéstrenlo aquí, en esta Cámara, acepten las reservas que son propiamente de la gente y nosotros las hacemos propias para que así se asiente en esta Cámara, y hablamos específicamente de temas de fiscalía que sirva, de temas del fiscal, porque estamos hablando de reservas sobre el fiscal, que tiene responsabilidades para realizar.

Claro que nos sentamos en los dos temas, en el fiscal y en la Fiscalía, e insisto: el reto está aquí, vayamos por un fiscal autónomo, dejemos atrás el pasado y vamos de frente. Que ustedes pongan el ejemplo y tengamos un fiscal autónomo en esta Cámara y que sean así el ejemplo para la sociedad que tanto pregonan. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena. Hasta por tres minutos, para hablar en contra.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna: Dentro de los artículos reservados, mi partido me ha solicitado argumentar en contra los argumentos que se dieron aquí, falsos, en el artículo 6, que es uno de los más importantes de esta ley, porque se refiere al plan de persecución penal, que por primera vez en toda la historia se coloca en una ley de este tipo.

La crisis de inseguridad, de violencia que hoy vivimos obedece a la falta de investigación efectiva de los delitos que se cometen, a la falta de capacidad de los ministerios públicos para conducir las investigaciones. Hay corrupción, hay negligencia, hay burocratismo y hay incapacidad técnica, todo eso nos lleva a que las carpetas de investigación están en los estudios de la Auditoría Superior de la Federación, en el propio análisis del actual, el que salió de la PGR, etcétera. Estos datos, que las carpetas de investigación no llevan pruebas, llevan pura paja y eso es el resultado de la impunidad.

Nosotros queremos un rediseño de la Fiscalía General que resulte importantísimo; tener un plan estratégico para la persecución penal. Es una estrategia para la atención integral del fenómeno delictivo.

En la estrategia anterior no había prevención; hoy se establecen, como uno de los requisitos dentro de este plan de persecución penal, todas las actividades de prevención; además, desde luego, la persecución, que es la tarea fundamental del Ministerio Público.

Los delitos antes se sustentaban en la cantidad de denuncias presentadas, sin hacer un cruce de datos de inteligencia, de datos de violaciones a los derechos humanos o los datos del contexto delincuencial y los datos de criminalidad.

Por ello, este dictamen propone un plan de persecución penal que identifique los patrones sociodelictivos, las zonas de mayor incidencia criminal, donde se tomen como referentes –para la información– el contexto, los diagnósticos delincuenciales, las estadísticas de percepción del delito, los análisis de información elaborados por instancias especializadas, los diagnósticos elaborados por organizaciones civiles, los informes de las víctimas del delito, los informes sobre violaciones a los derechos humanos y toda la información sólida; con la que se cuente servirá para elaborar el plan de persecución penal.

Y esto se inscribe en la lógica del rediseño de una nueva estrategia de seguridad a nivel nacional, donde las instancias encargadas de estos temas deberán contar con planes, con programas para combatir la delincuencia muy claros y verificables, con programas de prevención del delito y tendrán que transparentar toda su actuación y sus resultados...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna: Termino, presidente, diciendo que este plan sirve para perseguir los delitos de mayor impacto en la sociedad, los delitos que más nos duelen como país, no solo los que más se denuncian, porque muchos no se denuncian por múltiples factores...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna: ...el plan debe constituirse como una verdadera herramienta de política criminal y como una nueva política de persecución del delito. Por eso no compartimos lo que se dijo aquí, que el plan no va a servir de nada.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Felipe Fernando Macías Olvera, del Grupo Parlamentario del PAN, para hablar en pro.

El diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Con su permiso, presidente. Específicamente, como lo comentó la diputada que me antecedió, lo que queremos es no caer en simulaciones y por eso es que en esta reserva en el artículo 6o. queremos que se ponga en muy puntual concepto de que el fiscal debe de perseguir los delitos de alto impacto, y de alto impacto social. Hoy estamos dejando al arbitrio del fiscal decidir respecto a qué delito se debe de perseguir o no que implique alto impacto social.

Estamos pidiendo, en esta reserva al artículo 6o., que quede específicamente, claramente señalado que tienen que estar los delitos de alto impacto social señalados en el artículo 6o. de esta ley.

También, respecto al artículo 19, queremos que queden muy claros los protocolos que deben de seguir las operaciones encubiertas. ¿Por qué? Porque si lo dejamos como está en la ley que actualmente se presenta, se pueden dar operaciones dirigidas, operaciones con sesgo político y tenemos que establecer protocolos muy claros para la protección de derechos humanos y, sobre todo, que sea en el apego de la legalidad.

En el artículo 44, respecto a esta reserva también, queremos que se estipulen muy claramente las faltas en las que pueden incurrir los agentes del Ministerio Público, y no solamente sobre la Ley General de Responsabilidades. Porque sabemos perfectamente el viacrucis que las víctimas del delito sufren cuando tienen que denunciar algún delito y cuando tienen que dar seguimiento a las investigaciones de las cuales fueron víctimas.

No se puede quedar específicamente señalado solamente respecto a la Ley General de Responsabilidades, sino que queremos que quede muy claro en las responsabilidades en las que pueden incurrir los agentes del Ministerio Público.

Estas tres reservas en específico van para fortalecer esta ley. Es para no caer en simulaciones y falsos discursos. Son herramientas muy claras, que lo único que buscan es fortalecer este dictamen.

Y siguiendo con la discusión que se ha dado en innumerables ocasiones con los oradores que me antecedieron de la mayoría, ¿cuál es el miedo a un fiscal independiente y autónomo?

Se habla de que quieren combatir la corrupción, pero no vemos muestras claras. Tenían la oportunidad de realizarlo y no vemos muestras claras. Fue una petición de la ciudadanía muy sentida tener un fiscal autónomo independiente y nos queda claro que, con la postura de Morena, los ciudadanos van a tener que esperar otros seis años.

No se puede quedar en discusiones, en discursos y en buenos sentimientos e intenciones. Aquí es donde se tiene que demostrar si quieren combatir la corrupción o no, y hoy le quedan a deber a la ciudadanía, al no tener una fiscalía independiente y autónoma.

Hoy dejan la puerta abierta para que un compadre del presidente sea el nuevo fiscal, y que no se castigue a los políticos corruptos. Esa es la realidad, y en el Partido Acción Nacional no lo vamos a permitir. Siempre vamos a estar a favor de los ciudadanos. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por tres minutos, para hablar en contra, la diputada Laura Martínez González, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Laura Martínez González: Gracias. Con su venia, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.

La diputada Laura Martínez González: Es fundamental transformar el modelo actual de procuración de justicia para crear un órgano capaz de investigar y juzgar de forma imparcial a cualquier ciudadano, inclusive a los más poderosos empresarios, políticos y funcionarios públicos. Los mexicanos merecen justicia. Es nuestra responsabilidad como servidores públicos brindarles una institución capaz de hacerlo.

En cuanto a la reserva planteada al artículo 19, quiero declarar que el modelo de la fiscalía presentado tiene como uno de sus principales ejes la flexibilidad.

La Procuraduría General de la República ha resultado obsoleta, ineficiente para procesar los delitos y procurar justicia. Entonces, es fundamental la creación de la Fiscalía General de la República, una institución que permite un modelo flexible de investigación que permitirá obtener los resultados óptimos para brindar justicia a la población.

Esto contrasta con la estructura rígida actual que tiene la Procuraduría General de la República, la cual causa divisiones en las investigaciones y en números de sentencias mínimas.

El fiscal debe tener la capacidad de nombrar y remover a los fiscales que considere pertinente, con el objetivo de lograr la mayor eficiencia en la investigación. Es necesario dotar de esta flexibilidad al fiscal para que pueda operar de manera eficiente en casos particulares y urgentes.

En segundo lugar, en lo que respecta a la coordinación general, se requiere recalcar que se trata del órgano administrativo, por lo que, en su competencia, solicita la colaboración de otras autoridades, así como auxiliar a las que lo soliciten. La coordinación de investigación y persecución penal, como su nombre lo dice, tiene objetivos de investigación y litigio, no corresponde entonces realizar tareas administrativas que entorpezcan su funcionamiento.

Queremos recalcar que busquemos construir una institución que responda directamente a los retos, vicios que tiene la actual Procuraduría General de la República, los cuales le piden enfrentar en forma eficaz la grave crisis de violencia e inseguridad que sufre nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, para hablar en pro, la diputada Laura Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Antes de hablar específicamente de la reserva al artículo 44, por la cual voy a hablar a favor, quiero responder al compañero de Morena que le preguntaba a la bancada del PAN por qué traemos a la discusión la reforma al artículo 102. Pues porque cualquier discusión que tenga que ver con una auténtica e independiente y fortalecida fiscalía, no puede dejar de lado la necesidad de reformar este artículo.

Por ejemplo, para evitar que el fiscal general y los fiscales especializados puedan ser removidos como está actualmente en la Constitución, por el presidente de la República, a modo y a gusto, o a disgusto; como recordarán, hace algún tiempo la remoción del fiscal especializado para delitos electorales fue claramente porque le incomodaba al régimen anterior, al anterior gobierno, y fue removido sin más, a pesar de que en la designación de esos funcionarios interviene el Senado de la República. Así es que, si queremos hablar de una auténtica fiscalía autónoma e independiente, no podemos obviar la discusión de la reforma al 102.

Quiero decir que, en esta posición, la posición del PAN y de otros partidos de la oposición no ha variado. No ha variado un milímetro y hemos pedido desde la anterior legislatura que se reforme este artículo, y por eso lo estamos pidiendo ahorita. No basta con la ley orgánica que ustedes han aprobado el día de hoy para tener una fiscalía independiente y autónoma.

Me quiero referir particularmente a la reserva al artículo 44, en el que estamos proponiendo que se adicionen las causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y también en lo conducente de los oficiales ministeriales y peritos.

El diputado Rubén Terán Aguilar (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame, diputada. Sí, diputado Rubén Terán, ¿con qué objeto?

El diputado Rubén Terán Aguilar (desde la curul): Para hacerle una pregunta a la oradora con respecto a la alusión que hizo.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputada, ¿acepta la pregunta?

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Sí, con mucho gusto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Rubén Terán Aguilar (desde la curul): Con todo el respeto, diputada, y agradezco la atención, solamente quisiera que nos dijera entonces ¿por qué en cuatro años donde básicamente estuvieron dos legislaturas y donde su fracción parlamentaria tenía la posibilidad, no hicieron posible la reforma al artículo 102 constitucional, y en cuatro años dejaron de lado la ley reglamentaria que hoy estamos trabajando? Que hoy vengan a decirnos que nosotros, los de Morena no estamos haciendo bien las cosas, me parece algo incongruente e ilógico. Muchas gracias.

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Claro que sí, diputado. Le agradezco mucho la pregunta, porque me da la oportunidad de recordar esa batalla que dimos no solamente los legisladores del PAN en la Cámara y en el Senado, sino también Movimiento Ciudadano, el PRD y algunos legisladores de su partido, de Morena.

Dimos esa batalla y no pudo ser –lo vimos de la mano de la sociedad civil–, porque no teníamos los votos suficientes. En ese momento la entonces mayoría oficialista se opuso a que este cambio fuera posible. Exactamente igual que ahora su partido, la nueva mayoría oficialista, lo está evitando de la misma manera.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Continúe, diputada.

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Quiero continuar refiriéndome a lo que estaba diciendo. ¿Por qué queremos que se adicionen estas responsabilidades en el artículo 44? Pues porque hacer una remisión sencilla a la Ley General de Responsabilidades, no es suficiente.

Estos servidores públicos tienen una mayor responsabilidad que el resto de los demás, porque de ellos depende la libertad de personas o depende el castigo de delincuentes y por eso es que no basta una mera remisión a la Ley General de Responsabilidades.

Así que, en ese sentido, los invitamos a mejorar esta Ley Orgánica que han aprobado, e incluir estos párrafos sobre responsabilidades. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, consulto si se aceptan las modificaciones propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se desechan.

Tiene la palabra la diputada Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar reserva al artículo 7.

La diputada Marcela Torres Peimbert: Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Estimadas compañeras y compañeros diputados. No cabe duda que el poder nos cambia, y quienes apostaron junto con las organizaciones de la sociedad civil y conmigo, hace unos cuantos meses, para defender una fiscalía verdaderamente autónoma, que implica necesariamente, como lo acaba de decir impecablemente la diputada Rojas, modificar la Constitución, ahora que están en el poder han cambiado su percepción.

Ahora resulta que le llaman fiscalía autónoma a una institución donde el fiscal puede ser nombrado y removido por el presidente de la República, sin contrapeso de otros Poderes, y mucho menos controles ciudadanos.

Lo que se aprueba hoy no es una fiscalía autónoma, y esto manda una pésima señal a los mexicanos, más atole con el dedo en esta cuarta transformación.

Lo que estamos aprobando el día de hoy, es el modelo de procuración de justicia constitucional propuesto por el PRI y el expresidente Peña Nieto. ¿Esta es la cuarta transformación? ¿No que queríamos una reforma constitucional al 102 juntos?

Vengo a presentar dos reservas: una de fondo y otra de forma, que al mejor estilo autoritario sé que votaran en contra.

El plan de persecución penal pareciera un tema accesorio o sin relevancia dentro de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, estimadas compañeras y compañeros, este será uno de los documentos fundacionales en la persecución de los delitos en nuestro país, pues ahí se establecerán las prioridades y líneas de desarrollo de las actividades que realizará este nuevo órgano que es autónomo solo en el nombre.

Debemos recordar que uno de los principales objetivos de los órganos legislativos es el de crear leyes sin contradicciones o lagunas, es decir, vacíos normativos que permitan actos de discrecionalidad absoluta que hagan caer a la autoridad en la arbitrariedad.

En el caso del artículo 6o. estamos incumpliendo este objetivo, pues no se establecen principios o directivas que guíen al fiscal en la construcción del plan de persecución penal, confiriéndole una discrecionalidad absoluta para determinar qué es importante y qué no lo es.

¿Qué debe ser programáticamente privilegiado en la persecución del delito y qué no? Por ello el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional considera relevante establecer mínimos que limiten la discrecionalidad con la que cuenta el fiscal general para confeccionar el plan de persecución penal.

Esta honorable Cámara debe completar la redacción del artículo 6o. del dictamen que hoy nos ocupa para determinar las líneas sobre las cuales se debe diseñar el plan de persecución penal. Las líneas que proponemos, que se incluyen en la redacción del artículo 6o., están basadas en la propia naturaleza de la Fiscalía General, que es privilegiar la investigación y persecución de delitos complejos, de alto impacto, de severa agresividad social, de alto impacto social y de cuantías significativas.

Por otro lado, propongo también que se incluya en la redacción del artículo 7o. no solo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sino también a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La Fiscalía General, se dice en esta ley que es un órgano autónomo y, por lo tanto, su ley orgánica debería hacer referencia no solo a la ley general, sino también a la Ley Federal de Transparencia, puesto que ambas leyes le son aplicables en el tema de derecho de acceso a la información. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se desecha.

Tiene la palabra la diputada Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar reserva al artículo 7, hasta por cinco minutos.

La diputada Irma María Terán Villalobos: Gracias, presidente. La transparencia y el acceso a la información son fundamentales para la consolidación de un Estado democrático y de derecho, pero el acceso a la información tiene sus límites. El gobierno no puede dar a conocer datos personales ni información que vulnere los derechos de terceros. Es así que en el marco de la investigación penal se establece el principio de confidencialidad. Este principio es fundamental para salvaguardar los derechos de las partes del proceso. El imputado tiene derecho a que se presuma su inocencia y la víctima tiene derecho a su privacidad.

También el conocimiento de los pormenores de una investigación puede afectar la imparcialidad en el proceso, viciar la validez de las pruebas, lo cual dificultará la procuración de justicia.

Es precisamente por tales motivos que en el marco de la publicidad y la transparencia se establece el principio de la confidencialidad de la investigación.

De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, existen dos supuestos específicos de que la información no podrá ser reservada. El primero alude a casos de violación de derechos humanos. Y, el segundo, alude a la investigación de hechos de corrupción.

La reserva que presentamos al artículo 7 del dictamen de la minuta a la Ley Orgánica va precisamente en lo referido, a fin de garantizar el resguardo de los datos personales de aquellas personas que intervienen en un proceso y preservar la investigación.

Se adiciona un párrafo segundo al artículo, a fin de establecer que todos los datos de una carpeta son confidenciales.

Adicionalmente, y atendiendo a las excepciones marcadas por la Ley de Transparencia, se reforma el párrafo segundo de la minuta, tercero de la reforma, con el objetivo de aclarar que cualquier investigación relacionada con hechos de corrupción o violaciones de derechos humanos, no podrá ser clasificada como reservada.

Esto último versa en la lógica de que el interés de conocer la información anteriormente referida es superior al interés personal de preservar la información.

De este ordenamiento dependerá el funcionamiento efectivo de la procuración de justicia en nuestro país. Debemos ser cuidadosos y conformar leyes concordantes con el sistema jurídico, a fin de crear una procuración de justicia diligente, eficaz y, sobre todo, respetuosa de los derechos humanos. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando

la mano, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se desecha, y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene la palabra el diputado Hernán Salinas Wolberg, del Grupo Parlamentario del PAN, para hablar en pro, hasta por cinco minutos.

El diputado Hernán Salinas Wolberg: Con su venia, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Perdóneme, diputado. Para presentar la reserva al artículo 9.

El diputado Hernán Salinas Wolberg: Así es. Con su venia, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Hernán Salinas Wolberg: Lo que hoy venimos a presentar en esta reserva, para contextualizar el artículo 9, es el artículo que habla sobre las facultades de los órganos fiscales y el preámbulo de dicho artículo inicia señalando: los órganos que ejercen la función fiscal tendrán las siguientes facultades.

El tema que me trae en esta reserva es uno de gran relevancia y tiene que ver con la figura de extinción de dominio. Hay que recordar que la figura y la necesidad de incluir este contexto en nuestra legislación ha sido manifestada, no solamente por grupos legislativos sino por organismos de la sociedad civil, y aquí lo que encontramos es un error técnico muy puntual, muy claro en el dictamen que se nos está sometiendo a votación, porque en ninguna parte del dictamen se establece con claridad que la nueva fiscalía tiene la facultad de ejercer las acciones necesarias en materia de extinción de dominio de bienes en beneficio de las víctimas y ofendidos.

Es decir, si no incluimos de manera expresa en la Ley de la Fiscalía la atribución a ejercer esta función, estaríamos impidiéndole a este órgano constitucionalmente autónomo que pudiera precisamente ejercer este tipo de acción.

Es un tema de técnica legislativa, no es un tema que traiga algún componente político ni ideológico ni de ninguna otra situación, es simplemente por técnica legislativa. Si al ser la fiscalía un órgano constitucionalmente autónomo, si no se le agrega esa previsión puntual en el artículo 9, que habla sobre las facultades, corremos el riesgo de que esta nueva fiscalía no pueda ejercer una acción de extinción de dominio.

¿Y por qué es importante? Vamos a poner unas cifras muy puntuales.

En lo que fue de la administración que acaba de concluir, del expresidente Enrique Peña Nieto, solamente se aprobó la extinción de dominio por aproximadamente un valor similar a los 17 millones de dólares.

Sabemos y es de todos conocido de las ganancias de la delincuencia organizada, pero sobre todo de los crímenes de corrupción que ascienden en este país a decenas de miles de millones.

No es posible que estén haciendo un órgano como la Fiscalía Especializada sin tener dientes suficientes en la materia de extinción de dominio.

Realmente yo hago un llamado muy puntual a la mayoría, a los grupos parlamentarios que conforman este bloque mayoritario, a que analicemos con detenimiento esta reserva que estamos proponiendo, que –repito– no tiene ningún componente político ni ideológico, es simplemente un ajuste por técnica legislativa para garantizar de manera expresa que la nueva fiscalía, que quien detente en su momento esta función, pueda llevar a cabo las acciones en materia de extinción de dominio.

Estamos prontos, en unos días más, a votar unos dictámenes en materia de extinción de dominio, que van en reforma constitucional, pero si no le damos ahorita a esta fiscalía esta función, realmente corremos el riesgo de

que procesos jurisdiccionales en materia civil –que es donde finalmente se extingue a través de esta vía, perdón, se desahogan a través de esta vía–, los procesos de extinción de dominio no tengan un fundamento orgánico en la nueva ley.

Y creo que nos daríamos de topes como Poder Legislativo, como Cámara de Diputados si más adelante vemos que alguno de los criminales que con tanta ansia se busca perseguir y, sobre todo, que se busca que las víctimas recuperen parte de su patrimonio que se les quitó, no puedan recuperarlo por esta pifia, por este acelere que estamos cometiendo y, sobre todo, por una cerrazón de no querer cambiar ni un punto, ni una coma en un dictamen, cuando hay argumentos técnicos, no políticos, de peso para hacerlo. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene la palabra la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar, hasta por cinco minutos, reserva al artículo 9.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidente. En primer lugar, quiero, en mi intervención, referirme nuevamente al por qué de la necesidad del 102, que preguntaban hace rato legisladores de Morena.

No contar con un artículo 102 adecuado es el origen de que hoy no podamos tener una Ley Orgánica que nos sirva, porque es desde el origen del artículo 102 constitucional donde se estrecha la posibilidad de contar con una Ley Orgánica que garantice tener una Fiscalía autónoma y que realmente sirva a los intereses de las y los ciudadanos.

Y cuando éramos minoría ustedes y nosotros, en Movimiento Ciudadano dimos la batalla para que se reformara el artículo 102 constitucional. Y el PRI, que ahora está con ustedes y votó a favor, lo impidió.

Y ahora que ustedes son mayoría y que, junto con Movimiento Ciudadano tendrían los votos para reformar el artículo 102 constitucional y así poder tener la posibilidad real de contar con una fiscalía que sirva, vienen a repetir lo mismo que han repetido los del régimen anterior.

Entonces, se trata de un cambio para no cambiar nada. Se llama gatopardismo. No engañen a la gente, la gente votó por el cambio real y la gente votó creyendo que ustedes iban a hacer el cambio real, no viniendo a simular que cambian para no cambiar nada. Se llama gatopardismo.

Y me voy a referir a la reserva en el artículo 9, que también es importante que consideren. Hoy justamente acabamos de discutir y aprobar una minuta que llegó del Senado en materia de extinción del dominio, y como es importante poder armonizar las leyes, esta reserva –y espero que la puedan aceptar porque tiene que ver con ese objetivo– tiene como fin incorporar a lo que se establece en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que contempla en su artículo 229, el aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito, y que en el presente dictamen no se contempla un órgano fiscal encargado en la materia de recuperación de activos.

Actualmente esta facultad se encuentra implícita en el inciso j) del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y, en ese sentido, si más adelante se va a aprobar la extinción de dominio, necesitamos que en la Fiscalía General de la República exista esta facultad previamente establecida.

Y la propuesta de modificación es agregar una fracción XXI al artículo 9, de facultades de los órganos fiscales para ejercer las acciones que las disposiciones normativas en materia de extinción de dominio de bienes prevean a favor o en beneficio de las víctimas y ofendidos, y esto es con respecto, justamente, al catálogo de

delitos que se incorporaron al tema de extinción de dominio para delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

En estos casos se supone que habrá extinción del dominio, y debe haber un ente encargado de poder hacerlo factible. Por eso esta reserva, que espero sea aprobada por la nueva mayoría. Es cuanto. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene la palabra la diputada Martha Tagle, para presentar reservas a los artículos 14 y 28, en adición de artículo, recorriendo los subsecuentes.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Lástima que haya tan pocos legisladores interesados en este tema en este momento y particularmente legisladoras, porque el tema del que voy a hablar tiene que ver con algo que a las mujeres particularmente nos ha dolido y hemos estado expresando en múltiples ocasiones en esta tribuna, y tiene que ver con que en esta nueva ley orgánica se desaparece la Fiscalía Especializada para Atender los Delitos Contra las Mujeres y Trata de Personas.

Y se pretende crear una Fiscalía Especial de Derechos Humanos donde quepa todo y no quepa nada.

La Fiscalía Especial Fevimtra, para atender los delitos relacionados con los feminicidios y la violencia contra las mujeres, es un mecanismo institucional de procuración de justicia que requiere tener sustento en la ley, que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece.

Que, en el caso de no ser aceptada esta modificación a esta propuesta de ley orgánica, se tendrá que ir a reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que desafortunadamente no vamos a contar con un mecanismo especializado que se dedique a atender este que es uno de los principales problemas que hoy estamos enfrentando las mujeres, que tiene que ver con los feminicidios.

¿Por qué? Porque ahora esta Fiscalía de Derechos Humanos va a incorporar múltiples temas, cuando nos hemos cansado de decir –y quienes se dedican a estudiar además este tema, se han dedicado a argumentarlo y fundamentarlo– que la violencia de género tiene un origen diferente a las otras violencias que hoy se pretenden acumular en esta Fiscalía Especializada de Derechos Humanos.

La violencia de género parte de las desigualdades entre mujeres y hombres, que por concepto de cultura y sociológico están enfrentando las mujeres. En nuestro país están asesinando al día a nueve mujeres. Nueve mujeres son asesinadas diariamente solamente por el hecho de ser mujeres.

Y podrán decirme que los delitos que tenemos en nuestro país han alcanzado niveles insospechados y hay muchos más homicidios dolosos en nuestro país que nueve mujeres asesinadas diariamente. La enorme diferencia entre estos feminicidios y la otra violencia que se está viviendo en materia de homicidios, es que a las mujeres que están asesinando generalmente son asesinadas por parte de las personas más cercanas a su entorno. Es decir, por un hombre cercano a ellas.

Y a diferencia de los otros homicidios dolosos que existen, las mujeres son asesinadas generalmente con armas punzocortantes a diferencia de los homicidios dolosos que se dan por arma de fuego, porque están en contextos totalmente diferentes.

En ese sentido, requerimos una fiscalía especializada encargada de atender justamente los problemas que tienen que ver con la procuración de justicia a la violencia de género y no atenderlos desde el ámbito general o desde una fiscalía especializada en materia de derechos humanos, porque no solamente se violentan los derechos humanos de las mujeres, sino que aquí hay una violencia feminicida, y por eso la presente reserva busca generar en el artículo 14 esta fiscalía especializada y añadir un artículo 28 que le dé sustento al funcionamiento de una fiscalía especializada contra los delitos de violencia de género y particularmente en materia de feminicidios.

Espero, de verdad, que las legisladoras se puedan sumar a aprobar esta reserva que, insisto, se requiere, se necesita.

El discurso de que no ha funcionado y no ha servido déjenselo a los del régimen anterior. Si no ha funcionado y no ha servido es porque no ha habido la voluntad política para que una fiscalía de esta naturaleza funcione.

Ustedes que tienen el gobierno y que tienen el poder para hacerlo, hagan que esto funcione. Es cuanto. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene la palabra el diputado Jacobo David Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de MC, para presentar una reserva al artículo 16, hasta por cinco minutos.

El diputado Jacobo David Cheja Alfaro: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hoy somos testigos de la recurrente y vieja práctica de legislar al vapor, de imponer aprobaciones exprés. Es decir, la presente minuta tiene demasiadas observaciones y modificaciones que deberían realizarse, pues nuestra obligación es la de crear un andamiaje jurídico institucional digno para nuestra nación.

La omisión legislativa nos obliga a las y los diputados a presentar reservas elementales para buscar perfeccionar la minuta remitida del Senado, pero, sobre todo, para buscar asegurar el profesionalismo y experiencia necesaria para quien requiere ser el perfil que asuma la Fiscalía General de la Republica.

Son incontables los casos en los que la impunidad no solo hace ver mal a las instituciones, sino además vulneran el derecho de las víctimas, aun y cuando existen suficientes elementos y pruebas para acreditar la culpabilidad de los delincuentes.

Con el nuevo sistema de justicia penal, vemos que los abogados ahora observan con lupa qué errores u omisiones se presentan durante el proceso más que demostrar la inocencia de quiénes defienden. Es decir, buscan encontrar en la representación social errores que permitan la liberación de los que delinquen.

Para Movimiento Ciudadano no puede existir una justicia pronta y expedita si no existe una real y profesional representación social que vele por los intereses e integridad de las y los ciudadanos.

Anteriores procuradores de justicia han sido omisos y, por qué no decirlo, incluso cómplices, al empantanar averiguaciones previas o llamadas carpetas de investigación en casos como el de La Paca, San Salvador Atenco y, recientemente, el caso Ayotzinapa, por citar algunos.

Tal pareciera que los requisitos que están planteados en la iniciativa son a modo para designar a un amigo o fiscal carnal, cuyo único mérito sea contar con título de licenciado en derecho por 10 años.

¿Cómo podemos exigir a mandos medios y superiores conocimientos y experiencia indispensables en el derecho penal si al fiscal general no se le exige lo mismo?

Por lo anterior, compañeras y compañeros, a nombre de las y los diputados de Movimiento Ciudadano, ponemos a su consideración que se aumenten los requisitos para quien aspire a ser el fiscal general de la República y este deba contar con amplia experiencia comprobable en materia penal y procuración de justicia.

Por tal razón, presento la reserva al artículo 16 de la presente minuta, con la finalidad de que se integre el requisito ya comentado para que la persona que ocupe el cargo no llegue como el ex canciller, a aprender, sino que llegue a supervisar y actuar con diligencia necesaria para dirigir la principal institución de investigación de los delitos y la procuración de justicia en el país.

Por lo tanto, proponemos: artículo 16, fracción IV. Ser experto y tener amplio conocimiento comprobable en la materia penal y procuración de justicia. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene la palabra la diputada Martha Tagle Martínez, para presentar reserva al artículo 20, hasta por cinco minutos. Diputada Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidente. En experiencia de otros países, Brasil, por ejemplo, se ha pensado en una figura que pueda fungir como contrapeso ante un fiscal general, sobre todo en casos de corrupción, pero en el caso de la minuta de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que hoy discutimos, se plantea la creación de una figura llamada Coordinación General, a la que se le otorgan amplias facultades, incluso más allá de las atribuidas al propio fiscal.

Tengan mucho cuidado, no estamos haciendo con esta ley un fiscal carnal, sino un fiscal decorativo, porque le dan al coordinador general más facultades que al fiscal general, y espero que a las personas que propongan para ocupar este cargo, por dignidad no lo acepten, porque será un papel de figura decorativa, que será contra su propia profesionalización. El coordinador general aquí ocupa todas las facultades.

Una coordinación general podría entenderse bajo una lógica operativa, como en el área jurídica y administrativa en apoyo al fiscal general; sin embargo, la figura de la Coordinación General de la Fiscalía General de la República establece facultades de suplencia del fiscal, pero al mismo tiempo se le atribuyen facultades propias de las fiscalías especializadas, incluso algunas que debieran ser facultades exclusivas del fiscal. Algunas de coordinación en investigación y persecución penal, que la ley prevé para el sistema completo y detallado para el servicio profesional de carrera, y la ejecución y vigilancia está encomendada, por el artículo 59, al Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera.

Fraseando de una manera más detallada y adecuada; además, dicho centro cuenta con autonomía técnica y de gestión, con lo que el coordinador general no cuenta. Y, lo más grave, al ser una figura que concentra tantas facultades, no se establece con claridad cómo se designará a la persona titular de esta área.

Por lo anterior, se propone modificar el artículo 20, para quitar estas atribuciones del coordinador general y dejarle esos asuntos encargados directamente al fiscal general de la República.

La idea sería, en el artículo 20, eliminar todos los párrafos numerados con el 3, 4, 8, del 9 al 10, para que así efectivamente estas facultades pasen a ser del fiscal general de la República.

Insisto, están buscando hacer una ley no solamente que no cumpla con las características ya estrechas que les permite el artículo 102 constitucional, que va a ser un fiscal que pueda ser nombrado y removido por el presidente de la República, lo mismo que las fiscalías especializadas, que ya incluso les hicimos mención aquí de lo que sucede, como sucedió con el caso del fiscal Santiago Nieto. Esos son los límites que da el 102.

Ahora, en este diseño institucional, además están quitando facultades al fiscal general para dejarlas en manos de un coordinador general, que además ya está nombrado quién va a ser el que realmente ocupe las funciones del fiscal general, y que además ni siquiera va a tener que pasar por manos del Senado de la República, porque ni siquiera se establece un mecanismo de nombramiento de esta persona.

Por eso es que, lo mínimo es que esta persona que sea coordinador general venga del servicio civil de carrera, y que no sea nombrado también de manera indiscriminada por el fiscal o alguna otra persona. Se tienen que poner criterios mínimos para nombrar el coordinador general, quién será quien, en realidad, con esta ley, tendrá las atribuciones de procurar justicia. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se desecha, y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Presidencia de la diputada Dulce María Sauri Riancho

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para realizar reservas a varios artículos.

Señora diputada, si me permite un momento, quisiera pedirle a la Secretaría que dé lectura al artículo 111 del Reglamento de la Cámara de Diputados, previo a su intervención.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: Sí, presidenta. Artículo 111. Se podrán discutir varios artículos reservados al mismo tiempo, cuando quien haya hecho la reserva lo solicite al presidente. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, secretaria. Señora diputada, de acuerdo al artículo 111 del Reglamento, le solicito atentamente me indique si desea hacer su exposición de las distintas reservas en un solo acto o cuál de los artículos desea usted comentar en esta ocasión.

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez: En un solo acto, por favor, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, diputada.

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez: Gracias, con su venia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el pasado 22 de noviembre, en reunión con junta directiva, la Comisión de Justicia convocó para el 26 de noviembre a ciudadanos, organizaciones, expertos, instituciones académicas y representantes de diversos grupos de la sociedad civil a realizar el análisis de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, las aportaciones realizadas por la sociedad civil fueron completamente ignoradas por la comisión, sin importar los esfuerzos que, como integrantes de la junta directiva, se realizaron en favor de ellos.

Es por esto que el Grupo Parlamentario del PRD ha retomado todas estas aportaciones y las presentamos en este acto, reivindicando los ejercicios del parlamento abierto y expresando nuestro más alto reconocimiento a estas organizaciones y a estas personalidades de la sociedad civil.

Al realizar el ejercicio de parlamento abierto, esta soberanía recogió observaciones hechas por las organizaciones, quienes presentaron diversas propuestas de cambios en la estructura y organización de la Fiscalía General dentro de la minuta.

Las organizaciones sociales, en su afán de contribuir a un mejor diseño institucional, presentaron modificaciones relativas al nombramiento del fiscal general. Tal como se establece en el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las atribuciones del fiscal general son indelegables, de manera específica las facultades de la Coordinación General, en razón de la relevancia que toma la persona que podrá, en un momento dado, suplir al fiscal y que este deba pasar por un proceso de designación conforme a lo previsto en el artículo ya mencionado.

Otra de las observaciones que se realizaron en esa reunión, es que debe contemplarse un régimen especial de responsabilidades de los servidores de la fiscalía, ya que en la minuta el órgano de control carece de fundamento jurídico para ejercer sus funciones.

Por tal motivo, resulta imprescindible incorporar el régimen de responsabilidades, sanciones especiales que rigen actualmente a la Procuraduría General de la República, para tener un régimen equivalente para los integrantes de la Fiscalía General.

Estas son solo algunas aportaciones recogidas durante este ejercicio de parlamento abierto, y es importante hacer mención que, al no tomarse ninguna propuesta hecha por las organizaciones de la sociedad civil, únicamente se refleja la premura de parte del grupo mayoritario de Morena para no ejercer las facultades y obligaciones que como Cámara revisora tenemos, al querer aprobar un dictamen al cual no se le mueve ni un punto ni una coma, cuyo resultado final es sin duda un fiscal carnal, un fiscal a modo que da paso a la impunidad.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD considera pertinente retomar las propuestas hechas en la reunión que ya he mencionado, coincidiendo en los planteamientos para que la Fiscalía General de la República deba constituirse como un órgano público verdaderamente autónomo. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Esparza. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas sobre los siguientes artículos: 9o., 19, 21, 29, 32, 33, 44, 47, 56, 58 y decimosegundo transitorio.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión los artículos mencionados por la presidenta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene la palabra el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar reserva sobre el artículo 11.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en el PRI consideramos que la consolidación de la autonomía de la institución del Ministerio Público es fundamental para garantizar una procuración de justicia eficaz, eficiente y garante de los derechos humanos.

Es por ello que, desde la reforma constitucional de 2014, impulsamos las modificaciones del artículo 102, para crear la Fiscalía General de la República como órgano autónomo constitucional.

El dictamen de la minuta que discutimos no es menor, la Ley Orgánica de la Fiscalía regirá la operatividad de una de las instancias más importantes del país. De ahí que resulte necesario construir una legislación sólida que garantice el efectivo ejercicio de la función de procurar justicia.

La reserva que planteamos al artículo 11 del dictamen va en ese sentido. El artículo referido alude a los órganos encargados de realizar la función de fiscal, pero este artículo es impreciso.

Lo explico: la fracción II del citado artículo alude a los titulares de las fiscalías especializadas en materia de derechos humanos, delitos electorales, combate a la corrupción y asuntos internos. Posteriormente, la fracción III hace referencia nuevamente a fiscales especializados.

La imprecisión en la redacción está en que, de acuerdo con la minuta, los fiscales especializados son los titulares de las fiscalías especializadas en materia de derechos humanos, delitos electorales, combate a la corrupción y asuntos, internos. Es así que el artículo 11 enumera la misma figura en dos ocasiones, pero con distinta redacción.

Si se realiza un análisis sistemático y funcional de la norma, se puede constatar que la ley contempla dos tipos de fiscales, los que forman parte del servicio profesional de carrera y los especializados, quienes son nombrados por el fiscal general y cuyo nombramiento o remoción puede ser objetado por el Senado de la República.

Estos últimos son los titulares de las cuatro fiscalías que aparecen perfectamente definidas en la minuta, pero el artículo 11, al contrario de la redacción de todo el proyecto legislativo, primero se refiere a los fiscales de las fiscalías especializadas y posteriormente a los fiscales especializados, como si existieran dos tipos de fiscales especializados diferentes. De ahí que la reserva presentada pretende eliminar la fracción III a fin de dar congruencia, orden y claridad al dictamen.

La procuración de justicia eficaz, eficiente y expedita es fundamental para nuestro país. Démosle claridad a la ley, cuidemos la congruencia y estructura del texto normativo para que este naciente órgano autónomo constitucional opere de manera eficaz.

Compañeras y compañeros diputados, como ha sucedido en ocasiones recientes, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hemos dado muestra de que el papel que deseamos tener y representar en este Congreso es el de una oposición responsable, una oposición que señale los posibles errores, pero también que ponga a consideración del pleno cuáles son las posibles salidas para que no haya estos errores.

Yo les quiero comentar a ustedes que seguiremos en ese mismo sentido. Hoy esta ley naciente presenta varios errores como el que aquí he señalado y como los que han señalado los diferentes diputados que me han antecedido en el uso de la palabra.

Entiendo que hay una premura por sacar esta ley. Entiendo que tienen ustedes prisa por sacarlo, pero quisiera pedirles, de manera respetuosa, que se den la oportunidad y que nos den la oportunidad, en el periodo que sigue, para que todo esto que hoy no se va a poder corregir lo hagamos de manera oportuna por el bien de los mexicanos, por el bien de la justicia en nuestro país.

Solo deseamos que a nuestro país le vaya bien. Solo deseamos que nuestro país tenga un fiscal que verdaderamente represente lo que todos nosotros deseamos, autonomía, eficacia y eficiencia en la procuración de justicia. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Zarzosa.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Con qué objeto, señor diputado? Diputado Jorge Espadas.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Muchas gracias, diputada. Vista la negativa al debate, supongo que se debe a que no existe quórum, a juicio de un servidor, por lo cual le solicito con fundamento en el artículo 46, apartado 2, de nuestro Reglamento, se proceda a la verificación de quórum.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Señor diputado, dado que estamos en un debate y que el Reglamento autoriza la petición que usted acaba de realizar, pido a la Secretaría que en términos del artículo 46, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, abra el sistema electrónico de asistencia por 10 minutos para que las y los diputados que se encuentran en sesión en diversos salones de este recinto, puedan acudir a verificar su asistencia.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2...

El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, señora secretaria. Señor diputado Lixa, ¿con qué objeto?

El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Por una duda de procedimiento, presidenta. Las veces que han verificado quórum, la Mesa Directiva, bajo su Presidencia, el criterio ha sido de cinco minutos. ¿Cuál es el criterio en unos momentos aplicar cinco minutos y en este caso 10 minutos? Para ilustrar al pleno de esta situación.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias por la pregunta, diputado Lixa. Justamente me correspondió una verificación de quórum e inicialmente di los cinco minutos.

En esa ocasión el diputado Fernández Noroña –espero que no me pida la palabra por alusiones personales– solicitó cinco minutos más en atención de que había un número importante de legisladores que estaban acudiendo a las distintas sesiones de las comisiones. Esa es justamente la razón por la cual doy 10 minutos. Ahora, si usted me solicita, le hablo en términos reglamentarios, le diré que son 15 minutos. Entonces ábrase el sistema por 10 minutos.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a verificar el quórum de este pleno.

(Verificación de quórum)

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañeras y compañeros diputados, continuará abierto el sistema de verificación del quórum, pero podemos continuar con la sesión en tanto.

Quiero hacer una puntualización: el diputado Elías Lixa se acercó a esta Presidencia y marcó con claridad que el inciso tres del artículo 111 del Reglamento de esta Cámara señala que, en caso de no haber logrado el quórum, se dispondría de 15 minutos antes de levantar la sesión.

En este sentido quiero señalarles a todos ustedes que el tiempo de verificación del quórum está a juicio de la Presidencia, no establecido en el Reglamento.

En atención a la precisión, quiero dejar esto claramente establecido. Esta Presidencia decidió que fueran diez minutos, pero fíjense, no hemos agotado ni los primeros cinco y ya logramos el quórum correspondiente. A los diez minutos se cerrará el sistema.

Continúe la Secretaría consultando en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, al artículo 11 del proyecto a discusión.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando

la mano. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se admite a discusión.

Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Medina Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, en contra.

El diputado Marco Antonio Medina Pérez: Con su venia, diputada presidenta. Como decía un clásico hace algunos días, aquí mismo en esta tribuna, ahora resulta que los diputados del PAN quieren definir los tiempos legislativos.

Pero ya cambiaron los tiempos, y ahora hay una nueva mayoría y se definen de otra forma los ritmos con los cuales tiene que avanzar el país, y los ritmos legislativos están en función de las necesidades de la nación.

Y esos ritmos tienen que ver precisamente con el avance de una reforma que quedó en suspenso hace cuatro años. Esa reforma es la que ahora nos ocupa. Durante cuatro años no fueron capaces de crear los consensos necesarios para darle una salida legislativa a la iniciativa, y ahora que Morena la está impulsando, ustedes son los que la quieren frenar.

Nos queremos referir a la reserva del artículo 11, que, en efecto, el diputado que la presentó tiene una preocupación central, una preocupación importante, una preocupación que nosotros recogemos y por eso estamos aquí debatiéndola.

La consideramos tan importante que, como decía Octavio Paz, recogemos el debate, recogemos la discusión precisamente por esa razón.

Tenemos, en efecto, una dualidad. Titulares de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, en materia de Delitos Electorales, en materia de Combate a la Corrupción y en materia de fiscalía especializada de Asuntos Internos, y tenemos enseguida titulares de las fiscalías especializadas.

Ya se ha dicho aquí, en varias ocasiones, el carácter flexible de la Fiscalía, tal y como se está organizando, y queremos darle también carácter flexible a las titularidades de otras fiscalías que pudieran no preverse en este momento, pero que sí tendrían oportunidad de constituirse para desarrollar temas específicos.

Es una respuesta que brindamos al diputado que presentó la reserva. Por eso no creemos que se trate de un error, sino de una flexibilidad por parte de este dictamen para poder otorgar esta propuesta integrada de la mejor manera.

Hoy también quiero dar alguna respuesta a otras cuestiones que se han planteado sobre este artículo. En la fracción V del precepto en cuestión se establece que el titular de la Coordinación General tendrá a su cargo la función fiscal, siendo una excepción a la regla principal que lo establece como un órgano administrativo que mantiene el funcionamiento interno y es enlace con otros entes públicos.

La razón de por qué se asumen funciones derivadas de la situación general de la fiscalía, es que no se distraigan las funciones de los otros fiscales. Debemos atender los asuntos que implican la investigación y persecución del delito; hacerlo de manera distinta nos lleva a dejar en la ausencia del fiscal general hechos muy importantes de investigación.

Por esa razón pensamos que este artículo está plenamente fundamentado, y por eso vamos a votar a favor de como está en el dictamen el artículo 11. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Medina Pérez. Tiene la palabra el diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Ciérrese el sistema de verificación de quórum.

El diputado Benjamín Robles Montoya: Gracias, diputada presidenta. Muchas gracias. 443 compañeras y compañeros se habían registrado, pero desde aquí se ven más cartulinas y auxiliares que compañeros del Grupo Parlamentario del PAN que pidieron la verificación del quórum.

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta alta tribuna para hablar a favor del texto que se contiene en el dictamen, en relación a este artículo número 11. En el mismo, como lo sabrán quienes sí lo leyeron, se establecen las unidades administrativas que pueden asumir la representación de la institución. De ellos, tres están previstos directamente en la Constitución. A saber, por aquellos que no lo leyeron: titular de la Fiscalía General de la República, Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.

Las nuevas unidades, compañeras y compañeros, creadas en esta ley, son Derechos Humanos y Asuntos Internos, cuyas competencias están perfectamente contenidas en la ley y que coadyuvarán a que la procuración de justicia sea más eficaz.

Lo que en muchos compañeros y compañeras genera suspicacia innecesaria es la creación de la Coordinación General, que entre sus facultades tiene la de sustituir o suplir al fiscal general. Pero hay que tener presente que al interior de todo órgano administrativo existe un régimen de suplencias que opera ante la ausencia temporal o definitiva del titular, y en este caso del titular de la Fiscalía.

Pero deben estar seguros y seguras, compañeras y compañeros, que se tendrá especial cuidado en quien ocupe la titularidad de esta Coordinación General y, sobre todo, que cumpla con los mismos requisitos constitucionales que se establece para el fiscal, y no será como en el caso que recientemente vimos, del anterior encargado de despacho, donde operó el régimen de suplencias previsto en la vigente Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, sin que cumpliera los requisitos para ser procurador, según ahí se establece.

Por esas consideraciones votaremos a favor de como viene el dictamen. Es decir, en contra de esta reserva presentada a este artículo 11.

Solo quiero decir, antes de dejar esta tribuna, algo que me parece fundamental. Hemos aprendido en México que ahí donde hay más ciudadanía las cosas funcionan mejor, y ese es el tipo de Fiscalía que queremos construir en la cuarta transformación, le duela a quien le duela. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Robles Montoya. Tiene la palabra el diputado Jorge Espadas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Muchísimas gracias, presidenta, con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, como dijera aquel filósofo mexicano, oh, qué gusto de volverlos a ver, bienvenidos a esta su casa.

Fíjense que hablar de reservas, en lo particular, a favor o en contra, es parte del debate, y qué bueno que quien me antecedió en el uso de la palabra vino a debatir lo que no se reservó. Es el problema cuando nos dan un discurso y tenemos que venir aquí a leer, porque lo que natura no da, Salamanca no lo presta.

La reserva que hizo el diputado que formuló la misma, refiere a un tema de técnica legislativa. No dice que no a nada. Nada más dice que si ya mencionamos a los titulares de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, Delitos Electorales, Combate a la Corrupción, y la Fiscalía de Asuntos Internos no tiene caso poner otra fracción que diga: y estas fiscalías.

Es un tema de técnica legislativa, más de alguno lo va a entender de los diputados y las diputadas de Morena, estoy seguro que lo entienden, no es decir que no, es decir: miren, está Juan, Pedro y Manuel y todos ellos. Para qué decimos: y todos ellos. No tendría caso esta reiteración, esa es la reserva, no todo el choro que vino a leer quien me antecedió en el uso de la voz. Por eso es importante escuchar lo que están proponiendo, para poder decir si estamos de acuerdo o no.

Lamentablemente encontramos aquí oídos cerrados y lectura de discursos, sin que tengan nada que ver con la reserva. Veo por qué la negativa al debate, no hay con qué. Porque no se quiere, porque talento lo hay, lo hay

y lo reconozco, nada más que no se quiere utilizar en esta tribuna, ojalá y en lo sucesivo, lejos de venir a leer un discurso, debatamos por qué no a la propuesta de la diputada o el diputado que hace la reserva.

Este es un tema de técnica legislativa, es un tema de forma, no de fondo. Ojalá y lo puedan ustedes madurar, matizar, y aquellos que están gritando, porque no hacen de otra siempre, ojalá y suban a la tribuna a debatir el tema de la reserva, que consiste en una mejora en la redacción, creo que no me voy a explicar, por eso no haré mayor esfuerzo. Muchísimas gracias por su atención.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Espadas. Para hablar en contra tiene el uso de la palabra la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna: Los autores del desastre en materia de inseguridad y los que han entregado los mayores índices de impunidad quieren aquí darnos clases de técnica legislativa, pero en realidad no han leído correctamente el artículo 11.

El artículo 11 tiene dos tipos de fiscalías: las fiscalías mencionadas aquí, la de Derechos Humanos, Delitos Electorales, Combate a la Corrupción y Asuntos Internos, y otras que ordena también la ley, que son las fiscalías especiales que se derivan de la Fiscalía de Derechos Humanos, la de mujeres, la que persigue el interés superior de la niñez, el tema de tortura, de periodistas y todas las que han luchado a favor de grupos de la sociedad civil que están marcados en el segundo párrafo de este artículo y es de la mayor importancia.

Pero aquí también se ha dicho que, dentro de los órganos de la Fiscalía, además de las Fiscalías está el tema del coordinador. Y se han dicho mentiras garrafales que por eso me permito precisar. El coordinador general va a tener muchas facultades, menos la de investigar y acusar, porque la facultad de investigar y acusar es exclusiva del Ministerio Público, del fiscal general. Y hay mucha diferencia entre el fiscal general, que puede investigar y acusar, y un coordinador general, que podrá tener muchas facultades, menos la del Ministerio Público.

La Coordinación General aquí está desarrollada con funciones sustantivas de protección a víctimas para participar en la elaboración y el diseño de la política criminal para articular la relación de las fiscalías especializadas con el fiscal general.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame, diputada. Diputado Espadas, ¿con qué objeto? Sonido. Adelante.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Muchísimas gracias, presidenta. Nada más para pedir una moción de que se avoquen al tema. La reserva es sobre las fiscalías, como bien lo señaló la diputada oradora, las fiscalías especializadas y la denominación expresa en las fracciones anteriores, pero ya se pasó a una reserva anterior, que no es tema de esta reserva.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias por ilustrarnos, diputado, pero la diputada está haciendo uso de su derecho de participación sobre el tema.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pero que no se equivoque el diputado, el tema que él pide viene en el artículo 14. Si quiere, y también me toca explicarlo, cuando toque el 14 hablamos de las fiscalías, las unas y las otras. Ahorita estamos en el 11, que es la estructura orgánica de la Fiscalía y no es lo que usted está refiriendo.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, compañera diputada. No fue una pregunta sino una moción, pero que revistió forma de pregunta y que ha sido respondida. Adelante, por favor.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ya me quitaron un minuto. Bueno, y mi compañero Marco Antonio se refirió al tema de la suplencia, porque el coordinador general suple de manera temporal o definitiva al fiscal, mientras se nombra otro fiscal.

Sin embargo, dentro de lo que está señalado en el artículo 11 –estas fiscalías– vienen las funciones, también en la de Derechos Humanos, pues va a combatir las violaciones a los derechos humanos y todo aquello que afecte la integridad, la vida, el patrimonio, la libertad de las personas.

La Fiscalía de Delitos Electorales podrá conocer los hechos delictivos durante los procesos electorales, los procesos de consulta popular y todos aquellos que se refieran a la democracia directa.

La Coordinación de Investigación y Persecución hará todas las tareas necesarias de investigación y persecución cuando no se trate de las fiscalías especializadas.

El tema de la coordinación de métodos de investigación proporciona todo el personal especializado, los peritos, las policías en las áreas de investigación para que se puedan integrar las carpetas.

Viene también la Coordinación de Planeación y Administración; se juntan, en una, dos funciones muy importantes para eficientar al interior el funcionamiento de la Fiscalía.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, el tiempo ha sido compensado.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna: Sí. Y admito el de usted, presidenta, no el de muchos presidentes.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Padierna. Para hablar en pro tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: Con su venia, presidenta. Pues creo que está muy claro, amigas y amigos diputados, cuál es el fondo del asunto de esta reserva. Pero insisto, cuando faltan argumentos vienen ocurrencias, tratan de confundir a la gente, tratan de confundir a la ciudadanía.

Esto es muy claro. Lo leo. El artículo 11 señala órganos a cargo de la función fiscal.

Primero dice: titular de la Fiscalía General de la República. En la segunda fracción: titulares de la Fiscalía Especializada en Materia en Derechos Humanos, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos. Luego, en la fracción III mencionan: titulares de las Fiscalías Especializadas.

Entonces, que alguien me explique cuáles son estas, porque ya mencionamos a las otras cuatro. Si bien el diputado que me antecedió, uno de los diputados que me antecedió en el uso de la palabra, mencionaba que debía haber flexibilidad, estoy totalmente de acuerdo. Pero también le hago una pequeña observación: un principio general de derecho marca que la ley no debe de causar confusión, y aquí en estas dos fracciones hay confusión, porque pareciera que deja abierta a otras fiscalías especializadas que en este momento no existen, no sabemos si el día de mañana se van a crear, se van a poner a consideración de este pleno, pero en este momento no existen, solo existen las que marca la fracción II.

Insisto, sé que a pesar de que hoy les digamos que el cielo es azul y que nuestra sangre es roja, pues ustedes van a decir que no. Que el cielo tiene nubarrones y que la sangre sí es de príncipe es azul. Pero bueno, ni modo. Este es su parecer. Ese es su punto de vista.

Sabemos, insisto, que tienen prisa en sacar esta ley hoy, a pesar de los múltiples errores que hemos mencionado, uno tras otro, que han sido claramente explicados. Yo diría demasiado explicados y que, desafortunadamente, por la cerrazón, por la prisa que tienen de sacar esta ley, pues simplemente no van a aceptar ninguna reserva.

Insisto, y vuelvo a llamarlos con todo respeto, para que ojalá y en el próximo periodo ordinario se dé esta oportunidad y que podamos corregir lo que hoy estamos aprobando aquí, que de hecho ya va con muchos errores.

Esperemos que las próximas leyes que pongan a consideración de este pleno, el nuevo gobierno, que vengan con menos errores, que nos dejen ayudarles, es por su bien y es por el bien de todos los mexicanos. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Zarzosa. Consulte la Secretaría a la asamblea si este asunto se encuentra suficientemente discutido.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: En votación económica, se consulta a la asamblea si este asunto está suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, si se acepta la modificación presentada por el diputado Zarzosa Sánchez, al artículo 11.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: En votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la modificación presentada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar su reserva sobre el artículo 14.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias, presidenta. Compañeros y compañeras legisladoras. El artículo 14 del dictamen que hoy se discute resulta de gran relevancia porque establece la estructura que tendrá la fiscalía general.

A simple vista podemos constatar las grandes ausencias de la estructura que tendrá esta fiscalía. De entrada, se eliminan fiscalías especializadas sustantivas y será decisión del fiscal restablecerlas o establecer si se establecen en la estructura, porque no están por definición dentro de la estructura de la ley, pese a que, justo esas materias están reservadas a la federación.

Es decir, de acuerdo con el artículo 73, serán materia central de la actuación de la fiscalía general, como podemos constatar en el artículo 73, fracción XXI. Me refiero a los casos de delincuencia organizada, trata de personas, entre otros, lo cual implica que ya de entrada tenemos un problema.

Por otro lado, uno de los grandes retos que estableció la reforma que crea el sistema penal acusatorio fue el redimensionamiento del papel de la policía, que tendrá a partir de esta reforma una mayor participación y una mayor relevancia en la etapa de investigación y previo a la etapa intermedia y del juicio oral.

No nos vamos a referir aquí a los nuevos deberes de la policía, como el auxilio a las víctimas, practicar la detención en casos de flagrancia, o su papel cuando actúa como primer respondiente. Nos estamos refiriendo al desarrollo material de la investigación penal, y que además está la investigación penal a cargo de la policía; es la razón para que dentro de este nuevo órgano constitucional autónomo se cuente con una policía.

Y es que uno de los problemas que subsisten en la operación del nuevo sistema penal, radica en la falta de coordinación de la policía y el Ministerio Público en materia de investigación; otro radica en que no se ha desarrollado con la fortaleza necesaria la formación de agentes de policía de investigación para hacer frente a los problemas que impone el nuevo sistema penal.

En suma, pese a los cambios establecidos en la Constitución y que dieron origen al sistema nacional de seguridad pública, el sistema policial no ha experimentado cambios profundos y se continúa con modelos policiales propios del sistema inquisitivo.

La nueva fiscalía deberá responder a los retos que impone el sistema penal acusatorio, y sobre la demanda ciudadana de ser garante de su derecho de acceso a la justicia, y que el proceso penal, tal como dispone el artículo 20 constitucional, tenga como premisa el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente y que el culpable no quede impune.

Por ello consideramos que la función material de investigación que nuestra Constitución confiere a la policía debe ser el motor para que esta tuviera relevancia y fortaleza en su función. Por ello resulta fundamental transitar hacia la consolidación de una política de investigaciones profesional, con autonomía técnica en sus funciones, y esto no está reflejado en el dictamen.

Sí revisamos el artículo 14, pareciera que no hay policía, por eso nuestra propuesta es que, dentro de las adiciones al mismo artículo, se complementen estableciendo puntualmente a la Policía Federal Ministerial, dentro de este listado que conforma la estructura.

Efectivamente, hay otros artículos que se refieren a la existencia de la policía, pero no está como en la parte central de la estructura, pareciera que le estamos dando un segundo lugar.

Lo mismo sucede en el caso de los servicios periciales, aun cuando en esta triada investigativa el papel del Ministerio Público, el perito y la policía, tienen un papel fundamental, pues tampoco los servicios periciales están dentro de la estructura del artículo 14, y por ello estamos solicitando también que se incorpore al artículo 14, dentro de la estructura del mismo, el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

También, atendiendo a esta omisión de incluir a fiscalías especializadas sustantivas, estamos proponiendo que las mismas se integren al artículo 14, tanto la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada como la Fiscalía Especializada en Delitos Federales, que incluya la persecución de delitos relativos a las materias fundamentales que deben atender en estos temas, y que simple y sencillamente se han desaparecido de la minuta.

Ha sido una constante la inacabada propuesta para fortalecer la autonomía y la profesionalización de áreas tan sensibles como estas que acabo de referir...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Concluyo, concluyo presidenta. Y por ello estamos tratando, con estas propuestas de modificación, de adicionarlas al artículo 14 y establecer una estructura que responda a los retos que tendrá la Fiscalía.

Y estamos dando cuenta puntual de cuáles son las razones por las que estamos haciendo estos cambios; en ese mismo sentido, nos gustaría saber y que se abriera el debate para discutir...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Sí, presidenta. Estamos haciendo varias modificaciones al artículo 14, y por eso solicito tolerancia, para efecto de pedirle a este pleno que se abra una discusión seria acerca de los temas que hoy, de manera técnica y jurídica, estamos expresando. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ortega Martínez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta realizada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.

Tiene la palabra la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar reserva sobre el artículo 14.

La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez: Con su permiso, presidenta. Qué incongruencia estar en la legislatura de la paridad y tener una evidente mayoría que está votando en contra el discutir la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos en contra de la Mujer, de la trata de personas y del secuestro.

En México, los feminicidios, el abuso sexual y la violencia contra la mujer son delitos que se encuentran directamente relacionados con actos discriminatorios que atentan en contra del 30 por ciento de la población nacional y que son inadmisibles en la práctica, y peor aún, en la letra de la nueva fiscalía, en manos de esta primera legislatura paritaria.

De enero de 2015 al 30 de junio de 2018 se registraron 2 mil 68 feminicidios, en esas mismas fechas se reportaron 9 mil 229 violaciones y 171 mil 877 actos de violencia física contra mujeres.

Por su parte, la trata de personas constituye el tercer negocio más lucrativo del crimen organizado, tan solo por debajo del narcotráfico y el tráfico de armas. Y qué decir de los secuestros. Tan solo en lo que va del año se han abierto 14 mil 925 carpetas de investigación relacionadas con delitos que atentan contra la libertad personal.

A pesar de estos alarmantes datos, el dictamen que discutimos –atención diputadas, atención mujeres–, este dictamen no contempla la existencia de fiscalías especializadas que investiguen estos delitos con autonomía técnica y de gestión. Por el contrario, limita los actos de investigación y los subordina a una coordinación con pocos recursos y sin personal especializado, lo cual no resuelve la magnitud de estas graves problemáticas.

Además de que la fiscalía no tendrá plena autonomía como exige la sociedad civil, también es claro el desconocimiento que Morena tiene de la investigación penal, y pareciera también desconoce de la función principal de la Fiscalía General de la República, que es defender los intereses del Estado y de la sociedad, por ende, de nosotras las mujeres.

En el marco del sistema acusatorio adversarial, el fiscal debe contar con conocimientos especializados a fin de conducir una investigación diligente, que permita recabar los datos de prueba necesarios para judicializar los delitos.

Para atender la incidencia delictiva se requiere especialidad técnica, perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, conocimiento de atención a grupos vulnerables y técnicas de negociación. Por ello, la reserva que planteamos prevé la creación de una fiscalía de delitos contra la mujer, una fiscalía especializada en trata de personas y una más centrada en secuestro.

Como legislatura, nos hemos comprometido a respetar y defender los derechos humanos de todos los ciudadanos. Hoy tenemos la oportunidad de realizar un cambio trascendental en la investigación y persecución de estos delitos. La incorporación de esta fiscalía permitirá hacer frente a estos fenómenos de manera contundente.

Si queremos, como dicen quienes me han antecedido en el uso de la voz de la mayoría, si queremos estar del lado correcto de la historia, y en los hechos reivindicarnos con las mujeres y con las víctimas, como se ha dicho en esta tribuna por la mayoría, dejémonos de discursos, hagamos algo y votemos a favor esta reserva. Démosle sentido a esta, la primera legislatura de la paridad. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Sánchez Martínez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada sobre el artículo 14.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: En votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Si se admite a discusión la reserva presentada.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Si se admite a discusión la reserva presentada. Las diputadas y los diputados que estén por la mayoría sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se admite a discusión.

Tiene la palabra el diputado Edgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario de Morena, en contra.

El diputado Edgar Guzmán Valdez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el actual artículo 14 del decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República es idóneo y contiene elementos necesarios y suficientes para el buen funcionamiento de este nuevo organismo constitucional autónomo.

Por lo que respecta a las reservas, que también se han hecho a la fracción VIII del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, creemos que no es necesario, ya que con la actualidad existe un Instituto Nacional de Ciencias Penales, Inacipe, que es un órgano especializado en el tema, que brinda cursos y evaluaciones en la materia.

Ahora bien, por lo que respecta a la fracción XIV, de la cual nos acaba de hablar la diputada que nos antecedió sobre la creación de más fiscalías especializadas, creemos nosotros que es innecesario al momento. Además de robustecer un elemento burocrático que no permitirá una buena funcionalidad de la Fiscalía General de la República, porque dichas consideraciones deben acotarse en el Reglamento de la Fiscalía. Esto, además de que ciertos elementos del contenido de la reserva se encuentran ya previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y no deben estar contenidos en una ley de carácter orgánico.

Es justamente esta ley de naturaleza orgánica, que solo distribuye las competencias y la organización de la Fiscalía, y es el Código Nacional de Procedimientos Penales el que contiene los elementos del debido proceso del imputado y del derecho de las víctimas en las controversias del orden penal.

De igual forma, las pruebas periciales están a cargo de un procedimiento previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que es innecesario incluirlos en la ley orgánica.

Fíjense, de 2014 a 2018, 201 mil 912 carpetas de investigación, de estas 142 mil 451 tuvieron solución sin llegar a juicio, es decir, el 70.55 por ciento se resolvió de una forma alternativa, sin necesidad de tener burocracias adicionales.

Por lo cual, compañeras y compañeros, les invito a votar en contra de esta reserva e ir por el dictamen en sus términos y por fin, después de casi cinco años poder tener un fiscal general de la República. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Guzmán Valdez. Tiene la palabra la diputada Dolores Padierna Luna, en contra.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pues para dar respuesta a una de las que parece ser una preocupación, no entiendo por qué, porque el documento es muy claro, en el tema de las fiscalías el artículo 14 habla, ya lo dijimos, de las cuatro fiscalías, y de una, la de Derechos Humanos, dice textualmente el documento: la Fiscalía de Derechos Humanos tendrá a su cargo las fiscalías de protección de derechos humanos, una Fiscalía será de las mujeres. Otra, ahí debe de ir punto y coma en todo caso; otra, Niñas, Niños y Adolescentes. Otra, Trata de Personas. Otra Fiscalía de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares. Otra, la de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos. Otra, la de Migrantes. Otra, la de Investigación y de Tortura.

Y la gran diferencia es que la SEIDO y la de ahora están mediante un acuerdo, ahora van a estar en ley y se está ordenado en esta ley que estamos aprobando.

Hay una discusión sobre la desaparición de la Fiscalía Especial para la Atención a la Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas, y aquí se va a dar el diagnóstico. La pregunta es, ¿cuántos casos resolvió esa Fiscalía? Ninguno.

¿De qué se trata ahora? De que los derechos, todos los derechos de las mujeres van a tener la más amplia protección y defensa a través de la nueva fiscalía que se va a crear. Y hay que señalar la nula funcionabilidad, el nulo resultado que tuvo la anterior Fevimtra, que así le decían.

Nos obliga, ante esos nulos resultados a rediseñar la fiscalía, a ampliar el espectro de cobertura para que se atiendan verdaderamente los feminicidios, la trata de personas y otras.

Revolver mujeres con trata, como si solamente fueran mujeres las que ocupa el crimen organizado para la trata, es un grave error, se van a separar. Una cosa es defender los derechos de las mujeres y proteger con amplitud todos los delitos que se cometan contra las mujeres, y otra cosa es el delito de trata. Hay una confusión que no quieren ver.

Entonces, se trata ahora de que la Fiscalía Especializada en Violencia de Género esté en una ley.

El tema de la SEIDO, la desaparición de la SEIDO obedece a que no hay confianza en cómo ha venido funcionando la SEIDO. Hay tremendos datos que nos dicen que hay connivencia y que no funcionó para nada esa subsecretaría, ¿por qué la vamos a defender? Por ello no aparece en el diseño de la estructura.

¿Dónde sí aparece? Porque hay que leer completo el documento para entenderlo. El que no aparezca como fiscalía específica no quiere decir que no se vaya a abordar el tema. Todo el tema de SEIDO viene descrito en, bueno, subrayo que la ineficiencia de esa fiscalía no permite que sea considerada de manera integral.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna: Viene establecido en el artículo 13 transitorio, donde se va a elaborar un plan integral, institucional de transición. En pasar de PGR...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna: Termino el concepto. Es lo que más se ha criticado aquí.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, diputada.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasar de la PGR a Fiscalía General lleva un proceso de transición que en el artículo trece transitorio establece que va a ser de la mano de los analistas, los académicos, los especialistas en paralelo. Harán el diagnóstico las autoridades, los especialistas y al término se entregará...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Está excedida un minuto de su tiempo.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna: ...un plan estratégico de transición y en 12 meses que se establezca la PGR se verán todos los datos de delincuencia organizada a través del plan estratégico y también del plan de persecución penal. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Padierna. Tiene el uso de la palabra, para hablar en pro, la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María Ester Alonzo Morales: Con permiso de la presidenta. Diputadas y diputados, en el marco del sistema penal acusatorio adversarial la función del fiscal, como titular de la investigación es fundamental para combatir la impunidad y la conformación de una justicia sustentada en el principio de la debida diligencia.

Precisamente y por esos motivos, se requiere de una Fiscalía General con plena autonomía, que cuente con personal especializado en distintas materias. En el PRI entendemos que la austeridad es un tema relevante para la conformación de los gobiernos, pero no en materia de procuración de justicia.

En nuestro país la violencia y la impunidad constituyen grandes flagelos para la sociedad y no podemos escatimar en inversión. México ocupa el quinto lugar mundial en trata de personas. ¿Cómo hacer frente a estos fenómenos si no contamos con fiscales especializados en la materia?

Los delitos de violencia contra las mujeres se incrementan de manera sostenida. Siete mujeres mueren cada 24 horas. ¿Cómo disminuir los feminicidios, las violaciones o las lesiones dolosas si los fiscales no se especializan en perspectiva de género y enfoque de derechos humanos?

Alrededor de cinco mexicanos son secuestrados diariamente y el 25 por ciento de ellos son asesinados. Las fiscalías especializadas buscan consolidar una investigación técnica y operativa con personal profesional y capacitado para una efectiva procuración de justicia.

Esto no es tema de presupuesto, la seguridad de los ciudadanos y la profesionalización de los fiscales no es un tema monetario, es una obligación que el Estado debe brindar a los ciudadanos. Los mexicanos exigen justicia, cómo alcanzarla si no se cuenta con fiscales especializados que hagan frente a este tipo de delitos. Ya no podemos permitir más impunidad en torno a la violencia contra las mujeres, la trata de personas y el secuestro. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Alonzo Morales. Tiene la palabra, para hablar en contra, la diputada María Teresa López Pérez, el Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada María Teresa López Pérez: Buenas tardes a todos. Disculpen la tardanza desde la última fila acá. Con la venia de la Presidencia. Ciudadanas legisladoras, ciudadanos legisladores. En este ejercicio me gustaría precisar específicamente la fracción XIII del artículo 14 del proyecto, la cual establece la facultad potestativa del fiscal para crear unidades, fiscalías u órganos por medio de acuerdos generales.

El dictamen contempla que el fiscal podrá determinar las unidades necesarias para investigar y perseguir el delito dotándole de un marco flexible para poder crear las fiscalías sustantivas, no solo en las especialidades que ya se consideran, y que si bien es cierto que el tercer párrafo de este artículo 14 establece diversos delitos que atentan contra los derechos humanos, no menos cierto es que ya indica la posibilidad de tener otras fiscalías que determine el fiscal, incluso las que indican otros ordenamientos que desde luego se tendrán que crear, como por ejemplo, la de secuestro.

Pongamos por ejemplo que, en el caso extremo de presentarse un ciberataque de consecuencias fatales para la seguridad nacional, será necesario la intervención del Ministerio Público federal, y al no contar con una fiscalía especializada en delitos cibernéticos sería infame que se llegue al absurdo de iniciar un proceso legislativo para crear una fiscalía de la materia, por ello es necesario dar al fiscal la potestad de determinación.

Cabe precisar que el uso de esta facultad no es discrecional, sino que debe apegarse al plan de persecución penal, lo que conllevará a complementar la operatividad de la fiscalía a la hora que deba ejercerse la acción penal y ya en el litigio defienda el interés social.

Por esta y otras razones que contiene esta propuesta, estoy y estamos como grupo de Morena a favor de esta ley de la fiscalía general, y les pedimos muy sinceramente que nos den la oportunidad de ejercer la justicia que sea por el pueblo de México.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.

La diputada María Teresa López Pérez: Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada López Pérez. Tiene la palabra, para hablar en pro, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Muchas gracias, con su venia, diputada presidenta. Nosotros, en esta reserva, lo que estamos diciendo es, en lo general, como a ustedes les quedó claro, ya votamos a favor haciendo uso de lo que acaba de decir la diputada.

Estamos diciendo que nosotros no seremos dique u obstrucción para que ustedes planteen, más bien para que el presidente electo, a través de ustedes, plantee la manera en que él pretende pacificar al país en el rubro de justicia. Pero también, con todo el respeto, nosotros estamos aquí hablando del tema de las fiscalías especializadas, pero no nada más me crean a mí, perdón.

Dice la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional –me permito leer para que no digan que yo lo estoy inventando– que las fiscalías especializadas son absolutamente necesarias. No existen los fiscales que saben de todo. No puede suceder que la delincuencia organizada vaya en jet privado y el Estado en carreta, el Ministerio Público debe conseguir que se condene a quienes cometen delitos graves y no puede tener éxito si no cuenta con preparación y especialización.

No es lo mismo el modo de investigar, acusar, producir prueba en un caso de violencia de género, de trata, de narcotráfico, delincuencia económica o de lesa humanidad.

No podemos abarcar con autoridad y solidez todas las ramas del derecho. El derecho se ha vuelto muy complejo.

Entonces, nosotros, en el grupo parlamentario de mi partido, el Revolucionario Institucional, eso es lo que suscribimos. Y apelamos con todo respeto, yo entiendo muy bien lo que ha dicho, se ha dicho aquí, que efectivamente entra en un paraguas una Fiscalía Especializada en derechos humanos que tendrá a su vez otras fiscalías especializadas.

Bueno, entonces si efectivamente van a estar al mismo nivel jerárquico, sería entonces de técnica legislativa. Vamos cambiando y vamos poniendo. La fiscalía en derechos humanos, entiendo también lo que dijo la otra compañera, bueno, la fiscalía en derechos humanos, la fiscalía de mujeres. Yo no puedo estar más de acuerdo en que trata, por supuesto, afecta también a los hombres y se debe separar, la trata laboral, no es únicamente la trata con fines de prostitución, etcétera, o lo que antes se denominaba trata de blancas. Por supuesto que es un tema que abarca también a los hombres, y particularmente niñas y niños.

Pero lo que yo les quiero decir aquí es la necesidad que tenemos de que en técnica jurídica quede perfectamente especializado, y ojo, en los delitos que más flagelan a la ciudadanía. No, por supuesto, para todos los delitos, pero es que no todos los delitos tienen el mismo impacto ni todos los delitos se cometen en este país en el mismo número. Los delitos que más nos flagelan: el secuestro, la trata de personas, los delitos cometidos contra mujeres.

Esos son en los que nosotros estamos solicitando de la manera civil y respetuosa que se tomen en consideración fuera del paraguas amplio de la Fiscalía Especializada en derechos humanos. Que se pongan al mismo nivel jerárquico que esta fiscalía especializada y no dentro de una fiscalía especializada varias fiscalías especializadas. Muchísimas gracias por su atención. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rodríguez Mier y Terán. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si este asunto se encuentra suficientemente discutido.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: En votación económica se consulta a la asamblea si este asunto se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra.

El diputado Benjamín Robles Montoya: Gracias, diputada presidenta. ¿Por qué votar en contra de esta reserva?

Pues ahora resulta que los que nos hundieron con sus errores, hoy nos quieren corregir la plana, y no me refiero a las cartulinas que están ahí o a otros compañeros que han venido aquí a dar su postura, que respetamos.

Pero ¿Por qué cuando dijeron que iban a resolver los problemas de este país en 15 minutos no hicieron nada? O que el haiga sido como haiga sido todo empeoró.

¿Por qué después de tantos años de mal gobernar este país no hicieron nada? Miren, compañeras y compañeros, se trata de la arquitectura institucional que este gobierno de la cuarta transformación está implementando. Y por eso demandamos el apoyo de todas y de todos ustedes.

Y lo hacemos con respeto, civilizadamente, por eso estamos en esta parte del debate parlamentario, porque se acordó que habríamos de estar discutiendo algunos de estos temas. Para nosotros la arquitectura institucional que estamos proponiendo, es la que va a lograr el cambio que tanto anhela nuestro país.

Esta es la arquitectura institucional del gobierno en turno, el de la cuarta transformación, ¿sí? En las urnas, diría, el que los avasalló. Ya es tiempo de cumplir nuestros compromisos de campaña, diputadas, diputados, pero los compromisos ¿de quién? ¿De ustedes? Con todo respeto, no. Se les avasalló, estamos aquí cumpliendo los compromisos de campaña del licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Por otra parte, lo digo también con respeto, si leyésemos todo lo que se dice en el mundo por parte de organizaciones, digo pues la mera verdad, esta cuarta transformación hubiese iniciado desde hace mucho y muchos ex presidentes estarían incluso en la cárcel como en otras naciones.

Así es que les pedimos que, en lugar de estar presentando reservas, que vayan en contra de una arquitectura institucional que aquí se ha reflexionado y se ha defendido con mucha claridad, pasemos ya a respetar lo que se dio en las urnas el primero de julio, y no voy a repetir lo que ya han dicho aquí algunas compañeras.

Qué bueno que ya regresaron los dueños, algunos de los dueños de las cartulinas. Aquí ya quienes me han antecedido en el uso de la palabra, particularmente Dolores Padierna, fueron muy claros. No voy a repetir todo lo que ella ha dicho, lo suscribo, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Robles Montoya. Tiene el uso de la palabra para hablar en contra, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados, compañeras diputadas, he estado muy quietecito oyendo el debate.

Hago míos los argumentos de Dolores Padierna y de Benjamín. Solo quiero plantear que he visto pasar por aquí a la oposición con toneladas de hipocresía, toneladas de hipocresía, porque vienen a hablar que el artículo 102. No está a discusión, les informo, no está a discusión.

Tuvieron oportunidad de discutirlo y no lo hicieron, pudieron nombrar un fiscal como dicen, autónomo, y no lo hicieron. La Suprema Corte es Autónoma, ¿en verdad?, ¿para discutir y defender sus sueldos privilegiados? El Banco de México es autónomo, ¿en verdad es autónomo?

Me tiene a mí bastante irritado esa discusión falsa de que si se nombra un fiscal autónomo se van a resolver los problemas del país. Ahí en Jalisco tienen su fiscal autónomo, 100 vehículos tiene para su servicio el fiscal autónomo de Movimiento Ciudadano que, de haber apoyado como Convergencia primero, y como Movimiento Ciudadano después al compañero hoy presidente de la República, hoy se han convertido en aliados de la derecha, obsequiosos y tapetes, tapetes.

Vergonzosa su actuación. No, no me merecen ningún respeto, porque no hay respeto en sus argumentos, hay demagogia, hay hipocresía, hay falta de respeto. Vienen a darnos, nos quieren ilustrar técnica jurídica, nos quieren decir cómo hacer bien las cosas, cuando quienes estuvieron en el poder lo hicieron fatal, y quienes hoy...

La diputada Julieta Macías Rábago (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí, nada más que me paren ahí el reloj.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Con qué objeto, compañera diputada? Por favor, sonido a la curul de la diputada Julieta. Adelante, compañera diputada.

La diputada Julieta Macías Rábago (desde la curul): Gracias, compañera presidenta. Nada más decirle al compañero diputado Noroña. Movimiento Ciudadano, si bien es cierto hemos apoyado, apoyamos alguna vez al compañero Andrés López Obrador...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Que pida la palabra, no hay debate en eso.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, compañero diputado, permítame, permítame diputado Fernández Noroña.

Compañera diputada, en este momento del debate la consideración es si usted desea hacer alguna pregunta al orador. De otra manera, le hago...

La diputada Julieta Macías Rábago (desde la curul): Sí. No, no, no, son alusiones, presidenta, nos está insultando, nos está diciendo tapetes.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Entonces, compañera diputada, permítame darle la palabra en el momento en que, de acuerdo al desarrollo de la asamblea, corresponda. Siga, por favor, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias, muchas gracias diputada presidenta. Ya ni yo, que llevo horas oyéndolos con todas sus falsedades, sus hipocresías. Me las he aguantado todas, ahí he estado calladito y apenas les digo algo y luego, luego se sienten agobiados.

No, compañeros, compañeras, dicen que nos quieren ayudar y hay un refrán popular que dice que el que con atole se quema, hasta el jocoque le sopla. Pero, además, de esas ayudas no queremos.

Estaba el trabajo en comisiones, ahí hubieran ayudado, ahí hubieran planteado, ahí hubieran convencido. Ahí hubieran convencido. Bueno, si no nos dejamos, será que porque pensamos diferente, será que porque representamos cosas diferentes. Y como aquí lo dijo el compañero diputado Benjamín, por eso les ganamos el primero de julio, porque somos otra cosa y porque vamos a conducir el país en beneficio de nuestro pueblo.

Así es que, compañeros diputados y diputadas, espero que efectivamente nos pongamos de acuerdo en lo fundamental, sin hipocresías. Gracias, compañeros.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, compañero Fernández Noroña. Tiene el uso de la palabra la diputada Abelina López Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en contra.

Compañeros diputados, compañeras diputadas, les ruego cordialmente se sirvan manifestar sus propuestas, sus pensamientos y sus críticas, solicitando oportunamente el uso de la palabra.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame, diputada Abelina. Compañero Espadas, ¿con qué objeto?

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Muchas gracias, diputada presidenta. Si me lo permite, para rectificación de hechos, desde mi curul.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Al final de la lista de oradores, previo el... A ver, permítame un momento. Al final de la lista de oradores de esta reserva del artículo 14.

Adelante, diputada Abelina López.

La diputada Abelina López Rodríguez: Gracias, ciudadana presidenta. Yo solamente quiero hacer algunas reflexiones. He escuchado con muchísima atención. Como que pareciera que Morena no defiende a las mujeres, tan las defiende que en este Poder Legislativo está la paridad de género. Está la paridad de género.

¿Qué queremos entonces? ¿Qué queremos entonces? ¿A qué refiere? Mucho han discutido el artículo 14 y estoy en contra de la reserva, ¿por qué? Refieren de la Fiscalía Especializada y sí contempla, compañeros diputados, la Fiscalía Especializada en materia de derechos humanos, lo dijo por cierto la diputada Padierna. Tiene a su cargo la protección de los derechos de las mujeres, los niños, los adolescentes, de la trata de personas, de la desaparición forzada, de la desaparición cometida por particulares.

¿Qué quiero decir entonces? Sociedad, sociedad, quienes hoy estamos aquí, en mi caso siendo diputada de Morena, somos contundentes en defender a los niños, a las niñas, a las mujeres.

Contempla, el decreto lo contempla, tan es así que en la parte final dice que en los casos relacionados con la violencia de género y contra la mujer, el personal deberá ser especializado. Aquí está.

Me parece que tenemos que asumir un poco la tribuna con mayor responsabilidad. Su preocupación, compañeras diputadas y diputados, aquí está. Nos sumamos a su preocupación, por eso está en el texto, quizá muchas cosas del pasado no gustan, ayúdennos.

Con mucha responsabilidad hoy que nos toca y hablar la voz cantante, queremos juntos construir un país de paz y armonía, requerimos de ustedes, con mucha humildad lo digo, requerimos de ustedes, pero para esto vamos juntos, sí se puede. Quizás podamos tener errores, pero la intención es buena.

Vamos juntos, pacificar el país requiere de la suma de cada uno de ustedes. Pacificar el país es de todos. En esta humildad vengo a esta tribuna. Vamos elevando el nivel, para caminar y transitar en paz requiere los equilibrios. Vamos. Es cuanto, compañeras y compañeros.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada López Rodríguez. Para hablar en pro tiene el uso de la palabra la diputada Laura Angélica Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Con qué objeto, compañera diputada Sobrado?

La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez (desde la curul): Rectificación de hechos.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Al término de la ronda de oradores inscritos.

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Pues vaya que se necesita ser cínico, cínico de verdad para venir a decir aquí que en comisiones no presentamos las reservas que venimos el día de hoy a discutir aquí. Que no convencimos. Que no dimos el debate.

Si estamos el día de hoy aquí es precisamente porque en comisiones no se aceptó ni una sola de las reservas ni propuestas que presentamos los partidos de oposición.

Y hay que decirlo claramente, estas reservas no son solo del PAN o del PRI o del PRD o de Movimiento Ciudadano, son las reservas y las propuestas que durante años la sociedad civil, expertos, académicos del tema han estado pidiéndonos.

Entonces, ¿cuando se trata de usar a la sociedad civil para cosas que a la izquierda y a Morena le convienen está bien? Pero cuando son gobierno y cuando ya no les gusta que se les exija, entonces a la sociedad civil se le ignora. No señores, hay que tener memoria histórica y hay que tener congruencia.

Vengo aquí a hablar a favor de la reserva presentada en el artículo 14 porque es un tema sensible. Estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, estamos hablando de trata de personas, estamos hablando de

desaparición forzada, estamos hablando de delitos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, de migrantes, de investigación de tortura, etcétera.

Son precisamente los delitos que más le duelen a la sociedad y son esos delitos los que ahora quieren meter todos juntos en una sola fiscalía especializada.

Creemos que merecen cada uno de estos temas, y sobre todo cada uno de estos sectores, de estos grupos que están siendo vulnerados por el crimen organizado, una fiscalía especializada particular para cada tema. Por eso es que vengo a hablar a favor de esta reserva y espero, señores diputados, diputadas de la nueva mayoría oficialista, que sean tantito sensibles con estos grupos afectados. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rojas. Antes de dar la palabra a cuatro legisladores que la solicitaron para rectificación de hechos, ruego a la Secretaría que proceda a dar lectura al artículo 121 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Artículo 121. La moción para rectificar hechos procede cuando una diputada o diputado que no esté inscrito en la lista de los oradores solicite el uso de la palabra para aclarar, corregir o ampliar la información expuesta en tribuna por otra diputada o diputado que haya participado en la discusión.

2. Cuando el presidente lo autorice, la diputada o el diputado solicitante podrá hacer el uso de la palabra al término de la lista de oradores. El diputado que rectifique hechos lo hará por una sola ocasión en el tema que se discuta. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Julieta Macías Rábago, desde su curul, por un minuto. Sonido, por favor, a la curul donde está la diputada Macías Rábago.

La diputada Julieta Macías Rábago (desde la curul): Gracias, presidenta. *Sine ratione blasfemia.* Quiere decir: Ante la falta de argumentos, la calumnia.

Movimiento Ciudadano siempre ha defendido a la fiscalía que sirva. Fuimos los primeros en pelear para que no hubiera un fiscal carnal, de la mano de las organizaciones sociales.

Fue precisamente en esta Cámara, en 2014 también, cuando Ricardo Monreal, entonces diputado, defendió las mismas causas de Movimiento Ciudadano.

No vengan aquí a decir los diputados de la mayoría que están obedeciendo al mandato de la sociedad cuando ni siquiera quisieron escuchar otras voces ni de la ciudadanía, ni de los otros partidos, ya lo han dicho aquí infinidad de veces. No aceptaron ninguna modificación y no se vale que sigan calumniando. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Tiene la palabra para rectificación de hechos, el diputado Jorge Espadas, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Muchísimas gracias, diputada presidenta. Solo para reiterar lo que ya dijo la diputada Laura Rojas. Cualquiera que haya estado en la comisión pudo percatarse con meridiana claridad de que las reservas fueron hechas ahí. Quien afirma que en las comisiones no se hicieron, no lo puedo yo más que tachar de ignorante. Nada más.

Y en el caso de lo que señala la diputada Abelina López, suscribo al cien por ciento lo que dijo la diputada Abelina, que contradice lo que dijo el orador anterior a ella. Sí se requiere de todas y de todos.

Ojalá, diputada Abelina, el grupo parlamentario al que pertenece tenga la sensibilidad que usted expresó en tribuna y que no ha sido por mucho el criterio que ha orientado a las decisiones del pleno, donde hemos sido avasallados sin mayor discusión y no se permite corregir ni una coma. Ahí está la Ley de Remuneraciones que solo aplica en el mundo, según Pablito.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Espadas. Tiene la palabra, el diputado Jorge Luis Preciado, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, desde su curul por un minuto.

El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (desde la curul): Gracias, presidenta. Yo creo que sí vale la pena que nos escuchemos, vale la pena porque tenemos un problema.

Les voy a enseñar una cifra, este es el número de muertos de los primeros 10 días de Felipe Calderón, 208 muertos, los primeros 10 días. Este es el número de muertos de los primeros 10 días del presidente Enrique Peña Nieto, 232. Y este es el número de muertos de los primeros 10 días del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es el número de muertos. Este es el problema.

Este es el problema porque si fuera solamente una cifra y no mexicanos que han sido asesinados, este debate no tendría sentido. Estamos buscando una fiscalía que sirva y el modelo planteado por el nuevo gobierno no funciona. Necesitamos resolver este tema de fondo y más vale que nos vayamos escuchando, porque el día primero, se los dijimos...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Señor diputado, su tiempo se ha agotado.

El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (desde la curul): –Con esto concluyo, con esto concluyo– ...vamos a darles las cuentas cada semana. Esperemos que no estén equivocados.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Preciado. Tiene el uso de la palabra la diputada Verónica Sobrado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez (desde la curul): Gracias, presidenta. Me parece muy delicado afirmar que la paridad en el Congreso es por Morena. Y por eso quiero aclarar que el decir esto significa no reconocer la lucha de muchas mujeres de diferentes fuerzas políticas que han impulsado las reformas y los cambios necesarios para que hoy estemos en una legislatura paritaria.

Reconozcamos, pues, a todas aquellas mujeres y a quienes se han sumado a favor de estos avances. Necesitamos ir para delante. Necesitamos tener una fiscalía especializada para la violencia y la trata contra las mujeres. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Alan Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Alan Jesús Falomir Saenz (desde la curul): Gracias, presidenta. Nada más en cuanto a la alusión que hizo ahorita el diputado Fernández Noroña, de los 100 vehículos al servicio del fiscal, a mí sí me gustaría que el diputado explicara la fuente y que nos dijera de dónde tiene esa información. A mí lo que me parece es que es un engañabobos profesional. Es un demagogo el diputado. Ahorita a lo único que está sirviendo, diputado, es ser el palero de Andrés Manuel López Obrador en esta Cámara y realmente vulnerar la autonomía de este cuerpo legislativo con la aplastante mayoría que ustedes tienen tomando decisiones al vapor, tomando decisiones unilaterales. Vinieron a hacer, usted, su equipo y sus compañeros, lo que tanto denunciaron durante muchos años.

Yo lo que le pido es: no sea demagogo y cuando dé información diga precisamente de qué fuente viene para nosotros saber si es verídica o no. No se vale venir aquí a la Cámara nada más a estar tirando veneno, porque estamos dando información que no es correcta. Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Falomir.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado Fernández Noroña, ¿con qué objeto?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Por alusiones, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, un minuto desde su curul, por favor.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Sí. Mire, diputado, ha estado usted provocando y faltando al respeto y le exijo que se comporte como hombre y tráteme con respeto, que yo a usted ni lo conozco. Ni lo conozco.

Son 100 vehículos que se tienen para la fiscalía y 10 vehículos blindados, que inclusive no les gusta el color y ya están pidiendo otro color. Yo aquí estoy haciendo la denuncia puntual, no soy un chivato, estoy dando la información. Cuando quieras vamos a la Fiscalía de Jalisco y comprobamos los vehículos que ahí se encuentran, cuando gustes, diputado Falomir.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Fernández Noroña. Consulte la Secretaría a la asamblea si este asunto se encuentra suficientemente discutido.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, permítame un momento, señora secretaria. Diputada Rodríguez Mier y Terán ¿con qué objeto?

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (desde la curul): Para rectificación de hechos.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, compañera diputada Rodríguez Mier y Terán, el artículo 121 señala que quienes han intervenido como oradores en la discusión de la reserva, no pueden hacer uso de la palabra para hechos. Discúlpeme mucho pero no estoy en condiciones de dársela.

Consulte la Secretaría, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: En votación económica, se pregunta a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la mayoría, perdón, por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 14, presentada por la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la modificación señalada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene la palabra la diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una reserva sobre el artículo 14.

La diputada Norma Adela Guel Saldívar: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, los servicios periciales y las ciencias forenses son ejes fundamentales para la investigación delictiva; es a través de estos que se conoce la mecánica de los hechos y se conoce desde una perspectiva científica qué pudo haber ocurrido.

En 2017 se cumplieron 75 años de los servicios periciales. Con la modernización de la ciencia, hoy son fundamentales para la investigación.

A pesar de esto, el dictamen que hoy discutimos es ambiguo en el marco de la estructura y de la organización de estos. El artículo 14 refiere la creación del instituto en materia de servicios periciales y ciencias forenses,

pero no advierte cuál es su naturaleza administrativa, ni la forma en que habrá de operar. ¿Se trata acaso de una académica centrada en ciencias forenses?

El dictamen de la Ley Orgánica establece que la coordinación de investigación y las fiscalías especializadas contarán con sus propios servicios periciales. Entonces, ¿cuál es la función de este Instituto, compañeros? ¿A qué coordinación estará adscrito?

La reserva que planteamos al artículo 14 del dictamen va en este sentido, si la ley va a crear un Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, este debe quedar plenamente definido, tanto en el marco administrativo como en el desarrollo de sus funciones.

Lo anterior, con el objetivo de dotar de una estructura congruente, que permita conformar una fiscalía profesional y funcional.

Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional proponemos modificar la redacción del artículo 14, a fin de establecer que el referido instituto estará adscrito a la Coordinación de Métodos de Investigación, y será considerado órgano administrativo y de investigación desconcentrado.

Lo anterior, a fin de dotar a su estructura de certeza jurídica que facilitará su funcionamiento al interior de la estructura orgánica de la Fiscalía General de la República. Es cuanto, diputada presidente.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Guel Saldívar. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Guel Saldívar.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.

Tiene la palabra el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una reserva sobre el artículo 14.

El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas: Con su permiso, diputada presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Si la justicia existe tiene que ser para todos. Nadie tiene ni puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia. Paul Auster.

La creación de la Fiscalía General tiene como finalidad que persona que esté al mando tenga el mejor perfil profesional y especializado, que no tenga una inclinación hacia determinado poder político y económico y asimismo esté del lado de los ciudadanos.

Se propone un mecanismo de transparencia, de rendición de cuentas y participación ciudadana, tanto para el proceso de su nombramiento del nuevo fiscal general como para sus funciones, y que sea evaluado por la misma población.

Los servicios periciales en México han tenido un desarrollo y aceptación muy importante en las últimas décadas. Se han transformado los laboratorios, los equipos e instrumentos para participar en la investigación científica. Además, todo el personal pericial ha pasado por una serie de cursos de actualización, diplomados e intercambios para mantener el nivel científico adecuado, proporcionando al derecho de sus diferentes ramas resultados muy satisfactorios y con ello la verdadera magnitud de la aplicación de la criminalística para la procuración, impartición y administración de justicia en busca de lo que más se apegue a la verdad histórica.

El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses tiene como objetivo primordial auxiliar, desde el punto de vista pericial, a las autoridades que así lo requieran, con el propósito de coadyuvar con ellas en la procuración

e impartición de justicia. En el Instituto se atienden los casos relacionados con hechos delictivos, de muertes violentas y sospechosas, así como se efectúa también la formación de recursos humanos en materia de medicina y ciencias forenses.

Por ello, la bancada de Movimiento Ciudadano coincide y está a favor de que se incluya al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses a la estructura de la Fiscalía, y eliminar la figura del Consejo Técnico, así como incluir una fiscalía especializada en materia de delitos contra las mujeres e investigación de los feminicidios, ya que de lo que ha transcurrido este año se lleva más de 500 feminicidios.

Los estados donde se concentra el 40 por ciento de los feminicidios son Veracruz, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa y el Estado de México. Cuatro de ellos cuentan con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Por ello, ante la situación social que hay en nuestro país, donde las mujeres sufren de violencia, discriminación y muerte, es necesario que en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República se incluya a la fiscalía especializada en delitos contra mujeres e investigación de feminicidios. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Espinoza Cárdenas.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por el diputado Espinoza Cárdenas.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la solicitud planteada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se desecha, y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar reservas sobre varios artículos.

La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, presidenta. Qué curioso, la pasada legislatura en el Senado detuvimos la discusión de esta norma a petición de muchos de ustedes, para ponderar si debíamos modificar el 102 constitucional. Pero a partir del día primero, y me refiero a la mayoría, ya no podrán repartir culpas, por eso sugiero muy respetuosamente, compañeras y compañeros, que admitan la responsabilidad que como partido en el gobierno están asumiendo. De aprobarse esta ley, el nuevo fiscal general de la República será nombrado y será removido con la intervención directa del presidente de la República, quien, por cierto, tiene mayoría en ambas Cámaras.

Sin embargo, están a tiempo de mejorar al menos un poco la decisión que han tomado de tener un fiscal a modo.

Voy a presentar en conjunto, y ruego a la Presidencia considerar el tiempo, espero no tardar más de los tres minutos previstos, porque voy a presentar las reservas a los artículos 15, 16, 21 y 56 del dictamen.

Qué bueno, nos felicito que estemos atendiendo al fin este pendiente legislativo. Ojalá recapaciten, ojalá exista de verdad apertura para crear de inicio una fiscalía fuerte, eficaz y autónoma, pues de seguir aprobando normas que se contraponen unas a otras, que se contraponen a la realidad e incluso a la misma Constitución, tengan la certeza de que haremos historia, vamos a pasar como la legislatura de los remiendos legislativos. Y no creo que todos estemos en esa tesitura.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, establece que los Estados deben implementar medidas y políticas efectivas contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y demuestren los principios de Estado de derecho, tales como la integridad, la transparencia y la responsabilidad.

Así, en el artículo 15 propongo que el fiscal general sea nombrado y removido, haciendo prevalecer el límite constitucional a fin de que el cargo sea estrictamente por nueve años sin posibilidad de reelección.

Por otra parte, recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las disposiciones que prevén requisitos más laxos a los establecidos en la Constitución, para ocupar dicho cargo, son inválidas.

Hoy queremos pedir a la mayoría que no abra las puertas de la nueva fiscalía a personas con buenas intenciones, es que eso no está a discusión, todos aquí tenemos muy buena intención, pero tenemos una responsabilidad.

No podemos admitir que lleguen a las instituciones, y menos en casos como este, personas sin el perfil y la experiencia, ya lo hicieron en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, eliminaron de tajo todos los requisitos que había dispuestos en la ley para nombrar a los delegados federales en los estados. No pretendan volver a hacerlo.

En el mismo artículo 15 y el artículo 16 la propuesta es muy clara, respetemos los principios de transparencia, publicidad, participación ciudadana, igualdad y no discriminación, pero incluyamos el principio de idoneidad, porque quien ocupe la Fiscalía General de la República debe contar con los elementos técnicos, académicos, aptitudes probadas y la capacidad para desempeñar un trabajo calificado. Debe reunir, pues, las características necesarias para ejercer su función dentro de los procesos en materia de corrupción.

Desde nuestra perspectiva el fiscal debe tener experiencia certificada en materia de derecho penal, pues un eje rector del Sistema Nacional de Anticorrupción es precisamente la materia penal.

También quiero pedir que no caigamos en la tentación de hacer lo que tanto criticaron, la suplencia o representación del fiscal no puede exceder de 30 días naturales, no podemos dejar por tiempo indefinido el manejo de un órgano autónomo y con facultades de investigación nacional e internacional a un coordinador general que no fue sometido a un proceso constitucional.

Y, por favor, no den pauta a los trabajos vitalicios. Hoy que tanto revuelo, que tanta incertidumbre han causado en el servicio público, no pretendan que haya servidores públicos de primera y otros de cuarta.

Establezcamos en el artículo 56 la legalidad y el respeto a los derechos laborales, que los procesos de ingreso, desarrollo, evaluación, promoción, separación y reincorporación de quienes integren la fiscalía no establezcan la inamovilidad del cargo, y mucho menos otorguen inmunidad respecto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Esta es una norma ambigua. Si quienes emiten el dictamen señalan que la Suprema Corte de Justicia refiere como válida la inamovilidad judicial, quiero decirles que esta se refiere a quienes ejercen un cargo temporal previsto en la Constitución, por ejemplo, los magistrados, no es una referencia general. No abramos la puerta a conflictos de interés.

Me faltan tres líneas y termino. Les recuerdo que estoy presentando reserva hasta de cuatro artículos.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, compañera diputada. Ilustro a la asamblea que, efectivamente, al iniciar su intervención la diputada Herrera Anzaldo habló de que en un solo acto iba a presentar cuatro reservas. Esta es la razón por la cual esta Presidencia decidió flexibilizar el tiempo. Adelante, diputada.

La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo: Termino, presidenta. Muchas gracias. Garanticemos, pues, la autonomía constitucional, como señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La autonomía surge bajo una idea de equilibrio basada en los controles de Poder, Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Su ejercicio es guardar independencia entre los Poderes, lo que no significa que no formen parte del Estado, sino que son, somos vigilantes del Estado de derecho. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Herrera Anzaldo. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo a los artículos 15, 16, 21 y 56 del proyecto.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las reservas presentadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En consecuencia, tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, para hablar en contra, el diputado Marco Antonio Medina Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Marco Antonio Medina Pérez: Con su permiso, diputada presidenta. Vengo a referirme a la reserva que ha hecho la diputada Herrera con relación al artículo 16. Habrá otros compañeros que seguramente hablen sobre las otras reservas.

Y aquí, en el 16, se debate precisamente las características que deben tener el fiscal y la idoneidad de la propuesta que se establece. Se habla de que debe tener amplia experiencia. No solo ella se refiere a esto, también otros oradores que están en contra de que pase adelante esta ley han hablado de que se debe contar con una amplia experiencia.

Incluso alguna persona, alguna diputada se refirió a que finalmente se va a tener un fiscal decorativo. Yo les quiero comentar que no va a ser así. Vamos a tener un fiscal que ahora sí se haga cargo de hacer justicia en el país. Vamos a cumplir con todos los requisitos de la reforma constitucional de 2014 y vamos a desarrollar una propuesta independiente y autónoma, como se exige y como ha sido exigencia de la sociedad civil.

¿Qué experiencia se nos pide? ¿La experiencia de las... experiencia en sembrar pruebas, experiencia en desaparecer pruebas, según convenga? ¿La experiencia en crear verdades históricas? ¿La experiencia en traer la justicia de un lado para otro como se les antoje? ¿O la experiencia que hemos visto acumulada en muchos años, en muchos ejercicios, tanto de administraciones de uno u otro partido?

Estamos en contra de un fiscal a modo. Es cierto, estamos en contra de un fiscal a modo del antiguo régimen. Esto es lo que ya no queremos y contra esto vamos a estar pendientes de que se lleve a cabo.

Queremos un fiscal a modo con la justicia y las necesidades de la nación que son muchas, muchísimas. No queremos un Antonio Lozano Gracia, primer militante del PAN en llegar a la titularidad de la Procuraduría General de Justicia, cuyo más célebre método de investigación lo llevaba a cabo Francisca Zetina, mejor conocida como *La Paca.*No queremos más la simulación de un Macedo de la Concha o un Cabeza de Vaca. No queremos las dilaciones de los que llevaron al país a la impunidad plena. Queremos ahora justicia para todos y queremos ya que se lleven a cabo las reformas necesarias...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo ha agotado.

El diputado Marco Antonio Medina Pérez: ... para impulsar la Fiscalía autónoma e independiente, como va a ser en el caso de esta nueva ley. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Medina Pérez. Tiene la palabra, para hablar en contra, la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna: El artículo 16 habla de la forma de nombrar al fiscal, los requisitos para su nombramiento. Estos requisitos a su vez están marcados en la Constitución, no podemos cambiar la Constitución en una ley, tampoco podemos agregar más requisitos que los que estableció la propia ley.

En la Constitución, esto lo dice el artículo 102 constitucional, ser ciudadano mexicano por nacimiento. Nuestra Ley Orgánica dice: Tener ciudadanía mexicana. Otro, tener cuando menos 35 años cumplidos. Se repite el mismo requisito. Contar con una antigüedad mínima de 10 años. Título profesional de licenciado en derecho. En la ley se repite. Gozar de buena reputación, etcétera. Y en el 17, se define a qué se refiere el tema de la buena reputación. Es decir, los requisitos marcados en la Constitución son los que se repiten en el artículo 16. Nosotros no estamos dispuestos a violar la Constitución.

Por otro lado, quisiera que tuvieran completa certidumbre de que la última palabra la va a tomar el Senado, en cualquiera de los casos, así también lo establece la Constitución y que el presidente de la República ha demostrado que tiene gente muy capaz, altamente calificada y honesta para ocupar los cargos más difíciles del gobierno federal. No será la excepción.

Quiero recordar tres fechas importantes. El 10 de febrero de 2014 se reformó el artículo 102 constitucional para crear la Fiscalía General de la República como un órgano autónomo –lo leo textual– dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Estamos de acuerdo en eso, eso lo votamos todos y se está considerando en nuestra ley.

Esa reforma constitucional tenía el defecto del pase automático que venía en un transitorio. Paramos todo eso porque consistía en que el gobierno pasado le hereda nada menos que el fiscal al nuevo gobierno. Ya se corrigió, ya se canceló ese transitorio.

El 27 de agosto se hizo otra reforma constitucional que ordena, que establece la forma en cómo se va a elegir al fiscal.

En junio de 2011 hubo una reforma trascendental, que es la reforma en materia de derechos humanos que coloca a los derechos humanos por encima de cualquier otra consideración.

Esta ley orgánica, cuando habla de las fiscalías, su papel principal es la salvaguarda de los derechos humanos, y ahí se aplicará la ley más favorable. Y pensamos que esta va a ser en materia de procuración de justicia la ley que se va a aplicar porque no viene tan desarrollado como lo querían otros que, cabe señalar también que en esta redacción participaron las organizaciones de la sociedad civil, que en el Senado estuvieron muchas horas.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna: Termino diciendo que la forma de nombrar al fiscal es reforma constitucional. ¿Quién la hizo? La propuso el PRI, la apoyó el PAN, el Movimiento Ciudadano y todos. No entiendo por qué hoy están en contra de lo que se votó en reforma constitucional en 2014.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Padierna. Tiene el uso de la palabra, para hablar en pro, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Muchas gracias, con su venia, diputada presidenta. Si así me lo permiten, trataré a lo mejor de dar una explicación de por qué a lo mejor se vota de alguna manera y después se cambia de parecer.

Si me lo permiten, voy a leer unos extractos de una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de autonomía de la Fiscalía General de la República presentada en ese momento, 2017 por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Decía así: Un régimen de gobierno es tan democrático como autónomo sea su Ministerio Público.

Si la función de perseguir los delitos está jerárquicamente supeditada al titular del Ejecutivo, existe todo el riesgo de que el ejercicio o no de esa función esté determinado por criterios de discrecionalidad política.

Si el abuso de poder fue realizado por un miembro perteneciente o cercano al grupo gobernante, la inacción del Ministerio Público y en consecuencia la impunidad del delincuente está casi asegurada.

Y continúa La subordinación política, brevemente referida produce otros niveles de descomposición. Una institución maleable desde el gobierno requiere de funcionarios más dóciles que técnicamente preparados, por lo que tiene pocos incentivos para que los servidores públicos se capaciten. Y termino con este párrafo esto que estoy leyendo. Servidores públicos poco preparados solo pueden producir una institución débil, poco eficiente para perseguir el crimen, propensa a abusar del ciudadano que termina siendo funcionario de la delincuencia y que en varias situaciones de plano actúa en colusión con esta.

Y decía también el Partido del Trabajo, algunos de sus miembros se encuentran aquí con nosotros el día de hoy. Dejaré la copia de esto con mucho gusto a su disposición aquí en la Secretaría.

Decía: Proponemos dotar de plena eficacia el atributo constitucional de autonomía. En primer término, establecer un procedimiento de selección mediante una amplia auscultación a la sociedad por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes entre los candidatos que propongan instituciones de educación superior, institutos de investigación, asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil y ciudadana a través de un procedimiento público y transparente. El fiscal general podrá ser removido por el voto de las dos terceras partes.

Si esto lo propusieron, compañeras y compañeros cuando ustedes no tenían la mayoría, seguramente quienes lo firmaron, que aquí están las firmas autógrafas, repito, aquí lo dejaré, saben a quiénes me estoy refiriendo, por qué ahora que ustedes tienen la posibilidad de enmendar eso y hacer valer lo que ustedes estaban diciendo, ahora no lo quieren hacer, y digo de otra simulación.

Decimos que aquí estamos defendiendo el tema de las mujeres. Y, por otro lado, que esto es lo que iba a decir en mi intervención anterior pero no me dieron la palabra, ya se aprobó en el Senado, en la ley, para que sí se pueda nombrar a Paco Ignacio Taibo como titular del Fondo de Cultura Económica, que les faltó directamente a las mujeres.

Compañeras, las felicito que aplaudan, compañeras, las felicito eh, que le aplaudan a alguien que habló de una manera misógina de nosotros. Los nombres de que...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, se ha agotado su tiempo.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Gracias. Aquí están los nombres, eh. Entre ellos sí se encuentra el diputado Benjamín Robles. Sí se encuentra.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias diputada Rodríguez Mier y Terán. Tiene...

El diputado Benjamín Robles Montoya (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, diputado Benjamín Robles. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Benjamín Robles Montoya (desde la curul): Solicito que me conceda el uso de la palabra, por alusiones.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, diputado Robles, desde su curul y por un minuto, por favor.

El diputado Benjamín Robles Montoya (desde la curul): Lo que no toma en cuenta la oradora que acaba de hacer el uso de la palabra, es que hay una enorme diferencia.

El Partido del Trabajo siempre ha respaldado la justicia en este país. En el momento en que ella hace referencia, nosotros estábamos en contra del gobierno autoritario corrupto que encabezaba Peña Nieto.

Hoy estamos con el líder que necesitaba este país para cambiar México, Andrés Manuel López Obrador, esa es la diferencia. No hay que confundir la gimnasia con la magnesia, con todo respecto, diputada.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en contra.

La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Con su venia, diputada. Seré muy puntual, y seré muy puntual en atención de que el grupo, el PRI, nos ha apoyado, y lo digo abiertamente, nos está apoyando para que este dictamen se haya aprobado en lo general, pero no así en lo particular.

Quiero dar lectura puntual a lo que dice el artículo 102 de la Constitución, y reitero lo que ya se ha dicho aquí por muchos que me han antecedido en el uso de la palabra.

El artículo 102 dice: A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

Para ser fiscal general de la República se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento. Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación. Contar con antigüedad mínima de 10 años con título profesional de licenciado en derecho. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.

Nosotros, lo que estamos haciendo justamente para evitar que se pueda promover alguna acción de inconstitucionalidad, es repetir exactamente lo que establece el artículo 102, que insisto ustedes lo aprobaron en estos términos.

Pero además señalarles algo más. El fiscal general durará en su encargo nueve años y será designado y removido conforme a lo siguiente: A partir de la ausencia definitiva del fiscal general, el Senado de la República contará con 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos.

Este tema es muy importante porque estamos diciendo: al menos 10 candidatos. No son 10, puede haber tantos como los que ustedes propongan. Y creo que nadie va a renunciar a la atribución que tiene de proponer a ciudadanos honorables que cumplan con estos requisitos para que se pueda armar esa propuesta de por lo menos 10 candidatos.

Pero, además, decirles. Sí tenemos que contar con una mayoría calificada, tanto para la integración como para la remoción del fiscal, y sí se establecen causas graves.

De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas, ahí se establecen con absoluta claridad cuáles son las causas graves. Y de ninguna manera el presidente de la República va a hacer uso de esta atribución sin acreditar plenamente lo que se considera como causa grave.

Finalmente, decir, porque aquí se ha venido a decir algo que no tiene ningún sustento, que el fiscal general, la persona que va a suplir al fiscal general, que en este caso es el coordinador, no hay un tiempo definido mínimo para que se quede en ese cargo. Y también leo puntualmente el artículo 20 del dictamen.

Establece claramente, dice: La Coordinación General tendrá las siguientes facultades. Suplir a la persona titular de la Fiscalía...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.

La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Sí. Nada más termino. Es un párrafo nada más. Suplir a la persona titular de la Fiscalía General de la República en sus ausencias temporales de hasta tres meses. Es todo. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Villavicencio. Tiene el uso de la palabra para hablar en pro, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Gracias. Con su permiso, presidenta. Efectivamente, como se ha mencionado aquí, en febrero de 2014 todos fuimos testigos de la reforma que hubo para pasar de la Procuraduría General a una Fiscalía autónoma e independiente.

Después también fuimos testigos de la reforma que diera paso a terminar de una vez por todas por el pase automático y el poder tener un fiscal carnal. Pero miren, como se nos ha presentado ahora esta minuta, en verdad lo que ocurrirá es que tendremos un fiscal carnal.

Sí, se van a poder presentar 10, 20 decían aquí propuestas, pero al final ya sabemos que el dedito va a definir quién será el próximo fiscal y entonces la Presidencia de la República tendrá en la Fiscalía a un empleado.

Y también le respondemos aquí a quien nos ha dicho que no queremos ciertos fiscales, como procuradores que se han tenido aquí. Pero miren, también no queremos un fiscal que garantice la impunidad y perdón anticipado, como ya lo han mencionado que ocurrirá. No queremos a un fiscal así. Por eso, para ser congruentes, requerimos la modificación del artículo 102 constitucional.

Nosotros apoyamos esta reserva que se presenta, porque creemos también que un periodo que supere el sexenio presidencial se busca con esto una independencia que no esté sujeta a los tiempos políticos o a los intereses partidistas.

Por otra parte, que el titular de la Fiscalía tenga experiencia en derecho penal, es acorde con el principio de la defensa técnica adecuada prevista en el nuevo sistema de justicia penal y se trata de un requisito objetivo que contraste con los requisitos meramente subjetivos que contiene la minuta.

Por mencionar el caso, que ya también aquí se mencionó, es: ¿a qué se refiere el requisito de contar con buena reputación? Consideramos que es más importante dejar claro en la ley que quienes aspiren a encabezar la fiscalía sea un perito, no solo en materia de derecho penal, sino que conozca el nuevo sistema de justicia, las reglas de incorporación de las pruebas, que conozca cómo se garantiza la cadena de custodia de las evidencias, que sepa planear la teoría del caso y las técnicas de litigación estratégica, que en mi opinión esto en una ley secundaria no contravendría la Constitución.

Por eso estamos apoyando esta reserva que se hace, como hemos apoyado las propuestas que nos hicieron las organizaciones de la sociedad civil. Díganme si no es una simulación, al no tomar ninguna en cuenta.

Y para aquellos que dicen que no hicimos la tarea en la Comisión de Justicia, se equivocan, en la Comisión de Justicia sus integrantes y muchas de nosotras hicimos un análisis exhaustivo de la minuta, presentamos, desde el PRD, 46 reservas, que desde nuestra visión podrían perfeccionar lo que ahora se va a aprobar y lo único que vamos a hacer, perdónenme, pero es una experiencia como la que ya tuvimos con la Ley de Remuneraciones, que por estar legislando al vapor muy pronto, también como la Ley de Remuneraciones...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: ... vamos a estar enmendando esta ley. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Juárez Piña.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si este asunto se encuentra suficientemente discutido.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Sí, presidenta. En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra, la diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar reserva al artículo 20 del proyecto.

La diputada Claudia Pastor Badilla: Gracias, presidenta. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Se ha dicho hasta la saciedad, pero no importa, insistimos en la urgente necesidad de reformar los artículos 102 y 116 de la Constitución, en atención a la preocupación y exigencia ciudadana de autonomía en las funciones de los órganos de justicia.

Ese es un compromiso relevante y materia de una discusión pronta, pero diferente. En cuanto a esta ley debo hacer notar la figura del coordinador general, quien cuenta con las mismas atribuciones que el fiscal, pero no está sujeto a ningún tipo de control.

¿Cómo es posible autorizar la existencia de una figura que tiene las mismas facultades que el fiscal y que puede ser nombrado y removido libremente por el titular?

¿Es válido duplicar funciones? ¿Estamos simulando que contamos con controles para el titular, pero nombran un cargo paralelo, con funciones expresas, idénticas, sin ningún mecanismo de contrapesos?

No nos confundamos. No estamos hablando de quién sustituye al titular en casos de ausencia. Para eso hay una regulación específica del artículo 21 de la ley que discutimos.

Así que se trata de esta coordinación general, de una figura paralela, con plenas facultades, pero sin ningún tipo de control.

En el Partido Revolucionario Institucional consideramos que el coordinador general debe estar sujeto a controles. Así, la reserva que presentamos va en ese sentido, se busca adicionar un último párrafo al artículo 20, a fin de establecer que la designación o remoción de la figura del coordinador pueda objetarse por el Senado.

Por eso, las veces que ustedes dupliquen, tripliquen o simulen al fiscal en cargos paralelos, siempre deberán tener contrapesos. Por eso, la propuesta es adicionar al artículo 20 un párrafo en donde se diga que el Senado de la República, por el voto de las dos terceras partes de los presentes, pueda objetar la designación o remoción del coordinador general.

Para esto ponemos un plazo máximo de 20 días hábiles para tales efectos. Y el fiscal general de la República enviará al Senado una comunicación donde expondrá las razones que sustentan la designación de la remoción o no de su coordinador.

Es fundamental, si estamos haciendo estructuras paralelas, pues también se ponen controles a las estructuras paralelas. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Pastor Badilla. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Pastor Badilla.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Está a discusión la propuesta. En consecuencia, para hablar en contra, tiene el uso de la palabra la diputada Simey Olvera Bautista, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Simey Olvera Bautista: Con su permiso.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante.

La diputada Simey Olvera Bautista: Buenas tardes. Pues parece que existe intención de alargar esta discusión. Y al contrario de lo que digan, no se preocupen, aquí la mayoría no es aplanadora. Estamos para conciliar, para reflexionar por el bien de todos, pero sobre todo para el bien de las víctimas.

Y esto es un ejemplo, estamos permitiendo que se expresen, estamos escuchándolos con atención para que no se muestre como en anteriores legislaturas. Pero he de confesar que sí hay prisa, fíjense. Pero no prisa por parte de nosotros, prisa por el pueblo, porque ya no está para esperar más. Llevamos cuatro años, diez meses y un día en la falta legislativa. Imagínense, millones de delitos en ese entonces. Y es por eso la prisa, por los de allá afuera.

Parece que en esta cuestión de la reserva del artículo 20 quieren confundir a la cuestión de la coordinación general de la fiscalía. De pronto creen que el león es de su condición. Y no. No se preocupen, compañeros. Morena está a favor de crear una Fiscalía General autónoma, que rinda cuentas y sobre todo que brinde el servicio de procuración de justicia. Y, por supuesto, que vaya más allá.

El PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano votaron esta reforma constitucional, les recuerdo, ya lo sabemos, desde febrero de 2014, y tenemos que decir que hay diputados precisamente de estos partidos que están aquí sentados, que votaron esa reforma y ahora quieren atar de manos esta reforma. Quieren tardarse más.

Ya lo dijeron en el estado de Jalisco, que por cierto gobierna MC. En Guanajuato, donde gobierna el PAN, crearon un fiscal carnal y acaban de nombrar un fiscal a modo. Y tal vez por eso temen, pero no se preocupen. Les insistimos, no somos iguales.

El modelo constitucional federal es infinitamente superior porque el Senado –y lo explicamos con manzanitas– envía la lista del presidente, este la devuelve en una terna y el órgano legislativo es quien lo va a elegir.

El artículo 20 del dictamen está refiriéndose, sí, al coordinador general, donde obviamente queremos, se desea que este órgano represente a la Fiscalía General...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, señora diputada. A ver, diputado Espadas, ¿con qué objeto?

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. ¿Sería usted tan gentil de preguntar a la oradora, en ese ánimo de construcción, si me permite una pregunta?

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada Olvera...

La diputada Simey Olvera Bautista: Diputado, no la admito. La estoy explicando con manzanas y lento para que lo escuche bien. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias. Gracias, diputado. No es admitida. Siga adelante, por favor.

La diputada Simey Olvera Bautista: Gracias, presidenta. Y bueno, lo explicamos de esta manera, esto es una cuestión diferente. Sí dijimos que el artículo 20, este dictamen está referido a la coordinación general, pero pues lo explicamos. No va a ser en más de tres meses, si es que fuera el caso porque de esto se trata.

Por ello se estima necesario que se cuente con una persona que esté supeditada a la fiscalía como órgano de respuesta inmediata. Y aquí hay que diferenciar, van a ser cuestiones administrativas no sustantivas. Y bueno, no hay más discusión. Lo explicamos nuevamente.

Esta reserva en el suplente no debe durar más de tres meses y no puede ejercer funciones de un fiscal, así que no se preocupen. Votémosla ya. Hagamos este ejercicio donde nuevamente les comentamos.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.

La diputada Simey Olvera Bautista: Gracias, presidenta. Solamente para rectificarlo, serán cuestiones administrativas y no sustantivas, por eso no hay lugar a esta reserva presentada así que yo los invito a que sea desechada cuanto antes. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Olvera.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero Espadas, ¿con qué objeto?

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Para alusiones, diputada presidenta, cuando la diputada se refirió a mí directamente.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, a ver. Compañero diputado, la diputada Olvera no señaló su nombre. Sin embargo, si usted se asume aludido por la diputada, por alusiones tiene usted la palabra hasta por un minuto desde su curul.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Le agradezco muchísimo, mi querida diputada presidenta. Y agradezco la oportunidad del diálogo y del debate que se anuncia y luego se rehúye. Yo nada más quería señalar que la diputada Pastor estableció que existe una coincidencia total entre las atribuciones del fiscal y el coordinador. Nunca, la oradora, nunca, nunca en ningún momento estableció cuál es la diferencia que existe entre uno y otro.

Mi pregunta era en ese sentido, para ver si la acompañábamos. Y ante la oferta de diálogo le tome la palabra, oferta que expiró al medio minuto después. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Tiene la palabra, para hablar en contra, el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona.

El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona: Con su venia, diputada presidenta. La creación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República es un proceso que tiene como objetivo central crear un órgano profesional y autónomo sin la injerencia de otros poderes públicos o la actuación bajo consigna direccionada por grupos de poder, como históricamente lo hicieron, que permitieron la impunidad.

Esta Ley Orgánica crea la coordinación general, la que se encargará de desarrollar con responsabilidad de manera estratégica las facultades relacionadas con las ciencias penales y la política criminal, de tal manera que la operación de la fiscalía cumpla con sus funciones de investigar y perseguir los delitos, ejercer acción penal, procurar la reparación del daño de víctimas, adoptar y promover la prevención del delito.

Específicamente, el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, cuya reserva se propuso, dota de diversas facultades a la coordinación general de la fiscalía cuya naturaleza jamás será la figura de un súper coordinador, como lo sostuvo el Grupo Parlamentario del PRI.

El coordinador general no tendrá la facultad genuina del fiscal general, ya que nuestra Constitución postula que el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público, por lo que, de conformidad con el artículo 102 constitucional, este mandato solo se ejecuta a través de la fiscalía general.

Este coordinador se presenta como un órgano auxiliar de las funciones del titular para el correcto funcionamiento y operatividad de la propia fiscalía. De ahí que no se pueden equiparar como figuras idénticas. Esta coordinación es necesaria. Tenerla no significa de ninguna manera que sea un fiscal sustituto.

Los compromisos de investigación y de sanción no solo nacionales, sino internacionales, a los que se enfrentará el nuevo fiscal general, precisarán de una coordinación general que bajo la eficiencia y calidad de una nueva gestión pública fungirán ambos como órganos complementarios y necesarios para el correcto funcionamiento de la fiscalía.

Los ya no más pactos de impunidad, los abusos del poder y el exceso de las corruptelas, bajo la dirección del presidente Andrés Manuel López Obrador se acabaron. No a esta reserva. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Huerta Corona.

Consulte la Secretaría, en votación económica, si este asunto se encuentra suficientemente discutido.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: En votación económica, se consulta a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 20, propuesta por la diputada Claudia Pastor.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: En votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Para presentar propuesta de reservas a varios artículos del proyecto en cuestión, tiene la palabra el diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Emmanuel Reyes Carmona: Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. Con mucho respeto, el día de hoy venimos a hacer un planteamiento. El Grupo Parlamentario del PRD presenta las siguientes reservas de los artículos 21, 22, 26, 33, 53, 55 y 57, dado que encontramos algunas disposiciones que dentro del propio diseño institucional de la fiscalía que se pone a consideración de este pleno, se violentan la autonomía e independencia de que deban gozar las fiscalías especializadas, de manera particular aquellas que tienen un origen constitucional o legal diverso. Es decir, la de delitos electorales y la del combate a la corrupción.

Dentro de la estructura encontramos una instancia que funge en la práctica como una vicefiscalía y que tiene tantas facultades en materia de investigación, administración y creación de unidades que resulta con mucho más atribuciones que la propia fiscalía general, de tal manera que el coordinador no solo puede ser sustituto del fiscal general, sino que además no tiene limitación alguna para su designación posterior.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRD propone la eliminación de este órgano intermedio y que las fiscalías especializadas tengan una relación directa con la fiscalía general. Adicionalmente es indispensable que la fiscalía general esté dotada de una policía de investigación que realice las averiguaciones que le corresponden conforme al nuevo sistema penal acusatorio y que no pueden realizar las otras instancias de policía.

El riesgo es mucho, y se pondría en riesgo la integridad de las propias investigaciones si no se establece este órgano policiaco especializado.

Por otro lado, debemos señalar que tampoco se está dotando al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la autonomía que por recomendación de los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes deben gozar estos servicios, de tal manera que se garantice el derecho de acceso a la justicia de todas y de todos los mexicanos.

Aunado a lo anterior, debemos señalar que una de las principales problemáticas de la actual Procuraduría General de la República es la precariedad de las condiciones laborales que sufren sus empleados.

Es por ello que proponemos que una de las condiciones del personal perteneciente al Servicio Profesional de Carrera le sean garantizadas condiciones de vida digna conforme a las responsabilidades que se les encomienden.

Si bien la reforma constitucional del año 2014 es ampliamente reconocida por haber establecido la autonomía de la nueva fiscalía, la misma fue cuestionada por diversos colectivos de la sociedad civil, ya que desde esta perspectiva mantiene disposiciones que heredan los vicios, debilidades y prácticas que han llevado al colapso el sistema de justicia penal en México.

Nuestro Grupo Parlamentario del PRD se encuentra plenamente convencido de que es necesario reformar el marco constitucional para definir el nombramiento del fiscal general que se encuentre sin ningún compromiso ni acotado a las facultades discrecionales para su remoción.

Esto no contribuye en nada para la superación de la violencia cotidiana que viven nuestros conciudadanos. Es indispensable que por lo menos se realicen las modificaciones que proponemos, que si bien no resultan suficientes sí mejoran por supuesto el proyecto planteado. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Reyes Carmona. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan a discusión las reservas presentada por el diputado Reyes Carmona.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, perdón compañera secretaria.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: Perdón. Por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Por la negativa. Compañera secretaria, ¿sería tan amable de ratificar el sentido del voto que usted capturó?

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: Fue, señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Partido Movimiento Ciudadano, para hacer propuestas de reserva a los artículos 22 y Décimo Tercero transitorio del proyecto.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Con su venia, presidenta. Advierto que voy a hacer una exposición de ambos artículos en esta presentación, por la tolerancia del tiempo.

Está claro que en esta discusión no se admitirá reserva alguna ni modificación del dictamen a discusión. Sin embargo, es de vital importancia para nosotros dejar la evidencia de las faltas, de las inconsistencias, de las fallas y de las propuestas de mejora que sí hicimos llegar oportunamente en el trabajo parlamentario en la Comisión de Justicia, por las diferentes fracciones parlamentarias.

En particular, existe un tema que plantearé en este momento. En primer lugar, con respecto a que si no se pretendía entrar a la discusión de modificación del artículo 102, lo que sí es cierto es que se puede y se podría dar participación a la sociedad civil en la designación de las fiscalías especializadas, y con esto garantizar la elección de los mejores perfiles con imparcialidad e independencia de los partidos políticos.

Por eso, en la primera reserva que hago, proponemos que en el artículo 22 pudiera sujetarse la designación de las fiscalías especializadas a una convocatoria de una comisión de selección integrada por cinco personas de reconocida honorabilidad y trayectoria en materia de seguridad, procuración de justicia y derechos humanos. Y dicha comisión emitiría una convocatoria pública y propondría al fiscal general una terna por cada una de las fiscalías especializadas donde se designara a las personas que ocuparán este cargo.

Esta es una posibilidad, que aunque no existiera la reforma al 102 podría darle certeza, independencia a los titulares, a los nombramientos de los titulares de las fiscalías especializadas.

Por otro lado, también advertimos que no se pueden quedar tan abiertos los términos en que se menciona sobre realizar una convocatoria para la revisión del marco constitucional y jurídico de la fiscalía, de la legislación secundaria y regulatoria, a partir de un año de inicio de su funcionamiento para la óptima operación de la fiscalía.

Pero, ¿para qué plantearíamos esta convocatoria? Ese es el tema. Si el compromiso fue con los colectivos el analizar la posibilidad de hacer una reforma al artículo 102 constitucional es oportuno proponer la precisión en el artículo Décimo Tercero transitorio, que este análisis versaría sobre el funcionamiento de esta como órgano constitucional autónomo, y en segundo término, que esta convocatoria sea sobre temas relacionados con el mecanismo de designación del titular de la fiscalía y las fiscalías especializadas.

Es el compromiso que asumieron en el diálogo que tuvieron durante varios meses el equipo de transición del nuevo gobierno y los colectivos, por qué no plasmarlo en el artículo Décimo Tercero transitorio.

Nos parece muy importante que debemos añadir estos temas de la designación que debe quedar claro cómo se va a dar el proceso a discusión, en virtud de la negativa que hoy se tiene, garantizando los compromisos que se hicieron por parte de la mayoría legislativa, para discutir verdaderamente la modificación constitucional y que no sea otra tomada de pelo, como lo han hecho en esta ocasión.

Y por ahí decían y hablaban de hipocresías y si de hipocresías hablamos, hoy es la más grande de las hipocresías, porque, aunque lo nieguen habrá un fiscal carnal, un fiscal a modo de la cuarta transformación.

Y si de hipocresías hablamos, por qué aquéllos que se desgarraron las vestiduras en meses anteriores en darle reversa al gasolinazo, hoy se niegan y cambiaron de postura.

Si de hipocresías hablamos, por qué aquellos que se comprometieron a retirar las Fuerzas Armadas de las calles, hoy quieren militarizar al país.

Y si de hipocresías hablamos, aquellos que criticaron y que lucharon durante muchos años por no ser una mayoría, por no tener una mayoría insensible, avasalladora y aplanadora, hoy se han convertido en lo que tanto criticaron. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Villarreal Salazar. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el diputado Villarreal Salazar.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, compañera secretaria. ¿Alguien quiere manifestar en lo individual lo que están tratando de presentar? A ver, por favor, sonido en la curul de la diputada Ruth Salinas.

La diputada Ruth Salinas Reyes (desde la curul): Gracias, presidenta. Solicitar se pida el quórum de esta asamblea y revisar que estemos todas y todos los diputados, por favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada Salinas, para esta Presidencia, desde el lugar que ocupa la Mesa Directiva, es posible constatar que el quórum está garantizado para continuar la sesión. En breve, si la discusión así se genera, tendremos ocasión de proceder a la votación nominal, que es la máxima verificación del quórum. Compañera diputada Salinas, adelante.

La diputada Ruth Salinas Reyes (desde la curul): Gracias, presidenta. Entonces, también solicitar que se haga ya la votación electrónica, por favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En cuanto desahoguemos los puntos que quedan pendientes, señora diputada, con mucho gusto accederemos a su petición. Todavía nos quedan varios artículos y varios diputados y diputadas pendientes de pasar a hacer sus propuestas de reserva. A ver, compañera diputada Salinas, ¿con qué objeto?

La diputada Ruth Salinas Reyes (desde la curul): Gracias, presidenta. Con el objeto de hacer ver que las compañeras y compañeros, quienes representan la mayoría absoluta, pareciera que no tienen intención ni deseo de revisar ninguna de las reservas que tenemos en particular, lo cual pues es también una burla para las ciudadanas y los ciudadanos que nos siguen y que siguen esta sesión.

Y por el respeto que se les merece y nos merecemos, pues vemos que no es necesario revisar cada reserva en particular, puesto que las compañeras y compañeros de Morena no desean pasar ni un punto ni una coma de lo que estamos haciendo ver en esta asamblea. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Bien, diputada Salinas. Gracias por su consideración. Tiene el uso de la palabra, para presentar una reserva sobre el artículo 34 del proyecto de dictamen, el diputado Miguel Riggs Baeza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza: Con su venia, presidenta, compañera diputada. Aquí está, tienen 10 días gobernando, 363 muertos que corren en sus venas. Han tenido cinco meses, cinco meses dándose la vuelta por todo el país en una soberbia, en una actitud arrogante...

El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, señor diputado. A ver, permítame. ¿Con qué objeto, señor diputado? A ver, por favor sonido a la curul del diputado Rubén Cayetano. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Diputada presidenta, estamos en la reserva, en la presentación de reserva de los artículos de la Ley General de la Fiscalía de la República. Debe circunscribirse al tema, los posicionamientos y todo otro tipo de expresiones ya se presentaron en el inicio de la discusión...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, señor diputado Cayetano, esta Presidencia ha definido y en ocasión anterior de la intervención de una compañera suya de grupo parlamentario, que en esta tribuna y en torno al tema los señores y las señoras legisladoras tienen la libertad de expresarse como y de acuerdo a su particular punto de vista. Adelante, diputado Riggs.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza: Bueno, como ven siguen en su coma post triunfo, siguen sin despertar. Llevan cinco meses en post campaña placeándose en 11 mesas supuestamente de seguridad, en donde iban a escuchar al pueblo para plantear una estrategia de seguridad. Y ahora nos topamos con que no podemos reservar artículos y que parece que este...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, compañero diputado. Permítame un momento. Detengan el reloj parlamentario, si fueran tan amables. Yo le haría una cordial invitación a las y los compañeros que se están expresando en torno al orador, que permitan con respeto que este continúe su argumentación, es parte del trabajo parlamentario y de la tolerancia que tenemos que ejercer entre nosotros. Les ruego atentamente escuchen al orador. Adelante, por favor.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza: Bueno, pues ahora sí también aquí van ganando, eh. Porque esta cifra los pone como ganadores a los gobiernos pasados. Felicidades ganadores, síganle así y así nos va a ir, en fin. Miren, yo no veo que ya se estén sentando a platicar con ejemplo con los sicarios, pregonando con el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo si ni siquiera saben escuchar? En fin.

Voy al punto. El segundo párrafo del artículo... Sí les duele ¿verdad? Okey. El segundo párrafo del artículo 34 es la prueba máxima de la simulación de la creación de un órgano interno a modo, que de nada sirve y que está para hacer absolutamente nada. Pretenden que el órgano sirva para nada y lo obligan a que se convierta en un simple observador imposibilitado para intervenir en el desempeño de su fiscalía.

Pretenden que el órgano, en los términos que está...

La diputada Margarita García García (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, permítame un momento. Nuevamente diputado Riggs, ruego su comprensión. A ver, la diputada Margarita García García, ¿con qué objeto, diputada?

La diputada Margarita García García (desde la curul): A ver, diputada presidenta, con mucho respeto, yo pediría orden, pero además respeto. Eso es una burla que se burlen de los muertos, que estén exponiendo aquí ese tema. No tienen vergüenza, son cínicos. Cómo pueden celebrar...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada.

La diputada Margarita García García (desde la curul): Cómo pueden celebrar, diputada presidenta, estos muertos donde ellos tuvieron 250 mil muertos.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputada, ¿cuál es el objeto de su intervención?

La diputada Margarita García García (desde la curul): Desvergonzados. Asesinos, además de hecho son los asesinos, diputada.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Ya ha hecho el señalamiento y reitero la necesidad de respeto para escuchar a las y los oradores. A las distintas fracciones parlamentarias les toca en distintas ocasiones escuchar planteamientos que no son de nuestro agrado y sin embargo el respeto que nos debemos entre todos amerita la posibilidad en su momento de cuestionar o incluso rechazar los mismos. Permita, por favor, que concluya el orador su intervención. Adelante, diputado Riggs.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza: Caray, hace algunos años ahí andaban ahí llorando, contando migajas para mantener su registro. Siguen aquí de puro chanfle y ahora resulta que no se acuerdan. Pero, bueno, en fin, en fin, en fin. Continúo.

El órgano interno de control no podrá llevar acabo realmente investigaciones contra funcionarios que hayan cometido graves faltas en el ejercicio de su labor como personal sustantivo de la fiscalía, sin contar que en una interpretación en sentido estricto del contenido del párrafo tampoco podrán imponerse a las medidas cautelares que prevé la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Debe eliminarse dicho párrafo para conservarle al órgano su dignidad y evitar que nazca muerto, y solo sirva para simular. Entonces, soy plurinominal.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, diputado, siga adelante con su intervención.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza: Bueno, a ver, entonces, ya si no aceptan que el órgano interno de control en esta fiscalía nace muerto, no saben entenderlo, no saben escuchar. Pues realmente aquí a los partidos de oposición nos tratan como si estuvieran pintados. Qué barbaridad, de ese calibre toman en cuenta ustedes las propuestas. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Riggs. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de reforma al artículo 34, presentada por el diputado Miguel Riggs.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene la palabra el diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para hacer propuestas de supresión a los artículos 40 y 41.

El diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas: Con su venia, señora presidenta. Desde el 2014 la Constitución ordena a México una nueva Fiscalía General de la República. La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de nueva no tiene absolutamente nada. No es más que una copia barata de lo que se ha propuesto ya con anterioridad.

El primero de julio, todo el país, según encuestas, más del 90 por ciento, quería un cambio y ustedes no lo proponen. Proponen exactamente las mismas ideas retrógradas. Les está ganando dentro de su movimiento, el de Morena, las voces que vienen del PRI, incluidas las del presidente de la República, y tienen muchos en su movimiento que están apagando las voces revolucionarias cada día que pasan en el poder.

Pero hasta ahora el fiscal que quiere la gente, el pueblo de México sigue sin nombrar. El presidente de México y su coalición aquí representada, en sus primeras acciones de su gobierno y en las acciones legislativas de su grupo, las mismas por las cuales se quejaron tanto tiempo, se están pasando del lugar que les dio el pueblo a las comodidades y condicionamientos del poder.

Aquí hay un momento clave en lo que será la historia de México en los próximos tres años. Si están del lado del pueblo, si aceptan a un fiscal independiente, autónomo o solamente son la borregada del tlatoani en turno.

En ese contexto que sabemos que está definido, no en su mente, sino en la mente de su patrón que ustedes solamente obedecen, hay puntos clave del procedimiento que debe marcar la Constitución para elegir adecuadamente al fiscal.

Por ejemplo, el Consejo Ciudadano. Ambos, nos han dicho Morena y sus aliados que serán de naturaleza ciudadana y no política, pero le dejan a los políticos su aprobación. Esa es una total tomada de pelo. Pero el ciudadano libre que lo quiere integrar este mencionado consejo, más de 400 organizaciones civiles independientes sin partidos, han propuesto una fiscalía que sirva. La fiscalía que plantea Morena no significa la diferencia sustantiva que quiere el pueblo de México.

Lo que le importa a nuestro país es que quien aplique la ley no dependa de políticos, que el fiscal sea independiente del gobernante en turno, porque si se sigue haciendo, jamás encontraremos justicia a crímenes financieros como Odebrecht, la casa blanca o tantos delitos que ustedes prometieron en sus distritos ir por ellos. Y hoy les duelen y les siguen doliendo a nuestro pueblo.

Lo que quiere México, ya lo ha dicho el PAN, ni a un fiscal ni a un consejo ciudadano deben depender del poder, ni México ni el PAN no queremos ni candidatos de partidos o que hayan tenido cargos de elección por algún partido político en los puestos de la fiscalía.

No queremos a los Duarte ni a los Yarrington, ni a cualquier funcionario que siga violando la ley y que los que sigan juzgando sean funcionarios puestos por los mismos partidos políticos.

El pueblo capacitado, que es mucho en México, quiere que sean ellos mismos los que formen parte del consejo ciudadano, pero también que formen parte de una comisión de designaciones donde ciudadanos de reconocido prestigio en procuración de justicia y en derechos humanos, sean quienes verdaderamente elijan a un fiscal autónomo.

Para terminar en el tema de los fiscales especiales, necesita este país que también sean independientes. Quien cometa un fraude electoral, un acto de corrupción un delito financiero, deben perseguirlos sin que dependa su nombramiento de nosotros los políticos.

Desde hace cuatro años el PAN y el pueblo no han cambiado su decisión. Lo dijo ya desde hace cuatro años Acción Nacional y lo seguiremos diciendo fuertemente: sí a un fiscal independiente, sí a un verdadero consejo ciudadano independiente, sí a un fiscal que sirva y no lo que quiso el PRI y lo que ahora quiere Morena, una fiscalía carnal, de compadres a modo.

Amigos de la mayoría, adelante, voten a modo. Electoralmente para la oposición es rentable que estén actuando igual que el PRI en sus momentos de poder, ustedes saben cuál es el final.

Electoralmente tal vez no sirva que cada día le sigan fallando a los ciudadanos que confiaron en ustedes, ser tapete no es quien se sube a esta tribuna a discutir y debatir, ser tapete es quien solo asiente la cabeza agachada por instrucciones de su patrón. Pero en México le seguirá doliendo, y es nuestra mayor preocupación que se haga justicia, no lo que quiere Morena, que como dicen en mi pueblo, se haga justicia solo en los bueyes de mi compadre. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Martínez Terrazas. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión las propuestas del diputado Martínez Terrazas.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

El diputado Ricardo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ha declinado presentar en tribuna su reserva al artículo 41. Insértese íntegro en el Diario de los Debates el texto que habría de leer el diputado Aguilar Castillo.

Tiene el uso de la palabra la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para hacer propuesta de modificación al artículo 42.

La diputada Carmen Julia Prudencio González: Con su venia, señora presidenta. En esta ocasión me permito hacer uso de la voz desde esta tribuna para exponer razones, a nuestro parecer de peso, para realizar reformas al párrafo segundo del artículo 42 del dictamen que estamos analizando.

El último párrafo del artículo 14 del mismo dictamen señala que la Fiscalía General de la República se apoyará de un consejo ciudadano, a lo que debemos entender que su función es de suma relevancia para el órgano público autónomo. Sin embargo, si bien los términos de las opiniones y recomendaciones del consejo ciudadano de la Fiscalía General de la República no son vinculantes, es decir no son una obligación, ello no implica que puedan ser omitidas por las autoridades a quienes están dirigidas.

Lo anterior, debido a que dichas opiniones y recomendaciones son realizadas por ciudadanos de probidad y prestigio en las áreas de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, y que serán elegidos en tenor de un proceso de selección.

Así entonces, al analizar la redacción que propone la Comisión de Justicia en el dictamen que nos ocupa, esta solo implica el deber de fundar y motivar las razones de aceptación o rechazarlo en relación a las recomendaciones, no así de las opiniones, sin explicar a lo largo del dictamen en qué diferencias ambas figuras para con base en ello excluir las opiniones.

De igual manera, la redacción propuesta por el dictamen omite una periodicidad para que la respuesta a una recomendación sea formulada. Con ello se estaría negando la posibilidad a quien solicita una contestación, en este caso el consejo ciudadano, a obtenerla en un lapso de tiempo razonable, lo cual provocaría que la autoridad competente de omitir su aceptación o rechazo de la opinión, o en su caso recomendación, nunca le daría una respuesta a esta, ya que no tendría la obligación en ningún momento, al no tener marcada una temporalidad, y por lo cual quedaría a discrecionalidad de los destinatarios.

De no hacer las modificaciones que se proponen y por las facultades que el mismo decreto otorga, el consejo ciudadano, este no pasaría de ser solo una figura decorativa, por lo que, ¿dónde quedaría el carácter ciudadano de esta fiscalía, si a esta no se le toma en cuenta?

Por lo anterior, se propone reformas al artículo 42 del dictamen en estudio en relación a lo siguiente.

Primero. Dar la misma importancia tanto a las opiniones como a las recomendaciones que emita el consejo ciudadano, incluyendo con ello ambas figuras. Para ello se propone una reforma que asiste en el texto a las que vayan dirigido las mismas.

Segundo. Se propone establecer una periodicidad no mayor a 30 días para emitir argumentos de aceptación o rechazo por parte de la autoridad competente.

Si bien son reformas sencillas de forma, en el fondo se busca dar importancia que merecen a las facultades del consejo ciudadano al que nos referimos, ya que si bien no son vinculantes sí deben, en nuestra opinión, tener un efecto al quehacer diario de la fiscalía y sus distintas áreas.

Aprovecho esta tribuna para decir a los diputados que se refieren a Jalisco. Jalisco no se raja y nosotros sí estamos atendiendo las opciones, las diferentes opiniones que tienen la sociedad civil y nuestro gobernador en Jalisco, que somos mayoría Movimiento Ciudadano las va a acatar y definitivamente hoy, él mismo señala que cada modificación de la asociación civil que propongan, va a ver la forma de incluirlas en la ley. Muchísimas gracias, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Prudencio González. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Prudencio González.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se desecha, y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.

Tiene la palabra el diputado Fernando Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hacer una propuesta de modificación al artículo 63 del dictamen.

El diputado Fernando Galindo Favela: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de que los órganos autónomos tengan autonomía presupuestal y que sus proyectos de presupuesto se incluyan íntegros en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que envía todos los años el Ejecutivo federal a esta Cámara de Diputados, sobre todo ahora que se pretende controlar a las instituciones autónomas a través del Presupuesto de Egresos.

Es por ello que estamos proponiendo una adición al artículo 63 de la ley que estamos discutiendo, a fin de que el presupuesto de la fiscalía no pueda ser menor en términos reales respecto al presupuesto del año inmediato anterior.

Esto va a garantizar plena autonomía a la fiscalía que hoy estamos aquí votando, por eso pido a todos los grupos parlamentarios que apoyen esta propuesta. Si realmente queremos que tenga autonomía presupuestal, debemos garantizar que no disminuyan los recursos respecto al año inmediato anterior. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Galindo Favela. En votación económica, consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de adición al artículo 63, presentado por el diputado Galindo Favela.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.

Esta Presidencia informa a la asamblea, que la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán ha declinado sus propuestas de modificación a los artículos transitorios: primero, séptimo, octavo, décimo segundo, décimo tercero, vigésimo y adición de un artículo transitorio. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos, en términos del dictamen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 44, 47, 53, 55, 56, 57, 58 y 63. Así como los artículos transitorios primero, séptimo, octavo, décimo segundo, decimotercero y vigésimo. Así como el título de la ley.

Ábrase el sistema de votación hasta por cinco minutos. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Adelante, señora secretaria. Ya le hice una parte del aviso.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Gracias, presidenta. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos mencionados por la Presidencia, en términos del dictamen. Y el título de la ley. Ábrase el sistema electrónico.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora presidenta, se emitieron 296 votos a favor, 138 en contra y 1 abstención.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobados los artículos reservados, en términos del dictamen, por 296 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. **Pasa al Ejecutivo federal, para sus efectos constitucionales.**

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION

DECRETO por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:

SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Artículo Único. Se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Capítulo I

Marco General de Operación

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente Ley tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables.

Artículo 2. Fines institucionales

La Fiscalía General de la República tendrá como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.

Artículo 3. Principios Rectores

La Fiscalía General de la República regirá su actuación por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de niñez y adolescencia, accesibilidad, debida diligencia e imparcialidad.

En todos los casos deberán observarse los principios de equidad, igualdad sustantiva y no discriminación en razón de la condición étnica, migratoria, de género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencia, orientación o identidad sexual, estado civil o cualquier otra condición o motivo que atente contra la dignidad humana; o bien, tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables.

Artículo 4. Competencia

La Fiscalía General de la República tendrá las competencias señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y las demás leyes aplicables.

La Fiscalía General de la República tendrá la facultad de atraer casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las leyes aplicables, en los casos en que se demuestre la inactividad o ineficacia de la fiscalía local competente, garantizándose que la investigación y la persecución de los delitos no se fragmente.

La víctima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción. La negativa de atracción podrá ser impugnada en los términos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 5. Funciones de la Fiscalía General de la República

Corresponde a la Fiscalía General de la República:

I. Investigar y perseguir los delitos;

II. Ejercer la acción penal;

III. Procurar la reparación del daño de las víctimas;

IV. Adoptar y, en su caso, promover la adopción de medidas de protección a favor de las víctimas, testigos u otros sujetos procesales;

V. Intervenir en el proceso de ejecución penal;

VI. Intervenir en las acciones de extradición activa y pasiva;

VII. Intervenir en las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, y

VIII. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables.

Capítulo II

Del Plan de Persecución Penal

Artículo 6. Plan de Persecución Penal

La persona titular de la Fiscalía General de la República aprobará el Plan de Persecución Penal, considerando las prioridades nacionales establecidas en la política criminal para orientar las atribuciones institucionales, las prioridades en la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal y las funciones que deben desempeñar las personas que prestan servicios en la institución; así como los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, mismo que deberá ser aprobado por la mayoría de los miembros presentes del Senado de la República.

El Plan de Persecución Penal, contendrá una estrategia de atención y trámite en la que se deberá considerar:

I. Los distintos análisis de la incidencia delictiva;

II. Los diagnósticos situacionales;

III. Las estadísticas de percepción de la violencia en la ciudadanía;

IV. Los análisis de información elaborados por instancias especializadas;

V. Los diagnósticos elaborados por organizaciones civiles;

VI. Los informes sobre la situación de las víctimas del delito;

VII. Los informes sobre violaciones a los derechos humanos;

VIII. Los demás instrumentos que sean fuente certera de información relacionada con los fenómenos criminales.

El diseño del Plan de Persecución Penal, previo a su aprobación, deberá garantizar la participación ciudadana, así como de otras entidades de seguridad, procuración e impartición de justicia, conforme a la metodología que apruebe el Fiscal General de la República.

Para efectos de control, la persona titular de la Fiscalía General de la República, al inicio de su gestión deberá presentar ante el Senado de la República el Plan de Persecución Penal, previa consulta al Consejo Ciudadano. Asimismo, deberá presentar anualmente ante dicha Cámara los resultados y modificaciones del mismo en su caso.

Artículo 7. Publicidad y transparencia

La Fiscalía General de la República garantizará el acceso a la información pública generada en el marco de sus atribuciones y conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable.

Respecto a las investigaciones relacionadas con las violaciones a los derechos humanos, se estará a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 8. Del mandato o solicitud de colaboración

Los órganos a cargo de la función fiscal y de investigación podrán solicitar la colaboración de cualquier autoridad para la práctica de un acto de investigación o procedimental.

Los actos de colaboración entre la Fiscalía General con autoridades federales, estatales y municipales, se realizarán de conformidad con lo previsto en los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Capítulo IV del Título IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la presente Ley, así como en las disposiciones contenidas en otras normas y convenios de colaboración que se hayan emitido o suscrito.

TÍTULO SEGUNDO

Funciones y Facultades

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 9. Facultades de los órganos fiscales

Los órganos que ejercen la función fiscal tendrán las siguientes facultades:

I. La persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal;

II. Solicitar las medidas cautelares contra los imputados;

III. Buscar y presentar los medios de prueba que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito;

IV. Procurar que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita;

V. Pedir la aplicación de las penas;

VI. Intervenir en todos los asuntos que la ley determine;

VII. Ejecutar los lineamientos de la política y Plan de Persecución Penal dictados por la persona titular de la Fiscalía General de la República;

VIII. Conducir legalmente la investigación de los delitos, ejercer la acción penal y abstenerse o desistirse de ésta, de acuerdo con las leyes aplicables;

IX. Dirigir funcionalmente a las policías en lo concerniente a la investigación de los delitos;

X. Solicitar y efectuar actos de investigación, dentro o fuera del territorio nacional, conforme al principio de libertad probatoria;

XI. Garantizar la protección de las víctimas, testigos y otros sujetos procesales, en el marco de la legislación vigente, por sí o en coordinación con otras entidades públicas o privadas;

XII. Intervenir para garantizar el pleno cumplimiento de las resoluciones judiciales en los términos establecidos por la legislación nacional de ejecución penal;

XIII. Requerir y coordinar la cooperación y coadyuvancia necesaria de instituciones públicas y privadas, en la conducción legal de la investigación y ejercicio de la acción penal;

XIV. Garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas vinculadas con las investigaciones, con independencia de su situación jurídica, así como de las víctimas del delito;

XV. Aplicar los estándares, nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de niñez y adolescencia, así como el enfoque diferencial y especializado, en las investigaciones y procesos penales;

XVI. Aplicar los protocolos de investigación que les competan;

XVII. Informar a las personas extranjeras, especialmente a quienes sean migrantes, víctimas o testigos de delitos cometidos en territorio nacional sobre los derechos que les asisten en materia de apoyo consular en los casos que se requiera, de retornar a su país de origen o permanecer en territorio nacional y, en su caso, de solicitar la condición de visitante por razones humanitarias, la condición de persona refugiada o protección complementaria, así como requerir a la autoridad competente un informe de las acciones que haya realizado respecto de su canalización a las instituciones públicas o privadas especializadas para brindarles la atención correspondiente, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

XVIII. Ejercer todas aquellas funciones que establezcan las leyes procesales o especiales, así como las que disponga la persona titular de la Fiscalía General a través de la normatividad interna, en el ámbito de su competencia;

XIX. Acceder de conformidad con la legislación aplicable a la información, documentos, registros físicos y electrónicos en poder de las instituciones públicas y privadas;

XX. Citar a los servidores públicos para la realización de actuaciones y diligencias relacionadas con la investigación o el proceso en términos de la legislación aplicable, y

XXI. Las demás que les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás leyes en la materia.

Artículo 10. Obligaciones de las y los Fiscales ante las víctimas

En toda investigación y proceso penal las y los Fiscales deberán garantizar los derechos de las víctimas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual tendrá las siguientes obligaciones:

I. Coordinar con las víctimas, sus representantes y organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales que las acompañan y asesoran, la generación de planes de investigación y la práctica de diligencias específicas que las involucren, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley;

II. Proporcionar de forma clara y permanente a las víctimas, sus representantes y asesores, información sobre sus derechos, sobre el estado de los casos y actos de investigación previstos y programados, garantizando su participación en las diligencias que correspondan;

III. Dar acceso a los registros y proporcionar copia gratuita de estos en forma física o magnética solicitadas por las víctimas y sus representantes, con relación a los casos, para facilitar su conocimiento y participación en los mismos;

IV. Garantizar el derecho de las víctimas y sus representantes, a presentar peritajes independientes, facilitando para ello, su acceso a los casos;

V. Garantizar a las víctimas la protección y asistencia a la que tienen derecho, por parte de las entidades públicas o privadas que correspondan, de conformidad con la presente Ley y demás aplicables;

VI. Garantizar a las víctimas o sus familiares, el uso exclusivo de la información genética resguardada en la Base Nacional de Información Genética, para la identificación de cuerpos o restos humanos, en el caso de personas desaparecidas, de conformidad con lo que establezcan los Lineamientos Generales en esta materia;

VII. Garantizar la perspectiva de género, de interculturalidad, de niñez y adolescencia, así como el enfoque diferencial y especializado en la investigación y ejercicio de la acción penal, de acuerdo a las condiciones específicas de las víctimas, y

VIII. Garantizar a las víctimas que lo requieran intérprete y traductor, por sí o en coordinación con otras entidades públicas, privadas o personas en lo individual.

Artículo 11. Órganos a cargo de la función fiscal

La representación de la Fiscalía General de la República corresponde a los siguientes órganos:

I. Titular de la Fiscalía General de la República;

II. Titulares de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos;

III. Titulares de las Fiscalías Especializadas;

IV. Titular de la Coordinación de Investigación y Persecución Penal;

V. Titular de la Coordinación General, en sustitución o suplencia del Fiscal General de la República, de conformidad con lo previsto en la presente Ley, y

VI. Fiscales con nombramiento del Servicio Profesional de Carrera, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento.

Artículo 12. Independencia Técnica de las y los Fiscales

Las y los Fiscales ejercerán sus funciones con independencia y autonomía, libres de cualquier tipo de coacción o interferencia en su actuar. En el ejercicio de sus funciones, se conducirán conforme al criterio de objetividad, con base en el cual dirigirán la investigación de los hechos y circunstancias que prueben, eximan o atenúen la responsabilidad de las personas imputadas, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable y el Plan de Persecución Penal.

Artículo 13. Asignación

Los órganos a cargo de la función fiscal contarán con el personal policial, técnico, pericial, y en general, el relativo a la operación sustantiva de la Fiscalía, asignados de forma directa para el cumplimiento de los fines de la función fiscal y del Plan de Persecución Penal, de conformidad con el Servicio Profesional de Carrera.

La persona titular de la Fiscalía General de la República, sustentará la asignación del personal que integrará las unidades fiscales, conforme al Plan de Persecución Penal, quienes no podrán cambiarse de asignación, salvo previo acuerdo de los titulares.

El personal mencionado en el párrafo que antecede también podrá ser asignado, de manera temporal y para el cumplimiento de objetivos específicos, a las Fiscalías o Unidades de Investigación y Litigación. El titular de cada una de estas unidades, para todos los efectos, asumirá el mando del personal asignado.

Capítulo II

De la Estructura

Artículo 14. De la Estructura de la Fiscalía General de la República

La Fiscalía General de la República tendrá la siguiente estructura:

I. Fiscal General;

II. Coordinación General;

III. Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos;

IV. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales;

V. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;

VI. Fiscalía Especializada de Asuntos Internos;

VII. Coordinación de Investigación y Persecución Penal;

VIII. Coordinación de Métodos de Investigación;

IX. Coordinación de Planeación y Administración;

X. Órgano Interno de Control;

XI. Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera;

XII. Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y

XIII. Las Fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General, a través de acuerdos generales, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento, y acorde con el Plan de Persecución Penal.

La Fiscalía General de la República, se apoyará de un Consejo Ciudadano el cual cuenta con las facultades señaladas por esta Ley.

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos tendrá a su cargo las Fiscalías de protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes; de trata de personas; de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; de migrantes; de investigación de tortura, y todas aquellas Fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General de la República.

El Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias será responsable de la aplicación de los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, con independencia técnica y de gestión.

El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de la República contará con un Consejo Técnico, que estará integrado por la persona titular de la Fiscalía, quien lo presidirá y por los Fiscales a que se refiere esta Ley y estará facultado para aprobar, evaluar y conocer de la ejecución de los programas y proyectos a cargo del Instituto y conocer y aprobar en su caso los informes que presente su titular, el cual será designado por la persona titular de la Fiscalía General de la República.

El Consejo Técnico del Instituto, que deberá sesionar por lo menos tres veces al año y en el cual participará el titular del Instituto, con voz, pero sin voto, se organizará y operará conforme a las reglas que expida al efecto.

Las personas titulares de la Fiscalía General de la República o de la Coordinación General, establecerán los criterios para evitar la fragmentación de las investigaciones y, en su caso, la creación de unidades mixtas de investigación.

La Fiscalía General de la República contará con Fiscales, policía de investigación, analistas, auxiliares y peritos, así como con el personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. En los casos relacionados con violencia de género y contra la mujer, el personal deberá ser especializado.

Asimismo, podrá allegarse de personal técnico especializado de otras entidades para colaborar en las investigaciones.

Capítulo III

De la Persona Titular de la Fiscalía General de la República

Artículo 15. Nombramiento del Fiscal

El nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General de la República se sujetará al procedimiento y requisitos previstos en el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se promoverán los principios de transparencia, publicidad, mérito, participación ciudadana, e igualdad y no discriminación.

Artículo 16. De la designación de la persona titular de la Fiscalía General de la República

Quienes aspiren a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos de elegibilidad:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III. Contar, con una antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho;

IV. Gozar de buena reputación, y

V. No haber sido condenado por delito doloso.

Artículo 17. Buena reputación

La buena reputación, a la que se refiere el artículo 102 Constitucional, está compuesta por dos elementos:

I. El Objetivo que se refiere a la calidad profesional relevante, trayectoria en el servicio público o en ejercicio de la actividad jurídica, y

II. El Subjetivo que se refiere a la honorabilidad, alta calidad técnica, compromiso con valores democráticos, independencia y reconocimiento social.

Artículo 18. Causas graves de remoción de la persona titular de la Fiscalía General de la República

La persona titular de la Fiscalía General de la República, sólo podrá ser removida por el Presidente de la República por incurrir en alguna de las causas graves contempladas en el Capítulo II del Título Tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas o por la comisión de uno o más delitos considerados como graves por la legislación penal u otros ordenamientos.

El Ejecutivo Federal deberá acreditar ante el Senado de la República la causa grave que motivó la remoción de la persona titular de la Fiscalía General de la República, e informar al Senado de la República, quien decidirá si objeta o no la remoción, en términos del artículo 102, apartado A, fracciones IV y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 110 y 111 de la misma.

Artículo 19. Facultades de la persona titular de la Fiscalía General de la República

La persona titular de la Fiscalía General de la República intervendrá por sí o por conducto de los Fiscales y demás órganos de la Fiscalía en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y las demás disposiciones aplicables y tendrá las siguientes facultades:

I. Dirigir y coordinar la política general de la Fiscalía General de la República, así como vigilar y evaluar la operación de las unidades administrativas que la integran;

II. Representar a la Fiscalía General de la República en las relaciones institucionales con otras entidades u órganos de gobiernos locales, federales, nacionales e internacionales;

III. Participar en el sistema de atención a las víctimas y ofendidos por la comisión de delitos;

IV. Celebrar los convenios de colaboración con el exterior para el adecuado funcionamiento del Mecanismo de Apoyo Exterior y las demás funciones que se requieran;

V. Solicitar la colaboración de otras autoridades, así como auxiliar a las que lo soliciten, directamente o por conducto de la Coordinación General, en la persecución de los probables autores o partícipes del hecho delictivo, en los términos que dispongan las leyes, acuerdos, convenios, bases y demás instrumentos de colaboración celebrados para tal efecto;

VI. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública;

VII. Autorizar los lineamientos y bases del servicio público de carrera de la Institución y de conformidad con la normatividad aplicable;

VIII. Nombrar y remover a las personas titulares de las Fiscalías Especializadas en los términos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los demás Fiscales que considere pertinente, así como otros servidores públicos adscritos a la Fiscalía;

IX. Ejercer atracción sobre los asuntos competencia de la Institución, para conocer personalmente o designar la Fiscalía Especializada, Unidad de Investigación o Coordinación que deberá conocer de los mismos;

X. Instruir la integración de unidades o equipos especiales para la investigación de casos;

XI. Crear coordinaciones, Fiscalías, direcciones, unidades y departamentos, de acuerdo con las necesidades institucionales y con el Plan de Persecución Penal;

XII. Presidir la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;

XIII. Ofrecer y entregar recompensas, en los casos, términos y condiciones que determine el Reglamento de esta Ley;

XIV. Determinar el Plan de Persecución Penal en los términos establecidos en la presente Ley, los criterios generales y prioridades en la investigación de los delitos, así como en el ejercicio de la acción penal;

XV. Coordinar acciones y suscribir convenios con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, para el desarrollo de acciones conjuntas, de fortalecimiento institucional y de cumplimiento de los fines institucionales;

XVI. Representar a la Fiscalía General de la República en las relaciones institucionales con otras entidades u órganos nacionales e internacionales;

XVII. Promover la celebración de tratados, convenios, declaraciones o acuerdos internacionales relacionados con los fines institucionales;

XVIII. Decidir sobre la atracción de los casos;

XIX. Coordinar a las unidades y órganos de la Fiscalía General de la República en el suministro de información y asegurar su consolidación, consistencia, oportunidad, y confiabilidad para los fines de formulación de la Política de Persecución Penal;

XX. Establecer las directrices y controlar los procesos de generación, sistematización y análisis de la información para su óptimo resguardo y aprovechamiento;

XXI. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de sistematización y análisis de la información a fin de apoyar el desarrollo de las funciones sustantivas de la Fiscalía;

XXII. Establecer medios de información sistemática y directa a la ciudadanía, para dar cuenta de sus actividades, de conformidad con la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública;

XXIII. Tener a su cargo la Unidad Especial de Género y Violencia Contra la Mujer, que tendrá como objetivo la institucionalización de la perspectiva y transversalidad de género en todas las áreas de la Fiscalía, a través de la incorporación del enfoque de igualdad y no discriminación a la cultura institucional a través del diseño, planeación, presupuesto, ejecución y evaluación de las políticas de la Fiscalía y será responsable de coordinar y gestionar acciones con todas las áreas de la Fiscalía General de la República, para incorporar en su actuación, los principios rectores de la igualdad sustantiva y de oportunidades entre mujeres y hombres;

XXIV. Aquellas facultades establecidas en los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Fiscal General de la República, y

XXV. Las demás que señala esta Ley, su Reglamento, así como otras disposiciones legales aplicables en la materia.

Serán facultades indelegables del Fiscal General de la República las establecidas en las fracciones I, IV, VII, VIII, XI, XIV, XV, XVII, XX y XXIV.

Capítulo IV

De la Coordinación General de la Fiscalía General de la República

Artículo 20. La Coordinación General de la Fiscalía General de la República

La Coordinación General tendrá las siguientes facultades:

I. Suplir a la persona titular de la Fiscalía General de la República en sus ausencias temporales de hasta tres meses;

II. Representar a la Fiscalía General de la República, en las relaciones institucionales con otras entidades u órganos de gobierno locales, nacionales, federales e internacionales;

III. Elaborar las normas y políticas a las que deberán sujetarse las unidades y los órganos de la Fiscalía, en la materia de su competencia;

IV. Desarrollar la política del sistema de gestión documental y administración de archivos de la Fiscalía General, de conformidad con la normatividad aplicable;

V. Integrar el sistema de información legislativa, jurisprudencial y doctrinal, nacional e internacional a efecto de dar cumplimiento a las atribuciones de la Fiscalía General de la República, en materia de medios de control constitucional de asuntos de su competencia;

VI. Desarrollar y ejecutar las políticas de transparencia y rendición de cuentas, y atender las solicitudes de información pública;

VII. Atender las quejas, recomendaciones y solicitudes de los organismos públicos de derechos humanos, nacionales e internacionales, así como las quejas presentadas por las personas;

VIII. Formalizar los convenios de colaboración con el exterior para el adecuado funcionamiento del Mecanismo de Apoyo Exterior y las demás funciones que se requieran;

IX. Representar legalmente a la Fiscalía General de la República, en los asuntos jurídicos de acciones promovidas en su contra o por la propia Fiscalía, así como también ante las autoridades administrativas, judiciales y laborales;

X. Canalizar la información generada por la persona titular de la Fiscalía General de la República, a las áreas correspondientes de la Fiscalía General de la República;

XI. Evaluar riesgos y proteger a personas ofendidas, víctimas, testigos y demás sujetos en los casos en que existan amenazas o riesgos a su integridad o vida;

XII. Coordinar y colaborar con entidades gubernamentales nacionales e internacionales para la implementación de los esquemas de seguridad de víctimas, testigos y demás sujetos procesales;

XIII. Resolver los conflictos que se susciten en el ámbito administrativo con motivo de la interpretación o aplicación de la presente Ley y su Reglamento, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, y demás normatividad institucional, así como presentar opinión a la persona titular de la Fiscalía General de la República, en los casos no previstos, para que resuelva lo conducente en el marco de sus facultades;

XIV. Desahogar las consultas jurídicas internacionales que formulen las diversas áreas de la Fiscalía General de la República, así como de los órganos del Estado Mexicano en materia de procuración de justicia;

XV. Auxiliar a la persona titular de la Fiscalía General de la República, en la elaboración de los lineamientos y bases del servicio profesional de carrera de la institución, de nombramiento y remoción de servidores públicos, de conformidad con la normatividad;

XVI. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de las políticas institucionales del Servicio Profesional de Carrera;

XVII. Coordinar y dirigir a las representaciones de la Fiscalía General de la República en el extranjero;

XVIII. Coordinar y dirigir la implementación de la política de género y violencia contra la mujer así como para la atención con enfoque diferencial para personas colocadas en situación especial de vulnerabilidad en razón de la condición étnica, migratoria, de género, sexo, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, orientación o identidad sexual y de género, estado civil o cualquier otra condición o motivo que atente contra la dignidad humana; o bien, tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas;

XIX. Conocer y resolver los conflictos de competencia entre órganos fiscales, y

XX. Las demás que disponga esta Ley y su Reglamento.

Artículo 21. Cobertura de suplencias de la persona titular de la Fiscalía General de la República

La persona titular de la Fiscalía General de la República, será suplida en sus excusas, ausencias o faltas temporales por la persona titular de la Coordinación General y a falta de ésta, por quien disponga el Reglamento de esta Ley, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos para ser titular de la Fiscalía General de la República.

En caso de ausencia definitiva, la titularidad de la Fiscalía General de la República, será ocupada temporalmente por la persona titular de la Coordinación General, quien deberá notificar al Senado de la República a efectos de que proceda conforme al artículo 102 Constitucional.

Capítulo V

De las Fiscalías Especializadas

Artículo 22. De la designación y remoción de las personas titulares de las Fiscalías Especializadas

La persona titular de la Fiscalía General de la República designará a las personas titulares de las Fiscalías Especializadas con base a sus méritos y capacidades para ejercer el cargo y con un perfil previamente establecido.

El Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes podrá objetar dicha designación o remoción, en un plazo máximo de veinte días hábiles, para dichos efectos, el Fiscal General de la República, enviará al Senado de la República una comunicación donde expondrá las razones que sustentan la designación o la remoción de las personas titulares de las Fiscalías Especializadas.

En su caso, serán removidos en términos de las disposiciones constitucionales, respetando el derecho de audiencia y debido proceso conforme a la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 23. Principio del mérito

Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para la designación de Fiscales Especializados, los órganos competentes valorarán los antecedentes y trayectoria profesional de las personas candidatas, con el propósito de evaluar los elementos objetivos y subjetivos que se señalan en esta Ley. Dichos requisitos de elegibilidad deberán cumplir como mínimo con los requisitos señalados en los artículos 16 y 17 de esta Ley.

Artículo 24. Transparencia y publicidad

Todo proceso de designación estará sujeto a los principios de máxima transparencia y publicidad, desde su convocatoria hasta la designación. Las autoridades que intervengan en dichos procesos deberán hacer pública, de manera proactiva, oportuna, completa y accesible, toda la información y documentación que se reciba, solicite, obtenga o produzca con ocasión del procedimiento, con excepción de aquella que pueda afectar la vida privada e intimidad, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública.

El incumplimiento de lo antes dispuesto será motivo de responsabilidad, en términos de la normatividad administrativa aplicable.

Artículo 25. Participación ciudadana

Cualquier ciudadana y ciudadano podrá participar en el proceso de designación, de los Fiscales Especializados, aportando información fidedigna relevante sobre los aspirantes; así como su apoyo u objeción contra candidaturas específicas, asistiendo y proponiendo preguntas durante las comparecencias, dichas participaciones no conllevan carácter vinculante.

En el caso de que sea rechazada una opinión o recomendación, ésta deberá estar debidamente fundada y motivada.

Artículo 26. Funciones comunes para las Fiscalías Especializadas

Las Fiscalías Especializadas adscritas a la Fiscalía General de la República, gozarán de autonomía técnica y de gestión, en el ámbito de su competencia y tendrán las siguientes atribuciones:

I. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con las instancias públicas o privadas que se requieran para el ejercicio de sus funciones;

II. En ejercicio de su autonomía técnica, participar en estrategias de coordinación internacional con las instancias homólogas o que resulten pertinentes para el ejercicio de sus funciones, dando aviso a la Coordinación General;

III. Elaborar solicitudes de información a instancias, empresas o particulares nacionales;

IV. Elaborar solicitudes de información a instancias, empresas o particulares internacionales, dando aviso a la Coordinación General;

V. Emitir dentro del ámbito de sus competencias la normatividad necesaria para el desempeño de sus funciones;

VI. Presentar un informe público anual sobre los avances y resultados de su gestión; dichos informes deben ser añadidos al informe que la persona titular de la Fiscalía General de la República presentará ante el Congreso;

VII. En los casos que involucre delincuencia organizada, tomar medidas que privilegien la integridad y no fragmentación de la investigación y el ejercicio de la acción penal;

VIII. Las personas titulares de las Fiscalías Especializadas implementarán medidas y estrategias de coordinación con las unidades, mecanismos y otras instancias especializadas creadas por las leyes especiales, tratados internacionales y demás ordenamientos vinculados con su competencia, a efecto de facilitar el ejercicio del mandato de dichos mecanismos y de la propia Fiscalía, en lo que les corresponde. Las medidas de articulación y colaboración comprenderán acciones tales como:

a. El intercambio de información, documentación, bases de datos, a través de sistemas de interoperabilidad;

b. La designación de enlaces;

c. La realización de mesas de trabajo y encuentros en los que participen, inclusive, organizaciones de víctimas, de la sociedad civil especializadas y organismos internacionales;

d. Facilitar el contacto entre los mecanismos especializados y las personas vinculadas a las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos;

e. Las demás que se acuerden y consideren necesarias;

f. La colaboración entre las Fiscalías Especializadas y los mecanismos creados por leyes especiales serán revestidas de flexibilidad y de formalidad mínima, a efecto de no obstaculizar, complicar ni dilatar las mismas;

IX. Para llevar a cabo la función fiscal, las y los Fiscales Especializados colaborarán con las instancias de seguridad pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y demás instituciones del Ejecutivo Federal, y

X. Las demás que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 27. Funciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos estará a cargo de la conducción legal de la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal en casos de violaciones a los derechos humanos, en el ámbito de sus competencias, independientemente de la clasificación jurídica de los hechos, que afecten la vida, la integridad, el patrimonio y la libertad de las personas; cuando afecten gravemente a la sociedad o por motivo de la condición de vulnerabilidad de las víctimas, o cuando existan falta de garantías para el ejercicio independiente de la investigación en las entidades federativas o cuando la participación de funcionarios o servidores públicos obstaculice la investigación. También conocerá este tipo de hechos cometidos por particulares cuando así lo determine una ley especial.

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos conocerá, por atracción, casos del fuero común o por derivación de otras unidades fiscales al interior de la Fiscalía General de la República, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes generales y especiales.

Artículo 28. Funciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos establecidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y en cualquier otro ordenamiento legal en la materia.

En los procesos electorales, en los procesos de consulta popular y en el desarrollo de mecanismos de democracia directa, realizará despliegues operativos en el ámbito local y federal con la finalidad de que las y los Fiscales puedan atender directamente las denuncias de la ciudadanía.

Deberá informar mensualmente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las investigaciones, así como las determinaciones o procesos según sea el caso.

Igualmente, de forma anual, presentará ante la persona titular de la Fiscalía General de la República, al Senado de la República y al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, este último sólo en los casos en que exista correlación entre los delitos electorales y posibles actos de corrupción cometidos desde la función pública, un informe sobre actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 29. Funciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos contenidos en el Título Décimo del Libro Segundo del Código Penal Federal.

La persona titular de la Fiscalía participará como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, atendiendo las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley correspondiente.

Igualmente, presentará de forma anual ante el Senado de la República un informe público y de fácil acceso, respecto de sus actividades y resultados, mismo que será entregado a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Artículo 30. Funciones de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos

La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos estará a cargo de las investigaciones y el ejercicio de la acción penal en delitos cometidos por personal adscrito a los órganos sustantivos y administrativos de la Fiscalía General de la República, en ejercicio de sus funciones.

La persona titular de la Fiscalía General de la República podrá crear unidades de investigación para casos especiales, incluyendo la probable comisión de delitos por parte de integrantes de la Fiscalía de Asuntos Internos.

Establecerá lineamientos técnico-jurídicos para el monitoreo, la supervisión, investigación, revisión y control de la actuación de los Fiscales, los policías de investigación, peritos, analistas, técnicos y en general de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, en términos del Plan de Persecución Penal.

En caso de excusas, ausencias o faltas temporales de las o los Fiscales o coordinadores, éstos serán suplidos por el funcionario con rango inmediato inferior.

Capítulo VI

De las Coordinaciones de la Fiscalía General de la República

Artículo 31. De la Coordinación de Investigación y Persecución Penal

La Coordinación de Investigación y Persecución Penal tendrá las siguientes facultades:

I. Coordinar la gestión, movilidad e integración de las Unidades de Investigación y Litigación, las cuales realizarán las investigaciones y el ejercicio de la acción penal, así como de los equipos de investigación que los conforman;

II. Realizar los actos de investigación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes aplicables;

III. Coordinar los esquemas de colaboración con otras autoridades federales o locales en la materia de sus competencias;

IV. En los casos que así se requiera, conducir legalmente la investigación y ejercer la acción penal;

V. Cuando así se requiera, designar a las y los Fiscales encargados de los casos, salvo que el nombramiento sea realizado por la persona titular de la Fiscalía General de la República;

VI. Garantizar la independencia y condiciones de trabajo de las Unidades de Investigación y Litigación por el tiempo que sean creadas;

VII. Establecer las unidades de investigación especializada para ejercer la acción penal en materia de delitos de delincuencia organizada y de secuestro, conforme a las leyes en la materia;

VIII. Ejecutar las extradiciones, así como las acciones relacionadas con la cooperación internacional;

IX. Conocer y resolver sobre las solicitudes de atracción, que el Fiscal General le encomiende;

X. Coordinar, dirigir y canalizar el ejercicio de las atribuciones de las y los Fiscales en materia internacional;

XI. Las demás que señale la ley.

Artículo 32. De la Coordinación de Métodos de Investigación

La Coordinación de Métodos de Investigación tendrá las siguientes facultades:

I. Coordinar y asignar los servicios periciales, la policía de investigación, técnicos y analistas que formen parte de la Fiscalía General de la República;

II. Crear la Base Nacional de Información Genética, que contenga los resultados de la información genética proporcionada por víctimas o familiares de personas desaparecidas, en los términos que establezcan los Lineamientos Generales en esta materia;

III. Analizar de forma estratégica los datos agregados del fenómeno criminal, la realización de estudios criminógenos y geodelictivos, así como la información de contexto que se considere relevante para coadyuvar en la investigación;

IV. Efectuar reportes estratégicos sobre criminalidad regional y nacional, identificación de patrones, estructuras y organizaciones, así como cualquier otro que se considere necesario para la investigación de los casos;

V. Servir de apoyo para el análisis técnico científico de los actos de investigación y datos de prueba, a solicitud de las y los Fiscales para el desarrollo de sus investigaciones;

VI. Apoyar la verificación y control de las pruebas periciales y exámenes forenses practicados a solicitud de las autoridades competentes;

VII. Suministrar información a la Coordinación de Planeación y Administración, relativa a los patrones, estructuras y organizaciones criminales para el diseño de las políticas institucionales y toma de decisiones;

VIII. Comunicar la información de utilidad relativa a la seguridad pública que obtenga en el ejercicio de sus funciones a la persona titular de la Fiscalía General de la República, para que la remita a la autoridad competente;

IX. Efectuar reportes estratégicos, así como cualquier otro que se considere necesario sobre el análisis de la criminalidad y de contexto que oriente las políticas de operación de la Fiscalía y contar con un área de análisis criminal que analice sistemática y oportunamente la información relativa a los asuntos de la Fiscalía General de la República, para su procesamiento en materia de estrategia e inteligencia operativa;

X. Realizar los actos de investigación, en apoyo a la Coordinación de Investigaciones y Persecución Penal, conforme lo determine el Reglamento de esta Ley;

XI. Evaluar riesgos y proteger a las personas ofendidas, víctimas, testigos y demás sujetos procesales, en los casos que existan amenazas o riesgos a su integridad o vida, y

XII. Coordinar y colaborar con entidades gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, para la implementación de los esquemas de seguridad de víctimas, testigos y demás sujetos procesales.

El personal de la Coordinación de Métodos de Investigación podrá ser comisionado conforme a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 33. De la Coordinación de Planeación y Administración.

La Coordinación de Planeación y Administración será el área encargada de formular ante la persona titular de la Fiscalía General de la República el Plan de Persecución Penal, y será la responsable de la información institucional, así como de la administración y gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a través de las áreas correspondientes.

Apartado A.

Ejercerá las siguientes facultades, en materia de Planeación Estratégica:

I. Proponer y dar seguimiento a las políticas de vinculación y coordinación interinstitucional en el ámbito de su competencia;

II. Apoyar las labores necesarias para el seguimiento y evaluación de la política y Plan de Persecución Penal definidos por la Fiscalía;

III. Coordinar la integración del Plan de Persecución Penal de las Fiscalías Especializadas;

IV. Definir indicadores y metas institucionales, de acuerdo con el Plan de Persecución Penal, así como dar seguimiento puntual a los mismos;

V. Proponer a la persona titular de la Fiscalía General las adecuaciones necesarias al Plan de Persecución Penal, de acuerdo con los estudios y análisis de su competencia;

VI. Definir las políticas institucionales para el desarrollo y modernización institucional basada en resultados y evaluación del desempeño;

VII. Consolidar la información administrativa y financiera para elaborar estudios e informes;

VIII. Establecer directrices para la generación, sistematización e integración de los informes de las distintas unidades y órganos de la Fiscalía;

IX. Realizar estudios sobre el desarrollo organizacional de la Fiscalía;

X. Recopilar los reportes estratégicos de la Coordinación de Métodos de Investigación, así como cualquier otro que se considere necesario sobre el análisis de la criminalidad y de contexto para orientar las políticas de operación de la Fiscalía, y

XI. Coordinar a las unidades y órganos de la Fiscalía General en el suministro de información y asegurar su consolidación, consistencia, oportunidad y confiabilidad para los fines de formulación del Plan de Persecución Penal.

Apartado B.

Ejercerá las siguientes facultades, en materia de Administración:

I. Representar legalmente a la Fiscalía General de la República, en materia de administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, financieros, patrimoniales, presupuestales y cualquier otro, de conformidad con las políticas aprobadas por la persona titular de la Fiscalía General de la República;

II. Ejercer los actos de administración, de mandatario judicial y de dominio que requiera la Fiscalía General de la República, en el ámbito de su competencia para su debido funcionamiento de conformidad con las políticas aprobadas por la persona titular de la Fiscalía General de la República y de conformidad con lo que prevea el Reglamento de esta Ley;

III. Proponer a la persona titular de la Fiscalía General de la República, para su aprobación, los criterios generales en materia administrativa, en términos de la legislación aplicable;

IV. Aprobar el uso de los recursos financieros de la Fiscalía en materia de contrataciones, ejercicio del gasto, adquisiciones, arrendamientos y contratación de bienes, servicios y obras públicas, así como de asociaciones público-privadas de conformidad con la normativa aplicable;

V. Administrar y ejercer los fondos federales destinados a la procuración de justicia, de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables, transparentando su aplicación;

VI. Conformar el comité de adquisiciones, de conformidad con el Reglamento que emita la persona titular de la Fiscalía General de la República;

VII. Proporcionar los servicios administrativos generales que requieran las áreas de la Fiscalía General de la República;

VIII. Suscribir convenios o cualquier otro acto o instrumento jurídico en el ámbito administrativo de su competencia;

IX. Colaborar con la Coordinación General para asegurar la suficiencia presupuestal para el cumplimiento y desarrollo de los rubros que contempla el Servicio Profesional de Carrera;

X. Emitir las normas para que los recursos patrimoniales y financieros sean aprovechados y aplicados respectivamente, con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa; así como, realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias, todo lo anterior en coordinación con la persona titular de la Fiscalía General de la República;

XI. Integrar los informes específicos o individuales, requeridos por la Auditoría Superior de la Federación en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;

XII. Proponer a la persona titular de la Fiscalía General de la República a los auditores externos, así como normar y controlar su desempeño;

XIII. Consolidar la información administrativa y financiera para elaborar estudios e informes;

XIV. Realizar estudios sobre el desarrollo organizacional de la Fiscalía;

XV. Coordinar la integración y elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de la Fiscalía con base a las necesidades detectadas en el Plan de Persecución Penal y para el apoyo administrativo del mismo;

XVI. Establecer y controlar las políticas y procedimientos de adquisición, aprovechamiento y administración de bienes y servicios;

XVII. Elaborar y orientar el plan de inversiones en infraestructura física;

XVIII. Tener a su cargo la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, financieros, patrimoniales, presupuestales y cualquier otro asignado a la Fiscalía General de la República, de conformidad con las políticas aprobadas por la persona titular de la Fiscalía General de la República, en esta materia, y

XIX. Las demás que señale la presente Ley y su Reglamento, así como la normativa emitida por la persona titular de la Fiscalía General de la República.

Capítulo VII

De la Transparencia, Rendición de Cuentas y Acción Ciudadana

Artículo 34. Órgano Interno de Control

El Órgano Interno de Control es un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Fiscalía y de particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.

El Órgano Interno de Control, su titular y el personal adscrito al mismo, estarán impedidos de intervenir o interferir en forma alguna en el desempeño de las facultades y ejercicio de la Fiscalía General de la República.

Serán facultades del Órgano Interno de Control las siguientes:

I. Las que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;

II. Verificar que el ejercicio de gasto de la Fiscalía se realice conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados;

III. Realizar auditorías, revisiones y evaluaciones y presentar al Fiscal General de la República, los informes correspondientes con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia, eficacia y legalidad en su gestión y encargo, así como emitir recomendaciones;

IV. Revisar que las operaciones presupuestales que realice la Fiscalía, se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables y, en su caso, determinar las desviaciones de las mismas y las causas que les dieron origen;

V. Promover ante las instancias correspondientes, las acciones administrativas y legales que se deriven de los resultados de las auditorías;

VI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de la Fiscalía;

VII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos de la Fiscalía, empleando la metodología que determine;

VIII. Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables;

IX. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas y órganos de la Fiscalía General para el cumplimento de sus funciones;

X. Ejercer en el ámbito de la Fiscalía General de la República, en lo que resulte conducente, las facultades que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Asociaciones Público Privadas, prevén para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública;

XI. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de la Fiscalía en los términos de la normativa aplicable;

XII. Participar, conforme a las disposiciones vigentes, en los comités y subcomités de los que el Órgano Interno de Control forme parte, e intervenir en los actos que se deriven de los mismos;

XIII. Formular el anteproyecto de presupuesto del Órgano Interno de Control;

XIV. Presentar al Fiscal General de la República los informes, previo y anual, de resultados de su gestión;

XV. Presentar al Fiscal General de la República los informes respecto de los expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su caso, sobre la imposición de sanciones en materia de responsabilidades administrativas;

XVI. Emitir el Código de Ética de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la procuración de justicia;

XVII. Establecer mecanismos, en coordinación con la Coordinación General, que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;

XVIII. Vigilar, en colaboración con las autoridades competentes el cumplimiento de las normas de control interno, fiscalización, integridad, transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y combate a la corrupción en la Fiscalía General de la República, y

XIX. Las demás que señalen las leyes y reglamentos.

Artículo 35. Designación del titular del Órgano Interno de Control

El titular del Órgano Interno de Control será designado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 36. Requisitos para ser el titular del Órgano Interno de Control

El titular del Órgano Interno de Control deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener treinta y cinco años;

II. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año;

III. Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público;

IV. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

V. Contar con reconocida solvencia moral;

VI. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación, a despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios a la Fiscalía, o haber fungido como consultor o auditor externo de la Fiscalía en lo individual durante ese periodo;

VII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y

VIII. No haber sido Secretario de Estado, Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación.

Artículo 37. Duración del encargo de titular del Órgano Interno de Control

El titular del Órgano Interno de Control durará en su encargo cuatro años y podrá ser designado por un periodo inmediato posterior al que se haya desempeñado, previa postulación y cumpliendo los requisitos previstos en esta Ley y el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tendrá un nivel jerárquico igual al de un Coordinador o su equivalente en la estructura orgánica de la Fiscalía, y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación a que se refiere el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El titular del Órgano Interno de Control deberá rendir informe semestral y anual de actividades al Fiscal General de la República, del cual marcará copia a la Cámara de Diputados.

Artículo 38. Responsabilidades de los servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control

El titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República será sujeto de responsabilidad en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y podrá ser sancionado de conformidad con el procedimiento previsto en la normatividad aplicable.

Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, serán sancionados por el titular del Órgano Interno de Control o el servidor público en quien delegue la facultad, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 39. Obligaciones ante el Sistema Nacional Anticorrupción

El titular del Órgano Interno de Control deberá inscribir y mantener actualizada la información correspondiente del Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, de todos los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 40. Integración del Consejo Ciudadano de la Fiscalía

El Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República será un órgano especializado de consulta, de carácter honorífico, que ejercerá las funciones establecidas en la presente Ley. Estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución en materia de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, en especial de las mujeres, de los pueblos y las comunidades indígenas, de las niñas, niños, adolescentes y personas migrantes. Sesionará al menos una vez al mes o cuando deba conocer de un tema para su opinión y visto bueno y estará presidido por uno de los integrantes, de acuerdo con el Reglamento de esta Ley.

Las personas integrantes del Consejo Ciudadano durarán en su encargo cinco años improrrogables y serán renovados de manera escalonada. Sólo podrán ser removidas por inasistencias reiteradas a las sesiones del Consejo, por divulgar información reservada o confidencial o por alguna de las causas establecidas en la normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Las personas integrantes del Consejo Ciudadano tendrán obligación de guardar confidencialidad cuando por razón de su función tuvieren acceso a información confidencial o reservada.

Las personas titulares de la Fiscalía General de la República y de las Fiscalías Especializadas podrán asistir a las reuniones con voz, pero sin voto.

Artículo 41. Designación de las personas integrantes del Consejo

El Senado de la República nombrará una Comisión de selección, integrada por cinco personas de reconocida honorabilidad y trayectoria, debiendo justificar las razones de la selección. La citada Comisión abrirá una convocatoria pública por un plazo de quince días para recibir propuestas para ocupar el cargo de Consejero Ciudadano. Posteriormente, el Senado de la República elegirá entre los candidatos a cinco personas, respetando los principios a que se refieren los artículos 22, 23 y 24 de esta Ley.

Esta lista será dada a conocer por diez días para que la sociedad se pronuncie y, en su caso, presente sus objeciones, que serán tomadas en cuenta para motivar la elección. Una vez concluido este proceso, el Senado de la República hará público el nombre de las personas seleccionadas.

Artículo 42. Facultades del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República

El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes facultades:

I. Opinar, dar seguimiento y emitir recomendaciones públicas sobre el contenido e implementación del Plan de Persecución Penal que presente la persona titular de la Fiscalía General de la República, así como los programas anuales de trabajo y su implementación;

II. Opinar sobre la creación de nuevas estructuras propuestas por la persona titular de la Fiscalía General de la República;

III. Hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control cuando advierta una probable responsabilidad administrativa;

IV. Dar opiniones para fortalecer el presupuesto de la institución;

V. Opinar sobre la normatividad interna de la Fiscalía General de la República;

VI. Opinar sobre las propuestas y planes del Servicio Profesional de Carrera;

VII. Establecer las reglas operativas del Consejo;

VIII. En general, emitir opiniones y recomendaciones sobre el desempeño de la Fiscalía y sus áreas;

IX. Para un mejor desarrollo de sus funciones el Consejo Ciudadano podrá invitar a personas expertas, nacionales e internacionales, y

X. Las demás que establezcan esta Ley y su Reglamento.

Las opiniones y recomendaciones emitidas por el Consejo no son vinculantes. La Fiscalía y las áreas a las que vayan dirigidas las recomendaciones deberán fundar y motivar las razones por las cuales se acepta o rechaza la recomendación. Siempre serán de carácter público.

Cualquier intromisión en aspectos sustantivos de la función fiscal tendrá como sanción la remoción del Consejero respectivo, por parte de la persona titular de la Fiscalía General de la República.

Artículo 43. De la Secretaría Técnica del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República

Para el ejercicio de sus funciones, el Consejo Ciudadano se auxiliará con una Secretaría Técnica, así como con el personal que se requiera para el desempeño de sus funciones. Las y los integrantes de la Secretaría Técnica se seleccionarán por el Consejo Ciudadano, a partir de la propuesta que elabore el Servicio Profesional de Carrera, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley.

Capítulo VIII

De las Responsabilidades y Sanciones

Artículo 44. Régimen de Responsabilidades

Los servidores públicos de la Fiscalía General de la República en el ejercicio de sus funciones, están sujetos al régimen de responsabilidades a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de conformidad con lo dispuesto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Ley.

El personal de la Fiscalía en el desempeño de sus funciones deberá actuar con estricto apego al Código de Ética que emita el Órgano Interno de Control, por lo que cualquier incumplimiento constituirá una falta administrativa no grave en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 45. Incompatibilidades con el servicio público

En el desempeño de sus funciones, los servidores públicos de la Fiscalía General de la República no podrán:

I. Desempeñar empleo, cargo o comisión remunerada de cualquier naturaleza de derecho público o privado, nacional o internacional, salvo los de carácter docente, cultural, de beneficencia y aquellos que autorice la Fiscalía General de la República, siempre y cuando no sean incompatibles con sus funciones en la misma;

II. Conocer de asuntos cuando pudieran incurrir en conflictos de interés;

III. Ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona;

IV. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el carácter de heredero o legatario o se trate de sus ascendientes, descendientes, hermanos, adoptante o adoptado, y

V. Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, síndico, administrador, interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista, árbitro o arbitrador.

Los servidores públicos de la Fiscalía General de la República que contravengan esta disposición estarán sujetos a las faltas determinadas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como las leyes especiales.

Capítulo IX

De la Investigación y Acción Penal

Artículo 46. Unidades de Investigación y Litigación

Las Unidades de Investigación y Litigación serán órganos compuestos por equipos de investigación y litigación, que tienen como función organizar y gestionar la estrategia de la Fiscalía General de la República de forma flexible y eficiente establecida en el Plan de Persecución Penal. Estarán dirigidas por Fiscales y se integrarán por los equipos de investigación necesarios para su adecuado funcionamiento.

Artículo 47. Equipos de investigación y litigación

Los equipos de investigación serán las unidades orgánicas encargadas del desarrollo de las investigaciones y el ejercicio de la acción penal. Los equipos de investigación serán dirigidos por Fiscales y además serán integrados, entre otros, por peritos, policía de investigación, analistas y técnicos que correspondan en cada caso.

Artículo 48. Equipos mixtos de investigación y litigación

La persona titular de la Fiscalía General de la República, podrá conformar equipos mixtos de investigación con integrantes de distintas unidades fiscales y coordinaciones, así como con personal de otras Fiscalías o procuradurías de las entidades federativas a través de acuerdos de colaboración institucional, para el desarrollo de investigaciones y el ejercicio de la acción penal en el ámbito de sus competencias, cuando exista concurrencia de delitos, de fenómenos delictivos o para fines orientados al cumplimiento del Plan de Persecución Penal. En todos los casos se cuidará la integridad y no fragmentación de las investigaciones.

Los acuerdos de colaboración con las entidades federativas deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y el órgano de difusión de la entidad federativa correspondiente.

Artículo 49. Unidades de Análisis Estratégico y de Contexto

Tanto las Fiscalías Especializadas como la Coordinación de Investigación y Persecución Penal contarán con las Unidades de Análisis Estratégico y de Contexto para el cumplimiento de sus funciones y del Plan de Persecución Penal, las cuales tendrán, entre otros, los siguientes objetivos:

I. La identificación de patrones de actuación reiterada, sistemática o generalizada sobre ciertas estructuras o fenómenos criminales;

II. La identificación de niveles y tipos de responsabilidad o de los partícipes de los hechos delictivos incluyendo servidores públicos;

III. La identificación de niveles de responsabilidad de estructuras delincuenciales o paralelas al Estado, y

IV. La identificación de aspectos multifactoriales y multidelictivos de los fenómenos criminales.

Estas unidades actuarán coordinadamente con la Coordinación de Métodos de Investigación y será integrada por analistas, técnicos y expertos en las materias de su competencia.

Artículo 50. Comisiones Especiales

La persona titular de la Fiscalía General de la República podrá crear comisiones especiales, de carácter temporal, que gozarán de autonomía técnica y de gestión, para colaborar en las investigaciones de fenómenos y delitos que debido a su contexto, a juicio del fiscal, amerite su creación, incluyendo aquellos sobre feminicidios, violencia sexual, trata de personas, o que impliquen violaciones a derechos humanos, en especial de los pueblos y las comunidades indígenas, de las niñas, niños, adolescentes y personas migrantes. Los trabajos, recomendaciones y conclusiones de las comisiones podrán ser tomados en consideración por los órganos de la función fiscal, para la investigación y el ejercicio de la acción penal de los asuntos correspondientes.

Las Comisiones Especiales tendrán como enfoque el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición. Serán integradas, de manera multidisciplinaria, por expertos de reconocida experiencia, tanto nacionales o internacionales en las materias que se requieran, organismos internacionales, organismos de la sociedad civil, universidades públicas y privadas y colectivos de víctimas.

Artículo 51. De la operación territorial estratégica

El despliegue territorial de la operación sustantiva definida en las normas y políticas centrales se llevará a cabo a través de unidades o equipos de investigación y litigación, cuya distribución, tamaño, recursos y temporalidad se apegarán al Plan de Persecución Penal y a los fines de la Fiscalía.

Las unidades o equipos deberán estar integrados por el personal necesario para ejercer la función fiscal dentro del ámbito territorial y por el tiempo que hubiere sido establecido por las Fiscalías o coordinaciones conforme al Plan de Persecución Penal.

Las unidades o equipos desplegados se desintegrarán al cumplirse el objetivo establecido, debiendo reubicar al personal en otras unidades o equipos de investigación y litigación.

Artículo 52. Criterios para el despliegue territorial

La distribución territorial de las unidades o equipos de investigación y litigación se definirán conforme a cualquiera de los siguientes criterios:

I. La atención específica de fenómenos criminales;

II. La regionalización y coordinación en materia de procuración de justicia;

III. La distritación judicial, y

IV. El acceso a la justicia.

Artículo 53. Sistema de recepción y canalización

La Coordinación General establecerá un sistema central de recepción y canalización de los asuntos que sean competencia de la Fiscalía General de la República y al respecto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Recibir y canalizar los casos a los órganos competentes de la Fiscalía para su conocimiento, investigación o tramitación con base en el Plan de Persecución Penal;

II. Canalizar los casos y asuntos que no son competencia de la Fiscalía General de la República a las autoridades competentes;

III. Cooperar con otras instancias federales y locales para la atracción y remisión de asuntos;

IV. Orientar y canalizar a las personas víctimas con los órganos y autoridades competentes para su protección y asistencia, y

V. Las demás que disponga el Reglamento de esta Ley.

Podrá recomendar la creación de unidades o equipos de investigación y litigación para la atención de casos relevantes.

Determinará la competencia de las Fiscalías o Unidades de Investigación y Litigación para la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal.

Artículo 54. De la atención a las víctimas en territorio extranjero, a través del Mecanismo de Apoyo Exterior

A través del Mecanismo de Apoyo Exterior previsto por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; así como de la Ley General de Víctimas, los órganos de la función fiscal garantizarán a las víctimas tanto en el territorio nacional como en el extranjero en igualdad de condiciones el derecho a la verdad, justicia y reparación integral.

El Mecanismo de Apoyo Exterior deberá garantizar a todas las víctimas y sus representantes que se encuentren en el extranjero, el derecho a presentar denuncias, declaraciones y cualquier tipo de pruebas, documentación o información relacionada con los hechos denunciados; a presentar peticiones, a participar activamente en el desarrollo de las investigaciones y procesos penales, así como a recibir información completa y oportuna cuando la víctima lo requiera.

Las comunicaciones entre Fiscales, víctimas y representantes legales deberán realizarse con fluidez, agilidad y debida diligencia, pudiendo utilizarse para el efecto cualquier medio de comunicación. De la misma manera se llevarán a cabo las comunicaciones entre la o el fiscal encargado del caso y las autoridades mexicanas que se encuentren en las sedes diplomáticas y consulares a cargo del Mecanismo de Apoyo Exterior; la Fiscalía podrá establecer los agregados que se requiera conforme al Plan de Persecución Penal.

Capítulo X

Del Servicio Profesional de Carrera

Artículo 55. Naturaleza y finalidad del Servicio Profesional de Carrera

El Servicio Profesional de Carrera será el sistema integral de regulación del empleo público de todo el personal que preste servicios en la Fiscalía General de la República, que garantizará la igualdad de oportunidades, idoneidad y mérito para el ingreso y reclutamiento, ascensos, estímulos y recompensas.

El Sistema Integral del Servicio Profesional de Carrera estará a cargo del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera, el cual contará con autonomía técnica y de gestión. Su estructura, procedimientos y gestión estarán regulados en el Reglamento correspondiente.

El Servicio Profesional de Carrera será organizado con la finalidad de estimular el profesionalismo, la rectitud, la independencia técnica; fomentar la iniciativa, innovación y la eficiencia institucional; y prevenir las violaciones a derechos humanos, así como los actos de corrupción.

Artículo 56. Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera

El Servicio Profesional de Carrera se integra por los siguientes subsistemas:

I. **Ingreso:** El reclutamiento y selección comprende el proceso de detección de necesidades de dotación de personal, elaboración de perfiles de puesto, convocatorias, evaluación y selección de aspirantes.

La formación inicial comprende las estrategias de nivelación de competencias técnicas y diseño de planes de desarrollo para los operadores de nuevo ingreso.

El proceso de inducción comprende el proceso de incorporación a la institución y el periodo a prueba de cada funcionario.

II. **Desarrollo:** Entrenamiento y fortalecimiento continuo de capacidades comprende el desarrollo continuo y progresivo de las capacidades de los servidores públicos, la construcción, evaluación y monitoreo de planes de carrera individuales; la detección de necesidades de formación y la evaluación, que se llevarán a cabo tomando como base el impacto en el desempeño individual. Los estímulos y recompensas se establecerán en el Plan de Gestión del Desempeño y Desarrollo Humano, de acuerdo con el presupuesto y mediante disposiciones generales, a través de un sistema de estímulos. Dicho sistema podrá incluir estímulos económicos y no económicos, programados semestralmente con base al cumplimiento de metas individuales y grupales. Los estímulos y recompensas se otorgarán con base a los criterios establecidos en el plan de desempeño, el cual contendrá objetivos y resultados esperados, de acuerdo con cada puesto.

El Servicio Profesional de Carrera fomentará la salud física y mental del personal y condiciones laborales adecuadas, como factores de bienestar personal y profesional, individual y colectivo, así como de compromiso, productividad y eficiencia. Para ello, pondrá a disposición del personal actividades y servicios de apoyo a la salud y elaborará un manual sobre las condiciones mínimas de desempeño laboral, tomando en consideración la naturaleza de cada función al interior de la institución.

III. **Evaluación:** El sistema de gestión del desempeño comprenderá el diseño de lineamientos e instrumentos de evaluación del desempeño orientados a valorar las cualidades individuales y colectivas de los operadores, estableciendo la periodicidad y los mecanismos de recolección y análisis de la información. Dichos instrumentos tendrán como objetivo la profesionalización y eficiencia en el desempeño de funciones y darán lugar a la creación de planes de mejora del desempeño.

Comprenderá lineamientos técnico-jurídicos para el monitoreo, la supervisión, investigación, revisión y control de la actuación de Fiscales, policías de investigación, peritos, analistas, técnicos y en general de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, en términos del Plan de Persecución Penal.

IV. **Promoción:** El sistema de ascensos se regirá por la evaluación formal, objetiva y periódica del desempeño de cada servidor público.

Los ascensos y promociones comprenden la dirección y rectoría de todos los concursos que tengan por objeto ocupar un cargo vacante o de reciente creación sujetos al Sistema de Servicio Profesional de Carrera. Estos procesos se regirán por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad e independencia, equidad de capacidades y velarán en todo momento por la erradicación de la violencia contra las mujeres al interior de la institución.

V. **Separación:** El personal de la Fiscalía General de la República será inamovible, salvo casos de responsabilidad en los términos establecidos en esta Ley y su Reglamento, así como por razones técnicas que afecten al funcionamiento de la institución y que objetivamente sean acreditadas.

VI. **Reincorporación:** La reincorporación comprenderá las acciones y mecanismos que tome la Fiscalía para reinstalar al personal que previamente se haya separado de manera voluntaria, o bien, por razones institucionales excluyentes de responsabilidad y que cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto.

Todos estos subsistemas se desarrollarán de manera pública y de acuerdo con el Reglamento correspondiente.

Artículo 57. Derechos del personal de la Fiscalía General de la República

Además de las responsabilidades y obligaciones que contiene esta Ley, los sujetos a que se refiere la misma tendrán los siguientes derechos:

I. A participar en igualdad de oportunidades en el Servicio Profesional de Carrera conforme a las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y demás normatividad aplicable;

II. A que la aplicación de las reglas del Servicio Profesional de Carrera sea objetiva, justa, transparente e imparcial;

III. A desempeñar una carrera conforme a este servicio que se base en el mérito, en la superación constante y a tener estabilidad, conforme a las disposiciones aplicables, en el desempeño de su función;

IV. A desempeñarse en su asignación, contando con condiciones adecuadas y dignas de trabajo y a formarse de manera integral;

V. A contar con una remuneración adecuada, digna, irrenunciable y que corresponda a los servicios prestados en la Fiscalía;

VI. A profesionalizarse y actualizarse de manera permanente para un mejor desempeño de sus funciones;

VII. A recibir estímulos, promociones y ascensos horizontales y verticales con motivo del desempeño de su función, y

VIII. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables.

Artículo 58. Plan de Gestión de Desempeño y Desarrollo Humano

El titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera elaborará un Plan de Gestión de Desempeño y Desarrollo Humano en coordinación con la Coordinación de Planeación y Administración y lo someterá a la persona titular de la Fiscalía General de la República, para su aprobación.

El Plan deberá elaborarse para un periodo de tres años y establecerá todos los elementos que componen el Servicio Profesional de Carrera, será revisado anualmente por el Consejo Ciudadano quien emitirá las recomendaciones que correspondan.

Artículo 59. Facultades del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera

El Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera tendrá las siguientes facultades:

I. Diseñar las políticas y criterios institucionales del Sistema de Servicio Profesional de Carrera;

II. Planear, diseñar y llevar a cabo los procesos de reclutamiento y selección con base en principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres, o por cualquier otro motivo o condición;

III. Dirigir la operación del Centro de Evaluación y Confianza, así como todos sus procedimientos, en todo lo que atañe al personal del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República;

IV. Proponer los procesos, procedimientos, lineamientos, convocatorias, para la gestión y desarrollo de capacidades;

V. Diseñar los planes y programas interdisciplinarios y llevar a cabo las acciones de fortalecimiento de capacidades técnicas del personal;

VI. Determinar los criterios y métodos necesarios para la operación del sistema de monitoreo y evaluación del desempeño;

VII. Llevar a cabo los concursos y procedimientos para ascensos y promociones en los términos que indique su Reglamento;

VIII. Diseñar el plan anual de estímulos a la excelencia en el desempeño individual;

IX. Administrar los expedientes del personal del Servicio Profesional de Carrera;

X. Promover la celebración de convenios de coordinación e intercambio científico y tecnológico con instituciones y organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, que realicen actividades afines, con el objeto de complementar y fortalecer las propias, y

XI. Las demás que dispongan esta Ley y su Reglamento.

Artículo 60. Relaciones Administrativas y Laborales con la Fiscalía General de la República

Las relaciones laborales entre la Fiscalía General de la República y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el artículo 123 Constitucional, Apartado B, Fracción XIII y por lo establecido en esta Ley.

TÍTULO TERCERO

De los Recursos

Capítulo Único

Del Patrimonio y Presupuesto

Artículo 61. Patrimonio y Presupuesto de la Fiscalía General de la República

Para la realización de sus funciones, el patrimonio de la Fiscalía General estará constituido por los bienes y recursos que a continuación se enumeran:

I. Los bienes muebles o inmuebles que la Fiscalía General de la República adquiera;

II. Los bienes muebles o inmuebles que la Federación transfiera para el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General de la República;

III. Los bienes muebles o inmuebles que la Federación determine que son de uso exclusivo de la Fiscalía General de la República;

IV. Los recursos que anualmente determine la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

V. Los derechos de los fideicomisos o fondos destinados al cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General de la República;

VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rentas y aprovechamientos de sus bienes muebles e inmuebles;

VII. Los recursos que reciba por concepto de los bienes o productos que enajene;

VIII. Las sanciones económicas impuestas por las autoridades competentes a los servidores públicos de conformidad con esta Ley, mismas que tendrán la naturaleza de créditos fiscales y serán enviadas para su cobro al Servicio de Administración Tributaria, el que, una vez efectuado el mismo entregará las cantidades respectivas a la Fiscalía General de la República;

IX. Los bienes que le correspondan de conformidad con la legislación aplicable, vinculados con la comisión de delitos, así como los decomisados, y

X. Los demás que establezcan las leyes.

Artículo 62. Contrataciones

Para el caso de las contrataciones públicas que lleve a cabo la Fiscalía General de la República se sujetarán, en lo que resulte conducente y conforme a su autonomía constitucional, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sin perjuicio de la facultad de la persona titular de la Fiscalía General de la República de emitir normas particulares en acuerdo con la persona titular del Órgano Interno de Control.

Artículo 63. Del Presupuesto

La Fiscalía General de la República elaborará su proyecto de presupuesto anual de egresos, el cual será remitido al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se remita a la Cámara de Diputados.

En todo caso deberá garantizarse la autonomía e independencia funcional y financiera.

Artículo 64. Recursos para Emergencias

La Fiscalía General de la República contará con recursos para emergencias que garanticen el desarrollo de las investigaciones, en los casos que así se requiera. La Coordinación de Planeación y Administración emitirá reglas generales que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio, comprobación, justificación, rendición de cuentas, transparencia y fiscalización de estos recursos.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Una vez publicado, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos deberá emitir la declaratoria expresa de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Tercero. Los casos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto serán resueltos en las unidades a las que están adscritos, conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se adscriban a nuevas unidades en tanto se avanza en la transición orgánica de la Fiscalía General de la República.

Cuarto. Todos los convenios y actos jurídicos celebrados por la Procuraduría General de la República se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Fiscalía General de la República o a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, según corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos posteriormente.

Quinto. Quedan derogadas todas las disposiciones que se contrapongan a la presente Ley y al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral del 10 de febrero de 2014, mediante la cual se creó la Fiscalía General de la República.

Sexto. Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su titular respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. Las referencias normativas a los agentes del Ministerio Público se entenderán referidas a las y los Fiscales en los términos de esta Ley.

Séptimo. La Cámara de Diputados, tomando en cuenta el principio de austeridad, contemplará en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 y subsecuentes, la asignación y garantía de la suficiencia presupuestal para la instalación de la Fiscalía General de la República y la ejecución de la planeación estratégica de transición, conforme a lo establecido en el Transitorio Décimo Segundo.

La Cámara de Diputados tendrá un plazo no mayor a noventa días para designar al titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República.

Octavo. A la entrada en vigor del presente Decreto, los bienes inmuebles, muebles y demás recursos materiales, financieros y presupuestales, en propiedad y/o posesión de la Procuraduría General de la República, pasarán a la Fiscalía General de la República o a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal según corresponda, en términos del artículo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. En lo relativo a bienes en posesión o servicios contratados para los fines de la Procuraduría General de la República, obtenidos por arrendamiento, comodato o cualquier otro contrato mediante el cual se haya transmitido la posesión o propalado dichos servicios, continuarán siendo utilizados por la Fiscalía General de la República.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un plazo no mayor de noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá efectuar las gestiones y trámites correspondientes, para dar cumplimiento cabal al presente artículo.

Noveno. A partir de su nombramiento, la persona titular de la Fiscalía General de la República, contará con un plazo de un año para definir la estrategia de transición, a partir de la realización de un inventario integral y un diagnóstico de los recursos financieros, humanos y materiales, casos pendientes, procesos de colaboración e inteligencia y cualquier otro insumo que considere necesario para la integración de un Plan Estratégico de Transición. Priorizará en orden de importancia el establecimiento del Servicio Profesional de Carrera y su Estatuto, la consolidación del sistema de información y análisis estratégico para la función fiscal, así como la reestructura y definición de los órganos administrativos y los sustantivos para la función fiscal.

El Plan comprenderá como mínimo los aspectos siguientes:

I. Diagnóstico, ubicación geográfica y análisis de los fenómenos criminales que perseguirá; así como la definición del Plan de Persecución Penal y la operación y despliegue territorial del modelo de investigación criminal;

II. Definición de objetivos, estrategias, acciones, metas e indicadores de resultados del proceso de transición, con base en criterios de gradualidad que consideren los tipos y fenómenos delictivos, unidades operativas centrales y estatales, regiones geográficas u otros;

III. Estrategia específica respecto al personal en activo y al reclutamiento de nuevos talentos, que contemple a su vez esquemas de retiro, liquidación, certificación, capacitación, desarrollo y gestión del cambio;

IV. Estrategia para el diseño y activación de la nueva estructura organizativa; así como del proceso de cierre de las estructuras y procesos previos;

V. Estrategia de liquidación de casos, que contemple el inventario de casos en trámite; así como su situación jurídica, tanto del sistema inquisitivo mixto como del acusatorio, para garantizar su adecuada atención; así como la identificación de casos de alto impacto social o de violaciones graves a los derechos humanos. Los casos pendientes de resolución relacionados con violaciones graves de derechos humanos o corrupción no podrán ser liquidados. La Unidad de Transición determinará la forma de atención y trámite a estos casos hasta su conclusión;

VI. Estrategia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas del proceso de transición que asegure la publicidad y mecanismos necesarios para el seguimiento, colaboración y vigilancia;

VII. Estrategia de colaboración y articulación con otras instituciones con las que requiera coordinarse para llevar a cabo la función fiscal, tales como las instituciones de seguridad pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y demás instituciones, y

VIII. El plazo para su instrumentación.

Décimo. Para los efectos de los artículos 40 y 41 de la Ley que se crea en virtud del presente Decreto, el procedimiento para la designación de los primeros Consejeros Ciudadanos iniciará dentro de los treinta días hábiles siguientes a la designación del Fiscal General de la República; observando la siguiente fórmula de escalonamiento: dos personas integrantes que durarán tres años en sus encargos, dos personas integrantes que durarán cuatro años en sus encargos y una persona integrante que durará cinco años en su encargo.

Dentro del mismo plazo, la persona titular de la Fiscalía General de la República, nombrará al titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera. Asimismo, integrará una Unidad de Transición, que dependerá orgánicamente de él y que tendrá como objetivo la coordinación, implementación y evaluación del Plan Estratégico de Transición. Estará integrada por un grupo interdisciplinario de expertos con reconocido prestigio, experiencia y conocimiento en gestión de instituciones públicas o privadas, diseño institucional, evaluación e implementación de políticas públicas y proceso penal acusatorio.

La Unidad se organizará a su vez en una sub-unidad de Clausura de la Procuraduría General de la República y una sub-unidad de Diseño e Instalación de la Fiscalía General de la República, las cuales, desde sus respectivas competencias, deberán generar esquemas de coordinación para el traslado y liquidación de recursos humanos, materiales y financieros, así como para la liquidación y transferencia de los casos pendientes de resolución.

La Unidad hará del conocimiento del Fiscal General de la República las necesidades presupuestales y de cualquier índole para cumplir con sus objetivos. El Consejo Ciudadano tendrá la facultad de supervisar el proceso de transición establecido en dicho Plan.

La persona titular de la Fiscalía General de la República destinará los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para el cumplimiento del Plan Estratégico de Transición.

Décimo Primero. En cumplimiento del artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la Procuraduría General de la República pasarán a la Fiscalía General de la República, en términos de la presente Ley.

Los lineamientos que expida deberán contener reglas para priorizar la implantación de las áreas estratégicas de la Fiscalía, así como las de análisis e información. Asimismo, deberá priorizarse la unificación de los sistemas informáticos.

Décimo Segundo. El proceso de transición del personal de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República se llevará a cabo de acuerdo con el Plan Estratégico de Transición y será coordinado por la Unidad a cargo. Este proceso deberá llevarse a cabo conforme a los siguientes lineamientos:

I. El personal administrativo, de confianza y de base adscrito a la Procuraduría General de la República conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su relación laboral, con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades;

II. El personal adscrito a la Procuraduría General de la República que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento, continuará en la función que desempeña y tendrá derecho a participar en el proceso de selección para acceder al Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República en términos de los principios establecidos en la presente Ley. Para ello, se garantizará su acceso a los programas de formación, entrenamiento, fortalecimiento de capacidades y evaluación durante el periodo de transición, en los términos establecidos en los lineamientos provisionales;

III. En tanto se instale el Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República, la profesionalización, el régimen disciplinario, la certificación y el régimen de seguridad social de las policías, peritos y analistas deberá cumplir con el régimen previsto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

IV. El Plan Estratégico de Transición garantizará condiciones dignas y apegadas a la ley para la liquidación del personal adscrito a la Procuraduría General de la República que decida concluir su relación laboral o no acceder al Servicio Profesional de Carrera reglamentado en la presente Ley. El personal que no apruebe los procesos de selección del Servicio Profesional de Carrera dejará de formar parte de la Fiscalía General de la República;

V. La persona titular de la Fiscalía General de la República, a través de quien dirija la Unidad de Transición presentará un informe al Congreso de la Unión que incluya un diagnóstico integral de la institución, un Programa de Transición, el modelo financiero y el presupuesto estimado de los recursos necesarios para implementar los cambios organizacionales y de personal requerido por parte de la Fiscalía General de la República. En el Programa de Transición, el titular de dicha Unidad incluirá un plan detallado de las etapas que comprenderán las acciones de transformación institucional y la estrategia de administración del cambio institucional que se llevarán a cabo para la operación de la Fiscalía General de la República.

Décimo Tercero. Transcurrido un año a partir del nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General de la República, y a la luz del Plan Estratégico de Transición y la experiencia acumulada en el proceso de transición, la o el Fiscal General de la República, realizará una convocatoria pública para la revisión del marco constitucional y jurídico de la Fiscalía General de la República. Dicha convocatoria tendrá como objetivo la identificación, discusión y formulación de las reformas constitucionales, de la legislación secundaria o de las reformas regulatorias necesarias para la operación óptima del modelo de Fiscalía General de la República, propuesto en la presente Ley. Los resultados obtenidos serán públicos y se comunicarán al Congreso de la Unión con el fin de que éste realice las adecuaciones al marco jurídico que considere sean necesarias y pertinentes.

La convocatoria comprenderá temas relacionados con la función fiscal y de persecución penal, el modelo de investigación criminal, la competencia, el servicio profesional de carrera, los órganos ciudadanos, los derechos humanos y la atención a víctimas; el régimen de responsabilidades de los servidores públicos de la Fiscalía, revisión de la estructura institucional, así como el régimen de transición, entre otros. Esta consulta deberá garantizar condiciones de apertura, transparencia y participación ciudadana de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, académicas y representantes del sector privado. Con base en las consultas realizadas, el Congreso de la Unión analizará y propondrá las reformas constitucionales y legales para el óptimo funcionamiento de la Fiscalía General de la República.

Décimo Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República deberá emitir un Plan de Persecución Penal Provisional dentro de un plazo máximo de noventa días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

A partir de su nombramiento, la persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de hasta un año para formular el Plan de Persecución Penal, en términos del artículo 6 de la Ley materia del presente Decreto.

Décimo Quinto. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera, la persona titular de la Fiscalía General de la República deberá emitir normas generales relativas al desarrollo y operación de dicho servicio en coordinación con el titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera.

El Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera deberá establecer planes y programas tendientes a capacitar al nuevo personal a efecto de dar cumplimiento a las funciones asignadas a cada uno en esta Ley.

Décimo Sexto. Fiscales, policías de investigación, analistas, auxiliares y peritos, así como el personal profesional, técnico y administrativo que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren laborando en la Procuraduría General de la República se someterán a las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera que se expidan para tal efecto.

Décimo Séptimo. Dentro del Plan Estratégico de Transición se establecerá un mecanismo expeditivo para establecer el sistema central de recepción y canalización de los asuntos nuevos que tenga que conocer la Fiscalía General de la República, a que se refiere el artículo 53 de esta Ley.

Décimo Octavo. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo máximo de 180 días para nombrar a las personas titulares de las Fiscalías Especializadas en los términos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en esta Ley según sea el caso, verificando el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para su designación marcados en ambas disposiciones normativas.

Décimo Noveno. Una vez instaladas las Fiscalías Especializadas, sus respectivos titulares, de inmediato solicitarán a la persona titular de la Fiscalía General de la República, la asignación del personal que integrará las nuevas unidades fiscales, conforme marca esta Ley. En el proceso de asignación, se observarán, entre otros, los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres.

Vigésimo. La Fiscalía General de la República a través de la Coordinación de Métodos de Investigación, contará con un plazo no mayor a 18 meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para la expedición de los Lineamientos Generales que regulen la operación de la Base Nacional de Información Genética, así como su instauración.

Vigésimo Primero. La creación de las unidades a que se refiere esta Ley se hará con el Acuerdo del Fiscal General de la República.

Vigésimo Segundo. Los casos relativos a delitos relacionados con hechos de corrupción, así como cualquier otro delito cometido por un servidor público federal en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, que hayan sido iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto por la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, deberán continuar su curso correspondiente en la misma hasta su conclusión.

Una vez concluidos los casos pendientes en la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, quedará sin vigencia el Acuerdo A/011/14 por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción podrá atraer cualquiera de los casos de corrupción cuyo trámite hubiese iniciado con anterioridad a la asignación de su gestión, cuando así lo considere pertinente su titular.

Las denuncias de los casos relacionados con hechos de corrupción que hayan ingresado a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, serán remitidas en su totalidad a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Vigésimo Tercero. La persona titular de la Fiscalía General de la República será el Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). El régimen de relación que existía entre el INACIPE y la Procuraduría General de la República se mantendrá con la nueva Fiscalía en términos de lo dispuesto en la normatividad aplicable en tanto no se reforme o se expida un nuevo estatuto orgánico del INACIPE.

Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2018.- Sen. **Martí Batres Guadarrama**, Presidente.- Dip. **Porfirio Muñoz Ledo**, Presidente.- Sen. **Antares G. Vázquez Alatorre**, Secretaria.- Dip. **Karla Yuritzi Almazán Burgos**, Secretaria.- Rúbricas.**"**

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a catorce de diciembre de dos mil dieciocho.- **Andrés Manuel López Obrador**.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. **Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila**.- Rúbrica.